INFORME DE LA COMISIÓN ESPECIAL INVESTIGADORA DE LOS ACTOS DE LOS ÓRGANOS DE GOBIERNO, EN PARTICULAR LOS DE LA DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN PÚBLICA, DEPENDIENTE DEL MINISTERIO DE EDUCACIÓN, ASÍ COMO LA INTERVENCIÓN DE LA DIRECCIÓN NACIONAL DEL SERVICIO CIVIL, EN EVENTUALES IRREGULARIDADES COMETIDAS EN EL PROCESO DE IMPLEMENTACIÓN DE LA LEY N° 21.040, SOBRE NUEVA EDUCACIÓN PÚBLICA, EN PARTICULAR EN RELACIÓN CON LA INSTALACIÓN Y FUNCIONAMIENTO DE LOS NUEVOS SERVICIOS LOCALES DE EDUCACIÓN PÚBLICA (CEI 52).

HONORABLE CÁMARA:

La Comisión Especial Investigadora de los actos de los órganos de gobierno en eventuales irregularidades cometidas en el proceso de implementación de la ley N° 21.040, sobre Nueva Educación Pública, en particular en relación con la instalación y funcionamiento de los nuevos Servicios Locales de Educación Pública, pasa a informar sobre la materia respectiva.

I. INTRODUCCIÓN

1. Competencia de la Comisión.

La Cámara de Diputados, en sesión 43ª celebrada el 15 de julio de 2020, en virtud de lo dispuesto en los artículos 52, N° 1, letra c), de la Constitución Política de la República; 53 de la ley orgánica constitucional del Congreso Nacional y 313 y siguientes del Reglamento de la Corporación, ha prestado su aprobación a la solicitud de 65 diputadas y diputados, para crear esta Comisión Especial Investigadora (CEI 52), tomando en consideración los siguientes antecedentes:

1. Considerando los nobles fines del mensaje presidencial N° 1174-363, de 2 de noviembre de 2015, actual ley N° 21.040, las comunidades educativas que forman parte de Servicios Locales de Educación Pública (SLEP) en funcionamiento y otros en etapas previas, denuncian que la implementación de la Ley ha conllevado una serie de situaciones irregulares, y vicios en su puesta en marcha.

2. La ley N° 21.040 señala claramente en su artículo 60 que a la Dirección de Educación Pública le corresponde la conducción estratégica y la coordinación del sistema de Nueva Educación Pública. Asimismo, elaborará la Estrategia Nacional de Educación Pública, vigilando su cumplimiento y evaluará el desempeño de los Servicios Locales de Educación Pública, a través de los convenios de gestión de sus Directores Ejecutivos, prestándoles apoyo técnico y administrativo en el marco de sus funciones.

3. Al respecto, diversas denuncias han llegado por diferentes vías a la Comisión de Educación de la Cámara de Diputados y diputadas, razón por la cual se realizó una sesión especial el día 25 de junio para efecto de escuchar a los interesados, específicamente sobre situaciones del Servicio Local de Educación de Barrancas y el Servicio Local de Educación de Valparaíso.

Firmado electrónicamente
https://extranet.camara.cl/verificardoc
Código de verificación: 555A43DA76D706F4

Firmado por María Soledad Fredes Ruiz
Fecha 07/10/2021 11:12:38 CLST

Las temáticas tratadas en la mencionada sesión fueron extensas y variadas, y no se alcanzó a dar respuesta a cabalidad por parte de la Directora de la Nueva Educación Pública, doña Alejandra Grebe; por otro lado muchas organizaciones y agrupaciones de otros Servicios Locales han solicitado la revisión de sus situaciones particulares. A continuación se expondrán los principales nudos críticos expuestos:

4. Ausencia de participación y escaso diálogo con las comunidades. Si bien uno de los objetivos de la ley N° 21.040 era restarle al sistema la influencia que tienen los ciclos políticos-electorales en la gestión educacional por parte de los Municipios, se alega por parte de las comunidades educativas que este objetivo no se ha logrado. El Sistema de Nueva Educación Pública busca evitar que las políticas públicas en educación sean realizadas de forma “vertical”, para transformarlas en participación de forma “horizontal” con una verdadera incidencia y colaboración de las comunidades educativas, a través de los nuevos órganos que son los Consejos Locales y Comités Directivos. En relación a esto, se denuncian irregularidades en los concursos y nombramientos de Alta Dirección Pública. El artículo vigésimo sexto de la Ley N° 19.882, en su artículo 2°, letra w), señala que corresponde a la Dirección Nacional del Servicio Civil, requerir, de los candidatos que integran alguna nómina, información para verificar los antecedentes referidos al cumplimiento de las exigencias derivadas de la probidad administrativa, inhabilidades o incompatibilidades y prevención de conflictos de intereses, pudiendo consultar bases de datos de carácter económico, financiero, bancario o comercial, relativos a juicios pendientes, condenas por crimen o simple delito de acción pública, inhabilidades declaradas por sentencia judicial para servir cargos u oficios públicos o sanciones administrativas de separación o destitución de empleos o cargos públicos.

5. En el caso de los Servicios Locales de Valparaíso y Juan Fernández y Atacama, se denuncian presiones indebidas en los procesos de concursos, no consideración de aportes del Comité Ejecutivo al perfil, perfiles seleccionados deficientes, hostigamiento laboral para vulnerar confidencialidad, imparcialidad y valoración del mérito, entre otras. Infringiendo la normativa educacional, específicamente el artículo 30, letra b), de la ley N° 21.040, el cual establece que se debe proponer por parte de los Comités Directivos, elementos relativos al perfil profesional del cargo de Director Ejecutivo del respectivo Servicio Local, y también las recomendaciones que realice el Consejo Local de Educación Pública respectiva.

6. El día 30 de junio de 2020, por vía correo electrónico, se recibieron denuncias por parte de los Comités Directivos y Consejos Locales de los Servicios Locales de Chinchorro, Servicio Local Gabriela Mistral, Servicio Local Valparaíso, Servicio Local Puerto Cordillera, Servicio Local Costa Araucanía, quienes señalan irregularidades en cuanto a la Estrategia Nacional de Educación Pública, y la “apariencia” de participación en ella. Alegan que no existió tal participación en la elaboración de la Estrategia, y en el caso que si la hubo (en el Comité Directivo de Valparaíso) las propuestas no tuvieron retroalimentación ni fueron consideradas dentro de la Estrategia. Cabe señalar que la Ley de Nueva Educación Pública es clara en este sentido, en su artículo 6, inciso cuarto, señala que tendrá en consideración las propuestas de los Directores Ejecutivos de los Servicios Locales, los Comités Directivos Locales, los Consejos Locales y las Coordinaciones Regionales.

7. Asimismo, las comunidades educativas alegan grandes deficiencias en las condiciones laborales de los funcionarios, muchas de ellas denunciadas formalmente a los Servicios Locales por las personas afectadas o por sus gremios, sin que se hayan verificado respuestas a sus reclamos. Existiendo gran cantidad de funcionarios a contrata, desregulación en la contratación, así como un gran número de funcionarios desvinculados y finiquitados, prácticas antisindicales, acoso laboral, y falta de reglamento interno.

8. Por otro lado, existe una gran preocupación respecto a qué ocurrirá con las deudas que se arrastran desde las municipalidades, exponiéndose como ejemplo el caso de Valparaíso en que existirían 70 mil millones en deudas previsionales, entre otras. En sesión de la Comisión de Educación, de fecha 02 de junio de 2020, se analizaron las razones por las cuales no se ha procedido el pago de las deudas de cotizaciones previsionales a profesionales de educación de la comuna de Cerro Navia, que debieron ser resueltas conforme al procedimiento del artículo trigésimo cuarto transitorio de la ley N° 21.040. Hasta el día de hoy, han pasado 2 años y 5 meses del traspaso del servicio educativo del municipio al nuevo Servicio Local de Educación Pública de Barrancas, y todavía no se han pagado las deudas respectivas al traspaso, lo que genera interrogantes sobre qué sucederá con los próximos Servicios Locales de Educación Pública que tengan deudas anteriores similares a la situación de Cerro Navia.

9. En sesión de comisión de Educación del día 07 de julio, se presentaron las irregularidades que afectan a profesores y asistentes de la educación de la Comuna de San Fernando, debido al no pago de derechos remuneracionales por parte de la Corporación Municipal. Esto preocupa enormemente, en consideración al próximo traspaso al Servicio Local de Colchagua. Claramente, esta es una situación que se viene denunciando desde la discusión legislativa de la ley N° 21.040 y hasta el día de hoy no ha existido mejoraría sobre este punto. Es menester señalar que el artículo trigésimo quinto señala que la Dirección de Educación Pública durante el período que media entre la entrada en funcionamiento de los Servicios Locales, según lo establecido en el artículo sexto transitorio, y el momento en que se haga efectivo el traspaso del servicio educacional, de acuerdo a lo dispuesto en el artículo octavo transitorio, coordinará y apoyará la instalación de Servicios Locales de Educación Pública. Además se señalan diversas facultades para apoyar los traspasos como los planes de transición (artículo vigésimo cuarto transitorio), y las condiciones para que previo al traspaso se nombre un administrador provisional (artículo trigésimo segundo transitorio), situación que no ha sucedido hasta el momento, sin existir explicación respecto al no uso de estas facultades que entrega la ley para no afectar a los profesores y asistentes de la educación en sus remuneración y el pago de sus cotizaciones.

10. Así también, desde las comunidades educativas se ha manifestado la preocupación por falta de planes estratégicos y pedagógicos que permitan abordar el hecho de que, en algunos de los nuevos servicios locales de educación pública, como el de Atacama, la gran mayoría de los establecimientos cuentan con categoría de desempeño medio – bajo o insuficiente.

11. Además, se denuncia falta de equidad territorial al interior de los mismos servicios locales, cuyas dependencias se concentran principalmente

en las capitales provinciales o regionales. En particular, en SLEP Huasco se manifiesta disconformidad por la centralización en Vallenar, en perjuicio de otras comunas como Huasco, Freirina y Alto del Carmen. Lo anterior, trae aparejados problemas como dificultad para tramitar licencias médicas o realizar otro tipo de trámites, y es relevante en razones de distancia, conectividad y buen servicio.

Recordar que la Ley de Nueva Educación Pública permite en su artículo 16 la creación de oficinas locales mediante decreto fundado del Ministerio de Educación, cuando sea necesario por razones de buen servicio y para el adecuado cumplimiento de sus funciones, en atención a razones de distancia, conectividad y concentración de matrícula, entre otras. También podrá hacerlo a propuesta del Comité Directivo Local respectivo.

12. Por último, se denuncia que el financiamiento entregado por medio de fondos como “Movámonos por la Educación Pública” y “Pro-retención” entre otros, no se ejecutan. Asimismo, a la fecha, los Directores no poseen el cierre de la SEP 2019, y el presupuesto 2020, por lo que resulta complejo planificar Planes de Mejora, sin tener claridad respecto a la “caja” del año anterior, ni cuánto dinero se dispone para este año.

2. Plazo.

El plazo otorgado en el mandato fue de ciento veinte días. Ese plazo venció el día 7 de julio de 2021.

Con fecha 5 de julio, la Comisión acordó pedir a la Sala una prórroga por 30 días, a lo que esta accedió, en sesión 54ª, de fecha 6 de julio, plazo que venció el 12 de agosto de 2021.

3. Integración.

La Comisión Investigadora se constituyó, originalmente, con los siguientes diputados y diputadas:

- Sergio Bobadilla Muñoz.
- Fidel Espinoza Sandoval.
- Juan Fuenzalida Cobo.
- Cristina Girardi Lavín.
- Luis Pardo Sáinz.
- José Pérez Arriagada.
- Hugo Rey Martínez.
- Camila Rojas Valderrama.
- Leonidas Romero Sáez.
- Gustavo Sanhueza Dueñas.
- Juan Santana Castillo
- Camila Vallejo Dowling.
- Mario Venegas Cárdenas

Reemplazo permanente:

Mediante oficio N° 16.347, de fecha 11 de marzo de 2021, se informó el reemplazo permanente del diputado José Pérez Arriagada por el diputado Cosme Mellado Pino.

II. RELACIÓN DEL TRABAJO DESARROLLADO POR LA COMISIÓN EN EL CUMPLIMIENTO DE SU COMETIDO.

La Comisión, en el cumplimiento de su cometido, celebró 21 sesiones, procedió a escuchar las opiniones y las declaraciones de las personas invitadas, cuya nómina se detalla a continuación; recibió los documentos que se individualizan como anexos y que forman parte de este informe, y despachó los siguientes oficios, formulando las consultas o requiriendo la información que a continuación se detalla con sus respectivas respuestas, cuyos anexos se encuentran en la Secretaría de la Comisión y forman parte de este informe[1]:

1. Sesiones efectuadas y personas recibidas.

En la **sesión 1ª**, de fecha 19 de enero de 2021, se constituyó la Comisión y eligió como Presidente al diputado señor Luis Pardo Sáinz. En esa misma ocasión acordó celebrar sus sesiones ordinarias los días lunes, de 15:00 a 17:00 horas.

En las sesiones siguientes, la Comisión recibió a las siguientes personas:

Sesión 2ª, 1 de marzo de 2021

1. El exdirector Nacional de Educación Pública, señor Rodrigo Egaña Baraona.

2. La Directora Nacional de Educación Pública, señora María Alejandra Grebe Noguera, acompañada dl Jefe de la División de Implementación de los Servicios Locales de Educación Pública, señor Alfredo Romero, y del asesor señor Guillermo Said Yarur.

Sesión 3ª, 8 de marzo de 2021

3. La Directora Nacional de Educación Pública, señora María Alejandra Grebe Noguera, acompañada del Jefe de la División de Implementación de los Servicios Locales de Educación Pública, señor Alfredo Romero, y del asesor señor Guillermo Said Yarur.

Sesión 4ª, 15 de marzo de 2021

4. La Directora Nacional de Educación Pública, señora María Alejandra Grebe Noguera, acompañada dl Jefe de la División de Implementación de los Servicios Locales de Educación Pública, señor Alfredo Romero, y del asesor señor Guillermo Said Yarur.

Sesión 5ª, 22 de marzo de 2021

5. El Contralor General de la República, señor Jorge Bermúdez Soto, acompañado de la Asesora Legislativa señora Catalina Venegas.

Sesión 6ª, 29 de marzo de 2021

6. El Director Ejecutivo del Servicio Local de Educación Pública de Barrancas, señor Patricio Canales Ríos.

---

[1] Las actas taquigráficas, que contienen la versión completa de todo lo expuesto en las sesiones celebradas pueden encontrarse en el siguiente link:
https://www.camara.cl/legislacion/comisiones/sesiones.aspx?prmID=2902&prmIdTipo=2103

7. El expresidente del Consejo Local del Servicio Local de Educación Pública de Barrancas, señor Dorian Tobar Flores.

8. El Director de la Escuela “Melvin Jones” del Servicio Local de Educación Pública de Barrancas, señor Juan Carlos Almendra Canales.

9. La Directora (I) de la Escuela “Paulo Freire” del Servicio Local de Educación Pública de Barrancas, señora Gabriela Rubio Palma.

10. El Director de la Escuela “Federico Acevedo Salazar” del Servicio Local de Educación Pública de Barrancas, señor Juan Esteban Montero.

Sesión 7ª, 12 de abril de 2021

11. El Director Ejecutivo del Servicio Local de Educación Pública de Barrancas, señor Patricio Canales Ríos.

12. La Directora Nacional del Servicio Civil y Presidente del Consejo de Alta Dirección Pública, acompañada de la Jefa del Área de Educación, señora Angélica Fuenzalida, y el Subdirector de Alta Dirección Pública, señor Basilios Peftouloglou.

Sesión 8ª, 19 de abril de 2021

13. El Director de la Escuela “Amanecer” de Villa Boldos, del Servicio Local de Educación Pública de Costa Araucanía, señor Juan Luis Aguilar Muñoz.

14. La Directora de la Escuela “José Bernardo Suarez” de Macul, del Servicio Local de Educación Pública de Gabriela Mistral, señora Pamela Meza Morales.

15. La Directora de la Escuela N° 405 “Millahue” de Cerro Navia, del Servicio Local de Educación Pública de Barrancas, señora Alejandra Benavides Arestizabal.

16. La Directora de la Escuela “Provincia de Arauco” de Cerro Navia, del Servicio Local de Educación Pública de Barrancas, señora Úrsula Araya Parraguez.

Sesión 9ª, 26 de abril de 2021

17. La Directora Ejecutiva de Acción Educar e integrante del Consejo de Evaluación del Sistema de Educación Pública, señora Magdalena Vergara Vial.

18. La Académica del Departamento de Estudios Pedagógicos de la Universidad de Chile, e integrante del Consejo de Evaluación del Sistema de Educación Pública, señora María Teresa Flórez Petour.

Sesión 10ª, 3 de mayo de 2021

19. La Directora Ejecutiva de Acción Educar e integrante del Consejo de Evaluación del Sistema de Educación Pública, señora Magdalena Vergara Vial.

20. La Académica del Departamento de Estudios Pedagógicos de la Universidad de Chile, e integrante del Consejo de Evaluación del Sistema de Educación Pública, señora María Teresa Flórez Petour.

21. El Integrante del Consejo de Evaluación del Sistema de Educación Pública, señor Omar Jara.

Sesión 11ª, 17 de mayo de 2021

22. El Director Ejecutivo del Servicio Local de Educación Pública de Valparaíso, señor Manuel Pérez Pastén.

23. El Presidente del Comité Directivo del Servicio Local de Educación Pública de Barrancas, señor Carlos Eugenio Beca.

24. El Miembro del Comité Directivo del Servicio Local de Educación Pública de Barrancas y representante de los alcaldes del territorio, señor Nelson Zárate.

25. El Dirigente comunal del Colegio de Profesores de Valparaíso, señor Andrés Arce Olate.

Sesión 12ª, 24 de mayo de 2021

26. El Presidente de la Federación de Asociaciones de Funcionarios DAEM de la Región de Ñuble, señor Juan Díaz González, acompañado del Secretario de la Federación Regional del Maule FANDEM, señor Francisco Saavedra Sepúlveda.

27. El Presidente de la Coordinadora Nacional de Funcionarios DEM, DAEM y Corporaciones (CONAFUDAEM), señor Cristián Figueroa Constanzo, acompañado del dirigente de la CONAFUDAEM Región de Los Lagos, señor Tomás Sánchez.

28. El Presidente del Consejo Nacional de Asistentes de la Educación de Chile (CONAECH), señor Miguel Ángel Araneda Araneda.

Sesión 13ª, 31 de mayo de 2021

29. Presidente de la Confederación Nacional de Asociaciones de Funcionarios Asistentes de la Educación Municipalizada de Chile (CONFEMUCH), señor Arturo Escárez Opazo, acompañado de la Secretaria General señora Alejandra Aguilar Navarro; el Vicepresidente señor Manuel Urzúa Sánchez, y el Director señor Anthony Lenz Tapia.

Sesión 14ª, 14 de junio de 2021

30. El Secretario Ejecutivo de la Agencia de Calidad de la Educación, señor Daniel Rodríguez Morales.

31. La Jefa del Departamento de Normativa de la División de Fiscalía de la Superintendencia de Educación, señora Magdalena Badilla, y la Jefa del Departamento Fiscalización de Procesos Educativos de la División de Fiscalización, señora Daniella Maureira.

Sesión 15ª, 5 de julio de 2021

32. La Directora Ejecutiva del Servicio Local de Educación Pública de Llanquihue, señora Claudia Trillo Molina.

33. La Presidenta de la Federación VTF de la Región de O'Higgins y miembro de la Central Nacional de Asistentes de la Educación Pública (CNAEP Chile), señora Pilar Ibaceta Garrido, acompañada de la trabajadora de Jardines Infantiles VTF, señora Sandra Umanzor.

34. El Presidente de la Federación Nacional de Asistentes de la Educación (FENADEP) y miembro de la CNAEP Chile, señor Miguel Gaete de la Fuente, y el Presidente de la Federación Nacional de Sindicatos de Trabajadores de Corporaciones Municipales de Educación (FENASICOM) y Presidente de la CNAEP Chile, señor Enrique Dayne Hidalgo.

Sesión 16ª, 19 de julio de 2021

35. La Representante de los apoderados del Comité Directivo del Servicio Local de Educación Pública de Barrancas, señora Marisol Cisternas Urrutia.

36. La Directora de la Sala Cuna “Espacio Feliz” del Servicio Local de Educación Pública de Barrancas, señora Carolina Sepúlveda Benavides.

37. La Presidenta del Centro de Padres y Apoderados de la Escuela “El Salitre” de Pudahuel, señora Valeska Grandon.

38. La Presidenta del Centro de Padres y Apoderados de la Escuela “Federico Acevedo Salazar” de Cerro Navia, señora Katherine Bugueño.

39. La Presidenta del Centro de Padres y Apoderados del Liceo Bicentenario de Cerro Navia, señora María Macarena González Carrasco.

Sesión 17ª, 26 de julio de 2021

40. El Alcalde de la comuna de Lo Prado, señor Maximiliano Ríos Galleguillos.

41. El Presidente del Sindicato de Administración Central Cormupa, señor Ricardo Oyarzo Cárcamo; el Presidente del Sindicato de Asistentes de la Educación, señor Pedro Pablo Ramos Bustos, y la Presidenta Regional del Colegio Regional Profesoras y Profesores A.G., señora Violeta Andrade Velásquez.

42. El Presidente de la Asociación de Asistentes de la Educación de la comuna de Teodoro Schmidt, y dirigente de la Federación de Asistentes de la Educación del Servicio Local de Educación Pública de Costa Araucanía, señor Luis Frederich Astorga.

Sesión 18ª, 9 de agosto de 2021

43. El Alcalde de la comuna de Pudahuel, señor Ítalo Bravo Lizana.

44. La Directora de Presupuestos del Ministerio de Hacienda, señora Cristina Torres Delgado.

45. El Ministro de Educación, señor Raúl Figueroa Salas.

En la **sesión 19ª**, de fecha 12 de agosto, se nombró una subcomisión encargada de redactar las conclusiones y proposiciones sobre la investigación que debe incluir en su informe a la Sala.

Durante las **sesiones 20ª y 21ª**, de fechas 16 y 30 de agosto y se discutieron y votaron las conclusiones y recomendaciones.

2. Documentos recibidos.

En las sesiones celebradas, la Comisión recibió los documentos[2] que se detallan a continuación:

sesión	documento
Sesión 1ª, martes 19 de enero de 2021	Mandato
Sesión 2ª, lunes 1 de marzo de 2021	Presentación de la Directora Nacional de Educación Pública, señora María Alejandra Grebe Noguera (1)
Sesión 3ª, lunes 8 de marzo de 2021	Presentación de la Directora Nacional de Educación Pública, señora María Alejandra Grebe Noguera (2)
Sesión 4ª, lunes 15 de marzo de 2021	Presentación de la Directora Nacional de Educación Pública, señora María Alejandra Grebe Noguera (3)
Sesión 5ª, lunes 22 de marzo de 2021	Presentación del Contralor General de la República, señor Jorge Bermúdez Soto Documentos entregados por el Contralor General de la República: 1) Informe final 843-19 SLEP Barrancas - CGR 2) Informe N° 901 SLEP Puerto Cordillera - CGR
Sesión 7ª, lunes 12 de abril de 2021	Presentación del Director Ejecutivo del Servicio Local de Educación Pública de Barrancas, señor Patricio Canales Ríos
Sesión 7ª, lunes 12 de abril de 2021	Presentación de la Directora Nacional del Servicio Civil y Presidente del Consejo de Alta Dirección Pública, señora Solange Garreaud de Mainvilliers Gerlach
Sesión 9ª, lunes 26 de abril de 2021	Presentación de la Directora Ejecutiva de Acción Educar e integrante del Consejo de Evaluación del Sistema de Educación Pública, señora Magdalena Vergara Vial
Sesión 9ª, lunes 26 de abril de 2021	Presentación de la académica del Departamento de Estudios Pedagógicos de la Universidad de Chile, e integrante del Consejo de Evaluación del Sistema de Educación Pública, señora María Teresa Flórez Petour
Sesión 12ª, lunes 24 de mayo de 2021	Presentación del Presidente de la Coordinadora Nacional de Funcionarios DEM, DAEM y Corporaciones (CONAFUDAEM), señor Cristián Figueroa Constanzo
Sesión 13ª, lunes 31 de mayo de 2021	Presentación del Presidente de la Confederación Nacional de Asociaciones de Funcionarios Asistentes de la Educación Municipalizada de Chile (CONFEMUCH), señor Arturo Escárez Opazo, y de la Secretaria General señora Alejandra Aguilar Navarro
Sesión 14ª, lunes 14 de junio de 2021	Presentación del Secretario Ejecutivo de la Agencia de Calidad de la Educación, señor Daniel Rodríguez Morales
Sesión 14ª, lunes 14 de junio de 2021	Presentación de la Jefa del Departamento de Normativa de la División de Fiscalización de la Superintendencia de Educación, señora Magdalena Badilla y de la Jefa del Departamento Fiscalización de Procesos Educativos de la División de Fiscalización, señora Daniella Maureira
Sesión 15ª, lunes 5 de julio de 2021	Presentación de la Presidenta de la Federación VTF de la Región de O'Higgins y miembro de la Central Nacional de Asistentes de la Educación Pública (CNAEP Chile), señora Pilar Ibaceta Garrido

[2] Todos estos documentos pueden encontrarse en el siguiente link: https://www.camara.cl/legislacion/comisiones/documentos.aspx?prmID=2902

Sesión 15ª, lunes 5 de julio de 2021	Presentación de la Directora Ejecutiva del Servicio Local de Educación Pública de Llanquihue, señora Claudia Trillo Molina
Sesión 16ª, lunes 19 de julio de 2021	Presentación de la Directora de la Sala Cuna “Espacio Feliz” del Servicio Local de Educación Pública de Barrancas, señora Carolina Sepúlveda Benavides
Sesión 17ª, lunes 26 de julio de 2021	Documento aportado por la diputada Cristina Girardi “Visita inspectiva a los jardines y escuelas dependientes del Servicio Local de Educación Pública de Barrancas”
Sesión 18ª, lunes 9 de agosto de 2021	Presentación de la Directora de Presupuestos del Ministerio de Hacienda, señora Cristina Torres Delgado
Sesión 18ª, lunes 9 de agosto de 2021	Presentación del Ministro de Educación
Sesión 18ª, lunes 9 de agosto de 2021	Documento aportado por la diputada Cristina Girardi: “Informe fiscalización establecimientos educacionales SLEP Barrancas”, que incluye 2 anexos fotográficos
Sesión 21ª, lunes 30 de agosto de 2021	Documentos remitidos por la Directora de Educación Pública: 1) Ordinario N° 02046 de la Directora de Educación Pública, mediante el cual pone a disposición de esta Comisión el documento titulado "Jardines Infantiles y Salas Cuna Barrancas", del Servicio Local de Educación Pública Barrancas, que contiene una descripción de los proyectos de inversión y conservación en Salas Cuna y Jardines Infantiles para fortalecer la entrega del servicio educativo desde la primera infancia, dependientes de ese Servicio Local de Educación Pública. Los proyectos corresponden al "Jardín Infantil Tierra de Niños", con un monto de $ 7.292.476.-; "Jardín Infantil Rayén Mapu", con una inversión de$ 13.361.430.-; y "Jardín Infantil Renacer", con un monto de$ 15.212.801.- 2) Ordinario N° 02026 de la Directora de Educación Pública, mediante el cual pone a disposición de esta Comisión el documento titulado "Proyectos de Inversión SLEP Barrancas", elaborado por la Subdirección de Planificación y Control de Gestión del Servicio Local de Educación Pública Barrancas, que contiene una descripción de los proyectos de infraestructura ejecutados durante los años 2018 , 2019 y 2020, así como la cartera de proyectos 2021 de distintos establecimientos educacionales dependientes de ese Servicio Local de Educación Pública.

3. Listado de oficios despachados y documentos de respuesta recibidos por la Comisión en el marco de su investigación.

Durante el ejercicio de su cometido la Comisión ha despachado los siguientes oficios, formulando las consultas o requiriendo la información que a continuación se detalla con sus respectivas respuestas, cuyos anexos se encuentran en la Secretaría de la Comisión y forman parte de este informe[3]:

[3] Copia de los oficios y de sus respuestas se encuentran en el siguiente link: https://www.camara.cl/legislacion/comisiones/oficios_enviados.aspx?prmID=2902

Sesión	N° Oficio	Destino	Materia	Respuesta
2ª 01.03 2021	3	Presidente del Comité Directivo SLEP de Chinchorro	Solicita informar acerca de su participación en la Estrategia Nacional de Educación Pública y en los planes estratégicos locales.	Respuesta recibida el 15/03/2021
2ª 01.03 2021	4	Presidente del Comité Directivo SLEP de Huasco	Solicita informar acerca de su participación en la Estrategia Nacional de Educación Pública y en los planes estratégicos locales.	Sin respuesta
2ª 01.03 2021	5	Presidenta del Consejo Local SLEP de Huasco	Solicita informar acerca de su participación en la Estrategia Nacional de Educación Pública y en los planes estratégicos locales.	Sin respuesta
2ª 01.03 2021	6	Presidenta del Comité Directivo SLEP de Puerto Cordillera	Solicita informar acerca de su participación en la Estrategia Nacional de Educación Pública y en los planes estratégicos locales.	Sin respuesta
2ª 01.03 2021	7	Presidente del Consejo Local SLEP de Puerto Cordillera	Solicita informar acerca de su participación en la Estrategia Nacional de Educación Pública y en los planes estratégicos locales.	Sin respuesta
2ª 01.03 2021	8	Presidenta del Comité Directivo SLEP de Valparaíso	Solicita informar acerca de su participación en la Estrategia Nacional de Educación Pública y en los planes estratégicos locales.	Sin respuesta
2ª 01.03 2021	9	Presidente del Comité Directivo SLEP de Barrancas	Solicita informar acerca de su participación en la Estrategia Nacional de Educación Pública y en los planes estratégicos locales.	Respuesta recibida el 13/03/2021
2ª 01.03 2021	10	Presidenta del Comité Directivo SLEP de Gabriela Mistral	Solicita informar acerca de su participación en la Estrategia Nacional de Educación Pública y en los planes estratégicos locales.	Sin respuesta
2ª 01.03 2021	11	Presidente del Comité Directivo SLEP de Colchagua	Solicita informar acerca de su participación en la Estrategia Nacional de Educación Pública y en los planes estratégicos locales.	Respuesta recibida el 10/03/2021
2ª 01.03 2021	12	Presidente del Comité Directivo SLEP de Andalién Sur	Solicita informar acerca de su participación en la Estrategia Nacional de Educación Pública y en los planes estratégicos locales.	Sin respuesta
2ª 01.03 2021	13	Presidenta del Comité Directivo SLEP de Costa Araucanía	Solicita informar acerca de su participación en la Estrategia Nacional de Educación Pública y en los planes estratégicos locales.	Respuesta recibida el 08/04/2021
2ª 01.03 2021	14	Presidenta del Consejo Local SLEP de Costa Araucanía	Solicita informar acerca de su participación en la Estrategia Nacional de Educación Pública y en los planes estratégicos locales.	Sin respuesta
2ª 01.03 2021	15	Presidente del Comité Directivo SLEP de Llanquihue	Solicita informar acerca de su participación en la Estrategia Nacional de Educación Pública y en los planes estratégicos locales.	Sin respuesta

9ª 26.04 2021	16	Director Ejecutivo del SLEP de Barrancas	Solicita responder las consultas formuladas por la diputada Cristina Girardi.	Respuesta recibida el 17/05/2021
16ª 19.07 2021	18	Ministro de Educación	Solicita informar acerca de la obligación de proceder al pago de las deudas que mantenían los municipios al momento del traspaso, según lo establece la ley N° 21.040, y acerca de la deuda total actual que mantiene la Municipalidad de Cerro Navia con docentes y trabajadores de la educación traspasados al SLEP de Barrancas.	Sin respuesta
18ª 09.08 2021	19	Ministro de Educación	Solicita informar acerca de la situación de 70 establecimientos dependientes de SLEP que han disminuido ingresos por subvención general y subvención escolar preferencial (SEP)	Sin respuesta
18ª 09.08 2021	20	Directora de Presupuestos	Solicita informar acerca de las restricciones en el gasto de recursos públicos que tienen los SLEP	Sin respuesta

III. EXPOSICIONES EFECTUADAS POR LAS PERSONAS CITADAS O INVITADAS A LA COMISIÓN.

1) El exdirector Nacional de Educación Pública, señor Rodrigo Egaña Baraona.

El señor Rodrigo **Egaña**, expuso en la sesión 2ª, de fecha 1 de marzo de 2021[4], de la siguiente forma:

Creo que eso es muy valorable la permanente preocupación que han tenido tanto la Cámara de Diputados como el Senado por el proceso de implementación de la ley de Nueva Educación Pública. Cuando recibí la invitación para estar hoy día, también vi que la firmaban 65 diputadas y diputados, lo que le daba un peso extraordinariamente fuerte a la solicitud.

Al mismo tiempo, creo que es muy importante tomar en cuenta qué es lo primero que se plantea en el documento de solicitud para conformar la comisión, que son las denuncias de comunidades educativas de los Servicios Locales de Educación, sobre el funcionamiento de los servicios ya existentes y las etapas previas que son necesarias de tener en la implementación de los nuevos servicios, de acuerdo a lo que está dispuesto en la ley N° 21.040. Es muy relevante escuchar a las comunidades educativas y saber qué les preocupa, cuáles son los nudos expuestos.

Una primera cuestión que me parece relevante es destacar el tema de la participación y el diálogo con las comunidades. Las comunidades educativas alegan -y no sé cuál será la situación- que no se ha logrado desligar del proceso político la gestión de la educación pública, manteniéndose una situación parecida a la que había en la gestión municipal del sistema.

La ley de Nueva Educación Pública, como todos sabemos, contempla un novedoso y amplio sistema de participación en la gestión de los procesos educativos a nivel del territorio: los Servicios Locales tienen sus consejos locales y comités

[4] El acta de la sesión, que contiene su exposición íntegra, así como las consultas de los diputados y diputadas y sus respuestas, puede encontrarse en el siguiente link: https://www.camara.cl/legislacion/comisiones/sesiones.aspx?prmID=2902&prmIdTipo=2103
El video de esta sesión puede encontrarse en http://www.democraciaenvivo.cl/

directivos; la Dirección Nacional de Educación Pública tiene, a su vez, un consejo consultivo; los nombramientos de los directores de los Servicios Locales involucra a los comités directivos; los establecimientos tienen sus consejos escolares. En definitiva, hay un entramado de participación extraordinariamente relevante. Y lo he dicho en comisiones anteriores, a las que me han invitado en esta misma Cámara, que este es el modelo de participación ciudadana en gestión pública quizá más desarrollado que hemos ido formando y creando en el país.

Ahora, es cierto que en todo servicio público, y más aún en un entramado como el de la Nueva Educación Pública, solo la participación va a funcionar si los directivos de los Servicios Locales y de la Dirección Nacional de Educación creen en la participación. Si la apoyan, si la impulsan, si la toman en cuenta. Si no ocurre eso, no vamos a tener participación. Creo que la posibilidad que tiene esta comisión de lograr evaluar si esta participación está ocurriendo realmente es muy importante o lamentablemente sería concluir que la ley en esta materia es letra muerta y que no se está aplicando.

Esto es más relevante aun cuando en la actual situación de pandemia se da esta amplia discusión sobre la vuelta a clases presenciales en educación. La semana pasada hubo una importante reunión en la cual se discutieron mecanismos de consulta y de participación a los docentes, asistentes y apoderados. Creo que el modelo de participación que está puesto en la ley pudiera haber sido un ejemplo a seguir y habría sido muy útil. Todavía creo que es tiempo, porque en ese proceso aún estamos.

Después, la presentación hace una larga referencia al sistema de Alta Dirección Pública y la implementación de los Servicios Locales. Creo que allí se señala que habría habido irregularidades en los concursos y en los nombramientos de Alta Dirección Pública. Habría habido presiones indebidas para influir en los procesos de concursos, no consideración de la opinión de los comités directivos en la definición de los perfiles, vulneración de la confidencialidad y otras cuestiones. Esta posible situación debiera ser investigada con mucha profundidad por la comisión, porque de ser cierto estaríamos ante un gravísimo incumplimiento de la ley que creó el sistema de Alta Dirección Pública y, además, el Consejo de Alta Dirección Pública estaría faltando gravemente a sus deberes que son cautelar el buen funcionamiento del sistema.

Fui cuatro años consejero de la Alta Dirección Pública y los cuatro años siguientes presidente de ese consejo. Por lo tanto, tengo una relativa larga experiencia en el funcionamiento del sistema y no recuerdo en todo ese largo período haber recibido acusaciones de este tipo.

Esperaría que en la actual administración no se estuviera cambiando lo que en algún momento se dijo en una reunión -de las primeras que tuvimos en la comisión de evaluación del sistema- de que no estuviéramos cambiando en la educación pública la politización municipal por la politización del nivel central. Esto claramente sería destruir una de las bases de la modernización de la gestión en la educación pública, que ciertamente fue iniciada el año 2011, en el primer gobierno del Presidente Piñera, con la ley de la calidad de la educación que instaló la selección de directores de establecimientos educacionales y los directores DAEM de los municipios por sistemas de Alta Dirección Pública y que claramente ha sido proyectada con el sistema de selección de los directivos de los Servicios Locales de Educación que fijó la ley N° 21.040.

El siguiente punto al cual se refiere la presentación de los diputados y diputadas, que motivan la comisión, dice relación con la estrategia nacional de educación pública. En esa presentación se señala que varios servicios han denunciado que la participación en la discusión previa de la estrategia fue aparente porque o directamente no fueron consultados o cuando fueron consultados las sugerencias no fueron tomadas en consideración. Por lo que sabemos, la estrategia

fue rechazada en una primera instancia por el Consejo Nacional de Educación y aprobada después de una reformulación bastante completa. Hasta ahora, por lo que veo, no ha sido utilizado como antecedente fundamental en la preparación del presupuesto de educación pública, que era uno de los objetivos de tener estrategias, un marco para diseñar el presupuesto, y esto pudiera ser algo que podría empezar a corregirse a la brevedad.

Además, creo que sería útil -y hay tiempo que se está trabajando- conocer qué ha pasado con el encadenamiento entre la estrategia nacional con los planes de desarrollo de los Servicios Locales de Educación Pública y los planes de mejoramiento educativo de cada uno de los establecimientos. Con los servicios locales que se crearon en 2018 este proceso pudiera haber estado en aplicación y ser materia de evaluación.

En relación con las condiciones laborales en los servicios locales, el que esto haya sido materia planteada es de alta preocupación, porque todos sabemos que en cualquier servicio público las malas relaciones laborales generan una mala gestión.

Ahora, en la fase de preparación de la puesta en marcha de la ley que me tocó coordinar, y durante el primer año o el tiempo en que estuve a cargo de la dirección de la DEP, esta materia tuvo una importancia primordial. Siempre señalamos que para ser bien implementada la ley se iba a requerir la decidida y total participación de los docentes, de los asistentes de la educación y de las otras personas que trabajan en los servicios locales. Ciertamente, después de que dejé la dirección de la DEP, he estado a distancia vinculado con el proceso, pero he podido observar, fundamentalmente por información pública, que ha habido tensiones y dificultades, por lo que la Comisión tiene una amplia responsabilidad de evaluar qué es lo que está pasando.

Sí me llamó la atención una cuestión que ocurrió recientemente en enero con el pago de remuneraciones en el servicio local de educación de Valparaíso. Todos sabemos que un mal pago de remuneraciones en cualquier institución genera tremendas dificultades laborales, conflictos y tensión. Esto ocurrió al inicio, en enero de 2018, y si bien se cometieron errores, ahí se aprendió, ahí se corrigió, y podríamos haber evitado que en un nuevo servicio local, integrándose al sistema, hubiese vuelto a producirse esto con las consecuencias negativas sobre el tema laboral.

En relación con los temas presupuestarios, hay varios asuntos que se plantean y que me gustaría comentar. Al aprobarse la ley, era de amplio conocimiento que existían problemas de endeudamiento en diversos municipios.

El caso de Cerro Navia, que se integró al primer servicio que se creó, el de Barrancas con el de Puerto Cordillera, era absolutamente conocido por la comisión, por la Cámara y por el Senado, al momento de aprobarse la ley en 2017.

En julio de 2018, como director de Educación Pública, envié al entonces subsecretario de Educación -actual ministro- el informe que mostraba qué deuda estaba pendiente en materia previsional y solicité que el ministerio realizara las gestiones definidas en la ley para proceder al pago de esa deuda previsional. Hasta ahora, han pasado 36 meses y por lo que sé -hice algunas consultas al respecto-, todavía no ha pasado nada en esta materia y en la nota de la presentación de los parlamentarios, que es de junio del año pasado, se dice que son veintitantos meses los que ya han pasado.

Creo que esta situación es inaceptable. Todos sabemos que el tema de previsión y de pensiones es central en la discusión pública nacional. Encuentro extraordinariamente grave que esta deuda previsional todavía no sea cancelada, después de haber existido los mecanismos adecuados y pudiendo arbitrar las medidas para hacerlo.

No sé cómo será la situación con Valparaíso y San Fernando, que también eran municipios con una deuda extraordinariamente alta. Incluso, inicié ciertas

tratativas para empezar a visualizar como podría solucionarse este problema. No sé qué habrá pasado en los años posteriores, 19 y 20, pero no solo hay un problema que pudiera ser falta de gestión, porque claramente lo que está ausente es una decisión de tipo político de hacerse cargo del problema existente y de arbitrar las medidas para solucionarlo. Creo que eso es gobernar. Gobernar es actuar cuando hay problemas públicos en los cuales la autoridad tiene que hacerse cargo, y en esta materia, que fue prevista en la ley y que tiene un mecanismo claro para ser utilizado, hasta ahora podemos constatar un caso flagrante de falta de gobierno, lo que es tremendamente preocupante. Es un punto muy relevante de ser investigado por la comisión.

Respecto de otras materias presupuestarias, era claro que, al pasar la educación municipal a ser gestionada por servicios descentralizados del Estado, por lo tanto del sector central de la administración, cambiaría la manera presupuestaria de gestionar los recursos, por lo que había que ajustarse a la norma general de la Ley de Presupuestos.

Si bien se discutió en ese momento, no hubo acuerdo para tener un tratamiento distinto al programa 2 de los Servicios Locales de Educación, que es el programa que se hace cargo del servicio educacional. Todos sabemos que en la dinámica de gastos del servicio educacional puede llegarse al 31 de diciembre sin que se puedan efectuar todos los gastos que corresponden al año calendario que termina, por lo que pudiera ser necesario tener la posibilidad de crear saldos iniciales de caja en el programa 2, porque el programa 1, un programa normal de cualquier servicio público, tiene que ajustarse a esa norma. Los municipios tenían esa posibilidad, por lo tanto, no era un asunto de tanta complejidad.

En esta materia, me gustaría hacer una sugerencia a la comisión en el sentido de que se pudiera estudiar una excepción. Eso ayudaría muchísimo para que en lo central pudiera haber mayor flexibilidad, sobre todo cuando muchas veces los pagos que vienen transferidos a los servicios locales se hacen en los últimos meses del año.

Por último, dentro del tema presupuestario, quiero hacer un comentario respecto de la infraestructura. Entiendo que en la última Ley de Presupuestos se traspasó el presupuesto de infraestructura pública desde la Dirección de Educación Pública a la Subsecretaría, y creo que aquí se hizo vuelta atrás de algo que se discutió largamente al momento de crear la Dirección de Educación Pública, que era la conveniencia de tener la entidad que veía el mejoramiento de la infraestructura escolar junto con la entidad que iba a mirar el desarrollo completo de la educación pública. Creo que al volver esto atrás se separan estas dos dinámicas, por lo que será tremendamente difícil volver a enlazar algo que todavía está muy en preparación. Ello, porque en una de las comisiones que hubo y que me tocó asistir, fue más o menos en julio de 2018, el entonces ministro Varela prometió para julio de 2019 la entrega de un nuevo catastro sobre la infraestructura educacional que durante mi período como director había empezado a gestionar para que se pudiera tener. No sé cuáles habrán sido los avances en ese catastro, si se ha entregado o no ese informe, pero al desligarle o al sacarle a la Dirección de Educación Pública esa responsabilidad de infraestructura se separa también la posibilidad de actualizar el catastro -a mi juicio- con las negativas consecuencias que eso puede tener para el futuro.

Cabe recordar que esta fue una ley que se aprobó por unanimidad en el Senado, por la casi unanimidad en la Cámara de Diputados, que se puso en marcha en el gobierno anterior, segundo gobierno de la Presidenta Bachelet, y que funcionó durante los primeros nueve meses del actual gobierno con un equipo que había sido nombrado por el gobierno anterior. En ese tiempo me tocó trabajar con el ministro Varela y la ministra Cubillos. Hay que decir muy claramente que ellos no creían en este sistema y lo manifestaron de distintas maneras, y en el Parlamento dijeron que esta ley no representaba, en lo fundamental, su mirada sobre cómo debía mejorarse la nueva educación pública.

Eso dificultó ciertamente el trabajo inicial, porque a esa dificultad se agrega un segundo momento, que fue un instante de interfase, con una subrogancia en la Dirección de Educación Pública (DEP), hasta que la actual directora, señora Alejandra Grebe, seleccionada por Alta Dirección Pública, asumió la Dirección. Este proceso es uno de los más complejos de transformación del Estado, similar quizá a la reforma procesal penal o a la reforma que instaló el sistema de garantías especiales en Salud.

Ahora bien, para que esos procesos tuvieran éxito -como ocurrió-, también requerían un tremendo apoyo político en el ministerio, en todas las instituciones relacionadas con el sector educacional: la Agencia, la Superintendencia, etcétera, pero además con otras agencias transversales, como la Dirección de Presupuestos, la Contraloría, ChileCompra, etcétera. Por lo tanto, eso requería que ese esfuerzo conjunto se diera -y creo que esta comisión investigadora también podría indagar si eso se está dando-, ya que si no es así, todos debemos hacer el esfuerzo para que se logre. Ciertamente, la situación de pandemia nos afecta a todos por igual y también a la implementación y al funcionamiento de la educación pública. Eso es una condición que lamentablemente debemos enfrentar, pero no puede ser una explicación de las dificultades que podemos tener.

Estamos en el último año de los primeros cuatro de la primera fase de implementación de la ley que debían crear los 11 servicios locales -ya están creados-, aprobar la estrategia nacional, y generar la evaluación de esta primera fase. Todos sabemos que la segunda fase parte del 22 al 26, y ahí hay que crear los restantes 59 servicios locales que faltan.

Ahora, entiendo que la comisión evaluadora, cuyo plazo para emitir un informe es el 31 de diciembre de este año, acordó entregarlo el 31 de marzo, con la finalidad de permitir al gobierno que proponga ajustes, cambios, modificaciones, etcétera, que puedan hacerse cargo de dificultades y perfeccionar la situación a futuro.

En este tiempo -y todos sabemos que este es un año súper especial-, estamos *ad portas* del 11 de abril, de todas las decisiones que tenemos que tomar, hay elección de nuevo Presidente, de parlamentarios, etcétera, es muy importante ver cuál es el tipo de discusión que va a haber sobre ese informe de la comisión evaluadora. Me llama mucho la atención lo que señaló hace unos días en una columna del diario La Tercera el exsuperintendente de Educación de este gobierno, en que señala que le preocupa mucho tener un tiempo perdido, que estos años de implementación de la ley, a su juicio, es perdido, cosa que, puntos más, puntos menos, se lo he escuchado a muchos expertos en esta materia.

Por lo tanto, señor Presidente, agradeciéndole nuevamente su invitación, considero que este momento es muy adecuado para hacer, además de investigar aquello que motiva la comisión investigadora, algunas sugerencias para encauzar este proceso, para que mantenga, retome o adquiera el impulso que siempre debió haber tenido, por la transformación que significa, los cambios que implican y la importancia de la materia.

2) La Directora Nacional de Educación Pública, señora María Alejandra Grebe Noguera.

La señora **Grebe** asistió acompañada del Jefe de la División de Implementación de los Servicios Locales de Educación Pública, señor Alfredo Romero Labra, y del asesor señor Guillermo Said Yarur. La Comisión acordó que participara en todas sus sesiones. Expuso en las sesiones 2ª, 3ª y 4ª[5], de fechas 1, 8 y 15 de marzo de 2021, de la siguiente forma:

---

[5] Las actas de las sesiones, que contienen sus exposiciones íntegras, así como las consultas de los diputados y diputadas y sus respuestas, pueden encontrarse en el siguiente link: https://www.camara.cl/legislacion/comisiones/sesiones.aspx?prmID=2902&prmIdTipo=2103.
Asimismo, las exposiciones que realizó en esas 3 sesiones se encuentran disponibles en el siguiente link:

La presentación que he preparado se refiere principalmente a los 12 puntos establecidos en el mandato de la Comisión Especial Investigadora de la honorable Cámara de Diputados sobre las eventuales irregularidades cometidas en implementación de la ley N° 21.040 y, en particular, sobre la instalación y funcionamiento de los nuevos Servicios Locales de Educación Pública.

Como buena profesora de historia, siempre me gusta volver al origen y al por qué. En el fondo, por qué hoy tenemos una ley que implementa un nuevo sistema de educación pública; cuáles son aquellos elementos que estaban planteados principalmente en esa ley, y cuál fue el espíritu, para que no nos olvidemos cuando analizamos hacia adelante.

Cabe señalar que hoy recién estamos partiendo con la implementación de la ley, la cual acaba de cumplir tres años, por lo tanto haré una evaluación de lo que ha ocurrido en ese período, tocando los distintos puntos.

En lo relativo a la educación municipal y al fundamento del Sistema de Educación Pública, hay algunos puntos que me gustaría rescatar, porque que cada vez que hablamos de la nueva educación pública no se nos puede olvidar la razón de hacerlo; de por qué la señalamos como nueva educación pública, y de por qué hoy estamos implementando una de las grandes reformas; incluso, yo diría que es la mayor reforma estructural de los últimos tiempos.

Si uno lee y vuelve a leer el proyecto que crea el Sistema de la Nueva Educación Pública, la educación siempre ha sido un pilar central para nuestro país. Al respecto, toda la historia de la política educacional, el traspaso de los establecimientos educacionales públicos desde el Ministerio de Educación a los municipios o a las corporaciones municipales, iniciado en la década de los ochenta, constituye uno de los cambios estructurales más emblemáticos o relevantes del último tiempo en materia educacional.

Desde la implementación de dicha reforma –si uno lee la historia-, la educación pública no contó con un apoyo específico del Estado para hacerse cargo del desafío de educar, sobre todo en condiciones de vulnerabilidad social o de dificultad geográfica. Siempre se nos olvida hablar del segundo aspecto. Hablamos mucho de la vulnerabilidad social o de contextos relativos a la población más vulnerable de Chile, pero se nos olvida hablar sobre lo que implica educar con dificultad geográfica.

Durante la gestión municipal de la educación, se evidenciaron tempranos problemas de financiamiento y la matrícula experimentó un progresivo decrecimiento, que evidenció que la educación pública constituya una alternativa muy poco atractiva y minoritaria para las familias.

Se podría decir que en Chile había 345 maneras distintas de entregar educación a niños, niñas y jóvenes o adolescentes de Chile. Obviamente, la educación municipal funcionaba de acuerdo con los recursos, las oportunidades y la mayor o mejor gestión de cada uno de los municipios. Si miramos hacia afuera, hoy nos podemos dar cuenta de que sí hay buenos ejemplos de educación municipal, pero no dependen de todos los elementos que he señalado.

En ese contexto, el proyecto de ley que crea el Sistema de Educación Pública situó a la educación pública como un valor social que justifica una especial atención por parte del actuar de los órganos del Estado, y por ello tuvo como objetivo principal y esencial garantizar una política de Estado en materia educacional. A mi juicio, esos son los elementos principales.

En el fondo, la ley N° 21.040 garantiza el derecho a la educación y lo establece como un imperativo ético. La educación pública asegura el acceso, permanencia y

---

https://www.camara.cl/legislacion/comisiones/documentos.aspx?prmID=2902
Los videos de estas sesiones pueden encontrarse en http://www.democraciaenvivo.cl/

pertinencia de la oferta educativa a todos los niños, niñas, jóvenes y adolescentes, considera sus trayectorias reales, y obviamente, como consecuencia de esto, la educación debe ser un habilitador y multiplicador de derechos. Eso está en la base.

Sabemos que la crisis de la educación municipal, situación que uno podría resumir de manera simple diciendo que hay una disociación importante entre gestión pedagógica y gestión administrativa, se traduce a la larga en una baja de la matrícula y en un aumento de recursos y de funcionarios. Yo podría poner el mismo cuadro –no lo señalo en la presentación para no alargarla-, pero sé que ustedes saben que mientras baja la matrícula, aumenta la cantidad de funcionarios en el sistema municipal de Chile. Por lo tanto, ha habido un consenso bastante transversal durante todo este tiempo sobre la necesidad de transformar la educación pública.

En tales condiciones, el mensaje de la ley N° 21.040 enumera una serie de problemas vinculados a la gestión municipal de la educación como fundamento del establecimiento de un nuevo marco normativo. Es muy importante que no olvidemos que estos problemas estructurales fueron coincidentes con las falencias detectadas por el Informe Final del Consejo Asesor Presidencial para la Calidad de la Educación, de 2006, como también por la evaluación efectuada por la OCDE en materia educacional en 2004, donde se efectúa un diagnóstico de la educación municipal. Ahí se propone nuevamente la necesidad de modificar la institucionalidad del sistema público de educación. Estos son los problemas. No voy a entrar a analizarlos más en profundidad, porque todos ustedes los saben y tienen conocimiento al respecto, porque, de lo contrario, hoy no estaríamos hablando de la Nueva Educación Pública.

Sin embargo, me gustaría recordar que el punto a), referido a la “Ausencia de horizontes de desarrollo y proyección de largo plazo”, se encuentra estrechamente relacionado con la excesiva influencia de los ciclos políticos electorales de los municipios en la educación pública. Es muy interesante observar los estudios que hay en esos ciclos cuando hay elecciones, cómo aumentan tanto las plantas de los municipios o las corporaciones, sean DAEM, DEM, corporaciones o en los mismos establecimientos educacionales, y cómo todo eso está directamente relacionado. Eso se traduce en algo que hoy ha tenido un tremendo costo, que es la sobredotación.

Aprovecho de recordarles que la sobredotación no solo fue materia de discusión de la ley N° 21.040 -se puede encontrar en la historia de la ley, páginas 108, 127 y 533-, sino que también en todas las modificaciones efectuadas por la ley N° 21.152, particularmente en la historia de la ley N° 21.052, páginas 240, 241 y 252. Por lo tanto, el problema de la sobredotación no solo afecta hoy, sino que es de largo plazo.

Asimismo, como se establece en el punto b), relativo a la “Baja rendición de cuentas por lo propiamente educacional y dilución de responsabilidades”, no voy a entrar en mayor profundidad sobre el tema, porque siempre debemos tener la capacidad de mirar el Sistema de Educación Pública y no solo hacer un *zoom* a ciertos niveles locales, porque algunos servicios locales tienen una gran cantidad de problemas estructurales, pero otros no tienen todos estos problemas estructurales y han hecho que su funcionamiento y puesta en régimen sean mucho más fáciles, lo que veremos de ahora en adelante.

Es importante señalar que un cambio estructural no solucionará todos los problemas, pues no basta solo con reorganizar para mejorar. Para cambios estructurales necesitamos soluciones estructurales; de hecho, las soluciones estructurales no solo en materia de educación, sino que en cualquier otra materia requieren de tiempo para cambiar la práctica de muchas cosas, lo que implica cambiar más de 30 años de hacer las cosas de una determinada manera.

Entonces, si examinamos la ley, primero vemos que el 16 de noviembre, cuando se promulga la ley, se estableció como objeto que el Estado provea a través de los establecimientos educacionales de su propiedad. Por lo tanto, ¿dónde está el

centro? En los establecimientos educacionales y administración que forman parte de los servicios locales, creados y orientados hacia una educación pública, gratuita, de calidad y laica que promueva oportunidades, lo que, en mi opinión, es lo más importante. En el fondo, se trata de cómo un servicio local es capaz de crear esas oportunidades para fomentar el óptimo desarrollo humano y pedagógico que merecen todos nuestros estudiantes. Hay un punto clave en la ley N° 21.040, que vuelve a centrar todo en la persona, en este caso en nuestros estudiantes.

¿Qué logros se esperan de la gestión y del liderazgo educativo local? La gran pregunta que uno se hace cuando se cuestiona constantemente la nueva educación pública es si la nueva ley contiene las herramientas para el fortalecimiento y la recuperación de la educación pública. A lo menos, esa es la primera pregunta que me he hecho durante todo este tiempo, y cada vez estoy más convencida de que así es.

Cualquiera de nosotros que haya estudiado los niveles intermedios tiene claro que la creación de un nivel intermedio con el liderazgo educativo a nivel local –hablamos de niveles intermedios cuando se conectan las políticas nacionales con las de gestión educativa local y se acumulan capacidades profesionales de apoyo; esa es la gracia de los niveles intermedios que hoy funcionan a nivel mundial- pone énfasis en el desarrollo profesional pertinente -tiene un apellido, no es cualquier desarrollo profesional- y continuo de directivos y de docentes de establecimientos educacionales. Ese desarrollo profesional es en terreno y en régimen y no en una capacitación. Si bien puede ser en una capacitación, debe tener pertinencia local. Se crea un sistema público altamente profesionalizado, moderno, eficiente, con foco en la educación y con identidad territorial, destinado al mejoramiento en la calidad y el foco puesto en la sala de clases.

Entonces, ¿cuáles son los logros esperados? Todos estos elementos: recuperar el valor social de la educación pública, resultados de los aprendizajes, equidad y distribución social del aprendizaje, eficacia y eficiencia interna de la gestión local en la educación. Sin embargo, esto no lo vamos a lograr inmediatamente, pero para allá vamos. ¿Hacia dónde tenemos que movernos? Claramente, hacia acá. Por eso es tan importante el fortalecimiento del nivel intermedio.

¿Cuáles son las condiciones base para que ello ocurra? Financiamiento de recursos, capacidades profesionales y roles claros y definidos para lograr la coherencia. Todos estos elementos están presentes en la ley. Todos estos elementos son los que están puestos en juego en la primera etapa.

¿Cuál es la estructura del sistema? El sistema tiene setenta Servicios Locales de Educación Pública, que son órganos profesionalizados. Tal como dijo Rodrigo Egaña, es bien importante recordar que es un servicio público descentralizado, de acuerdo con su naturaleza jurídica creada por ley, con personalidad jurídica y patrimonio propio, con un jefe de servicio elegido por Alta Dirección Pública, sin dependencia del ministerio o de la Dirección de Educación Pública (DEP)**.** La supervigilancia es delegada por el Presidente de la República en el Ministerio de Educación, el cual entrega las atribuciones de coordinación estratégica a la DEP.

Así funciona el sistema, pero en el corazón del sistema están las escuelas, los jardines y los liceos: los alumnos. Siempre debemos poner nuestro foco en ellos.

La Dirección de Educación Pública es un servicio público especializado, de acuerdo con su naturaleza jurídica, dependiente del Ministerio de Educación, cuyo director es elegido por Alta Dirección Pública. Su labor es asegurar la conducción estratégica del Nuevo Sistema de Educación Pública y coordinar la red de Servicios Locales de Educación Pública. Para ello, existe un elemento estratégico, dado por la ley, que es la Primera Estrategia Nacional de Educación Pública, que tuvo un largo tiempo de diseño -casi dos años-, con mucha participación en distintas instancias. No me detendré en eso, pues ya lo hemos conversado, pero sí hubo participación. En cuanto a si los comités directivos participaron o no, participaron los que estaban en

ese momento y no los que se fueron formando después. Sin embargo, la participación tal cual se estableció en la resolución exenta que establece la participación en la confección de la Primera Estrategia Nacional de Educación Pública, se hizo de esa forma. Podríamos también conversar sobre qué entendemos por participación y qué tipo de participación esperamos. A lo mejor, en una sociedad en que la participación no es algo a lo que todos estamos acostumbrados. Eso lo profundizaremos un poco más.

Además, están los servicios locales, los cuales tienen una competencia territorial. Su objetivo es velar por la calidad, la mejora continua y la equidad del servicio educacional, por lo que deberán proveer apoyo técnico-pedagógico, de acuerdo con las características del territorio.

En cuanto a su distribución, esta se encuentra establecida en el artículo 16 de la ley, que indica que los criterios para definir el ámbito territorial de cada uno de los servicios locales es la matrícula total de los estudiantes en el territorio, el número de establecimientos dependientes de cada municipalidad, la distancia y la conectividad entre los distintos establecimientos educacionales. Se determina una comuna de cabecera, fijada mediante criterios técnicos, tal como consta en la resolución N° 970, de 21 de febrero de 2018, del Ministerio de Educación. En esa resolución se aseguran territorios con buena conectividad y tamaños geográficos razonables.

Sobre este punto y en lo referido específicamente a las oficinas de los Servicios Locales de Educación Pública (SLEP), que hace mención el mandato de esta comisión, cabe señalar que de acuerdo con el artículo 16 de la ley N° 21.040, la creación de oficinas locales es facultad exclusiva de los servicios locales, a través de un decreto fundado del Ministerio de Educación, cuando sea necesario por razones de buen servicio y para el adecuado cumplimiento de sus funciones, en atención a la distancia, conectividad, concentración, etcétera. También puede ser propuesto por el comité directivo local.

No obstante lo anterior, hasta ese momento, nosotros como Dirección de Educación Pública, en su carácter de coordinador y conductor del sistema, no hemos recibido ninguna solicitud sobre la materia. Sin embargo, tenemos servicios locales que, más que oficinas locales, sí tienen una especie de representante del servicio local en distintos establecimientos educacionales, que ha resultado bastante bien y ha ido atendiendo y entregando soluciones. Por ejemplo, el caso de Costa Araucanía, en donde hay localidades bastante alejadas y cuesta bastante llegar a Carahue, por conectividad, transporte y otras razones; Nueva Imperial y distintas localidades donde existen estas sucursales que permiten ir resolviendo. La pandemia ayudó bastante en esto, porque la mayoría de los trámites se realizan de forma digital, lo que ha ayudado bastante, sobre todo el año pasado.

¿Qué representa un servicio local? Estos tres elementos. Desde mi punto de vista, como sistema, a medida que el traspaso se va consolidando, hemos intentado que estas cosas vayan ocurriendo, sobre todo las condiciones necesarias para que los estudiantes tengan oportunidades en un trabajo conjunto con los directivos, profesores, etcétera, a través de los planes estratégicos locales. Si bien son declarativos, los planes estratégicos tienen el PAL, que son anuales y son operativos. Anteriormente existía el Plan Anual de Desarrollo de la Educación Municipal (PADEM), que duraba un año y se iba cambiando anualmente. Ya les mostraré cómo se articula el sistema respecto de los planes estratégicos locales, pero hay indicadores y formas, por lo que hoy se rinde cuenta de esto.

Respecto de la instalación de los nuevos Servicios Locales de Educación Pública, lo primero es tener claro que este es un escenario dinámico. Hemos cumplido con la primera etapa establecida en la ley, que es la instalación de los once primeros servicios locales, que están con traspaso educativo y funcionando, lo que corresponde aproximadamente, si quisiéramos hablar de la magnitud del sistema, al 14% de la matrícula municipal, que es lo que está establecido en la ley.

Tal como se ha establecido, estamos en una evaluación intermedia. El consejo de evaluación tiene que entregar este informe, pero también es el encargado de evaluar anualmente la implementación. Ha entregado sus informes con las recomendaciones y observaciones los tres años anteriores, informe que nosotros, como Dirección de Educación Pública, en conjunto con los servicios locales, hemos tomado en consideración para ir mejorando la implementación año tras año.

A partir de 2022, entrarían en funcionamiento y se generaría el traspaso de los 59 servicios locales restantes. Hoy se encuentra en el trámite respectivo el decreto de los próximos quince servicios locales.

Hay ciertas cosas que quiero aclarar respecto de los servicios locales de 2018, 2019 y 2020, porque uno podría preguntarse por qué siempre estamos hablando de Barranca, pero no de Huasco, de Puerto Cordillera, de Gabriela Mistral o de Andalién Sur, si todos son servicios locales. Todos tenemos experiencias positivas y de mejoras. Si volvemos hacia atrás, cuando se inicia esto, en el artículo sexto transitorio, en la primera etapa de instalación, se establecía que, entre la fecha de publicación de la ley -el 24 de noviembre de 2017- y el 30 de junio de 2018, se debía instalar un servicio local en la Región Metropolitana y otro en la Región de Coquimbo. Asimismo, entre el 1 de enero y el 30 de junio de 2018, se debía implementar un servicio local en la Región de Atacama y otro en la Región de La Araucanía; entre el 1 de enero y el 30 de junio de 2019, uno en la Región de Arica y Parinacota, otro en la Región Metropolitana y otro más en la Región del Biobío. Además, entre el 1 de enero y el 30 de junio de 2020, se debía implementar un servicio local en Valparaíso, otro en la Región de Los Lagos, uno en la Región del Libertador General Bernardo O'Higgins y otro en la Región de Atacama. Enseguida, se indicaba una segunda etapa de instalación, entre el 1 de enero y el 30 de junio de 2022, con 15 servicios desde allí en adelante.

De acuerdo con el mandato establecido por el legislador, los primeros servicios locales, de Barrancas y Puerto Cordillera, entraron en funcionamiento el 29 de diciembre de 2017. El servicio educacional se traspasó el 1 de marzo de 2018, es decir, dos meses después de la entrada en funcionamiento de dichos servicios y poco menos de cuatro meses, desde la promulgación de la ley.

La experiencia acumulada hasta hoy demuestra que los tres primeros años de implementación de la ley N° 21.040, según está reflejado en el Informe Anual para el Consejo de Evaluación del Sistema de Educación Pública, de 2019 –los tres informes públicos están en la página de la Dirección de Educación Pública-, han determinado que un proceso exitoso de instalación de un servicio local de educación pública consta de 34 meses corridos. Dicho proceso contempla tres etapas graduales: anticipación, instalación y acompañamiento en régimen. El mismo informe señala que un periodo inferior al indicado pone en riesgo el proceso de instalación. La tabla que estoy mostrando en mi presentación establece 10 meses para la etapa de anticipación, 15 meses para la de instalación y 9 meses para la de acompañamiento, tiempos que fueron cumplidos durante la instalación de dos Servicios Locales de Educación Pública.

Con todo lo que hoy sabemos que implica un proceso de traspaso, sobre todo cuando tenemos elementos para decir que traspasar una corporación es mucho más complejo que hacerlo con municipios, tenemos claro por qué el proceso de consolidación de ese traspaso -que es lo que viene y son los dos años posteriores al traspaso educativo- ha sido mucho más complejo, sobre todo en el caso de Barrancas. Ya veremos qué pasaba con Cerro Navia, que puede ser el otro servicio.

No olvidemos que en la época en que se iniciaron esos primeros Servicios Locales de Educación Pública, se suscribieron los convenios denominados Modelos de Gestión en Red de Sostenedores. Mediante ese mecanismo, el Ministerio de Educación firmó un convenio marco con los sostenedores de los territorios, el que posteriormente se materializó mediante la suscripción de uno o más convenios

específicos. Por lo tanto, existieron cinco territorios en ese momento, correspondientes a distintas comunas.

La historia de la ley establece que el Servicio Local de Educación Pública Barrancas estaba integrado, en su inicio, por las comunas de Pudahuel y Lo Prado; el de La Bandera lo componían las comunas de San Miguel, Lo Espejo, La Cisterna, San Ramón y Pedro Aguirre Cerda, y el de Chacabuco comprendía las comunas de Tiltil y Colina.

En la Región del Biobío, el Servicio Local de Educación Pública Andalién Sur abarcaba las mismas comunas que tiene actualmente, como ocurre también en el caso del Servicio Local de Educación Pública Huasco, en la Región de Atacama. El único que no comprende las mismas comunas que tenía en su inicio es el de Barrancas.

En ese sentido, y pese a las gestiones realizadas por el Poder Ejecutivo para atenuar las complicaciones de ese traspaso en el marco legal, se puede ver que Cerro Navia no estaba incluido en la etapa inicial de instalación, razón por la cual no se incluyó en los convenios antes señalados.

En efecto, el traspaso del servicio de educacional prestado por Cerro Navia fue previsto para el 1 de enero de 2020, según consta en la historia de la ley N° 21.040, página 1.253. Lo anterior respondía al plazo razonable que requiere la instalación de un servicio.

Sin embargo, debido a la insistencia de su incorporación inmediata en el territorio de Barrancas, fue establecida finalmente en la ley como parte de dicho territorio, con la fecha de traspaso del servicio educacional ya indicada, de modo que no fue posible ejecutar las medidas de anticipación necesarias, en una municipalidad que mantenía uno de los mayores niveles de endeudamiento en materia educacional. Todo lo concerniente a las razones de su incorporación en esa fecha lo pueden leer en la historia de la ley, página 1.444.

Las dificultades de ese traspaso educacional en tiempos acotados fueron abordadas también en el informe final del Servicio de Análisis y Evaluación de la Implementación de los Servicios Locales de Educación Pública, donde se destacó claramente la falta de una etapa de anticipación para esos primeros servicios locales, lo que tuvo como consecuencia una concentración de hitos relevantes que impactó particularmente en la conformación de equipos y en el manejo de la información.

Eso ha sido distinto en los casos posteriores de Servicios Locales de Educación Pública, de 2019 y 2020, en que existieron tiempos bastante más adecuados. Eso lo pueden leer en todos los informes finales del Servicio de Análisis y Evaluación de la Implementación de los Servicios Locales de Educación Pública. Existe un informe que contiene un estudio bastante profundo sobre ese tema.

Sumado a esas dificultades vinculadas y a los tiempos acotados, el informe también precisa una serie de desafíos que presenta la instalación de Servicios Locales de Educación Pública, por ejemplo, en el caso de Araucanía Costa, la excesiva ruralidad, la habilitación de oficinas -creo que Rodrigo Egaña debe recordar lo difícil que fue conseguir una oficina en Carahue, y lo difícil que ha sido hasta hoy lograr una oficina en donde estén todos juntos-, la conformación de equipos y la profesionalización de los servicios locales.

En el informe se destaca cómo se han profesionalizado los equipos de los SLEP (Servicios Locales de Educación Pública) en régimen, lo que ha significado un cambio muy importante respecto de las municipalidades. Todo eso está en ese informe, que es público. Se los puedo hacer llegar sin ningún problema.

Considerando esos antecedentes de instalación y traspaso, que carecieron de tiempos razonables para su ejecución, los esfuerzos que hemos hecho desde la

Dirección de Educación Pública y desde los servicios locales se han centrado en enmendar la deficitaria situación resultante de esa gestión municipal.

En ese orden de ideas, se hace presente que actualmente, y pese a las dificultades que ha implicado la reestructuración de la educación pública, nos encontramos en la segunda etapa de instalación de los servicios locales.

Como manifestó Rodrigo Egaña, en el caso de los servicios locales 2020, si bien tuvimos problemas en el pago de los sueldos de Valparaíso, objetivamente, por el mismo problema que tuvimos en 2018, es decir, por falta de información y desorden, en el caso de la Corporación Municipal de Valparaíso ese problema ya fue enmendado y pudimos mejorar con ocasión del segundo pago de los sueldos en febrero. Finalmente, los mismos gremios nos entregaron la información.

Ese ha sido el problema, existe información y desorden, lo cual es bastante importante en los casos de corporaciones.

Se trata de cómo hemos ido profesionalizando y estandarizando los procesos, lo referente al modelo de apoyo técnico pedagógico, que también conocen; cómo se asesora la red y cómo se hace de forma sistemática, también cómo hemos ido sacando a los establecimientos. Aquí está la información sobre los niveles insuficientes.

Ahí están todos los instrumentos asociados a la Dirección de Educación Pública. Yo diría que este es el más importante. Están todos alineados con la Estrategia Nacional de Educación Pública.

Esos son los resultados en cuanto al cumplimiento de los convenios de desempeño colectivo, de los PMG (Programas de Mejoramiento de Gestión) de 2020 de cada uno de los servicios, lo que habla de una gestión y de indicadores bastante buenos.

En cuanto a algunas de las cosas que conversamos sobre la instalación de los primeros servicios locales en la sesión pasada, en particular de la cohorte de 2018, hay dificultades que están asociadas al acotado tiempo del traspaso educativo. Lo vimos principalmente con los cuatro primeros servicios locales de educación.

¿Por qué ocurre eso? Si uno mira el cronograma de instalación de los servicios locales, una de las grandes consecuencias tiene que ver con que los grandes hitos relevantes quedan juntos en un tiempo muy acotado, lo que claramente impactó en la conformación de los equipos y el manejo de la información. Estamos hablando más o menos de casi dos años, previos a la puesta en régimen de los servicios locales de educación. Por lo tanto, tanto el manejo de información como la conformación de equipos son las grandes dificultades que normalmente después repercuten en toda la administración de dichos servicios, principalmente en los de 2018.

Otro de los grandes desafíos, que es propio del sistema de traspaso en algunos casos, es la excesiva ruralidad, habilitación de oficinas, conformación de equipos y profesionalización de los servicios locales.

El último punto tiene que ver principalmente con la capacidad instalada, sea de las personas que conforman en un inicio los servicios locales o que posteriormente pasan a conformarlo. La *expertise* que se requiere –y lo veremos más adelante, sobre todo en el tema del traspaso de dichos servicios- es algo que hay que instalar desde ya, y desde luego la gran recomendación que tenemos es que eso se haga en régimen.

Si miramos en perspectiva, ¿qué mejoras podemos encontrar actualmente en los once primeros servicios locales, sobre todo en este año de evaluación? Primero, todo lo que diga relación con procesos estandarizados, tema que hemos analizado más de alguna vez en la Comisión de Educación de la Cámara de Diputados. Me refiero específicamente a la cantidad de procesos, subprocesos y actividades que hoy están sistematizados. Segundo, todo el trabajo territorial se ha ido mejorando, sobre

todo en la etapa de anticipación. Lo clave es, en el fondo, acompañar a los municipios en todo el proceso para asegurar el correcto traspaso y puesta en marcha de los servicios locales, lo que ya fue mejorado respecto de 2019 en la implementación de los cuatro últimos servicios locales de educación en 2020, independientemente del contexto de pandemia. Finalmente, se han establecido estrategias para la implementación. En el fondo, hoy tenemos desarrollados los manuales, que se han hecho en conjunto con los equipos de la DEP y sobre todo de los servicios locales, para abordar el proceso de implementación desde 2022 en adelante, correspondiente a los 59 servicios locales de educación que se instalarán a continuación.

La siguiente lámina es solo para que ustedes puedan tener una idea del trabajo de sistematización de procesos que se ha hecho durante el último año. Este es el mapa de procesos de la Dirección de Educación Pública, el que considera distintos tipos de procesos, y obviamente uno va tomando decisiones en función de aquello. Este es el actual organigrama de la Dirección de Educación Pública, por lo tanto su forma de trabajo tiene que ver con eso, con cómo se van cruzando los procesos, etcétera, para realizar la tarea de acompañamiento que tenemos encomendada y la conducción estratégica del sistema de educación pública.

La siguiente lámina muestra el mapa de procesos de los Servicios Locales de Educación Pública. Si uno quisiera ver cómo se estandariza un Servicio Local de Educación Pública y hacia dónde debería transitar, deberíamos encaminarnos hacia esto y es lo hoy se ha hecho.

El año pasado se hizo todo un trabajo, primero, para levantar estos procesos con los mismos servicios locales en régimen y ver cómo se ha ido adaptando la misma estructura interna, la organización propiamente tal, en función de tales procesos.

Si se observa cada uno de los organigramas, se advierte que cada área, departamento o subdepartamento es responsable de un proceso.

Esto nos permite tomar decisiones. Por ejemplo, en el recuadro de los procesos de soporte, que obviamente son claves, las acciones enmarcadas en negro corresponden a procesos que para nosotros son críticos. ¿Qué significa eso? Son procesos prioritarios que necesitan una alta *expertise* en cuanto a la conformación de las personas y que soportan todo el trabajo que finalmente realiza el servicio local para crear las condiciones y las oportunidades para el mejoramiento continuo de la educación en cada uno de los establecimientos educacionales.

Cada uno de esos mapas de procesos tiene su propio manual, en los cuales están descritos cada uno de los procesos y las formas de trabajo. Por cierto, se labora en función de equipos de procesos y se va haciendo todo un seguimiento. Esto ha sido un muy buen insumo, sobre todo para la conformación de los servicios locales de educación 2020.

Respecto de los reglamentos, que era una de las preguntas formulada por la diputada Girardi en la última sesión, hoy se encuentran prácticamente completos. Solo hay dos reglamentos pendientes de elaboración, que se deben dictar de conformidad con los artículos 24, sobre el procedimiento de remoción del director ejecutivo, y 44, relativo al convenio de gestión educacional. Ambos artículos están en tramitación, por lo tanto se estaría *ad portas* de terminar con ese proceso.

El otros reglamentos que establece la misma ley ya están terminados. En el recuadro aparecen las fechas de publicación de cada uno de ellos. Hay que tener claro que la ley no establece una fecha de cuándo debe estar completo o terminado eso. Los reglamentos son las bajadas de la ley y finalmente nos han permitido avanzar bastante, sobre todo en lo que corresponde a las instancias de gobernanza: el comité directivo, los consejos de locales y la coordinación regional. Principalmente, los comités directivos y los consejos locales de educación son claves para el funcionamiento.

Cabe señalar que hemos hecho todo un trabajo de evaluación con los comités directivos, por cuanto levantamos la necesidad de revisión de lo que han sido. Como ya están funcionando los once comités directivos, por lo tanto tenemos bastantes cohortes de aquellos y hemos hecho un levantamiento de esas cosas que, en ejercicio, independientemente de los reglamentos, hoy día son insumos para mejorar el funcionamiento de cada uno de estos.

En el caso de los consejos locales, hemos tenido pocas reuniones con ellos, pero es un ejercicio que, a lo menos desde la Dirección de Educación Pública y no desde los servicios locales, vamos a hacer cuando los primeros integrantes terminan sus dos años. Los comités directivos tienen un período mucho más largo de funcionamiento.

Otra de las preguntas –que creo no es una pregunta, sino una gran inquietud que tenemos- es saber cuál es el rol de la DEP como articulador del sistema. ¿Hay supervigilancia o no la hay? En el fondo, ¿cómo se articula, siendo la DEP por definición un organismo centralizado? Los servicios locales son organismos descentralizados con patrimonio propio.

Hay elementos que para nosotros han sido claves en esta articulación, que es la Primera Estrategia Nacional de Educación Pública, y tal como lo establece la Primera Estrategia, si uno mira los cinco objetivos hay unos que son propios del sostenedor, otros que son propios de la Dirección de Educación Pública y otros que están enfocados principalmente en los establecimientos educacionales y en la sala de clases. La función que tenemos como Dirección de Educación Pública es conducir y coordinar estratégicamente el sistema.

Lo que dice el artículo 60 de la ley N° 21.040 es que el instrumento para hacer esto es la elaboración de la Primera Estrategia Nacional de Educación Pública, y que nuestro rol es vigilar. Aunque más que vigilar, la idea es que esa conducción estratégica haga que la Primera Estrategia Nacional de Educación Pública, tanto en sus metas como en las iniciativas e indicadores propiamente tal, establecidos para cada uno de esos objetivos, se vaya cumpliendo. Aparte de eso está cómo se evalúa el desempeño de los servicios locales a través de los convenios de gestión del subdirector ejecutivo y la prestación de apoyo técnico y administrativo en el marco de sus funciones.

Hay que recordar que los directores ejecutivos tienen un convenio en el que una vez al año tienen que rendir cuenta y, además, una vez al año -que es lo que acabo de decir- tienen una reunión de retroalimentación, que corresponde a la evaluación que como directora nacional debo hacer a cada uno de los directores ejecutivos, con criterios que van desde la visión estratégica a la articulación en red, el liderazgo, entre algunos de los indicadores o criterios que tiene esa evaluación. Es decir, para nuestra función como coordinador y conducir estratégicamente la ley nos entrega herramientas para realizar objetivamente esa coordinación y velar porque los servicios locales realicen las tareas y creen las condiciones necesarias para que se produzca el mejoramiento escolar en cada uno de los territorios.

Ahora, siempre está la duda de la naturaleza jurídica de los servicios locales frente al tema de que son descentralizados y todo lo que ello implica. Hay que tener claro que los servicios descentralizados públicos actúan con personalidad jurídica y patrimonio propio -lo que la ley les asigne- y están supeditados a la supervigilancia del Presidente de la República, a través del ministerio respectivo. La descentralización en este caso podrá ser funcional o territorial.

Ahora bien, también hay distinciones en materia de dependencia y supervigilancia, pero son cuestiones que no tienen que ver con el mandato. Yo he tratado de profundizar bastante el tema. Sería interesante, en algún minuto, profundizar en materia de supervigilancia y cómo esa vinculación de descentralización-centralización se ha llevado a la práctica durante estos tres años.

Lo que sí les puedo asegurar es que los instrumentos de gestión que están en la ley son útiles y sirven para realizar esa coordinación estratégica y esa “vigilancia” de que en los servicios locales ocurra lo que tiene que pasar a través del cumplimiento de esos indicadores.

Insisto, es un tema que va más allá del mandato de esta comisión, pero sería interesante profundizar en él.

Otro de los grandes aspectos considerados en el mandato tiene que ver con la participación de la comunidad educativa respecto de lo que han sido estos tres primeros años de funcionamiento.

Me gustaría considerar los instrumentos que están en la ley y la forma en que garantizamos la participación de las distintas comunidades educativas en este nuevo sistema.

La ley N° 21.040 presenta mecanismos de promoción, implementación, instalación y gestión de dos instancias participativas y de gobernanza que son nuevas y que tienen la característica de ser órganos colegiados y que se suman a los órganos colegiados que ya existen, como son el Consejo Escolar y los centros de padres y madres, además del Comité Directivo y el Consejo Local, cuyo objetivo, al igual que el Consejo Escolar, es recoger la visión de las comunidades educativas y locales del territorio y participar en mayor o menor grado en los procesos de toma de decisiones, de acuerdo a la instancia que corresponda.

En el caso del Comité Directivo, que ya vimos en la primera parte, está enfocado a la rendición de cuentas y al desarrollo estratégico del servicio con funciones y atribuciones de carácter consultivo y resolutivo.

En este caso, el Consejo Local es de perfil más bien educativo y representativo de la voz de las comunidades educativas con atribuciones de carácter consultivo. No es resolutivo, de acuerdo a lo que establece la ley N°21.040. Hago hincapié en la palabra resolutivo y en las atribuciones de cada uno porque, en la práctica, pudo haberse prestado para confusiones: “Es que yo no participé en la decisión”.

Hemos tenido que trabajar bastante con los consejos locales y algunos comités directivos para clarificar qué son, independientemente de lo que quieran ser, de manera que el sistema funcione bien con estos dos órganos colegiados y que cada uno realice la tarea para la cual fue creado.

Un tercer estamento, muy interesante en su forma de funcionamiento, es la conferencia de directores de establecimientos. Estas conferencias, en las que me ha tocado participar, han sido uno de los grandes aciertos. Se juntan más de una vez al año, y son instancias realmente muy buenas. Estas conferencias, que se juntan para revisar el avance del plan estratégico, que se hace al inicio de cada una de las conferencias de directores, han sido una excelente instancia para el intercambio de experiencias pedagógicas, sistematizarlas y transformarlas en una práctica, como también para la formación de los directores en distintos aspectos, fundamentales para la conducción y el liderazgo de este nuevo sistema.

Respecto al tema de la Estrategia Nacional de Educación Pública, mencionado en este mandato, quiero hacer hincapié en la resolución N°422, del 2018, que regula la propuesta de la Estrategia Nacional y establece cuáles son las instancias de participación, que surgieron después de una consulta nacional, luego de diálogos temáticos o jornadas de reflexión de las comunidades educativas y diálogos técnicos con expertos y académicos.

Cuando uno consulta a un Comité Directivo del año 2019 si participó, la respuesta va a ser que no, porque el año 2018 no existía al momento en que se hizo la consulta a los comités directivos, ni menos los de 2020. Ellos han tenido la oportunidad de participar con la estrategia nacional -ha sido un súper buen ejercicio-, en la alineación de los planes estratégicos –además de los que tiene cada uno-, en

el plan anual y en el ajuste de los distintos instrumentos de gestión en la educación pública.

En la presentación podemos ver la fecha de constitución de los comités directivos, lo que es bien importante cuando uno lo mira en forma paralela y hace la línea temática en el tiempo de cuándo se hicieron las distintas instancias que quedaron establecidas por esa resolución. También establece quiénes participan en cada una de estas.

Entonces, si uno se acuerda de esto, se pregunta: ¿quién participó? Es cosa de ver qué se les preguntó y cuál era el objetivo de cada uno, respecto de la consulta ciudadana que se hizo antes: el comité consultivo, los diálogos técnicos, los diálogos temáticos y la consulta pública *on line.* Por lo tanto, sí hay mayor participación en la consulta pública *on line,* para aquellos que quisieron participar; también estuvieron algunos que no habían participado, pero fueron invitados no como comité directivo completo a los diálogos temáticos.

Esto es lo que establece esa resolución y así es cómo se debe participar. No se puede hacer de una forma distinta, así se construyó la primera estrategia nacional de educación pública.

Ahora bien, lo que hoy estamos haciendo es trabajar con los comités directivos en la revisión y en la adecuación de la estrategia, o más bien de los instrumentos de gestión a la estrategia nacional, por lo que hemos tenido bastantes conversaciones al respecto.

Por otro lado, no hay que olvidar que aparte de la estrategia, está el plan estratégico local, que se construye cuando los servicios locales parten en régimen. En 2020 se comenzó a elaborar en las cohortes el plan estratégico local, pero todos tienen un plan anual y un convenio de gestión educacional, sobre todo los directores. Los once directores tienen su convenio de gestión educacional.

Aparte de eso, no hay que olvidar que a los comités directivos les corresponde velar por el adecuado desarrollo estratégico del servicio. Para ello, obviamente, la ley les entrega las herramientas necesarias para que lo puedan realizar, sobre todo en cuanto a la participación, además de velar por el avance del plan estratégico local y realizar una serie de recomendaciones al plan anual. No hay que olvidar que el plan estratégico local y el plan anual necesitan de la aprobación del Comité Directivo. En cambio, los consejos locales contemplan la participación ciudadana, tienen una función completamente distinta, por eso estamos trabajando con ellos para que puedan encausar las necesidades que hoy puedan levantar de cada uno de los estamentos que ellos representan.

En cuanto a lo que dice específicamente el mandato, todos los concursos que tienen que ver con el nombramiento de directores y ejecutivos, donde se incluye la participación del Ministerio de Educación, de la Dirección de Educación Pública, de la Dirección Nacional del Servicio Civil, del Consejo de Alta Dirección Pública, de los comités directivos y de los Consejos Locales de Educación, se han realizado todos bajo el proceso que en particular determinó el legislador para este tipo de concursos, de acuerdo con las normas aplicables a este nombramiento establecido en la ley N° 19.882.

Lo primero que hay que decir es que están los 11 decretos de toma de razón por la Contraloría General de la República, que es el primer control de carácter normativo que nosotros tenemos, los cuales dan cuenta de que el proceso se hizo como debía hacerse.

Ahora, el organismo contralor, a raíz de una consulta que hizo el Comité Directivo de Valparaíso, que además fue denunciado en la Comisión de Educación el año pasado, dictamen N° 70.394, de 2021, establece que de acuerdo con el expreso tenor de la ley N° 21.040, el rol del Comité Directivo Local, en diversas materias de carácter propositivo, está la elección del director ejecutivo. Ello, por cuanto en ese

momento se estaba cuestionando la elección del director ejecutivo de Valparaíso, lo que ratifica el organismo contralor -lo pueden leer en el dictamen para no extenderme-; sin embargo, el proceso se hizo de acuerdo con lo que establece la ley, por lo que está correcto -dictamen N° 70.394-.

Por lo tanto, no hay ilegalidades respecto del exdirector ejecutivo de Valparaíso, que fue ratificado este año por el organismo contralor respecto de ese tema.

En cuanto a los planes estratégicos, la función de acompañamiento técnico-pedagógico, la Dirección de Educación Púbica se hace a través de este modelo de apoyo técnico-pedagógico, modelo que viene desde el período 2018, que hemos ido formulando y mejorando aún más. Se trata de un modelo que apunta a la formación y desarrollo de capacidades, el cual impacta directamente en lo que ocurre en la sala de clases. El núcleo pedagógico está directamente en la sala de clases, tiene distintas etapas, y a través de esto la DEP hace dos cosas: estrategias de asesoría directa y estrategias de trabajo colaborativo y en red.

Si se fijan, lo que está en azul corresponde directamente a lo relacionado con el marco para la buena dirección. Ahí pueden apreciar las dimensiones y subdimensiones de este modelo; es la forma en que trabajamos directamente en el apoyo técnico-pedagógico.

Este es un resumen de lo que se hizo el año pasado, principalmente en cada uno de los siete servicios locales que estaban en funcionamiento. Ahora bien, el trabajo que se hace en etapa de implementación es completamente distinto, tiene que ver con el diagnóstico. Principalmente, el objetivo que tiene es en cuanto a cómo yo, a través de la instalación de capacidades en los distintos actores de los servicios locales, voy mejorando cada vez más lo que ocurre dentro de la sala de clases.

¿Por qué los planes estratégicos y pedagógicos son importantes? Recordemos el punto 10 del mandato, que dice relación con la ausencia de planes estratégicos-pedagógicos.

Cabe señalar que todos los años, los equipos de la Unidad Técnico Pedagógica de los servicios locales tienen que diseñar sus planes globales de apoyo, los cuales se desprenden de los planes anuales que están en la misma ley. Ahí se describe todo el trabajo -y el foco es pedagógico ciento por ciento- que se realizará en cada uno de los establecimientos educacionales.

Si se fijan en este modelo, tiene una etapa de diagnóstico. Cada uno de estos planes globales tiene dos partes: una es específica para cada escuela, corresponde a lo que es la escuela propiamente tal, plantea una necesidad o un déficit, y otra es más bien general, aquellas necesidades o deficiencias que se levantan como algo transversal para cada uno de los servicios locales.

Hay líneas de formación, de capacitación y de necesidades que son transversales al sistema red de la nueva educación pública. En ese caso se trabaja en conjunto con los servicios locales; en el fondo, hay intereses o necesidades que son compartidas.

Otra de las cosas importantes es todo lo que hemos realizado en la formación respecto de lo que fue la educación no presencial del año pasado. Se trabajó y capacitó a cerca de 1.300 docentes que voluntariamente se quisieron inscribir en todo lo que fuera plataformas educacionales no presenciales.

Acá podemos apreciar un cuadro que muestra cuántas escuelas participaron y que tenían las condiciones para hacerlo, por ejemplo, la conectividad. Esto corresponde al comienzo del año pasado con el tema de la pandemia, por eso algunos tienen siete y otros más. También hay que considerar las distintas iniciativas que tenía cada establecimiento educacional.

Esto es lo que hemos podido levantar respecto de nuestras escuelas en insuficiente medio bajo, cómo estaban y cuál es la valoración positiva, es decir, cómo han ido saliendo de lo insuficiente y cómo han ido avanzando en el tiempo. Nos tiene bastante contentos porque, independientemente de –aunque no es mucho- un contexto de pandemia y del estallido social, pese a la cantidad de clases que se perdieron, que las tenemos cuantificadas por los paros de profesores, hemos logrado sacar escuelas de niveles insuficientes, con un trabajo bastante sistematizado y focalizado en cada uno de los servicios locales. Hay unos que tenían más niveles de insuficiencia y hay otros que tenían menos escuelas. Si se fijan, Costa Araucanía tiene menos, debido al gran porcentaje de ruralidad que tiene, y el trabajo en la ruralidad muchas veces favorece el trabajo uno a uno y, por otra parte, recuerden que tampoco todos tienen medición del Simce, de acuerdo con el número de alumnos que tengan.

Esos son los instrumentos asociados hoy, que están dados en la ley N° 21.040. Tenemos bastantes instrumentos de gestión, son los instrumentos y cómo se alinean a la Estrategia Nacional de Educación Pública, que, tal como he mencionado, es el trabajo que realizamos el año pasado: cuáles son los instrumentos que tiene la DEP, cuáles son los instrumentos que tiene el servicio local y cuáles son los instrumentos que tienen los establecimientos educacionales, y cómo todos esos instrumentos finalmente se van asociando.

El año pasado hicimos una especie de alineación del sistema completo para que hubiera coherencia entre cada uno de los instrumentos. ¿Por qué? Porque no hay que olvidar que la Estrategia Nacional de Educación, de acuerdo con lo que contempla la ley, se supone que debería haber sido lo primero, pero no lo fue. Tenemos claro que fue aprobada el año pasado y los servicios locales ya contaban con la planificación estratégica, el plan estratégico local, el PAL, y el Plan Anual.

Por lo tanto, se tuvo que hacer todo un trabajo de alineación, que ha sido bastante interesante, y también como los PME se van alineando a todo este sistema, y al final uno ve que queda un sistema alineado en función de esta hoja de ruta, que es la Estrategia Nacional de Educación Pública.

Para que ustedes tengan una idea, esta lámina muestra cómo se han ido moviendo por el Programa de Mejoramiento de Gestión, en el fondo, el cumplimiento que ha tenido cada uno de los servicios locales, cómo el Convenio de Desempeño Colectivo de 2020. Ustedes podrán ver que los porcentajes son bastante altos, el trabajo que hacen los equipos de planificación, y sobre todo los servicios locales, en cumplir aquellos indicadores que son claves para el tema administrativo. Ese trabajo ha sido bastante bueno. Por lo menos, a nosotros nos tiene bastante contentos.

En este caso, lo que queda es el famoso asunto del traspaso educacional que, desde mi punto de vista, es uno de los grandes temas que tenemos y que es sumamente sensible, que es el que toca la cuestión de la sobredotación, tema que no es de ahora, así que cualquier estudio que haya de la administración municipal en Chile habla de cómo, mientras disminuía la matrícula, iba aumentando la sobredotación en los establecimientos educacionales.

Les estoy mostrando solamente un extracto en esta presentación, pero es muy importante tener claro que el tema de la baja profesionalización y su falta de capacidades no es de ahora, sino que viene desde hace mucho tiempo y está sumamente diagnosticado.

Por otra parte, no es un tema menor lo que en 2014 se establece respecto de que el 40% de la dotación de DAEM, DEM y corporaciones de los municipios, cuenta solo con educación media completa, mientras que únicamente el 38% tiene credencial universitaria.

Aparte de eso, hay otro estudio que también establece y los divide por la *expertise* que tienen, y por el trabajo y el foco que tienen los municipios y las

corporaciones, la *expertise* educacional es baja. Hay mucha más *expertise* administrativa que educacional.

Esto se trata de un ejercicio que hemos estado trabajando con Mario Uribe y con líderes educativos respecto del tema de instalación de capacidades en los servicios locales, y establecer como base cuál es nuestro punto de partida o cómo estamos hoy, si hemos logrado avanzar o si no lo hemos hecho.

Cuando se instalan capacidades, lo primero que llama la atención es cómo la identidad y las características de lo local deben ser un factor predominante. Está muy establecido en la ley, pero visualmente es muy impresionante cuando uno mira cuatro servicios locales desde 2018 y mira la diferencia que tienen en cuanto a dispersión de establecimientos educacionales y, por lo tanto, las características o los desafíos que tendrá cada uno de ellos. Podríamos hacer lo mismo.

Ahora bien, hay que crear cultura en los servicios locales. Es un servicio público; eso ya es distinto a lo municipal, a lo propio de la corporación, que tiene un giro único, que es educacional. También es diferente. Por lo tanto, la primera gran tarea de sensibilización y de todo lo que implica, cuando se empieza a consolidar el traspaso educativo, que es inmediatamente después de que se hace el traspaso, cuando los servicios locales entran en régimen, es que hay que crear una cultura de servicio local.

¿Cuáles son los grandes desafíos? Primero, que haya un agrupamiento intenso, estable y continuo de muchas personas que tienen distintos orígenes y experiencias en el ámbito educativo, que son de diversas comunas, que hay un nuevo sistema, hay nuevos integrantes. Y lo segundo, es que trabajan a partir de un conjunto de propósitos, metas y objetivos, y códigos de comportamiento, que son diferentes a los que ellos estaban acostumbrados.

En el caso de la Dirección de Educación Pública y de los Servicios Locales de Educación Pública, al estar en el marco Estado, es decir, al ser servicios públicos sostenedor -no hay ningún otro que lo sea-, se integra a lo que la literatura llama organizaciones normativas. Por lo tanto, hay muchas cosas que están reglamentadas. Uno podría decir: bueno, tenemos claras las reglas del juego. Es verdad, pero no hay que olvidar que los municipios no son servicios públicos y las corporaciones tampoco, y este cambio y esta normativa generan, muchas veces por desconocimiento, bastantes problemas en la práctica. Eso es bien relevante. Son cosas que ya hoy tenemos levantadas. Si ustedes quieren, les puedo hacer llegar el estudio y el informe que hicimos de este trabajo que duró todo el 2020.

Obviamente, tenemos que entrar a hablar de un liderazgo adaptativo para que esto se pueda empezar a mover y este traspaso se pueda consolidar para que el servicio local empiece a funcionar con ese giro único educacional y, sobre todo, para que pueda construir una nueva cultura, con una promesa que es distinta a la municipal, y eso es así. Se tiene que pensar que por más de 30 años hemos estado acostumbrados a hacer las cosas de una forma y ahora hay que hacerlas de una forma distinta, y eso requiere un cambio adaptativo, acá no hay nada técnico, salvo lo normativo, como sabemos, y tenemos que movilizar a las personas para abordar estos desafíos, que son difíciles y complejos, sobre todo en un inicio. No es fácil. Los primeros dos años de un servicio local ya en funcionamiento no son fáciles, y esto es lo mismo. En el fondo, cómo uno forma una nueva cultura, porque uno dice que es cosa de traspasar. Sí, se traspasan. Solo piensen una cosa, nosotros traspasamos todos los establecimientos educacionales. Se traspasan los jardines, las escuelas y los liceos con los funcionarios que hay dentro, los cuales están acostumbrados a hacer las cosas de una forma distinta, y así ha sido por mucho tiempo, porque hay mucha práctica que está arraigada. Además, ellos están acostumbrados a rendir cuentas -por así decirlo- o a obtener ciertas cosas desde una cultura municipal, y ahora tenemos que trabajar bajo un alero de servicio público, con normas legales y presupuestarias.

Tenemos un presupuesto dado, y eso lleva un tiempo adaptarse a esta nueva institucionalidad, como, por ejemplo, cuando uno conversa con los directores de los establecimientos educacionales y trata de desarrollar el tema de la autonomía, de que se hagan responsables de los recursos, no es fácil. No es fácil decir a cada establecimiento educacional que tiene un presupuesto asignado para el año o que se va a funcionar de tal manera.

Eso requiere mucha planificación y hemos trabajado mano a mano con ellos en el diseño de los Planes de Mejoramiento Educativo (PME), y no tienen la flexibilidad a la cual estaban acostumbrados. Eso es muy importante, porque esto es parte del proceso que implica esta reforma estructural.

Aquí, puse algunos ejemplos para que entendamos cómo es antes y después del traspaso. Por ejemplo, ¿qué predomina en el caso de docentes, de asistentes de la educación y de funcionarios de jardines infantiles y posteriormente al traspaso?

Al respecto, solo miren el régimen laboral. En el fondo, si tengo Estatuto Docente, también entra el Estatuto de los Asistentes de la Educación Pública. Si observamos los jardines infantiles VTF, tienen Estatuto de Asistentes de la Educación y ley N° 20.903, pero entra el Estatuto para el Personal de Jardines Infantiles VTF. Por lo tanto, hay un cambio muy importante y que muchas veces no es manejado ni por los mismos funcionarios ni por los directores, y en eso hemos estado. Primero, hay que capacitarlos y entregarles la información.

Este es el caso de los funcionarios DAEM: el régimen laboral, Código del Trabajo, Estatuto Docente y ahora entramos a Estatuto Administrativo y Estatuto Docente, y no hay Código del Trabajo. Entonces, actualmente hay códigos diferentes, lo que, obviamente, es importante tener claro.

Por otra parte, todo lo que se puede leer sobre la discusión de la ley y por qué pensar en un sistema así es porque queríamos fortalecer un nivel intermedio. En cualquier nivel intermedio, si se mira a nivel educacional aquellos que sí funcionan bien, se necesita un conocimiento específico profundo a nivel de especialista en educación, en planificación y en compra bajo la normativa de un servicio público. Son entidades únicas, no hay otra igual, no hay hacia dónde mirar. El servicio público existe, pero no es sostenedor.

Por otra parte, en cuanto a la gestión de la contingencia, pasamos “apagando incendios”. Hay un número importante de establecimientos educacionales por cada uno de los servicios locales de educación. Por lo tanto, ya no se trata solo de que si una municipalidad tenía diez o veinte colegios, sino que actualmente un servicio local de educación puede tener sesenta, entonces pueden ocurrir sesenta cosas al mismo tiempo. Por eso nos abocamos a mejorar todos los procesos y procedimientos con una mirada estratégica muy importante.

Ahora bien, en otra oportunidad hablamos sobre cuántos funcionarios iban a quedar sin su fuente laboral. Si uno retrocede a la dictación de la ley, en ese momento la ministra Adriana Delpiano estimó que 4.000 funcionarios administrativos de los DAEM y DEM y de las corporaciones podrían quedar fuera del sistema, y el gobierno se ha comprometido a pagar las indemnizaciones legales correspondientes.

En ese sentido, desde mi punto de vista y de lo que he aprendido durante todo este tiempo, es clave fortalecer las herramientas que tenemos previas al traspaso. Cómo hacemos hoy para que realmente se pague esa indemnización, para que finalmente los alcaldes firmen los actuales convenios de transición y para que los municipios se empiecen a preparar. Incluso, algunos de ellos se han acercado a preguntar sobre cómo pueden empezar a trabajar, pero otros botan el lápiz. Eso es lo que pasa en la realidad.

Teniendo claro aquello –que es un poco lo que se leyó sobre Punta Arenas-, se ha planteado que todos se traspasan con sus derechos adquiridos como trabajadores, pero sin derecho a negociación colectiva de por medio, porque son

funcionarios de la Administración Pública. Por eso, con las corporaciones se hace un poco más complejo y no se entiende, puesto que, por una parte, se dice que se traspasan con todo, pero, por otra, falta poner el signo “coma” en la parte donde se contemplan ciertos beneficios, respecto de los cuales obviamente la Contraloría General de la República ha tendido a decir que no ha lugar.

En cuanto a la sobredotación, creo que en ese tema hay dos miradas importantes a considerar: una es la sobredotación que tiene que ver con los docentes y las horas del plan versus el plan que tiene cada uno de los colegios. Lo primero que hoy hacen los servicios locales de educación es ajustar ese plan, es decir, tengo este plan de estudios por cada establecimiento lo que es igual a tal cantidad de horas. Lo primero que se ajusta son las horas. Entonces, muchas veces uno escucha que hay despidos masivos, pero no lo son, porque lo que se hace es ajustar las horas. Por ejemplo, en un servicio local que tiene cinco comunas muchas veces nos encontramos con la realidad de que hay docentes que trabajaban en esas mismas comunas, por lo tanto, si uno sumaba las horas, eran mucho más de las 45 horas que hoy pueden tener. Por ende, hay que ajustar a ese profesor, primero, a que es un solo sostenedor y, segundo, a que quede sujeto a la normativa que requiere de acuerdo con lo que establece el Estatuto Docente.

Lo otro tiene que ver con los asistentes de la educación, y para ello se requiere otro ajuste de dotación muy distinto al de la dotación docente.

En el caso de los asistentes de la educación, unos de los grandes problemas que hoy podemos tener es la sobredotación que encontramos principalmente en el PIE (Programa de Integración Escolar). Obviamente, el financiamiento vía PIE no permite mantener esa sobredotación, que, por lo demás, es donde hoy tenemos los mayores problemas.

¿En qué estamos trabajando? Sobre todo en 2020 se ha hecho un trabajo bastante objetivo para crear modelos o más bien criterios objetivos de ajustes de dotación. Hoy el gran porcentaje del presupuesto se destina principalmente al pago de remuneraciones. Obviamente, todos sabemos que las subvenciones tienen un límite y se gastan completamente. Estamos trabajando en la revisión establecimiento por establecimiento, director por director, etcétera.

En la siguiente lámina aparecen todos los dictámenes que tenemos hasta hoy. Cada vez que un funcionario tiene alguna duda nosotros, y en general los servicios locales de educación, le pedimos que vaya a hacer las consultas a la Contraloría General de la República y otras veces las hemos hecho nosotros.

Otro tema que también es bastante relevante son las deudas originadas por la gestión municipal de la educación pública, sobre todo el problema de Cerro Navia.

Cabe recordar que el dictamen N°4.282, de 2019, estableció -respecto de la deuda previsional generada por la aludida Corporación Municipal de Desarrollo Social de Cerro Navia- que el párrafo 6° de las disposiciones transitorias de la ley N° 21.040 -en especial los artículos trigésimo cuarto, en relación con el artículo trigésimo-; el mensaje presidencial de aquella ley –punto N° 9 del acápite III. Objetivos del proyecto-, entre otros, son concordantes en orden a que las deudas originadas antes del traspaso del personal a un servicio local son de cargo del municipio o corporación municipal de que se trate.

Ahora bien, sabemos que hay un importante déficit financiero en bastantes municipalidades y corporaciones de nuestro país. Ese es uno de los grandes diagnósticos que se plantean al momento de pensar en una reforma de estas características. Por lo tanto, una de las cosas que resguardó la ley es cómo y de qué forma se paga finalmente.

En la sesión pasada se habló de la forma en la que Cerro Navia había levantado las auditorías realizadas. Si bien se hicieron las auditorías, estas no cumplían ni con la calidad de la información ni con la información requeridas, por lo

tanto se tuvieron que hacer nuevas auditorías para delimitar claramente la situación financiera de la corporación.

Asimismo, la ley establece que el ministerio debe, en este caso, pagar las deudas previsionales que sean de educación. No se pueden pagar deudas previsionales que no sean de trabajadores de la educación. Llegar a depurar esa información fue un trabajo bastante largo, nos demoramos mucho tiempo en el caso de Cerro Navia.

El primer informe, citado el 23 de febrero de 2018, determinaba el total de los pasivos de la corporación sin acotarse aquellos que se podían pagar por el Ministerio de Educación. En efecto, las deudas que puede construir el ministerio son las remuneraciones previsionales del personal, de las que parte importante -como señaló el señor Egaña- fueron pagadas en su administración, quedando la deuda previsional que se pagó como se detallará a las Administradoras de Fondos de Pensiones (AFP), mediante el decreto exento N°732 , de 2020, del Mineduc.

Ahora bien, dicho informe no da cuenta de la deuda generada y mantenida por dicha corporación de forma desagregada por funcionario y por eso no se pudo pagar, principalmente, porque venía mezclada gente de la salud y otros que no eran profesionales ni asistentes de la educación.

Entonces, como había una ambigüedad en ese informe y diversas dificultades de análisis, la Dirección de Educación Pública contrató una auditoría externa sobre los procedimientos empleados en la elaboración del informe financiero, la que fue realizada por la empresa Baker Tilly Chile, que dio cuenta de la falta de registro de las deudas que permitieran acreditar los montos adeudados. Se identificó una mayor deuda que la informada, problemas con el cálculo, intereses y reajuste, entre otros, lo que llevó a que el informe financiero fuera rectificado por la corporación en innumerables ocasiones, no fue solamente una.

Además, la información comunicada ha debido ser validada por otras instituciones, trabajo que hemos hecho desde la Dirección de Educación Pública junto a la Subsecretaría de Previsión Social para desagregar la información de la deuda de la corporación, al menos con las distintas administradoras de fondos de pensiones.

Por otra parte, en cuanto a las deudas, hubo 816 RUT informados en el informe financiero que no se encontraban en la base estatal del SIGE, situación que fue informada desde la DEP a la corporación.

Lo comentado en la presentación da cuenta del desorden financiero y administrativo que tenía la corporación municipal, el cual ha requerido un tremendo trabajo, detallado, no tan solo de nuestra parte, sino también del ministerio, de la Superintendencia de Pensiones y de funcionarios de la misma corporación, que nos han ayudado mucho en este trabajo. Evidentemente, esto ha impedido proceder al pago completo de aquellas deudas, que corresponden a funcionarios docentes o asistentes de la educación.

Así, a los efectos de pagar la deuda de la Corporación de Cerro Navia, en 2018 se celebró un convenio de transferencia de recursos entre dicha Corporación y el ministerio, aprobado por resolución N° 1.024, que asignó a la corporación un monto equivalente a 1.349.900.000 pesos, alcanzando una ejecución de 961.000.000 de pesos, quedando un saldo pendiente de ejecución por las razones anteriormente expuestas, de aproximadamente 388.000.000 de pesos.

Además, y pese a todas las complejidades que ha significado pagar las deudas de la corporación municipal, en virtud del artículo trigésimo cuarto transitorio, se han pagado todas aquellas deudas que han podido ser verificadas, las que en la actualidad ascienden a 2.477.878.000 pesos.

En este orden de ideas, y considerando que parte de las deudas no han sido acreditadas, esta Dirección se encuentra imposibilitada de definir cuál es el monto

exacto de la deuda, valores que además se están actualizando, como también se informó al órgano contralor en su oportunidad, lo que, como se ha reiterado, no es responsabilidad de la Dirección de Educación Pública, no pudiendo endosar la responsabilidad por el no pago de las obligaciones por parte de la corporación al Nuevo Sistema de Educación Pública, sino que corresponde perseguir las responsabilidades sobre el sostenedor anterior. Mientras no tengamos claridad de la información y no podamos corroborar que esos RUT corresponden a trabajadores docentes y asistentes de la educación, como Dirección de Educación Pública, de acuerdo al mandato establecido en la ley, es imposible que podamos pagar la diferencia.

Además, se hace presente que las normas de pago establecidas en el artículo trigésimo cuarto transitorio de la ley no contemplan normas de ejecución, circunstancia que hizo necesario efectuar una solicitud de pronunciamiento a la Contraloría General de la República por el Ministerio de Educación, el 1 de abril de 2019. El dictamen N° 7.588, que aclaró las condiciones para efectuar el pago de obligaciones pendientes en la gestión municipal de la educación, fue emitido el 7 de abril de 2020, es decir, un año después de que el ministerio realizó la solicitud.

Luego de dicho dictamen, distintas agrupaciones gremiales y un grupo de diputados solicitaron la reconsideración de la decisión del órgano contralor, solicitud que fue desestimada mediante el dictamen N° 68.317/2021, emitido el 15 de enero de este año. Lo mencionado deja de manifiesto que la certeza acerca del mecanismo de pago definido por ley se encuentra clarificada recién a comienzos del año en curso.

El pronunciamiento de la Contraloría, precisamente referida a la materia objeto del mandato, y que solicitó informar nuevamente en la comisión con fecha 1 de marzo de 2020, que fue reiterado recientemente, establece que los Servicios Locales de Educación Pública no se encuentran facultados para pagar deudas de la administración anterior y que el Mineduc solo puede pagar aquellas obligaciones para las que se encuentra expresamente autorizado. Por lo tanto, no nos corresponde pagar multas, recargos u otros conceptos aparejados, las que son de exclusiva responsabilidad municipal.

En este contexto, las auditorías que se han realizado no tienen por objeto retardar el pago u otro similar, sino pagar lo que debemos, en cumplimiento del mandato establecido en la ley N° 21.040, que, además, deben estar debidamente documentadas, en los términos que exige la normativa, reiterándose en este aspecto que esto solo refleja el desorden administrativo y financiero del anterior sostenedor, del que esta administración ha debido hacerse cargo.

Este es un tema bien importante y que ha requerido un trabajo bastante exhaustivo de todas las instituciones que he mencionado, desde la Contraloría, el Ministerio de Educación, la Superintendencia de Pensiones, etcétera, para llegar a depurar los números. Obviamente, tenemos claro que son situaciones bastante similares a las que hoy estamos encontrando en Valparaíso y San Fernando. Por eso, en esos casos se ha venido haciendo un trabajo desde el año pasado y los informes financieros de ambas corporaciones también fueron observados formalmente por la Dirección de Educación Pública, para ser rectificados y entregaran la información con la claridad que hoy necesitamos.

Pero, paralelamente, ya empezamos a trabajar con la Superintendencia de Pensiones para que nos informe sobre la deuda previsional que tienen las corporaciones de Valparaíso y San Fernando, en función de la información entregada por la Dirección de Educación Pública.

Ahora bien, la información que tenemos sobre la deuda de pensiones total de las dos corporaciones es de aproximadamente 2.600.000.000 de pesos, que corresponde a un total de 14.394 registros identificados. En cuanto a la sobredotación, ustedes ya lo tienen claro.

En cuanto a los planes “Movámonos por la Educación Pública” y “Pro Retención”, hay algunos servicios locales que ejecutaron más y otros menos, por diversas o múltiples razones. Hay diversas razones en el caso de aquellos que tuvieron una ejecución más baja, sobre todo en el plan “Movámonos”.

Y aquí una recomendación que es bien importante. El Consejo de Evaluación del Sistema de Educación Pública, que funciona desde el 2018, todos los años emite un informe de seguimiento que nos estrega información, y también al Sistema de Dirección de Educación Pública o al sistema de los servicios locales, para mejorar y considerar aquellas cosas que debemos desarrollar. Son insumos fundamentales a considerar, sobre todo dado el mandato de la comisión. Acaba de salir el informe anual 2020, y el 31 de marzo se entrega el informe intermedio. También creo que es importante, porque el Consejo de Evaluación ha hecho bastantes estudios, que son insumos para emitir estos informes.

En todo caso, ha sido poco el tiempo para esta presentación, por cuanto debería haber profundizado cada uno de los puntos del mandato, porque cada uno es multifactorial. La implementación de un nuevo sistema y una reforma de las características de la que hoy estamos haciendo, siempre requiere de revisión. Recién llevamos tres años y once servicios locales instalados. Hemos ido de menos a más, y creo que hay una experiencia de aprendizaje tremenda entre la primera cohorte y la de 2020. En ciertas cosas uno tiene claridad a estas alturas y obviamente es puro aprendizaje para lo que viene hacia adelante.

Ahora bien, los servicios locales que han ido mejorando y consolidando su traspaso, porque también han tenido una mejor calidad, se debe a que los sistemas están funcionando muy bien. También creo que sería interesante mirar los avances que existen al respecto, no solo aquellas cosas que nos faltan por hacer, que son múltiples, pero creo que la nueva educación pública tiene avances que son interesantes de mirar en estos tres años. Tampoco debe olvidar que estamos frente a un cambio de institucionalidad. Es una institución nueva que tiene que entrar a dialogar con instituciones que ya están en el sistema, por lo que resulta complejo lo que hoy estamos haciendo, pero realmente vale la pena. De eso, no hay ninguna duda al respecto.

De todas maneras se deben entregar más mecanismos de traspaso. Mientras más tengamos, les aseguro que estos serán cada día mejor. Desde que estoy a cargo de esta dirección, un año y medio, aproximadamente, nos hemos enfocado en fortalecer y en consolidar los traspasos de los servicios locales que estaban en funcionamiento en el año 2018.

Por ello, resulta interesante ver los informes del Consejo de Evaluación, porque también van mostrando los avances y los aspectos que todavía debemos mejorar, en general. Ojalá hoy tuviéramos esa mirada de consenso hacia adelante en donde todos pudiéramos estar de acuerdo en lo mismo. Si aunáramos las voluntades y esas voluntades miraran hacia adelante, les aseguro que esto avanzaría mucho más rápido de lo que ha estado avanzando hasta el día de hoy.

Voy a referirme a los espacios de participación, cuyo tema sale reiteradamente. Entonces, voy a tratar de hacer un barrido con todos los espacios de participación que establece la ley N° 21.040, y cómo algunas de estas instancias se cruzan con otras normativas, que, al ser los servicios locales servicios públicos, están regidos por esa normativa y muchas veces no se entiende por qué no se puede hacer tal cosa, o finalmente se interpreta de una forma distinta.

Lo primero es un ejercicio que hemos hecho bastante, porque creo que una de las cosas que hemos ido aprendiendo y de lo que nos queda mucho por avanzar tiene que ver con el tema de la participación. Entonces, lo que hemos hecho con las comunidades es aclarar el concepto de participación; ¿qué vamos a entender por

participación y qué niveles de participación hay de acuerdo con las distintas instancias que tenemos?

Hemos llegado a un consenso con las comunidades de padres y apoderados, con los profesores, con equipos directivos, con los consejos locales y con distintos estamentos que participan en la nueva institucionalidad, en que la participación es el involucramiento de las personas en los procesos de toma de decisiones públicas. Sin embargo, en algunas ocasiones, si uno mira el consejo local y el comité directivo, en algunos casos son resolutivos y en otros casos no son resolutivos.

Entonces, va cambiando la participación de acuerdo con la instancia y con las decisiones que se adoptan, y vamos desde una informativa, consultiva, propositiva, resolutiva y ejecutiva. Son distintos niveles de participación y no siempre se dan todos en el mismo momento.

Por lo tanto, ¿cuáles son los espacios de participación que hoy están en la ley y que surgen y vienen en diálogo con las instancias de participación que ya tiene el sistema educativo? Me refiero a los consejos escolares dentro de los establecimientos educacionales y a los centros de padres y apoderados como instancias que ya son participativas y de gobernanza desde hace mucho tiempo.

Aparece el Comité Directivo, los Consejos Locales, la Conferencia de Directores, tema que no hemos tocado y que desde mi punto de vista es muy relevante, sobre todo en el desarrollo del liderazgo de los directores de establecimientos educacionales, las coordinaciones regionales en materia de educación pública y otras instancias que tenemos y que vienen dadas principalmente por los instrumentos señalados en la ley, que son de gestión.

El Comité Directivo, que ha sido un gran tema -diría que ha sido de los más complejos actualmente en cuanto a la instalación de la nueva institucionalidad y a la instalación de estos nuevos sistemas de gobernanza-, tiene un rol de gestión importante, a diferencia del consejo local, y lo dice la función propiamente tal o el objetivo para el cual fue creado, y desde mi punto de vista tiene dos cosas:

En primer lugar, tiene que velar por el adecuado desarrollo del servicio local y todo lo que implica, desde lo financiero hasta el cumplimiento de su objetivo pedagógico. Hay un tema de rendición de cuentas del director ejecutivo o directora ejecutiva ante la comunidad local. Ahí están las cuentas públicas, el avance del plan estratégico local y el plan anual. La rendición de cuentas que hace el director ejecutivo ante el Comité Directivo.

En segundo lugar, hay otra función bien relevante, que es la vinculación del Servicio Local con las instituciones de gobierno y territoriales; es decir, ellos son representantes de instituciones de gobierno, tanto de los alcaldes como del gobierno local, y ese vínculo es responsabilidad del Comité Directivo.

Así se constituye un Comité Directivo, porque uno dice muchas veces por qué nos demoramos tanto, porque todo esto hace que la constitución del Comité Directivo con todos sus representantes se demora más o menos ocho meses. Está en la carta Gantt que nosotros tenemos y en cada una de las actividades que se tienen que dar, sobre todo porque hay representantes de los centros de padres y apoderados que tienen que ser elegidos. Entonces, hay una etapa informativa, etcétera. Todo esto tiene que pasar antes de que haya un Comité Directivo.

Por lo tanto, si uno lee la ley, esta dice claramente que el Comité Directivo tiene funciones, pero hay funciones que no ha podido realizar, porque no han estado constituidos, porque los plazos simplemente no dan, sobre todo en el caso de los de 2018, tema que ya hemos conversado bastante en profundidad, por el poco tiempo que tuvieron para conformarse.

Esto es la participación electoral que tuvieron los comités directivos en cuanto a la elección de los apoderados. Si ustedes se fijan en la fecha, desde la fecha de las

elecciones, cuando se llama a elecciones para los apoderados, acuérdense de que los otros son nombrados como representantes del alcalde o del gobierno regional, pero aun así cuesta que los alcaldes se pongan de acuerdo, porque tiene que ser un representante y son dos comunas. Y en el caso del gobierno regional, no es que el nombre salga inmediatamente. Acuérdense de que además tiene que cumplir algunos requisitos.

Eso es un poco, para que ustedes sepan cuántos apoderados votaron para elegir a sus representantes, donde tuvimos más participación y donde tuvimos menos participación. Se establece que hay que tener el 33% de participación para que sea elegido con representatividad.

Hoy, los once comités directivos están funcionando con todos sus representantes; hay que hacer algunos cambios por renuncia de algunos representantes, pero en general hoy están funcionando con sus sesiones, tal cual está establecido.

¿Cuáles son las irregularidades que se han denunciado respecto del funcionamiento de los comités directivos? Principalmente, se han denunciado ciertas irregularidades en cuanto a la propuesta o a los elementos relativos al perfil profesional del cargo de director ejecutivo. La terna del nombramiento, la gran discusión que teníamos y que levantó en su momento el Comité Directivo Local de Valparaíso era si ellos podían declarar desierto el cargo, y las propuestas, este informe que tienen que elaborar para el convenio de gestión educacional. El informe que llega a la Dirección de Educación Pública, es el insumo para elaborar ese convenio de gestión.

Entonces, quiero mostrarles cómo se realiza este proceso, qué hacemos para, por ejemplo, el tema del perfil. ¿Cómo se construye ese perfil? Les voy a mostrar claramente cómo se construyeron los perfiles de 2018, porque esto lo hemos ido mejorando. Pero así es el proceso, y en este proceso participan un representante del Ministerio de Educación, del Servicio Civil y de la DEC, y en función de eso se envían ciertas instrucciones al Comité Directivo, para que entregue ciertos insumos para poder confeccionar este perfil, y esto es lo que pasó.

No hay que olvidar que existe un perfil de director ejecutivo, que tiene cierta normativa, porque es Alta Dirección Pública, y hay ciertas cosas que vienen dadas desde ahí, cuáles son las sugerencias y qué se presenta al final. ¿Qué se hace? Esto es el cargo, y está en todo perfil de Alta Dirección Pública. Hay una misión del cargo y requisitos legales.

Por lo tanto, hay una misión del cargo, se les manda este perfil a los comités directivos y vienen sugerencias. Y aquí está lo que pasó con Puerto Cordillera y con el Servicio Local de Costa Araucanía, el Comité Directivo, en ese momento, que es lo mismo que ha pasado con los de 2019 y con los de 2020.

Ellos mandan sugerencias y posteriormente se les envía un informe de por qué se incorpora la sugerencia o de por qué no puede ser incorporada. La mayoría de las veces que no se incorpora la sugerencia es por un requisito que está en la ley. No se puede pasar por sobre la normativa. En ese caso, nos ha costado harto que entiendan que hay ciertas cosas que están por normativa. Por eso, nos encontramos en una etapa de evaluación intermedia, trabajando con el Servicio Civil en el tema. A lo mejor, se podrá concluir que no eran necesarios tantos años de experiencia. Hoy, los once directores ejecutivos nos han demostrado que debería ser menos, de acuerdo con todo lo que hemos recogido. Pero esta es la forma en que se trabaja. Por ejemplo, en la presentación podemos observar las definiciones estratégicas del servicio, como son la misión institucional, los objetivos estratégicos y los principales productos estratégicos, en fin. Esto es lo que llega.

No quiero detenerme mucho en eso, pero quiero demostrarles que hay un proceso de trabajo, de interacción, entre los distintos entes y estamentos que tienen

la tarea de revisar el perfil. Sin embargo, hay ciertos elementos que no se pueden incorporar, principalmente escenarios, por un tema de normativa. En el caso de 2018, los comités directivos no hicieron sugerencia alguna, no así en otros años.

Aquí por ejemplo, en funciones estratégicas, están las observaciones que hicieron Costa Araucanía, Barrancas y Puerto Cordillera. Hay comentarios y luego viene una respuesta de parte de ellos. No se entiende, pero se incorpora la sugerencia cuando se puede incorporar y se ajusta a la normativa. Uno va a haciendo la relación respecto de la función estratégica de que se trate y luego se van marcando en distintos colores, como se puede observar en el recuadro.

También, está todo el tema del propósito del cargo, los desafíos y lineamientos del cargo para el período. En el fondo, ocurre lo mismo en los servicios locales de Costa Araucanía, de Barrancas y de Puerto Cordillera; están las sugerencias. Por ejemplo, en el caso de Costa Araucanía, la primera sugerencia es “Evaluar el alcance” y la segunda “Se incorpora al perfil”; en el caso de Barrancas, una sugerencia es “Se incorpora” y otra “No se considera, puesto que la sugerencia está incompleta. Se debió plantear propuesta de redacción del nuevo desafío y lineamientos”, y finalmente, en el caso de Puerto Cordillera, las sugerencias 1 y 2 son “Se incorporan al perfil” y la 3 y la 4 “evaluar”. En conclusión, van distintas cosas.

Entonces, no corresponde decir que no se toman en cuenta, porque el proceso se ha hecho con todas las selecciones de los once directores ejecutivos que tenemos en curso.

Lo mismo ocurre respecto de los desafíos y lineamientos del cargo para el período. Por ejemplo, en el caso del servicio local de Puerto Cordillera, la respuesta a la sugerencia fue “Se considera incorporar primera propuesta de lineamiento” y “evaluar segunda propuesta”, y, en el caso del de Huasco, la respuesta a la sugerencia fue “Evaluar primera sugerencia” y “Segunda sugerencia está incorporada en lineamiento que hace referencia a los estudios de dotación.”

En los casos de los servicios locales de Barrancas y de Costa Araucanía, a las sugerencias fue “Se considera sugerencia respecto a desafío” y “Evaluar”, respectivamente. Posteriormente, se envía un informe para explicar cada uno de esos procedimientos. Luego, se indica que la respuesta a la sugerencia respecto de otros desafíos y lineamientos, en los casos de los servicios locales de educación de Costa Araucanía, de Barrancas y de Puerto Cordillera, son “Rechazar solicitud de lineamiento dos. No comprenden el lineamiento”; “El desarrollo de capacidades directivas es hacia los docentes y asistentes de la educación. Evaluar sugerencia de lineamiento” y “Se incorpora sugerencia al perfil.”, respectivamente.

En cuanto a las condiciones para el cargo, los atributos de “visión estratégica”, “experiencia y conocimientos”, “gestión y logro”, “liderazgo externo y articulación de redes”, “manejo de crisis y contingencias”, “liderazgo interno y gestión de personas” e “innovación y flexibilidad” son la pauta que tengo para evaluar la gestión de cada uno de los directores ejecutivos y forman parte o tienen un porcentaje en su convenio de gestión. El ejercicio que se hizo en 2018 fue en relación a cuánto debería ponderar cada uno de esos indicadores para llegar al ciento por ciento, y finalmente se sacó un promedio. Hoy tenemos exactamente la misma pauta con los descriptores que aparecen en la presentación, con lo que se evalúa la gestión personal e interna del director ejecutivo que es parte de ese convenio de gestión. Esa es la forma en que trabajamos.

3) El Contralor General de la República, señor Jorge Bermúdez Soto.

El señor **Bermúdez** fue acompañado de la Asesora Legislativa, señora Catalina Venegas. Expuso en la sesión 5ª[6], de fecha 22 de marzo de 2021, de la siguiente forma:

Efectuó una presentación que básicamente toma dos de las principales funciones que realiza la Contraloría. Por un lado, está la función jurídica y, por otro, la función de fiscalización o de auditoría, que dice relación con las acciones que hemos hecho a propósito del proceso de instalación de los servicios locales de educación. Esto está dentro de un plan de la Contraloría para tratar de seguir este proceso y aportar con información útil respecto de la instalación del sistema de educación pública.

Eso no es una cosa que se me ocurra a mí, sino que, de acuerdo con el plan estratégico de la Contraloría, tenemos tres ejes para generar confianza pública: la innovación; conectar, para realizar auditorías o actividades que digan relación con el entorno, e impactar, lo que significa contribuir a la buena administración con información objetiva. Esto es lo que trataremos de hacer acá.

En ese sentido, hay algunas líneas de acción que dicen relación con lo que presentaré, pero de forma esencial me quedo con la idea de priorizar un control transversal en áreas de alto impacto en el sector público, que ayuden a su desempeño más eficiente; entregar más información al sector público, para que tome decisiones bien fundadas, y, también, colaborar en un enfoque preventivo en el fortalecimiento de la función pública.

En el proceso de implementación del sistema de educación pública, conforme a la ley N°21.040, hay varios hitos. Solo para recordar -probablemente esto ya lo conoce de memoria la comisión, pero creo que es bueno para tenerlo en la mente, para saber dónde estamos-, el 24 de noviembre de 2017 se publica la ley que establece el sistema y, luego, durante 2018, 2019 y 2020, se fue gradualmente produciendo la instalación de distintos servicios locales de educación pública.

En primer lugar, fueron los de Barrancas, Puerto Cordillera, Huasco y Costa Araucanía, que -usando un término coloquial- son los “conejillos de Indias” de este proceso y, también, tal vez con esa óptica hay que mirar los resultados de estas auditorías. Luego, progresivamente se han ido incorporando otros servicios locales de educación pública.

Este año se produce un hito relevante, porque hay una evaluación intermedia de todo este sistema. Esa evaluación se basa en lo que realiza el Consejo de Evaluación del Sistema de Educación Pública. El resultado de esa evaluación determinará si el Presidente de la República ejerce o no la facultad de prorrogar el proceso de instalación hasta el año 2030 o se mantiene el calendario como está previsto hasta el 2025.

Dicho eso, iré a la primera área de actividades que realiza la Contraloría, la función jurídica, obviamente actividades respecto de este proceso de instalación del sistema de educación pública.

Por un lado, están los dictámenes, es decir, estas interpretaciones que hace la Contraloría, esta fijación del sentido y alcance de la normativa; por otro lado, está la toma de razón, que es obviamente el control previo de legalidad de algunos actos.

---

[6] El acta de la sesión, que contiene su exposición íntegra, así como las consultas de los diputados y diputadas y sus respuestas, puede encontrarse en el siguiente link: https://www.camara.cl/legislacion/comisiones/sesiones.aspx?prmID=2902&prmIdTipo=2103.
Asimismo, la exposición que realizó en esa sesión, así como 2 Informes, de los SLEP Barrancas y Puerto Cordillera, se encuentran disponibles en el siguiente link:
https://www.camara.cl/legislacion/comisiones/documentos.aspx?prmID=2902
El video de esta sesión puede encontrarse en http://www.democraciaenvivo.cl/

Desde el punto de vista de los dictámenes, la Contraloría ha tenido que ser bien activa. Se han emitido ya 42 dictámenes sobre materias que podríamos denominar nuevas, porque hablamos de la aplicación de una ley o de un sistema normativo nuevo, que se basa en la ley N°21.040.

Luego, se ha tomado razón, es decir, se han analizado los nombramientos de directores y ejecutivos de los servicios locales de educación en once casos y, también, los decretos con fuerza de ley que fijan básicamente las plantas de los servicios y la planta del personal de la Dirección de Educación Pública, que son 71 decretos con fuerza de ley.

Ahora, destaco el rol de los dictámenes, porque cuando se trata de legislación nueva el dictamen cumple un rol de darle certeza a la administración respecto de cuál es el alcance de la ley. Esto me parece bien relevante, porque no estamos hablando, por ejemplo, a fin de ponerlo en función de una normativa más antigua, del Estatuto Administrativo, donde básicamente la jurisprudencia se ha venido reiterando o ha avanzado gradualmente. En este caso, hablamos de jurisprudencia nueva, por lo tanto, eso a veces ocasionó dilación en la expedición de los dictámenes.

A propósito de la función jurídica, pero respecto de la toma de razón de los decretos con fuerza de ley, se constataron algunos problemas. Por ejemplo, en los que fijan las plantas de personal, se detectó que en algunos casos se había excedido el número máximo de la dotación que podía ser traspasada. De eso dan cuenta los dictámenes. Toda esta información estará a disposición de la comisión.

Me gustaría destacar acá, en esta primera parte, algunos dictámenes relevantes, que darán una idea de cómo ha tenido que ir fijándose el sentido y alcance de esta normativa nueva, la ley N°21.040.

En primer lugar, respecto de las deudas, que era un gran tema a propósito del proceso de instalación. Allí, hay varios dictámenes que señalan que las deudas generadas antes del traspaso a un servicio local son de cargo del municipio o de la corporación municipal que corresponda.

¿Por qué? Porque la idea del legislador era que los servicios locales de educación partieran como entidades nuevas, *ex novo*, sin la carga de los pasivos que venían arrastrando en algunos casos los departamentos de educación municipal o las corporaciones municipales. Entonces, esas deudas no se traspasan a los servicios, sino que permanecen en la municipalidad o en la corporación respectiva, y pueden ser pagadas directamente por el ministerio, sin perjuicio de que este puede -como se dice- repetir, es decir, pedir la devolución de esos montos a la corporación municipal o a la municipalidad. Lo importante en este caso es que no se traspasa al servicio local de educación.

Luego, desde el punto de vista de los bienes que se traspasan, algo muy relevante, sobre todo en relación con los bienes inmuebles, es que la ley no hizo distinciones, por lo tanto, si bien no solo se traspasan bienes muebles e inmuebles, sino que también los recursos financieros y el personal asociado a la prestación de servicios educativos, los bienes inmuebles, a partir de los dictámenes, queda claro que donde funcionan los establecimientos educacionales, deben ser traspasados, como dice la norma, por el solo ministerio de la ley al servicio local de educación pertinente.

Otro grupo de dictámenes se refiere a algunos funcionarios que se pretendía que fueran traspasados, pero que no estaban directamente relacionados con los servicios educacionales. Por eso se dijo, en su momento, que no se ajustaba a derecho que los municipios destinasen funcionarios de los departamentos de educación a los establecimientos educacionales, para que después fueran traspasados al respectivo servicio local de educación como asistentes de la educación, es decir, que no se abultase –por decirlo de algún modo- ese conjunto de funcionarios de carácter administrativo en un DAEM o en una corporación para que

después quedaran en la nómina que iba a pasar al servicio local. Esto, porque, de acuerdo con la ley, los funcionarios que pasan directamente a los servicios locales son aquellos dedicados a la función educativa; en cambio, aquellos que están dedicados a la función administrativa o de soporte, pasan a prestar servicios en los servicios locales siempre y cuando hayan pasado por un proceso de concurso.

Por lo mismo, hay otro grupo de dictámenes que también se refirió a esta misma situación, determinando que estos funcionarios municipales podían ser traspasados, pero supeditado al resultado de un concurso. Por eso, no se había tomado razón de los traspasos respecto de algunos funcionarios municipales que no estaban en situación de ser traspasados directamente por el solo ministerio de la ley.

Respecto de algunas situaciones que se produjeron en la práctica y que de hecho condujeron a la dictación de la ley N°21.152, la Contraloría determinó que no se ajusta a derecho que se aumente el sueldo base de los asistentes de la educación en una etapa posterior a la fijada en la ley N° 21.040, en el momento en que se pide a los municipios que informen sobre las remuneraciones al Ministerio de Educación. Esta situación se produjo en el caso de la Municipalidad de Coquimbo, donde, pocos días antes del traspaso al servicio local, se mejoró la condición contractual de todos los asistentes de la educación, aumentándoles su sueldo base. Entonces, ahí la Contraloría determinó en su jurisprudencia que eso no era procedente.

Ahora, la ley N°21.152 contempló ciertos requisitos y plazos. Señala que la municipalidad debe entregar, al menos con seis meses de antelación a la entrada en funcionamiento del servicio, un informe donde se señalen los estipendios y las personas que recibirán dichos estipendios en el Departamento de Educación Municipal o en la corporación municipal respectiva.

Lo mismo se dijo respecto de los choferes y las manipuladores de alimentos, quienes podían estar desempeñándose en los establecimientos educacionales que luego pasarían a los servicios locales, quienes no tienen la calidad de asistentes de la educación, no solo porque así lo señala la jurisprudencia, sino porque el estatuto de los asistentes de la educación no los considera como tales. Por lo tanto, no podían ser considerados dentro de los funcionarios a ser traspasados.

También, un tema muy sensible dice relación con la posibilidad de reajustar las remuneraciones de los asistentes de la educación de jardines infantiles VTF o que se financian vía transferencia de fondos. Acá, esos funcionarios no tienen derecho al reajuste que corresponde cada año a los funcionarios del sector público, porque, en teoría, sus remuneraciones están pactadas con el empleador. Eso está contemplado en el artículo 1 de la “ley de Reajustes” de cada año, lo que genera la exclusión del personal de jardines infantiles VTF. Naturalmente, eso provoca una situación de discriminación que solo puede ser solucionada por vía legislativa, toda vez que un asistente de la educación de un jardín infantil que ingresó directamente a la Junji, pero que no es VTF, puede tener el reajuste; en cambio, aquellos que son financiados vía transferencia de fondos, no tienen derecho a recibir el reajuste.

En cuanto al traspaso de los servicios locales de educación, se hace aplicación, en muchos casos que suponen mucha casuística, de la norma que resguarda los derechos de los funcionarios que están siendo traspasados, en el sentido de que esas personas no pueden verse privadas de derechos remuneratorios ni de los derechos adquiridos que tenían al momento de realizarse el traspaso. Esta es una cláusula típica en los cuerpos legales que establecen procesos de traspaso desde un servicio a otro o desde un ministerio a otro. Es una cláusula respecto de la cual la Contraloría tiene cierta experiencia, pero que se tuvo que aplicar a propósito de la normativa específica que existe, y lo mismo respecto de las corporaciones municipales.

Ese es el primer grupo de instrumentos o productos de la Contraloría que dicen relación con la función jurídica, tanto en la toma de razón como en materia de dictámenes.

Ahora, desde el punto de vista de las fiscalizaciones, es decir, de la auditoría o control externo que realiza la Contraloría, ha realizado dos auditorías, bastante comprensivas: una en el Servicio Local de Educación Pública de Barrancas y otra en el Servicio Local de Educación Pública Puerto Cordillera. Se están ejecutando auditorías, en distintas materias, también en Barrancas, en Huasco, en Costa Araucanía y en el SLEP Gabriela Mistral.

Además, ha realizado dos investigaciones especiales, es decir, sobre puntos específicos, en el Servicio Local de Educación Pública Costa Araucanía y en el SLEP de Chinchorro, que aún no está terminado. Esos son los productos que se han llevado a cabo hasta ahora.

A continuación, explicaré un poco más en detalle sobre las auditorías que están terminadas, tanto en Barrancas como en Puerto Cordillera.

Respecto de Puerto Cordillera, que es el primer informe que presentaré y que es bastante extenso, tenía por objeto auditar el macro proceso de finanzas y la ejecución de los recursos asignados a los subtítulos 22 y 29. También, se auditó el proceso de traspaso de los bienes muebles e inmuebles que debían hacer los municipios, tanto de Coquimbo como de Andacollo, que son las comunas que forman parte del Servicio Local de Educación Pública de Puerto Cordillera. Además, se agregaron algunas denuncias que se habían recibido a propósito de situaciones irregulares en contrataciones o conflictos de intereses respecto de este mismo servicio local.

En primer lugar, desde el punto de vista de cuáles son los números o las partidas presupuestarias que se deben analizar, tenemos el subtítulo 22, que son bienes y servicios de consumo. En este caso, del universo de recursos, que son alrededor de 2.666 millones de pesos, la Contraloría analizó alrededor de 1.120 millones, y respecto de la adquisición de activos no financieros, que corresponde al subtítulo 29, de un universo de 315 millones y fracción de pesos, se analizan 243 millones. Ese es el universo y esas son las muestras que se toman para llegar al total examinado por la Contraloría.

Desde el punto de vista de los bienes que se traspasan, hay sesenta y dos inmuebles que se traspasan, de los cuales se analizan trece, y desde el punto de vista de los muebles, que básicamente son vehículos, estamos hablando de ocho, de los cuales también se analizan esos mismos ocho.

Los hallazgos de esta auditoría -donde esta es la misma metodología para ambas auditorías- se dividen en tres ámbitos:

Primero, los aspectos de control interno, es decir, cómo es el ambiente de control, el ambiente administrativo de control que existe en el servicio; luego, la materia auditada propiamente tal, y, por último, el examen de cuentas. Ese es el esquema que tienen los informes.

En cuanto a los aspectos de control interno, es decir, cómo está ese ambiente de control en el servicio, la Contraloría realizó varias constataciones.

Por ejemplo, se constató que las conciliaciones bancarias, en ocho cuentas corrientes que administra el servicio, se confeccionan manualmente mediante una planilla Excel, a pesar de que el sistema de información de gestión financiera del Estado dispone de un modelo para el registro de estas operaciones.

Cuál es el problema que tiene este primer punto, que parece un poco administrativo, pero que es muy relevante. Cuando las cuentas corrientes se administran a través de unas planillas que se manejan en Excel, estas se pueden cambiar fácilmente. Al revés, el Estado dispone de un sistema que utiliza casi todo el

sector público, donde se pueden registrar estas operaciones y si se altera deja una huella y se puede comprobar por qué se realiza esa modificación.

Entonces, acá la Contraloría cuando audita este punto debe ir al servicio y pedir esa planilla Excel. Si fuera cualquier otro servicio público, la Contraloría ni siquiera debe ir al servicio, sino que debe obtener la información desde el SIGFE (Sistema para la Gestión Financiera del Estado), y eso ya es un cambio y significa una vulnerabilidad del sistema, que es bastante importante.

Luego, se determinó que había personal a contrata que desempeñaba funciones de carácter directivo o de jefatura y eso no estaba establecido expresamente ni autorizado. Había procedimientos disciplinarios pendientes, cuarenta y dos al momento de la auditoría.

Se evidenció la duplicidad en la emisión de comprobantes de egreso en los subtítulos 22 y 29, que son precisamente los que son objetos de autoría; carencia de manuales internos de todo tipo, por ejemplo, de contrataciones, de adquisiciones, para la recepción de bienes, para el pago oportuno, en materia de inventario, etcétera. Esto lo vamos a ver después repetido, respecto del otro servicio local.

Se constató que el control de las existencias de los bienes muebles también se lleva de manera manual en planillas Excel por el encargado de la Unidad de Servicios Generales, y eso también, nuevamente, genera vulnerabilidad.

Se evidenciaron inconsistencias en el contenido de estas planillas de control de los bienes de 2018; por ejemplo, la falta de número de factura por la que se adquirió el bien, el monto total, la línea de financiamiento, el modelo, etcétera; o que estos bienes muebles no tenían el registro en el inventario ni una placa identificadora; o sea, todos los bienes, el computador a través del cual estoy hablando, que es de la Contraloría, tiene una plaquita que lo identifica en el inventario de los bienes muebles; cuando eso no está, es una vulnerabilidad que hace que ese bien pueda perderse.

Luego, en el examen de la materia auditada, entrando a estos dos grandes grupos de recursos, hay un poco más de detalles y de hallazgos.

Los números de páginas que aparecen en la presentación son las páginas en los respectivos informes, por lo tanto, ustedes después pueden ir revisándolas y van a ver que ahí están esas observaciones.

Por ejemplo, se comprobó que dos órdenes de compra por un monto total de alrededor de 2 millones 500 mil pesos, fueron emitidas en una fecha posterior a la emisión de la factura; o sea, primero se recibe la factura y luego se solicita comprar algo, y eso, obviamente, en el proceso es totalmente al revés.

También, se constató que se realizaron contrataciones al margen del sistema de compras públicas, o sea, no se utiliza el sistema de la plataforma de ChileCompra, siendo que es obligatoria para un servicio público y, además, hay 29 adquisiciones que no tienen un certificado de disponibilidad presupuestaria emitido con fecha anterior a la adquisición o, en este caso, se constató que el certificado era posterior.

Esto es bien importante y me lo explico porque estamos migrando desde el mundo municipal al mundo de la administración del Estado, del servicio público general; primero, el sistema de compras públicas es obligatorio para toda la administración, en cambio una corporación municipal no necesariamente está obligada, la puede utilizar […] obligada a usar el sistema de compras públicas y lo mismo la disponibilidad presupuestaria con la que debe contar para poder realizar estas adquisiciones.

En la presentación está marcado en verde, porque estos son tópicos que están siendo objeto de los sumarios administrativos que está llevando adelante la Contraloría.

Además, se advierte la ausencia del timbre de recepción en 257 facturas, lo que imposibilita saber cuándo llegaron al servicio, por lo tanto, saber cuándo se cumplió el plazo de 30 días para poder pagarle al proveedor.

Se determinó que se realizan contrataciones mediante trato directo, es decir, sin proceso licitatorio correspondiente para los servicios médicos escolares, servicios de alimentación, servicios de aseo y mantención, servicios de fumigación en los distintos establecimientos educacionales, por alrededor de 229 millones de pesos.

Acá, el trato directo se basa en una causal de confianza y seguridad, que es bastante discrecional y que, por la naturaleza de los servicios de los que estamos hablando, en realidad no resulta procedente haberla invocado.

Además, estos contratos privados de los tratos directos tienen una vigencia anterior a la resolución que aprueba la contratación directa y la orden de compra. Nuevamente, es un orden distinto al que se está estableciendo por la normativa.

En la mayoría de los pagos de prestación y servicios se realizan antes de su devengo, es decir, antes del hecho económico mismo, que debe estar reflejado en la contabilidad, y se comprobó que el servicio local dispuso la contratación fuera del Sistema de Mercado Público por un total de 302 millones para el servicio de transporte escolar y reparación de establecimientos educacionales. Esto se hizo sin haber suscrito los respectivos contratos.

Se determinó que el servicio contrató -a través de distintos tratos directos- el servicio de transporte escolar, por 169 millones, en 2018, que es una cifra superior a 2.500 UTM, y por 61 millones en 2019, que fue la fecha de corte de la auditoría, vulnerando la “ley de Compras”, porque esto fue una fragmentación de la compra, ya que si no se hubiese fragmentado obliga a realizar la licitación pública.

También, se determinó que la entidad edilicia, una de las municipalidades -que en este caso era la de Coquimbo- había comprado, a través de licitación, buses para una finalidad escolar a través de los recursos dispuestos para el departamento de Educación, pero luego estos no fueron traspasados, o por lo menos no se verificó el traspaso, hasta el momento de la auditoría, al servicio local de educación. Esta, en realidad, es más bien una observación al municipio más que al propio servicio local de educación.

Se determinó que en dos establecimientos se realizaron compras con fondos provenientes de la Subvención Escolar Preferencial y se utilizó como sustento el Plan de Mejoramiento Educativo del año anterior, de 2017. Y esos gastos no estaban definidos en dicho instrumento.

Esta observación, en realidad, cada vez que me ha tocado exponer sobre la Subvención Escolar Preferencial, me ha parecido en el sentido de que la subvención está amarrada a este Plan de Mejoramiento Educativo –por así decirlo- y los gastos que hay que financiar son los que están en ese plan; por lo tanto, en principio, no debería producirse esta situación de utilizar recursos SEP para algo que no está en el Plan de Mejoramiento Educativo.

Hasta la fecha de la auditoría, por lo menos, el servicio local de educación no ha remitido el ejercicio contable de 2018, que debió haber sido remitido a la Contraloría y cuyo plazo venció el 30 de abril de 2019.

Luego, encontramos 126 facturas que se pagaron en 2019, pero que en realidad habían sido recepcionadas el año anterior por un total de 1.704 millones, esto no se había registrado contablemente bajo “Cuentas por Pagar–Bienes y Servicios de Consumo”, al término de ese ejercicio contable de 2018.

Me gustaría destacar este punto, porque es una práctica que desgraciadamente la Contraloría detecta muchas veces y en ocasiones no se entiende muy bien el rol de la Contraloría.

Uno puede recibir en diciembre facturas y puede pagarlas en enero, dependiendo del flujo de caja o si tiene autorizados los recursos, el punto está en que tiene que reflejarlas en esa contabilidad de 2018, porque ahí es cuando se produce el hecho económico, y eso es lo que no ocurre en este caso, por lo que nuevamente es una vulnerabilidad del sistema.

Además, se constató la existencia de 11 facturas, en 2018, por un monto de 8 millones y fracción que estaban devengadas en julio de 2019. Nuevamente, facturas que se habían guardado y que se ponen en la contabilidad de 2019.

En la cuenta corriente de Subvenciones se comprobó la existencia de cheques girados y no cobrados por un total de 767 millones de pesos, los que provenían de marzo de 2018.

Respecto de la conciliación bancaria de diciembre de 2018 de la cuenta de Subvenciones, cheques girados y no cobrados por un total de 40 millones, estaban asociados a remuneraciones, transferencias, aguinaldos y bonos, y otros movimientos que no correspondían al referido concepto; o sea, no estaban bien señalados esos movimientos en esa conciliación bancaria.

Luego, en la partida conciliatoria de las cuentas de Subvenciones, existen depósitos por regularizar por la cantidad de 358 millones.

Lo que quiero graficar con estos dos puntos es que lo primero que hay que hacer para tener la casa ordenada -por así decirlo- es que exista una correcta conciliación bancaria, y desgraciadamente eso no lo encontramos en el momento de la auditoría.

Además, se constató un saldo inicial de caja, en un servicio local, para 2019, de 24 millones, según consta en el estado de ejecución presupuestaria y en el decreto de la Dipres, que modifica el presupuesto vigente del servicio. Eso fue lo que se informó por parte del servicio a la Dipres para que se constatara en ese decreto. Pero la Contraloría verificó, de acuerdo con la información que se tenía en el balance de comprobación y saldo, que en realidad la diferencia, es decir el saldo inicial, era de 5.219 millones; o sea, una diferencia bastante grande respecto del saldo inicial de caja para el año siguiente.

Lo que aparece en el cuadro rojo es el saldo inicial de caja determinado por la Contraloría y debajo, los 24 millones y fracción, el saldo inicial de caja que había informado el Servicio Local de Educación Pública Puerto Cordillera.

Desde el punto de vista contable, se determinó que el servicio local de educación carece de registros auxiliares que informen sobre el detalle de los bienes de uso y su depreciación, con un valor neto de 174 millones y fracción. Se constató que la cuenta edificaciones no tenía saldo al 31 de diciembre de 2018 y que 5 vehículos traspasados no habían sido registrados contablemente.

La tercera parte del informe es el examen de cuentas, que se refiere a revisar la cuenta y determinar si tiene la documentación de respaldo; por lo tanto, si esto no existe, da lugar a un reparo, a una demanda ante el tribunal de cuentas.

Hay tres expedientes de pago por 69 millones en que los antecedentes que se acompañan no dan cuenta de la prestación del servicio contratado.

¿Por qué dice “reparo condicionado”? “Reparo condicionado” significa que le voy a dar un plazo adicional, en el seguimiento de esta auditoría, para que me entregue la documentación, y si no la entrega, voy a tener que plantear la demanda ante el tribunal de cuentas.

Luego, se constató que el servicio local pagó 14 millones y fracción a un proveedor que se llama Viajes Mirador, por el suministro del servicio de traslado de

alumnos para actividades pedagógicas, lo que no se condecía con los valores que habían sido ofertados por ese prestador. Nuevamente, reparo condicionado.

Respecto del mismo proveedor, hay ocho pagos por un total de 8 millones y fracción por la prestación de un servicio de traslado de alumnos, pero no fue posible calcular si el valor que se pagó correspondía a los viajes, el trayecto y los kilómetros recorridos.

También, había cinco facturas que estaban pendientes de devengo, por un total de 98 millones y fracción.

Ese es el informe de Puerto Cordillera, que corresponde al proceso de instalación del Servicio Local de Educación Pública de las comunas de Coquimbo y Andacollo.

En cuanto al Servicio Local de Educación Pública de Barrancas, Región Metropolitana, el objeto de la auditoría es el mismo; es decir, este macroproceso de finanzas y ejecución de los recursos del subtítulo 22, Bienes y Servicios, y 29, Activos no Financieros, así como el traspaso de los bienes muebles e inmuebles desde los municipios, entre fines de diciembre de 2017 y el 31 de diciembre de 2018; también las transacciones, si estas se ajustaron a la normativa y analizar esta estructura de control interno.

Este servicio local de educación corresponde a las comunas de Cerro Navia, Lo Prado y Pudahuel. En total, son 77 establecimientos educacionales, entre escuelas, liceos y jardines infantiles, con un poco más de 25.000 alumnos matriculados. Esa es la panorámica respecto de este servicio local de educación de Barrancas.

Desde el punto de vista de lo que se audita, se revisan las compras de bienes y servicios -subtítulo 22- y también aquellos que se imputan al subtítulo 29, en los distintos programas que allí aparecen.

El total de recursos examinados es de 2.842 millones en un universo de 4.500 millones y fracción.

Aquí, me gustaría hacer una pequeña aclaración general respecto de cómo trabaja la Contraloría. Si usted observa la lámina, podrá ver que hay un universo total de recursos, que son los 4.500 millones, y lo que audita la Contraloría es una parte de eso, un poco más del 50%, 2.800 millones. Es una muestra que se toma. De manera tradicional, la auditoría siempre es así: frente a un universo, se extrae una muestra.

En el último año y medio, la Contraloría está tratando de que esa muestra sea lo más cercana al total del universo, a través del uso de datos masivos, que no se pueden utilizar porque desgraciadamente los servicios, como quedó visto a propósito del servicio Puerto Cordillera, no tienen bases de datos, sino que trabajan todavía con Excel. Todavía, por así decirlo, trabajan con ofimática, a diferencia del Estado en que el uso de bases de datos es extendido, lo cual permite que esa muestra se acerque mucho más al universo.

Desde el punto de vista de la deuda flotante, es decir, esa diferencia entre los gastos devengados y el total de pagos que se ha realizado, de los 2.000 millones de deuda flotante, se toman 597 millones para ser analizados respecto de 11 proveedores y 449 registros contables.

En cuanto a los bienes traspasados, se analiza el 69% de los bienes inmuebles y el 18,79% de los bienes muebles. Ahí están los valores respecto de unos y otros.

¿Por qué los bienes muebles aparecen con un valor de 603 pesos? Porque en el traspaso se valorizaron en un peso, cosa que la Contraloría explicó que vamos a ver un poco más adelante.

Dentro de estos tres ámbitos de la auditoría, primero, está el control interno. Nuevamente, acá se constata que hay una ausencia de manuales para llevar a cabo las tareas administrativas: el manejo de las cuentas corrientes, la realización del inventario, pagos a los proveedores; tampoco hay código de ética o conducta, manuales de procedimiento en materia de compras, etcétera.

Asimismo, una cosa que parece un poco material, pero las labores de auditoría interna o de control que se realizan en el servicio, están en el mismo lugar del controlado; es decir, donde está ubicado el personal de remuneraciones y desarrollo de las personas.

Se detectan algunas deficiencias en el control de los pagos y debilidades en el control implementado para evitar pagos duplicados, como vamos a ver más adelante; falta de conciliaciones bancarias o bien estas no se ajustaron a la normativa que existe sobre las conciliaciones.

Esto es bien relevante: la falta de designación de giradores, funcionarios que giran cheques sin rendir la correspondiente fianza, con la responsabilidad que puedan tener; también se detecta una alta rotación de jefaturas y de varios procedimientos disciplinarios que están pendientes.

En la materia auditada, encontramos que hay deudas que no estaban reconocidas contablemente. Hay 122 de 1.329 facturas recepcionadas, por 440 millones, que no fueron registradas como deuda exigible, en la cuenta que parece ahí, que es la 22192 (cuentas por pagar de gastos presupuestarios). Por eso, la Contraloría, a propósito de eso, está realizando un sumario administrativo.

Luego, hay una diferencia de 522 millones en el saldo inicial de caja, entre lo que se informa en el ejercicio presupuestario 2018 y lo que fue calculado por la Contraloría. Por lo mismo, tenemos el mismo problema, pero con un monto menor que en el caso del servicio anterior, a propósito del cálculo del saldo inicial de caja.

La Contraloría determina un saldo inicial de caja de 2.561.425.449 millones. El Servicio Local de Educación Pública Barranca determina un saldo inicial de 2.038.828.753 millones. Por lo tanto, hay 522.596.696 millones de diferencia de ese saldo inicial, lo cual obviamente es mucho dinero.

En el examen de la materia auditada, hay obligaciones pendientes de pago, al término del ejercicio de 2018, por 4.134.951.684 millones, lo que incluye los “Pasivos no registrados”, es decir, obligaciones que no quedaron devengadas por la entidad durante el período de 2018 por un total de 2.096.122.931 millones. Si el saldo inicial de caja, es decir, esa plata que teóricamente tenían, la descuenta de pasivos que no estaban registrados, ese saldo disminuye inmediatamente porque tendría un monto no cubierto de 1.573.526.235 millones que todavía estarían pendientes de ser pagados. Eso también queda en el procedimiento sumarial.

También hay traspasos de fondos desde la cuenta corriente del Fondo de Apoyo a la Educación Pública (FAEP) a otras cuentas corrientes del servicio por un monto de 2.400.000.000 millones. Esto no está permitido. El FAEP tiene su propia cuenta corriente y tiene un fin determinado y eso hace que esta materia esté en procedimiento sumarial.

Además, el servicio mantenía en las cuentas un ítem conciliatorio de sus movimientos de “Egresos girados y no cobrados” por 337.786.910 millones y 845.033.058 millones, pero que en realidad corresponderían a “Transferencias electrónicas de fondos”; “Efectivo” y “Cheques manuales” sin numeración, y no a egresos girados y no cobrados.

Asimismo, se detecta en la materia auditada fragmentación de compras públicas, se adquieren materiales a los mismos proveedores (Importadora y Distribuidora Arquimed Ltda., Muebles Santiago SpA y Elib Comercial Ltda.) por un

valor superior a 1.000 UTM, emitiendo más de una orden de compra con los mismos proveedores. Por lo tanto, se saltan la normativa de compras públicas.

Se constató que la adquisición de bienes y servicios con cargo al subtítulo 22, Bienes y Servicios, que no tenían el “Certificado de disponibilidad presupuestaria” por 168.795.832 millones.

En el examen de cuentas, el servicio no puso a disposición los comprobantes de egreso por 2.563.801.449 millones y 278.817.542 millones, lo que impidió acreditar el pago de estas cuentas.

También se constató la adquisición de bienes para jardines infantiles y establecimientos educacionales, y la contratación de servicios, como cursos de capacitación o servicios de vigilancia, por 650.479.641 millones y 156.783.922 millones, los cuales no adjuntaban la totalidad de la documentación de respaldo que permita acreditar su pertinencia.

En consecuencia, no se acreditaron las sumas de 1.666.390.408 millones y 102.997.133 millones, ya que el servicio no entregó los comprobantes originales de ese devengo y, además, que son comprobantes que sirven para acreditar esas compras de bienes y servicios. Por lo tanto, no se pudo verificar que estos gastos se ajustan a la finalidad establecida o que estén correctamente imputados.

Todas estas materias son objeto de sumario correspondiente y también, debido a la situación, estos antecedentes fueron derivados al Ministerio Público.

Dicho lo anterior, los bienes muebles traspasados por las corporaciones municipales de las tres comunas de Cerro Navia, de Pudahuel y de Lo Prado se contabilizaron en el valor de un peso cada uno, y no según el valor libro que debía estar registrado en su contabilidad. Además, se contabilizaron 3.208 de 67.603 bienes muebles y eso es un problema, porque en el fondo si no están contabilizados, esos bienes pueden perderse.

Respecto de los inmuebles, se comprobó que habían sido registrados en la contabilidad 59 de los 77 bienes inmuebles, que habían traspasado desde las distintas comunas, quedando 18 establecimientos por contabilizar.

Quiero hacer tres comentarios finales. En primer lugar, quisiera destacar el rol que cumplen los dictámenes de la Controlaría, porque siempre que hay una legislación nueva, es imposible para el legislador ponerse en todos los casos y así está pensado en el sistema jurídico chileno, dado que a veces la realidad va superando a lo que se tuvo en la mente entre el dictamen y permite hacer una aplicación de esa normativa que de otra manera hubiese quedado incompleta o volver al Congreso. Obviamente que hay temas que solo pueden solucionarse, por ejemplo, cuando implican gasto público, por la vía de la modificación legislativa, como ocurre con el reajuste del sector público y si este es aplicable o no a las asistentes de la educación que son por la vía de transferencia de fondos, y también los casos de planilla suplementaria a las asistentes de la educación que han sido traspasadas.

En segundo lugar, el traspaso desde los departamentos de educación municipal y desde las corporaciones, o sea, desde el sector municipal al sector público, que es lo que supone el Servicio Local de Educación Pública, es un cambio en la forma cómo se venían haciendo las cosas y es un cambio que supone dificultades en materia de personal, de traspaso de bienes, de la normativa que hay que aplicar, de los sistemas que están disponibles, como el Sistema para la Gestión Financiera del Estado (SIGFE) y así sucesivamente. Eso probablemente es una de las razones por las que tenemos tantas observaciones en estas dos auditorías. Son los dos primeros servicios que habían partido.

También me parece que la similitud de estas dos auditorías, es decir, lo parecido de los hallazgos entre una y otra, da cuenta de que hay que fortalecer la estructura administrativa de los Servicios Locales en materia de la administración

financiera del Estado, uso de sistemas, regulación presupuestaria, contabilidad gubernamental o ley de compras públicas.

4) El Expresidente del Consejo Local del Servicio Local de Educación Pública de Barrancas, señor Dorian Tobar Flores.

El señor **Tobar** expuso en la sesión 6ª[7], de fecha 29 de marzo de 2021, de la siguiente forma:

Nuestro ánimo no es emitir juicios de valor frente a la implementación y las acciones del servicio local. Me invitaron simplemente para expresar algunas consideraciones como exrepresentante de los directores y expresidente del consejo local.

Estamos claros de que la implementación comprende diferentes órganos del Estado. Además, a contar de 2020, producto de la crisis provocada por la pandemia, los tiempos son bastante más complejos. Pero, sin lugar a dudas, creemos que hubiese sido mejor la implementación si en la bajada se hubiese considerado más a los equipos directivos y técnicos, que son los que saben fehacientemente las realidades de cada una de las unidades educativas, especialmente en materia de infraestructura, que en lo individual o personal. Cuando fui director de la "Escuela Paulo Freire" se hizo inversión de recursos tecnológicos y, para mí lo más relevante, de gestión pedagógica, bajo la mirada de planificar con acciones que apunten al desarrollo de la educación del siglo XXI, siglo que será recordado por las neurociencias, sin lugar a dudas.

La educación pública de este siglo, indudablemente, requiere de nuevos desafíos procedentes de las fuertes transformaciones -que seguramente los honorables diputados y diputadas saben mucho más que nosotros- sociales, económicas y culturales que está experimentando una sociedad convulsionada, una sociedad diversa, una sociedad que es más integral, o al menos debería ser más integral.

Por lo tanto, es preciso repensar el sentido de los procesos educativos de las demandas contradictorias que sobre ella recaen.

En cuanto a la estructura organizacional -el foco en la gestión pedagógica-, el servicio local tiene que presentar un modelo pedagógico digital para unificar un criterio común y hacer la bajada de acuerdo con las necesidades de cada establecimiento, con distintas realidades, pero sí con un alto índice de vulnerabilidad.

Por consiguiente, existe un tremendo déficit en este sentido, porque no se visualiza una propuesta de un modelo que apunte al mejoramiento de la calidad de la educación del Siglo XXI. Como que se mantiene el añejo modelo convencional tradicional, que más que un aporte provoca un daño al desarrollo integral de los estudiantes; limita el desarrollo de los estudiantes porque se ha ido perdiendo la creatividad. La "revolución pingüina" lo dijo en una oportunidad: más de lo mismo.

Más preocupante aún es que no se consideran, por lo menos en 2020, las mesas de trabajo en conjunto con los equipos directivos de los establecimientos que conforman el territorio. Tampoco se dio cabida a las propuestas de los actores que conducen los establecimientos educacionales que conforman el territorio. A modo de ejemplo, hubo conversatorios con temas muy relevantes e interesantes, pero nunca participó un director, a pesar de que dieron propuestas concretas, fundamentalmente en lo que se refiere a la educación emocional y a la neuropedagogía cognitiva. Pero no fueron considerados.

Los directores se plantean que lo más preocupante es que se perdió la autonomía directiva. Eso es serio; peor aún, se perdió la autoridad. ¿Por qué la

---

[7] El acta de la sesión, que contiene su exposición íntegra, así como las consultas de los diputados y diputadas y sus respuestas, puede encontrarse en el siguiente link: https://www.camara.cl/legislacion/comisiones/sesiones.aspx?prmID=2902&prmIdTipo=2103.
El video de esta sesión puede encontrarse en http://www.democraciaenvivo.cl/

autoridad? Porque en este minuto prevalecen las asociaciones gremiales y sindicales. Todos sabemos que la decisión de la vuelta a clases, al final de cuentas, la iban a tomar los apoderados, pero cedió, cedió y se siguió. Por ello, es superimportante entender que la educación es responsabilidad de todos y nadie se puede arrogar esta noble tarea de educar; debe ser un trabajo cooperativo, que es mucho más integral.

Entonces, los directores están con la amenaza latente de acusaciones de los sindicatos sin base jurídica administrativa y pueden llegar a sumarios administrativos.

De hecho, tienen a un director sumariado desde hace dos años, que aún no termina, por acusaciones de algunos auxiliares pertenecientes a un sindicato.

Se perdió el protagonismo en la toma de decisiones, por ejemplo, en la dotación docente que por ley los directores deben participar en las contrataciones, porque deben visualizar el perfil que se requiere para contratar docentes para cada establecimiento.

La gestión de recursos y los ingresos por proyectos y programas como la Subvención Educacional Pro-Retención, Plan Movámonos con la Educación Pública y la Subvención Escolar Preferencial (SEP), es complejo, es complicado que durante el año 2020 se hayan perdido dos proyectos de una gran cantidad de dinero que iban en beneficio directo de los estudiantes vulnerables.

Debo manifestar que Cerro Navia con este traspaso ganó, pero hasta cuando conduje la “Escuela Paulo Freire”, nosotros éramos una carga, éramos una mochila adicional y Cerro Navia se utilizó en varias instancias para ser como un escudo de todo el gasto que ejercía. Y es cierto, es un gasto tremendo, y no teníamos ni siquiera una resma de papel, y todo fue gracias a la gestión de los integrantes de esa comunidad educativa. Inclusive, está la señora Gabriela Rubio, quien fue la jefa técnica que mantuve en el cargo, y su padre también nos ayudó en sacar fotocopias para las pruebas. Eso, como dato de la causa.

Respecto de las remuneraciones, peleamos mucho porque se utilizaban los recursos SEP para pagar las remuneraciones, creo yo, pero los juristas saben más frente a eso, que es un problema administrativo serio.

La aprehensión en los concursos de directores, en 2020. Me manifestaron que hubo mucha aprehensión cuando se eligió la comisión de los dos últimos concursos, incluso, ustedes pueden solicitar el video para ver cómo se eligieron los dos representantes. Rara coincidencia, cuestión que no me compete, pero pedí el video para enviarlo a los directores, en que hubo algunas cosas que llamaron la atención, a lo menos. Yo no emito juicios de valor.

Referente al desarrollo profesional docente, en este sentido se aprecia una gran variedad de práctica educativa circunscrita al aula, que es el modelo de clase, y a la unidad educativa, que, sin lugar a dudas, las diseñan los equipos de gestión con sus directivos, con la única intención de mejorar la calidad de la educación, pero no hay algo que esté unificado en ese sentido. Y eso busca el mejoramiento.

No hay una propuesta territorial consensuada y con un sello que distinga a la educación pública. Tal como dije denantes, se mantiene el modelo de la escolarización y esto provoca el abandono y la deserción de los estudiantes, porque -como dije- se aburren. Debe cambiar y para ello se requieren capacitaciones de acuerdo con las necesidades de la educación, a las necesidades de los establecimientos, no al arbitrio de algunas universidades. Yo no mido intención, creo que siempre hay buena intención, pero el cambio tiene que ser, el paradigma tiene que cambiar, y en eso no hemos visualizado, porque no podemos hacer solamente una declaración de propósitos de mejorar la calidad de la educación pública, pero pongámonos de acuerdo en qué vamos a entender por calidad y en ese sentido la bajada está al debe.

Hemos conversado todas estas inquietudes en las reuniones que logré citar con los directores -porque reuniones de directores no tuvimos; yo por lo menos no asistí a ninguna el año pasado- porque creo mucho en el principio de lealtad, y pedí reunirme con el director ejecutivo en muchas ocasiones, con los dos últimos jefes de gabinete, pero nunca me la concedieron. Creo que el principio de lealtad parte de la base de decir lo que uno siente y lo que uno piensa en el lugar que corresponde. Esa fue mi característica, por eso fue que me pasaron la cuenta, no lo sé, pero nunca lo pude lograr, incluso, en gestión pedagógica. Siempre hice el ofrecimiento. A los directores les enviaba escritos, les enviaba los *webinar* que dicté, por mejoremos.cl, incluso para México, sobre la neuroeducación, sobre contención emocional. Pero no eran importantes, no eran relevantes, no eran interesantes. Pero, bueno, con 46 años de servicio en la educación, al igual que el director Juan Carlos Almendra, no calzó no más.

Por eso decimos que era importante la distribución del poder de decisión; creo que esto se debe hacer en conjunto. Todo lo que usted invierta en educación se debe hacer en conjunto, no arbitrariamente. Es decir, ¿cuáles son las necesidades para que demos respuestas al mejoramiento?

Para terminar, en relación con el consejo local, yo les sugiero, yo les pido, en beneficio de la honestidad y de la transparencia -porque esto es público-, que ustedes soliciten las actas de las reuniones y los videos de las reuniones, porque en la tercera reunión autorizamos que se grabaran y se pudieran publicar, porque no hay nada que esconder.

Siempre fue la intención apoyar la gestión del director ejecutivo, y lo hicimos desde un principio. Yo creo que él se debe acordar de cuando fuimos cinco directores a decirle que contaba con todo nuestro respaldo y nuestro apoyo. Porque eso es y siempre nos quedamos con la declaración de buenas intenciones, de propósitos. Y ahí está la mejor evidencia.

Nosotros fuimos conformados recién, llamados por el director ejecutivo, en julio de 2020, y nuestro integrante ya estaba seleccionado del año anterior, de diciembre. Entonces, se darán cuenta y cada uno podrá emitir un juicio o una opinión. Pero el director Juan Carlos Almendra se acordará muy bien de que la opinión generalizada de los integrantes de la comisión era que no éramos tomados en cuenta. Hay un término bastante jovial, éramos como el “arroz graneado”, porque estábamos allí por cumplir, nada más. Eso dolió, más que molestar, dolió mucho.

En definitiva, no fuimos considerados, en absoluto, y de todas las propuestas que hicimos, el director ejecutivo dijo que eran interesantes, pero que no las iban a considerar para el PEL 2020-2021.

Llegué en el peor momento a la Escuela “Paulo Freire”, pues allí había serios problemas de convivencia, serios problemas de clima laboral, serios problemas de resultados del Simce, serios problemas de infraestructura. No moví absolutamente a nadie: los mantuve, porque soy de la idea de que el liderazgo compartido con un estudio de campo, aprovecha a las personas que usted tiene, porque son parte del problema, y como son parte del problema, son parte de la solución.

De manera que, a contar del 1 de abril de 2016 al 28 de febrero de 2021, esa escuela se recuperó y bajo -por coincidencia- mi dirección -no me gusta el término dirección; me gusta el término acompañamiento- conformamos sólidos equipos de trabajo. Hay un tremendo equipo PIE y, en general, sólidos equipos.

¿Qué se logró? Mejorar los resultados del Simce. Se presentó un proyecto que fue de la administración anterior para mejorar la infraestructura. Posteriormente, presentamos otro proyecto, en donde, incluso, mi sueño era hacer una piscina pequeña en el patio norponiente, de tal forma que la escuela estuviera abierta los 365 días del año.

En ese minuto iba a ser una escuela de lujo, y para mí lo más importante era que la pudieran disfrutar todos los niños de esa población, con tan escasos recursos. A veces hay cosas que entiendo y me pregunto por qué la educación pública está estancada.

Cuando el Colegio de Profesores -no digo que hace y deshace- da a conocer las inquietudes, que no siempre están consensuadas, nosotros no tenemos derecho a absolutamente nada. Hasta el año pasado, nos apuntaban con el dedo. A eso me refiero con perder la autoridad.

Nadie está en contra, señor Almendra, de los derechos de los trabajadores; nadie, absolutamente ningún director. Pero nadie me puede discutir que en el año 2020 las escuelas enfrentaron la pandemia, afortunadamente, producto de los equipos de trabajo y bajo la conducción de sus equipos directivos.

Nadie se puede jactar de la mejor o no gestión, y nadie está hablando de los recursos que existen para lograr lo que uno necesita, porque Cerro Navia, desde que es SLEP, ha ganado desde ese punto de vista. Pero usted dice que han perdido, pero eso a mí me da exactamente lo mismo.

No nos interesa dar opiniones de juicios valóricos sobre esto. Aquí se trata, simplemente, de apoyar la educación pública -para nadie es un misterio-, pero sí es verdad que el año 2019, cuando hicimos el PME en conjunto, en donde propuse que lo primero que íbamos a hacer era no aceptar que entrara cualquier persona a capacitarlos. Tenían que tener grado de doctor investigador; de ahí para arriba, por eso las universidades han estado poco. En ese sentido, he sido bastante crítico y también lo he sido de la ATES.

Empezamos con neurociencia aplicada. Posteriormente, con elaboración y construcción de instrumentos de evaluación, el año pasado. Fue la única escuela que tuvo una capacitación para la formación de jefes técnicos, a la cual invité, aparte de la señora Gabriela Rubio, que era la coordinadora pedagógica -porque ese el nombre con el que me dirigía a ella; eso era lo que ella hacía, y lo hacía muy bien-, a 14 profesores más, de manera que tuviera un equipo consistente. Por lo tanto, de aquí hacia adelante, obviamente, la escuela Paulo Freire, con tan digno nombre, tiene que mejorar.

De manera que esta escuela fue un nicho para tener, posteriormente, jefes técnicos. Jamás pensé solo en el año lectivo; siempre pensé en la proyección. Cuando propuse talleres conversatorios sobre contención emocional, me dijeron que no. Incluso, pregunté: “¿Hay algo en contra mía?”. De ahí a que yo tomara la decisión, no, porque uno tiene que hacer las cosas que ama y quiere; pero si hay un lugar en donde no se tiene la tribuna ni el espacio, hay que dar un paso al costado y no pelear.

Por eso hablaba de autoridad y de consecuencia. Aquí nadie está en contra de nadie; la educación pública es responsabilidad de todos, y voy a estar siempre donde estén los estudiantes vulnerables, porque soy producto de la educación pública, pero siendo consecuente.

Pude haber cometido muchos errores, pero el mejor aprendizaje para el cerebro es el error, porque quien enseña sin conocer cómo funciona el cerebro es como diseñar un guante sin haber visto nunca una mano. Eso es lo que pretendo entregar en la educación pública.

5) El Director de la Escuela "Melvin Jones" del Servicio Local de Educación Pública de Barrancas, señor Juan Carlos Almendra Canales.

El señor **Almendra** expuso en la sesión 6ª[8], de fecha 29 de marzo de 2021, de la siguiente forma:

Haciendo un poco de historia, estoy en la comuna de Pudahuel desde 1976 en adelante, ocupando diferentes cargos como profesor de educación básica. Mi título es de profesor general de Educación Básica. He trabajado en educación de adultos y en escuelas rurales, también fui director de la escuela rural de "El Noviciado", la que durante mi gestión se transformó en liceo científico-humanista. Además, fui coordinador comunal de educación extraescolar de la comuna de Pudahuel, a cargo de las actividades extracurriculares de cerca de 14.000 niños. Excepto por dos años, he desarrollado mi vida de servicio en Pudahuel.

Entré trabajando para el servicio público en el Ministerio de Educación; posteriormente, trabajé en la Corporación Municipal de Desarrollo Social, a partir del 1 de junio de 1981, año en que fuimos traspasados a la educación municipal. Después fuimos devueltos a la administración pública. Lo digo entre paréntesis, porque los profesores deseábamos regresar a la educación pública, añorando un poco lo que era antes, pero la verdad de las cosas es que nos encontramos con la situación de que todos debíamos empezar a aprender de nuevo. La educación pública ya no era la misma que conocimos.

He sido director de la "Escuela Melvin Jones" durante dos períodos consecutivos; en el último fui elegido por Alta Dirección Pública, y en el anterior, por concurso público realizado por la Corporación Municipal de Desarrollo Social de Pudahuel.

Si bien la educación pública comenzó con muchos tropiezos -debo decirlo-, hubo algunas situaciones respecto de las cuales todos tuvimos que empezar a aprender de nuevo. La gente comenzó a trabajar en el servicio público y nosotros éramos administrados por este nuevo servicio público de educación. A las personas que nos gusta educar y tenemos vocación de profesor, creemos en la educación pública. Pienso que también hemos crecido como educación pública, pero comenzamos a crecer cuando éramos de las corporaciones municipales. Por ejemplo, cuándo se había visto que tuviéramos psicólogos, terapeutas educacionales, psicólogos especializados o educadoras diferenciales en las escuelas públicas.

En la escuela donde trabajo tengo un equipo multidisciplinario que atiende a todas las personas; nosotros no hacemos ningún distingo -ningún distingo-, con ningún niño. Somos absolutamente transversales para todos los estudiantes de la comuna de Pudahuel. Mi escuela tiene un índice de vulnerabilidad de 94%; recibimos esa escuela con 210 alumnos, más o menos, y en este momento tenemos 470 alumnos; entregamos de todo.

En este momento, no podría que no me llegan las cosas de la educación pública. Sí me llegan, a mi escuela; no sé si es porque realizo una mejor gestión que los demás, no sé si les caigo más en gracia a la gente que hace las compras, pero a mi escuela llegan. Contamos con todo lo necesario para las clases presenciales, cuidándonos de los contagios y de todo eso. Tenemos una bodega con todos los productos que necesitamos –Covid 19- para hacer las clases: material de oficina, útiles escolares para los niños, etcétera. Tampoco podría decir que no me compran nada. No, eso no. Hay cosas que no me llegan, y que son responsabilidad no sé si del servicio local o de la dirección general en cuanto a las glosas presupuestarias.

---

[8] El acta de la sesión, que contiene su exposición íntegra, así como las consultas de los diputados y diputadas y sus respuestas, puede encontrarse en el siguiente link: https://www.camara.cl/legislacion/comisiones/sesiones.aspx?prmID=2902&prmIdTipo=2103.
El video de esta sesión puede encontrarse en http://www.democraciaenvivo.cl/

Sinceramente no entiendo mucho de las glosas presupuestarias, estaba acostumbrado a otro régimen de compras con la ley SEP. Nosotros, le decíamos a la persona encargada en la Corporación: “Señor, necesito –no sé- 4.000 cuadernos”, y esa persona compraba los 4.000 cuadernos. “Necesito equipos LED para las salas de clases” y compraba los equipos LED, porque estaba el dinero.

Ahora no, ahora debemos depender de las glosas presupuestarias. Hace más de seis años que no cambiamos *notebooks* en las escuelas; no tenemos *notebooks* modernos que se puedan conectar a un televisor o a un LED para transmitir. ¿Por qué? Porque la glosa presupuestaria no lo permite. He pedido estantes para nuestra escuela, pero la glosa presupuestaria tampoco lo permite.

Entonces, hay situaciones que sí y hay situaciones que no; pero en la mayoría de los casos, a mi escuela, donde yo trabajo, sí llegan las cosas. A lo mejor, tengo la buenaventura de tener todo lo que necesitan mis estudiantes.

Incluso, hace pocos días, hicimos entrega de las canastas de la Junaeb y de una mochila para los niños, con todos los útiles escolares que necesitan, al menos para los dos primeros trimestres. ¿Y eso de dónde salió? Ley SEP ¿Quién lo compró? El servicio local. Nosotros no podemos comprar; el servicio local lo compró. Pero a mí me llega.

Hubo situaciones en las que sí hubo complicaciones. Al inicio, en el servicio local había errores en el pago de remuneraciones, que se fueron subsanando. Creo que hay una gran particularidad en el servicio local -que lamentablemente ha ido desmejorando su imagen- en cuanto al cambio de personas. La persona nueva que llega comienza de nuevo a aprender, y nosotros, los directores o los directivos, debemos empezar a conocer nuevamente a esa persona.

Pero también tenemos situaciones que son muy positivas; no todo es malo. Creo que nadie que trabaja por amor o por afecto en la educación pública, pretende que las cosas salgan mal.

Estoy a punto de retirarme; comencé a los 20 años a trabajar en la educación. Tengo 67 años y voy a cumplir 47 años de servicio, ahora, en agosto, y nunca me he sentido más feliz que en estos últimos años, cuando la educación pública tiene recursos para nuestros estudiantes, para nuestros trabajadores, para nuestros asistentes de la educación y para nuestros profesores.

Trabajé en la comuna de Pudahuel, en el sector El Noviciado, sector rural de nuestra comuna, y cuando llegué en el año 2000 a ese colegio, los niños no conocían los computadores. Pero ahora ese colegio, transformado en liceo, tiene tecnología. ¿A lo mejor hay que renovarla? Sí, todo el tiempo; la tecnología la compra hoy y mañana está obsoleta. Hay que comprar, hay que invertir.

El espíritu de la ley SEP es igualar las condiciones -si es posible- entre los niños pobres y los niños de familias pudientes: ese es el espíritu de la ley SEP; pero muchas veces eso no se cumple. En el traspaso de la educación desde las corporaciones a los servicios locales -lo dije y lo repito- creo que nosotros, los profesores, los asistentes de educación de la comuna de Pudahuel, no deberíamos haber pasado al tiro. Estábamos absolutamente bien. Siempre respetaron todos los derechos de los trabajadores; nunca se nos atrasó un sueldo o un bono; nunca hubo algún tipo de –por así llamarla- situación medio tenebrosa con las platas SEP. Siempre fueron bien habidas y tuvimos que ambientarnos en esta situación nueva para nosotros, que románticamente pensábamos que volver a la educación pública iba a ser como antes; sin embargo, no fue así.

Estamos todos aprendiendo y quiero insistir en un punto: en la escuela donde trabajo no falta nada para que los niños puedan aprender bien y para que nuestros profesores puedan enseñar mejor.

No puedo dejar de mencionar la buena administración que ejerció durante muchos años nuestro alcalde de Pudahuel, relacionada no solo con la educación, sino también con el desarrollo de la comuna, a la que llegué en 1976, época en que las calles eran de tierra y no había iluminación eléctrica ni alcantarillado en las casas.

Cuando llegué a El Noviciado en el año 2000, no había locomoción colectiva, sino solo un bus de campo que hacía un recorrido dos veces al día. Los niños que estudiaban en El Noviciado, en la parte urbana de la comuna, no podían tener clases en sus colegios hasta las siete y media de la tarde porque el bus pasaba a las seis. Todo eso fue solucionado por la alcaldía, en lo que tiene mucho que decir el alcalde de nuestra comuna.

En lo que corresponde a la corporación municipal, yo dije que estábamos bien, que no merecimos haber pasado de los primeros al servicio local, pero así fue. Repito que nunca tuvimos un traspié, sobre todo con los derechos de los trabajadores.

Dije que en el servicio local también estamos bien porque debimos adaptarnos a este nuevo sistema. Si antes pedía con dos semanas de anticipación lo que necesitaba para nuestro colegio, y lo recibía, ahora tengo que pedirlo como mínimo con seis meses de anticipación. Eso es lo que hago: pido de un año para otro.

Por eso tengo útiles escolares en la escuela, y eso me permite entregárselos a los niños en marzo; tengo textos de lectura complementaria en nuestra biblioteca, que tiene más de 20.000 volúmenes. Cuando los profesores piden un libro de lectura complementaria, compramos 45 ejemplares, para que todo el curso tenga el texto, y ya los tenemos para este año.

Los recursos para cubrir las necesidades de nuestra escuela los sacamos de un fondo fijo que nos entrega el servicio local, que asciende a 300.000 pesos, y con eso compramos las cosas pequeñas.

Lo que tuvimos que hacer fue adaptarnos a la nueva realidad, entre garabatos y no garabatos, entre enojo y no enojo, tuvimos que adaptarnos, porque no nos quedó otra alternativa.

La burocracia del sistema ocasiona que el servicio local no tenga la premura a que estábamos acostumbrados. Lo mencionó nuestro colega Juan Esteban Montero: la burocracia del sistema no nos permite comprar prontamente todo lo que necesitamos.

De tal forma, cuando comenzamos a funcionar con el servicio local, las cosas nos llegaban cuando ya era tarde, de modo que tuvimos que adaptarnos y anteponernos a la situación que iba a venir, porque sabíamos que la entrega de lo solicitado se iba a demorar. Por lo tanto, debíamos pedir con mucha antelación, y eso es lo que hacemos. En nuestra escuela lo hacemos así y nos está dando resultados.

En nuestras escuelas -no sé si ocurre en todas-, a veces los colegas directores, por lo menos aquellos con quienes más comparto, me preguntan: “¿Por qué a ti te llegan las cosas? ¿Por qué tú tienes?” Bueno, porque a lo mejor las pido antes.

En mi escuela tengo bodegas con todo el material Covid, por ejemplo, que asciende a más de 22 millones de pesos; tengo todo el material didáctico, tengo toda nuestra biblioteca cerrada en bodegas, y mi escuela no tiene guardias en las noches, ni los sábados ni domingos.

Yo duermo con el teléfono al lado de mi almohada, esperando algún llamado en que me digan que entraron a robar a nuestra escuela. Imagino que no hay vigilantes, porque el servicio local carece de recursos para pagarles.

Los guardias que tenía nuestra corporación municipal pasaron a los servicios locales como asistentes de educación. Por lo tanto, ellos dicen: “Somos asistentes, no somos guardias”. Ahí hay una situación que debemos mejorar.

En relación con lo que dice el director Dorian Tobar, en cuanto a que hemos sido sobrepasados por los sindicatos y las asociaciones, no tengo ningún problema con eso, ya que me llevo bien con mis asistentes de educación y con la gente de los sindicatos.

¿Cuál es el problema? Que se debe reconocer de igual forma a los directores. Los trabajadores tienen derechos y debemos respetarlos. No puedo obligar ahora a un asistente de educación a que vaya a la escuela si estamos en cuarentena, sino que debo respetarlo y cuidar su salud.

Creo que la asociación de asistentes de educación está haciendo un muy buen trabajo para sus socios, ya que los cuidan, y esa es su labor; es respetable, y los trabajadores deberían sentir siempre ese apoyo de sus representantes.

El término de mi mandato fue el 28 de febrero de este año. Cumplí cinco años en el cargo, para el cual fui elegido por medio del sistema de Alta Dirección Pública.

¿Por qué no fue al concurso mi escuela? No tengo idea de cuáles fueron las razones y los motivos. Habría que preguntárselo a nuestro director ejecutivo. Sin embargo, estamos enterados de que, en un plazo no menor, la escuela también irá a concurso. Esa es nuestra situación actual.

En cuanto al consejo escolar, este no se empezó a constituir en el tiempo esperado, sino después. La constitución del consejo escolar fue en julio, y antes de eso se hizo una convocatoria para hacer las elecciones, con representación de todas las personas que deberíamos estar en ese consejo escolar.

Entiendo que después el Colegio de Profesores solicitó ampliar el plazo de postulación a tales cargos porque sentían que no habían sido informados, de modo que presentó sus objeciones al proceso vigente y se amplió el plazo.

Se resolvió abrir un proceso de convocatoria más informado y, en consecuencia, más participativo, en una elección programada para los días 26, 27 y 28 de noviembre, con votaciones en todos los establecimientos educacionales, con una separada, etcétera.

Se hizo un ejercicio con los directores, docentes, asistentes educativos, padres, apoderados y estudiantes. La formulación de eso se produjo en diciembre.

En 2020 se convocó a las universidades, institutos y centros de formación técnica de la región, por la pandemia. El llamado no surtió efecto y se inició uno nuevo, al que se presentaron seis universidades. Estuvieron las universidades Alberto Hurtado, Central, Diego Portales, de las Américas, de Santiago y Mayor. Por los institutos profesionales concurrieron el Instituto Profesional Inacap y el Instituto Guillermo Subercaseaux.

Finalmente, se eligió a los representantes de la Universidad Alberto Hurtado y de Inacap, a la señora Carolina y a don Gonzalo, quienes constituyeron el consejo escolar. Este se constituyó por primera vez el 17 de julio de 2020, ocasión en que se había avanzado en todo lo que estaba en el Plan Estratégico Local.

Después de eso, como consejo escolar, nos costó mucho reunirnos, no tuvimos la fortaleza ni la musculatura para sostener ciertas situaciones. Primero, nos costaba reunirnos, no llegaban todos los consejeros; cuando había algo que decir, no todos hablaban, a veces hablábamos el director Dorian Tobar y yo solamente, nadie más. Nadie opinaba, de modo que no era una reunión grata.

Sin embargo, por otras aristas me llegó el asunto de las etapas para el Plan Estratégico Local. A través de reuniones de directores, se hicieron reuniones con los consejos escolares, con los jefes de UTP, quienes fueron convocados para hacer el Plan Estratégico Local. Me imagino que el servicio local habrá tomado nota de las actas y de las fechas de esas reuniones.

Esto comenzó aproximadamente en diciembre de 2019. Entre el 24 y el 27 de septiembre de 2019, se realizaron reuniones de trabajo con todos los consejos escolares, donde están representadas todas las comunidades: el director, los asistentes de la educación, los estudiantes, padres y apoderados, profesores, etcétera. Dichas reuniones se llevaron a cabo no directamente con el Consejo Local, pero sí a través de los consejos escolares de los establecimientos y sus representativos. En verdad, nos basamos más que todo en el quehacer pedagógico, que es importante.

Entiendo al profesor Dorian Tobar cuando nos habla de la neurociencia y que todo eso es importante para el futuro, pero no todas las personas dominan ese tema como él. Él es un experto en esa materia, por lo tanto es difícil introducir todo esto tan tácitamente para ver el asunto de los planes que debamos abordar. En síntesis, todos estaban enfocados en mejorar la calidad de los estudiantes de nuestra comuna.

6) La Directora (I) de la Escuela "Paulo Freire" del Servicio Local de Educación Pública de Barrancas, señora Gabriela Rubio Palma.

La señora **Rubio** expuso en la sesión 6ª[9], de fecha 29 de marzo de 2021, de la siguiente forma:

Primero, les quiero contar que soy docente desde hace 20 años de la Municipalidad de Cerro Navia, y en la "Escuela Paulo Freire" desde hace siete años que soy jefa técnica, y a contar del 1 de marzo me solicitaron que asumiera el interinato, en virtud de que hay un concurso público para el cargo, en el cual estoy participando. Y en vista de cómo se ha dado el concurso, he visto la total transparencia por ser un concurso a través del sistema de Alta Dirección Pública, en donde hay distintas organizaciones que están a cargo de los mismos. De manera que llevo un tiempo largo trabajando en la comuna de Cerro Navia.

No recuerdo cuál de los directores lo mencionó -creo que fue el director Dorian Tobar-, pero para Cerro Navia, principalmente para nuestra escuela, fue una tremenda alegría y un tremendo descanso pasar desde el municipio al servicio local. No quiero hacer tanta memoria, pero tuvimos situaciones pedagógicas y económicas, incluido cierre de escuelas, bastante complejas antes de ser traspasados al servicio.

Por lo tanto, cuando nos informan de que seríamos traspasados, para nosotros fue una tremenda alegría, porque sentimos que por fin íbamos a empezar a caminar por donde debiera ser: por el camino de la educación pública. Quería mencionar esto, porque no hay que olvidar la historia de dónde somos, de dónde venimos y de cómo llegamos al servicio local.

Si bien los dos primeros años del servicio local fueron un poco difíciles, prefiero centrarme más bien en lo pedagógico, que es el ámbito en el cual me manejo mucho más.

Quiero comentarles que nuestra escuela ha aumentado sus líneas de acción, en lo pedagógico. Nuestra escuela mejoró, cambió de categoría, desde la insuficiencia, en donde estuvo sumida por varios años –diría que más de cinco o seis años-, para ir avanzando, según la Agencia de Calidad de la Educación, hasta el nivel medio bajo. Hoy, podemos decir, con mucho orgullo, que estamos en el nivel medio, y es muy seguro que prontamente lleguemos al nivel medio alto.

Además, debo contarles que por muchos años nuestra escuela no alcanzó la excelencia académica, pero este es el tercer año que lo logra. La distinción recae en una escuela pequeña, ubicada en la población Sara Gajardo y tiene alrededor de 260

---

[9] El acta de la sesión, que contiene su exposición íntegra, así como las consultas de los diputados y diputadas y sus respuestas, puede encontrarse en el siguiente link: https://www.camara.cl/legislacion/comisiones/sesiones.aspx?prmID=2902&prmIdTipo=2103.
El video de esta sesión puede encontrarse en http://www.democraciaenvivo.cl/

estudiantes, todos con un índice de vulnerabilidad muy alto; sin embargo, y principalmente gracias al apoyo que hemos recibido durante el último tiempo, sobre todo del servicio local, hemos ido encaminando nuestro quehacer.

En términos de instancias de capacitación, debo señalar que el equipo directivo sí la ha recibido. Por ejemplo, tuve una capacitación de perfeccionamientos sobre Unidad Técnico Pedagógica (UTP), y en la escuela los docentes participaron en capacitaciones en el ámbito de evaluación, a las cuales también concurrieron asistentes de la educación en apoyo al aula. En general, todos los integrantes del Programa de Integración Escolar (PIE) y duplas psicosociales participaron en las redes de mejoramiento que se establecieron a través del servicio. De hecho, nuestra escuela participó en todas las redes de mejoramiento que ofreció el servicio local el año pasado, y creo que ha sido un impulso muy importante, porque por años no tuvimos capacitaciones en ningún ámbito.

También, fuimos apoyados a través de nuestros asesores pedagógicos, los cuales constituyen nuestra línea directa con el director ejecutivo. Si bien nuestra línea directa es el asesor pedagógico, nuestra experiencia ha sido bastante buena principalmente durante los últimos dos años. Él es nuestra línea directa con el director ejecutivo y, además, hay jefes de departamentos con los que uno puede establecer relaciones.

En este tiempo de subrogancia he aprendido a vincularme con los jefes de departamentos, los cuales, de alguna manera, dan soluciones, permitiendo que no se centralice todo en un director que no alcanza a focalizar todos los esfuerzos por más que quiera solucionar problemas.

Asimismo, creo que se mencionó que nuestra escuela tiene un proyecto de intervención por más de 20 años. Incluso, cuando la escuela pasó a Jornada Escolar Completa (JEC), su infraestructura no fue mejorada. También tenemos un proyecto de inversión y de reparación de la escuela desde fines del año pasado, y prácticamente se está interviniendo en su totalidad, es decir, baños, comedores, canchas de juego, etcétera. Dicho proceso está en desarrollo y termina esta semana. En verdad, eso ha sido un lujo para nosotros, porque a veces no teníamos dinero ni para comprar un vidrio, pero hoy podemos decir que nuestra escuela está teniendo mejoras sustanciales.

No me quiero referir mucho a la entrega de recursos, porque los directores intervenían principalmente en esa materia.

Sin embargo, el año pasado se realizó un estudio, del cual fui parte, sobre la percepción de los funcionarios del servicio local de educación respecto de esta nueva mirada del proceso pedagógico y los acompañamientos técnicos. En dicho estudio, que contiene datos cuantitativos y cualitativos, participaron 62 establecimientos, entre colegios, liceos y jardines infantiles del territorio. Las encuestas, que estaban destinadas a directores, jefes de UTP, subdirectores, encargados de convivencia escolar y orientadores, dieron como resultado un nivel muy alto de satisfacción de la mirada institucional y de la reforma de la educación pública que estaba haciendo el servicio local. El informe, cuyo objetivo principal fue conocer a los equipos directivos y la percepción que tenían de los apoyos técnicos pedagógicos, fue hecho por Mario Uribe y está disponible para quien lo quiera solicitar. Reitero, el resultado del estudio fue muy positivo, pues concluyó que un alto índice de funcionarios se conecta y está satisfecho con todo lo que ha entregado el servicio local.

Además, cabe mencionar que hay muchas situaciones de arrastre tanto en el ámbito pedagógico como en el administrativo. ¿A qué me refiero con ello? Se trata de convenios sindicales que traen los municipios desde hace muchos años, principalmente el caso de Cerro Navia. Hoy es muy difícil deshacerse de ellos y avanzar en mejoras para todas las funcionarias y todos los funcionarios.

De igual forma, todos los directores o quienes quisieron participar trabajaron en mesas técnicas. En el caso de nuestra escuela, se revisaron, analizaron y se reflexionó en torno a los reglamentos internos, especialmente con la Universidad San Sebastián.

Quiero agradecer profundamente la oportunidad que he tenido para explicar el tema, sobre todo desde el ámbito técnico-pedagógico, que es lo que a mí me mueve.

Como señalé al inicio de mi intervención, nuestras niñas y nuestros niños, que son quienes nos mueven, han tenido un avance sustancial desde que fuimos traspasados al servicio local.

En lo que a mí respecta, en 2019 participamos en el Plan Estratégico Local. Recuerdo perfectamente que participamos representantes del centro de estudiantes, del centro de padres y apoderados y del equipo directivo en Pudahuel y que los directores tuvieron un llamado aparte.

Hasta ese minuto, todavía yo era jefa de UTP, así que participé y nos dividieron en distintos ámbitos de trabajo, como recursos, gestión pedagógica, etcétera. Fuimos discutiendo, a través de temáticas y de preguntas, cuál iba a ser nuestro plan y cuál era nuestra mirada a futuro. Esa fue la forma de trabajo.

Luego, también hubo un levantamiento de información a través de los consejos escolares, la cual debían llevar los asesores territoriales hacia nuestro sostenedor. Finalmente, recibí el documento por parte del director de ese momento.

Además, el Plan Estratégico Local está publicado en la página *web*. No sé si todo el mundo logra visualizarlo o si es la mejor forma de socializar la información, pero está publicado allí y está centrado más bien en el ámbito pedagógico, en el acompañamiento docente, en el trabajo de duplas, en el trabajo socioemocional, en el trabajo del reglamento interno, en el levantamiento de las capacidades de los colegios y en el proyecto de infraestructura.

También se realizaron redes o cafés virtuales de directores, en los cuales entiendo que se trabajó el liderazgo y otras temáticas en relación con el Plan Estratégico Local.

7) El Director de la Escuela "Federico Acevedo Salazar" del Servicio Local de Educación Pública de Barrancas, señor Juan Esteban Montero.

El señor **Montero** expuso en la sesión 6ª[10], de fecha 29 de marzo de 2021, de la siguiente forma:

Soy un director que llega al servicio local a través de la Alta Dirección Pública con la misión de contribuir, con mi experiencia, a mejorar los distintos indicadores de calidad de una escuela humilde ubicada en Cerro Navia. Soy un defensor de la educación pública en sus últimos 15 años y de la creación de los servicios locales de educación, y espero que en mi breve exposición entregue elementos relevantes que aporten a la mejora de la gestión de los recursos en beneficio de los cientos de familias que confían aún en la educación pública.

Como director asumí el compromiso de mejorar los indicadores de la escuela. Presentamos un diagnóstico y pudimos darnos cuenta de que la escuela necesitaba muchos recursos para seguir: teníamos problemas de infraestructura, mobiliario, recursos tecnológicos, equipos descontractualizados, etcétera. Fue entonces cuando la comunidad escolar empieza a exigir a los directores que había que hacer algo, fue

---

[10] El acta de la sesión, que contiene su exposición íntegra, así como las consultas de los diputados y diputadas y sus respuestas, puede encontrarse en el siguiente link: https://www.camara.cl/legislacion/comisiones/sesiones.aspx?prmID=2902&prmIdTipo=2103.
El video de esta sesión puede encontrarse en http://www.democraciaenvivo.cl/

así como empezaron las primeras demandas hacia la institución y cuando empecé a elaborar distintos planes para obtener los recursos necesarios para responder a las exigencias de la comunidad. Con experiencia de haber trabajado como director de una escuela municipal, comencé a gestionar recursos que contaba a nuestra disposición: plan de mejoramiento, proyectos de fundaciones, incluso. Siempre con el entusiasmo de entregarle a la escuela las condiciones básicas para seguir trabajando.

Me di cuenta de que a pesar de que cumplía los plazos de entrega del presupuesto y el plan de compra al departamento de finanzas del servicio local, siempre había meses de larga espera y carencia de recursos: algunos que llegaban y otros que no, simplemente.

Cuando empecé a indagar sobre estos procesos, me di cuenta de que la mayoría de las problemáticas relacionadas con la gestión de los recursos no dependían solo de mi acción, y tampoco dependían de mi sostenedor; dependían, incluso, de agentes externos que, en este caso, voy a mencionar:

Primero, existían problemas con proveedores de ChileCompra y convenio marco, que se negaban a vender, incluso los productos de los servicios públicos debido a que sostenían deudas con ellos. Se demoraban mucho tiempo en pagar esas deudas anteriores y por alguna forma no había, algunas veces, *stock*. Eso nos perjudicaba permanentemente.

Un ejemplo bien simple: si uno necesitaba comprar clavos, tornillos o tablas para hacer una reparación, había que tener un ítem por cada uno de esos implementos y así juntar tres o cuatro empresas que tuvieran stock suficiente para comprar y adquirir esos recursos.

Como comprenderán, los tiempos se alargaban muchísimo, lo cual demora para dar respuesta pronta a la comunidad.

Las compras de licitaciones públicas son demorosas, pues se debe cumplir con todo un proceso burocrático de seis o, a veces, diez firmas, de acuerdo con la legalidad vigente, según el umbral de las 1.000 UTM, lo que hace que cada compra sea jerarquizada, impidiendo que los recursos lleguen antes de los seis meses, lo que es demasiado tiempo para las necesidades de la escuela.

Por ejemplo, si quiero comprar 100 computadores, debo tener noción de todos los colegios que necesitan comprar para decir que vamos a una licitación pública, esperar a los proveedores que van a participar de esa licitación y poder obtener los recursos. Eso también demora varios meses.

Un problema complejo de las escuelas son las famosas glosas presupuestarias, que mencionó el director, en el sentido de que no compensan las necesidades reales de las escuelas. Si, por ejemplo, mi escuela necesita un mobiliario escolar, computadores y mejorar infraestructura, no tenemos ítem para ese gasto. En la práctica, si queremos comprar computadores, solo nos llegan cuatro o cinco, porque la glosa no lo permite. Simplemente, estamos amarrados; compramos 40 computadores para un universo de 540 estudiantes. O sea, de aquí a muchos años más vamos a poder tener algo para entregar verdadera tecnología a nuestros estudiantes, por lo menos tecnología del siglo XXI.

En cuanto a los tiempos de la Dipres, en términos de adaptación y cambios en la distribución de los recursos y la glosa presupuestaria, es sumamente indignante cuánto tiempo se demoran en armar un certificado para acreditar y decir que hoy se puede adaptar o no. Creo que eso es un nudo crítico que también hay que resolver. Eso no solo depende de nosotros, tampoco de nuestro sostenedor, sino de quienes están dirigiendo desde arriba.

Los tiempos del Compin respecto de los recursos humanos, tenemos funcionarios que tienen entre cuatro y más años de licencia médica, lo que impide que tengamos presupuesto para contratar funcionarios de reemplazo y cumplir

demandas internas para mejorar los aprendizajes, como nos exige la ley. No es posible que tengamos tanto tiempo para poder contratar y sigamos gastando recursos que hoy no tenemos, recursos para pagar finiquitos y bonos de retiro a los docentes que hoy se encuentran en las escuelas y están certificados por enfermedades de base y ni siquiera los podemos reemplazar. Faltan recursos para que, de una vez por todas, los funcionarios que ya cumplieron su labor puedan retirarse y así generar más flexibilidad, por lo menos en cuanto al recurso humano.

Se necesita una voluntad legislativa para permitir mayor flexibilidad en los tiempos de distribución de uso de los recursos en las escuelas y servicios locales, ya que si no se ejecutan dentro de un período, sabiendo todo lo que pueden demorar las licitaciones, hay que devolver los recursos no utilizados al año siguiente, a diferencia de las comunas, de las corporaciones y de los DAEM, que todavía pueden mantener un pozo acumulado de un año a otro y seguir construyendo y trabajar. Eso no sucede con nosotros, puesto que se nos obliga a devolverlos y no podemos contar con ellos. Además, al año siguiente se nos castiga con menos recursos por no haber gastado el presupuesto nacional otorgado. Creo que ese es un elemento clave para seguir avanzando en las propuestas de la educación pública.

Mi testimonio no tiene el ánimo inquisidor hacia los deberes del servicio local en materia de gestión de recursos, sino más bien avanzar hacia la modernización del servicio local y también del Estado. Creo que tenemos un tremendo desafío, pues no puede ser que en las instituciones públicas, escuelas que operan con otras lógicas, se utilice la misma lógica que de cualquier ministerio. Se necesita legislar en torno a la modificación de algunos artículos de la ley, que nos permita desarrollar esta flexibilidad y contar, de una vez por todas, con los recursos que necesitan las escuelas públicas.

La educación pública es algo que nos mueve. Estoy convencido de que nosotros llegamos a levantar la educación pública, porque creemos que es la mejor opción respecto de lo que había. Debo confirmar que llegué en 2019, por lo que me tocó participar rápidamente y adaptarme al proceso del plan estratégico.

Hay tres áreas que uno puede destacar en forma general: la primera, es el trabajo colaborativo, que es importante dimensionar en el plan estratégico; la segunda, es la formación del desarrollo profesional docente, que era uno de los temas que estaba pendiente, y la tercera, es la mejora de competencia de liderazgo. Esas fueron las temáticas que me tocó abordar y cada uno tomaba distintos tipos de temas. Creo que se focalizó en eso y se armó el programa.

Al cabo de un tiempo, en 2020 empiezan a llegar los planes establecidos. En todo caso, pedimos al servicio que nos mandara los planes para ver en qué había quedado todo lo que hizo durante la jornada, pero no habíamos llegado a las conclusiones. Posteriormente, llegó el plan con conclusiones para que hiciéramos alguna adaptación y algún comentario; de hecho, tuvimos tiempo para hacerle algunos alcances. Por cierto, estaba focalizado en esas tres áreas que fue en lo que más pudimos aportar; en lo personal, aporté en el trabajo colaborativo.

De hecho, tuve una participación bastante interesante con respecto al trabajo colaborativo al interior de mi escuela, de modo que ese también es un elemento importante que nace de ahí.

8) El Director Ejecutivo del Servicio Local de Educación Pública de Barrancas, señor Patricio Canales Ríos.

El señor **Canales** expuso en las sesiones 6ª, 7ª y 8ª[11], de fechas 29 de marzo y 12 y 19 de abril de 2021, de la siguiente forma:

He observado que aparece varias veces mencionado el tema del plan estratégico que, de alguna manera, se une un poco al de la participación. El servicio local tenía que asumir la construcción de su plan estratégico en mayo de 2019 -cuando asumí como segundo director ejecutivo en abril de ese año-. Para ello, la ley contempla la participación de los órganos consultivos que ustedes han mencionado; sin embargo, en ese momento solo existía el comité directivo. Ante esa disyuntiva, entendiendo que el Consejo Local es una instancia fundamentalmente participativa de la comunidad, intentamos construir el plan a partir de la consulta de la mayor cantidad de comunidades que pudiéramos reunir de manera orgánica y ordenada.

En septiembre iniciamos un ciclo de reuniones, primero, con todos los directores del territorio. Luego, como señaló el director de la Escuela "Melvin Jones", señor Juan Carlos Almendra, se hicieron varias reuniones –porque no podíamos tenerlas simultáneamente- con todos los consejos escolares, entendiendo que allí se representaba la mayor cantidad de comunidades de cada uno de los establecimientos y del territorio, entre el 24 y 27 de septiembre, como se mencionó.

En dichas reuniones se utilizó una determinada metodología, el análisis FODA (Fortalezas, Oportunidades, Debilidades, Amenazas), para hacer entender el problema, comprenderlo y poder abordar debilidades, fortalezas y ver también oportunidades hacia adelante. Luego, nos reunimos con los gremios para hacerlos participar y escuchar sus opiniones.

Finalmente, tuvimos una reunión de trabajo con los funcionarios del propio Servicio Local de Educación Pública, que se realizó con todos los funcionarios del servicio que quisieron participar. Con ello se logró conformar y formular el plan estratégico local que se entregó al comité directivo el 21 de diciembre del mismo año, el que si bien hace observaciones, establece que es necesario para su aprobación contar con la estrategia nacional.

Por lo tanto, quedamos a la espera de la aprobación de la estrategia nacional, hecho que ocurrió en el mes de junio o julio -no recuerdo bien-; se hacen las observaciones finales, la unión entre ambas y las recomendaciones particulares para el plan estratégico local. Finalmente, atendemos las observaciones y frente a algunas que no nos parecen, respondemos con los fundamentos necesarios.

En ese momento -y quiero ser muy sincero- se revisó la situación del consejo local y se resuelve que no es pertinente hacer la consulta, en virtud de que ya se había agotado la instancia de preparación del plan estratégico y se había elaborado su primer borrador, instancia donde cabía la participación del consejo local. Como se dijo, se constituyó en el mes de julio –como señalaron los señores Dorian Tobar y Juan Carlos Almendra-, pero se optó por no volver a esa etapa porque habría hecho muy largo el proceso.

Cabe señalar que el plan estratégico se manda solo con las observaciones del comité directivo y se hace el informe final, la estrategia final de nuestro territorio. Se envía a la Dirección de Educación Pública (DEP) y finalmente se da por aprobado. Ese fue el recorrido que tuvo el plan estratégico local.

---

[11] Las actas de las sesiones, que contienen su exposición íntegra, así como las consultas de los diputados y diputadas y sus respuestas, pueden encontrarse en el siguiente link: https://www.camara.cl/legislacion/comisiones/sesiones.aspx?prmID=2902&prmIdTipo=2103.
Asimismo, la exposición que realizó en la sesión 7ª, se encuentra disponible en el siguiente link: https://www.camara.cl/legislacion/comisiones/documentos.aspx?prmID=2902
El video de esta sesión puede encontrarse en http://www.democraciaenvivo.cl/

Posteriormente, hicimos una sensibilización con los directores de establecimientos -si mal no recuerdo los últimos días de noviembre o los primeros días de diciembre-, haciendo un link entre los dos instrumentos de gestión más importantes que tiene el territorio; por un lado, la estrategia nacional que estaba en pleno conocimiento de todas las comunidades que fue aprobada a mitad de año y, por otro, nuestro plan estratégico local. Sin duda, un primer pie, pero hay que seguir avanzando en el tiempo para poder ir sensibilizando mejor, ya que son muchos los gastos y las metas. Evidentemente, los objetivos se pueden llegar a lograr porque son pocos.

El 15 de octubre se pone en conocimiento, de manera formal, la consulta del plan anual al consejo local y también del Proyecto Educativo Local, que ya estaba entregado a la Dirección de Educación Pública.

Entonces, no sé si tuvo difusión dentro del consejo local, pero sí obtuvimos una respuesta del presidente del consejo, quien hizo un largo comentario respecto del Proyecto Educativo Local, pero no respondió la pregunta que se le hizo respecto de cuál era su opinión del plan anual. Sobre eso no hubo mayores comentarios, por lo que seguimos avanzado con lo que estableció el comité directivo.

Ese fue el contexto de las comunicaciones respecto de los instrumentos estratégicos que tuvimos durante el período 2020 y de cómo se construyó nuestro plan estratégico local.

Ahora bien, recojo esto en su conjunto y tengo apreciaciones muy parecidas a las de ustedes -naturalmente yo las vivo día a día- respecto de la realidad de las cosas, en el sentido de que no existen visiones ideológicas de ningún tipo, sino el puro dato del quehacer diario de lo que es un servicio local, con todas las dificultades con las que nos vamos encontrando, que también son muy válidas y muy ciertas como las que se han venido diciendo.

Efectivamente, como servicio público, tenemos una dificultad cuando entramos a la denominada ley general de Educación Pública como un sostenedor común y corriente; pero que, a su vez, al ser un servicio público, tenemos una serie de restricciones que nos impiden el uso de las subvenciones de manera eficiente, rápida y oportuna por todos los procesos de licitación, de compra, etcétera. No obstante, quisiera advertir que no es solo en el proceso de compra, sino de todo un servicio público que debe estar dando permanentemente cumplimiento a una serie de instituciones que requieren horas profesionales, etcétera, puesto que realmente quitan bastante tiempo a la gestión educativa.

En ese sentido, hago una primera observación: si bien es cierto hay que adaptarse a lo público, resulta difícil para un buen gestor educativo llevar adelante su tarea si no cuenta con una gran dotación de personas y profesionales dedicados especialmente a contestar a todas las instituciones públicas a las que uno entra en contexto.

En ese orden, lo que ha sucedido es que el servicio local ha ido en un mejoramiento continuo de adaptación y de mejoras en el uso de los recursos, pero eso no significa que evidentemente ha habido deficiencias, como las que acusa la diputada Cristina Girardi. Por ejemplo, en 2019, el servicio local no pudo ejecutar los recursos de pro-retención porque llegaron tardíamente desde el ministerio en el mes de septiembre, por lo que tuvimos un espacio de tiempo muy reducido hasta octubre, que llegó el estallido social y la cosa se revoluciona en cuanto a gestión, además de la preocupación que había que tener por los establecimientos educacionales. La verdad es que ningún director estaba en condiciones de establecer un plan de compras y creo que difícilmente, aunque hubiésemos tenido el tiempo y la tranquilidad suficiente para hacerlo, por los plazos en que había que ejecutar esas compras, las hubiésemos podido alcanzar a realizar.

En 2020 mejoramos y, afortunadamente, todos los recursos de pro-retención los pudimos canalizar a través de la ayuda social, porque los utilizamos para comprar cajas de alimentos que entregamos a todos nuestros alumnos que caben dentro la subvención, fueron unas cajas muy interesantes y muy agradecidas por todas las comunidades. Sin embargo –y lo recuerdo-, los directores me reclamaban porque nos atrasábamos en el proceso de compra porque había que agotar nuevamente una serie de instancias, y se debía volver atrás y retrotraer los procesos porque, por ejemplo, pasaba algo con un producto determinado, etcétera; esas eran las cosas del día a día que van ocurriendo en este tipo de situaciones, las que finalmente se lograron.

La ejecución SEP fue avanzando, pero naturalmente tuvimos un enfoque hacia la implementación de los insumos sanitarios respecto de la pandemia y de lo que era importante abastecer en ese momento de nuestros funcionarios que participaban de la entrega de cajas.

También, en un momento tuvimos que entrar a hacer evaluaciones PIE, y había que tener más insumos para eso. Y todo eso para un servicio local, independientemente del monto, significa entrar en procesos de licitación, etcétera.

Para este año hemos planificado más, y evidentemente hay un proceso de adaptación de los directores, quienes tienen que colaborar en este proceso.

Nosotros, lo que hemos hecho este año fue adelantar el proceso de confección del PME, adelantando los recursos que estimativamente van a tener cada uno de los establecimientos, de manera tal que adelanten, al menos en esa parte del PME, sus requerimientos, y así nosotros podamos adelantar los procesos de compra cuando llegue la solicitud.

Ahora, ¿qué es lo que sucede? Cuando un sostenedor tiene 54 establecimientos, la cantidad de bienes que se solicitan es enorme. Por lo tanto, también ahí nosotros hemos hecho un aprendizaje, en el sentido de que tienen que hacer un cierre de artículos, y de acotar estas compras, porque de lo contrario –no les miento- se llegan a solicitudes del orden de 5.000 variedades de productos distintos. Eso, con un departamento de compras que tiene ocho personas, resulta casi imposible, porque se van produciendo distintas dificultades, y una o dos cosas retrasan todo el proceso.

Entonces, la acción que hemos tomado es que en esta oportunidad vamos a acotar la cantidad de bienes que los directores pueden elegir directamente; nosotros adelantarnos a los que de suyo se compran normalmente con recursos SEP, sin entrar en individualidades que no vienen al caso, por ejemplo, como lápices de colores, donde no tiene ningún sentido andar buscando marcas distintas según el colegio.

En el proyecto Movámonos por la Educación Pública nos ocurrió algo parecido. En este caso era peor todavía, porque la diferencia de necesidades, de recursos y de bienes que solicitaban era inmensa, y el servicio se hacía de una responsabilidad que costaba sacar adelante como proceso en la compra, lo que naturalmente genera deficiencias.

A veces tampoco se encuentran los proveedores, o se echan atrás, etcétera, todo lo cual va generando inconvenientes en el día a día, donde el grado de libertad que uno tiene para moverse ante estas contingencias también es difícil. Por ejemplo, nosotros teníamos una compra muy ambiciosa de computadoras en el mes de diciembre y, cuando estábamos llegando al final, el proveedor nos dice que no tenía los equipos.

Independientemente de todas las medidas legales que uno puede tomar, lo concreto era que nosotros no podíamos ir a comprar los equipos con esos mismos recursos a otro lado. No teníamos el tiempo y el momento no se nos daba, y que es

lo que le pasa a un servicio público y, evidentemente, otro sostenedor tendría la flexibilidad para poder solucionarlo de otra manera.

Respecto del concurso de directores, nosotros efectivamente estamos llevando muchos concursos adelante, porque había, primero que nada, una cola de retraso en cuanto a muchos cargos vencidos, que estaban siendo ejercidos por directores en grado interino. Luego de eso nos hemos ido acercando poco a poco, y llevamos tres procesos, aproximándonos a las fechas de vencimiento inmediatas que se producen del período de ADP del director, y comenzar inmediatamente el proceso, o haber adelantado el proceso de concurso y poder tener la designación del nuevo, cosa que todavía no podemos, pero estamos ya más cerca de eso.

¿Por qué esto? Porque con el Servicio Civil hemos visto la necesidad y la oportunidad de hacerlo en procesos más reducidos, de 5 o 6 concursos de escuelas o liceos. Al respecto, no conviene hacer un proceso grande. Por ejemplo, en 2018, el servicio hizo un proceso muy grande, de 26 establecimientos, de los cuales fracasaron la mitad. Entonces, lo recomendable para tener una mejor captación de candidatos es hacerlo -y así y todo resulta difícil- por equipos más chicos.

Nosotros hemos animado enormemente al personal del territorio, a nuestros directores y equipos directivos, porque tienen la experiencia, a que concursen de estos llamados a ocupar cargos de nuevo director.

Han ocurrido casos, y tengo mucha esperanza de que sigan ocurriendo, de que muchos directores van a quedar nuevamente elegidos, por las capacidades que tienen, pero lamentablemente hay casos en que la persona no avanza en el proceso, en algo que es totalmente ajeno a nosotros, tal, por ejemplo, como lo planteó el director señor Dorian Tobar, quien llegó hasta una etapa, que está totalmente tomado por la consultora, y donde nosotros no tenemos ninguna intervención en ese aspecto.

Efectivamente, él me manifestó el deseo de postular a la Escuela Neptuno, y las puertas estaban abiertas para postular a dicha escuela, porque nosotros no tenemos ningún inconveniente en eso, sin embargo, las etapas de selección son para todos por igual y en las cuales se pueden producir este tipo de situaciones.

En ese sentido estamos avanzando. Hasta ahora ya hemos concretado tres concursos. Al respecto, sí debo decir que hemos enviado un escrito al Servicio Civil, donde creemos que tenemos que mejorar el estándar del proceso, específicamente, de los últimos dos procesos que hemos hecho y donde estaban en juego 14 directores, y donde hasta la fecha tenemos solamente 8 elegidos.

¿Por qué? Todos estos directores renunciaron una vez designados. Simplemente, no asumieron su cargo y se fueron. Tres escuelas quedaron con concurso desierto, y otros no siguieron participando, estando dentro de las ternas.

Ahora, si bien la gente es libre de participar, le hemos pedido al Servicio Civil que seamos un poco más rigurosos y quizá buscar alguna alternativa dentro de los procesos que a nosotros nos asegure un poco mejor el poder contar con los candidatos hacia adelante, porque 8 de 14 ya es una cifra significativa; porque es mucho que se pierdan 6.

La próxima semana estamos cerrando 5 nuevas designaciones de directores, y estamos abriendo los concursos en la medida en que el Servicio Civil también nos dé fecha, a la brevedad posible, dentro del curso de este año. Nosotros hemos enviado la nómina -lo que es público- de todos los directores cuyos períodos vencen durante este año, y tiene que entrar en etapa de concurso su establecimiento.

En primer lugar, quiero hacer una presentación sobre el tema referido al Consejo Local que se planteó la semana anterior. Su constitución se refiere en una línea de tiempo que está contenida en tres años: 2018, 2019 y 2020. Se hizo una primera convocatoria a través de un oficio ordinario el 28 de noviembre del año 2018, donde se invitaba a todos los directores de colegios a que convocaran a sus consejos

escolares para que invitaran a participar a sus distintos estamentos como candidatos a miembros del Consejo Local. Esta convocatoria se cerraba en un mes, que es el plazo establecido por la normativa –28 de diciembre-. Se cerró con cero respuestas por parte de los establecimientos y, naturalmente, cero candidatos.

Luego de eso, se hizo una segunda convocatoria en el mes de marzo del 2019, cuyo cierre era un mes después -21 de abril-. Se llamaba en esa misma convocatoria a elecciones el 28 y 29 de agosto. Ahí la convocatoria tuvo la respuesta de trece establecimientos de un total de 54. Se presentaron 29 candidatos, distribuidos como lo indica la tabla: siete representantes de los padres, tres candidatos de los estudiantes, cinco de los profesionales de la educación, ocho de los asistentes de la educación y seis directivos. Posteriormente, se retiraron siete candidatos.

Simultáneamente, el Servicio Local ofició a la Comisión Nacional de Acreditación, de manera tal que fueran informadas todas las universidades, institutos profesionales y centros de formación técnica de la Región Metropolitana, a fin de convocarlos y constituir los siguientes dos miembros del Consejo Local: uno en representación de las universidades, y otro en representación de los institutos profesionales y centros de formación técnica.

En el mes de julio, el Colegio de Profesores representó a esta dirección ejecutiva su objeción respecto al proceso de esta convocatoria. Señaló que le parecía que era muy poco representativa de los establecimientos educacionales y de todas las comunidades educativas.

Este tema se revisó junto con la DEP y se determinó que resultaba conveniente hacer una nueva convocatoria de manera tal de poder ampliar este proceso de participación animando a que las comunidades participaran de forma mucho más intensa y se interesaran por el proceso. Entonces, este proceso de elecciones que estaba convocado para el 28 y 29 de agosto se suspendió.

Se hizo una tercera convocatoria el 23 de agosto con fecha de cierre el 23 de septiembre, y se llamó a elecciones para los días 27, 28 y 29 de noviembre. Afortunadamente, este proceso de cierre terminó de mejor forma, con 31 establecimientos adicionales participando y 36 nuevos candidatos.

Finalmente, las elecciones se pudieron llevar a efecto con un total de 44 establecimientos, 58 candidatos y en un proceso de votación muy democrático, porque se realizó a través de urnas constituidas en todos los establecimientos educacionales y los directivos fueron convocados al servicio local.

Lamentablemente, por normativa se requería un quorum de 30% para que fuera válido el estamento elegido. Ese porcentaje no se logró en el caso de los Centros de Padres y Apoderados (CEPA), por lo que hubo que repetir esa elección, y en segunda vuelta ya no interesaba el porcentaje. La elección se repitió el 10 de diciembre, y en esa segunda vuelta participó el 12,1% de los padres. Finalmente, se logró elegir a los dos representantes de dicha comunidad.

El 17 de junio de 2020 se realizó la primera convocatoria a universidades, institutos profesionales y centros de formación técnica. Quiero explicar el contexto y por qué se dilata este llamado a universidades, institutos profesionales y centros de formación técnica.

En diciembre se estaba cerrando el año. Eran circunstancias bastante especiales las que estábamos viviendo, por lo que empezamos a sensibilizar esta convocatoria con las universidades porque estimamos que costaba explicar la ley en cuanto a exigir a las rectorías de cada una de las instituciones que presentaran un representante ante el servicio local. Conversamos con ellos, pero la verdad es que costó hacerles entender esta situación. Llegamos a enero y ya no tenía mucho sentido seguir avanzando en el tema, además de que había poco interés de parte de estas organizaciones, por lo que acordamos dejarlo para marzo.

En marzo llegó la pandemia, hubo que canalizar los esfuerzos hacia otras exigencias inmediatas y urgentes. Pasado un tiempo, entre abril y mayo, nuevamente volvimos a empezar a sensibilizar a estas instituciones y logramos hacer la primera convocatoria en la fecha señalada.

Bueno, ocurrió que la convocatoria para hacer la primera elección se cerraba el 24 de junio, pero no se presentaron las instituciones que se requerían para establecer quorum, por lo que en ese mismo momento hubo que fijar una segunda convocatoria para el 7 de julio.

Finalmente, ese día se presentaron 10 instituciones: 6 universidades y 4 centros de formación técnica, y se logró elegir a los dos candidatos que faltaban para conformar el Consejo Local.

El Consejo Local quedó constituido en la forma y con los participantes que observan en la presentación. El presidente elegido fue el señor Dorian Tobar, quien era representante de los directores de los establecimientos educacionales. Hay una referencia de las reuniones que se tuvieron durante el 2020, las cuales ascendieron a seis, y el nivel de participación de los miembros de cada uno de ellos es el que se indica. En general, hubo buena asistencia, aunque algo débil en el caso de los estudiantes. Particularmente, una de las representantes de las mamás tuvo algunos inconvenientes y por eso su baja asistencia.

Respecto de los temas que se trataron en esas sesiones, costó establecer la metodología de trabajo, porque costó orientar el trabajo de ellos.

En la primera sesión, junto con que los miembros eligieran su presidente, intentamos hacer una exposición de lo que era la normativa y de cuál era el objetivo que tenía que cumplir el Consejo Local. A su vez, nosotros expusimos con todos nuestros directores y subdirectores las distintas áreas del servicio local.

En las sesiones siguientes se fueron abordando algunos temas un poco al azar –diría-, porque no se presentaban tablas, por lo que fuimos insistiendo en esa necesidad. Por lo mismo, se transformaron en sesiones para abordar temas de algún interés, en que esta dirección ejecutiva y los subdirectores que invitábamos íbamos respondiendo.

En algún momento surgieron algunas iniciativas, como alguna idea de pro-retención, de abordar alguna propuesta para reunirse con los directores o con las comunidades, pero, hasta donde entiendo, esas ideas no prosperaron.

Finalmente, en diciembre se cerró el año con una última sesión, en la cual ellos hicieron reflexiones sobre sus experiencias como consejeros, el aprendizaje que conlleva la responsabilidad de sus cargos y lo que faltaba para asumir en propiedad y entender el aporte de los consejos locales.

Antes de entrar en la formulación del Plan Estratégico Local (PEL), que fue otras de las consultas que se nos hizo la vez anterior, primero quiero hacer una breve mención.

Según el artículo cuadragésimo sexto transitorio, de la ley N° 21.040, el director ejecutivo tendrá ocho meses desde el traspaso del servicio educacional para sancionar el Plan Estratégico Local. Como esta dirección ejecutiva asumió el 22 de abril de 2019, debía hacer entrega de su plan estratégico el 22 de diciembre para someterlo a consideración del comité directivo.

En atención a que la ley también contempla una participación importante del Consejo Local y de las demás comunidades, como señala el artículo 45 de la misma ley N° 21.040, lo que se hizo durante ese periodo fue recoger las orientaciones de la Dirección de Educación Pública (DEP) que se hicieron durante los primeros meses de 2019. Después de eso se generó una fase constructiva y muy participativa, en atención a que en 2019 no contábamos con el Consejo Local, porque estábamos en estas fases de conformación de los candidatos, etcétera.

Durante esa fase se hizo una reunión de consejo de directores en una modalidad de taller y bajo el Análisis FODA, donde se fueron presentando los distintos problemas del servicio local y del territorio, de manera de concluir cuáles eran las fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas que tenía el servicio; recoger esas inquietudes y conformar el plan estratégico.

Después hubo una reunión con los 54 consejos escolares, la cual se subdividió en aproximadamente cinco reuniones, en las que también se incluyó a los jardines infantiles. En realidad, participaron los 77 establecimientos del territorio. También hubo una reunión con las asociaciones gremiales y el Colegio de Profesores, y, finalmente, con los funcionarios del servicio local, pues era muy interesante conocer toda la experiencia que se había tenido a lo largo de la formación del servicio.

Concluida esa etapa, que terminó el 20 de octubre, se comenzó la fase de formulación del plan estratégico por parte de las distintas subdirecciones, liderado por la subdirección de Planificación y Control.

Quiero señalar que el 10 de diciembre fueron electos los primeros ocho miembros del Consejo Local. Por lo tanto, si eventualmente hubiéramos logrado conseguir a los representantes de las instituciones de las universidades y de los centros de formación técnica, mediaban nueve días hasta poder entregar ese programa, lo cual hacía absolutamente imposible considerar la participación del Consejo Local de manera de cumplir con los plazos establecidos por la normativa. Por eso, pusimos énfasis en el trabajo con los distintos consejos ya señalados.

Finalmente, el 21 de diciembre -el 22, incluso- se entregó el plan estratégico al comité directivo y, el 21 de enero de 2020, el comité directivo entregó sus primeras observaciones, pero se reservó la aprobación de este plan estratégico hasta que no se encontrara aprobada la Estrategia Nacional de Educación Pública (ENEP).

La cadena de hechos que ocurrieron después es la siguiente. En mayo, la Estrategia Nacional de Educación Pública fue aprobada; el 21 de junio, el comité directivo entregó sus observaciones finales buscando articular ambos instrumentos; el 4 de septiembre, entregamos la última propuesta recogiendo esas observaciones y, finalmente, el 21 de octubre de 2020, se aprobó el Plan Estratégico Local (PEL).

Respecto de la formulación del plan anual, que fue otro de los comentarios que se hizo, de 2020 para el 2021, el 15 de octubre se envió al comité directivo, que es la fecha tope que establece la normativa. Para ello hay un período de elaboración previo, que se va haciendo con el tiempo, evidentemente, pues no hay una fecha formal de entrega, y donde lo único que se recoge formalmente es que se vaya a la conferencia de directores para recoger todas las opiniones y sugerencias que quieran hacer los directores de los establecimientos, reunión que se efectuó el 9 de octubre del año pasado.

Después de eso, la formulación de este plan anual se hace llegar –pongo el correo para que se entienda bien- a todos los miembros del Consejo Local, a los presidentes y al resto del servicio, en el cual se indica el plan anual, el PEL y el anexo del PEL, para que tengan conocimiento de ello; la estrategia nacional y los planteamientos recogidos de la conferencia de directores. Esto se hace llegar el mismo 15 de octubre.

Finalmente, hay una respuesta del Consejo Local que, como señalé la vez pasada, se refería fundamentalmente a comentar el PEL, lo cual ya estaba fuera de contexto. En ese sentido, la respuesta del comité de directivos fue sin observaciones al plan anual y, finalmente, el 13 de diciembre se respondió fundadamente las observaciones del comité directivo, entregándose copia a todos.

El 15 de diciembre se aprobó este plan anual una vez que se había enviado a la Dirección de Educación Pública y no se habían recibido comentarios dentro de los 10 días que establece la normativa.

Otra consulta que se hizo la vez anterior fue respecto de cómo había sido el concurso de directores y cómo se estaba llevando a cabo. El contexto es el siguiente. En 2018 se hizo un llamado a concurso para 26 cargos -está señalado en la primera fila-, de los cuales se declaró desierto a 13 de ellos. En consecuencia, se designaron 13 cargos de los cuales hoy están operando 11, o quedaron operando 11 en su tiempo, porque dos renunciaron en el intertanto.

Durante el 2020 se fueron haciendo las siguientes convocatorias: en enero se llamó a seis concursos; en septiembre, a siete; en octubre, a seis y, en diciembre, a seis. En total se hicieron convocatorias para llenar 25 cargos durante el año.

El detalle de cada uno de los cargos está indicado abajo, e indica cuál era la calidad del cargo para el cual se estaba llamando a concurso.

En general, los dos primeros concursos -los de enero y septiembre- son para llenar cargos interinos, es decir, para tratar de ir despejando la incertidumbre respecto de todos aquellos cargos que no contaban con designación de la Alta Dirección Pública y, además, intentando reponer los cargos que fueron dejados por renuncia en el concurso de 2018.

En el mes de octubre se pudo comenzar a convocar a concurso para cargos que están venciendo en su período de ADP, razón por la cual la composición es 4/2-4/2, tal como se observa en la lámina.

Sin embargo, como señalé la vez pasada, quedaron tres cargos desiertos en octubre, para los cuales no se pudo conformar terna, por lo que, al final, la línea de designación es la que aparece abajo, 6, 7, 3 y 6 en diciembre, totalizando 22 durante el año. También ocurrió que durante el período posterior a las designaciones se produjeron renuncias. Algunas de esas renuncias se reincorporaron a los procesos de concurso posteriores. Por eso, el neto del año fue que, en definitiva, quedaron designados 19, con directores trabajando en los servicios locales. Esos 19, más los 11, constituyen 30 cargos, por lo que quedan por establecer 22 cargos durante el 2021, programación que ya se ha enviado al Servicio Civil y cuyas convocatorias son para mayo, junio, julio y agosto, buscando copar los 22 cargos que restan por vencer.

En definitiva, con esos 22 cargos se completarían los 41 cargos en concurso procesados durante los últimos cuatro años, y quedarían cargos vigentes ADP, al 31 de diciembre, que vienen de períodos anteriores, que son 13, con los cuales se conformarían los 54 cargos que representan la plaza total del servicio local.

Respecto del trabajo con directores, hay una labor con ellos que comprende todo el servicio local, por lo pronto el área de Asesoría Técnico Pedagógica –ATP-, a los que se aboca el servicio en su conjunto. Sin embargo, hay un trabajo en especial que quiero destacar. En primer lugar, una red de directores que lidera esta dirección ejecutiva, donde tenemos una foco absolutamente pensado en el liderazgo, en donde trabajamos distintos temas con los directores, especialmente en lo que significa el liderazgo colaborativo y, el año pasado, en particular trabajamos el liderazgo enfocado a la gestión del cambio. Hubo cinco sesiones que se desarrollaron entre el 24 de julio y el 30 de octubre que, si bien son cinco sesiones, son 10 reuniones porque se trabaja en grupos reducidos. Luego, el 9 de octubre, tuvimos la conferencia de directores y, el 4 de diciembre del 2020, tuvimos una actividad de difusión de la Estrategia Nacional de Educación Pública y de nuestro Plan Estratégico Local.

Asimismo, se hizo un comentario sobre la conectividad con nuestros estudiantes del servicio local. Al respecto, comenzaré señalando la entrega de notebooks en el marco del programa Mi PC que lleva adelante la Junaeb. El año pasado se entregaron 1.893 equipos a séptimos básicos de establecimientos regulares, distribuidos en los establecimientos de cada una de las comunas, según se indica en la primera columna de la imagen.

En la cuarta columna aparece la entrega de 29 equipos a los séptimos básicos equivalentes de los Centro de Educación Integrado de Adultos (CEIA). Luego, a los

estudiantes en escuelas especiales se entregaron siete, que aparecen en la quinta columna y, a estudiantes rezagados, es decir, que venían de años anteriores, se entregaron 54 equipos. En total, durante 2020 se entregaron 1.983 equipos.

¿Cuál es la disponibilidad de conectividad que tienen en su hogar nuestros estudiantes? A la fecha, la información a disposición establece que el acceso a internet en el domicilio es del 48% y el acceso desde teléfono celular con internet sube al 70%. Sin embargo, hay un 17% y un 15%, respectivamente, sin información, porque si bien la encuesta se entregó, esta no fue respondida. Finalmente, un 35% responde no tener internet en el domicilio, y un 15% responde no tener celular con acceso a internet.

También hemos preguntado si el estudiante cuenta con *tablet* en el hogar. Desde luego, la cantidad es ínfima: 11,8%. Respecto de si el estudiante cuenta con celular o con acceso a internet en el hogar, la respuesta es 77,12%, en aumento; estudiantes que cuentan con un computador en el hogar, 36,68%; estudiantes que cuentan con algún tipo de dispositivo electrónico de uso exclusivo para conectarse a clases -aquí la cosa aumenta, porque puede ser cualquier dispositivo que la familia cuente-, 64,36%. También hemos preguntado cuánto es el tiempo de apoyo que tiene su hijo durante el período de educación no presencial.

En el nivel parvulario, en general, la gente está muy de acuerdo en el rango de decir que tiene y que dispone de tiempo, así como también se siente capaz de ayudar en las tareas escolares a sus alumnos.

Otra pregunta dice relación con el tiempo que se tiene para la atención de sus hijos. Mayoritariamente, la gente se sitúa de una a tres horas, pero el tiempo que predomina es de tres a cinco horas.

En cuanto a la conectividad de los estudiantes -que haya algún adulto a cargo durante el día-, nos ha llamado la atención que mayoritariamente siempre hay un adulto. El 92% dice que sí.

¿En qué horarios puede conectarse? El 40% dice que durante todo el día; en la jornada de la mañana, el 30%, lo que hace una disponibilidad bastante amplia de conexión.

Respecto de las realizaciones de presupuesto que me parece interesante mencionar: en la presentación pueden apreciar los gastos de prorretención, 151 millones y medio, aproximadamente; SEP, 5.523 millones, desglosados en esos conceptos; 670 millones en insumos sanitarios; 179 millones en *SIM card*; 86 millones en capacitación y formación profesional; 138.600.000 en el Programa Movámonos -con el desglose que aparece en la lámina- para cubrir participaciones en 53 establecimientos.

Me parece relevante destacar nuestras inversiones en los distintos establecimientos. Durante el período 2018 se hizo una inversión de casi 570 millones, ciento por ciento ejecutados; en 2019, una inversión de 1.432 millones en catorce proyectos, ciento por ciento ejecutados. En la lámina se pueden apreciar las imágenes. En 2020 se hace una inversión de 4.600 millones, con catorce proyectos, diez en Lo Prado y cuatro en Cerro Navia. Pasaré muy rápido por acá, porque está el desglose en cada uno de los establecimientos.

Cabe señalar que esto está totalmente financiado, pues contamos con los recursos. Simplemente estamos con un atraso, producto de que pudimos partir recién en diciembre. La inversión realizada hasta 2020 es de 6.600 millones, en treinta y un establecimientos.

En cuanto a las categorías de desempeño de nuestros colegios, en general, se han mantenido en la educación media y en la educación básica ha habido un cierto descenso de establecimientos insuficientes. Naturalmente no es solo mérito del

Servicio Local, esto también viene con algún aporte de los colegios cuando estaban municipalizados.

Por último, esta es nuestra situación para el período 2021. Estamos en un plan educativo a nivel trimestral, colocando especial énfasis en los diagnósticos integrales, con la nivelación y un sistema dual -lo hemos pensado siempre así-, con un especial foco en el acompañamiento socioemocional y psicoemocional de nuestros estudiantes.

Seguimos fortaleciendo nuestras redes de mejoramiento educativo, que para nosotros resulta fundamental, un punto destacado de nuestra gestión; fortalecimiento de la enseñanza TP, en donde tenemos varias expectativas de desarrollo de revisión de carreras, programas y la creación de un comité asesor estratégico.

También tenemos -esto nos llena mucho de orgullo- un centro de salud mental que estamos iniciando en uno de nuestros establecimientos, donde vamos a poder contar con más personal para la atención de nuestros alumnos. Seguimos colocando énfasis en la formación profesional, como se aprecia en la lámina a través de las iniciativas.

Seguimos en el proceso de consolidación de nuestra oficina central, de nuestras dependencias en San Pablo, y con una inversión esperada en proyectos de R.O de los jardines infantiles y otros por 1.750 millones.

9) La Directora Nacional del Servicio Civil y Presidente del Consejo de Alta Dirección Pública, señora Solange Garreaud de Mainvilliers Gerlach.

La señora **Garreaud de Mainvilliers** asistió acompañada de la Jefa del Área de Educación, señora Angélica Fuenzalida y del Subdirector de Alta Dirección Pública, señor Basilios Peftouloglou. Expuso en la sesión 7ª[12], de fecha 12 de abril de 2021, de la siguiente forma:

Como directora del Servicio Civil y presidenta del Consejo de Alta Dirección Pública, quiero compartir con ustedes una breve presentación respecto de las bases que sustentan nuestro sistema de Alta Dirección Pública. En este sentido, nosotros queremos dar a conocer a la comisión investigadora cómo funciona el Sistema de Alta Dirección Pública, poniendo foco específicamente en los Servicios Locales de Educación.

Como primer punto, quiero dejar en claro que existen principios y valores que sustentan la Alta Dirección Pública, como el mérito, la no discriminación, la confidencialidad de los procesos y la imparcialidad en el manejo de los mismos. A continuación, haré un poco de historia respecto de lo que es el Sistema de Alta Dirección Pública.

Desde 2004 hasta hoy, empezamos con 688 cargos y actualmente llegamos a los 4.989 cargos. En ese sentido, debemos tener en consideración que este salto importante tiene su base o fundamento en una muestra de legitimidad hacia el sistema. Dicha muestra se evidencia en que, durante los últimos años especialmente, cada nuevo proyecto de ley que tiene que ver con la creación de una institucionalidad o reforzamiento de alguna de ellas, incorpora los concursos de Alta Dirección Pública como parte importante de la gestión de esta nueva institucionalidad. El salto que ustedes pueden ver en la imagen desde 2011 a 2012 se debe básicamente a la

---

[12] El acta de la sesión, que contienen su exposición íntegra, así como las consultas de los diputados y diputadas y sus respuestas, puede encontrarse en el siguiente link: https://www.camara.cl/legislacion/comisiones/sesiones.aspx?prmID=2902&prmIdTipo=2103.
Asimismo, la exposición que realizó en la sesión 7ª, se encuentra disponible en el siguiente link: https://www.camara.cl/legislacion/comisiones/documentos.aspx?prmID=2902
El video de esta sesión puede encontrarse en http://www.democraciaenvivo.cl/

incorporación de los concursos de directores de establecimientos educacionales y jefes DAEM, establecidos en la ley N° 20.501.

¿Cómo se desglosan estos 4.989 cargos? Tenemos 242 cargos de designación presidencial, entre ellos 145 jefes de servicio; 31 directores de empresas, consejeros y comisionados, por ejemplo Codelco; 51 ministros en tribunales ambientales y tributarios aduaneros, y 15 rectores en centros de formación técnica estatales. Además, tenemos 1.161 cargos de segundo nivel jerárquico; 154 cargos no adscritos, como, por ejemplo, el Consejo para la Transparencia y el Instituto Nacional de Derechos Humanos; 260 cargos de directores de educación municipal, y 3.172 directores de escuelas públicas.

Haciendo el foco en el tema que nos convoca: la ley N° 20.501, que se implementó en 2012 ¿cuál es la revisión hasta hoy?

En términos de cobertura, tenemos un 65% de las escuelas impactadas, es decir, con un director nombrado, y el 35% restante está en proceso, en concurso, por lo que estamos en espera de los resultados.

En cuanto a la matrícula -la cantidad de alumnos- el 69% de nuestros niños está en una escuela con un director nombrado por la Alta Dirección Pública.

En términos de concursabilidad, el 63% de los concursos ha tenido un nombramiento.

Estos son resultados bastante alentadores. Hoy tenemos alrededor de 5.000 escuelas que forman parte del sistema de educación municipal, de las cuales tenemos la obligación, por ley, de concursar 3.172. De esas 3.172 escuelas, 2.175 ya están con un director nombrado.

Qué sucede con la ley N° 21.040, que es la preocupación que ustedes nos han compartido a través de esta invitación. Daré a conocer algunos antecedentes generales respecto de la misma.

El Sistema de Alta Dirección Pública participa en la selección de los directivos para el sistema escolar, con el propósito de instalar el mérito -uno de los principios del sistema-, en el acceso a estos cargos y contribuir, de esta manera, a la profesionalización de la labor directiva educacional.

La ley N° 21.040 incorpora al Sistema de Alta Dirección Pública un total de 418 cargos durante todo el período que esta ley tiene considerada. Poniendo el foco en los años más recientes, entre 2018 y 2020 tuvimos la exitosa implementación de 11 Servicios Locales de Educación, teniendo –luego entraremos en el detalle- los 11 directores de los servicios locales con nombramientos.

Es importante que la comisión conozca, con más de detalle, cómo funcionan los procesos de la Alta Dirección Pública.

En términos generales, son todos iguales. En este caso, lo hemos puesto en la presentación para poner el foco en aquellas particularidades que tienen los Servicios Locales de Educación.

¿Cómo se inician los procesos de la Alta Dirección Pública? Se inician con una etapa de preparación a través de una estrecha y permanente comunicación con la contraparte. En este caso, estamos como contraparte de la DEP y del Mineduc. Hay una asesoría permanente hacia ambos lados, en términos de preparar cada uno de los concursos. Se trabaja en una propuesta de perfil y se asesora a la Dirección de Educación Pública en lo relativo a las bases de los convenios de desempeño de los nuevos altos directivos públicos.

Luego, se llega a una propuesta de perfil y convenio, que es presentada al Consejo Directivo Local, según lo indica la ley, y posteriormente pasamos a la etapa de planificación, la cual es previa a la convocatoria del concurso.

En la etapa de planificación, el Mineduc, con todos los antecedentes anteriores correspondientes a la etapa de preparación, hace la definición final del perfil. Después, presenta el perfil al Consejo de Alta Dirección Pública, en una sesión formal, y este aprueba ese perfil. Solo después de esta aprobación por parte del Consejo es posible iniciar la siguiente etapa del proceso, que es la convocatoria pública. Todos los concursos tienen una convocatoria pública en medios de amplia difusión. Además, se fortalecen a través de páginas del mismo ministerio. Se hace una difusión amplia de estos concursos, con el objetivo de incorporar la mayor cantidad de postulantes.

Más adelante viene la etapa de reclutamiento, que es cuando se reciben los antecedentes de los postulantes. Hay un sistema de postulaciones en línea, donde pueden ingresar los currículum, que serán revisados en las siguientes etapas.

En el proceso de evaluación general, la primera parte corresponde a un análisis de admisibilidad, que tiene relación con el cumplimiento o no cumplimiento de los requisitos legales que define el perfil. Tales requisitos son definidos por ley. Seguidamente, viene el análisis curricular, que dice relación con que a cada uno de los postulantes se le revisa su historia curricular y si cumple o no con las definiciones que se han hecho en términos de conocimiento y experiencia y que están radicadas en el perfil.

Enseguida, los candidatos que pasan de esa etapa llegan a la entrevista gerencial, la cual es realizada por empresas consultoras de vasta experiencia. Las empresas consultoras que realizan los concursos para los Servicios Locales de Educación son las mismas que forman parte del convenio marco que tiene nuestro servicio para prestar servicios de consultoría en términos de selección y evaluación de candidatos para todos los cargos que participan en la Alta Dirección Pública. Son empresas de alto nivel y que luego de cada concurso que realizan son evaluadas por los comités o por el Consejo. Periódicamente, el Consejo es informado respecto de las notas que aquellas han obtenido. Dichas empresas pasan regularmente por procesos de retroalimentación respecto de cómo han ido llevando los procesos de selección; por lo tanto, el nivel de calidad y de servicios que prestan en el reclutamiento y en la selección son una permanente preocupación nuestra.

Finalmente, tenemos la evaluación de competencias, que también es realizada por esas mismas empresas.

La asignación de empresas se hace considerando algún grado de especialidad en las temáticas y la cantidad o carga de trabajo que tienen, a través de un sistema absolutamente transparente en su asignación.

Luego, tenemos las entrevistas que realiza el Consejo de Alta Dirección Pública. Después de la evaluación de competencias, el Consejo recibe un número más ajustado de candidatos o postulantes que cumplen con cada una de las etapas anteriores. Estos candidatos o postulantes pasan a ser entrevistados por el Consejo en igualdad de condiciones. Hoy día, todos se entrevistan en forma telemática, a distancia. En verdad, es un proceso bastante estandarizado y el mismo –insisto- para todos los cargos de la Alta Dirección Pública.

Las entrevistas las realiza el Consejo en pleno, que se divide en dos comisiones paralelas, por la cantidad de cargos que implican estos procesos, y en general los cargos de Alta Dirección Pública.

El Consejo arma una nómina entre cuatro y ocho candidatos, la que envía al Consejo Directivo Local.

Estas tres cajitas verdes tienen un color distinto, porque quisimos relevar que estas tres cajitas son de absoluta gestión del Servicio Civil, de las empresas consultoras y también de los equipos profesionales que integran el Servicio Civil.

Luego, viene la entrevista del Consejo Directivo Local. Aquí nos detendremos un poco. Ahí dice asesoría y capacitación de la Dirección Nacional del Servicio Civil

a los consejos locales de directivos locales. En este sentido, lo mismo que al inicio, cuando nosotros teníamos una coordinación, comunicación y compenetración muy cercana con la DEP y con el Mineduc, para el inicio del proceso, aquí pasa lo mismo, porque los consejos directivos locales son uno de los actores relevantes del proceso.

Entonces, nosotros hemos llegado a definir un sistema de acompañamiento y de asesoría a los consejos cuando les toca la etapa de tener que entrevistar, y este acompañamiento es casi físico. Uno de los profesionales del Servicio Civil va y lleva físicamente la nómina y la presenta al Consejo y ahí se gatilla una serie de acciones. Se entregan manuales en los cuales va información respecto de cómo hacer las entrevistas, con la necesidad de asegurar el cumplimiento de cada uno de los principios: la no discriminación, el mérito, la igualdad de trato, en términos -por ejemplo- de cosas tan básicas como el tiempo que se destina a cada una de las entrevistas; debe haber un igual trato para todos los candidatos.

Se les entrega, también, pautas de entrevistas y hay una asesoría permanente en cuanto los consejos directivos locales así lo requieran y formalmente lo hayan pedido. En esta etapa de las entrevistas de los consejos locales hemos tenido solicitudes de acompañamiento de los 11 servicios locales de educación.

Posteriormente, el Consejo Local, realizando la entrevista apegado a las normas y principios de Alta Dirección Pública, recibe la nómina e inicia el proceso de evaluación de sus candidatos, para llegar a una nómina de tres personas, la que es finalmente presentada al Presidente de la República, quien tiene la potestad de nombrar o de declarar desierto.

Otro hito importante que hay que tener en cuenta a la hora de observar el rol técnico del Servicio Civil en la instalación de esta nueva definición de los servicios locales de educación, tiene que ver con el perfil.

Esta es una estructura de perfil que es la misma que tenemos para todos los cargos de Alta Dirección Pública. O sea, no hace distinciones; pero sí el contenido respecto de cada uno de estos puntitos, que va en relación con las características del cargo de la institución.

Pero en términos globales, el primer foco uno lo debiera hacer en términos de los requisitos legales, la experiencia y el conocimiento.

Por ejemplo, los requisitos legales dicen: estar en posesión de un título profesional, de una carrera de a lo menos ocho semestres de duración, otorgado por una universidad o un instituto profesional del Estado o reconocido por éste y acreditar una experiencia profesional no inferior a cinco años y contar con experiencia relevante en el ámbito educacional. Eso es lo que está definido por ley como requisito para poder participar en estos concursos.

El requisito legal es insumo para el análisis de admisibilidad; es el primer filtro, una vez terminado el reclutamiento.

Luego, pasamos a la experiencia y conocimiento. Este componente es evaluado por las empresas consultoras en el filtro curricular. En este caso, los perfiles establecen que es altamente deseable poseer experiencia relevante en gestión y administración de proyectos educativos en un nivel apropiado para las necesidades específicas de este cargo. Adicionalmente, se valorará experiencia en algunas de las materias, como planificación estratégica, gestión de recursos físicos financieros, humanos y materiales, gestión educacional y/o liderazgo educacional o control de gestión. Además de los cinco años que se señala en el requisito legal, aquí se hace presente que se valorará poseer tres años de experiencia en cargos directivos y/o de jefatura en instituciones de similar complejidad.

Otras de las cuestiones en que se debe poner atención al ver un perfil son las competencias para el cargo. En el Sistema de Alta Dirección Pública hay un abanico

de siete competencias, de donde cada ministro, cada ministerio o jefe de servicio, define cinco para perfilar a los candidatos que son de su interés.

En el caso del director ejecutivo de servicio local, las competencias evaluadas son: visión estratégica, gestión y logro, gestión de redes, manejo de crisis y contingencias, y liderazgo interno y gestión de personas.

¿Se acuerdan de que la empresa consultora hacía una entrevista gerencial y luego una entrevista por competencia? Bueno, la empresa consultora que está validada para realizar esta gestión determina, a través de una evaluación por competencia o de incidentes críticos, cuál es el nivel de cada uno de los candidatos que alcanza en relación a las competencias.

Luego, y como esto es una especie de embudo, la puerta de entrada no puede ser tan cerrada, sino que más o menos abierta para que vaya cayendo -en cumplimiento de los distintos requisitos- un número acotado de candidatos, que son entrevistados por el Consejo de Alta Dirección Pública.

A través del proceso que ustedes acaban de ver, estos son los resultados que obtenemos de la primera etapa de selección e instalación del Sistema de Alta Dirección Pública en la nueva institucionalidad de la nueva educación pública.

En este sentido, hoy tenemos 58 cargos, 11 de los cuales corresponden a un primer nivel, es decir, a los directores de los servicios locales de educación y el resto a los cargos de segundo nivel: jefes de administración y finanzas, jefes de recursos humanos, jefes de gestión territorial y jefaturas técnico-pedagógicas.

Hoy, en el primer nivel, tenemos 11 directivos ya nombrados. En el segundo nivel, se han realizado 60 concursos, porque hay algunos de estos concursos que han quedado desiertos y se han vuelto a publicar. Hay cuatro cargos que están todavía en nivel de evaluación en alguna parte del proceso.

Por lo tanto, aquí se han hecho más concursos que el número de cargos, en la búsqueda del compromiso de dotar a cada uno de los servicios locales con los mejores candidatos.

En términos de postulaciones –como muestra el gráfico- tenemos que el 48% de las postulaciones son de una vez -una persona postula una sola vez al cargo-, y el 52% restante que postula más de una vez.

Esta es una ocurrencia que se da en todos los cargos del sistema. Por ejemplo, hay cargos en el área de salud, donde probablemente el porcentaje de quienes postula más de una vez a un cargo es bastante mayor, y esto tiene que ver con la búsqueda de alternativas de trabajo y con el interés de algunos postulantes de poder acceder a diversos cargos. En la lámina se observan los cargos de primer y segundo nivel, y no hay diferenciación respecto de ellos. Sin embargo, la verdad es que es un comportamiento más o menos estándar que tenemos en el resto de los concursos, donde hay gente que participa en más de un proceso, cuando están bajo la misma institucionalidad. Por eso hice la comparación con salud, por ejemplo, donde los directores de los servicios de salud son homólogos a los directores de los servicios locales de educación, en términos de que son las cabezas de serie que ven sus establecimientos, que están abajo, y que es la misma conducta de postulación que se da en salud.

A modo de cierre, el Sistema de Alta Dirección Pública ha tenido, en forma constante, un crecimiento validado por la credibilidad, tanto en el proceso como en la defensa y aplicación de cada uno de los principios y valores del sistema.

Además, contamos con un equipo profesional tremendamente validado, en términos de la experiencia de bastantes años realizando concursos en distintos ámbitos y para distintos niveles de cargos. En ese sentido, la incorporación de cargos de la gestión educativa, directamente relacionada con nuestros niños, niñas y adolescentes, que son alumnos de la educación pública, y que son parte de la

población vulnerable de nuestro país, no hacen más que fortalecer el compromiso del Servicio Civil y del Consejo de Alta Dirección Pública con el éxito de esta nueva educación pública.

Es en ese sentido que ponemos a disposición de todos los actores relevantes: del ministerio, de la DEP, de los directivos locales, de los directores de los servicios locales, de todos los actores relevantes de esta nueva institucionalidad, todo nuestro conocimiento y nuestra experiencia en la gestión de procesos concursables.

Respecto del perfil -voy a responder en la perspectiva del rol técnico que nuestro servicio tiene en el desempeño de estos concursos-, en primer lugar, es necesario recordar que dentro del proceso había una etapa previa, que era la de preparación y planificación, donde hay un trabajo conjunto con el Ministerio de Educación y con la Dirección de Educación Pública, en términos de que el Servicio Civil presta asesoría en la construcción del perfil, en cuanto a analizar cuáles son las particularidades de cada servicio local, y, en ese concepto, trabajar un perfil que permita que lleguen los candidatos, en número y en calidad suficientes, para poder realizar el concurso.

En relación al rol de los consejos directivos locales, la ley claramente define que estos proponen a la Dirección de Educación Pública elementos en el perfil, lo que está definido por ley.

Revisamos que todos los consejos directivos locales hayan recibido, de parte de la Dirección de Educación Pública y del ministerio, la propuesta de perfil. Eso es parte de asegurar el cumplimiento de las distintas etapas del proceso. En ese sentido, ese es el rol técnico, desde el punto de vista de garantizar que el perfil contenga las particularidades de cada uno de los servicios y que, al mismo tiempo, sea un perfil abierto que favorezca la postulación de los candidatos.

En cuanto a los puntajes, debo señalar que cada etapa inicia con un análisis de admisibilidad, luego un análisis curricular, después un análisis de las entrevistas gerenciales y luego se realizan entrevistas por competencia. Cada una de esas etapas parte de cero y van alcanzando distintos puntajes.

Posteriormente, se entrega al consejo un número de candidatos con las notas que alcanzaron en la última etapa; el consejo entrevista, entregando la nota que corresponde al desempeño del candidato durante la entrevista y a lo que dice su historial curricular y su historial laboral.

Esa nómina de entre 4 y 8 postulantes, que se entrega al Consejo Directivo Local va con las notas, pero es información de contexto. El Consejo Directivo Local vuelve a hacer una entrevista y puede asignar notas diferentes en relación de lo que fue la entrevista que realizaron a cada uno de los candidatos.

Luego, se envía la nómina de tres candidatos al Presidente, quien también elige de acuerdo con los antecedentes que se adjuntan en esa nómina.

Nosotros recibimos el perfil con la incorporación, o no, de las observaciones del Comité Directivo Local, el cual hace sus observaciones al perfil directamente a la Dirección de Educación Pública, y es esta y el Ministerio de Educación quienes presentan el perfil al Consejo de Alta Dirección Pública.

No tenemos alcance a las observaciones que en forma directa hace el Consejo Directivo Local. Lo único que siempre vamos a hacer es –lo que dije en un principio- resguardar que, efectivamente, los requisitos legales no pueden ser cambiados porque son requisitos legales. No podría publicarse un perfil con un requisito distinto al que está definido por ley. Eso sí lo revisamos.

Asimismo, revisamos que las condiciones que están en ese perfil tengan, de alguna manera, una mirada hacia los principios y valores de la Alta Dirección Pública, y que permitan contar con perfiles que sean competitivos, abiertos y que atraigan a la mayor cantidad de postulantes a procesos tan complejos como este.

10) El Director de la Escuela "Amanecer" de Villa Boldos, del Servicio Local de Educación Pública de Costa Araucanía, señor Juan Luis Aguilar Muñoz.

El señor **Aguilar** expuso en la sesión 8ª[13], de fecha 19 de abril de 2021, de la siguiente forma:

Agradezco la invitación para permitir la participación de un director de escuela de una zona rural de la Región de La Araucanía en un espacio no habitual. Por lo mismo, valoro el aporte que se pueda concretar frente a este nuevo sistema de gobernanza, de gestión y de apoyo a escuelas, liceos y jardines infantiles del sector público en Chile, establecido en la ley N° 21.040.

Soy profesor y magíster de la Universidad Metropolitana de Ciencias de la Educación (UMCE). Vivo en la zona sur del país desde hace diez años, y soy director de la Escuela Pública Amanecer de Villa los Boldos, perteneciente a la comuna de Toltén.

Mi idea es presentarles una visión amplia de la zona de *Lafken Mapu*, territorio al cual pertenezco, que posee un 97,8% de población mapuche y como lo es el SLEP Costa Araucanía con un 94% de vulnerabilidad. La realidad de nuestros datos, según la encuesta Casen, muestra un aumento significativo de la pobreza en más de 50%. Esa es la realidad del territorio que hoy vengo a representar.

Me gustaría separar mi intervención en cuatro ideas, con el objeto de profundizar un poco respecto del traspaso de la educación municipal a la educación pública.

La primera experiencia que me gustaría mencionar está asociada al cambio de sostenedor respecto de las relaciones de trato, trabajo y cercanía con este.

Antes había una gran cantidad de funcionarios contratados por alguna afinidad política, lo que generaba una movilidad dependiendo de la autoridad de turno. Algunos se quedaban en sus cargos cuando ocurría el cambio y otros buscaban otro oficio. Hoy tenemos la posibilidad de acceder a fuentes laborales a través de concursos públicos.

Como nudo crítico, puedo mencionar que se sigue teniendo a los mismos funcionarios en algunas instancias y sigue habiendo algunos vacíos heredados del sistema anterior, dejando de lado el foco principal, los estudiantes, por un beneficio propio y con los mismos principios burocráticos que entrampan el trabajo. Es decir, seguimos teniendo el mismo sistema a lo largo del tiempo, el cual hace temblar las fuentes de financiamiento.

Según establece el artículo 8 de la ley N° 21.040, referido a la participación de los distintos estamentos, puedo dar fe de que tenemos la oportunidad de participar a través de un principio democrático de representación de los distintos estamentos, como los consejos escolares o locales. Allí se da figura a un modelo de participación real representado por los asistentes, profesores, estudiantes o apoderados, lo que permite modelar las particularidades de nuestras localidades y también dan vida a nuestra diversidad territorial, donde se evidencia la oportunidad de ser un ente activo en la toma de decisiones, instancia que en la modalidad de los Departamentos de Administración Educacional Municipal (DAEM) estaba más pauteada y controlada.

Respecto del apoyo administrativo, se visualiza una mayor burocracia en los procesos de compra, donde influyen las competencias que tienen o deberían tener los funcionarios de esta área, puesto que, dentro de sus competencias, no necesariamente manejan habilidades relacionadas con el mundo de la educación,

---

[13] El acta de la sesión, que contienen su exposición íntegra, así como las consultas de los diputados y diputadas y sus respuestas, puede encontrarse en el siguiente link: https://www.camara.cl/legislacion/comisiones/sesiones.aspx?prmID=2902&prmIdTipo=2103.
El video de esta sesión puede encontrarse en http://www.democraciaenvivo.cl/

alejando las prioridades educativas del mundo del papeleo, que culturalmente identifica al sector público.

Asimismo, complementa la gestión de recursos financieros. A modo de ejemplo, el artículo 3 de la ley N° 21.040 señala que el Sistema de Educación Pública tiene por objeto que el Estado provea una educación pública gratuita y de calidad, la cual se ha visto afectada por el fantasma de la subvención vía váucher y asistencia promedio, relacionando la matrícula especialmente para los contextos más rurales, donde las familias deben migrar a las grandes ciudades; de hecho, en Toltén no tenemos ninguna empresa.

Por lo tanto, esta búsqueda de empleos hacia las grandes ciudades produce una constante baja en la población, sumado a las ofertas de las escuelas particulares subvencionadas, que ofrecen apoyo financiero para la matrícula de sus hijos y el complemento de la ayuda social. Eso es parte de nuestra realidad.

Antes, el uso de los recursos de las escuelas se veía sujeto a la toma de decisiones políticas, lo que dejaba escasa posibilidad de acción a los establecimientos educacionales, aunque el uso de los recursos era más expedito. Hoy, a pesar de esto, los recursos están a disposición directa de las escuelas, pero se ve entrampado un poco en el trámite burocrático que implica la unión de las distintas comunas.

Respecto de la gestión de apoyo pedagógico, se advierte una especie de burocracia, desviando el foco principal del aprendizaje y del desarrollo del núcleo pedagógico. Antes cada departamento educacional tenía la posibilidad de desarrollar sus propias estrategias y prácticas del manejo educativo, a través de una mediación, o una asesoría o un Apoyo Técnico Pedagógico (ATP) ministerial, con el Sistema de Medición de la Calidad de la Educación (Simce) y la Evaluación Docente.

Hoy se instala una Subdirección de Apoyo Técnico Pedagógico, que permite cambiar este escenario y crea un sistema que motiva a los directores a ser líderes pedagógicos y no administradores de escuela propiamente tal. Sin embargo, aún sigue habiendo focos que desvían la mirada de este trabajo, como los requerimientos administrativos o de gestión de personas, las encuestas, más otras encuestas, generando poco avance de la educación en este aspecto.

Ahora, el propósito planteado en lo que hemos vivenciado, en este caso, en esta administración, es establecer una posibilidad de cambiar este escenario y cambiar este foco. Creo que hoy tenemos esta oportunidad por cómo lo hemos vivenciado.

Para concluir, debo mencionar que este apoyo, esta asesoría, ya se ha instalado, por lo menos, acá en el Servicio Local de Educación Costa Araucanía. Antiguamente, teníamos cercanía con la autoridad local, pero hoy la misma es de mayor confianza, porque está mediada por una ley y el correspondiente artículo, algo que hoy nos permite realizar nuestro trabajo pedagógico con más tranquilidad.

Ahora, para tener una educación pública de calidad me permito señalar que para que sea consecuente con los requerimientos del sistema, debe pasar por un reconocimiento del cuerpo de profesores y esta situación debería trascender a una formación de excelencia que si –quizá- se extrapola a esta ley tiene que ver con la formación de los docentes, el perfeccionamiento que se debe tener, la evaluación docente mirada de manera más objetiva y que se acompañe de una remuneración que muestre dignidad, valoración y respeto a lo que merece esta comunidad profesional.

Cada profesor debería tener espacio y tiempo suficientes para preparar sus clases considerando las estrategias actuales, como aula invertida, aprendizaje basado en problemas, desarrollo de pensamiento crítico, desarrollo de habilidades, el uso de las TIC (tecnologías de la información y la comunicación), entre otras. Si esto no ocurre creo que la educación pública caerá en el mismo vicio y, lamentablemente, este modelo se replicará en las clases sociales más bajas.

Respecto del procedimiento de las pruebas estandarizadas, que se sigue evaluando a nivel nacional sobre la toma de muestras estadísticas que no miden las particularidades, hoy, a través de los Servicios Locales de Educación, tenemos la posibilidad de medir de manera más expedita y explícita el desarrollo integral y la trayectoria curricular de nuestros estudiantes. Esta es una tremenda fortaleza que podemos visualizar hoy en el territorio.

Si bien, hoy, la fortaleza de esta autonomía es positiva, con la posibilidad de desarrollar el trabajo a través de las redes territoriales, a través de las vinculaciones entre profesionales, a través del desarrollo del núcleo pedagógico con los propios proyectos educativos, otra posibilidad que es muy buena y muy importante es el fortalecimiento de los equipos de liderazgo. Creo que ese tiempo que nos vamos a tomar o que, por lo menos, veo que nos estamos tomando, es un tiempo que tenemos que considerar y que debe ir acompañado de recursos, ya sea para los concursos por Alta Dirección Pública o para tomar la decisión en la selección de los equipos que estarán al interior de las comunidades educativas de los Servicios Locales de Educación.

En conclusión, al analizar este traspaso se puede entrever la necesidad de tener un ordenamiento que sea consecuente con los desafíos actuales, porque no es lo mismo ser jefes de servicios locales o de establecimientos educacionales a ser líderes de equipos de trabajo; no es lo mismo desarrollar un proyecto educativo estándar que ser parte de un proyecto con una visión compartida de desarrollo integral, centrado en los estudiantes; no es lo mismo soñar con un futuro mejor que ser parte del cambio que permitirá el crecimiento y desarrollo del individuo, como lo establecen la Constitución Política de la República, los derechos universales del niño, el aseguramiento de la calidad y nuestra Ley de Educación Pública.

En consecuencia, a partir de lo que somos debemos lograr construir una mejor expectativa que pueda darse a través de mejores programas de estudio y/o programas sociales que a veces ni siquiera están considerados, como antiguamente en los PADEM, o en la planificación ministerial. Pero, hoy, tenemos la oportunidad de desarrollar un proyecto educativo propio, territorial, que considere la realidad del territorio. Como muestra, puedo mencionar que hoy, como establecimiento, nos ha permitido, en una zona rural y en un escenario adverso, lograr que más de una veintena de estudiantes hayan visitado en más de cuatro oportunidades Estados Unidos, compartiendo la mesa con embajadores, con los representantes políticos y con los diplomáticos de nuestro país; interactuando con sus pares, visitando las localidades de Westfield, Indiana, Nueva York y Washington. Hoy, bajo el alero de esta nueva educación pública, tenemos estas oportunidades.

Por lo tanto, también es importante realizar un reconocimiento, pues se hace necesario establecer la selección en función de mejores equipos directivos por lo que lograr el liderazgo educativo que se necesita hoy es un desafío primordial para tener una sana y buena ejecución de la educación pública que merecemos, donde la escuela pueda ser vista como un agente de cambio social y económico, y que cristalice la proyección de un futuro mejor para los estudiantes de las escuelas públicas.

11) La Directora de la Escuela "José Bernardo Suarez" de Macul, del Servicio Local de Educación Pública de Gabriela Mistral, señora Pamela Meza Morales.

La señora **Meza** expuso en la sesión 8ª[14], de fecha 19 de abril de 2021, de la siguiente forma:

---

[14] El acta de la sesión, que contienen su exposición íntegra, así como las consultas de los diputados y diputadas y sus respuestas, puede encontrarse en el siguiente link: https://www.camara.cl/legislacion/comisiones/sesiones.aspx?prmID=2902&prmIdTipo=2103.
El video de esta sesión puede encontrarse en http://www.democraciaenvivo.cl/

He escuchado la mirada de los directores y quiero contarles que yo soy directora por Alta Dirección Pública. Pasé el concurso y ahora creo que sí existen concursos transparentes, porque cuando uno va a postular está con el sesgo de que puede el cargo ya tener un nombre, lo que no fue mi caso. Asumo en el año 2019 y justo fui al traspaso de lo que es el Servicio Local de Educación Pública Gabriela Mistral, que inicia en el año 2020, el 1 de enero.

Les cuento que partimos siendo partícipes del Plan Estratégico Local. Hubo dos, tres meses el año pasado de reuniones con los distintos actores. Es un territorio amplio de San Joaquín, La Granja, Macul. Es un Servicio Local nuevo que ahora va en su segundo año. Sí, fuimos convocados y consultaron, para elaborar este Plan Estratégico Local, a apoderados, profesores, directores, comunidad educativa en general.

Tenemos claro cuáles son nuestros sellos educativos: calidad de aprendizajes e inclusión, formación integral y desarrollo de habilidades, convivencia escolar y participación. Esta es una tarea grande. Todos sabemos que los desafíos en educación son tareas de largo aliento, alrededor de diez años. Los directores ejecutivos tienen un período de seis años.

También, contar que en relación con la gestión de solicitudes, el primer pago de remuneraciones del Servicio Local Gabriela Mistral fue bastante exitoso. Me refiero al mes de enero del año 2020. Tienen un sistema bien consolidado de instructivo de remuneraciones donde todos los directores hacemos un informe consolidado y se están reliquidando y contestando las situaciones a todos los funcionarios del día uno al cinco de cada mes.

En cuanto a gestión de personas es un proceso bastante rápido y eficiente. Estoy con el ciento por ciento de la dotación completa; incluso, pedí algunos profesionales que me sugirió la Superintendencia. Por ejemplo, tengo un facilitador cultural para la población de niños haitianos y también un técnico en educación diferencial para niños con necesidades educativas permanentes. Son recursos que el Servicio Local Gabriela Mistral ha puesto a nuestra disposición.

Respecto de la compra y adquisiciones, en realidad concuerdo con las directoras. Acá el gran tema es la ley de compra. El gran tema es que nuestros profesores no tienen conectividad, no tienen notebook. Y es la única forma en que nos podemos comunicar, en que podemos educar. Tenemos el 60% de vulnerabilidad y muchos estudiantes no cuentan con internet, no cuentan con tableta. Por eso es que el colegio está abierto de lunes a viernes con turnos éticos desde las 9:00 de la mañana hasta las 18:00 horas de la tarde de dos personas por estamento, porque tenemos que entregar material multicopiado, textos escolares, canastas de alimentación, porque el colegio tiene un rol muy subsidiario en estos momentos.

En relación con lo técnico-pedagógico hay un liderazgo pedagógico. Contamos con una UATP, que se trata de una persona encargada de cinco o seis establecimientos y que va llevando las necesidades y todos los lineamientos de nosotros los directores. Nos juntamos, el año pasado, una vez a la semana por casi dos horas y media. Este año ya se volvió quincenal donde se hacen levantamientos y diagnóstico de necesidades.

También dentro de las buenas prácticas, el Servicio Local tiene La Voz de Gabriela, que es un encuentro que se hace en forma mensual al cual van todos los actores. Lo dirige el director ejecutivo, don Pablo Araya, y ahí se van levantando los problemas de la comunidad, porque somos una comunidad diversa. Hay muchos problemas, mucha vulnerabilidad. Macul no tiene la misma vulnerabilidad que La Granja, que San Joaquín, que son comunas con altos índices de necesidad. Necesitan mucha ayuda y que los recursos vayan bien focalizados. Por eso es que se hace este levantamiento.

Además, contamos con redes de directores, redes de convivencia escolar, de UTP, de docentes. Por ejemplo, nosotros tenemos la red de directores y en la tercera semana de cada mes empezamos a compartir prácticas.

En relación con lo que es el liderazgo, sí existe un liderazgo del director, sobre todo un fuerte liderazgo pedagógico. Nosotros vemos los turnos, participamos en la formación del proyecto educativo institucional, de los planes. También sentimos que existen unos lineamientos y vinculación.

En contexto de pandemia, en el mes de diciembre como establecimiento tuve clases presenciales con mis octavos años básicos. En el mes de marzo abrimos el colegio y atendimos desde prekínder a segundo básico y contamos con el apoyo del Servicio Local y la implementación de cuatro salas híbridas con computadores, cámaras, micrófonos, que permiten la conectividad del profesor con los niños que están en su casa y los que atendemos en el colegio. Hubo en esos niveles una alta asistencia, casi el 40%, lo que en contexto de pandemia es alto y por la fase que pasamos a cuarentena se vio interrumpido. Estos niveles iniciales requieren apoyo del profesor directo en lo que es lectoescritura y números.

También contarles que han venido y he tenido reuniones con prevencionistas de riesgo de los SLEP, de la Mutual de Seguridad; han levantado un diagnóstico de cómo se han aplicado los protocolos. Si hay un punto en el que tenga que hacer bastante hincapié en lo positivo -para ir concluyendo- es en el buen trato del director ejecutivo y de las subdirecciones que es bastante humano. Lo negativo es el recurso tecnológico y todos nuestros estudiantes que quedan desconectados sin tener educación en estos tiempos.

12) La Directora de la Escuela N° 405 "Millahue" de Cerro Navia, del Servicio Local de Educación Pública de Barrancas, señora Alejandra Benavides Arestizabal.

La señora **Benavides** expuso en la sesión 8ª[15], de fecha 19 de abril de 2021, de la siguiente forma:

Vengo a esta Comisión con la intención de aclarar algunos puntos y de poner otros sobre la mesa. Si bien estamos en una comisión investigadora, espero que pueda resolver y evacuar un informe que nos permita avanzar.

He seguido todo el proceso y creo que todos los directores que ya han estado, los que estamos y los que vendrán, tenemos eso por objetivo. Es importante establecer que aquí no estamos frente a directores que quieren servicios locales o que no quieren servicios locales, sino lo que nos une de manera transversal es cómo mejorar esta nueva educación pública que tanto anhelamos por tantos años.

Soy directora de una escuela de educación básica en Cerro Navia. Ya he estado en instancias como esta en otros momentos y quiero expresar que valoro estos espacios que nos permiten contar lo que está ocurriendo y no lo que nos ocurría cuando estábamos en los municipios, donde si uno planteaba la diferencia que tenía con la alcaldía en la cual se encontraba era claro que no podría continuar en el cargo.

Entonces, creo que estar en el sistema público concede la libertad y no la represalia posterior; hoy se puede tener una diferencia con quien administra la educación pública.

En verdad, se han dicho hartas cosas en las exposiciones y creo que es importante establecer, por ejemplo, que no existe una dicotomía entre sí han habido o no espacios de comunicación y participación. Lo que yo creo, y quiero establecerlo

---

[15] El acta de la sesión, que contienen su exposición íntegra, así como las consultas de los diputados y diputadas y sus respuestas, puede encontrarse en el siguiente link: https://www.camara.cl/legislacion/comisiones/sesiones.aspx?prmID=2902&prmIdTipo=2103.

aquí, es que lo que ha existido no ha sido eficaz ni efectivo, por lo tanto, el Servicio Local de Barrancas -al cual pertenezco- debería evaluar y mejorar los espacios que permiten una real participación, porque puedo estar sentada en un espacio con dos mil personas y escuchar, pero eso no es participación real.

Por eso, hoy vengo a expresar que nuestro servicio local debería avanzar en la implementación de un espacio de participación de los directores, que permita hacer aportes para la solución de problemas que pudiera provocar la instalación de un servicio local, pero no esperar soluciones que vengan de afuera y que los directores nos convirtamos en personas que esperamos sentadas esa solución.

En Cerro Navia y en el Servicio Local de Barrancas hemos sabido ser un aporte real a la gestión, pero hoy no tenemos espacios como esos. Quiero dejar establecida esa situación, que no es si los tuvimos o no, sino que los que tenemos deben ser mejorados, porque ahora no nos están permitiendo aportar como directores de escuela con experiencia para ordenar y ayudar a la mejora del sistema.

En relación con los temas presupuestarios, tenemos grandes complicaciones y aún no recibimos respuesta de lo qué ocurrió con las platas SEP 2019 -en mi caso-, donde alrededor de 60 millones no fueron ejecutados. Esa situación aún no tiene respuesta, más que decir que se le envió a las instituciones pertinentes la posibilidad de reinvertir, pese a que sabemos que en el ámbito público los recursos no gastados se deben devolver, y cuando se devuelve dinero del Presupuesto efectivamente hay una mala administración. Esa es una realidad, cuando el presupuesto público se entrega se debe gasta, se debe invertir y debe haber respuesta de aquello, cosa que aún no recibo. Solo sé que esa plata no fue invertida y hasta hoy no sé qué ocurrió con ella.

Lo mismo ocurrió con Movámonos y con Pro-Retención, que más allá de decir que los plazos no se dieron, me gustaría saber, porque aún no lo sabemos, si se permitió la reinversión del gasto o hubo que devolver ese dinero y, efectivamente, no se pudo hacer nada.

A lo anterior quiero poner cara y color, porque no ejecutar casi 60.000.000 de pesos, cuando me toca levantar una escuela que recibo en 2019, que tiene un historial de nueve años de insuficiencia, con una sobredotación que no es antojadiza, donde tengo profesores y asistentes de educación que están en el proceso de retiro y todavía no hay solución para ellos, lo que significa un gasto enorme de arrastre a la escuela y que no permite contratar profesionales para ayudar a la mejora de aquellos nefastos resultados.

Este año el servicio local había tomado la decisión de pagar con recursos SEP aquella situación. Le planteé al director ejecutivo que eso significaba que de casi 110 millones que me corresponden de recursos SEP tenía que gastar 69 millones solo en pagar a aquellas personas que están esperando el retiro. De alguna manera, ello se enmendó sacando a algunos, lo que liberó dineros de mi subvención escolar preferencial, pero ese es un problema que arrastramos y que no le vemos solución.

Si bien no hay plata, esperaría una estrategia que permita sacar a todos los profesionales que hoy están esperando irse, pero lo quieren hacer con dignidad y en las condiciones que han planteado.

Ahora, debe haber un término medio y, como mínimo, una negociación o una propuesta desde los servicios locales para hacer tiraje de aquello que hoy tiene atomizadas las dotaciones en las escuelas.

Al mismo tiempo, quiero plantear que efectivamente Cerro Navia entró al final; quizá, no tuvo el proceso de anticipación que tuvo Pudahuel y Lo Prado, pero eso no puede seguir siendo la razón por la cual seguimos en un estado de no mejora y de no avance.

Quiero pedir en este espacio que el Servicio Local de Barrancas junto a la DEP tome este tema en consideración y haga una estrategia real de solución, porque, de lo contrario, las plantas docentes de las escuelas siguen estando atomizadas y no podemos avanzar.

En relación con el tema del presupuesto, personalmente y siendo que uno lo pide, todavía no tengo respuesta del presupuesto de 2020 para entregar mi cuenta pública.

Extrañamente en la cuenta pública de este año solo se nos pidió que nos basáramos en los aspectos administrativos y pedagógicos, pero no de presupuestos, lo que es bastante complejo para nosotros como directores, ya que estamos obligados a entregar en nuestras cuentas públicas aquello.

Quiero establecer que estamos a 19 de abril y todavía no tenemos la información respecto de todo lo que se invirtió en las diferentes subvenciones que nos llegan y que debiese estar en la entrega de las cuentas públicas de los directores de las escuelas, las que debimos entregar el 30 de marzo.

Como escuela hemos vivido ya tres fallecimientos de asistentes de la educación a la espera de su resolución al tema del retiro. De ellos, uno se traspasó al servicio y se jubilaron en la administración de la Corporación de Cerro Navia. El ministerio vuelve a entregar los dineros, vuelven a gastarse y no se les entrega a los trabajadores. Reitero, llevo tres funcionarios fallecidos a la espera de su retiro. Es una situación grave. No es solo un tema administrativo, sino también humano el que las personas fallezcan esperando resolver su situación.

Como escuela nos golpea muy fuerte ver la indignidad en que se encuentran los trabajadores que están en esa condición, que no son solo de mi escuela, sino que es la situación de varios que hoy siguen en esa labor en Cerro Navia. ¡Esto no es un tema menor!

Personalmente fui a conversar con el alcalde y con todas las instancias y aún no hay respuesta a una situación que se viene arrastrando desde hace varios años.

El Servicio Local de Barrancas debiese poner a nivel la situación de Cerro Navia. Efectivamente, hay todavía una mirada sectorial de las comunas cuando debiésemos avanzar en la lógica de hablar de un territorio.

La intención de la ley lo dice, incluso, cómo se hicieron las definiciones territoriales para que pudieran quedar escuelas que tenían mejores presupuestos para que pudiesen ayudar al tiraje de las escuelas que venían con complicaciones, como la nuestra, en la comuna de Cerro Navia, que no tiene que ver con una situación propia de las escuelas, sino con aquellas situaciones delincuenciales y de mala administración, en las que se ha encontrado a ciertas administraciones municipales gastando las platas que corresponden a los niños y niñas de este país destinadas a mejorar la educación.

Quiero establecer también la problemática de los directores del Servicio Local de Barrancas, que, si bien, postulamos a un concurso, hemos tenido la renuncia y salida de varios de ellos en el camino, porque hay condiciones laborales que no se respetaron ni se mantuvieron y hoy nos encontramos en juicio. Son situaciones que tienen que ver con sueldos proyectados en el concurso y luego no cumplidos. Más allá de quién haya tenido la culpa, somos trabajadores que optamos por quedarnos en este espacio, y ahí hay una situación grave en que también perdemos el tiempo en centrarnos en demandas que no debiesen ocurrir.

En ese sentido, hemos tenido un trato que no es el adecuado, más allá de que cumplimos con todas las condiciones para ganar los concursos. Platearnos que no se puede hacer nada ha sido complejo y merma mucho la relación que se puede establecer con un servicio local, ya que esta es bastante lejana con los directores.

En junio del año pasado, iniciada ya la pandemia, vine a la Comisión de Educación a plantear que ni siquiera nos habíamos reunido con el director ejecutivo. Por lo tanto, se repite el tema de la mala comunicación o de la comunicación no efectiva con quienes hoy tenemos la tarea de liderar las escuelas.

Vivimos en una situación donde el servicio local tampoco ha dado respuesta en términos de establecer cuánto cuesta hoy educar en pobreza cuando se tiene en su territorio a una de las comunas con los mayores índices de esta realidad y vivimos con el pie cojo con respecto al presupuesto. En estos espacios se dieron, en algún minuto, conversaciones y varios directores planteamos la necesidad de establecer cuánto cuesta educar en pobreza, porque no es lo mismo educar en estas comunas que hacerlo en otras que tienen mejores condiciones, por ejemplo, con una mayor cantidad de escuelas y liceos con educación completa en consecuencia que nosotros tenemos muchas escuelas que tienen solo hasta octavo básico. ¿Qué significa eso? ¿Cómo manejamos la continuidad?

En la actualidad, el Servicio Local de Barrancas no tiene claridad de cuánto cuesta educar en pobreza y esto es urgente en educación pública, o sea, debemos tener un presupuesto que nos permita decir cuánto le falta a la caja para tener lo que corresponde a las escuelas, porque somos la propuesta de educación pública y no podemos seguir pensando si nos alcanza o no la subvención.

Personalmente, esperaba que esta ley pudiera terminar con la subvención. ¡No fue así!, y después de casi cuatro años, en términos de presupuesto, todavía no sabemos cuánto cuesta educar en pobreza para detectar dónde está la diferencia cuando en el discurso tenemos la idea de equiparar la cancha para los niños y las niñas que viven en esa situación.

Por lo tanto, hoy tenemos un servicio local que, si bien, está instalado y ha tenido muchos conflictos como se esperaba, en lo personal, creo que no ha dado el ancho de solucionar aquello, los directores hemos sido actores ausentes para proponer y salir adelante de esta situación y, por ende, terminamos teniendo más barreras que posibilidades de avanzar en nuestros proyectos educativos.

Tenemos un proyecto educativo innovador, eso es lo que nos pide la ley, pero no hemos podido instalarlo de la manera que hubiésemos querido, porque, en términos de presupuesto, las urgencias no están puestas en la mejora pedagógica de los niños y niñas del territorio de Barrancas.

En tiempos de pandemia tampoco hemos tenido a nivel nacional una política que asegure que los estudiantes de este país se mantengan en conexión y podamos continuar con la labor educativa, o sea, si hoy los profesores desconectan su computador, se acaba la educación pública en este país, porque en términos públicos no ha habido ninguna inversión; ni en términos tecnológicos, ni en términos de asegurar la conexión, lo cual resulta preocupante porque estamos a disposición de los profesores quienes de su propio bolsillo deben pagar la conexión diaria para estar con los niños en clases. Estamos a merced de las campañas, de las rifas y de todo lo demás para que los niños tengan sus aparatos tecnológicos.

El servicio local entregó trece *tablets* a todas las escuelas, trece *tablets* en el Servicio Local de Barrancas, a pesar de que los directores habíamos pedido que fueran *tablets* que tuvieran la posibilidad de instalar un chip que permitiera la conexión. Por lo tanto, esa *tablet* no sirve si la familia no invierte en pagar internet hogar. También se nos queda ahí una barrera importante.

Nos hubiese gustado que hubiesen conversado con nosotros para decir cuál era el mejor equipamiento para llegar a las familias, porque somos nosotros quienes tenemos el contacto con cada una de ellas para decir cuál es esa situación.

Quiero pedir a esta comisión que revise cada uno de los temas que he planteado con el objeto de mejorar lo que hoy estamos viviendo. Si la educación

pública, en términos de lo que vivo, sigue en esta situación, podemos estar al borde de una situación que termine con la educación pública.

El año pasado perdimos más de mil estudiantes y tampoco han sido capaces de mirar las razones reales de aquello. Creo que es urgente mirar, evaluar y buscar las soluciones. Para eso, los directores estamos llanos. Por algo estamos en este espacio.

13) La Directora de la Escuela "Provincia de Arauco" de Cerro Navia, del Servicio Local de Educación Pública de Barrancas, señora Úrsula Araya Parraguez.

La señora **Araya** expuso en la sesión 8ª[16], de fecha 19 de abril de 2021, de la siguiente forma:

Me quiero centrar la gestión estratégica del servicio local, desde el punto de vista de lo que la ley de educación pública -N° 21.040- establece qué es el desarrollo y una formación integral, gratuita y de calidad para nuestros estudiantes, entendiendo, además, que los establecimientos, las escuelas, somos la unidad básica y fundamental de este sistema.

Al mismo tiempo, mencionar que he podido ser parte de todo el trabajo que como directores buscamos y desarrollamos implementar para alcanzar la misión institucional del Servicio Local de Barrancas, cual es mejorar la calidad y la equidad de la educación pública de todos nuestros niños, niñas y jóvenes.

Lamentablemente, esa misión, a pesar de que está completamente acorde a la definición de la Ley General de Educación y que se aúna y se unifica con los objetivos que tiene el ministerio para la educación pública, que es mejorar las condiciones de equidad en el acceso a nuestros estudiantes, a la fecha no puede dar cuenta de las acciones concretas que el servicio local haya podido dar para difundir, debatir o reflexionar y acordar mecanismos, recursos y procesos para el logro de estos objetivos.

No es muy sencillo educar en pobreza, como dijo la colega; no hemos podido dar pasos reales y concretos de la mano de nuestro sostenedor para alcanzar las capacidades pedagógicas y fortalecer los equipos y las escuelas en materia de su gestión.

¿Por qué no lo puedo visualizar? Señor Presidente, y a todos los presentes, pregunto por qué no puedo visualizar que efectivamente estemos logrando implementar la nueva ley de educación pública, en lo concreto, en el día a día, en las escuelas, en la realidad de las aulas.

Voy a mencionar un solo ejemplo. Estamos en abril de 2021 y recién, a la fecha, hemos conocido cuáles son los sellos educativos del territorio de Educación Pública Barrancas. Es decir, si bien hay una publicación abierta sobre el plan estratégico local, no se ha dado el tiempo para trabajar en conjunto con los directores respecto de los objetivos, las metas estratégicas, la misión y la visión de nuestro servicio, y con qué recursos, con qué proceso y estrategia vamos a lograrlo.

Es importantísimo que todos nosotros, como lo mencionó también la colega, podamos aunar nuestros esfuerzos, competencias, experiencia y sobre todo el conocimiento que tenemos del territorio, respecto de cómo vamos a lograr que esta educación pública, que esta educación de calidad y equitativa sea una realidad y no solo un enunciado.

---

[16] El acta de la sesión, que contienen su exposición íntegra, así como las consultas de los diputados y diputadas y sus respuestas, puede encontrarse en el siguiente link: https://www.camara.cl/legislacion/comisiones/sesiones.aspx?prmID=2902&prmIdTipo=2103.
El video de esta sesión puede encontrarse en http://www.democraciaenvivo.cl/

Lamentablemente, el escenario de la pandemia ha acrecentado las dificultades, puesto que están suspendidas las clases presenciales, y ha impedido que nosotros, como escuela, implementemos y mejoremos sustancialmente nuestra gestión y nuestros recursos.

La mayoría de nuestras escuelas, principalmente en Cerro Navia, se encuentran en la categoría de desempeño insuficiente o medio bajo, lo que significa que tenemos una alta demanda, un gran desafío para movilizar los estándares de aprendizaje de nuestros estudiantes.

Pero ¿cómo vamos a movilizar nuestras escuelas? ¿Cómo vamos a lograr que realmente se impacte positivamente desde nuestra gestión si no contamos con una participación inclusiva, activa, de directores y directoras en la toma de decisiones, en el diseño e implementación de esta calidad de la que hablamos?

Me sumo a las palabras de la directora Alejandra Benavides. Efectivamente, ha faltado comunicación, ha faltado inclusión y participación directa de los directores. Ha hecho falta que nosotros seamos los que, a partir de nuestro propio conocimiento de los contextos y de nuestras particularidades y de nuestras culturas escolares, podamos establecer realmente el qué se necesita, cuándo se necesita y cómo se necesita.

Las trece tablets que mencionó la colega dan cuenta de una lectura real del contexto. Trece tablets en establecimientos de más de 300, 400, 500 y hasta 700 estudiantes no significan nada; aún más, dificultan la motivación escolar, puesto que ni siquiera tienen internet, conectividad.

El servicio local ha hecho levantamientos de la conectividad de los estudiantes, llenando planillas; incluso, el Ministerio de Educación a través de su plataforma SIGE. ¿Pero qué hay detrás de ese levantamiento de información? Mi pregunta es cómo impacta esto en los resultados.

No tiene ningún impacto, porque solo se queda en el levantamiento de datos, en el levantamiento de información; no se garantiza a través de esta información que se gestionen acciones concretas para garantizar realmente la entrega oportuna de los recursos.

Voy a darles un ejemplo de alta sensibilidad. Tengo una niñita de kínder, de cinco años, que queda al cuidado de su vecina, y debe trasladarse cada mañana, a las ocho de la mañana, a la casa de la vecina, porque su madre trabaja para tener conectividad. Es así como además de tener que estar al cuidado de terceros, al cuidado de prácticamente algunos extraños, nuestros niños deben tener un empuje, una resiliencia que no se puede dar per se, porque son niños.

Es doloroso ver como cientos de nuestros estudiantes, desprovistos de los recursos esenciales para un mínimo estándar de vida, pueden realizar esfuerzos mayores sin recursos, sin herramientas, sin apoyo muchas veces de la familia, en espacios que no son aptos ni mínimos para motivar a ninguno de ellos, y que además se les pida aprender, se les pida participar, se les pida estar motivados.

¿Cómo vamos a generar esa motivación, ese enlace, si ni siquiera tenemos dispositivos para todos nuestros estudiantes? No tienen conectividad, no tienen internet, muchos de ellos viven en altos niveles de hacinamiento.

La comuna de Cerro Navia es una de las más pobres del país, no hay servicios, no hay instituciones, y la única manera en que hemos logrado superar y sortear las dificultades es a través de un trabajo comprometido de los equipos directivos, de los docentes y asistentes.

Efectivamente, hoy la educación pública pende de un clic; es decir, cuando el profesor enciende y apaga el computador. Pero si los propios profesores ni siquiera tienen ni cuentan con servicio de internet, y nos hemos olvidado que ellos también tienen hijos estudiando. Entonces, ya no se trata simplemente de que el profesor no

haya querido comprar un dispositivo o un computador. Todos hemos tenido que invertir en aquello, pero cuando hay más de tres a cuatro conectados en casa, las situaciones se hacen complejas, y nuestros profesores son quienes han podido, a través de este trabajo diario, establecer esta educación a distancia. Pero lamentablemente no hay lineamientos al respecto.

No sé cómo voy a lograr los sellos educativos del territorio si no hay cohesión, no hay participación en el diseño, en la implementación. He preguntado por los recursos una y otra vez; he preguntado sobre las estrategias y las respuestas aún no han llegado.

Lamentablemente, y lo digo así: lamentablemente, la ayuda que hemos recibido para conectar a nuestros estudiantes, para mantenerlos trabajando es de terceros, es de fundaciones, es de personas anónimas que han querido aportar y eso está muy bien. La autogestión es perfecta y corresponde a nuestra tarea, pero no corresponde que nos basemos solamente en esta primicia, es decir, que sean terceros lo que puedan a través de sus donaciones aportar a que nuestros niños permanezcan conectados y puedan desarrollar su trayectoria educativa.

Siento que hay una falta importante de articulación en el trabajo profesional. No hay espacio de análisis y reflexión sobre nuestro plan estratégico local. Esto va a ser catastrófico por parte de las comunidades educativas porque no vamos a alcanzar en el plazo, de mi propia dirección y de la propia dirección de quien dirige el Servicio Local, los objetivos estratégicos institucionales y no vamos a tener el impacto. Nuestros niños, niñas y jóvenes van a seguir esperando.

Es urgente que cada director conozca el plan estratégico, pero es tarea del sostenedor, de la dirección de nuestro Servicio Local, alinearnos, comunicarnos, mantener un contacto permanente con los directores y, a través de nosotros, con las escuelas. No podemos alcanzar niveles de cohesión y resultados, hacia una meta y una misión institucional del Servicio Local, si no hemos sido capaces de gestionar sumando y aunando a los directores. Hoy día, aún no se realizan reuniones periódicas de los equipos directivos del Servicio Local con nosotros, los directores. Hoy, aún siento que más bien se nos informa y se nos solicita procesos administrativos pedagógicos, pero que van en carriles paralelos, distintos a lo esencial que es la calidad y cómo hacemos efectiva esta educación.

Creo que, además, se ha olvidado que la ley no es ley si no se implementa en el contexto en el cual se debe aplicar. Lamentablemente, nosotros no hemos tenido la oportunidad de desenvolver nuestras competencias, nuestras capacidades y de aunar todos los esfuerzos.

Si nosotros como directores no somos convocados en el diseño y la implementación y en el levantamiento de acciones concretas es imposible que podamos alcanzar las metas que se establecen y, peor aún, sumo que a la fecha después de pedirlo el uno, el 12 de marzo y hoy día, 19 de abril, no cuento con información respecto de los recursos de mi escuela, año 2020, y la proyección para gestionar el 2021. Sin eso, no tengo nada. Es como sembrar un árbol donde no hay tierra. Así de simple.

14) La Directora Ejecutiva de Acción Educar e integrante del Consejo de Evaluación del Sistema de Educación Pública, señora Magdalena Vergara Vial.

La señora **Vergara** expuso en las sesiones 9ª y 10ª[17], de fecha 26 de abril y 3 de mayo de 2021, de la siguiente forma:

---

[17] Las actas de las sesiones, que contienen su exposición íntegra, así como las consultas de los diputados y diputadas y sus respuestas, pueden encontrarse en el siguiente link: https://www.camara.cl/legislacion/comisiones/sesiones.aspx?prmID=2902&prmIdTipo=2103.

Entiendo que se nos invita como parte del Consejo de Evaluación del Sistema de Educación Pública. A modo de introducción, vale la pena decir que la comisión surge por la propia ley de la Nueva Educación Pública, que le entrega el mandato de hacer una evaluación respecto de cómo se va llevando adelante la instalación de los servicios locales y con la posibilidad de poder ir entregando recomendaciones, como un ente consultivo, al propio Presidente y, por supuesto, al Ministerio de Educación y a la Dirección de Educación Pública.

Este año, en específico, se nos dio la facultad para tomar decisiones respecto de ampliar o aplazar los plazos respecto de lo que la propia ley establecía, que era pasar del año 2025 al 2030.

Dentro de su trabajo, la comisión establece una serie de dimensiones, como está establecido en el reglamento, de las cuales nosotros debíamos hacernos cargo. Estas están dadas por el diseño de la política, la gestión pedagógica, la gestión de infraestructura, la gestión de recursos financieros, de personas, participación y vinculación, convivencia escolar y liderazgo.

Para hacer este trabajo, la comisión escuchó a diversos actores de la Dirección de Educación Pública; de los propios establecimientos asistentes: profesores y directores de los establecimientos, y se les solicitó a algunas entidades cliodinámicas y a la Universidad Católica, que hicieran una serie de informes que sirvieran de apoyo para el trabajo de este informe; así como también al Ministerio de Hacienda, a la Agencia de la Calidad y a otros.

Como el informe es bastante largo, daré a conocer los puntos que me parecen más relevantes.

En primer lugar, todo el proceso de instalación es altamente complejo y multidimensional en el sentido que afecta a una serie de factores dentro del proceso y a distintas entidades que no son solo la Dirección Educación Pública y el Ministerio de Educación, sino distintos servicios del propio Estado. Vemos que aún estamos en un proceso de aprendizaje respecto de la instalación de los primeros servicios.

Por otro lado, hay que tomar en cuenta que los Servicios Locales de Educación son un nuevo nivel intermedio entre lo que es la Dirección de Educación Pública y el Ministerio de Educación con los establecimientos. Se trata de un nivel que no existía en nuestro país y que tenemos que considerar y repensar dentro de la estructura de nuestro sistema educativo.

Por otro lado, la educación pública y, por lo tanto, todos los servicios locales pasan a ser un servicio público, lo cual conlleva una serie de cambios y consecuencias importantes desde la lógica administrativa, desde la gestión de los recursos, desde las competencias que deben tener cada uno de sus funcionarios, entre otras cosas, y que le agrega un carácter aún más complejo a la instalación.

Por último, se constatan ciertos nudos que son más complejos, como pueden ser el diseño que se establece del territorio que pertenece al servicio local, la gestión de los propios municipios, la dificultad para completar ciertos cargos del primer y segundo nivel jerárquico en el servicio local, entre otras cosas.

También comentaré brevemente el tema de los recursos financieros, entendiendo, por supuesto, que la señora María Teresa Flórez podrá complementar de mejor manera lo que yo exponga.

Respecto del diseño de la política, desde el ámbito territorial vemos algunos aspectos que son complejos y que quedaron establecidos así desde la etapa de diseño de la ley.

Asimismo, la exposición que realizó en la sesión 9ª, se encuentra disponible en el siguiente link: https://www.camara.cl/legislacion/comisiones/documentos.aspx?prmID=2902
Los videos de estas sesiones pueden encontrarse en http://www.democraciaenvivo.cl/

En primer lugar, respecto de la extensión de los territorios, así como quedaron establecidos, muchas veces se dificulta el acceso. Es lo que vemos, de hecho, en los 11 servicios locales que ya están instalados, en que en gran medida se dificulta el acceso a las zonas más alejadas en el territorio del servicio local, especialmente a las áreas rurales, lo que genera problemas de conectividad dentro del servicio local.

Obviamente, eso también tiene consecuencias en la participación de los distintos actores y en la generación de redes dentro de los servicios, que son algunos elementos relevantes para la ley y que quedan establecidos como principios. Aquí se ve una problemática, especialmente en algunos servicios locales que aún no se han instalado, y que representan a una región completa, como en el caso de las regiones de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo y de Magallanes y la Antártica Chilena.

De tal forma, las dificultades que estamos viendo en los servicios instalados pueden llegar a ser aún mayores en aquellos territorios que abarcan a una región completa.

Por otro lado, también existe una dificultad en relación con la forma en que quedan los territorios, respecto de aquellos que abarcan a una gran cantidad de establecimientos. Se puso el ejemplo de la Región de Los Lagos, que tiene más de 200, y eso, obviamente, se traducirá en complejidades distintas respecto de un servicio y otro a la hora de su instalación.

También existe una dificultad en el caso de aquellos servicios locales cuya delimitación territorial no coincide con la de los gobiernos regionales, situación que hace más engorroso el traspaso respecto de a quién se le solicita la información y quiénes se hacen responsables de las gestiones que se realizan, entre otros aspectos.

A pesar de ello, se observa que ha habido ciertos avances. A propósito de la dificultad en el acceso y de generar conectividad, se han estado usando las redes rurales, que en general han sido bien valoradas por la comunidad.

También se ha hecho una serie de reestructuraciones en la organización del servicio local, como la creación de la Unidad de Gestión Territorial, dedicada a levantar las demandas y necesidades de los establecimientos.

Se han hecho recomendaciones relacionadas con la posibilidad de repensar cómo van a quedar establecidos esos territorios, y con la posibilidad de generar ciertas oficinas locales dentro del propio SLEP (Servicio Local de Educación Pública), de modo que las personas tengan acceso directo al sostenedor, y otra serie que se puede ver con mayor detalle en el informe.

Después, un nudo de especial importancia es la operación municipal dentro de esa dimensión, donde aparece una serie de problemáticas. Creo que ese es uno de los aspectos principales y más relevantes para que la instalación del servicio local sea de calidad. En la medida en que se haga un buen traspaso por parte de los municipios hacia esos nuevos servicios locales, es posible dedicarse de forma mucho más oportuna a todos los problemas, que tienen que ver más bien con la gestión de los aprendizajes, el mejoramiento de la calidad, el fortalecimiento de los procesos de enseñanza y aprendizaje, y, por supuesto, con todos aquellos aspectos que nos parecen relevantes, como son los temas de participación, de liderazgo, de pertinencia y de generación de una identidad por parte del servicio local.

Uno de los aspectos más complejos, donde se advierte mala gestión e irresponsabilidad por parte de los municipios, es que se evidencia falta de información desde los municipios hacia los servicios locales en relación con los contratos de trabajo, las nóminas de funcionarios, los contratos de servicios con proveedores, de servicios básicos, e incluso con los pagos, de modo que la continuidad de tales servicios se hace muy dificultosa.

También existe un problema mayor, es decir, todos esos problemas son mayores cuando no ha habido una firma del convenio. Esos convenios son voluntarios entre los municipios y la Dirección de Educación Pública, para trabajar de forma anticipada en ese proceso, donde se ha evidenciado un problema mayor. Hasta ahora, el único municipio que no ha firmado ese convenio ha sido Valparaíso, y esta Comisión Especial Investigadora ha sido testigo de los problemas que eso ha traído.

Por otro lado, también existe un problema en la calidad de la información que entregan los municipios, debido a que tienen distintos estándares en la forma en que se entrega, en los formatos, en la completitud de la información y en los datos de que ellos disponen.

Un problema adicional es que, cuando los servicios locales o la Dirección de Educación Pública vuelven a solicitar la información para hacerla más actualizada, los municipios no responden en la forma en que se esperaba; simplemente no vuelven a entregar esa información.

Por otra parte, existe un problema en la pertinencia de los plazos. El traspaso se hace dos meses antes de la instalación del servicio local, y eso es 18 meses previos al traspaso propiamente tal, lo que provoca que se entregue información desactualizada. Sin embargo, a la hora de querer actualizar esos datos, los municipios no responden de la forma en que se espera y no entregan la información de manera responsable ni actualizada.

También un problema grave en la regulación de los bienes inmuebles que pertenecen a otras entidades, ya que se entregan sin haberse saneado y sin los dominios respectivos.

Alejandra Arratia siempre ha comentado esto -no recuerdo bien el servicio local- que, incluso, se le hizo traspaso a la Dirección de Educación Pública respecto de la Plaza de Armas. Entonces, esos problemas, que son concretos y que pueden parecer anecdóticos, son significativos a la hora de generar iniciativas de inversión y en la ejecución presupuestaria, especialmente en lo referente a infraestructura.

Por otro lado, se evidencia un grave problema de sobredotación debido a la irresponsabilidad de los municipios, en cuanto han incorporado personal, tanto a las corporaciones educacionales como a los DAEM (Departamentos de Administración Educacional Municipal) como parte de los equipos de los establecimientos, en calidad de asistentes de la educación, de manera de asegurar el traspaso de esas personas.

Todo esto ha generado un problema a la hora de instalar correctamente un servicio, lo cual, como veremos después, influirá en otros aspectos, que tienen que ver con que el personal del servicio local debe dedicarse más bien a sanear todos esos problemas, en lugar de abocarse a la correcta instalación; es decir, se deben enfocar en los problemas que, como dije, tienen que ver con la calidad y con otros aspectos.

También se ve esta mala gestión de los municipios en la forma en que afecta de manera general, que es el nudo que se genera en el traspaso, en la instalación y, en definitiva, en la calidad de lo que se puede hacer.

En este punto, el consejo de evaluación propone una serie de recomendaciones que tienen que ver con la forma en que se entrega mayor responsabilidad a los municipios para que se hagan cargo de esas falencias, y eso pasa por precisar de mejor manera el rol que cumple la superintendencia, tanto en la fiscalización y sanción de la gestión de los municipios, como en fortalecer los decretos alcaldicios, los convenios y planes de transición, y en otorgar esa responsabilidad a los municipios en la gestión de los traspasos, en la entrega de información y en el saneamiento de los bienes, estableciendo, por ejemplo, sanciones específicas si el municipio no ha entregado un bien saneado o en la forma adecuada, con todos los dominios regularizados.

Si bien son partes importantes a tener presente, y están dentro de las dimensiones del diseño que debíamos incorporar en nuestro informe, tienen que ver con la vinculación de la ley de nueva educación pública con otros cuerpos legales, y también con la articulación y la vinculación de la institucionalidad pública.

Tomando en cuenta la vinculación con otros cuerpos legales, parece pertinente comprender que la ley de nueva educación pública se debe insertar dentro de una normativa existente. Esto surge debido a un posible conflicto que podría haber entre la ley del sistema nacional de aseguramiento de la calidad a nivel escolar con la normativa de educación pública, que es importante, y me pareció pertinente considerar el estudio Cliodinámica, que es uno de quienes nos entregó este estudio, que dice que los servicios locales deben alinearse a las políticas nacionales y como son un sostenedor más dentro de la política, debieran ajustarse también a las políticas de aseguramiento de la calidad.

Ahora, por supuesto -y por eso era importante comprender- estamos hablando de un nuevo sostenedor, un nuevo nivel intermedio dentro de nuestro sistema educativo, por lo que es fundamental que exista una readecuación sobre el rol que cumple la Agencia de Calidad de la Educación y cómo adapta sus sistemas de aseguramiento y de evaluación a los servicios locales, por ejemplo, que se entregue al sostenedor todos aquellos aportes, trabajos y apoyos y no directamente al establecimiento. De hecho, ya hubo un piloto respecto de esto y se está trabajando en cómo se adecua todo esto. La Agencia de Calidad de la Educación estuvo exponiendo y explicando cada una de estas temáticas dentro del consejo.

Respecto de la articulación y vinculación de la institucionalidad pública, de forma similar a esta problemática que veíamos, observamos que dentro de los roles que deben cumplir y de las responsabilidades que tienen los servicios locales está el entregar apoyo técnico-pedagógico a sus establecimientos.

Existen también otros organismos y entidades públicas que cumplen con este mismo rol, como la DEP, dentro del Mineduc, los Deprov y, en algunos casos, los seremis, y es relevante generar la adecuada articulación o coordinación de estos entes para que, por una parte, no se genere un agobio a los colegios y, por otra, se permita un mejor apoyo desde la orgánica institucional hacia los establecimientos y servicios locales.

Desde las entrevistas que se tuvieron hasta algunos aspectos que los estudios nos entregaban, incluso, se podía observar que ha habido una correcta coordinación hasta ahora. Sin embargo, no basta con que haya una voluntad de trabajar de forma articulada, sino que es relevante que queden bien definidos los roles de cada una de estas entidades de forma normativa y que pueda ser vía administrativa. En este punto, una vez más, se deben reasignar los roles para el apoyo hacia el sostenedor, es decir, hacia el servicio local y no directamente hacia el establecimiento. De esta manera, se permite que el servicio local tenga autonomía, de forma que pueda adaptar las políticas nacionales o estos apoyos que se entregan hacia cada uno de sus establecimientos conforme a sus características y necesidades.

En cuanto al tema de la gestión de personas, hay que distinguir respecto de la selección del personal y de la dotación de empleados, tanto a nivel de funcionarios de los servicios locales como de docentes y asistentes.

La selección del personal, de los funcionarios de los servicios locales de Educación Pública, puede ser tanto a través de concursos cerrados como de concursos abiertos. En esta materia, se veía un problema importante respecto de la posibilidad efectiva de contar con la dotación adecuada de aquellas personas. Esto vinculado a que los nuevos servicios locales son un servicio público, que requiere competencias y capacidades distintas a las municipales, incluso, el estudio de la Universidad Católica decía que muchas veces se trataba de competencias que no existían en nuestro país. Por lo tanto, es relevante analizar que muchos funcionarios

no cumplen con los requisitos mínimos, y que ha habido un problema importante desde los propios concursos de ADP, que se realizan para el traspaso de aquellos funcionarios que están dentro de los DAEM o de las corporaciones hacia el servicio local.

Se ve que muchos de ellos no cumplen con los requisitos mínimos y que solo el 30% de quienes postulan quedan seleccionados para la cohorte de los servicios locales entre 2019 y 2020, y aquí hubo un punto que se puede ver de forma relevante y podría referirse a los requisitos de antigüedad, que, dado la ley y los cambios que se hicieron para hacer el traspaso y evitar la sobredotación, estas personas tienen que haber sido contratadas en el DAEM o Corporación antes del 31 de diciembre de 2014. Esto, en especial, en la medida en que vayamos avanzando en los años de instalación, puede ser un requisito limitante que debiera, quizás, reevaluarse en ese sentido, así como también la revisión de los perfiles, pero esto siempre entendido no como una manera de flexibilizar los requisitos mínimos, sino para ver si es posible comprenderlos y adecuarlos, de manera que sigan siendo idóneos para los cargos que se van a ocupar.

Es importante recordar que una de las razones por las que se crean los nuevos servicios de educación pública, es precisamente para evitar todos los vicios que ya vemos dentro de los municipios, tales como la falta de competencia y los problemas de amiguismo que se producían al interior de estos, lo cual no podemos traspasar hacia los servicios locales.

Por otro lado, respecto de los concursos abiertos, hay una dificultad para completar la dotación de los cargos de los servicios debido a la falta de candidatos idóneos nuevamente y de capacidad de atraer talento hacia los territorios. Esto se ve de mayor manera en aquellos que son más aislados.

Junto con lo anterior, también existe una dificultad especial para completar los cargos que se obtienen al primer y segundo nivel jerárquico, que son el director ejecutivo y el subdirector dentro del servicio. Esto también tenía una problemática -lo vamos a ver después- en relación con que en la medida que haya una mayor cantidad de concursos al mismo tiempo y que se refiera a territorios que son más cercanos, complejiza aún más esta situación y hará cada vez más difícil completar aquellos cargos necesarios para la dotación del correcto funcionamiento del servicio. El estudio de la Universidad Católica considera esto de forma bastante relevante.

Posteriormente, hay una situación especial con respecto al director ejecutivo del servicio, ya que se evidencia un núcleo en que el pronto nombramiento de este cargo es clave para seguir avanzando con la instalación del servicio local, y, por lo tanto, atrasarse en su elección traerá como consecuencia un efecto dominó respecto de otros procesos desde el punto de vista, incluso, de empezar a generar las cuentas corrientes para hacer el servicio, así como una serie de otros temas administrativos.

El problema aquí recae en que para elegir al director ejecutivo, el comité directivo local tiene que estar ya conformado, porque es quien debe proponer al presidente esta nómina de tres candidatos entre los seleccionados en el proceso realizado por la DEP para la provisión de este cargo.

El estudio de la Universidad Católica observa efectivamente este nudo crítico, porque se ve que es un proceso muy complejo y que tampoco depende directamente de la DEP, como sería, por ejemplo, la elección de los gobiernos regionales. Aquellos procesos que sí dependían de la DEP, como las asociaciones de padres, apoderados, profesores y otros eran de su responsabilidad y se podían hacer a tiempo. Lo anterior va atrasando la conformación del comité directivo local y, por lo tanto, la elección del director ejecutivo.

Por otro lado, también se evidenciaban tiempos acotados para llevar adelante los procesos -como lo comentaba antes- en la medida que hay una mayor cantidad de procesos al mismo tiempo, más dificultoso es completar los cargos de cada uno.

A continuación, hay un tema respecto de la dotación, y lo que se evidencia es una sobredotación tanto en lo referente a los asistentes de la educación como a los docentes. En el fondo, se observa el cambio de dotación tanto de unos como de otros en relación con el año previo y el año posterior al traspaso, y se ve que la mayoría de los SLEP presentan una sobredotación tanto respecto de lo que establece la Ley de Presupuestos -el caso de Barrancas es el más icónico, que tiene 539 personas más del máximo permitido- como conforme al ratio que habría entre docentes y estudiantes, que es lo que, hasta ahora, se tiene sobre el coeficiente técnico-pedagógico que debe tener cada establecimiento.

La razón que se entrega es que los municipios, de forma irresponsable y bajo una mala gestión, incorporaron al personal del DAEM o de la Corporación como asistentes del establecimiento.

Respecto de los docentes, también se evidencia una sobredotación, pero no necesariamente porque el municipio haya contratado una mayor cantidad previo al traspaso, traspasando personal de los funcionarios del DAEM, sino porque hay más docentes contratados con una mayor cantidad de horas pedagógicas de las que en total se requieren, eso hace que haya una mayor cantidad de docentes. Por esto se está trabajando con cada uno de los servicios locales: para bajar la cantidad de horas pedagógicas a las adecuadas y a las que se requieren.

En cuanto a la dotación de los funcionarios de los servicios locales, a diferencia de lo que ocurre con los establecimientos, hay una percepción de que existe una baja dotación. Esto tiene que ver con dos razones: primero, como lo veíamos anteriormente, existe una mayor dificultad en completar estos cargos, dados los nuevos requisitos y las competencias mínimas que se necesitan; segundo, porque hay una percepción de escasez del personal debido a que hay una carga mayor que se les impone en la medida en que se hace un peor traspaso por parte del municipio, porque los funcionarios de los servicios locales deben encargase, la mayor parte de su tiempo, en dar solución a estos problemas.

Con todo, como se ve en los primeros servicios locales, al menos en los primeros años, se observa que se van alcanzando las dotaciones necesarias para el adecuado servicio.

Respecto de la gestión de los recursos financieros, hay distintas problemáticas que son importantes de atender. Me quise concentrar en aquellos nudos que se evidencian para la ejecución y para la correcta implementación de los presupuestos.

Conforme al estudio de la Dipres, que presentó un informe en el Consejo, se logran identificar ciertos aspectos que son mejorables. En primer lugar, hay un problema en la construcción de los presupuestos de los servicios locales que logre ajustarse a la realidad de lo que se necesita para un servicio educativo, y esto, en parte, porque no se tienen los conocimientos y no se conoce cuáles van a ser, efectivamente, los costos asociados a cada uno de estos, lo que ha llevado a una reasignación de los recursos de distinta manera.

Por otro lado, en relación a las subvenciones, hay un mayor gasto presupuestario, o sea, más del 90% se destina a las remuneraciones y, por tanto, no hay muchas opciones para destinarlos a otros aspectos. Esto está asociado, principalmente, al problema de la sobredotación del personal.

También hay un problema respecto de la falta de conocimiento y capacidad de competencias que se necesitan para gestionar los recursos, cuando hablamos de lo que es un servicio público, porque funcionan en una lógica, como decíamos, totalmente distinta a la que es la administración municipal.

De hecho, el estudio de Cliodinámica da cuenta de que los profesionales de los servicios locales aún no logran adquirir todas las competencias y conocimientos para esta gestión de la administración pública, lo que también va provocando ciertas ineficiencias en la ejecución. De hecho, en esta misma Comisión Investigadora

escuché a la directora de la Dirección de la Educación Pública y a otros entes que dan cuenta de cómo estas faltas de competencias han llevado a ciertos errores, no por mala fe, sino por una falta, más bien, de conocimientos. En eso vale la pena destacar que uno de estos muestreos daba cuenta de que no bastaba solamente con generar capacitaciones a los funcionarios, sino también en escoger, efectivamente, a aquellos que fuesen los adecuados y que cumplieran las competencias idóneas para el cargo.

Con todo, hay un aprendizaje desde el minuto en que se instala el servicio local, en la medida en que va avanzando y que permite mejorar la ejecución presupuestaria, porque en la medida en que hay una falta de conocimiento, hay una deficiencia y se ejecuta menos este presupuesto.

De todas formas, es importante -algo que se incorpora dentro del informe- hacer un análisis de cómo se revisan las posibles tensiones que puedan haber entre la gestión propia de lo que es un establecimiento educacional, los servicios locales y las urgencias que ello requiere, con lo que es el sistema de financiamiento de fondos y presupuestos de lo que es un servicio público, y cómo se complementan ambas normativas.

Sin embargo, me parece -algo que no aparece en el informe- que se requieren más estudios para poder llegar, efectivamente, a cuáles son la causas de esto y poder avanzar.

Por otro lado, me parece importante que no podemos dejar aislado, como una isla, lo que es el sistema de educación pública, sino que debemos ser capaces de comprender, en ese sentido, el sistema educativo como un todo.

Por último, es importante constatar la correcta instalación de todo lo que hemos hablado y de todos estos nudos que se pueden ir produciendo, que son relevantes para ir avanzando en otras temáticas que también son importantes y que podrían ser, finalmente, el fundamento último al cual queremos llegar, cual es mejorar la gestión pedagógica, la participación, la convivencia escolar y el liderazgo.

Si bien cada uno de estos puntos los analizamos y observamos, se observan ciertos avances y desafíos en cada uno de estos ítems, por ejemplo, en participación. Si bien es cierto se valora la participación que ha habido, efectivamente era una problemática el tema de los territorios.

Desde el punto de vista de la gestión pedagógica, es importante constatar que todas las unidades de apoyo técnico pedagógico están conformadas dentro de cada uno de los servicios locales; se ha ido avanzando, y en eso la pandemia ha apoyado a generar las distintas redes, a generar los distintos recursos que se requieren, pero, por supuesto, es algo que se tiene que seguir desarrollando. Sin embargo, hasta ahora no tenemos evidencias, dado el corto tiempo desde la instalación, para poder constatar una mejora, por ejemplo, en los aprendizajes de los estudiantes o dentro de lo que es el propio establecimiento desde sus competencias, desde sus organizaciones, etcétera.

Obviamente, hay que seguir en este proceso de aprendizaje, avanzar, mejorar y entregar los tiempos adecuados para hacer este correcto traspaso y fortalecer todas las políticas que inciden en él.

Es importante destacar que no podemos olvidar cuál es el objetivo último de esta política y la relevancia que tiene el traspaso de los municipios a los servicios locales, cual es mejorar el proceso de aprendizaje y de enseñanza en la calidad de la educación de los estudiantes que acceden a estos establecimientos; por lo tanto, todas las decisiones que tomemos o que se toman con las autoridades deben tener puesto el foco en estos puntos y no en otras razones. Es el estudiante la principal preocupación y la prioridad que nosotros debiéramos tener.

Efectivamente, el Consejo se pronunció respecto de la posibilidad de extender; sin embargo, no se obtuvo la mayoría, porque hubo una división respecto de los votos. Estamos conformados por seis miembros; tres votaron que se debería extender y tres votaron que no.

Con todo, el presidente mantiene la facultad, o sea no se le habilita, dado que el Consejo no obtuvo la mayoría, pero mantiene la posibilidad de poder, al menos, cambiar la gradualidad respecto del calendario en la implementación. Creo que es relevante considerar que los estudios que se mandaron a realizar por parte del Consejo proponían, al menos, mayor tiempo o daban cuenta de la relevancia de tomar los tiempos adecuados para cada uno de estos procesos, dentro de la instalación de los servicios locales.

15) La Académica del Departamento de Estudios Pedagógicos de la Universidad de Chile, e integrante del Consejo de Evaluación del Sistema de Educación Pública, señora María Teresa Flórez Petour.

La señora **Flórez** expuso en las sesiones 9ª y 10ª[18], de fecha 26 de abril y 3 de mayo de 2021, de la siguiente forma:

Primero, aclarar, tal como lo hice cuando me invitaron a la sesión, que, por acuerdo del Consejo, ninguno de nosotros puede, en forma individual, hablar en nombre del Consejo. Por lo tanto, lo que voy a hacer acá es una presentación como académica y como miembro del Consejo, pero no en representación de este.

En ese sentido, uso como base información similar a la que presentó Magdalena Vergara, como parte de nuestras conclusiones y recomendaciones; pero así como ella presenta una selección, por ejemplo, de las distintas dimensiones que nosotros trabajamos y no de todas, también estoy presentando aquí una visión en particular de esa aproximación.

Dejo eso bien claro y también no pasar a llevar los acuerdos del Consejo de Evaluación del Sistema de Educación Pública. Lo bueno es que Magdalena Vergara ya dijo varias cosas, por lo que voy a tratar de no repetir lo que ya mencionó sino que profundizaré en otras dimensiones.

Primero, enfatizar el trabajo que hemos hecho como Consejo, que ha sido bastante intenso y profundo, sin embargo, creo que es bastante desconocido. Hemos tenido alrededor de 55 reuniones y hemos trabajado en la definición de dimensiones relevantes, que no son solo las que aparecen en el reglamento, como dice Magdalena Vergara, sino también en las que nosotros, en base a los principios de la Ley N° 21.040, consideramos dimensiones relevantes de evaluar para que la ley se implemente según su espíritu. Hemos tenido alrededor de 35 invitados e invitadas, actores claves de distintos niveles, directores de los Servicios Locales de Educación Pública (SLE), del Servicio Civil, de la Superintendencia de Educación, representantes de las unidades involucradas en el proceso de instalación de los Servicios Locales, al Ministerio de Hacienda, representantes de los Departamentos de Administración de Educación Municipal (DAEM), académicos y representantes de los Comités Directivos Locales y Consejos Locales, especialmente de los estamentos de docentes, asistentes de la educación y apoderados. Cabe señalar que no hemos invitado estudiantes, hasta ahora.

También hemos trabajado con documentos sobre el proceso de instalación de la Dirección de Educación Pública (DEP) y del Ministerio de Educación (Mineduc),

---

[18] Las actas de las sesiones, que contienen su exposición íntegra, así como las consultas de los diputados y diputadas y sus respuestas, pueden encontrarse en el siguiente link: https://www.camara.cl/legislacion/comisiones/sesiones.aspx?prmID=2902&prmIdTipo=2103.
Asimismo, la exposición que realizó en la sesión 9ª, se encuentra disponible en el siguiente link: https://www.camara.cl/legislacion/comisiones/documentos.aspx?prmID=2902
Los videos de estas sesiones pueden encontrarse en http://www.democraciaenvivo.cl/

informes de investigación de consultoras e instituciones académicas, tanto con los informes del último año –que son los que mencionó Magdalena Vergara- como con los que nos ha proporcionado la DEP en este tiempo, y publicamos tres informes, 2018, 2019 y 2020. Sin embargo, el informe de 2018 y de 2019 se liberaron recién a fines del año pasado, porque estuvieron un tiempo bastante largo en trámite de transparencia y quizá, por eso, no había mucho dominio público acerca de cómo iba el proceso de instalación de la nueva educación pública, al menos, desde el trabajo del Consejo de Evaluación del Sistema de Educación Pública y, junto con eso, el informe intermedio que presentó Magdalena Vergara, sobre el cual también me voy a basar.

Primero, me voy a referir a las conclusiones y recomendaciones del informe intermedio, junto con las conclusiones y recomendaciones que señaló Magdalena Vergara para dimensiones en particular.

En el informe, partimos por algunas conclusiones y recomendaciones generales desde acciones que consideramos prioritarias a partir de los datos que se han levantado en el proceso del consejo.

Primero, creo que todos quienes estamos cerca de este proceso sabemos que es de alta complejidad y de una envergadura quizá sin precedentes en términos de un cambio en educación en las últimas décadas, por lo menos. Y, en ese sentido, se esperaban ciertos problemas o que surgieran cosas por mejorar durante su instalación y por eso este consejo y la gradualidad de la implementación.

Quiero señalar que, en general, en los actores hay una percepción de este proceso como necesario y positivo, en el sentido de que no hemos escuchado nunca a nadie que nos diga que deberíamos volver a la administración municipal, sino, por el contrario, hay altas expectativas de este proceso, siempre y cuando implique un cambio de sentido y no solo un cambio de administración.

Como acciones prioritarias dentro de las recomendaciones generales, uno de los grandes problemas, como mostró en detalle Magdalena Vergara, tiene que ver con la conducta muchas veces irresponsable y negligente de algunos municipios o simplemente ineficiente en algunos casos. Ha habido municipios que han sido muy cooperadores en el proceso, pero la calidad de información que entregan no ayuda a un buen traspaso y, en ese sentido, es aumentar […] de los instrumentos que se utilizan para el traspaso que, en este caso, tiene que ver con los convenios que mencionó Magdalena Vergara, pero eso no solo durante el traspaso, sino que nos deja muy claro la falta de control actual sobre la administración municipal. O sea, que existan estos problemas significa que la fiscalización existente es muy débil y, en ese sentido, si queremos anticiparnos y que no se sigan repitiendo los problemas del traspaso, habría que estar, desde ya, fiscalizando a todas las municipalidades que siguen a cargo de la educación pública y ver si hay atribuciones que faltan a la Superintendencia para poder establecer sanciones en estos casos.

Junto con eso, para poder asumir el desafío que implica realizar bien este proceso, porque en el fondo el énfasis está en mejorar la calidad de los procesos en los próximos años, se propone fortalecer las instituciones públicas involucradas en el proceso de instalación de la nueva educación pública, incluso, si eso implica proveer de profesionales adicionales por un período transitorio. O sea, no significa que la Dirección de Educación Pública (DEP) termine siendo un organismo gigantesco con muchas personas, pero durante el proceso en que se está poniendo en marcha la nueva educación pública, probablemente, se necesite más personal, así como también en el Servicio Civil, para poder realizar todos los procesos de selección de cargos que tiene que realizar y eso es importante planificarlo desde ya para que no sea un aspecto operativo el que termine frenando una buena implementación.

Además, revisar la normativa actual, los procesos y las instituciones que regulan el funcionamiento de los servicios públicos para ver cuáles son los nudos

críticos de esa normativa que pudieran estar afectando la gestión de los Servicios Locales de Educación Pública (SLE), especialmente, respecto de lo que dijo Magdalena Vergara de las posibles rigideces de la planificación y ejecución presupuestaria que podrían estar ralentizando el trabajo pedagógico por un tema de gestión de recursos.

Otra recomendación general era conformar una fuerza de tarea, mesa o coordinación intersectorial de la administración del Estado. Esta recomendación es importante, en el sentido de que hasta ahora es claro que este gran esfuerzo, este proceso de gran envergadura, excede con creces al Mineduc y a la DEP e involucra a muchos organismos del Estado, por lo que hace falta un compromiso explícito de estos distintos organismos a través de esta fuerza intersectorial que explicite su compromiso con que este proceso salga bien. Por eso, es una recomendación general.

El último punto de recomendación general dice relación con que hay mucha desinformación sobre el proceso, pareciera que quienes conocen la nueva educación pública son quienes están en los municipios que van a ser traspasados, el personal del servicio local y los directores de los establecimiento, pero las comunidades escolares no están enteradas de este cambio, con excepción de aquellos que puedan estar en cargos de representación, lo que significa que la participación de los representantes electos no ha sido la óptima.

En ese sentido, no se ha visto una campaña comunicacional nacional que hable sobre los sentidos del cambio de la nueva educación pública, porque esto puede tener muchos problemas operativos, pero hay que saber cuál es el norte, cuál es el horizonte y por qué vale la pena subirse a este cambio. Es muy importante desarrollar esa campaña, porque, en general, los actores no tienen suficiente información sobre el tema y eso también aumenta las tensiones y los temores cuando viene el momento del traspaso.

También se propone la gradualidad para las siguientes etapas, específicamente para el próximo año, pensando en que hay que mejorar todos esos procesos que se han descrito y los que estoy señalando en mi presentación, para que la implementación se pueda llevar a cabo de la mejor forma. O sea, más que hablar de más plazo, hablamos de hacer las cosas mejor para que se cumpla con los plazos.

En esta lámina hay cosas que mencionó Magdalena Vergara, así que avanzaré rápido, y tiene que ver con la extensión y dispersión de algunos territorios y los problemas de conectividad que eso genera. En esta materia –quizá-, la recomendación tiene que ver con que se reestudien algunos territorios, pero desde una visión muy de terreno. O sea, cuestiones de conectividad, como saber cuánto tiempo me va a tomar ir a hacer un trámite si la oficina del Servicio Local de Educación Pública (SLEP) no está en mi ciudad o en mi localidad y si voy a tener que tomar un barco o un bus que pasa cada tres días. Ese tipo de cosas, ese tipo evaluación en terreno.

Asimismo, a nivel de diseño de la ley está el traslape de funciones en el acompañamiento pedagógico. O sea, no solo hay traslape de funciones generales o falta de claridad de roles, sino que antes de la Nueva Educación Pública, la municipalidad asumía el lado administrativo de la educación y el Deprov el lado de acompañamiento pedagógico. Pero ahora en la nueva educación pública las unidades de apoyo técnico pedagógico tienen una función de acompañamiento pedagógico, pero no se solucionó cómo eso interactuaba con la persistencia de ese mismo rol en los Deprov y, además, en la Agencia de Calidad. Entonces, hay que tener cuidado con que las escuelas se vean sobreintervenidas, con mensajes contradictorios y donde se termine por no respetar el espíritu de la ley en términos de una educación con sentido territorial, contextualizado, participativo y diverso.

Los seremis que asistieron a algunas sesiones reconocieron que podrían haber tenido un rol más significativo apoyando los procesos de traspaso, y por eso está dentro de las recomendaciones.

En cuanto al rol de la superintendencia para fiscalizar a las municipalidades antes y durante el proceso de traspaso, eso tiene que ver con fortalecer lo que puede hacer la superintendencia, porque si bien los municipios cumplen con entregar la información, la calidad de la misma que entregan es muy diversa y no toda sirve para lo que se necesita para el traspaso.

También se distingue una atención entre los principios de la ley Nº 21.040 y la ley de Aseguramiento de la Calidad de la Educación, que tiene que ver con qué tan compatible es el Sistema Nacional de Aseguramiento de la Calidad, que busca un estándar con una visión territorial y contextualizada y la autonomía de las escuelas y hasta dónde se pueden sostener esas dos miradas simultáneamente.

Como ya mencionó Magdalena Vergara, el hecho de poner oficinas locales de los SLEP para los problemas de territorialidad; aclarar a nivel normativo las funciones que correspondan a cada actor en apoyo pedagógico; reforzar el rol de las seremis en los traspasos; precisar el rol de la superintendencia sobre todo en términos de qué sanciones se pueden establecer y para que se fiscalice desde ya a todas las municipalidades y no empiecen a aparecer estas cosas en los procesos de traspaso; revisar la ley de Aseguramiento de la Calidad buscando que exista coherencia con los principios de aprendizaje integral, contextualización, territorialidad y diversidad e inclusión. La Agencia ya estaba trabajando en eso para que los informes que genera sean más pertinentes a este nuevo sostenedor, que tiene otra conformación territorial. Y también la tensión que se produce entre la atribución de cierre de los establecimientos con el deber de oferta pública que tienen los servicios locales en cada territorio.

Como indicó Magdalena Vergara, hay que mejorar los decretos alcaldicios y los convenios de transición con mejor información; definir la responsabilidad en el municipio de traspasar los bienes inmuebles y regularizados, y habilitar una rendición de cuentas retroactiva para los municipios. Otro problema que se genera para la superintendencia es que, una vez que se hace el traspaso, la municipalidad ya no es responsable de lo que pasa y, por lo tanto, si hay alguna irregularidad que provenga de ahí, la superintendencia ya no puede ir a la municipalidad, porque ya no es sostenedora. Ahí se genera también otro problema.

En la dimensión de gestión de personas –en gran medida, ya lo dijo Magdalena Vergara-, el tema era atraer profesionales calificados y aptos para las funciones tanto porque falta conocimiento de lo que significa la lógica de servicio público, como porque en algunos territorios no hay personas disponibles para el tipo de competencias que se necesita; la necesidad de constituir a tiempo el comité directivo; el tema de la sobredotación que se traspasa de los municipios a los servicios locales -esto del aumento de dotación antes del traspaso y de las horas contratadas-; falta de personal en algunos servicios locales para ciertas funciones, especialmente en infraestructura, donde hay muy poca gente, y para algunos aspectos de la unidad de acompañamiento técnico pedagógico, por ejemplo, a veces, hay un encargado PIE para todo un territorio que se debe estar moviendo muchísimo; necesidades de desarrollo de capacidades, en este caso de lo que significa el servicio público, y el tema de los funcionarios DAEM, lo cual tiene que ver también con lo que nos plantearon los dirigentes respectivos de que se genera un proyección de desempleo muy importante. Entonces, por eso es algo que hay que atender.

En cuanto a las recomendaciones, se deben mejorar las condiciones salariales, laborales y profesionales para atraer a personas a estos concursos y que haya una pronta Constitución e inicio de funciones del comité directivo, como también regular el tiempo de participación en el proceso de elección del director ejecutivo para

que no se demore tanto y que los municipios ajusten las dotaciones antes del traspaso, a fin de que este problema no sea traspasado a los servicios locales.

En caso de que este problema sea traspasado a los servicios locales, se deben tomar las buenas experiencias de algunos servicios locales, en el sentido de que lo que se ha hecho han sido más bien procesos dialógicos con todos los actores, respetando y utilizando los mecanismos del estatuto docente y del estatuto de los asistentes de la educación, evitando desvinculaciones y trabajando más bien con la cantidad de horas asignadas, favoreciendo que se ejecuten los retiros pendientes.

En términos de la dotación ya no de las escuelas del servicio local, sino que del servicio local propiamente tal y sus unidades, se debe revisar realmente cuánta gente se necesita en cada una de las unidades en el nuevo organigrama; generar redes y formación entre pares en los servicios locales. O sea, sería superbueno que los primeros servicios locales empiecen a ayudar a los servicios nuevos a aprender; entregar capacitación lo más anticipadamente posible del personal, especialmente en la lógica del servicio público; incluir la participación de quienes están en el comité directivo y los consejos locales en horas laborales, en especial aquellos profesores o asistentes de la educación, porque a veces les hacen problemas para asistir a las reuniones por no estar dentro de su carga laboral. Para el tema del desempleo de funcionarios DAEM, a lo menos conformar una mesa de trabajo que se haga cargo del tema.

En relación con los recursos financieros –Magdalena Vergara ya mencionó algunos aspectos-, existen problemas de financiamiento hacia el servicio público, donde pasamos de una ejecución anual de presupuesto *versus* una ejecución plurianual. Eso genera cierta ralentización y cambio de lógica, y al haber falta de conocimiento también se dificulta el proceso. Se genera subejecución presupuestaria no porque no se necesite ese dinero, sino porque no se alcanza a ejecutar cuando corresponde.

En ese sentido, hay tres nudos críticos: el conocimiento de cómo funciona la ejecución presupuestaria en un servicio público *versus* municipal; la mala calidad de la información entregada por los municipios en este punto, y la no disponibilidad de los saldos de caja anteriores. O sea, al ser una ejecución anual, lo que no se gastó por ley de servicio público se debe reintegrar y, además, genera una tensión con la ley de subvenciones, porque se asume que la subvención escolar debería quedar para el servicio de educación. Insisto, la normativa de servicio público se debe reintegrar. Muchas veces esa subejecución –insisto- no pasa porque no se necesiten los recursos, sino porque no se logró ejecutar de buena manera en los tiempos.

Entonces, a modo de recomendaciones, se deben considerar los saldos finales de subvenciones, la SEP, etcétera, que puedan contarse como saldos iniciales de caja. También debe haber una mesa con organismos pertinentes del Estado y los servicios locales para evaluar si puede haber alguna flexibilización y una visión más localizada del presupuesto -obviamente manteniendo las regulaciones-, porque se entiende que toda esta demora del servicio público de administración no solo es para ralentizar las cosas, sino porque hay procesos asociados a regulación, control y transparencia, sin que eso signifique quitar esos controles de calidad. Asimismo, hay necesidad de formación y generación de capacidades en el personal SLEP, como también en las comunidades escolares, porque como no están informadas y de repente les llega esto, están acostumbradas, por ejemplo, a que como se administraban antes las platas de la SEP pedían ciertas cosas y esas cosas llegaban. En este caso, hay que dar una vuelta muchísimo más larga y, por lo tanto, hay una percepción de que los recursos no llegan a tiempo. Hay que hacer propuestas de reforma normativa institucional para que permitan una administración más eficiente del presupuesto.

Respecto de la gestión de infraestructura, también se percibe este aspecto como un nudo crítico importante. Ha salido a lo largo del trabajo del Consejo de

Evaluación del Sistema de Evaluación Pública como un tema. Esto pasa porque no hay buenos diagnósticos iniciales para hacer una buena planificación presupuestaria, ya que el retrato que se entrega desde el municipio sobre los problemas de infraestructura a veces no es el que se encuentra en la práctica. Como ya había dicho, falta personal en el área de infraestructura en los SLEP y, además, la forma de gestionar los fondos para proyectos de infraestructura no siempre es la más ágil.

Otro aspecto de infraestructura es que, para algunos servicios locales de educación pública, las comunas cabeceras no tienen instalaciones suficientes para alojar el servicio en un mismo edificio. Eso significa que hay servicios locales que han tenido que funcionar en instalaciones provisorias en una escuela, que los comités directivos locales y los consejos locales se tienen que ir rotando y juntarse en escuelas también o algunos lugares donde los servicios locales están repartidos en más de un espacio.

Entonces, como recomendaciones, que haya un trabajo de diagnóstico detallado, contextualizado y riguroso para permitir un buen diseño y ejecución del presupuesto con un trabajo coordinado y anticipado entre DEP, municipios, Ministerio de Hacienda, Dipres y los SLEP; ver cuáles son las contrataciones necesarias en el área de infraestructura; abordar los cambios que ya se señalan para gestión financiera, sobre todo pensando que un punto importante en la subejecución presupuestaria era en este ítem –infraestructura-, y revisar lo antes posibles las comunas cabecera de los servicios locales que vienen para que los mismos servicios tengan sus edificios disponibles a tiempo.

Acá voy a empezar con las dimensiones que no aparecieron en la presentación anterior. Está la dimensión de gestión pedagógica, donde una de las cosas que se ha repetido a lo largo de nuestro trabajo como Consejo de Evaluación es que todos estos problemas operacionales finalmente hacen que quede en segundo plano el foco pedagógico, que era una de las intenciones de este cambio a la nueva educación pública, donde el eje pudiera estar en lo pedagógico, aunque se reconocen ciertas mejoras desde que se han constituido las unidades de apoyo técnico pedagógico, pero todavía falta.

Las comunidades escolares, con excepción de los directores, es decir, los profesores, los asistentes, los estudiantes y los apoderados, perciben que no hay un mayor cambio pedagógico, que no hay un cambio de dirección respecto a lo que habían visto en el sistema municipal. Eso es porque falta difusión y existe poca consideración de la visión de las comunidades escolares en los planes anuales y locales de algunos servicios.

También fue bastante transversal el año pasado, cuando escuchamos a muchos actores, oír que los directores de los establecimientos son actores que no estarían facilitando el flujo de información, el tema llega hasta ellos, y hay una visión crítica respecto a que los directores de los establecimientos tienen lógicas todavía muy verticales y poco participativas, por lo tanto, no se integran adecuadamente al sentido de cómo funciona esta mirada del sistema público.

Junto con eso, hay un levantamiento de múltiples desafíos que los actores señalan que tienen para poder asumir el cambio pedagógico asociado a la nueva educación pública, por ejemplo, formación relativa a cómo formar o cómo trabajar con estudiantes de contextos en desventaja socioeconómica.

De igual modo, enfatizan que se cuente con sistemas de información pertinentes y con datos consistentes, porque había algunas inconsistencias en bases de datos que les llegaban a ellos.

Entonces, lo primero es que se solucione todo esto operacional que se señaló antes, para que el foco pueda estar en lo pedagógico.

Es urgente la campaña de difusión, pero eso acompañado de un trabajo previo con las comunidades escolares, incluso las que van a ser traspasadas mucho más adelante; que esto se empiece a conocer pronto y a nivel mucho más masivo.

También se recomienda que existan mecanismos legales o reglamentarios concretos que regulen el respeto por las instancias participativas establecidas por la ley. Esto también aparece en la dimensión de participación y vinculación, porque si bien están constituidos los comités directivos y los consejos locales, la calidad de esa participación ha sido muy desigual entre los distintos servicios locales.

Hasta ahora, un comité directivo o un consejo local que estima que su voz no está siendo considerada, no tiene ningún mecanismo normativo específico para denunciar eso y que haya sanciones. En ese sentido, por ejemplo, no se ha creado el reglamento de remoción del director ejecutivo. Eso es algo que veo yo, no fue conversado en el Consejo de Evaluación; pero podría ser una herramienta.

Asimismo, se sugiere que tiene que haber un programa de formación de directores de establecimientos en esta lógica más participativa.

Nuevamente, se recomienda la necesidad de revisar el sistema de aseguramiento de la calidad, para resguardar su coherencia con los principios de la nueva educación pública.

Hay un modelo de acompañamiento pedagógico de la DEP que se está utilizando y, en ese sentido, hay que ver cómo evalúan los actores que eso ha ido funcionando y ver las necesidades de dotación de las unidades de apoyo técnico pedagógico, porque, como decía, hay un encargado de convivencia escolar, un encargado PIE o un encargado SEP en todo el territorio, que se tiene que mover para todos lados, con sobrecarga laboral y muchas veces terminan haciéndose cargo de temas administrativos por los problemas que vienen del traspaso.

También deberían tener lugar instancias de formación pertinentes. Los actores solicitan que sean contextualizadas y ofrecidas por el propio servicio local, con respeto a los principios de la ley, además de la pertinencia de tener trabajo en redes entre servicios locales y apoyar el desarrollo de sistemas de seguimiento locales.

En participación y vinculación hubo demora en la constitución de los consejos de los comités directivos y consejos locales en esta primera etapa. Eso, además de afectar lo que decía Magdalena Vergara, es decir, hacer la elección del director ejecutivo y que todo se desencadene, implica también problemas de participación, que es uno de los cambios centrales de sentido en esta nueva visión de la educación pública.

Acá aparece nuevamente el tema de la campaña. Hay problemas de difusión que afectan la participación de las comunidades. O sea, si no sé qué es esto y a mí me convocan a elegir a un representante de algo que desconozco, obviamente no participo.

Como decía anteriormente, la calidad de la participación ha sido diversa. Por ejemplo, hay un consejo local que no ha podido juntarse, o que fue convocado una vez por el director ejecutivo, aunque llevan bastante tiempo funcionando. Pese a esto, los comités directivos y los consejos locales son supercomprometidos: hacen reuniones independientes, se reúnen muy seguido, o sea, tienen un trabajo muy comprometido y se valoran estas instancias, pero no siempre la relación con el servicio local y su directiva es fluida.

También tiene que haber mayor claridad de roles y atribuciones en algunos aspectos, porque se han generado diferencias.

Algo urgente es el trabajo de vinculación territorial. De esto vimos muy poco, o sea, hay redes entre algunos establecimientos, más bien redes que continúan, redes preexistentes, pero vínculos con las organizaciones de la comunidad son casos muy puntuales. No hay un trabajo sistemático en el tema de vinculación territorial.

Otro tema que se generaba aquí es que, en algunos casos, son comunas que no tienen una historia común compartida y eso, al inicio, genera falta de identidad compartida, pero esto de todas maneras se va subsanando.

Entonces, en los nuevos servicios locales hay que acelerar la creación e iniciación de actividades de comités directivos y consejo local.

Nuevamente, se sugiere regular las acciones y mecanismos legales y reglamentarios con sanciones para los casos en que la participación del comité directivo y consejo local no se respete. Por ahora, ellos no tienen ningún mecanismo para decirle a la dirección del servicio local: “Usted no está considerando mi voz”, y que haya una sanción asociada.

De igual manera, se recomienda que se incorpore la retroalimentación entregada por los comités directivos en relación con el decreto N° 101, especialmente en aquella retroalimentación que busca una relación más dialógica con el servicio local.

También se tendría que agregar más claramente cómo el comité directivo y el consejo local deberían interactuar, porque el comité directivo de alguna manera tiene un rol más regulador, fiscalizador, y el consejo local es de aporte al proyecto territorial. Pero, por ejemplo, el consejo local sería importante que conociera al comité directivo y pudiera interactuar con él, en el caso que necesite precisamente reclamar, por ejemplo, cosas como que no ha podido participar o no sea ha considerado su voz en el proyecto local.

Desde todos los consejos locales nos dijeron que se debe revisar la duración del Consejo Local en la ley, porque el cargo dura dos años y no alcanzan a aportar. Como es un tiempo muy cortito, habría que ver cómo se concilia con el tema de los consejos escolares, dado que de ahí viene esa duración.

Se recomienda incorporar alianzas estratégicas con el entorno en los planes anuales y planes estratégicos locales, y continuar con el trabajo de anticipación y colaborativo entre comunas para el tema de la identidad, dado que ya se realizan.

Finalmente, respecto de la dimensión de liderazgo, han sido valorados positivamente aquellos liderazgos que tienen una lógica más participativa, abierta y centrada en la confianza y en lo pedagógico. Hay una percepción positiva del cambio en la lógica organizacional, pero hay preocupación de que esto solo termine siendo un cambio de jefe y no de sentido. Entonces, si todo este trabajo solo se está realizando para que haya un cambio de administración, pero bajo la misma lógica, no tiene mucho sentido.

También se señala que en algunos casos la percepción del director ejecutivo es el de una figura de más difícil acceso, en el sentido de que antes el apoderado que tenía algún problema podía recurrir al alcalde o a la municipalidad, en cambio acá, si el Servicio Local de Educación está en otra localidad, no donde el apoderado vive, no hay claridad respecto de cómo llegar a la persona idónea para establecer las demandas. En ese sentido, la figura de apoyo de la Unidad de Gestión Territorial ha funcionado, pero igualmente se siente que la información llega hasta esa instancia, no hasta el director ejecutivo.

Nuevamente se manifiesta la necesidad de un cambio de mentalidad y disposición en los directivos de los establecimientos y en los nuevos sostenedores, a fin de enfrentar esta lógica más participativa que requiere la nueva educación pública.

Las recomendaciones en esta dimensión son la incorporación del programa de formación de directivos –tema que ya habíamos hablado- y de equipos directivos con una lógica organizacional, con el objeto de que las comunidades educativas tengan una actitud más activa en lo participativo. En ese sentido, las comunidades escolares se acostumbraron a una lógica más receptiva y a esperar que les digan lo

que tienen que hacer, razón por la cual la formación en lo participativo es una necesidad transversal.

La dimensión de convivencia escolar, desde el diagnóstico de la Dirección de Educación Pública (DEP), es un aspecto crítico dentro de las comunidades escolares; de hecho, algunos estudios señalan a la convivencia escolar entre adultos como un problema en las comunidades. Hay varios programas al respecto, pero no se han evaluado sus implementaciones. Por ello, las recomendaciones en el informe tienen que ver con evaluar cómo han funcionado estos programas desde la percepción de los actores de las comunidades escolares, así como enriquecer la dotación de los Servicios Locales en este punto porque son poquitos.

No a título personal, pero más allá del consejo y saliéndome del rol de consejera, las problemáticas que visualizo como investigadora y académica en la implementación de la nueva educación pública tienen que ver, por ejemplo, con una tensión en la propia ley, que diría son parte de las tensiones que se han generado en la legislación sobre educación durante los últimos treinta o cuarenta años; me refiero a la promoción de ciertos principios: calidad integral, docencia creativa e innovadora, colaboración y trabajo en red, proyectos inclusivos, participación, democracia, autonomía, etcétera, donde el punto es que esa promoción tiene que convivir con la operacionalización de dichos principios, que no siempre es respetuosa o que no permite poner en práctica dichos principios. Por ejemplo, si hablamos de una mejora continua de la calidad, pero el reporte de resultados se basa en evaluaciones estandarizadas con preguntas de selección múltiple en dos áreas del currículum, difícilmente vamos a motivar el desarrollo de una calidad integral, las habilidades del siglo XXI o un pensamiento crítico y reflexivo, como se señala en la ley, porque pedagógicamente eso está mucho más ligado a un aprendizaje por mecanización y automatización y, en consecuencia, tal como dice la evidencia internacional y nacional, transformándolo en entrenamiento para una prueba, más que en aprendizaje profundo. Entonces, en esta ley y en otros cuerpos legales conviven dos lógicas que hay que evaluar si son compatibles o no.

Junto con lo anterior -también desde mi perspectiva de investigación-, creo que hay dos ejes que hacen compleja la implementación de la nueva educación pública desde sus sentidos. El primero es que pese a los diagnósticos que llevaron a este cambio y lo que generaba el sistema de financiamiento por medio de váucher, no se modificó. Al mantener este sistema de financiamiento, también se mantiene la lógica de competencia entre establecimientos versus los principios de “generemos redes y colaboremos” pero, a la vez, se debe competir por la matrícula con el establecimiento de al lado. Además, pasa que un servicio público necesita un porcentaje alto de ingresos fijos, pero en la ley se establece un servicio público que debe funcionar con una lógica de financiamiento, sin considerar que la mayoría de los ingresos son variables. Entonces, es complejo poder financiar los gastos básicos del servicio público si se deben sortear ingresos variables todo el tiempo.

El segundo es que se mantienen las políticas de *accountability* de mercado, donde -insisto, desde la investigación internacional y nacional que manejo y conozco- veo un riesgo de pérdida de los principios de la nueva educación pública, dada su adaptación a la lógica más homogeneizante de otras políticas, como el sistema de aseguramiento de la calidad.

Asimismo, creo que aquí se invisibiliza la voz de los actores que participaron en las instancias que se realizaron para la construcción de la estrategia nacional de educación pública. En ese sentido, los diálogos técnicos, los diálogos temáticos y la consulta nacional levantan preocupaciones sobre este tema, y hablan, por ejemplo, de una actitud de rechazo al Sistema de Medición de la Calidad de la Educación (Simce), lo que no se toma en cuenta como parte de la estrategia nacional de educación pública, lo que, a la vez, invisibiliza la investigación internacional que se ha realizado desde los años 80 hasta el día de hoy respecto de la práctica docente

"*teaching to the test*", de todo lo que significa la reducción curricular y de toda la distorsión que genera este tipo de pruebas en el proceso pedagógico. En el caso chileno, durante los últimos diez años ha habido cada vez más evidencia cualitativa y cuantitativa sobre esos efectos en las comunidades.

Entonces, desde la perspectiva de mi área de investigación, aparte de lo que señala el Consejo Local, también distingo estos riesgos en relación con cómo se está pensando el diseño y la implementación de la nueva educación pública.

16) El Integrante del Consejo de Evaluación del Sistema de Educación Pública, señor Omar Jara.

El señor **Jara** expuso en la sesión 10ª[19], de fecha 3 de mayo de 2021, de la siguiente forma:

Cabe señalar que concuerdo y me representan plenamente las dos presentaciones que hicieron la semana pasada las representantes del consejo, señoras Magdalena Vergara y María Teresa Flórez.

Somos miembros de un consejo y, hasta ahora, hemos evacuado cuatro informes -tres anuales y uno intermedio- que consagran, básicamente, acuerdos que hemos sostenido en diversas reuniones, en casi tres años y medio de existencia del consejo.

Solo quiero hacer algunas apreciaciones, no tan personales, pero que son parte de la práctica y de la experiencia que he tenido en el consejo, puesto que he estado desde un inicio, respecto de lo que se está discutiendo en la comisión y que me parece importante, por lo menos desde mi punto de vista, dejar planteadas.

En primer lugar, el cambio que se está produciendo hoy en la educación pública es mayúsculo, enorme; son 40 años, prácticamente, de municipalización y, pasar de 40 años de municipalización de la educación pública a este nuevo sistema, creo que nadie supuso que iba a ser fácil.

En ese sentido, me atengo, básicamente, a los testimonios que hemos recogido en nuestro consejo, en el que hemos logrado hablar con una cantidad muy importante de actores que son parte de este proceso de cambio.

Digo lo anterior, porque pareciera ser que este cambio de la nueva educación pública fuera, para algunos, automático, un proceso que se pudiese hacer con facilidad, pero no es así. Creo que hay muchísimas complicaciones que hoy están a la vista en el último informe, sobre todo en el informe intermedio, respecto de las modificaciones legales y administrativas que hay que hacer a este proceso, porque evidentemente se requieren cambios.

No obstante, creo que sí hay un acuerdo muy sustantivo en nuestro consejo respecto de la necesidad de seguir adelante con la Nueva Educación Pública. Creemos que es un cambio positivo, que es una nueva forma de enfrentar la educación y que hoy es muy fundamental para nuestros niños, niñas y jóvenes.

Por lo tanto, partimos de la base de que este cambio es absolutamente necesario, pero hay algunas complicaciones que habrá que ir despejando en el camino.

Insisto, al momento en que el legislador planteó todo este proceso de cambio, tal vez no tuvo a la vista las complicaciones que podrían surgir en los niveles locales e intermedios en donde hoy se está implementando esta ley.

---

[19] El acta de la sesión, que contiene su exposición íntegra, así como las consultas de los diputados y diputadas y sus respuestas, pueden encontrarse en el siguiente link: https://www.camara.cl/legislacion/comisiones/sesiones.aspx?prmID=2902&prmIdTipo=2103.
El video de esta sesión puede encontrarse en http://www.democraciaenvivo.cl/

En segundo lugar, pasar a 70 servicios locales de trescientos cuarenta y tantos municipios, ha tenido y ha supuesto algunas complicaciones concretas.

Recién escuchaba la lectura de las cartas que han enviado representantes de los DAEM y de las organizaciones que operan en el sistema educacional, y evidentemente vamos a tener mucho de eso, porque las coordinaciones son difíciles, el traspaso es complicado, porque tenemos municipios que han entregado y han hecho un traspaso no en orden -por decirlo suavemente- respecto de lo que tenían que entregar y porque adaptar la nueva educación pública al servicio local no es una tarea fácil, sino un desafío mayor.

Entonces, el Estado tiene que mirarse a sí mismo para saber si tiene la capacidad de generar una estructura intermedia, y no dañar a algunos actores que hoy están en el sistema de educación pública.

A propósito de los DAEM, con los cuales tuvimos una relación permanente -diría hasta sistemática-, pues los escuchamos en más de una ocasión, sin embargo, la ley no resuelve el tema de estos, y vamos a tener una cantidad de personas que van a perder su empleo. Insisto, en el proceso de implementación de la ley esa cuestión no quedó resuelta y habrá que resolverla de otra manera. Lo digo también a propósito de las duplicidades que existen entre las seremis, los Deprov, los servicios de aseguramiento de la calidad, etcétera, es decir, todos los actores que hoy conviven en el sistema educacional y que, evidentemente, tienen situaciones de duplicidades que complican, de alguna manera, el establecimiento de la Nueva Educación Pública.

Un componente que me gustaría destacar es la participación, muy relevante en la ley y que esta consagra instancias de participación innovadoras y nuevas, de tal modo que ahí hay un punto en que deberíamos poner más atención en los comités directivos, en el consejo local, ya que son instancias en que empieza a participar la comunidad y, lamentablemente, a causa de la pandemia no han tenido la relevancia suficiente.

Creo que ahí hay un punto en esta ley al cual debiéramos poner más atención, y, desde mi punto de vista, -ya lo he planteado en varias ocasiones- deberíamos tener prontamente una campaña de verdad en los medios de comunicación que dé cuenta de la implementación de esta ley, de modo tal que los ciudadanos sepan que hay un proceso de cambio sustantivo en la Nueva Educación Pública, que pretende tener una educación de calidad, inclusiva, territorializada y con sellos territoriales, que se está implementando en nuestro país y que con toda seguridad va a cambiar completamente nuestra educación pública en los próximos años.

Todo proceso de cambio tan sustantivo como este supone que debe tener una base de legitimidad, sobre todo, en los actores, entre los que considero muy fundamentales a los estudiantes y apoderados.

Hay un apartado que pueden ver después en nuestro informe, que da cuenta de esto y de la necesidad de tener una campaña comunicacional más potente en relación con este proceso.

Otro tema que quiero mencionar es la voluntad política de todos los actores para sacar esto adelante.

Tengo la impresión de que hay una voluntad política expresa de todos. Sin embargo, de aquí a que tengamos esta ley completamente implementada, seguramente van a pasar cuatro gobiernos. Por lo tanto, sacar esto adelante no es tarea de un sector u otro, sino de un trabajo en conjunto de todas las fuerzas políticas y de los gobiernos que siguen.

Por lo que he visto, en el consejo hay una voluntad política muy desarrollada de todos los actores para que esto funcione. Lo digo con la seguridad que me da el haber asistido -con excepción de una- a todas las reuniones del Consejo de Evaluación del Sistema de Educación Pública.

Más allá de las diferencias que tenemos -soy parte de la oposición-, ha habido una voluntad política particularmente de quienes tienen responsabilidad, y reconozco el papel que ha jugado María Alejandra Grebe, pues ha habido una disposición de sacar esto adelante, independientemente de las complicaciones y, a veces, de las distintas visiones que podamos tener.

Por lo tanto, me parece, desde ese punto vista, que el cronograma se está cumpliendo. De hecho, un grupo de consejeros no accedimos a modificarlo, y no porque no creamos que se le deban cambiar cosas, sino porque creemos que la ley es buena y se debe implementar sin dar señales erráticas y, en sentido, vimos que aplazar la implementación de la ley era una señal que podía ser leída de mala manera.

Lo que sí tengo claro es que seguramente, en algún momento, vamos a tener que volver a discutir los plazos, porque implementar prácticamente 60 servicios locales de aquí a 2025 es una tarea titánica, pensando que en tres años y medio hemos implementado solo once servicios locales. ¡Ustedes se imaginarán lo que significa implementar 60 en tres años!

Insisto, más allá de las diferencias que podamos tener -después va a venir el subsecretario, con quien, a veces, también tenemos visiones contrapuestas-, hay un interés común en sacar esto adelante y de buena forma, porque todos tenemos el convencimiento de que debemos tener un sistema público que nos enorgullezca.

En lo personal, creo que es responsabilidad de todos el tener un sistema público debilitado, con baja matrícula y de mala calidad; y un país democrático debe tener un sistema público potente. Por lo tanto, el pilar fundamental para fortalecer un sistema democrático es contar con un sistema educacional público potente, con alta matrícula y de calidad.

Hay una propuesta, y con esto voy terminando, que me hace mucho sentido y, a modo de mejorar, lo planteo en esta comisión.

En la página N° 54 del informe planteamos la necesidad de conformar una fuerza de tarea o mesa de coordinación intersectorial al más alto nivel de la Administración del Estado para asumir la coordinación del proceso de traspaso del servicio educacional desde los municipios. Y esa observación es de mucha importancia, porque creo que el proceso rebasa la responsabilidad que le pertenece solo al Ministerio de Educación. Es una tarea del Estado en su conjunto y, en ese sentido, si queremos tener y avanzar hacia un sistema público robusto, de calidad e integrado, debemos tener una coordinación y una fuerza de tarea en los próximos años que no solo involucre a los organismos o a las instancias del Ministerio de Educación, sino que vaya mucho más allá de eso. Por ello, planteamos una fuerza de tarea en el Estado al más alto nivel.

Tres años después de iniciado el proceso de cambio, creo que está en mejor pie. La experiencia sirve muchísimo y me parece que estamos en mejores condiciones para implementar de manera más eficiente los procesos de instalación de los servicios locales de educación pública (SLEP). No es una tarea fácil; no es para nada fácil.

Los diputados y diputadas presentes en la sesión, conocen muchísimo del mundo de la educación. El diputado Venegas y la diputada Girardi han estado siempre involucrados en esto, por lo que saben que es muy difícil realizar este tipo de cambio, pero también saben, al igual como nos hemos convencido en el Consejo de Evaluación del Sistema de Educación Pública, que lo mejor para el país es implementar este sistema de educación pública. Ojalá lo podamos realizar en tiempo y forma.

17) El Dirigente comunal del Colegio de Profesores de Valparaíso, señor Andrés Arce Olate.

El señor **Arce** expuso en la sesión 11ª[20], de fecha 17 de mayo de 2021, de la siguiente forma:

Señalo desde ya que existe una gran inquietud de parte de las trabajadoras y de los trabajadores del Servicio Local de Educación Pública de Valparaíso, en torno a una serie de temas, sobre todo durante el proceso de retorno a la presencialidad en nuestra comuna, por las implicancias que eso tiene.

Sin embargo, me referiré a elementos más generales de lo que ha sido el proceso y la experiencia de la implementación del Servicio Local de Educación Pública de Valparaíso; así, desde nociones más globales, quizá pueda aportar al conocimiento de la comisión cual es la perspectiva y la mirada que tenemos las trabajadoras y los trabajadores de la educación, en particular los docentes de nuestra comuna.

En primer lugar, leyendo el oficio que da inicio a la investigación de la comisión especial, en el punto Nº 4, la lógica de la ley implicaba una ausencia de ciclos políticos; sin embargo, nos hemos dado cuenta de que, en particular el Servicio Local de Educación Pública de Valparaíso, tiene muy poca autonomía respecto de los gobiernos de turno.

Durante los pocos meses que han transcurrido, desde que comenzó su implementación, hemos visto una dependencia total de los lineamientos del Ministerio de Educación. Por ejemplo, retorno superapresurado; por otro lado, el convenio de la formación ciudadana que estaba implementado la Armada también fue llevado a cabo por el Servicio Local.

Eso da cuenta de una filiación y de una dependencia política-ideológica bien fuerte. Incluso, cabe mencionar que algunos de los subdirectores del Servicio local han sido candidatos de partidos oficialistas y eso da cuenta de que ese principio de los ciclos políticos está un poquito ausente.

Si partimos desde una línea cronológica, el primer elemento que podemos señalar dice relación con el cambio de caja de compensación y de mutual de seguridad, a nuestro entender fue arbitrario. Las trabajadoras y los trabajadores, las y los docentes de la comuna estábamos afiliados a la caja de compensación 18 de Septiembre y al Instituto de Seguridad del Trabajo (IST); sin embargo, a fines de noviembre del año pasado, los 25 funcionarios del Servicio Local de ese momento tomaron la decisión de cambiar de caja y de mutual de seguridad. Hoy estamos afiliados a la caja de compensación Los Andes y a la Asociación Chilena de Seguridad (ACHS). Actualmente hay un gran descontento. Ese fue el primer gran descontento, previo al traspaso al servicio local.

La primera señal fue la ausencia de un proceso participativo y democrático real. En la primera Cuenta Pública del Servicio Local, que se llevó a cabo hace un par de semanas, se dio cuenta de que había sido un proceso participativo sin precedentes; no obstante, quienes votaron y quienes tomaron finalmente la decisión fueron solo 25 funcionarios, respecto de un universo de 3.200 trabajadores de nuestra comuna, lo que indica que hay una representatividad bastante escasa.

En segundo lugar, como segundo hito a señalar, hay algo que también trabajamos en conjunto con la directora nacional y que tiene que ver con un problema que aún no se resuelve: el bono de incentivo al retiro. Hasta el día de hoy hay 36

---

[20] El acta de la sesión, que contiene su exposición íntegra, así como las consultas de los diputados y diputadas y sus respuestas, pueden encontrarse en el siguiente link: https://www.camara.cl/legislacion/comisiones/sesiones.aspx?prmID=2902&prmIdTipo=2103.
El video de esta sesión puede encontrarse en http://www.democraciaenvivo.cl/

docentes que todavía no han podido hacer valer su derecho, dado que el proceso no estaba contemplado en la ley, en el marco de un traspaso desde una corporación municipal a un servicio local.

Eso ha generado que muchas profesoras y muchos profesores de edad avanzada, que todavía están en funciones y que van a retornar a trabajo presencial, todavía no puedan salir del sistema obteniendo dicho beneficio.

Avanzando en esa línea cronológica, el tercer elemento que nos preocupa, el cual hemos planteado desde el inicio, pues surgió con mayor énfasis a fines de febrero y tomó mucho vuelo en marzo, dice relación con algunos elementos propios de la resolución de traspaso N° 1.581, de la Dirección de Educación Pública, en virtud de la cual nosotros y nosotras fuimos traspasados al servicio local de educación. Constatamos que los contratos y las condiciones con las cuales íbamos a ser traspasados sin solución de continuidad no fueron respetados. Por lo menos, la resolución de traspaso no la refleja como debiera ser, pues hay diferencias de hora, de centros de costo y, por lo tanto, los docentes que estaban ejerciendo funciones en algunos proyectos, como, por ejemplo, siendo parte de los PME o de la articulación de los programas PIE, hoy ya no puedan realizarlas, cuestión que fue supergrave. En ese sentido, establecimos una mesa de trabajo con el servicio local, la cual, si no recuerdo mal, se desarrolló desde el 22 de marzo en adelante.

A mediados de abril, tuvimos que desahuciar esa mesa, debido al nulo avance en torno a los compromisos que habíamos adquirido, pero que no fueron asumidos. Finalmente, ello derivó en alrededor de un mes de trabajo sin frutos concretos respecto a resguardar y corregir la resolución de traspaso. Ese es otro elemento importante de considerar.

Sumado a ello, como Colegio de Profesoras y Profesores de Chile, es importante señalar que hay situaciones que, a nuestro entender, son inauditas, porque no sé si hay precedentes de situaciones como estas. Por ejemplo, estando a mediados de mayo, aún no están ratificadas las dotaciones de docentes de cada escuela y liceo en la comuna. Esa situación tiene distintos efectos, que hemos podido mensurar de la siguiente manera: inseguridad e inestabilidad de las y los docentes en torno a sus condiciones laborales, y poca claridad para definir roles y funciones por parte de las y los directores en su comunidad educativa. Evidentemente, eso también tiene consecuencias en la proyección de los gastos asociados a la ley SEP y a los PME en cada escuela, por lo tanto hemos trabajado en ello; de hecho, el viernes pasado sostuvimos una reunión sobre el tema. Pero, nos parece importante sentar ciertos precedentes en torno a situaciones que, ojalá, no se sigan repitiendo en otros servicios locales de educación.

Cabe agregar que durante marzo y gran parte de abril no se cursaron reemplazos de docentes por licencias médicas. Esta cuestión es sumamente grave, tomando en consideración los grandes niveles de estrés que asumimos las y los docentes durante este período de pandemia. El impacto que tiene el hecho de estar en cuarentena a nivel de salud mental es muy fuerte.

Asimismo, en muchas comunidades educativas debieron cubrirse horas, apelando a la buena voluntad y al deber ético por parte de los docentes, ya que había cursos que estaban sin sus profesores. Esa es otra situación que también informamos en distintas instancias y que no puede seguir repitiéndose.

Hoy recibimos una declaración pública por parte de un liceo de la comuna, a cuyos docentes se les indicó que debían volver a clases presenciales; sin embargo, gran parte de su planta docente se encuentra con licencias médicas y todavía no tienen reemplazo. Por lo tanto, ese retorno presencial todavía no se puede proyectar de manera efectiva.

En cuanto a la situación de las escuelas, también nos ha tocado ver algunas situaciones preocupantes. Desde marzo, varias escuelas empezaron a levantar

algunas situaciones de vulneración de derechos muy graves por acoso sexual, por violencia, amedrentamiento o amenazas de muerte, las cuales, lamentablemente, no han sido resueltas como corresponde.

En primer lugar, en la Escuela E-286 Montedónico una docente fue acosada sexualmente vía telefónica mediante *WhatsApps* vinculados a estudiantes. Evidentemente, uno podría interpretar que detrás de eso hay adultos manipulando esos aparatos telefónicos. Ella solicitó al equipo jurídico que se pronunciara al respecto.

También hicimos gestiones para trabajar esos temas con los equipos de convivencia. Nos dimos cuenta de que el equipo de convivencia del SLEP todavía se encontraba en marcha blanca y, por lo tanto, no ha podido resolver todas las situaciones que tienen que ver con la relación entre los estudiantes en las escuelas.

Ese tema, que todavía está en ascuas, surge en el marco de la corporación municipal entre fines de noviembre y principios de diciembre del año pasado y ahora vuelve a resurgir en marzo. Frente a ello, no hubo una respuesta que dejara tranquila a la docente que estaba involucrada en ese hecho.

También, en el Centro Educativo Florida de Valparaíso, hubo amenazas de muerte por parte de exapoderados hacia parte del equipo directivo, en particular hacia tres personas. Si bien hubo apoyo jurídico por parte del servicio local de educación y se han establecido medidas judiciales para llevar al sistema público esas denuncias, que ya están en investigación en la Fiscalía, se hicieron algunos requerimientos para asegurar la protección de estos y estas docentes. Se solicitó que hubiera un nochero, un guardia y condiciones mínimas, como, por ejemplo, un citófono. La respuesta que se dio desde la gestión territorial fue que no había recursos para ello. Por lo tanto, esas profesoras y esos profesores que todavía están en aquella escuela temen por sus vidas, porque, lamentablemente, las amenazas de muerte se han reiterado; incluso, sufrieron una nueva amenaza de muerte hace un par de semanas. La persona que está realizando ese amedrentamiento es vecina del sector, y le sale tan fácil ir a la escuela como ir a comprar el pan cada día.

Asimismo, vemos con preocupación la situación de la Escuela Dr. Ernesto Quiroz Weber, del sector Cerro Placeres, cuyos docentes han manifestado en innumerables ocasiones que el establecimiento escolar estaba en pésimas condiciones para asumir un trabajo con las y los estudiantes, por el peligro de derrumbe en el patio.

Hemos sabido que recién los días jueves y viernes de la semana pasada se hicieron algunos arreglos por parte del SLEP, porque esa escuela se convertiría en local de votación, por lo tanto el personal que iba a ocupar ese local solicitó y en cierta medida denunció que no estaban las condiciones para que ese espacio fuese ocupado. De esa manera, recién se pudo resolver esos días. En el fondo, nos preocupa por qué no se hace nada cuando las y los actores que son parte del sistema educativo denuncian estas situaciones, pero cuando viene otra institucionalidad y deja de manifiesto que existen estas irregularidades sí se opera como uno espera. Desde luego, son situaciones respecto de las cuales nosotros y nosotras venimos trabajando.

Desafortunadamente, incluso hemos realizado algunas movilizaciones durante el año, como consecuencia de situaciones que se van aglutinando, o arracimando, y generando un gran nivel de estrés.

Si hoy hiciéramos una encuesta para saber cuál es la percepción de las y los docentes en términos de la participación, la respuesta, la comunicación y la mejora de las condiciones materiales y de la salud mental que ha implicado el traspaso, lamentablemente podríamos asegurar que no se ciñen a un bienestar ni al compromiso que debía asumir la ley en términos de resolver y respaldar situaciones que veníamos arrastrando desde hace décadas.

En particular, Valparaíso, como todos y todas saben, es una comuna que ha sido muy golpeada en términos económicos y de las movilizaciones. Nosotros y nosotras todavía tenemos deudas previsionales vigentes.

Por otro lado, también tenemos la expectativa de que el sistema o esta dependencia que asume una lógica de lo público podría resolver los vicios que tenía la corporación municipal. En consecuencia, desde esta perspectiva, vemos con mucha decepción las proyecciones que se han establecido.

En esa línea, en una reunión sostenida a fines de la semana pasada, el mismo SLEP nos comentó que las proyecciones de déficit que hace a fin de año son multimillonarias, o sea, son miles de millones de pesos que se proyectan como déficit, lo cual nos deja con mucha preocupación y mucha incertidumbre.

Para terminar, quiero establecer que tenemos toda la disposición para avanzar en estas situaciones, pero necesitamos el respaldo y la presencia de la Dirección de Educación Pública, a fin de informarles las situaciones que hemos estado viviendo.

Consideramos que sí hay soluciones para estas situaciones, pero primero debemos establecer todos los conductos pertinentes que nos permitan avanzar y dejar atrás esta angustia y toda esta deuda moral y económica que estamos viviendo.

18) El Director Ejecutivo del Servicio Local de Educación Pública de Valparaíso, señor Manuel Pérez Pastén.

El señor **Pérez** expuso en la sesión 11ª[21], de fecha 17 de mayo de 2021, de la siguiente forma:

Como es sabido, dentro del proceso de constitución del Servicio Local de Educación Pública, una vez que hay veinticinco funcionarios, antes de que termine el año se debiera constituir dicha instancia, por lo que significa el convenio de desempeño colectivo y que estén beneficiados.

La ley nos habilita para hacerlo así; sin embargo, quiero destacar que hicimos una consulta masiva -que es posible evidenciar mediante un sucinto informe que contiene fechas y respaldos; se los puedo hacer llegar- mediante la cual, en primer lugar, consultamos a la comunidad que se nos iba a traspasar, independientemente de que podíamos tomar solos la decisión, porque aún no éramos sostenedores. Pedimos una serie de correos para esa consulta, que, en algunos casos, nos fueron negados. Están los correos de respaldo que lo demuestran. Pese a eso, tuvimos una respuesta del 57% del total de funcionarios que iban a ser traspasados. Por consiguiente, la decisión fue en concordancia con la que tomó el 57% de los funcionarios que iban a ser traspasados. Es decir, pudiendo no haber sido participativa, lo fue, y con un alto grado de participación. Se hicieron las presentaciones de las cajas, en los tiempos, en las cápsulas, y las personas votaron la consulta. Ese 57% votó exactamente en la misma medida en que hoy están seleccionados los integrantes de la caja y de la mutual.

Me parece que, independientemente de la posibilidad de participación que nos da la ley, el hecho concreto es que la voluntad y la práctica efectiva se demostraron con dicha consulta y con dichos resultados, insisto, todos evidenciables. Los puedo adjuntar a esta honorable comisión, para su estudio.

Ahí, hay un elemento que denota la práctica permanente del servicio local. Incluso, previo a ser sostenedor, mantuvo reuniones de participación con toda la comunidad educativa, con todos los establecimientos, sin excepción. Ciertamente,

---

[21] El acta de la sesión, que contiene su exposición íntegra, así como las consultas de los diputados y diputadas y sus respuestas, pueden encontrarse en el siguiente link: https://www.camara.cl/legislacion/comisiones/sesiones.aspx?prmID=2902&prmIdTipo=2103.
El video de esta sesión puede encontrarse en http://www.democraciaenvivo.cl/

tuvimos dificultades; en algún momento el sostenedor y la directora anterior del área de educación nos llamaron la atención por solicitar reuniones con las comunidades, sin aún ser sostenedores. Hicimos los descargos, ofrecimos disculpas, pero insistimos en que era con el ánimo de anticipar, conocer y hacer un levantamiento de un plan anual local -que está en la ley-, con conocimiento y participación de las comunidades, cosa que también es demostrable. Por lo tanto, siempre mantuvimos un trabajo con todas las comunidades.

También solicitamos reunirnos con la mayoría de los diputados y senadores de la zona, con las seremias, con las instancias de gobierno y autoridades locales de todo orden: religiosas, civiles, etcétera, con la intención de dar a conocer lo que es el Servicio Local de Educación Pública, pero, sobre todo, para plantear los diagnósticos que teníamos en relación con la comuna y los aspectos o focos de interés en los que necesitábamos aunar fuerzas, como en aquellos tópicos en los que no tenemos posibilidades de legislar.

Respecto del segundo punto: el bono de incentivo al retiro, es sabido que fue entregado para 36 personas, financiado por el Centro de Perfeccionamiento, Experimentación e Investigaciones Pedagógicas (Cpeip). En definitiva, fueron entregados a la Corporación Municipal de Valparaíso (Cormuval), instancia que no hizo efectivos los pagos, solicitando información sobre el procedimiento para hacerlos efectivos. Un finiquito, en esta línea, es bastante obvio cómo tiene que hacerse; sin embargo, no se hizo y tuvieron que reintegrar los montos. Luego de la reintegración, desde la Dirección de Educación Pública (DEP) y mediante una serie de oficios, pudimos hacer efectivo el proceso. Una vez hecha la solicitud, hicimos la puesta al día de la base de datos de las personas. Esperamos tener finiquitado el tema antes del término de este semestre.

Por esa razón, avanzamos en los otros bonos de incentivo al retiro de las personas que se estarían acogiendo al beneficio el próximo año, esperando que no ocurra una situación como la que pasó, me refiero a los montos que llegan a una entidad. Como dijo Andrés Arce, me parece un buen elemento a considerar para los aprendizajes de lo que significan los traspasos y esta dinámica de bonos de incentivo al retiro que se realiza todo los años, en este caso, de 2018 y 2019. Como dije, la propia Dirección de Educación Pública ha insistido en estos requerimientos, porque si no se realizan con la agilidad que corresponde, suele suceder, como hecho trágico, que las personas fallezcan antes de recibirlos.

Así, con esa dificultad de la corporación, nosotros asumimos en enero. Hicimos toda la tramitación para agilizar el proceso. Producto de esta misma situación, sostuvimos reuniones permanentes. En general, firmamos un convenio marco con la Corporación Municipal de Valparaíso (Cormuval), y una serie de convenios específicos, donde tenemos 27 mesas de trabajo, que van a aumentar por temas pendientes de traspasos. En ese sentido, ya estamos *ad portas* de responder en esta área.

Respecto del tercer punto, que dice relación con la resolución del traspaso, los contratos, la información sobre el Plan de Mejora Institucional (PMI), el Plan de Mejoramiento Educativo (PME) y el Programa de Integración Escolar (PIE), siempre hemos señalado -más de alguna vez lo hemos hecho público- que si bien estaba la información, la calidad era deficitaria, al extremo de que la ley establece, hasta junio, la posibilidad de hacer adecuaciones al decreto alcaldicio, que, en conjunto con la DEP, hemos reiterado permanentemente, porque “hay una serie de olvidos”, de parte de la Cormuval, de los traspasos, olvidos tales como: gente que estaba trabajando desde marzo y que no venía en el decreto.

Esta es una situación irregular -como todos sabemos-, heredada. Por ejemplo, no comprendemos por qué hay funcionarios que no tienen contrato pese a llevar 15, 18 o 20 años de servicio. Por lo tanto, no ha sido fácil resolver esta situación; sin embargo, las voluntades están, al igual que todos los datos. Por eso, no puedo dejar

pasar que se diga que ha sido nula. No es así. Hemos resuelto muchos casos, variados casos, no todos los que quisiéramos, porque todos los días aparece una serie de temas en esta línea. Hemos resuelto bastantes, a pesar de que venían mal asignados. De hecho, el Plan de Mejoramiento Educativo y el Programa de Integración Escolar venían asignados a subvención regular, no a la Subvención Escolar Preferencial (SEP).

En ese sentido, no podemos hacer los cambios, pues en caso contrario la Contraloría General de la República podría ser bastante lapidaria con nosotros en una visita de inspección en relación con estos temas. Sin embargo, en esa mesa se han logrado avances, y si bien difiero, estos no han sido como quisiéramos debido a la lentitud, pero sí hemos resuelto una serie de casos.

Se señala que no hay ninguna dotación. Eso no es así, las dotaciones se ratificaron en enero y se volvió a hacer ajustes en marzo y a la fecha, producto de lo que acabo de informar, es decir, aquello referido a la dificultad de la información y la calidad de la información.

Todas aquellas dotaciones no ratificadas corresponden a aquellos porcentajes que se ha ido traspasando y que se ha ido corrigiendo. Sin embargo, la mayor parte de la planta, tanto los docentes como los asistentes de la educación, fue ratificada en enero y luego confirmada en marzo con los equipos directivos, que es lo que corresponde a quienes la ley les asigna la función de establecer la dotación. En eso, incluso hemos tenido situaciones, que comentamos en una reunión anterior con la diputada Camila Rojas, en las que los directores olvidaron la obligación de hacer entrega, precisamente, de las dotaciones; olvidos que implican el tener personas trabajando al margen de la ley desde marzo sin haber sido informados. Por ejemplo, en un solo establecimiento se nos informó de nueve personas que estaban en esa condición. Ahora, evidentemente, eso significa una observación en la hoja funcionaria, pero es un tema bastante más recurrente de lo que uno quisiera creer.

Respecto del quinto punto que señaló el presidente del comunal de profesores, el reemplazo de las licencias médicas se ha realizado en torno a la docencia. En general, no se reemplaza cuando las licencias se extienden por dos o tres días -todos lo sabemos- porque desde el momento en que el director hace llegar la solicitud y la búsqueda del reemplazo transcurre un lapso de tiempo superior a ese número de días y, en ese sentido, hemos intentado reemplazar la mayor cantidad de las que se nos ha informado. Lo que sí es cierto que no hemos reemplazado son los auxiliares o asistentes de la educación que cumplen funciones en el establecimiento, producto de habernos encontrado en fase uno.

Quiero hacer un alcance muy breve. Las licencias médicas en enero y febrero rondaban alrededor de montos cercanos a los 30 o 35 millones, pero en marzo el monto de las licencias subió a 166 millones y, en abril, a 142 millones, es decir, a lo menos se quintuplicó la cantidad de licencias apenas se volvió a clases, en marzo y en abril. Es un dato de la realidad que tenemos que entregar al Compin para estos efectos. No hago un juicio, sino solo doy un dato.

Respecto de la vulneración de derechos, lo que se plantea es incorrecto. Tenemos un equipo de convivencia, tenemos *emails* y un procedimiento en esta línea con una serie de reglamentaciones que hemos trabajado sistemáticamente con las comunidades. Ahora, respecto de la participación, esta está absolutamente documentada en todas estas comunidades, y cómo se ha ido construyendo, por ejemplo, la convivencia y los reglamentos. En esta línea, en relación al tema de la vulneración de derechos, nosotros nos hemos hecho cargo en lo que corresponde.

La situación en el caso de aquellos sumarios que Cormuval (Corporación Municipal de Valparaíso) estaba instruyendo es que dichos sumarios deben ser terminados por quienes los comenzaron. Eso lo sabemos todos, por lo tanto, no

podemos interferir en un sumario que no ha terminado y, en ese contexto, hay una gran cantidad de sumarios que estaban sin cerrar.

Nosotros podemos iniciar nuevos sumarios, pero no podemos intervenir en los que están sin proceso de cierre. Por ello, tenemos una mesa de trabajo con Cormuval para que apuren los procesos de cierre y, a la fecha, ya se han resuelto bastantes, pero todavía quedan más de 20 sumarios sin resolver.

Respecto de los funcionarios que se vieron amenazados, conversamos con ellos y dispusimos la alternativa de iniciar las acciones judiciales que corresponden y, para no exponerlos, les solicitamos -lo que pueden constatar con ellos- que no asistieran al establecimiento, sino que asumieran la modalidad de teletrabajo hasta que pudiésemos tener las medidas de seguridad respectivas o algún pronunciamiento judicial.

En ese sentido, respecto de la situación de la madre que los amenazó de muerte, quien vive a 100 metros del establecimiento, y a quien le es muy fácil llegar, se debió a que estos funcionarios, legítimamente, llevaron a cabo un proceso que provocó que le quitaran la tuición de sus hijos a esa madre y, por ende, esta reacción de amenaza ha sido permanente. Por lo tanto, junto con la medida de apoyo judicial y, en resguardo de su propia integridad, les pedimos que no asistieran al establecimiento hasta que no estuviesen dadas las condiciones.

En relación con otros sumarios, hemos iniciado varios, como el de acoso, incluida una comisión, pero como están en proceso no puedo entregar más antecedentes. Sin embargo, se busca efectivamente terminar con una serie de prácticas que tienen estas características. En este ámbito de la convivencia hemos desplegado una serie de dispositivos, no solo reglamentaciones y formas de trabajo, sino que capacitaciones y otras que hemos tenido con las comunidades y con los equipos de convivencia, como capacitaciones gratuitas para ellos con entidades externas, y también hemos apoyado sicológicamente a los establecimientos con parte de nuestros equipos en situaciones de crisis, algo que pueden corroborar varios de los afectados. Por ejemplo, en el jardín infantil que fue baleado en más de una oportunidad, de forma inmediata nuestros equipos se desplegaron en terreno y trabajaron en contención con las educadoras y las familias. Es más, varias de las comunidades han agradecido el gesto y la preocupación de estar permanentemente atentos a lo que esto significa.

En ese ámbito hemos dado cuenta de lo que significa un largo trabajo de convivencia con todas las comunidades. Hay muchos requerimientos pues es una comunidad con altos índices de vulnerabilidad -sobre la media nacional-, por lo que requiere de más esfuerzos realizados de manera permanente en esta línea. En ese sentido, somos bastante proactivos en esto tal como lo somos en el ámbito de los informes.

Respecto de los ciclos políticos, debemos recordar que somos un organismo que depende del Ministerio de Educación, es decir, somos un organismo público; sin embargo, tanto la participación como la definición se han desarrollado con las comunidades. El hecho es que aquellas comunidades que no se sienten completamente listas, porque no están capacitadas, porque no están en las condiciones o por otras diversas razones como, por ejemplo, la que tuvimos en esta semana producto de las votaciones y de las sanitizaciones comprometidas que no se llevaron a cabo, ello nos ha obligado a ser flexibles, pero ha sido con la definición de las comunidades. En ese sentido, lo que no hemos hecho ni vamos a hacer es imponer una decisión de no retorno a todas las comunidades, tal como se nos planteó. Eso no lo vamos a hacer porque hay comunidades que sí quieren volver y otras volverán en fases distintas y de manera gradual. Por lo tanto, estas son decisiones territoriales y no universales, por lo que allí ha habido un malentendido en el sentido de que jamás se les ha pedido a los equipos directivos o a los directores que citen a todo el mundo de buenas a primeras, sino que deben hacerlo de forma territorial.

De hecho, respecto de un liceo técnico, en conjunto con Mario Díaz, representante del Colegio de Profesores, nos encontrábamos trabajando en el retorno que le correspondía a él y la forma cómo lo íbamos a hacer, dado que como liceo técnico requiere de una serie de otros insumos.

Lo comento porque me parece importante plantear que tampoco tenemos sesgo, y así como hacemos convenios de formación, también lo hacemos con Ojo de Pescado y con situaciones de todo orden. Hemos incluido las más amplias perspectivas y en el informe están los más de doce convenios que hemos establecido con distintas entidades.

En relación con el tema de la infraestructura, que también se señala, sabemos claramente y disponemos, por primera vez, de un FET cuantioso de más de dos mil millones para arreglar la alicaída infraestructura de Valparaíso. Lo reiteramos en la conversación que tuvimos con diputados y senadores, en temas como la condición eléctrica que ningún establecimiento de Valparaíso cumple y que hemos ido trabajando, en forma permanente.

Precisamente los establecimientos que no iban o que no estaban para retornar son aquellos que tienen problemas de infraestructura, dentro de los que no iba a retornar se mencionó la escuela Ernesto Quiroz Weber, porque efectivamente tiene pendiente el tema de un arreglo que puede arriesgar a los estudiantes, pero como el Servel nos pidió el recinto tuvimos que hacer una reparación “de urgencia”, pero no definitiva.

En consecuencia, tenemos ocho establecimientos que desde un comienzo definimos que no podrían retornar a clases mientras no se solucionen los temas de infraestructura. En ese contexto, insisto, tenemos el programa FET que nos ha permitido incorporar recursos adicionales, tanto en mantención como en obras mayores, para disponer de mejoras. Sin embargo, pese a la calidad en la que se encontraban estas infraestructuras de Valparaíso, son montos igualmente escasos. Entonces, estamos tratando de hacer lo posible por resolver la mayor cantidad de temas con estos requerimientos.

Finalmente, un ejemplo de lo que ha significado las respuestas en contra y, otras, a nuestro juicio, oportunas, dicho por las mismas comunidades que hemos consultado, en forma permanente, en reuniones con apoderados y estudiantes a partir del proceso ya aprobado por el Comité Directivo Local del Plan Estratégico Local (PEL), con amplia participación e, incluso, con asesoría externa para la validación del proceso, y, en ese sentido, hemos respondido claramente algunos temas -insisto, lo decía la comunidad-, como que nunca habían visto su establecimiento sanitizado, con aseo profundo.

Tuvimos que levantar más de 600 millones en recursos para la erradicación de plagas, insectos, aves y todo tipo de alimañas que había en los colegios, como termitas, alacranes, etcétera, aunque ustedes no lo crean.

Respecto de lo que estamos señalando, independiente de que tenemos claridad de que aún hay muchos desafíos y queda mucho por hacer, generalmente las expectativas en los tiempos son distintas. Debemos recordar que estamos desde enero trabajando y que difícilmente en estos cinco meses podríamos estar realizando lo que lleva décadas de postergación.

Si bien hemos avanzado en algunos puntos, en otros no. Lo señalaban las propias comunidades y los profesores cuando el año pasado se solicitaron los *chips* en marzo y estos llegaron en agosto. Sin embargo, ahora los solicitaron nuevamente en marzo y llegaron en abril más de 8.540 *chips* para continuar con el trabajo de los estudiantes a distancia.

19) El Presidente del Comité Directivo del Servicio Local de Educación Pública de Barrancas, señor Carlos Eugenio Beca.

El señor **Beca** expuso en la sesión 11ª[22], de fecha 17 de mayo de 2021, de la siguiente forma:

Como ustedes saben, los comités directivos tienen una función muy importante en cuanto a velar por el desarrollo estratégico de los comités directivos locales, según lo señala la ley.

Organizaré mi exposición en torno a cuatro puntos: primero, la constitución del Comité Directivo; segundo, el funcionamiento del mismo en los temas abordados; tercero, cuáles son los temas críticos -a juicio del Comité Directivo- del desarrollo e implementación del servicio local, y cuarto, una referencia al informe de auditoría de la Contraloría General de la República.

Respecto de lo primero, el Comité Directivo Local de Barrancas se constituyó el 26 de octubre de 2018, una vez que fueron designados los seis integrantes que representan los tres estamentos que componen los comités directivos, vale decir, los representantes de los alcaldes, de los padres y apoderados, y del gobierno regional.

En mi caso, fui designado como representante del gobierno regional y elegido en la constitución del Comité por el mismo, como presidente, y posteriormente reelecto en 2020.

Esta fecha de constitución significa que el Comité Directivo se constituye cuando ya estaba concluido el proceso de instalación del servicio local, por lo cual no estoy en condiciones de entregar mayores informaciones como Comité Directivo respecto del proceso de instalación y traspaso, porque este ya se había producido cuando se constituye el Comité, incluso ya había funcionado el primer año escolar.

Este nombramiento del Comité Directivo y constitución del mismo coincidió con el momento en que expira también el mandato del primer año del director que se designa al constituirse los servicios locales en forma interina, don Marcelo Segura.

Posteriormente, el Comité Directivo tuvo que relacionarse con cuatro directores subrogantes, incluido el que ya mencioné, hasta que se nombra al director titular, señor Patricio Canales Ríos, en abril de 2019. Naturalmente, esto genera un problema en la relación, en la conversación, porque se conversa con directores subrogantes que no están en condiciones de asumir con cierta perspectiva y horizonte el liderazgo. Luego me voy a referir a este tema de rotación de jefaturas.

El Comité Directivo ha celebrado seis sesiones en 2018, dieciséis en 2019, catorce en 2020 y cuatro hasta la fecha, en 2021. En estas reuniones se han abordado muchas materias, entre las que cabe destacar como las más relevantes las propuestas a la Dirección de Educación Pública sobre el perfil del cargo del director ejecutivo y prioridades para el convenio de gestión, a comienzos de 2018.

Luego, la participación en el proceso de selección de candidatos, de acuerdo con lo que solicitaba el Servicio Civil, hasta presentar una terna de candidatos al Presidente de la República, a comienzos de 2019.

Enseguida, la respuesta a una consulta preliminar que hizo la Dirección de Educación Pública sobre la estrategia nacional. Informé de esto por oficio, que se me solicitó, que nuestra participación en la estrategia nacional ocurrió, pero nada más que al principio y no sobre una propuesta de estrategia nacional. Posteriormente, no tuvimos nuevas consultas al respecto.

---

[22] El acta de la sesión, que contiene su exposición íntegra, así como las consultas de los diputados y diputadas y sus respuestas, pueden encontrarse en el siguiente link: https://www.camara.cl/legislacion/comisiones/sesiones.aspx?prmID=2902&prmIdTipo=2103.
El video de esta sesión puede encontrarse en http://www.democraciaenvivo.cl/

Después le correspondió al Comité aprobar el plan estratégico local, luego de varias conversaciones con la Dirección Ejecutiva. Recomendaciones a los planes anuales para los años 2020 y 2021. Seguimiento de la marcha del SLEP y sus efectos en los establecimientos educacionales en las distintas áreas.

Invitamos a las jefaturas de las distintas áreas, vale decir, financieras, administrativas, de planificación y control, pedagógicas, de participación, para que nos presentaran los avances en un diálogo con las autoridades del servicio.

Al respecto, dialogamos con distintos actores y organizaciones sociales. Ha sido la práctica del Comité Directivo escucharlos, cada vez que ha sido solicitado por los dirigentes del Colegio de Profesores, de Asociaciones de Asistentes de la Educación, de Padres y Apoderados, y de los funcionarios del mismo servicio.

Análisis de las situaciones conflictivas coyunturales que se han ido presentando, por ejemplo, el paro docente del año 2019, y desvinculaciones de personal del nivel central del año 2019. Informes de auditoría del Mineduc del 2019 y de Contraloría. Presupuestos para el año 2020 y 2021. Entrega de propuestas y participación en reuniones de la Dirección de Educación Pública con los comités directivos locales, en relación con sugerencias de cambios para el reglamento de los comités directivos locales.

Para abordar todos esos temas -he nombrado rápidamente los principales-, hemos contado siempre con la participación, cada vez que ha sido requerido, del director ejecutivo Patricio Canales y de los directores o subdirectores y jefaturas correspondientes a los distintos temas. Hemos tenido con estas autoridades un diálogo bastante fluido.

A raíz de todo este trabajo quisiera remarcar ahora, en un tercer punto, cuáles son los temas de preocupación prioritaria del Comité Directivo. Primero, observamos un incumplimiento de las expectativas. Producto de estos diálogos que hemos tenido con distintos actores del territorio, es nuestra convicción de que no se ha logrado cumplir con la expectativa de que una Nueva Educación Pública iba a significar un cambio sustantivo de la mejora de la calidad de la educación en el territorio. En otras palabras, no hay una imagen de una educación pública que sea radicalmente distinta y radicalmente mejor que la educación municipal. Y eso es algo lamentable que ocurra, porque el hecho de que no se puedan realizar a veces con la celeridad debida por ser la administración pública lenta en su procedimiento, no es una explicación satisfactoria indudablemente para los niños, niñas y adolescentes y familias del territorio.

En segundo lugar, la persistencia de los bajos resultados de aprendizaje. Este es un elemento bastante grave que obviamente no se puede atribuir al Servicio Local de Educación, porque se trata de arrastres de malos rendimientos de aprendizaje de la educación municipal en general y en particular en estas tres comunas y en unas más que en otras.

Para nombrar algunas cifras de acuerdo con el resultado Simce del 2018 -por eso digo que esto no es atribuible solamente al Servicio Local ni mucho menos-, el 45% de los estudiantes de cuarto básico tenían resultado insuficiente en Lenguaje y el 56% en Matemática. Por otro lado, el 33%, un tercio de las escuelas básicas, se encuentran en categoría de desempeño insuficiente y 37 en categoría de desempeño medio-bajo de acuerdo con la categorización que hace la Agencia de la Calidad. Situación que es aún peor en la educación media. No hay duda de que esta situación se arrastra, pero uno esperaría y sabe de los esfuerzos que se han hecho por parte del Servicio Local y de los directores y docentes de los establecimientos, sobre todo en este período de pandemia, pero esto todavía no se refleja en los resultados. Los resultados más recientes no se conocen porque las pruebas de Simce o se han suspendido o no han sido censales. Por eso es que estoy hablando de cifras del 2018.

Pero eso es más que una consecuencia del trabajo del Servicio es una realidad, un dato y un desafío para el Servicio Local.

En tercer lugar, está el tema de las matrículas. Si bien es cierto que el 2018 se experimentó una leve mejoría en la cantidad de alumnos y se estancó, por lo tanto, la tendencia a la baja en la matrícula municipal -propia no solamente de este territorio sino de la educación municipal en el país entero-, la verdad es que no hay grandes cambios que sean esperanzadores en el sentido de un aumento fuerte de la matrícula en el territorio, la matricula pública. Y esto puede tener que ver con que el Servicio Local cuenta con 40 escuelas básicas y solo 9 liceos. Por lo tanto, automáticamente la población está llamada e invitada a una vez terminado el octavo básico a buscar alternativas de liceos en otras comunas de Santiago.

En cuarto lugar, hablaba de la rotación en la Dirección Ejecutiva, pero esta rotación ha trascendido hacia abajo con muchos cambios a nivel de las subdirecciones, muchos cambios a nivel de las jefaturas de departamentos y de equipos de trabajo inclusive. Puedo señalar que en el período que nosotros hemos tenido que actuar han rotado desde la constitución del Servicio entre cuatro a cinco personas a cargo de las distintas subdirecciones, con la excepción de la subdirección técnico-pedagógica que ha tenido solamente dos personas en el cargo, la que se nombró originalmente y la que ganó por concurso público. Ha habido rotaciones incluso afectando a personas nombradas por Alta Dirección Pública y estas se han debido a distintas razones: o renuncias voluntarias o desvinculaciones o que en el proceso, los llamados a concurso, ha habido que hacer subrogancias y luego se van prolongando estas subrogancias mientras los concursos no se resuelven. Esta es una rotación de cargos que afecta indudablemente la eficiencia y esto ha sido observado a nivel general por el Consejo de Evaluación en su informe de evaluación intermedia.

En quinto lugar, los problemas de infraestructura y equipamiento. Nos preocupa mucho que ha habido atrasos en obras el 2020 -fue un año muy especial por todas las circunstancias que se conocen-, pero el hecho concreto es que muchos establecimientos han tenido avances muy lentos en su funcionamiento y como consecuencia de ello, por ejemplo, si las clases hubieran empezado el 1 de marzo, como sostenía y pedía el ministro de Educación, 14 establecimientos del territorio no estaban en condiciones porque sus obras no habían terminado y, por lo tanto, no era posible. Esto finalmente no tuvo mayores consecuencias porque sabemos que las clases no han podido recomenzar. Hay comunas del territorio que todavía se encuentran en cuarentena y, por tanto, el problema no se ha presentado, pero el atraso en las obras de infraestructura es un problema serio. Y un problema más serio todavía que no ha permitido el reconocimiento oficial de los jardines infantiles porque no están los recursos para poder rápidamente resolver la situación de infraestructura que se exige para ese reconocimiento.

En sexto lugar, las dificultades de participación. Distintos actores nos han señalado que es difícil la participación, el vínculo y el diálogo con las autoridades. Estamos conscientes que el problema de la participación es muy complejo. Muchas veces la gente no queda satisfecha con las participaciones que se pueden realizar, pero creemos que hay un espacio de avance en esa dirección. También que el Consejo Local se demoró en constituirse. Ya está constituido y esperamos que eso fluya adecuadamente.

Un séptimo problema tiene que ver con las oficinas del Servicio Local. Es bien increíble que el Servicio Local haya debido funcionar en varias oficinas distintas. Ya se ha consolidado en dos, lo que es bastante mejor pues antes estaba todavía más dividido. Pero no es una buena señal que una institución de educación pública tan importante no tenga un solo lugar donde pueda fluir una buena comunicación entre los distintos sectores del servicio.

Por último, algo no menos importante y trascendental a todo lo demás, es la situación financiera deficitaria. Nos preocupa profundamente la situación financiera

del Servicio Local de Barrancas, que para el año 2021 presenta un déficit estimado de más de 3.000 millones de pesos y podría alcanzar hasta 8.000 millones, al agregar el déficit del año anterior. Por tratarse de un déficit de los ingresos en el presupuesto asignado existe el riesgo de que no se puedan realizar gastos esenciales de los establecimientos educacionales y jardines infantiles. Este es un problema que excede a las posibilidades de gestión del propio servicio. Y debe comprometer la voluntad de la Dirección de Educación Pública y de los Ministerios de Educación y de Hacienda, la Dirección de Presupuestos.

Esta restricción presupuestaria puede afectar pagos de remuneraciones, puede afectar bienes y servicios requeridos por los establecimientos educacionales y jardines infantiles y, por ejemplo, ha estado afectando a la posibilidad de contratar servicios de vigilancia para prevenir numerosos robos que han sufrido distintas escuelas del territorio.

El Comité Directivo ha hecho presente esta situación a la Dirección de Educación Pública para que se gestione ante el Mineduc y la Dipres una solución, pero se nos ha respondido que el tema radica más bien en la gestión financiera del servicio, dada la sobredotación que aún persiste de personal docente y de asistentes de la educación.

En mi opinión personal es un tema bastante complejo de analizar, que habría que ver colegio por colegio, dado que para atender las complejas situaciones educativas de sectores más vulnerables, los estándares de necesidades de profesionales debieran ser diferentes a los estándares normales de cualquier establecimiento.

El cuarto punto tiene que ver con el informe de auditoría de Contraloría. Como dije, el Comité Directivo ha analizado los informes de auditoría, primero, del Mineduc, el 2019, y luego de Controlaría. En ambas situaciones se reunió largamente con el director ejecutivo para analizar estos informes para recabar más información y se les hizo presente que se estimaba que los hallazgos de las auditorías eran graves, que necesitaban ser aclarados y sobre todo se les hizo presente la necesidad de asumir las recomendaciones para resolver los nudos críticos de la gestión administrativa y financiera del Servicio, y evitar así que estas situaciones se repitan. El comité directivo entiende que muchas de las situaciones denunciadas pueden obedecer a la falta de conocimientos técnicos del funcionamiento del aparato público de los funcionarios, como también, como señalé, a la rotación de jefaturas.

En ese sentido, coincidimos con las apreciaciones formuladas también por el Consejo de Evaluación, en su Informe de Evaluación Intermedia, en cuanto a fortalecer la estructura administrativa de los servicios locales en relación con la administración financiera, presupuestaria, de contabilidad gubernamental y de la Ley de Compras Públicas.

Asimismo, el comité directivo ha hecho presente que una afirmación del informe de la Contraloría, en el sentido de que el propio comité no habría cumplido con sus funciones, carece de todo fundamento, considerando que el período auditado fue el momento de instalación del comité directivo y del propio servicio local, de modo que no era posible esperar que este organismo colegiado cumpliera en sus dos meses iniciales con todas las funciones que la ley le encomienda. De hecho, varias de estas funciones suponían la existencia de instrumentos que a esa fecha no estaban disponibles, como la Estrategia Nacional de Educación Pública y el Plan Estratégico Local. Por intermedio de su director ejecutivo, el comité directivo, hizo presente a la Contraloría su posición para refutar la constatación que contiene el informe.

Por último -y creo representar al comité directivo-, el Servicio Local de Barrancas enfrenta enormes desafíos para levantar la educación pública en el territorio. Para ello, cuenta con la voluntad y el compromiso de las comunidades educativas, en particular con sus directores, muchos de los cuales son nuevos y

nombrados por ADP; sus docentes, asistentes de la educación, padres, madres, apoderados, estudiantes y funcionarios del Servicio. Todos están comprometidos con la educación pública, lo cual desafía al Servicio a hacer los mejores esfuerzos para mejorar su gestión y dar un mejor acompañamiento a los establecimientos. Pero, también se hace fundamental el apoyo y el acompañamiento que el Servicio necesita, que, sin duda, se le intenta brindar, pero que debe reforzarse siempre más y más por parte de la Dirección de Educación Pública y del Ministerio de Educación.

Los problemas que enfrentan los servicios locales de educación son de tal magnitud, frente al punto de partida al momento del traspaso desde lo municipios, que se requiere un esfuerzo especial del Estado, mediante recursos extraordinarios a través de otro tipo de financiamiento, distinto a la subvención normal, que permita que la sociedad perciba la diferencia ante este nuevo escenario que representa la educación pública. No es posible que ante la situación tan deficitaria de la educación municipal se pueda intentar tener una educación pública de mejor calidad y que realmente responda a la necesidad del derecho a la educación que tienen todos los niños, las niñas y los jóvenes adolescentes y adultos, si no se entregan apoyo especial y recursos especiales. No puede darse el mismo trato. Esto lo comparo de repente con la situación que vivimos con la pandemia. Indudablemente, en los sectores y las comunas donde la pandemia ha golpeado más fuerte se necesitan medidas distintas que en aquellos donde las situaciones están más controladas.

Esta situación podríamos extrapolarla a la educación pública, cuando se debe atender a estudiantes de municipios en situaciones de extrema pobreza, con debilidades en la calidad de la educación municipal que se ha brindado, los servicios públicos parten desde un piso muy complejo. Eso requiere por parte de la sociedad y del Estado un apoyo muy fuerte y privilegiado, sin lo cual sería imposible cumplir con la expectativa y esperanza de una nueva educación pública.

20) El Miembro del Comité Directivo del Servicio Local de Educación Pública de Barrancas y representante de los alcaldes del territorio, señor Nelson Zárate.

El señor **Zárate** expuso en la sesión 11ª[23], de fecha 17 de mayo de 2021, de la siguiente forma:

Como secretario general de la Corporación de Pudahuel, participé en el proceso de implementación y traspaso para el Servicio Local de Educación Pública de Barrancas. En primer lugar, quiero centrarme en el objeto de la comisión para determinar si existieron irregularidades en el proceso de implementación de la Ley N° 21.040, especialmente con la instalación y el funcionamiento de los servicios locales. En esta materia es fundamental distinguir la fase de instalación y la fase de funcionamiento.

Respecto de la fase de instalación, un primer aspecto que se debe considerar es comprender lo que estamos instalando. Al respecto, la ley define un conjunto de maneras de cómo deben hacerse de ahora en adelante las cosas en la educación pública, y describe una profunda transformación institucional al traspasar la administración de los establecimientos desde las municipalidades al Estado. Se definen principios, se crean estructuras, se identifican instrumentos de gestión y se diseñan nuevos órganos. En definitiva, es crear un nuevo sistema de gobernanza del sistema de educación pública.

La ley crea órganos de administración, como los servicios locales. Su artículo 17 señala: “El objeto de los Servicios Locales será proveer, a través de los

---

[23] El acta de la sesión, que contiene su exposición íntegra, así como las consultas de los diputados y diputadas y sus respuestas, pueden encontrarse en el siguiente link: https://www.camara.cl/legislacion/comisiones/sesiones.aspx?prmID=2902&prmIdTipo=2103.
El video de esta sesión puede encontrarse en http://www.democraciaenvivo.cl/

establecimientos educacionales de su dependencia, el servicio educacional en los niveles y modalidades que corresponda.” Un aspecto importante a tener presente es que los servicios locales son órganos administrativos encargados de la provisión del servicio público educacional definido en la presente ley, para lo cual velará por su calidad y mejora continua.

De la sola definición surge un primer orden de complejidades, como identifica claramente el Centro de Estudios de Políticas y Prácticas en Educación de la Universidad Católica. Algunos de los cambios más inmediatos y notorios del nuevo sistema de educación pública para quienes trabajan en los equipos técnicos de educación serán las modificaciones organizacionales y el cambio de escala. Esto necesariamente modificará una serie de reglamentos de gestión administrativa y financiera y requerirá de un período de aprendizaje de los actores involucrados en términos prácticos y de conocimientos relativos al funcionamiento presupuestario, funcionamiento de compras, conocimiento de los estatutos, etcétera.

Por otro lado, y en un segundo orden de complejidades, un servicio local tiene la característica de no solo ser un servicio público, sino que, además, provee de educación a través de los establecimientos educacionales. Se requerirá de equipos técnicos que cuenten con los conocimientos en ambos aspectos.

Los servicios locales, como órganos administrativos públicos con características de servicio público, deben adecuar sus funcionamientos a las necesidades del establecimiento, debiendo compatibilizar las reglas que le son propias con las necesidades de los establecimientos que administran, quienes deben pasar de una manera de hacer las cosas a otra muy distinta.

Este cambio, que en opinión de los mismos actores es algo que vivimos muy de cerca en Barrancas, generaba expectativas y esperanzas, en el sentido de que no se cometerían los mismos errores que se venían produciendo en la administración municipal y se mantendrían las buenas prácticas que se venían haciendo cuando la administración era municipal.

En ese sentido, quiero rescatar el punto señalado por el presidente del comité directivo**,** en cuanto al deterioro en las expectativas de los actores que forman parte de los establecimientos educacionales.

Este proceso de implementación previa, que es complejo, requiere de mucha participación de los actores relevantes y de acuerdos. Entendemos solamente que algunos perderán sus empleos, otros deberán adecuarse a una nueva modalidad y se demandará mucho tiempo.

Particularmente, en el caso del Servicio Local de Barrancas, como establecía la ley para el caso de Pudahuel, Lo Prado y Cerro Navia, los tiempos de traspaso eran aproximadamente de 60 días, por lo tanto no se contaba con el tiempo suficiente para hacer un traspaso más adecuado. Se requiere saber comunicar y liderar los cambios con los actores relevantes, teniendo presente que si solo se pone el énfasis en el cambio estructural se corre el riesgo de mantener los problemas que motivaron dichos cambios.

Como indicó el presidente del comité directivo, en esta materia entra a tallar un elemento fundamental, cual es el tema de la participación. Un aspecto fundamental es que siempre se debe tener presente que si los municipios no resolvieron los problemas en 40 años, difícilmente lo podrán hacer en un año previo al traspaso. Además, recordemos que este fue el fundamento de la ley N° 21.040.

Implementar significa también un proceso de aprendizaje, se cometen muchos errores y quienes tienen la responsabilidad aprenden de ellos. Como indicó el señor Beca, la alta rotación producida en el Servicio Local de Barrancas, como los cambios generados en la DEP, han impedido que este aprendizaje se mantenga en el tiempo.

Los éxitos de la administración comunal se los debemos a ese proceso. Hay mucho de ensayo y error, y quienes aprenden son los responsables de la implementación. No se distinguió quién era quién con el cambio de gobierno. Se pierde lo que los privados valoran, y pagan por ello: El saber hacer y que se aprende en la práctica.

Respecto de la fase de funcionamiento. En mi opinión, existirían irregularidades de implementación en la fase de funcionamiento cuando, previendo los problemas que podrían presentarse al estar el nuevo servicio en régimen, la autoridad encargada de la implementación y del conocimiento, no hizo nada.

La estructura de financiamiento del Sistema Público de Educación es un claro ejemplo de lo que digo. Algo que se previó, y no se hizo nada. Es de sobra conocido que la actual subvención no financia la planilla de sueldos de los servicios locales. El actual sistema de financiamiento, por asistencia promedio de los alumnos, solo cubre, en promedio, el 80% de los sueldos de docentes y asistentes de la educación. Para el caso de Barrancas, su déficit estimado, sumando los anteriores, para 2021 sobrepasará los 7.000 millones de pesos. En consecuencia, era previsible que se utilizaran los recursos de otras subvenciones para financiar gasto corriente, como lo venían haciendo algunos municipios. Esto es verdad, y esto se dijo una y otra vez. Los municipios siempre se quejaban de la falta de recursos, pero la respuesta era la misma: que había problemas de gestión. El problema es generalizado. Cuando se estudió la ley, con Pudahuel y con Lo Prado, lo hicimos presente, y señalamos que el sistema de financiamiento de la educación pública no daba para financiar sus gastos corrientes.

Eso se ve aún más agravado cuando los presupuestos son anuales -y este es un punto que hay que tocar-, pues los saldos que pudieran quedar de la SEP**,** FIEP, PIE, etcétera, no pueden ser utilizados al año siguiente, y esto genera un empozamiento de recursos que no pueden ser utilizados, algo que está pendiente de resolver por parte de la Dipres.

Aquí, un punto respecto de la Contraloría. ¿Era previsible lo que dijo la Contraloría en sus más de 50 hallazgos sobre estimación y subestimación presupuestaria, traspaso de fondos a cuentas distintas, concentraciones de pago, demandas por no pago de cuentas, ausencia de certificados de disponibilidad, errores en los cierres, déficit presupuestario? Yo creo que sí, pero nada se hizo.

Sobre ese punto, un alcance. Cuando se administra un servicio con déficit, como este, el sistema contable financiero debe contar con sistemas muy estrictos y eficientes de entrega de la información, pues se opera al mínimo. Algo que siempre señalamos es la carencia de un sistema de cierre financiero. Es necesario generar un sistema de cierre financiero de las municipalidades, que sirva como apertura para nuevo servicio, ya que, como dije, no existe. La ley no lo previó, y hoy en día, si una municipalidad tiene recursos de algún programa ministerial -SEP, FIEP, PAE-, los saldos no son traspasados, y el ministerio nada dice.

El informe de Contraloría nos da luces sobre lo que era previsible y lo que era más complejo en la gestión de personas. ¿Era previsible, en el funcionamiento, la falta de experticia de algunos funcionarios? En mi opinión, era difícil darse cuenta, pues, a su vez, ello depende del conocimiento y experiencia de quien administra o toma las decisiones. Lo claro es que no se trata de tener estudios avanzados en administración o muchos años de experiencia, sino de colocar a las personas en los puestos adecuados, algo que ha sido, lamentablemente, muy difícil de lograr para el caso de Barrancas. Una excesiva rotación, un excesivo cambio de personas

El informe de Contraloría lo reveló, por la gravedad y las consecuencias de algunos hallazgos. Que se hagan sumarios y que se informe al Consejo de Defensa del Estado para quienes inicien acciones legales. Sucede, porque no estaban las competencias adecuadas en los puestos adecuados.

En las municipalidades hay experticia, y esta no fue considerada ni aprovechada. Se colocó a funcionarios en puestos sin relevancia operativa o, en definitiva, no fueron considerados.

En síntesis, existen aspectos que son vacíos de la ley y aspectos referidos a funcionamiento. Pero sí hay un aspecto fundamental, que se refiere a que debemos provocar los cambios necesarios para que en los servicios locales se realce el verdadero sentido de la educación pública.

21) El Presidente de la Federación de Asociaciones de Funcionarios DAEM de la Región de Ñuble, señor Juan Díaz González y el Secretario de la Federación Regional del Maule FANDEM, señor Francisco Saavedra Sepúlveda.

El señor **Saavedra** expuso en la sesión 12ª[24], de fecha 24 de mayo de 2021, de la siguiente forma:

En representación de la Federación del Maule, me referiré más que nada a la infracción constitucional por discriminación, del artículo trigésimo octavo transitorio**,** de la ley N° 21.040.

Como todos sabemos, este artículo a los funcionarios DAEM los obliga a postular a los concursos, o si no, llegar a una cesantía. Ese artículo se encuentra en contradicción con lo que dispone la Constitución Política de la República en el artículo 19, N° 2°, que asegura a todas las personas la igualdad ante la ley, ya que en Chile no hay personas ni grupos privilegiados.

De la lectura de este precepto constitucional se aprecia que no hay un trato igualitario entre docentes y asistentes de la educación, que son funcionarios que pasan por el solo ministerio de la ley, y los funcionarios DAEM y DEM, que deben someterse, estos últimos, a un concurso público, o, en su defecto, los espera una larga cesantía.

Agrega dicho precepto constitucional, en su inciso final, que ni la ley ni autoridad alguna podrán establecer diferencias arbitrarias. Acá, es del caso indicar que es la propia ley N°21.040, en su artículo trigésimo octavo transitorio, la que establece la diferencia arbitraria. Nos discrimina al no ser traspasados, al igual que los docentes y los asistentes de la educación.

Ese trato desigual no solo se ha dado en épocas pasadas, que siempre es bueno tener presente. A modo de ejemplo, en 2001, en el gobierno del Presidente Ricardo Lagos Escobar, se dicta la ley N°19.712, que crea el Instituto Nacional del Deporte, reemplazando de esta manera a la antigua Digeder, lo que conlleva un cambio en la estructura, pero con una disposición transitoria que traspasa a los funcionarios, sin solución de continuidad y conservando sus rentas.

Situación similar ocurre en 2008, en el primer gobierno de la Presidenta Michelle Bachelet, cuando se dicta la ley N°20.250, que traspasa a todos los funcionarios de la atención primaria de salud a la planta, sin solución de continuidad y conservando sus rentas.

Señor Presidente, al funcionario DAEM se le discrimina, se le establecen diferencias arbitrarias, teniendo presente que ese funcionario es el que ha administrado la educación pública en los últimos 40 años.

Por último, es dable tener presente que esta discriminación que se ejerce sobre el funcionario DAEM y DEM, que se establece por ley, además infringe lo dispuesto en la Convención Americana sobre Derechos Humanos, más conocida

---

[24] El acta de la sesión, que contiene su exposición íntegra, así como las consultas de los diputados y diputadas y sus respuestas, pueden encontrarse en el siguiente link: https://www.camara.cl/legislacion/comisiones/sesiones.aspx?prmID=2902&prmIdTipo=2103.
El video de esta sesión puede encontrarse en http://www.democraciaenvivo.cl/

como el Pacto de San José, que en su Parte I, Deberes de los Estados y Derechos Protegidos; Capítulo I, Enumeración de Deberes, Artículo 1, Obligación de respetar los derechos, en su punto 1, establece que “Los Estados Partes en esta Convención se comprometen a respetar los derechos y libertades reconocidos en ella y a garantizar su libre y pleno ejercicio a toda persona que esté sujeta a su jurisdicción, sin discriminación alguna por motivos de raza, color, sexo, idioma, religión, opiniones políticas o de cualquier otra índole, origen nacional o social, posición económica, nacimiento o cualquier otra condición social.”.

También es pertinente agregar que se transgrede el Convenio 111 de la OIT, que en su artículo 1 señala: “A los efectos de este Convenio, el término discriminación comprende:

a) cualquier distinción, exclusión o preferencia basada en motivos de raza, color, sexo, religión, opinión política, ascendencia nacional u origen social que tenga por efecto anular o alterar la igualdad de oportunidades o de trato en el empleo y la ocupación.”.

Por último, quiero hacer presente que ambos instrumentos del Derecho Internacional se encuentran ratificados por nuestro país, incorporados a nuestro derecho interno y rigiendo en plenitud el principio del Derecho Internacional *pacta sunt servanda,* que se traduce como: lo pactado obliga, y obliga de buena fe.

Como conclusión, podemos indicar que el artículo trigésimo octavo transitorio de la ley N° 21.040 transgrede normas del derecho interno, como es la Constitución Política de la República, y del Derecho Internacional.

El señor **Díaz** expuso de la siguiente forma:

Iniciaremos la presentación con la discriminación arbitraria, que ya ha sido latamente tratada. Aun así, la vamos a tratar desde otra perspectiva. A saber, esto nos obligó a recurrir en contra del Estado chileno ante la Organización Internacional del Trabajo, por infringir el Convenio 111, y ello, en particular, al disponer en el artículo trigésimo octavo transitorio, de la mentada ley 21.040, un especial procedimiento para nuestros representados, por el cual el 92% de los trabajadores queda sin continuidad laboral.

Agradecemos a la OIT por declarar admisible nuestra reclamación en el mes de marzo reciente, y esto es lo increíble: Es un órgano internacional el que nos da respaldo ante la insensibilidad del gobierno, representado por el ministro de Educación, don Raúl Figueroa Salas, quien, en reciente reunión de trabajo, no estuvo disponible para discutir la necesaria modificación de esta ley, a efectos de dar término a la masacre laboral de la cual somos víctimas, lográndose sí instalar una mesa con dicho ministerio, solo a efectos de estudiar lo que acontece con los magros resultados de la concursabilidad cerrada. Esperamos avanzar en esa comisión.

De seguir tal cual la masacre laboral, al 31 de diciembre de 2025 tendremos en la calle 11.000 trabajadores de los 12.000 funcionarios iniciales, al momento de la primera desmunicipalización. ¡Sí, en la calle! 11.000 trabajadores que somos criticados irresponsablemente, tratándonos como personas de dudosa procedencia, como individuos que solo son grasa del sistema, apitutados que no saben trabajar, o bien, como si fuéramos operadores políticos, desconociendo el gran y efectivo aporte que hacemos al desarrollar nuestro silente trabajo, rindiendo los gastos de la SEP, elaborando las rendiciones del PIE, del FAEP, y otros tantos instrumentos de gestión, llevando adelante todo el proceso de compra, de procesamiento y pago de remuneraciones, de asistencia y monitoreo de las diversas labores que nos requieren en el proceso educativo. En suma, colaborando con la gran labor de los profesores y de los asistentes de la educación.

Creímos en el discurso convocante y unitario en pro de la nueva educación pública, y solo despertamos en medio de la mayor cruzada mercantilista neoliberal de la educación de los últimos decenios, la que se ha reducido a un mero cambio de

sostenedor, con una mirada gerencial, en la cual la opción económica predomina sobre la pedagógica, desarrollando la tercerización o externalización, contratando empresas para el aseo, precarizando el empleo, y sacando cuentas que nada dicen con el mejoramiento de la calidad de la educación.

En suma, exigimos que termine la discriminación y seamos traspasados junto a nuestros establecimientos de trabajo, al igual que lo son los profesores y los asistentes de la educación.

Nuestra segunda denuncia dice relación con despidos de dirigentes sindicales aforados. Lo que importa el incumplimiento del Convenio N°87, de la Organización Internacional del Trabajo, sobre la libertad sindical y la protección del derecho de sindicación al perseguir a dirigentes sindicales y gremiales de nuestras organizaciones, siendo desvinculados sin contemplar el debido respeto a su fuero al momento del fatídico traspaso.

Hoy ante ustedes damos a conocer los siguientes casos de la ciudad de Arica: Karina Angélica Cortés Jara, Yorky Daly Marín Ferreira, María Elena Olivares Varas, Aristeia Álvarez Cortez y Mario Torres Plaza; y de Los Muermos, Mauricio Javier Cuell Navarro. Lamentamos no poder dar más nombres, aunque hay muchos más casos, pero por miedo no nos han autorizado para lo que debemos dar a conocer.

Reitero que todos ellos fueron despedidos con fuero vigente al momento del traspaso dando cuenta del desprecio por la labor sindical y gremial. En tanto, otros dirigentes que han logrado ser traspasados son sistemáticamente acosados, como es el caso de la dirigente Magdalena Valenzuela Morales, que a siete días de ser traspasada se inicia un sumario administrativo en su contra por su exempleador, la Corporación Municipal de San Fernando, y es esta dirigente la que denunció cómo esa corporación trató y contrató por la Alta Dirección Pública a un funcionario que cobró dos sueldos simultáneamente, ambos por cuarenta y cuatro horas semanales. Y es la misma dirigente que, recientemente, ha triunfado en la defensa de sus asociados ante los descuentos ilegales y antojadizos efectuados por el actual sostenedor, que es el Servicio Local de Educación Pública de Colchagua, obligado ahora por sentencia del tribunal a restituir los dineros mal habidos de los trabajadores.

Señor Presidente, por ello, sugerimos respetuosamente que se reciba en audiencia a esta dirigente por parte de esta comisión. En suma, exigimos que se investigue esta razia en contra de los dirigentes sindicales y gremiales.

En otra arista de estas situaciones, que provoca la ley de desmunicipalización, denunciamos la consagración de la permisividad ante la indebida apropiación de los dineros previsionales de los trabajadores de la Educación al disponerse en el literal c, del artículo décimo transitorio de la ley en comento, que pueden suspender el traspaso aquellos sostenedores que tengan deudas previsionales durante los últimos veinticuatro meses, en tanto no superen las 400 Unidades de Fomento.

Este hecho es gravísimo, ya que a través de una ley de la República, en vez de exigir el total, completo y absoluto desempeño probo de las autoridades, dan señal para que dichas autoridades públicas puedan apropiarse indebidamente de los dineros que no son de ellos, dineros que son de los trabajadores, dineros descontados de los trabajadores para pagar su respectiva previsión. Esto es insólito y ciertamente deleznable dando cuenta del efectivo y real desprecio que hay por los trabajadores.

Exigimos que se investigue y se corrija. Así, también, denunciamos la generación de una segunda deuda histórica dada la ineficacia de las normas dispuestas en esta ley de desmunicipalización, ya que en la práctica no se materializa lo preceptuado en el artículo trigésimo cuarto transitorio en cuanto a que el Ministerio de Educación con autorización de la Dirección de Presupuestos, pagará directamente a las instituciones o a las personas que corresponda, las obligaciones que sean previsionales por concepto de pagos por descuentos voluntarios o de remuneración en sus trabajadores.

Destacamos que, materialmente, uno de los casos más recientes y dramáticos, precisamente, es el que se ha configurado en el Servicio Local de Educación Pública de Colchagua, a lo menos, con los docentes y asistentes de la educación que han sido traspasados, ya que actualmente desde el municipio de San Fernando se mantiene una deuda multimillonaria con los trabajadores, la que no se ha saldado por la fórmula planteada en la ley de desmunicipalización.

Exigimos que se investigue y se aplique, efectivamente, lo dispuesto en la ley y se paguen las deudas que se tiene con los trabajadores. Aprovecho la oportunidad de pedir que sean acogidos ante esta comisión otros dirigentes de Ñuble, como don Manuel Chávez, presidente regional del Colegio de Profesores; y doña Dayana Flores, vocera regional de las funcionarias VTF, de los que entregamos parte de sus denuncias, tales como ausencia de financiamiento basal en la educación, mantener el FAEP en forma permanente, fijar un máximo de veinte alumnos por curso con un máximo de cincuenta horas lectivas, implementar oficinas locales, preeminencia del Decreto N°315, sobre el N°313, así como la denuncia sobre la inexistencia de fondos de reemplazo de los aportes municipales del funcionamiento de los jardines.

Cuando sale la municipalidad, ¿quién pone la plata que colocaban los municipios? Esa es una fuerte denuncia, y eso está presionando a que los servicios locales, precisamente, piensen más en el dinero que en las soluciones educativas de mejoramiento de la calidad de la educación.

Finalmente, hacemos un llamado a razonar con el corazón, Chile se ha pronunciado de diversas formas dando claras señales de agotamiento de esta impronta mercantilista neoliberal, de esta mirada inhumana, imperturbable, indolente, carente de la más mínima empatía frente a la masacre laboral que nos afecta y que, actualmente, condena a unos 2.500 trabajadores involucrados en los quince nuevos servicios locales, que entraron en proceso de instalación –digámoslo derechamente- a galope tendido.

Efectivamente, se hace necesario contar con una educación pública, pero ello sin que sea a costa de los puestos de trabajo de los funcionarios y funcionarias. Primero nos diezman a nosotros y luego las emprenden con los profesores y los asistentes de la educación, incluyendo a las VTF.

Fin a la masacre laboral, y sí estamos de acuerdo en una educación pública, pero sin despidos.

22) El Presidente de la Coordinadora Nacional de Funcionarios DEM, DAEM y Corporaciones (CONAFUDAEM), señor Cristián Figueroa Constanzo, y el dirigente de la CONAFUDAEM Región de Los Lagos, señor Tomás Sanchez.

El señor **Figueroa** expuso en la sesión 12ª[25], de fecha 24 de mayo de 2021, de la siguiente forma:

En primer lugar, la ley N° 21.040 está enmarcada dentro de una idea de país que había en su momento, que era generar un pacto que lograría terminar con el neoliberalismo, como lo conocemos hasta entonces.

Por lo tanto, quiero partir la presentación haciendo un análisis de la ley N° 21.040, para ver qué cosas son las que cambian y qué cosas se mantienen.

El fin al Estado subsidiario se mantiene; el cambio de financiamiento se mantiene; el pilar de la educación es la Educación Pública, no; lo pedagógico está por

---

[25] El acta de la sesión, que contiene su exposición íntegra, así como las consultas de los diputados y diputadas y sus respuestas, pueden encontrarse en el siguiente link: https://www.camara.cl/legislacion/comisiones/sesiones.aspx?prmID=2902&prmIdTipo=2103.
Asimismo, la exposición que realizó se encuentra disponible en el siguiente link: https://www.camara.cl/legislacion/comisiones/documentos.aspx?prmID=2902
El video de esta sesión puede encontrarse en http://www.democraciaenvivo.cl/

sobre lo financiero, no; el fin a la precarización laboral, no, a pesar de que se crea el Estatuto de los Asistentes de la Educación.

Voy a desglosar cada uno de estos puntos. Primero, el fin al Estado subsidiario, se mantiene la figura del sostenedor, que es parte o eje central para entender la educación como Estado subsidiario.

Segundo, se mantiene el financiamiento por subvenciones. Sería un financiamiento para operaciones de los servicios locales de educación, que es algo mínimo; pero el financiamiento troncal son las subvenciones. En los servicios locales, en funcionamiento, la deuda y el déficit presupuestario se mantienen, que más adelante lo voy a corroborar con una auditoría de la Contraloría que también lo reafirma. En este minuto es impensado generar un financiamiento basal de la educación.

En cuanto al pilar de la educación, no es un pilar público. Hay un supuesto que se lee en la historia de la ley, pero no se puede corroborar, puesto que habla de que con la creación de estos servicios locales de educación supuestamente se debería conquistar esa matrícula que hace falta en la educación pública. Pero hasta el minuto todavía se mantienen los mismos porcentajes del 54% del particular subvencionado, 36% de educación pública, 2% de la administración delegada y el 8% de la educación privada.

Respecto de lo pedagógico sobre lo financiero, hay que decir que la misión de los servicios locales es el equilibrio financiero. Es una preocupación racional en el sentido económico, porque la estructura de los servicios locales busca sobrevivir con un financiamiento variable con obligaciones constantes. La preocupación pedagógica que incorpora el SLEP es un traspaso, a fin de cuentas, de funciones que realizaban los departamentos provinciales a los servicios locales, pero no es nada nuevo dentro de la educación.

Ahora, quiero abocarme al tema principal para nosotros, cual es la precarización laboral, específicamente a los trabajadores a los cuales también represento.

Primero, quiero mencionar que dentro de la precarización laboral está el gran número de distintas formas contractuales que existen y que generan la atomización de los mismos trabajadores. Al respecto, es importante mencionar que la ley N° 21.040 permite que los asistentes de la educación, los docentes y los trabajadores VTF pasen sin solución de continuidad laboral a la nueva institución. Los trabajadores a honorarios no son considerados en ninguna parte, como siempre son prácticamente un fantasma dentro de todo el mundo laboral del Estado.

Por lo tanto, estos no están considerados dentro de la nueva institución, por lo que voy a centrar mi presentación en los trabajadores de las administraciones centrales, regidos por el Código del Trabajo y traspasados solo si pasan un concurso. De estos, según los datos que autorreportamos, solo el 8% continúa en la nueva institución, y según los datos que entregaba el informe intermedio, habla de un 20%. Es decir, en cualquiera de los dos casos, estamos hablando de una masacre laboral, pues estamos hablando de que el 80% de los trabajadores no tiene continuidad laboral en la nueva institución.

En cuanto a los datos más concretos, me voy a referir a tres casos que dejé marcados: los servicios locales de Chinchorro, de Gabriela Mistral y de Andalién Sur. Por ejemplo, el caso de Gabriela Mistral tenía 55 cargos de planta que estaban puestos en un decreto con fuerza de ley. De esos, solo se llenaron 13 cargos y fueron aceptados 5 funcionarios.

Si se estima que previo a la desmunicipalización contábamos con 170 trabajadores en promedio, el territorio del respectivo SLEP, da un total de 1.870 trabajadores y si descontamos los aceptados, tenemos la cifra del orden de 1.723

trabajadores que quedan fuera del sistema. De esto hablo cuando me refiero a una masacre laboral, que quedan fuera 1.700 de los 1.800.

Siguiendo con la entrega de datos, estas son algunas tablas que estaban en el informe de 2020 del Comité Evaluador, que muestra una dotación máxima, que aparecía en la Ley de Presupuestos, y de esa dotación realmente los que están llenado los Servicios Locales, por ejemplo, en el caso de Atacama, de 72 solamente 36, y así sucede en todos los Servicios Locales ya instalados. Es decir, además de lo que estábamos viendo, que hay una baja cantidad de cargos de planta, también lo que se está contratando a fin de cuentas es muy inferior y que va relacionado con los problemas de gestión.

Aquí, aparece otra tabla con respecto a la ejecución presupuestaria que tiene cada uno de los Servicios Locales, y de eso, si nos damos cuenta, son todas alrededor del 80%, con excepción de Atacama que es un caso alarmante, que en el año 2020 tuvo el 57% de la ejecución presupuestaria. Y según lo que tengo acá en la tabla, el 97,26% del promedio de gasto de la administración del Estado, en general. En esta estadística de las finanzas del año 2010 hasta el 2019 el promedio es 97,26%, por lo cual estamos mostrando que la gestión de los Servicios Locales está muy por debajo del promedio del resto del sector público.

Acá hay dos artículos que voy a mencionar simplemente, que son de los asistentes de la educación y los docentes. Esto que aparece acá son dos artículos en que mencionan en el estatuto de los Asistentes de la Educación y en el estatuto de los Docentes que se pueden despedir tanto a profesores como a asistentes de la educación. ¿Por qué es importante mencionar estos datos? Primero, la ley por una parte habla con respecto a que debiese haber un óptimo de profesores con relación a estudiantes, de 35 a 1. La dotación que tenemos del año 2017 de docentes era de 103.000 y si se logra ese óptimo que aparece ahí es de 36.000, es decir, hay ahí una brecha importante de analizar.

Por otra parte, en el informe también del Consejo Evaluador se hablaba de una relación entre profesores y asistentes de la educación y si se corrobora esta situación de intentar buscar los óptimos financieros también habla de una diferencia entre el óptimo que están buscando los Servicios Locales con las dotaciones que hoy día existen de estos trabajadores.

¿Por qué era importante mencionar esos dos datos? Porque lo que queremos corroborar, a fin de cuentas, es que esta ley se aleja bastante de lo que se está buscando en ese entonces, que primero era modificar completamente una ley que terminara la desmunicipalización y, por otra, eliminar la figura del sostenedor y el sistema subsidiario. Más aún, la precarización laboral es un tema importante porque la ley lo que está intentando buscar es óptimo financiero y dentro de eso se puede dejar de lado a muchos trabajadores como es el caso de quienes represento. Y hay problemas de gestión que se muestran en dos informes de la Contraloría General de la República del año 2019, para Puerto Cordillera y para Barrancas. ¿Qué problemas son lo que se muestran? Problemas como compras mal imputadas, no acreditación de pagos, errores de saldo, cargos contables no contabilizados y problemas en las compras públicas como los dos últimos puntos que se ponen acá. Hay un tema que, supuestamente en un inicio cuando se estaba discutiendo la ley, iba a aparecer ese artículo, pero fue borrado. A pesar de eso, que fue sacado en el caso de Puerto Cordillera, se mantuvo que un personal a contrata estaba desarrollando labores de jefatura, aunque no debiera suceder.

Para ir concluyendo, podemos decir que esta no es una ley estructural. No tiene cambios de fondo realmente la ley. Lo que sí está buscando es precarización laboral, por los mismos datos que estamos mostrando y también hay una grave situación laboral que la denominamos masacre laboral, la cual urgimos a que se generen modificaciones para dar solución. Deberían ser traspasados automáticamente los trabajadores de la administración central a los Servicios Locales,

porque hay un convenio del Estado chileno con la OIT, el convenio N° 111, el cual habla de la discriminación de los trabajadores. Acá se está dando claramente una discriminación de estos. Se requieren cambios estructurales como el sistema de financiamiento, algo vital para la misma educación y para el devenir de los trabajadores y de la educación en general.

El señor **Sánchez** expuso de la siguiente forma:

En esta primera etapa de instalación, tenemos que los primeros Servicios Locales que se instalan, fundamentalmente parten el 2018 con los primeros 4 servicios Locales. Luego, hay 3 y finalmente otros 4.

En la siguiente imagen, en el mapa está bien detallado cómo ha sido la instalación de estos 11 Servicios Locales. Como pueden observar, los primeros fueron Costa Araucanía, Barrancas, Cordillera y Huasco. El 2019, se incorporan 3 Servicios Locales nuevos como son Andalién Sur, Chinchorro y Gabriela Mistral. Finalmente este año que acabamos de terminar, incorporan a los Servicios Locales de Valparaíso, Atacama, Colchagua y Llanquihue. En total, 11 Servicios Locales en tres años.

En esta segunda etapa de instalación dice que van a comenzar 15 Servicios Locales el 2022, otros 15 el 2023, otros 15 el 2024 y finalmente los últimos 14 el 2025. Ya comenzamos este año con la implementación, que está en proceso, de los siguientes 15 Servicios Locales. O sea, nos saltamos de llamar 3 o 4 a 15. Y esto, como lo mostraba Cristian, nos preocupa, que se llama a una planta de funcionarios y en la práctica los que son aceptados son una cantidad menor, bastante ínfima. Para nosotros es aterrador.

De esta manera, nosotros señalamos que esta es una ley realmente discriminatoria, ya que toda la dotación de los profesores, los 108.000 profesores que mencionaban hace un rato atrás más los 75.000 asistentes de la educación son traspasados en forma automática al Servicio Local, sin mayores reparos. Sin embargo, como los funcionarios de los DAEM, los DEM y las corporaciones, los que trabajamos en la parte administrativa se nos hace pasar por un cedazo, a través de un concurso público, donde hay cupos mínimos para que podamos concursar.

En la siguiente lámina, claramente, el 2019 en el Servicio Local de Chinchorro, Gabriela Mistral y Andalién Sur se otorgaron 13 cupos para el concurso. Diputados, 13 cupos y eso significó que más del 80% de los profesionales de los DAEM quedaron sin trabajo. En Arica, cuyo caso fue terrible, más de 150 trabajadores quedaron sin trabajo. En el Biobío, alrededor de 200.

Pero les voy a contar ahora lo que va a ocurrir en la Región de Los Lagos. De hecho, ya tenemos un Servicio Local implementado. La Región de Los Lagos -entiendo que en esta comisión está nuestro diputado Fidel Espinoza que conoce bastante bien la región- está compuesta por cuatro provincias: la de Osorno, la de Llanquihue, de Chiloé y de Palena.

Observen esta imagen. Solamente la provincia de Palena, geográficamente es casi el doble que la provincia de Chiloé, pero es un dato nomás, para que después hagamos los comentarios.

El años pasado se instaló el Servicio Local de Llanquihue y en este Servicio Local, junto con ser traspasados los profesores y asistentes de educación, de los 155 funcionarios que componían los DAEM de Fresia, Frutillar, Llanquihue, Puerto Varas y Los Muermos solo se llamó a concurso 27 cupos. Y de estos 27 cupos quedaron 15 funcionarios. Al 31 de diciembre del 2020, que recién terminó, ya habían sido notificados los 140 funcionarios de sus respectivos ceses de funciones. Muchos de ellos hoy forman parte de la gran masa de cesantes en este país, en que en tiempos de pandemia ha sido mucho más complejo encontrar trabajo.

Si vamos a implementar el Servicio Local donde va a estar Puerto Montt, si ustedes observan está publicado en el Diario Oficial, con fecha 26 de enero de 2019, en que aparece cómo va a estar conformado el Servicio Local de Puerto Montt, este fija la planta del Servicio Local de Educación Pública en la Región de Los Lagos que compone las comunas de Puerto Montt, Calbuco, Chaitén, Cochamó, Futaleufú, Hualaihué, Maullín y Palena.

Vamos a la siguiente imagen. Como acabo de mencionar, el servicio local de educación de Puerto Montt lo componen todas las comunas señaladas. Si ustedes tienen la oportunidad de visitar el lugar en algún momento, para quienes no lo conocen, se darán cuenta de que solamente estamos hablando de un territorio de más de 22.400 kilómetros cuadrados de extensión, pero solo para la provincia de Palena. Solo la provincia de Palena es enorme geográficamente, en la cual la mayoría de las escuelas están en la cordillera. En la comuna de Cochamó ocurre lo mismo, sin embargo, como se ha dado hasta hoy, lo más probable es que el servicio local esté instalado en Puerto Montt.

Me pregunto qué va a hacer un apoderado que está en el sector del Aceite o en el valle Espolón cuando está con nieve o de qué manera va a hacer un trámite en el servicio local, cuando ni siquiera la señal es fluida como en otras partes. Pero, según lo publicado en el Diario Oficial -y miren lo terrible que pasará con los funcionarios del DAEM-, la planta de funcionarios sería de tan solo 56 funcionarios para este servicio local. Por ende, si sumo a todos los funcionarios de los DAEM de todas las comunas que lo componen son más de seiscientas personas. Por lo tanto, si se sigue aplicando el criterio que se ha dado hasta ahora y se llama a concurso a esos 56 funcionarios, tendremos prácticamente a más de seiscientos jefes y jefas de hogar sin trabajo. En consecuencia, se trata de una ley que, además de la pandemia, dejará a una cantidad enorme de familias sin trabajo y afectará enormemente a las economías locales.

¿Qué proponemos nosotros? Primero, que ojalá sinceramente podamos modificar esta ley, para que todos los trabajadores que se desempeñan en los Departamentos de Administración de Educación Municipal y las corporaciones podamos ser traspasados a los servicios locales. Segundo, que se reincorpore a los que no tuvieron continuidad laboral, los colegas que hoy están cesantes. Hay experiencia de otros países en donde se ha vuelto a contratar a la gente. Tercero, que la ley obligue -actualmente la norma no obliga- a los directores de los servicios locales a crear oficinas territoriales en cada comuna, porque hoy eso no existe. Queda a criterio del director del servicio local que se establezca una oficina en cada comuna, pues la ley no lo obliga. Es importante que en cada territorio exista una oficina comunal.

En términos resumidos, decimos no a la masacre laboral. No queremos quedar cesantes en tiempos de pandemia, pues mucha gente con bastante *expertise* o experiencia puede sacar adelante a los servicios locales. Obviamente, hay cuestiones de fondo más importantes que también deben ser modificadas en la ley. Apelamos a que haya una profunda modificación en la ley N° 21.040.

23) El Presidente del Consejo Nacional de Asistentes de la Educación de Chile (CONAECH), señor Miguel Ángel Araneda Araneda, acompañado del Secretario General, señor Manuel Valenzuela Albornoz.

El señor **Araneda** expuso en la sesión 12ª[26], de fecha 24 de mayo de 2021, de la siguiente forma:

---

[26] El acta de la sesión, que contiene su exposición íntegra, así como las consultas de los diputados y diputadas y sus respuestas, pueden encontrarse en el siguiente link: https://www.camara.cl/legislacion/comisiones/sesiones.aspx?prmID=2902&prmIdTipo=2103.
El video de esta sesión puede encontrarse en http://www.democraciaenvivo.cl/

En primer lugar, quiero solidarizar con los colegas de los departamentos de educación, porque tenemos claro que los trabajadores no pueden pagar este traspaso. Creo que hay que hacer modificaciones, tal como ellos piden, para evitar que haya tanta cesantía en los departamentos de educación que están siendo traspasados.

Sin embargo, más que referirme a la evaluación del sistema de la DEP, no podemos olvidarnos de que estamos en un sistema de educación municipal fracasado. O sea, claramente parece que nos olvidamos de que durante muchos años estuvimos clamando por un nuevo sistema, pero, obviamente, tal vez no en las condiciones en que se planteó esta ley. No hay que olvidar que solo representamos al 35% de la educación pública a nivel nacional. Desde luego, Santiago ya va con 25% de educación pública y sigue disminuyendo, porque cada vez que tenemos alguna movilización o paralización nos disparamos a los pies, y cada vez siguen migrando más alumnos al sistema particular subvencionado.

De hecho, hemos dicho varias veces que ni los profesores ni los asistentes de la educación mantienen a sus alumnos dentro del sistema público, lo que hoy nos mantiene en una crisis de matrículas. Eso hace que también haya una sobredotación de funcionarios, primero, por el arrastre que hemos tenido durante estos años y, segundo, porque cada vez que hay elección de alcalde en una comuna, cambia el edil y este llega con, a lo menos, un 30% adicional de funcionarios que incluye dentro del sistema educativo, ya que como no entramos por concurso público, solo se requiere tener rendido el cuarto año de enseñanza media. Por lo tanto, nos hemos convertido en bolsa de trabajo y de pagos políticos para los alcaldes que ganan las elecciones. No hay que olvidarlo.

Otro asunto es que el sistema tampoco nos garantiza mantener nuestras fuentes laborales a futuro, porque, como seguimos bajando en matrículas, no tenemos un sistema de subvención que vaya más que nada con la matrícula y no con la asistencia media ni nos garantiza que vayamos a tener seguridad laboral en el futuro. De hecho, debido a la sobredotación que se ha producido en distintos municipios del país, hoy tenemos casos catastróficos de aumento en el presupuesto municipal. También se habla de los hoyos que se mantienen en el área de educación, por ejemplo, en la comuna de Lota, Región del Biobío, donde vivo actualmente, y en otras comunas del norte del país, donde también había deudas por 28.000 millones de pesos en dicha área. O sea, no podemos cerrar los ojos ante esa situación.

Hoy tenemos que ver cuáles son los problemas que nos aquejan y cuáles son las posibles soluciones. No digo que este sistema no sea perfectible, pero claramente no podemos destruir lo que tenemos por lo que nos falta.

Hoy, por ejemplo, tenemos algunas falencias en los choferes, que no están siendo incluidos dentro del estatuto ni reconocidos por las direcciones de educación ni por los servicios locales. En el caso de las manipuladoras de alimentos, se sigue precarizando las condiciones laborales de nuestras colegas. Creo que se debería evitar la subcontratación y ser todos asistentes de la educación, tanto los choferes como las manipuladoras de alimentos. Con el traspaso de la administración, de acuerdo con el decreto ley N° 3166, tenemos colegios en los que todavía no está claro quién debe pagar los bienios de los colegas que están en los territorios. La ley señala claramente que pasan a ser parte de los servicios locales, y por ende que debe aumentárseles los beneficios, pero no se dice específicamente quién los debe pagar. Por lo tanto, los colegas de Santiago, a lo menos los de Servicio Local de Educación Gabriela Mistral y los que están a su alrededor, cuyo establecimiento se rige por el decreto ley 3166, todavía no reciben el pago de sus bienios. Eso debe quedar especificado en la ley para evitar estos nudos críticos.

Asimismo, la educación pública, al ser traspasada a los municipios, precarizó no solo la educación, sino también las condiciones laborales de los trabajadores, como los profesores y asistentes de la educación. Por cierto, la sobredotación también

precarizó las condiciones de los funcionarios del Departamento de Educación. En principio, este sistema se pensaba como la solución de los vicios que tienen y que han tenido los municipios históricamente, metiendo la mano en los fondos municipales para otro tipo de cosas, porque sabemos claramente que la educación municipal no solo ha sido un fracaso, sino también corrupta en muchos casos.

Por lo tanto, si bien es cierto que el sistema es perfectible, sigo pensando en que hay que modificar algunos aspectos de la ley y avanzar en todos los nudos críticos. Pero -y me hago responsable de esto-, los asistentes de la educación, al momento de ser traspasados, logran tener un sueldo base del sistema público y no un sueldo mínimo como el regulado en el Código del Trabajo, como lo hemos tenido históricamente, con beneficios que vienen a mejorar las condiciones económicas y con el estatuto las condiciones laborales. Si bien perjudica a los trabajadores del Departamento de Educación, con quienes solidarizamos, queremos seguir avanzando en mejorar la educación pública, ya que quedarnos en el sistema municipal sería, derechamente, matar lo que queda de la educación pública.

24) El Presidente de la Confederación Nacional de Asociaciones de Funcionarios Asistentes de la Educación Municipalizada de Chile (CONFEMUCH), señor Arturo Escárez Opazo y la Secretaria General, señora Alejandra Aguilar Navarro.

El señor Escárez y la señora Aguilar asistieron acompañados del Vicepresidente, señor Manuel Urzúa Sánchez; de la Tesorera señora María Oporto Rebolledo, y de los Directores señores Ignacio Alvarado Campos y Anthony Lenz Tapia. Participaron en la sesión 12ª, de fecha 24 de mayo de 2021 y expusieron en la sesión 13ª[27], de fecha 31 de mayo de 2021, de la siguiente forma:

El señor **Escárez**. Respecto de lo que esta comisión nos convoca, quiero partir diciendo que esta confederación, desde sus inicios en 2005, cuando comienza la “revolución pingüina”, fue partícipe, junto con los estudiantes, de las demandas relacionadas con la desmunicipalización de la educación y para que esta pueda volver al Estado.

Nuestra confederación también se hizo partícipe en 2011, en la segunda revolución de los estudiantes, en la cual se reclamaba nuevamente respecto de que la educación debía volver al Estado.

Esta organización, que representa a los asistentes de la educación, luchó por años por una normativa propia que norme y regule las condiciones laborales de los asistentes de la educación, así como respecto de las condiciones de remuneración, porque como en el sector municipal tenemos 345 sostenedores, también tenemos 345 realidades distintas, tanto en condiciones laborales como remuneracionales.

Esa lucha se logró gracias a muchas y muchos diputados y diputadas -debo decir- que están aquí presentes. Me alegra el apoyo transversal que nos dieron, porque todas y todos los parlamentarios nos apoyaron para sacar este estatuto adelante, el que felizmente, el 2 de octubre de 2018, fue hecho realidad -por qué no decirlo- con la lucha que dimos junto a ustedes, los que son todavía integrantes de la Comisión de Educación, donde se pudieron hacer grandes modificaciones al proyecto recién ingresado.

---

[27] El acta de la sesión, que contiene su exposición íntegra, así como las consultas de los diputados y diputadas y sus respuestas, pueden encontrarse en el siguiente link: https://www.camara.cl/legislacion/comisiones/sesiones.aspx?prmID=2902&prmIdTipo=2103.
Asimismo, la exposición que realizaron se encuentra disponible en el siguiente link: https://www.camara.cl/legislacion/comisiones/documentos.aspx?prmID=2902
El video de esta sesión puede encontrarse en http://www.democraciaenvivo.cl/

Quiero también reconocer, cuando estuve con el entonces Presidente de la Cámara de Diputados, al diputado Fidel Espinoza, con quien también trabajamos este proyecto de estatuto, que si bien nos costó bastante, logramos sacar adelante. Fue una lucha por años, y hoy no estamos exentos de los problemas que se pudieran presentar con los traspasos, porque los hemos tenido; pero, ¿saben cómo lo hemos solucionando, desde el segundo año, en los segundos servicios locales que fueron traspasados?

Hemos ido logrando con mesas de trabajo que instalamos con la Dirección de Educación Pública, con los distintos directores y directoras de los servicios locales que iban a entrar en régimen, así como también con los que ya están en régimen.

En este proceso, fue el diálogo lo que nos ayudó a ir destrabando muchos problemas; de hecho, los primeros problemas que tuvimos fue con la aplicación del estatuto, ya que cuando sale publicado en el Diario Oficial, sale cuando ya los servicios locales estaban en régimen; entonces, para tener que aplicarlos -y ahí, gracias al trabajo de ustedes- se colocaron artículos transitorios para que estos beneficios pudieran ser cobrados retroactivamente respecto del tema económico.

No digo que no tengamos problemas, pero los hemos ido solucionando –insisto- con las distintas mesas de trabajo que tenemos con los directores y directoras de los servicios locales que están en régimen, y en los cuales también participa la Dirección de Educación Pública. Es así como lo hemos ido logrando.

Lo más importante para nosotros es que en este estatuto, que por años nos costó hacer realidad, lo económico es bastante importante, porque todos vivimos de un sueldo.

Insisto en el tema que tiene relación con no remuneraciones y con derechos laborales. Primero, hoy se nos reconoce -a través de la ley “madre”**,** que también nos tocó trabajar con ustedes, la Ley General de Educación- como actores en la comunidad educativa. Eso después se plasma en nuestro estatuto, donde les peguntamos cuál es el trabajo que debemos hacer para hacerlo bien, y no ser multifuncionales en un establecimiento educacional donde hacemos de docentes, trabajamos en la parte administrativa, en la técnica y en la auxiliar, que si bien es cierto lo hacemos con mucho gusto, porque para eso fuimos contratados, es decir, para atender a nuestros niños, jóvenes y estudiantes, también queremos hacer bien la pega. Por eso preguntábamos cuáles eran las funciones que debemos hacer para hacerlo bien. Eso nos lo entrega el estatuto, y se estandarizan nuestras funciones a nivel nacional.

Pero también están los derechos consagrados en la ley, que no deben ser vulnerados, y tenemos las instancias legales de reclamación que están consagradas dentro de este estatuto. En ese sentido, para nosotros este estatuto se hace “carne”, se hace realidad una vez que somos traspasados a los servicios locales de Educación Pública.

Si bien es cierto -vuelvo a insistir- no estamos exentos de problemas, estos los hemos ido solucionando a través del diálogo con estas mesas de trabajo que logramos instalar, y que en algunos lugares nos ha costado bastante, pero dada la fuerza que tenemos como organización lo hemos logrado.

En eso quiero reconocer el trabajo que tuvieron en esta Comisión de Educación, cuando se estaba tramitando nuestro estatuto. Esto es lo que hoy no queremos perder cuando salen voces a decir que quieren retrasar la entrada en vigencia de los servicios locales que vienen a continuación.

Para nosotros que, en número somos más de 90.000 asistentes de la educación que vamos a ser traspasados, que hemos vivido por años, desde 1981, cuando comienza la desmunicipalización de la educación, perdimos derechos laborales y remuneracionales. Antes, nos regíamos por el Estatuto Administrativo, pero, una vez que pasamos a los municipios, hemos vivido por años con sueldos de

miseria, con sueldos de hambre, y para que un asistente pueda sobrevivir tiene que vivir endeudado con las distintas financieras, incluso, para poder educar a sus hijos.

Es más, quiero que ustedes, señoras y señores parlamentarios, puedan ver, a través de la presentación que va a hacer Alejandra Aguilar, la realidad de nuestro sector y entender por qué clamamos -y digo clamamos, porque eso es lo que nuestras bases nos dicen- seguir con este traspaso a la educación pública, principalmente por el beneficio de nuestros estudiantes, porque los servicios locales solo se dedican al tema educación, y no como un municipio que ve diversas situaciones dentro de la comunidad educativa, ya que no solo se preocupa de la educación, sino también de la salud, del bienestar social, etcétera.

La señora **Aguilar**. Como dijo nuestro presidente, si bien no hemos estado ajenos a los problemas que han tenido los SLEP, de los aciertos y de los errores, hemos ido sacando aprendizajes y avanzando en cada uno de ellos; también hemos tenido constantes reuniones con la directora de la Dirección de Educación Pública (DEP) y con el equipo jurídico.

Veo que está presente don Alfredo Romero, con quien hemos resuelto muchos de los problemas que hemos tenido; pero como asistentes de la educación, estamos conscientes de que con trabajo, con compromiso y sin mirar el color político de la educación, podemos avanzar en este tremendo cambio histórico que tiene la educación en nuestro país.

Esto no nace de la noche a la mañana o porque a alguien se le ocurrió decir: “Tomen, acá está, asistentes de la educación tienen una ley”. Ustedes saben que esto partió en 2005 con el pingüinazo de los estudiantes, que una vez más nos enseñaron a luchar en la calle, y después se sumaron, en 2011, los universitarios. Por lo tanto, lo que voy a exponer ahora es una realidad reflejada en liquidaciones de sueldo de trabajadores y de familias que esperan por este traspaso de los dos años.

En esta lámina hay una liquidación de sueldo del SLEP de Llanquihue. Es falso que producto de la pandemia no se pueda avanzar. Si ustedes recuerdan, el SLEP de Llanquihue se traspasó en enero de 2021. Durante todo 2020 se trabajó en el proceso de encasillamiento, carpetas, traspasos.

Como dije, esta es una colilla de sueldo de una compañera del mes de febrero. Ella gana 417.000 pesos, como sueldo base, siendo una técnico en educación parvularia, y ella tiene que llegar a un sueldo de 478.000 pesos, sin embargo, en febrero, ella sacó simplemente los 417.000 pesos.

Si bien, la ley dice que el SLEP de Llanquihue tiene tres meses para pagar los bienios del encasillamiento, este cumplió en marzo de este año, y allí aparece su sueldo base de 417.000 pesos con el cual se traspasó desde el municipio. Dijimos que tiene que llegar a 478.170 pesos y ahí está la diferencia -60.000 pesos, en color amarillo- del encasillamiento, que quiere decir que ella aumentó 60.000 pesos por el solo hecho de encasillarse por ser técnico en educación parvularia.

Aparte de eso, esta trabajadora tiene cinco bienios, porque tiene diez años de servicio. Ustedes saben que nuestro estatuto paga bienios, y como dijo el presidente de nuestra organización, esto lo recibiremos estando en el SLEP. Si estoy en municipio, yo no recibo estos sueldos. Esta trabajadora aumentó por el solo concepto de bienios 47.000 pesos mensuales. Acá está su retroactivo de enero y febrero, los 95.000 pesos de los bienios, y el retroactivo, los 121.000 pesos, del encasillamiento.

Por lo tanto, por el solo concepto de bienios y de grado técnico que esta trabajadora tiene recibió 47.000 pesos y 60.000 pesos respectivamente, por lo que aumentó su sueldo en 108.600 pesos mensuales.

En la siguiente lámina tenemos otra realidad. Se trata de un compañero auxiliar de servicios menores, que también es del SLEP de Llanquihue, tiene doce bienios, porque tiene 24 años de servicio, y tiene un sueldo de 476.000, por lo tanto,

no se encasilló, porque está por sobre la media del auxiliar, que son 403.000 pesos, pero sí aumentó en los doce bienios, porque siempre dijimos: “Funcionario público: Antigüedad constituye grado”. Por lo tanto, reitero, este trabajador no se encasilló porque estaba por sobre la media del auxiliar. No le bajaron el sueldo, pues se le mantuvo por los años que traía y, permítame decirle, que para 24 años de servicio su sueldo es bastante indigno de parte de su municipio. No obstante, él lo aumentó en 96.937 pesos por concepto de bienios.

Ustedes pueden ir sacando sus cálculos respecto de si es bueno o malo retrasar en dos años el proceso de traspaso a servicios locales; en caso contrario, vamos a tener que decirle a un trabajador que espere dos años para aumentar su sueldo en cien lucas. En esta otra lámina podemos ver la liquidación de sueldo de otra trabajadora administrativa, próxima a traspasarse, de una comuna. Por razones obvias, borré su nombre y su Nº de RUT.

Cabe mencionar que un administrativo con el sueldo del estatuto tiene que llegar a 449.000 pesos. Esta trabajadora entró en 1998, tiene 23 años de servicio. ¿Ustedes pueden creer que ella gana un poquito más del sueldo mínimo? ¡Hoy gana 338.812 pesos! Esta trabajadora es de una comuna que tiene que traspasarse en 2023, porque en 2022 es el proceso de levantamiento. Cuando se traspase, en 2023, por el puro hecho de encasillarse al tramo de administrativo, va a subir 110.694 pesos; o sea, tuvo que esperar 23 años para aumentar su sueldo.

Más encima a esta trabajadora van a reconocerle los bienios, que son 98.000 pesos. Por lo tanto, al sumar los bienios más encasillamiento, su sueldo aumentará en 209.000 pesos mensuales. Esto no lo entrega cualquier municipio.

Ahora, si al proyecto estatuto le sacaran el artículo transitorio que dice que recibimos los beneficios estando solamente en SLEP, para nosotros sería fácil decir que esto se cambie, se analice y se vea; pero los asistentes de la educación, a diferencia de los docentes, recibimos los beneficios estando en SLEP y no estando en un municipio. En cambio, los profesores, por la carrera docente, los reciben estando en SLEP o en un municipio. Por lo tanto, quiero que puedan sacar sus conclusiones respecto de si esto es beneficioso o no para los asistentes de la educación.

En esta lámina aparece la tabla de bienios que, como señalamos, si alguien no encasilla porque está por sobre ese sueldo, va a ir recibiendo de acuerdo con su tramo y con sus años la cantidad de plata que aquí se señala. Por ejemplo, un auxiliar que hoy tenga 20 años de servicios va a aumentar inmediatamente en 80.000 pesos, y así sucesivamente.

Tenemos muchos colegas que han esperado años para recibir un mejoramiento económico, que no lo entregan los alcaldes, porque ustedes saben que así como hay comunas buenas, también hay pésimas que, con suerte, pagan el sueldo mínimo.

Sabemos que hay dos proyectos para retrasar la entrada en vigencia del traspaso a los servicios locales de educación. Desde nuestro punto de vista, esto se considera un menoscabo económico y laboral para los asistentes de la educación. Este proyecto pide que el año 2022 se cambie por el 2024; el 2023 por el 2025, y así sucesivamente.

De los quince servicios locales de educación, tenemos territorialidad en ocho. Esta confederación agrupa a más de 50 comunas a lo largo del país, de Arica-Putre hasta Porvenir.

En esta lámina aparece el segundo proyecto, que es del mismo tenor: le pide al Presidente de la República que no tenga la atribución de decir si siguen o no, y también que se retrase el proyecto por dos años. Aquí aparecen todos los parlamentarios que lo firman, la mayoría de Renovación Nacional. No sé si ellos

conocen los sueldos de los asistentes de la educación, los que ni siquiera están por sobre el límite de la pobreza.

Insistimos, estos dos proyectos nos dejan en tremendo menoscabo laboral y económico. Entendemos la situación de los funcionarios del Departamento de Administración de Educación Municipal (DAEM), pero el camino no es quitarnos a nosotros una lucha de 25 años, sino en arreglar la ley Nº 21.040, con artículos transitorios.

Ahora, también los compañeros de la DAEM tendrán que hacer un *mea culpa*. ¿Dónde estaban en 2017? Si bien, nosotros estamos movilizados hace 25 años y desde 2017 en adelante todos los días visitamos el Congreso, y ustedes nos entregaron esta ley. ¡Ustedes conocen todo el trabajo que hicimos!

En esta lámina se encuentran los argumentos. Nosotros sabemos del traspaso; ha habido problemas en los servicios locales vigentes, pero los hemos ido solucionando con diálogo y compromiso. No hemos estado ajenos a toda la problemática y hemos ido aprendiendo.

El primer servicio local tuvo problemas, pero podemos demostrar, con liquidaciones de sueldo, que en el SLEP de Llanquihue, a tres meses del traspaso, los asistentes de la educación hoy reciben sus beneficios y hay familias que están muy contentas por haber aumentado en más de 100.000 pesos mensuales sus remuneraciones. Este es el artículo cuarto transitorio que tiene la ley que dice: “Las disposiciones de la presente ley comenzarán a aplicarse desde el traspaso del servicio educacional al servicio local respectivo. En consecuencia, dichas disposiciones no producirán efecto respecto de aquellas municipalidades o corporaciones municipales que continúen prestando el servicio educacional”.

Hoy, los asistentes de la educación a nivel país, según el informe del Ministerio de Educación, de agosto de 2020, somos 90.856. Acá está la representatividad territorial que tiene hoy la confederación de derecho. Tenemos el SLEP Puerto Cordillera, Costa Araucanía, Chinchorro, Llanquihue y Colchagua, ahí están todas las organizaciones, las comunas a las cuales nosotros representamos. Estas son las evidencias. No somos una organización de hecho sino de derecho. Aquí están todas las comunas que tenemos para traspasarse: Lebu, Salamanca, Coyhaique, Las Cabras, Cauquenes, Los Andes, Chile Chico, Calle Larga, Río Bueno, Chanco, La Unión, Aysén, Pichidegua, San Esteban, Arauco, Futrono, Porvenir y Lago Ranco.

En nombre de los asistentes de la educación, decimos que sí al traspaso de los Servicios Locales y que, de una vez por todas, los asistentes de la educación tengamos el cumplimiento de la ley, dejemos de ser invisibles y tengamos la dignidad que nos merecemos. Sabemos que la ley tiene falencias, pero las iremos arreglando en el camino. El camino para solucionar el problema de los DAEM no pasa por acá, estimados parlamentarios. Nosotros queremos demostrarlo con hechos. Sabemos que la comisión no es para esto, pero queremos demostrar que hemos ido avanzando con los Servicios Locales. Tenemos problemas, pero tenemos las soluciones a largo plazo de todos los inconvenientes que hemos ido enfrentando.

25) El Secretario Ejecutivo de la Agencia de Calidad de la Educación, señor Daniel Rodríguez Morales.

El señor **Rodríguez** expuso en la sesión 14ª[28], de fecha 14 de junio de 2021, de la siguiente forma:

---

[28] El acta de la sesión, que contiene su exposición íntegra, así como las consultas de los diputados y diputadas y sus respuestas, pueden encontrarse en el siguiente link: https://www.camara.cl/legislacion/comisiones/sesiones.aspx?prmID=2902&prmIdTipo=2103.
Asimismo, la exposición que realizó se encuentra disponible en el siguiente link: https://www.camara.cl/legislacion/comisiones/documentos.aspx?prmID=2902
El video de esta sesión puede encontrarse en http://www.democraciaenvivo.cl/

La Agencia de Calidad de la Educación, para poner en contexto la presentación, es la institución a cargo de evaluar, orientar e informar a los establecimientos educacionales y sus sostenedores para el mejoramiento de la calidad y la equidad de la educación. Es un rol bastante amplio, pero que se centra fundamentalmente en los roles de evaluar y de orientar.

En políticas concretas, se identifica con la evaluación censal del aprendizaje por medio del Simce (Sistema de Medición de la Calidad de la Educación) y con la orientación de los establecimientos a través de visitas evaluativas y de orientación.

Se hacen entre 700 y 1.000 visitas -antiguamente en forma presencial y en la actualidad por medios remotos- con el fin de ayudarlos en dimensiones relativas a la buena gestión de los establecimientos, para que puedan mejorar sus procesos y de esa manera mejorar también sus resultados.

Al igual que la superintendencia, la Agencia de Calidad de la Educación es una institución previa a la creación de los servicios locales de educación pública y de la Dirección de Educación Pública. Por lo tanto, nuestra principal tarea en relación con la nueva educación pública ha sido adaptar nuestros procesos, nuestras políticas y nuestro rol en el sistema de aseguramiento de la calidad de la educación para incorporar a los nuevos sostenedores y la nueva relación entre el sostenedor, la escuela y la Dirección de Educación Pública, además de facilitar, en todo lo que sea posible, el complejo proceso de implementación e instalación de los servicios locales de educación pública.

Comenzaré mi exposición refiriéndome al marco legal y a nuestras atribuciones. La ley N° 20.529, de aseguramiento de la calidad de la educación, no nos entrega un rol específico en relación con los servicios locales de educación pública porque a la fecha de su creación estos no existían. No obstante, la ley N° 21.040, que crea el Sistema de Educación Pública, nos otorga roles específicos adicionales a los que tenemos normalmente frente a los sostenedores.

El primero de ellos es la obligación que tiene la Agencia de Calidad de la Educación de evacuar un informe sobre la primera etapa del proceso de instalación, cuyo destinatario es el Consejo de Evaluación del Sistema de Educación Pública. Este informe considera la calidad, el funcionamiento y el desarrollo del servicio educacional por parte de los servicios locales de educación pública, que es una de las atribuciones que la ley establece.

La segunda dice relación con las visitas de orientación a los colegios que ya les mencioné. En el caso de los servicios locales de educación pública, también se deben realizar a nivel de sostenedor, es decir, deben incorporar una evaluación integral de la gestión de sus servicios. Esa es una atribución muy interesante, pero que no tenemos respecto de otros sostenedores públicos o privados, como municipalidades u otras redes de sostenedores.

La ley establece un calendario de implementación bastante exigente, para ir de la mano con la instalación de los servicios. Me voy a referir al piloto y a la implementación en régimen de tales visitas integrales a los servicios durante este año.

Respecto del primer punto, la evaluación de la instalación, expondré algo de contexto. El rol de la agencia en esta ley es muy interesante, porque considera la obligación de generar un informe dirigido al Consejo de Evaluación del Sistema de Educación Pública.

A pesar de que la ley incluye esos tres conceptos, de calidad, funcionamiento y desarrollo del servicio educacional provisto por los servicios locales, deja bastante abierto qué es lo que puede evaluar la agencia en relación con la implementación o la instalación de esos servicios. Fue un desafío muy interesante y desafiante desde el punto de vista metodológico, pero que, lamentablemente, desde 2019 estuvo bastante atravesado por la contingencia, en primer lugar por el extenso paro de

profesores, luego por los eventos conocidos como el estallido social, y finalmente por la pandemia de covid-19.

Por todo ello, ha sido realmente difícil mantener un método consistente de evaluación y levantar datos. Por lo tanto, fue una tarea compleja, pero la llevamos a cabo de igual manera, y en febrero de este año presentamos al consejo dicho informe, que es muy extenso.

Expondré solo un resumen de las conclusiones. No entraré en el aspecto metodológico, pero, si la comisión lo requiere, no tengo inconveniente en compartir el informe. En primer lugar, constatamos en los servicios locales una desigualdad educacional que persiste. Es una constatación bastante obvia, que tiene que ver con la razón por la cual fueron creados los servicios locales de educación pública, o por lo menos con la idea matriz de la ley, que fue lograr mayor equidad en territorios más extensos que una comuna.

Luego de tres años desde implementación de este nuevo sistema, esa desigualdad o inequidad no ha podido ser solucionada en su mayor parte, según se observa en cada uno de los servicios. Como expuse, ha sido poco tiempo y además tuvimos bastantes complicaciones para investigar en terreno, debido a los hechos del año pasado y del anterior.

Además de la diversidad entre los servicios, es importante constatar la heterogeneidad que existe dentro de cada uno de ellos, situación que probablemente se mantendrá por mucho tiempo.

Entonces, a la hora de evaluar, estudiar o describir los servicios, es muy importante tener en cuenta que los distintos territorios que los componen fueron tratados de manera distinta en términos educativos durante por lo menos 40 años. Por lo tanto, es muy difícil hacer una evaluación de cambios radicales o muy observables en apenas tres años de implementación, sin desmerecer por ello el volumen de los cambios que establece el cambio de administración.

En territorios que han sido pasados o que se iban a pasar a servicios locales -porque también nos tocó evaluar algunos que estaban en transición- se observan desempeños en términos de puntaje Simce inferiores a los promedios nacionales y a los establecimientos particulares subvencionados de las comunas que los conforman.

No digo que no exista ninguna relación entre la implementación de los servicios locales y los resultados Simce, quiero descartar eso muy claramente. Lo que se observa es que, si se comparan los resultados Simce de los establecimientos traspasados con los de particulares subvencionados del mismo territorio o del promedio del país, los primeros están por debajo, y eso es obvio, porque en la elección de los servicios locales se priorizó, como unidades que requerían más urgencia, la mejora de su administración municipal, y, por tanto, era esperable que tuvieran menor desempeño que otros, en la idea de priorizar a los que más necesitaban el cambio.

Si bien nada se puede establecer en forma de causa y consecuencia, se observa que los resultados de los servicios locales -en términos de aprendizaje, como se miden en Simce- siguen siendo bajos, y es importante no perder esto de vista.

Para evitar malas interpretaciones, quiero insistir en que no es mi intención establecer relaciones de causa y consecuencia, ni hacer ninguna evaluación respecto de la efectividad de esta política en los aprendizajes. No obstante, debemos observar que existen necesidades educativas que son más urgentes que en el promedio del sistema público, y es muy importante seguir monitoreando los aprendizajes en esos servicios, lo que se verá en las conclusiones de este informe.

Uno de los puntos más altos y reconocidos por los directores de servicios locales y por las comunidades, a través de las entrevistas y análisis que hicimos, es el valor de la Estrategia Nacional de Educación Pública, así como la capacidad de

dicha estrategia para generar un foco y un plan común para todos los servicios locales, y eventualmente para toda la educación pública.

Esto es muy valioso, porque era uno de los objetivos de la ley de educación pública, es decir, generar un propósito unificado o, por lo menos, convergente respecto de qué debe hacer y cuál es el rol de la educación pública, y la estrategia nacional lo consigue. En términos administrativos y en materia de gestión, los servicios locales son muy convergentes en eso. Es muy positivo para un proceso sumamente complejo y demandante tener un norte, un objetivo común, y que todos los instrumentos de planificación y todas las gestiones se alineen hacia ese único propósito. Quizá, se subestima su importancia central sobre todo en esta etapa, en la que todos sabemos que cuando las cosas comienzan, estas pueden empezar a perderse, a desviarse o diluirse sus objetivos. Según nuestro estudio, notamos que la estrategia permite mantener esa coherencia.

Obviamente, el desafío de cualquier planificación es llevarla a cabo de manera efectiva, pero de forma adaptable a las circunstancias que van ocurriendo. También, si bien hay mucha claridad en los territorios y los servicios locales respecto de la planificación que deben cumplir y a las ideas fuerza que impulsa la estrategia nacional de educación pública, materializarlos es aún una tarea pendiente, lo cual es relativamente esperable, dado el poco tiempo de implementación que lleva esta política. No obstante, tampoco le quita el mérito a una planificación bien hecha y sobre todo bien instalada en cada uno de los SLEP. Una cosa es hacer una buena planificación y que quede en un escritorio del nivel central y otra que esta se integre de manera coherente con los esfuerzos de cada uno de los servicios.

Del mismo modo, observamos algo muy interesante sobre la participación. Si se analiza la constitución de esta comisión, uno también puede notar preocupación en esa materia. Por cierto, las disposiciones de participación que están en la ley han sido implementadas. Ha habido una participación muy profusa en la implementación de la educación pública, mucho más de la que existía en el mundo municipal, por decirlo de alguna manera. Sin embargo, los mismos actores notan una dificultad para llegar a las escuelas, a los estudiantes y a los apoderados en esta participación. Es decir, es una participación que, al parecer, todavía es más bien institucional, o sea, los consejos locales y comités directivos operan, pero aún no llegan a identificar ni las necesidades, ni las preocupaciones ni las demandas de estudiantes y padres ni de las escuelas. Ahí todavía falta un paso adicional más allá de lo institucional.

En este sentido, advertimos cosas bastante interesantes. Primero, la dificultad que implica reemplazar las redes de apoyo y de contacto municipales. Según varias entrevistas realizadas, los padres y apoderados y las escuelas usaban sus redes dentro del sistema municipal para facilitar o lograr objetivos que beneficiasen a la comunidad o hacer ver problemas o apuntar urgencias. Cuando esas redes son reemplazadas por el servicio local y, de alguna manera, se desaparecen o se difuminan, el servicio local parece menos efectivo en términos de acción política, de efectividad política, para conseguir objetivos respecto de lo que ocurría en la red municipal. Esto es muy importante a la hora de evaluar el sistema. Hay que tener mucho cuidado cuando se reemplaza un sistema que tiene tanto tiempo y está tan “aceitado”, ya que al reemplazarlo por uno nuevo se debe tener cierta consideración sobre la velocidad en la cual eso se puede reconstruir; una red no se hace de un día para otro.

Por lo tanto, la misma dificultad que identifican los apoderados y que nos manifestaban en alguna de las entrevistas, en el sentido de que antes debían hablar con algún concejal que conocían para que el asunto se resolviera, nos hace considerar que la participación es mucho más difícil que llegue directamente al ciudadano. Más bien, es una participación institucional que tiene que ver con cómo se conectan estos distintos consejos y comités entre sí y su “pugna” con el director

del servicio local, pero no con la gente, los usuarios o las verdaderas personas que están usando el sistema.

Constatamos una falta en la función de la participación como forma de rendición de cuentas a la autoridad pública. Es decir, si bien cuando se elaboró la ley se discutió profusamente que el alcalde no era objeto de rendición de cuentas por parte de la ciudadanía o de los padres respecto del estado de sus colegios, notamos un matiz en esa afirmación. Al parecer, no les preocupaban tanto los resultados de aprendizaje, pero sí los problemas concretos y cotidianos de las escuelas, en términos de infraestructura, del acceso y de las decisiones que se tomaban entre los colegios. Constatamos que efectivamente era un instrumento con el cual los padres hacían rendir cuentas a los alcaldes. Por lo tanto, al ser reemplazado por otra autoridad no conocida, eso se ha difuminado. De manera que es fundamental que la participación sea profusa y muy enriquecedora, pero también que se oriente a hacer rendir cuentas a toda esta nueva institucionalidad –léase, consejos, comités y servicios locales-, que debe responder a las necesidades de los padres y de las escuelas y no a otras.

Con respecto a lo pedagógico y administrativo, tema que generó una constante tensión sobre si los servicios locales debían dedicarse primero o primordialmente a lo pedagógico o a lo administrativo, se observa una falsa tensión, porque ambos factores son necesarios y fundamentales para una buena implementación. Al observar los distintos servicios locales de manera separada y en conjunto, se concluye que la dimensión, la dificultad, el tamaño o la complejidad del proceso administrativo de traspaso es tan grande o la diversidad de problemas es tan enorme, tan sumamente imposible de predecir y tan diversa en cada una de las comunidades y en cada uno de los municipios, considerando además que cada servicio tiene distintos municipios, que muchas de las dificultades para su implementación se deben a eso, o sea, a lo dificultoso del proceso en sí mismo. A pesar de que nuestro mandato era evaluar esta implementación, es difícil echarle la culpa -por decirlo de alguna manera- de forma responsable y argumentada a un factor o a alguna entidad en particular. Lo que se ve es un proceso tan sumamente complejo que supera en buena parte la capacidad, la habilidad y las herramientas a disposición del Estado chileno para hacer algo de este tamaño. Entonces, me gustaría dejarlo bastante claro respecto de nuestra conclusión.

También, como señalé al inicio de mi intervención, se observan muchas dificultades derivadas de la integración de la Nueva Educación Pública a la Ley General de Educación.

En ese sentido, me permitiré hacer una crítica a la ley. En ocasiones, la Ley de Educación Pública hace percibir que el sistema de educación pública estaría aislado o sería algo aparte, como una especie de universo paralelo al resto del sistema. A veces pareciera que el común de las reglas o de las preocupaciones sobre los instrumentos diseñados para que se apliquen al sistema educacional completo no aplicara en el sistema de educación pública. Aunque uno lo escucha más de las personas que participaron en la formación de la ley más que de la ley en sí misma, se observa una especie de voluntad secreta o no explícita en la norma –quizá, más bien un deseo- de que la educación pública no sea parte o no esté tan integrada al sistema. En particular, se nota respecto del aseguramiento de la calidad y, sobre todo, del rol de sostenedor de los servicios locales. En mi opinión, esas son las dificultades que existen a la hora de equilibrar lo pedagógico y lo administrativo. Es decir, siendo aún más claro, hay una expectativa de que este sostenedor no sea como los demás o, a lo menos, no haga más de lo que debiera hacer un sostenedor normal, sino que realice otras cosas, y la ley es muy clara al respecto.

La Ley General de Educación establece que los SLEP son un sostenedor, pero a veces parece que tuviéramos expectativas de que fueran otra cosa, y la ley no dice eso. Al parecer, esa tensión dificulta las expectativas respecto del sistema.

Y en esto de las expectativas, notamos algo muy interesante que, nuevamente, es un problema que uno podría esperar o considerar natural de la dimensión de la tarea que se está haciendo, que es algo que habló muchas veces el profesor Bellei al defender esta norma cuando se discutía, que es el nivel intermedio o la novedad del nivel intermedio.

Él siempre hablaba -espero no estar citándolo mal- de que el sistema chileno adolecía de la ausencia de un nivel intermedio, que sí tenían otros sistemas educativos y, por lo tanto, era muy importante crear los SLEP, porque iban a ser el nuevo nivel intermedio, que el sistema público chileno necesitaba.

Efectivamente, se creó este nivel intermedio, pero lo que hoy detectamos es una dificultad al conceptualizarlo; es decir, de aquí hacia arriba está el Ministerio de Educación, de aquí hacia abajo está el sostenedor y el establecimiento o de aquí hacia abajo está el establecimiento, y entremedio no había nada.

Hoy creamos algo, pero nos cuesta mucho, como sistema, pensar en este nuevo servicio y darle un espacio y atribuciones que no sean naturalmente entregadas al ministerio o a las escuelas.

Quizá, uno pueda hacer casi un paralelismo con los gobernadores regionales; es decir, al crear un nuevo espacio, uno tiende a replicar lo que ya conoce, pero en realidad las atribuciones que se le dan acá son distintas, y creo que, como sistema, no hemos resuelto muy bien cuál es el rol que juega.

En lo personal, creo que juega el rol de un sostenedor, pero, a veces, por toda la estructura que la ley crea alrededor de los SLEP, son más que un sostenedor, o solo el hecho de que sean servicios públicos los hace más que un sostenedor. Entonces, la pregunta es: ¿debe seguir cumpliendo el rol del sostenedor? ¿Debe buscar su propia escala o recrearla?

Y para que esto no parezca solo palabrería, quiero dar un ejemplo que salió directamente en las entrevistas y en los análisis: una persona que trabajaba en el servicio local, la primera vez que llamó a una escuela –el servicio se había incorporado recientemente- pidió una reunión sin decirle el tema sobre el cual iban a trabajar. Se juntaron, y cada uno, el director de la escuela y el SLEP, traía su tema.

El SLEP dijo: “Mire, yo tengo en tabla para esta reunión revisar la implementación del currículum en biología –no recuerdo bien el detalle- y también, algo muy importante, los nuevos lineamientos del servicio respecto a convivencia escolar.”. Y la escuela le contesta: “¡Chuta! Yo tenía en el temario los reemplazos de la profesora de inglés y el arreglo de las cañerías del techo.”.

Ese ejemplo, que es real y la situación textual, nos muestra cuáles son las expectativas de cada escuela respecto de su sostenedor, y las expectativas del sostenedor respecto a la escuela. Mientras que el SLEP iba en una postura en que lo primordial era lo pedagógico, que está muy bien, la escuela tenía una expectativa totalmente de gestión administrativa, que puede ser más similar a lo que uno ha visto en los DAEM municipales. Y es natural que exista esta dificultad o distinta comunicación, pero claramente debemos resolverla de alguna manera.

Me parece que la vía administrativa es posible; no creo que sea necesario un cambio en la ley, porque, a mi modo de ver, la ley es clara, pero sí debemos considerar estas diferencias de expectativas a la hora de entender cómo se está implementando este sistema, que es equivalente a decir que yo tengo una nueva estructura arriba, que no sé exactamente lo que hace ni lo que quiere, y lo que naturalmente le voy a imputar es lo que hacía mi antigua estructura, que no es necesariamente lo que la ley establece ni lo que se quiere empujar para un mejoramiento.

Por lo tanto, como pongo en la presentación, es muy importante que los SLEP logren desempeñarse en su propia escala, coordinarse y reordenarse junto con otros

actores del territorio, como el Mineduc, los municipios y los colegios, para encontrar su espacio ideal.

¿Cuáles fueron nuestras recomendaciones al consejo de evaluación respecto a la implementación de los servicios locales? Nosotros dijimos esta misma frase, y queremos que sea leída y no interpretada de otra manera. Lo que observamos fue que la dimensión de la tarea que están llevando la Dirección de Educación Pública y el Ministerio de Educación es tan grande, que va mucho más allá de problemas en la ley o de problemas de gestión; tiene que ver con las dificultades de llevar a cabo algo tan grande y complejo y, por lo tanto, adecuar –en ningún caso detener- la tasa de SLEP nuevos a implementar, que estaba establecida en la ley y que son 15 al año, adecuar esa tasa a la baja, podría ser beneficioso para el proceso.

Lamentablemente, esta recomendación no fue atendida por la mayoría de los consejeros, pero nosotros les hicimos ver que más tiempo implicaba, primero, algo clave, que es que las altas expectativas que todos -me atrevo a decir- tenemos de este nuevo sistema no se vean afectadas, disminuidas o dañadas por una implementación demasiado acelerada.

Creo que vale la pena apostar por este sistema, y si decidimos apostar por este sistema, hay que darle el tiempo para que las expectativas que tenemos no se vean decepcionadas solo por un tema de tiempo.

La experiencia adquirida por la Dirección de Educación Pública en la implementación sucesiva de los servicios es exponencial, y, por lo tanto, entre más tiempo y servicios vayan entrando, más capaz va a ser la Dirección de Educación Pública de implementar perfectamente.

Pero hay un tema que no se conversa ni se conceptualiza tan frecuentemente, que es que la Dirección de Educación Pública solo va conociendo los problemas de los SLEP en la medida en que van ocurriendo, porque no eran fáciles de predecir. Eso quiere decir que, en la práctica, conocemos los problemas de un SLEP que lleva uno, dos, tres y cuatro años, pero no sabemos los problemas que van a surgir en los SLEP que llevan cinco, seis o siete años. Tampoco podemos decir que los problemas de un SLEP de cinco o seis años van a ser exactamente los mismos que los del primer, segundo o tercer año. No sé si se entiende, pero quiero decir que los problemas de los SLEP futuros no son conocidos, y van a tener que ser administrados por la Dirección de Educación Pública y, por lo tanto, no es como materia pasada, materia olvidada; SLEP implementado, SLEP olvidado. Al revés, lo que uno ve es que el vínculo con la Dirección de Educación Pública y el trabajo que se requiere para orientar esos SLEP se mantiene de forma permanente y no necesariamente decreciente. Entonces, para cuidar los traspasos, el tiempo es un buen activo a considerar.

En tercer lugar, evitar el aislamiento en la educación pública es clave. Dar tiempo a las instituciones para adaptarse a este nuevo nivel es muy importante y hay mucho que aprender, sobre todo en el terreno, y es relevante que las distintas personas y actores entiendan cómo se inserta este nuevo nivel y no dejarlo a la buena de Dios, sino realmente meterse en la implementación y coordinación de cada una de las partes.

El cuarto punto tiene que ver con construir este nivel intermedio y reconocer las atribuciones para que no ocurra una desconexión demasiado grande entre el servicio y el colegio: las expectativas al sostenedor y las expectativas del sostenedor a su escuela.

Esa es la primera de nuestras atribuciones, que tiene que ver con hacer un informe de la instalación de los primeros servicios. Esa es la parte más extensa de la presentación.

Ahora me voy a referir a la segunda atribución especial que nos da la ley, que es la de evaluar integralmente a los servicios locales. El primer servicio local que fue

objeto de esta evaluación integral, inicialmente de manera piloto, fue Puerto Cordillera.

Lo que busca la evaluación integral es, de alguna manera, replicar, pero de mejor forma, la evaluación de orientación que hace la agencia a las escuelas, pero esto a nivel de sostenedor. Y se nos pide especialmente considerar los objetivos y prioridades establecidos en el plan estratégico local –lo que es muy bueno, porque permite acotar la acción de la agencia y su participación- y también la estrategia y acciones que contemple el Servicio Local de Educación Pública (SLEP). Es decir, permite que nos acotemos a la acción del mismo servicio.

Esta evaluación se realizó durante el año pasado, y a principios de este año tuvimos una reunión muy interesante con todos los jefes de los servicios locales y la directora de la Dirección de Educación Pública (DEP), en la cual hicimos la entrega formal del primer informe de la Agencia de Calidad a los servicios locales; fue una instancia muy positiva, ya que pudimos conversar del informe frente a todos los directores de los Servicios Locales de Educación Pública (SLEP) y bajar un poco la tensión de lo que implica una evaluación.

Me parece que fue realmente exitoso y muy positivo, el informe fue muy bien recibido por las comunidades y por la misma jefa del SLEP, por lo que creo que hay una cosa muy positiva en la implementación del sistema. A veces, uno se queda muy pegado en las cosas que no funcionan, pero esto funcionó y salió bien; era un instrumento que no se había utilizado nunca, que no existía en las leyes anteriores y que permite una aproximación de la Agencia de Calidad al nivel del servicio local.

Puede que haya variado el calendario de visitas, pero implica que este año, además de lo que ya hicimos en el Servicio Local de Educación Pública Puerto Cordillera, iremos a dos servicios más y, lo que es interesante, bastante providencial, es que justamente el día de hoy comenzó el trabajo en “terreno virtual” en el SLEP de Barrancas -era el siguiente SLEP a evaluar y justamente comenzaba hoy-, así que espero que sea muy exitoso y estoy feliz de compartir los resultados. Entiendo que es uno de los SLEP de preocupación de la comisión, por ello, una vez que tengamos los resultados estaré feliz de presentarlos.

Como pueden ver en la presentación, la ley establece un calendario bastante exigente, por lo que debemos ir evaluando a los SLEP a medida de que se van instalando.

Dimensiones de Evaluación. ¿Qué evaluamos? Evaluamos los cuatro ejes clásicos de los estándares indicativos de desempeño: liderazgo y visión estratégica territorial; apoyos a la gestión pedagógica; formación ciudadana, convivencia y participación; y gestión de recursos. Si alguno de ustedes conoce los estándares con los que se avalúan las escuelas, estos son parecidos, pero distintos porque estamos orientados a un sostenedor, no a un establecimiento.

Ese fue el informe del Servicio Local de Educación Pública Puerto Cordillera; no traje los resultados porque sería un poco como en otra escala comentar los resultados específicos de un SLEP, pero el informe está disponible en caso de que la comisión lo requiera.

Otros espacios de trabajo conjunto que hemos tenido con la educación pública -y aquí es donde me interesa reforzar más el punto- son los esfuerzos, a veces no tan vistosos, que ha hecho toda la estructura educacional para adaptarse a los nuevos servicios y para poder incluirlos dentro del sistema, y que no se vaya generando un sistema aparte, que es, en lo personal, mi mayor preocupación, es decir, que la educación pública no se vaya aislando del resto del sistema educacional, lo que sería algo no deseable.

¿Qué más ha hecho la Agencia de Calidad de la Educación respecto de los sostenedores? Ya les contaba del pilotaje en Puerto Cordillera, en la lámina de la

presentación está la portada del informe, y hoy comienza el trabajo en terreno en el SLEP de Barrancas, como ya les comenté.

Nosotros también hemos hecho bastantes cosas específicas para los Servicios Locales de Educación Pública (SLEP), por ejemplo, sistematizamos casi todas las iniciativas que tenemos para todos los colegios, como las mentorías, que son unas asesorías directas a los colegios por parte de los evaluadores en el contexto de la pandemia, y lo que hacemos con los servicios locales es entregarles un consolidado solo para ellos, una especie de valor agregado a cada uno de los SLEP en relación con otros sostenedores. En este caso, además de hacer mentorías que van apuntadas a los colegios, a los servicios locales les entregamos un consolidado de lo que ocurre en todas sus escuelas, es decir, en su servicio local.

También queremos felicitar y agradecer la colaboración de la Dirección de Educación Pública y de los servicios locales para la implementación del Sistema de Aseguramiento de la Calidad en la Educación Parvularia, que además se implementó en plena pandemia y fue bastante exitoso. La colaboración y gestión que se puede llevar a cabo con los servicios locales es realmente extraordinaria y facilita muchísimo el trabajo, porque los jardines infantiles dependientes de los servicios locales pudieron ser mucho más rápidamente integrados a la evaluación, lo que fue una gran colaboración que obtuvo muy buenos resultados en términos de gestión y que permite ver la ventaja de los SLEP frente a otros sostenedores un poco más dispersos, como las municipalidades.

Desde que se crearon los servicios locales, que fue previo a esta administración, los SLEP que están en régimen han recibido informes de resultados educativos especialmente diseñados. Lo mejor de esto es que los hemos ido mejorando, porque cada vez que los hacemos hablamos con los directores de servicio que están en régimen y les preguntamos qué es lo que más necesitan. El año pasado me parece que fue el SLEP de Barrancas con el que se hizo el piloto, ahora que también tenemos al SLEP Gabriela Mistral en la Región Metropolitana vamos a poder ir a otros servicios locales, pero, en ese momento, el SLEP de Barrancas era el más cercano y, por eso, lo hicimos ahí, lo que permitió mejorar bastante los informes y, sobre todo, orientar los informes de resultado exactamente a lo que los nuevos sostenedores necesitan, cosa que no se hacía antiguamente y es algo propio para los servicios locales.

Otra cosa que implementamos fue una plataforma de resultados educativos, básicamente un visor *web* de resultados específico para los servicios locales. Esto es bien especial, porque el sistema educacional chileno tiene como base la escuela y, por lo tanto, en general todo está entregado a la escuela como unidad, y el nivel de sostenedores es menos considerado. Entonces, cuando estos sostenedores aparecen, en el fondo, empiezan a requerir la información a nivel agregado, y lo que hicimos fue crear un visor de información específico para los directores de los servicios locales, que tiene su propia clave, donde pueden ver el panorama de los establecimientos de su dependencia y compararlos por distintas variables, como nivel socioeconómico, género, interanual, etcétera, lo que permite una posibilidad de explotar los datos disponibles muy superior a la que tienen otros sostenedores.

Esto fue especialmente diseñado para los SLEP, e hicimos una primera versión el año pasado y vamos a realizar otra una vez que tengamos datos nuevos; sin embargo, ha sido muy enriquecedor ver que se puede integrar y agregar valor a la gestión de los servicios locales aprovechando posibles sinergias entre lo que existe y lo que se está creando.

También está la aplicación llamada Localiza; un visualizador con información de categoría de desempeño, resultados Simce y visitas que incluye un filtro que permite visualizar los establecimientos a nivel de SLEP, lo que es bastante importante, porque en el caso de que un padre, una madre o un apoderado quiera ver los establecimientos de su SLEP, y compararlos, o en el caso de que quisiera elegir

un colegio y ver los resultados, pero solo quiere buscar dentro de la educación pública y de su territorio, lo puede hacer de manera mucho más simple y, con un filtro, puede identificar los establecimientos que pertenecen al Nuevo Sistema de Educación Pública (NEP).

Hemos realizado talleres de uso de datos para la mejora escolar, distintos tipos de talleres especialmente orientados a los equipos técnicos de cada SLEP. Eso también es algo que no hacemos usualmente con otros sostenedores, y que hemos podido probar con ellos, lo que ha sido muy positivo.

Asimismo, hemos conseguido un intercambio muy importante de información -espero que la comisión no considere esto demasiado pedestre para contarlo acá-; la agencia tiene muchísima información, muchísimos datos y desde hace mucho tiempo además y, por lo tanto, asegurar un muy buen flujo de datos entre los Servicios Locales de Educación Pública, la Dirección de Educación Pública y la Agencia de Calidad de la Educación era un objetivo clave que conseguimos hace poco de manera formal, lo que ha sido muy positivo.

También hemos podido compartir ciertos instrumentos, herramientas, con los equipos técnicos de los SLEP, lo que nos ha permitido mejorar el desarrollo profesional de nuestros propios funcionarios, haciendo una colaboración muy interesante.

Solo quería contar esto para mostrar que hay un lado muy positivo y muy potente de cómo esta nueva institucionalidad puede integrarse a la institucionalidad vigente, que hay muchas oportunidades, y que si uno mira debajo de la primera capa hay muchísimas oportunidades que se pueden aprovechar y se están aprovechando.

En ese sentido, necesitamos más ayuda y más fuerza para seguir aprovechando las oportunidades que nos da este nuevo actor en el sistema y hay que darle un poco de tiempo para que logre consolidarse bien.

26) La Jefa del Departamento de Normativa de la División de Fiscalía de la Superintendencia de Educación, señora Magdalena Badilla, y la Jefa del Departamento Fiscalización de Procesos Educativos de la División de Fiscalización, señora Daniella Maureira.

La señora **Badilla** expuso en la sesión 14ª[29], de fecha 14 de junio de 2021, de la siguiente forma:

Respecto del tema que nos convoca, debemos tener claro, tal como lo mencionaba el secretario ejecutivo de la Agencia de Calidad de la Educación, que la Superintendencia de Educación forma parte también del Sistema Nacional de Aseguramiento de la Calidad de la Educación, pero tiene un rol distinto al de la agencia, porque, de acuerdo con el artículo 48 de esta ley, se entrega a este organismo facultades para fiscalizar y revisar que efectivamente los sostenedores cumplan, por una parte, con la normativa educacional y, por otra, con utilizar los recursos fiscales que les son entregados a través de distintas subvenciones, en conformidad con la ley. Son dos facultades distintas y más adelante voy a explicar cuál es la importancia de hacer esta distinción.

Para efectos de esta exposición, solo nos vamos a referir a las facultades fiscalizadoras y sancionadoras. No obstante, la ley, en el artículo 49, entrega muchas otras facultades a esta institución; algunas, más operativas y, otras, más prácticas.

---

[29] El acta de la sesión, que contiene su exposición íntegra, así como las consultas de los diputados y diputadas y sus respuestas, pueden encontrarse en el siguiente link: https://www.camara.cl/legislacion/comisiones/sesiones.aspx?prmID=2902&prmIdTipo=2103.
Asimismo, la exposición que realizaron se encuentra disponible en el siguiente link: https://www.camara.cl/legislacion/comisiones/documentos.aspx?prmID=2902
El video de esta sesión puede encontrarse en http://www.democraciaenvivo.cl/

En definitiva, para acotar el tema que trata la comisión, solo nos vamos a referir a esos dos puntos.

También es importante hacer presente que la superintendencia puede actuar de oficio o también previa denuncia que haya hecho un particular o cualquier organización que forme parte del Sistema Nacional de Aseguramiento de la Calidad de la Educación. En este punto, es relevante hacer presente que al tratar la superintendencia de fiscalizar de manera autónoma y partiendo desde su propia voluntad, se crean los planes anuales de fiscalización que son un instrumento vivo, en el sentido de que no permanecen pétreos en el transcurso del año, sino que se van acomodando a las necesidades que se van presentando en el transcurso del tiempo. Por ejemplo, en este caso fue fundamental adecuar nuestros planes de fiscalización a la realidad que estamos viviendo con la pandemia por Covid, lo cual es tremendamente importante tener presente.

Como decía hace un momento, las tareas de la superintendencia son diversas, porque, por una parte, debe verificar el cumplimiento de las obligaciones educacionales de los sostenedores lo que implica una revisión en terreno -en este tiempo hay que hacerlo de manera remota- y una constatación de hechos. Voy a dar algunos ejemplos.

Normativa educacional de registros. Los establecimientos deben llevar registros de matrículas, asistencia y otros varios. En realidad, se trata de una norma muy pormenorizada y que conlleva muchas obligaciones para los sostenedores.

Medidas de higiene que en este momento han cobrado gran relevancia por el tema de Covid, para lo que hemos creado una circular especial respecto de la materia para asegurar la tranquilidad tanto de los componentes del servicio docente como de los estudiantes que forman parte de los establecimientos.

Otro ejemplo que puedo dar es la infraestructura de los colegios. Tenemos una legislación muy detallada de cuáles son las condiciones que tienen que cumplir los edificios en donde se instalen los establecimientos educacionales. Entonces, ahí seguimos hablando de normativa educacional.

Por otra parte, y no por eso menos importante, está la existencia y la obligación de un reglamento interno que regula las relaciones al interior del establecimiento del que se trate. Esos serían algunos ejemplos para no extender más la presentación.

En cuanto a la fiscalización de la rendición de cuentas, observamos que efectivamente el presupuesto fiscal entregado a la institución se haya destinado a fines educacionales, los cuales como están establecidos tenemos que verificar que los recursos se hayan utilizado en aquello que esté acotado en la norma.

También existen subvenciones especiales, como la SEP, en que tenemos que verificar que los recursos entregados a través de esta subvención se hayan utilizado en conformidad con lo que establezca esta norma.

Es importante señalar que la superintendencia, en razón de la facultad que le entrega la ley en cuanto a interpretar la normativa educacional, ha ido flexibilizando en el transcurso de la pandemia la utilización de los recursos que se entregan a través de esta subvención. Por lo tanto, esto ha ayudado a la comunidad educativa a llevar, de alguna manera, mejor la vuelta a clases y lo que se ha vivido durante todo este tiempo.

Aparte de las facultades de fiscalización a las que me he referido, la superintendencia tiene facultades sancionadoras que, en la práctica, se aplican posteriormente a la realización de un proceso administrativo regulado, que establece todas las instancias y los recursos para que puedan ser interpuestos por los sostenedores contra quien esté llevando adelante este proceso.

Dentro de las sanciones que por ley debemos aplicar, dependiendo de la naturaleza de la infracción que se haya cometido y constatado, tenemos la

amonestación por escrito, la multa, la privación temporal o definitiva de la subvención, la inhabilitación temporal o a perpetuidad para obtener y mantener la calidad de sostenedor y, la más grave, la revocación del reconocimiento oficial.

Es importante tener presente algo práctico. Cuando aplicamos una multa, estamos reduciendo el presupuesto con el que cuenta ese establecimiento para poder llevar adelante su proceso educativo. Por lo tanto, es complejo en ese sentido, porque afecta de alguna manera la comunidad educativa; en cualquier caso, esas son las facultades con que contamos. También es esencial señalar que estas sanciones se aplican siempre al sostenedor, no al director del colegio que cometió la falta ni al profesor, sino al sostenedor como responsable legal de los establecimientos.

Finalmente, quería hacer referencia a la ley N° 21.040 que crea el sistema de educación pública, en el cual estamos, como institución, muy interesados en que se desarrolle de una manera óptima, en concordancia y en coordinación con los distintos actores: el Ministerio de Educación, el Consejo de Evaluación del Sistema de Educación Pública, la Agencia de Calidad de la Educación, para obtener los mejores resultados. En ese plano, hemos tenido una buena sincronía con la DEP, incluso tenemos un convenio celebrado que nos ha permitido, en la práctica, compartir datos, experiencias y, sobre todo, actuar conociendo las acciones que están implementado los otros integrantes de este sistema.

Lo importante de aquella norma es que, además de las facultades que la ley orgánica le entrega a la Superintendencia de Educación, en su artículo vigésimo quinto transitorio entrega una facultad especial a la Superintendencia de Educación que consiste en la revisión del cumplimiento de las obligaciones de los convenios de transición.

Como les decía, es una facultad distinta, porque nos lleva a otra instancia diferente de lo que comúnmente estamos viendo. En este contexto, es de suma importancia tener claridad de que la celebración de estos convenios por parte del municipio, de los sostenedores, tiene lugar en dos fases, por decirlo de alguna manera.

En la primera fase se presenta una propuesta de un plan de transición que establece los pilares de cuál va a ser la forma en que se va a llevar a cabo este traspaso; se firma, y con posterioridad se celebra el convenio de ejecución del plan de transición previamente aprobado.

Aquí hay un punto esencial que, de hecho, fue una labor que implicó mucho trabajo por parte de los distintos departamentos de la Superintendencia de Educación, que dice relación con que la ley N° 21.040 señala expresamente que tenemos facultades para observar el cumplimiento de las obligaciones del convenio de ejecución del plan de transición, pero ¿tenemos facultades para poder verificar y revisar el plan de transición?

Después de un largo análisis, llegamos a la conclusión de que, en la medida en que el convenio de ejecución hiciera referencia al plan de transición, sí teníamos facultades para revisar dicho plan. Por lo tanto, entendemos, de acuerdo con esta interpretación, que dentro de nuestras facultades tenemos la posibilidad de revisar ambos instrumentos.

La señora **Maureira**. Para continuar específicamente respecto de las labores que ha realizado la Superintendencia de Educación, debo señalar que hemos tenido la oportunidad de revisar las sesiones anteriores.

Primero, precisar lo que concierne al traspaso. En el plan anual de fiscalización del año 2020 se dicta un programa específico-normativo -como explicaba Magdalena Badilla-, denominado Traspasos Nueva Educación Pública, que consideró diversos municipios que les voy a mostrar a continuación.

¿Qué fue lo que revisamos? Entendiendo que tenemos una facultad muy acotada, que corresponde a la fiscalización de los convenios de ejecución del plan de transición, facultad que nos entrega la ley N° 21.040, se solicita la entrega de información en virtud del artículo vigésimo primero de la misma normativa: los contratos de convenio vigentes, los inventarios de bienes muebles, los inventarios de bienes inmuebles y la nómina de personal. Consideremos que estas obligaciones son esenciales a efectos de resguardar la información que con la que debe contar tanto la Dirección de Educación Pública como los servicios locales, con el fin de un correcto y adecuado traspaso. También en los convenios de ejecución se establecieron distintas obligaciones de entrega de información; de igual modo, fiscalizamos dichas obligaciones.

El programa de fiscalización también contempla la fiscalización de que se haya designado una contraparte técnica en el municipio, a efectos de todo lo que sea referido al correcto traspaso; que se haya constituido la comisión técnica que se indica en los artículos transitorios de la ley N° 21.040, y también revisamos el Fondo de Apoyo a la Educación Pública, conocido como FAEP, particularmente porque los convenios de ejecución de los planes de transición, cuando se refieren a la entrega de transferencia de recursos, lo que hacen es derivar esta obligación a los convenios FAEP.

Por lo tanto, primero, fiscalizamos que se hayan hecho las adecuaciones a dichos convenios y que se hayan utilizado los recursos en los que se obligó el sostenedor municipal, con objeto del adecuado traspaso, que principalmente era pago de remuneraciones. Luego, revisamos en el programa de fiscalización que se haya pagado correctamente las cotizaciones y las remuneraciones, en muestras de profesionales de la educación. Finalmente, revisamos la entrega de un informe financiero al cual estaban obligados los sostenedores municipales para el traspaso.

Todas estas obligaciones fueron fiscalizadas en todos los servicios, por ejemplo, en el Servicio Local de Atacama y los municipios que lo componían. Asimismo, los servicios locales de Valparaíso, Colchagua, y Llanquihue.

A propósito de este punto, fue fundamental que Valparaíso no haya firmado el convenio de ejecución ni el plan de transición; por lo tanto, se nos limitaron las facultades de fiscalización respecto de ese municipio en particular. Como ya hemos señalado varias veces, una vez que tenemos facultades, solo podemos mirar el tema del traspaso cuando hay convenios de ejecución, por lo que este fue el universo de sostenedores que fueron fiscalizados en dicho programa.

¿Qué ocurrió? El programa aplicó para quince sostenedores. Eran dieciséis los que estaban en la muestra, pero hubo un sostenedor, el de Tierra Amarilla, que no entregó información. Esto es bastante relevante, porque se entiende que los municipios, una vez que traspasan el servicio educativo, ya no tienen obligación de responder a la Superintendencia de Educación, y por lo tanto consideran en algunos casos que no corresponde entregar información.

Por consiguiente, son relevantes las facultades que se otorgan a la Superintendencia de Educación respecto de las fiscalizaciones de este traspaso, por todas las necesidades que hay de resguardar el correcto cumplimiento de dichas obligaciones.

¿Por qué el programa se instruyó en noviembre? Porque durante el año 2020 se tuvieron las firmas de los primeros convenios de los planes de transición, de los convenios de ejecución, y en el mes de abril se dispuso la finalización de dicho programa.

Ahora bien, tenemos dos etapas de fiscalización: una original y una de seguimiento. En la etapa original, todos los municipios tuvieron observaciones, y en la etapa de seguimiento, que es cuando vamos a mirar que hayan corregido las obligaciones que se pueden enmendar, solo hubo uno que tuvo observaciones

subsanadas. ¿Qué significa esto? Que se derivaron instrucciones de procesos administrativos, los cuales conllevan la aplicación de las sanciones que Magdalena Badilla les señaló con anterioridad.

Entonces, mientras más acciones de fiscalización que realice la Superintendencia de Educación, mayor será el porcentaje de probabilidades de aplicar sanciones, que posteriormente se descontarán de la subvención, y en caso de no percibir subvención se persiga su cumplimiento en la Tesorería General de la República.

¿Cuáles fueron los cumplimientos? El 67% de los sostenedores entregó información al Ministerio de Educación sobre los miembros de la comisión técnica; el 60% de los sostenedores nombró la contraparte técnica, luego de haber firmado el convenio de ejecución, lo que nosotros considerábamos fundamental para efectos de un correcto traspaso; el 60% de los sostenedores acreditó acciones de coordinación con otros municipios pertenecientes al servicio local, obligación que se establece en los artículos transitorios; el 60% de los sostenedores entregó al Mineduc el inventario de bienes muebles, y el 53% de los sostenedores acreditó el pago efectivo del sueldo líquido del personal.

Entonces, esos fueron los cumplimientos del programa, en que hemos visto reflejado que efectivamente se resguardaron los derechos educacionales y los bienes jurídicos del traspaso, propiamente tal.

Por otra parte, ¿cuáles fueron los incumplimientos? El ciento por ciento de los sostenedores no entregó el informe financiero previo al traspaso, a pesar de que la obligatoriedad de entregar ese informe es fundamental para tener un panorama general respecto de cuál es la situación financiera del municipio en particular; el 73% de los sostenedores no entregó el inventario de bienes inmuebles, lo cual se relaciona mucho con las dificultades que ha habido en la regularización de los bienes inmuebles municipales y en todos los problemas que podrían conllevar para un correcto traspaso; el 73% de los sostenedores no entregó la información establecida en el convenio de ejecución, cuando así, podía ser distintos tipos de obligaciones, dependiendo de la naturaleza del convenio; el 67% de los sostenedores no realizó las modificaciones al convenio Fondo de Apoyo para la Educación Pública (FAEP), que también es uno de los pilares fundamental para contar con los recursos para el traspaso de los establecimientos educacionales, y, finalmente, el 60% de los sostenedores no acreditó el pago efectivo de las cotizaciones del personal, cuestión que es una de las principales problemáticas que se ha establecido en diversos sostenedores de establecimientos educacionales, no solo municipales, sino también en otros tipos de sostenedores.

Esos fueron los incumplimientos más reiterados respecto del programa de fiscalización, el cual -como ya señalé- se instala y se realiza específicamente para resguardar un correcto traspaso respecto de las funciones muy acotadas que tenemos en virtud de la ley N° 21.040 para poder ser garantes del correcto traspaso.

Después podemos enviar la información, pero, como ven en esta tabla, quisimos mostrar todas las acciones de fiscalización que ha realizado la Superintendencia de Educación. Más allá de la fiscalización del correcto traspaso del servicio educativo, creemos que es bastante relevante mostrar que así, como se puede fiscalizar a distintos tipos de establecimientos, se fiscaliza a los establecimientos educacionales, ya sea que su dependencia sea municipal, servicio local particular-subvencionado, particular-pagado y jardines infantiles.

Por lo tanto, acá se muestra un detalle de los años 2017-2018-2019 y 2020 por cada uno de los municipios que conformaron los servicios locales y cuando la fiscalización se realiza al servicio local, propiamente tal. En esta tabla y en la que viene, se muestran 5.415 acciones de fiscalización que se realizaron a establecimientos educacionales.

Al respecto, es importante señalar que zanjada la ley por los tribunales, la responsabilidad y el correcto funcionamiento del establecimiento educacional es del sostenedor, por lo que las multas se dirigen a la entidad sostenedora, pero se pagan a través del descuento de la subvención, lo que en un momento tenía lógica, porque estábamos en un sistema de aseguramiento de la calidad, que se crea en 2011 y la Superintendencia comienza a funcionar en el 2012.

En ese entonces, no había ley de inclusión, un sistema que pusiera fin al lucro, pero hoy tenemos una ley de inclusión que pone término al lucro en los establecimientos educacionales-subvencionados.

Para nosotros ha sido bastante complejo, por un lado, fiscalizar y hacer frente un poco a todas las solicitudes que nos llegan de fiscalización en diversas materias, no solo en traspasos de nueva educación pública, y, por otro, que es probable que cada acción de fiscalización pueda conllevar la aplicación de una sanción administrativa. Entonces, respecto de las acciones de fiscalización que se realizan, uno siempre tiene que mirar el impacto que generan en el propio sistema educativo y los recursos que no llegan a sus destinatarios principales, que, en este caso, son los niños, las niñas y los adolescentes.

En la siguiente lámina seguimos con el detalle. Nosotros vamos a enviar la presentación, para que puedan tener conocimiento de todas las acciones que ingresaron por denuncias, las de programas de fiscalización normativa, las de programa de fiscalización de recursos y de otras acciones de fiscalización.

Luego, también hay otras acciones que ha realizado la Superintendencia. En particular, voy a mencionar brevemente cuáles han sido las principales y que han tenido un impacto en todo lo que dice relación con el correcto traspaso.

En primer lugar, se señaló por parte de las consejeras del Consejo de Evaluación del Sistema de Educación Pública señalaron que las facultades para poder perseguir a los municipios luego de traspasado el servicio educativo, la verdad es que la Superintendencia no tenía facultades. A través del dictamen N° 44, que está publicado en nuestra página web de 2018, tuvimos que hacer una interpretación sobre cuál era la responsabilidad que correspondía a los municipios y a los servicios locales, porque está instalada la idea de que el municipio traspasa el servicio educativo y que luego se puede desentender de todas las obligaciones que conllevaron su administración.

Lo que hace este dictamen es señalar que el sostenedor municipal es responsable por todos los hechos realizados durante la administración de los establecimientos educacionales. Esto es particularmente importante en el uso de los recursos, porque -como ustedes saben- la rendición de cuentas se realiza hasta el 31 de marzo del año siguiente, luego se activan los procesos de fiscalización de la Superintendencia y se llega a la fiscalización de los recursos, lo que se puede dar temporalmente cuando ya el sostenedor entregó el servicio educativo.

Como servicio, interpretamos en este dictamen, apuntando a la importancia de los traspasos y de acotar la responsabilidad de los servicios locales y de los municipios, que dicha obligación seguía al sostenedor del establecimiento educacional. Claro, aplicamos una sanción, pero ya no hay subvención donde se pueda ejecutar, por lo que esta se tiene que ejecutar directamente a la Corporación Municipal o al municipio propiamente tal. Entonces, ahí también un problema ligado a lo que señalaban las consejeras en las sesiones 9 y 10, en cuanto a que la responsabilidad de los municipios está bastante diluida en los artículos transitorios, y si no firman un convenio de ejecución, por ejemplo, es bastante difícil perseguir alguna responsabilidad ante la falta de entrega de información.

También hemos estado en coordinación con la Dirección de Educación Pública (DEP) en varias instancias; por ejemplo, en la firma de un convenio de colaboración, en la cual la información que ellos tenían la compartimos y viceversa,

con el objeto de hacer más fluido el tema del traspaso pedimos a los sostenedores la información que no teníamos disponible, generando una red para tenerla. Asimismo, hemos trabajado en proponer mejoras a los convenios de ejecución. Si bien los convenios que se firmaron establecen obligaciones para los sostenedores municipales, desde el punto de vista de fiscalización también hay una mirada en cuanto a verificadores o a precisiones que creemos importantes de realizar.

La Superintendencia también realizó mejoras a la plataforma de rendición de cuentas. Nosotros creemos que es importante haber adecuado la plataforma, pues es una acción que se realizó para poder recibir la rendición de cuentas de los servicios locales. Son bastante importantes todas las acciones que se han realizado respecto de la rendición de cuentas, porque se crea el servicio local como un organismo que puede rendir.

Por otra parte, también se adecúa la planilla de remuneraciones, porque está adecuada solo a las corporaciones municipales y estaba adecuada a los sostenedores Dirección de Educación Municipal (DEM).

Los servicios locales parten con un saldo acreditado cero, por lo que los saldos que quedaron respecto de los municipios se cargan al municipio. Al respecto, es importante señalar que esa información ya se está trabajando en conjunto con el Ministerio de Educación para las posibles restituciones que se puedan pedir a los sostenedores municipales.

Todas estas son acciones que se realizaron respecto de las mejoras a una plataforma, porque la Superintendencia evidentemente no podía decir o indicar que no se recibía la rendición de los servicios locales.

También se realizaron modificaciones a la plataforma Declaración del Sostenedor, para poder recibir la información. La declaración del sostenedor está regulada en la ley de subvenciones, la cual es bastante específica respecto de la información que los sostenedores nos deben entregar año tras año, particularmente, por ejemplo, respecto del directorio, de diversas obligaciones y de reglamentos internos. Hemos ido sumando una serie de documentos que se deben pedir para facilitar los procesos de fiscalización, y ahí se incluye a los servicios locales con todas sus particularidades.

Además, se establece el Plan Anual de Fiscalización en el cual consideramos programas específicos para enfrentar el tema del traspaso. A petición expresa del superintendente de Educación, se solicitó a este departamento incluir temáticas relativas al programa de fiscalización. Por cierto, este año se fiscalizará nuevamente a los sostenedores que participen con los servicios locales en 2022. En esos municipios también podremos realizar acciones de fiscalización respecto del uso de recursos, particularmente en aquellos que traspasaron el servicio educativo a los servicios locales.

Igualmente, tenemos un programa de fiscalización que va a observar ciertos recursos de 2019 y de 2020, para hacer una especie de cierre a los municipios que ya entregaron el servicio educativo y para hacer frente a la idea de que no podemos llegar a los sostenedores municipales, una vez que entregan el servicio educativo.

Asimismo, es clave hablar del modelo de fiscalización con enfoque en derecho y libertades fundamentales. Cuando nace la Ley de Inclusión Escolar, la Superintendencia debe reinventar su rol. Se crea un modelo de fiscalización que se enfoca en resguardar derechos educacionales y que tiene dos elementos centrales bastante impotentes: primero, la subsanación y la mejora continua y, segundo, la fiscalización sobre la base de principios de auditoría.

¿Por qué es relevante esto? Porque buscamos que los sostenedores subsanen lo que puedan, que corrijan ciertas obligaciones. Por eso, tenemos las etapas original y de seguimiento; por ejemplo, si vamos a una visita original en recursos, miramos los incumplimientos y luego informamos al sostenedor cómo lo

puede arreglar o subsanar. Eso es importante, porque propendemos a la mejora continua. A través de las fiscalizaciones buscamos que los sostenedores no incurran nuevamente en incumplimientos, por lo tanto para nosotros es relevante que los sostenedores puedan subsanar. Para ello, hemos hecho difusión a través de programas de fiscalización, por medio de comunicados internos y externos, para relevar el rol que tiene la subsanación en el Sistema de Aseguramiento de la Calidad, como también en el resguardo de derechos educacionales.

Asimismo, la Superintendencia ha sido pionera en establecer las metodologías de determinación de muestra, porque -como señaló el contralor en su presentación en esta comisión- trabajamos en base a sistemas de muestra. De esa forma, los sostenedores de establecimientos educacionales deben cumplir alrededor de 2.800 obligaciones. Hicimos un catastro durante varios años para ver cuáles son las obligaciones que debían cumplir. Por su parte, la Superintendencia fiscaliza 12.000 establecimientos educacionales y 6.000 jardines infantiles, y aproximadamente 5.400 sostenedores perciben subvención. Es el organismo regulador más grande del país. Por lo tanto, debemos priorizar, porque, lamentablemente, no podemos fiscalizar todo. Nos gustaría llegar a todos los establecimientos y a todas las obligaciones, y en esa línea el plan anual es la carta de navegación que prioriza las obligaciones que vamos a fiscalizar.

Por eso, en 2021, a petición del superintendente, se prioriza el tema del traspaso y de los municipios, pero los sostenedores de servicios locales pueden caer dentro de una muestra de fiscalización, por un programa de admisión, de reconocimiento oficial, de recurso SEP, si ellos, a través del sistema *machine learning* o por sistemas aleatorios, son detectados como riesgosos. Dicho sistema prioriza las fiscalizaciones sobre la base de riesgos y hace mucho más certero determinar a quiénes vamos a fiscalizar, porque -como señalé- no podemos fiscalizarlos a todos. Es importante ver cómo la superintendencia se ha ido adecuando a las diversas tecnologías que hoy nos permiten ser mucho más certeros en nuestras muestras de fiscalización.

Durante 2020, la superintendencia adecua sus fiscalizaciones a una denominada fiscalización remota o administrativa, lo que implica que dicha entidad realiza fiscalizaciones respecto de las cuales no concurre al establecimiento educacional y pide la información a través de la plataforma electrónica denominada SIE Cloud. De modo que esa fiscalización se realiza desde las oficinas y ahora desde las casas de los fiscalizadores en este período de cuarentena. Alrededor del 90% de las fiscalizaciones se realiza de manera remota y solo cuando debemos concurrir al establecimiento educacional vamos. Por ejemplo, el programa sobre medidas de higiene, uno de los hitos que se nos ha solicitado fiscalizar este año, debe ser fiscalizado en terreno, por lo cual debemos constatar *in situ* que estén las condiciones sanitarias. Todo lo concerniente a la revisión documental y al uso de recursos, esos programas se realizan sobre la base de una fiscalización remota. Significó cambiar la lógica de fiscalización y adecuarse en este contexto, pero también nos permitió realizar y ejecutar el programa de fiscalización de traspaso a la nueva educación pública. Sin duda, eso también es un hito, por lo tanto este año seguiremos fiscalizando de esa forma y adecuándonos aún más a esa implementación.

Finalmente, en relación con el informe para el Consejo de Evaluación del Sistema de Educación Pública, durante febrero de 2021 la Superintendencia trabajó, a través de diversos departamentos, en la entrega de toda la información que requería dicho consejo, a saber las acciones de fiscalización y las mejoras a los convenios. De hecho, un resumen de lo que les estoy mostrando en esta oportunidad se elaboró sobre la base de ese completo informe sobre todas las acciones de fiscalización y de otro tipo en general realizadas por la superintendencia.

En la siguiente lámina, ustedes pueden observar que el Plan Anual de Fiscalización fue aprobado el 30 de diciembre de 2020, incluso con anterioridad a

estas sesiones. Ahí también se consignan dos programas, uno de los cuales tiene que ver con “Establecimientos Educacionales Traspasados a SLE, recursos 2019-2020” y que tenemos pronosticado emitir en agosto de este año, y el otro con “Traspasos Nueva Educación Pública (continuación)”, un trabajo de fiscalización que -como señalé- comenzó en 2020 y terminó en 2021 y que incluirá la nueva muestra de fiscalización de los programas, entendiendo la relevancia e importancia que tiene la correcta fiscalización de los traspasos.

Por último, en lo relativo a las propuestas de fortalecimiento de las facultades de la Superintendencia en el contexto de traspaso, es necesaria una mayor delimitación legal de la responsabilidad de los municipios en cuanto al traspaso de las obligaciones y a que el plan de transición y el convenio de ejecución sean obligatorios de firma, lo cual consideramos relevante para asegurar un correcto traspaso.

Respecto de la dotación de contenido de algunas obligaciones que están en la ley para realizar el programa de fiscalización, la verdad es que eso fue bastante complejo, atendidas las obligaciones y particularmente, por ejemplo, lo que se debe considerar por inventario de bienes muebles e inmuebles. Para nosotros es superimportante tener ese contenido, ya que se lo exigiremos a los municipios. Si exijo más allá de lo que establece la ley, llevan nuestras resoluciones y sanciones a revisión judicial. Por lo tanto, solo podemos actuar respecto del contenido de la normativa educacional. Por eso, es importante saber cuáles son las obligaciones establecidas y cuál es el contenido.

En cuanto a la resolución de traspaso del artículo vigésimo segundo transitorio, hay un plazo de dos meses. Consideramos que ese plazo debiera aumentarse, porque las resoluciones de traspaso son los documentos que establece la carta fundamental de los traspasos en cuanto a la dotación de personal, bienes muebles e inmuebles. En consecuencia, es importante tener ese marco para después verificar qué información se entregó, cómo se entregó y cuál fue el detalle.

Estamos muy de acuerdo con lo señalado por las consejeras de la Comisión de Evaluación, en cuanto a que la información que entregan los municipios es muy diversa, dispersa e incompleta, en algunas ocasiones. Por lo tanto, mientras más claridad haya desde la ley, desde los reglamentos que se deban dictar, desde las instrucciones de la DEP y desde lo que fiscalicemos podamos propender a que la mayor cantidad de información se entregue y que esa información sea la relevante y la concreta.

Entonces, eso haría conversar con el vigésimo primero transitorio, ese plazo de seis meses, que creemos que es importante para efectos de una correcta fiscalización.

En cuanto a los compromisos del sostenedor o los convenios de ejecución, como ya dije la firma del convenio obligatoria es esencial para efectos del correcto traspaso. También creemos que es importante tener claridad respecto de las fechas de instalación de los servicios locales y que van a traspasar el servicio educativo que permitan una mayor planificación de la fiscalización propiamente tal.

Sabemos que está en estudio, es cierto que hay un proyecto de ley que puede cambiar la fecha. Para nosotros, es relevante también poder contar con la mayor cantidad posible, porque como ustedes pudieron ver las diversas obligaciones que se fiscalizan requieren una planificación, pero también preparar a los fiscalizadores en materia nueva, para que ellos puedan fiscalizar estos establecimientos y estos municipios.

En cuanto a los Programas de Fiscalización Normativa y de Recursos año 2022, nosotros los hemos dispuesto como superintendencia para efectos de hacer pie a este traspaso y a lo complejo que entendemos que ha sido este proceso de instalación y que sabemos que va a seguir siendo.

Para finalizar, quiero transmitir las palabras del superintendente, en el sentido de que estamos comprometidos con el rol que nos corresponde respecto de la nueva educación pública. Sabemos lo relevante que es y estamos a disposición para todos los requerimientos que nos realicen tanto de información como de fiscalizaciones, y para aportar desde el rol fiscalizador, pero también desde el rol de acompañamiento que realiza la superintendencia respecto de un correcto y adecuado traspaso, y poder velar para que finalmente el Ministerio de Educación cuente con toda la información y que también los servicios locales y la Dirección de Educación Pública tengan todos los insumos necesarios para garantizar este traspaso.

27) La Directora Ejecutiva del Servicio Local de Educación Pública de Llanquihue, señora Claudia Trillo Molina.

La señora **Trillo** expuso en la sesión 15ª[30], de fecha 5 de julio de 2021, de la siguiente forma:

Para entender el contexto y conocer el territorio que abarca nuestro servicio, lo que muestra la primera diapositiva corresponde a los 84 establecimientos educacionales ubicados en las comunas de Puerto Varas, Fresia, Frutillar, Los Muermos y Llanquihue. Esto comprende 70 escuelas, 14 jardines infantiles, 1.800 funcionarios, entre docentes y asistentes de la educación, y 12.000 estudiantes.

Quiero contarles cómo ha sido este proceso de instalación de nuestro servicio local. El año 2019 vivimos el proceso de instalación en todas las etapas que señala la ley, las que se concretaron a cabalidad durante todo el proceso. Ese mismo año, tuvimos un proceso que llamamos “proceso de anticipación”, donde el hito más relevante fue la constitución y elección del comité directivo. Posteriormente, en 2020, vivimos el proceso de habilitación del servicio local de educación pública, en el que destacó el nombramiento de la directora ejecutiva, los nombramientos de los segundos niveles jerárquicos, los concursos cerrados, los concursos abiertos, la elaboración del presupuesto del Programa 01 y del Programa 02, junto con la instalación de oficinas y todo lo relativo a la instalación del servicio local. Pero lo más importante fue el traspaso de los bienes muebles e inmuebles y de todos los funcionarios, asistentes de la educación y docentes del Programa 02 de cada uno de los establecimientos educacionales.

A partir del presente año -también en pandemia-, desde el 1 de enero de 2021, hemos estado a cargo en calidad de sostenedores. En ese escenario, iniciamos las clases el 8 de marzo, hicimos el primer pago de remuneraciones como corresponde y elaboramos una cartera importante de proyectos que empezamos a trabajar durante el proceso de habilitación de 2020, donde hicimos un diagnóstico y un diseño. Actualmente, nos encontramos en la etapa de ejecución de algunos proyectos de infraestructura.

Los hitos más importantes de nuestra vinculación y de nuestro trabajo con los actores clave se concretaron durante los años 2020 y 2021, se realizaron numerosas reuniones y vinculaciones con actores clave, como lo es el Colegio de Profesores, con quienes hemos sostenido 8 reuniones hasta la fecha y hemos llevado a cabo mesas de trabajo conjuntas, al igual que con las funcionarias VTF, con quienes nos hemos reunido en 13 ocasiones; 8 reuniones en 2020 y 5 en 2021; y con la Confemuch, hemos concretado 22 reuniones durante 2020 y 2021.

---

[30] El acta de la sesión, que contiene su exposición íntegra, así como las consultas de los diputados y diputadas y sus respuestas, pueden encontrarse en el siguiente link: https://www.camara.cl/legislacion/comisiones/sesiones.aspx?prmID=2902&prmIdTipo=2103.
Asimismo, el documento que dejó a disposición se encuentra disponible en el siguiente link: https://www.camara.cl/legislacion/comisiones/documentos.aspx?prmID=2902
El video de esta sesión puede encontrarse en http://www.democraciaenvivo.cl/

Es importante relevar el trabajo que se ha hecho en conjunto con la DEP para realizar el traspaso del servicio educativo y la estrategia de vinculación que hemos hecho con las distintas comunidades educativas referente a la preparación para el inicio del año escolar, mediante la formulación de una mesa de trabajo covid el año 2020 –pese a que aún no éramos sostenedores- que nos permitiría realizar la apertura de los establecimientos educacionales y que contó con la participación de apoderados, de la Junaeb, de los servicios de salud, de equipos de gestión y desarrollo territorial, entre otros.

También es importante destacar el trabajo que ha hecho nuestro equipo de gestión territorial y de apoyo técnico pedagógico, que son dos unidades, dos brazos armados, que están en los establecimientos educacionales en terreno, los cuales resultan ser claves para el acompañamiento de los establecimientos. Del mismo modo, destacamos el trabajo del año pasado de la unidad de participación que consideró a todas las comunidades educativas, desde la educación parvularia hasta los liceos, en lo referente a la elaboración de nuestro primer plan anual, actualmente en vigencia.

Asimismo, de acuerdo con lo que la ley establece, nos encontramos trabajando en nuestro Plan Estratégico Local y en la creación de nuestro Consejo Local de Educación. También es importante relevar el trabajo realizado con los consejos escolares, al igual que la creación de los consejos escolares de educación parvularia, que aún no estaban generados, pero con la implementación de la ley podemos mencionar los 14 jardines infantiles VTF que tenemos en nuestro territorio y destacarlos por su participación.

En lo que respecta a cómo poblamos el servicio local, cabe señalar que es muy importante considerar que la ley N° 21.040 establece cómo debe ser el poblamiento a través de las distintas fórmulas que permiten el ingreso de funcionarios. Actualmente, de los 150 funcionarios que provenían de los 5 DAEM, 55 cumplían con lo que menciona la ley sobre haber estado contratados al 30 de noviembre de 2014.

Por consiguiente, dimos apertura a los concursos cerrados, lo que se tradujo en que hoy tengamos 15 funcionarios que han entrado a nuestro servicio local por esta vía. Asimismo, 11 funcionarios fueron traspasados a través del estatuto docente. Como vemos en la presentación, es importante destacar que se señalan los cupos asignados, de los cuales 11 fueron utilizados por los alcaldes.

Debemos destacar que el 42 por ciento de los funcionarios que hoy realizan funciones en el SLEP Llanquihue del programa 01 pertenecía a los antiguos DAEM. Estos traspasos fueron posibles considerando el nivel que tenían, el conocimiento del territorio y su experiencia.

En relación con el índice de calidad de infraestructura, es decir, cómo encontramos los establecimientos que hemos recibido, es importante señalar que hoy tenemos un porcentaje de deterioro del 49,8 por ciento. Como pueden ver, tenemos entre un 20 y 60 por ciento de deterioro en el 72,9 por ciento de los establecimientos y más del 60 por ciento de deterioro en el 27,1 restante. Es en este 27,1 por ciento donde enfocamos nuestro trabajo y en donde tenemos las principales inversiones y los proyectos de mejoramiento.

El énfasis del período 2021-2022 apunta a un monto de inversión estimada para dicho período de 9.300 millones. Al respecto, es fundamental señalar dos factores relevantes. Primero, en lo referente al tema que tomaron sobre reconocimiento oficial de jardines infantiles, efectivamente recibimos 14 jardines infantiles sin reconocimiento oficial, por lo que estamos haciendo las acciones que debieron haber hecho los municipios, que es invertir en educación inicial, mejorar las condiciones para la obtención del reconocimiento. Es así como nos hemos puesto una meta como servicio, ya que hoy tenemos una importante inyección de recursos destinados al mejoramiento de la infraestructura, que es el principal nudo crítico que

tienen nuestros jardines para la obtención de este reconocimiento oficial que brinda las condiciones mínimas que debe tener un niño o niña para su educación y formación inicial y para permanecer en el tiempo.

Este esfuerzo se está canalizando mediante la focalización de nuestros jardines infantiles para obtener el reconocimiento oficial y las intervenciones señaladas en el cuadro que ven en sus pantallas apuntan en esa línea; por lo tanto, como pueden ver, una de las metas importantes es precisamente obtener dicho reconocimiento.

También quiero destacar la apertura de los establecimientos y señalar que hoy tenemos el ciento por ciento de nuestros establecimientos abiertos y dispuestos a recibir a nuestros estudiantes. En el gráfico pueden apreciar cómo ha evolucionado la asistencia presencial por comuna.

Por ejemplo, en abril se observa una baja en la comuna de Frutillar, pero eso se debe a que no hubo clases presenciales debido a la cuarentena; sin embargo, pueden ver cómo ha ido evolucionando positivamente la asistencia de nuestros niños y niñas a partir de marzo, llegando en junio a una presencialidad del 70 por ciento.

Respecto de la asistencia presencial urbano/rural, en el gráfico vemos que hay una diferencia en la que se destaca la asistencia a clases de nuestros niños en la ruralidad.

También destaco el trabajo que ha hecho el Servicio Local, sobre la base de lo que se toma del pago de remuneraciones. En este sentido, a partir de marzo, y con efecto retroactivo, pagamos encasillamiento y bienios a todos los asistentes de la educación, incluidas las trabajadoras de jardines VTF, y, por supuesto, esto es un incremento en sus remuneraciones.

Eso es un trabajo importante que ha hecho este servicio, cual es el reconocimiento de la ley y la plena vigencia del Estatuto de los Asistentes de la Educación, que entró en completa armonía con su pago de remuneración. Hicimos ese trabajo en los meses de marzo y abril, para poder pagar encasillamientos y bienios, y lo hemos pagado de manera retroactiva, que, sin duda, significa un incremento en las remuneraciones.

En relación con los recursos de jardines VTF, efectivamente, son acotados. Sin embargo, como Servicio Local tenemos un fondo de apoyo a la educación pública, que, según la ley, puede utilizarse en los jardines VTF. Así, también lo hemos establecido en nuestro presupuesto de 2021, donde inyectamos recursos para los jardines VTF, que son acotados, pero, a través de ese financiamiento de FAEP, se pueden utilizar en estos jardines, y así lo estamos haciendo.

Por otra parte, el artículo 39 transitorio de la ley N° 21.040 establece que es posible traspasar, sin solución de continuidad, contratos de las personas que estén ejerciendo labores de gestión pedagógica, acompañamiento técnico-pedagógico, que desempeñen cargos en los departamentos de Administración Educación Municipal, y ese artículo 39 transitorio establece una cantidad de cupos que, un año después de promulgada la ley, es informada por los respectivos alcaldes, y ahí se fija la cantidad de personas contratadas bajo Estatuto Docente en los DAEM. Por eso hablé de los cupos que fueron declarados en su momento, durante 2018, y así fueron utilizados.

Al respecto, quiero mostrarles una tabla donde Los Muermos, por ejemplo, tenía 7 cupos, pero no los utilizaron en su totalidad. Sin embargo, la mayoría de las cinco comunas utiliza esos cupos que, insisto, corresponden a personas que se traspasan sin solución de continuidad, porque tienen un contrato bajo Estatuto Docente en los DAEM; no desempeñan funciones en los establecimientos educacionales, sino en los DAEM. Por lo tanto, como colaboradores de nuestro programa 01, pasan a formar parte de la administración, como servicio local, y ahí se encuentran realizando funciones.

Con lo anterior, aclaro el punto respecto de estos cupos que mencioné. Son los alcaldes quienes envían la información sobre quiénes son las personas contratadas bajo esa calidad contractual, lo cual se comunica y es transferido en la resolución de traspaso, sin solución de continuidad. Efectivamente corresponde a lo que estipula la ley, y se traspasan al servicio local, sin solución de continuidad. Son los alcaldes quienes dan los nombres de las personas contratadas bajo esta forma.

Ahora bien, respecto de la consulta acerca de la sobredotación de docentes o de asistentes de la educación, quiero señalar que no hemos hecho ningún tipo de desvinculación masiva ni mucho menos. Lo que hicimos fue trabajar la sobredotación que tenían, en conjunto con los municipios, lo cual es parte del convenio de transición firmado por los alcaldes. Entonces, ellos resolvieron que algunas horas no debían ser traspasadas al servicio local por temas de sobredotación. Lógicamente, debemos ajustar y hacer que el sistema se financie, porque tenemos un presupuesto, y debemos ajustarnos a lo que indica el plan de estudios y a las necesidades de los establecimientos educativos.

En cuanto al punto de infraestructura, como mencioné, tenemos un diagnóstico; desde el año pasado hemos trabajado en esto -fue muy rápida mi presentación- indicando cuál es el nivel de deterioro que tenían los establecimientos. Como es un tema importante, hemos puesto énfasis en esa área.

El año pasado tuvimos cerrados los establecimientos, prácticamente sin ningún tipo de mantención por parte de los respectivos DAEM, y hoy, para aperturar nuestras escuelas, requerimos una inversión importante. Por eso, nos encontramos incentivando el uso de recursos en estas líneas.

También se está trabajando en temas de ajustes. Es lo mismo que dijo la directora nacional, en cuanto a que los planes anuales de desarrollo de la educación municipal tienen la misma figura, y actualmente los planes anuales se trabajan en conjunto para establecer la necesidad, en relación con la matrícula y con los planes pedagógicos de la dotación de cada uno de los establecimientos. Ese es el trabajo que hicimos el año pasado, un plan anual, sin el Plan de Desarrollo de la Educación Municipal, porque hoy estamos trabajando con el Padem que hizo cada uno de los municipios, y este año nos corresponde elaborar nuestro propio plan anual.

28) La Presidenta de la Federación VTF de la Región de O'Higgins y miembro de la Central Nacional de Asistentes de la Educación Pública (CNAEP Chile), señora Pilar Ibaceta Garrido y la trabajadora de Jardines Infantiles VTF, señora Sandra Umanzor.

La señora **Ibaceta** expuso en la sesión 15ª[31], de fecha 5 de julio de 2021, de la siguiente forma:

En nuestra presentación hablaremos de la implementación de los diferentes servicios locales de todo el país. Financiamiento. La implementación de la ley no contempla una inyección importante de recursos, desde una decisión y voluntad del Estado, para que una nueva educación pública funcione.

Incertidumbre laboral. En la actualidad, para el funcionamiento de los jardines infantiles, se aplica el decreto N° 315, que establece un coeficiente para atender a los párvulos, pero se crea una incertidumbre, dado que se aplicará el decreto N° 241, que modifica el coeficiente de adulto por niño y niña, por manual de transferencia de fondo.

---

[31] El acta de la sesión, que contiene su exposición íntegra, así como las consultas de los diputados y diputadas y sus respuestas, pueden encontrarse en el siguiente link: https://www.camara.cl/legislacion/comisiones/sesiones.aspx?prmID=2902&prmIdTipo=2103.
Asimismo, la exposición que realizaron se encuentra disponible en el siguiente link: https://www.camara.cl/legislacion/comisiones/documentos.aspx?prmID=2902
El video de esta sesión puede encontrarse en http://www.democraciaenvivo.cl/

Graves errores administrativos. Existe un perjuicio en cuanto a materiales, infraestructura y mantención de los establecimientos. Los funcionarios ingresan con carpetas incompletas y su relación contractual, a la fecha, no ha sido suscrita por su nuevo empleador (Código del Trabajo).

En algunos servicios aún no se homologan remuneraciones, pago de bienios y bono de desempeño laboral, de acuerdo con el Estatuto de los Asistentes de la Educación. A la fecha, las funcionarias de los jardines VTF (SLEP) del país, han sido marginadas de los beneficios del reajuste al sector público. En algunos lugares aún no se implementan los servicios de bienestar.

Educación inicial invisible. Se ha excluido a la comunidad educativa del plan anual de SLEP. Además, faltan programas de capacitación en trabajo con niños con necesidades educativas especiales, bases curriculares y un marco para la buena enseñanza.

Asimismo, son traspasadas con el mismo sistema de financiamiento para los jardines infantiles VTF. (75 por ciento de asistencia para alcanzar el ciento por ciento de la subvención traspasada). En su gran mayoría, los establecimientos, tanto salas cuna como jardines infantiles, son traspasados sin reconocimiento oficial y sin recursos para obtener el RO.

Se encuentran en funcionamiento los servicios locales de Barrancas, Puerto Cordillera, Huasco, Costa Araucanía, Gabriela Mistral, Andalién Sur, Chinchorro, Atacama, Valparaíso, Colchagua y Llanquihue.

Nuestras propuestas: Detener el proceso del traspaso; establecer un sistema de financiamiento basal, en igualdad con Junji e Integra; desagregar la ley N° 21.109, Estatuto de los Asistentes de la Educación Pública, de creación de los SLEP, ley N° 21.040, y, por último, que los beneficios establecidos en la ley N° 21.109, se reciba con o sin traspaso, a las funcionarias de los jardines vía transferencia de fondo.

Hemos tenido mucha información en cuanto a que el Servicio Local de Educación Pública de Llanquihue ha sido uno de los servicios locales mejor implementado a la fecha a nivel nacional y al respecto no hay nada que discutir. Sin embargo, en el caso de los servicios locales de Barrancas, de Puerto Cordillera y de Huasco, tenemos conocimiento de que han tenido problemas para su implementación, puesto que, a la fecha, a sus funcionarias no se les han pagado algunos beneficios laborales que han adquirido como corporación. Dichos servicios locales han tenido grandes problemas en su implementación, no así el de Llanquihue, que -como se ha manifestado- ha sido realmente la joyita de los servicios locales. Muchos de la zona norte, otros de Santiago, como el de Puerto Cordillera, y el de Costa Araucanía han tenido problemas en su implementación.

En consecuencia, de todos los servicios locales implementados a la fecha, solo el de Llanquihue se destaca, porque los restantes han tenido múltiples problemáticas tanto con los trabajadores como con el reconocimiento oficial y el traspaso de algunos beneficios laborales a sus trabajadoras.

La señora **Umanzor**. Como trabajadoras de jardines VTF, vemos con harta incertidumbre el traspaso a los servicios locales de educación pública, principalmente, porque vemos que no hay un cambio del paradigma de la educación inicial, sobre todo de los jardines VTF. Esta modificación afecta solo a los jardines VTF; los Junji y los Integra siguen con su programa de forma normal. Nosotros, en cambio, nos traspasamos a esto, pero seguimos con el sistema de *voucher*.

La diferencia entre el valor párvulo de un niño Junji e Integra es abismal. Ustedes saben que existe alrededor de un 30 por ciento de diferencia entre el valor de un Junji y un Integra.

Lamentablemente, al irnos al sistema de los servicios locales, no contamos con la inyección de recursos que daban las municipalidades. Actualmente, el déficit

que tiene el programa VTF es asumido por las municipalidades, por las fundaciones o por las corporaciones de educación. Sin embargo, una vez traspasados a los servicios locales, no pierde ese apoyo financiero.

Otra gran preocupación es la estabilidad laboral de las funcionarias, con la aplicación de un nuevo decreto de coeficiente técnico. Eso ya se está viendo en los otros servicios locales. Nosotros no queremos vivirlo, como Cachapoal Costa. Esa es nuestra gran preocupación como trabajadoras.

Otro aspecto que nos preocupa es la falta de capacitación para poder aplicar las nuevas políticas educativas, sobre todo en los jardines VTF. Entonces, nos vemos en desmedro respecto de los otros programas educativos, como son Junji e Integra. Seguimos con un sistema de financiamiento, a través de asistencia, respecto del cual se necesita sobre un 75 por ciento, del ciento por ciento, que no alcanza para cubrir todas las necesidades que tienen los jardines infantiles, lo que tiene muy preocupadas a las trabajadoras.

Además, vemos que, al menos en la Región de O´Higgins, de los 99 jardines infantiles, 15 necesitan reposición total, pero no hemos visto ninguna solución ni propuesta respecto de dónde saldrán los recursos para esos establecimientos. Asimismo, tampoco sabemos qué va a pasar con esas trabajadoras, en este instante.

En cuanto al reconocimiento oficial, más o menos, el 40 por ciento de los jardines está trabajando para obtenerlo.

Sabemos que la ley debe aplicarse, pero creemos que debe haber un cambio en la forma de financiamiento de los jardines infantiles VTF. Debemos buscar otras fórmulas de financiamiento, ya que nuevamente estamos invisibilizados en los servicios locales, en cuanto a nuestras realidades y necesidades. Necesitamos un estatuto que asuma realmente las particularidades que tienen nuestro programa educativo y nuestras funcionarias.

Tampoco quedan claros algunos beneficios legales, como los derechos a sala cuna, ni la forma en que se están implementando en los nuevos servicios locales de educación pública.

Los beneficios considerados para nosotros en el estatuto de los asistentes de la educación son casi nulos, ninguno. Nuevamente, somos invisibilizadas como trabajadoras en un estatuto que no da respuesta a ninguna de nuestras reales necesidades, de modo que esa es nuestra gran preocupación. Creemos que debería existir un sistema de educación inicial único que contemple las particularidades que tiene nuestro programa, que es muy diferente al de la educación básica y media. Todavía existen trabajadoras que se desempeñan laboralmente durante 40 o 45 horas semanales. En consecuencia, queremos un estatuto y una educación pública que recojan las particularidades y las necesidades de la educación inicial.

29) El Presidente de la Federación Nacional de Asistentes de la Educación (FENADEP) y miembro de la CNAEP Chile, señor Miguel Gaete de la Fuente, el Presidente de la Federación Nacional de Sindicatos de Trabajadores de Corporaciones Municipales de Educación (FENASICOM) y el Presidente de la CNAEP Chile, señor Enrique Dayne Hidalgo.

El señor **Gaete** expuso en la sesión 15ª[32], de fecha 5 de julio de 2021, de la siguiente forma:

---

[32] El acta de la sesión, que contiene su exposición íntegra, así como las consultas de los diputados y diputadas y sus respuestas, pueden encontrarse en el siguiente link:
https://www.camara.cl/legislacion/comisiones/sesiones.aspx?prmID=2902&prmIdTipo=2103
El video de esta sesión puede encontrarse en http://www.democraciaenvivo.cl/

Reconozco y valoro el trabajo profesional y político que han realizado en estos meses, pues, aun respondiendo fielmente a un mandato acotado, han dado lugar a espacios de opinión situados más allá del marco de la investigación, lo que se traduce en un enriquecimiento del debate, con aportes efectuados por diversas unidades, para encauzar definitivamente a la nueva administración de la educación pública hacia los nobles fines contenidos en el espíritu de la ley N° 21.040.

Por supuesto que se hace necesario responder a los 12 puntos contenidos en el Oficio N° 15.685, de 15 de julio de 2020, que refrendan los 65 honorables diputados y diputadas.

Respecto de los asistentes de la educación se ha generado una polémica, en cuanto habría sectores que aprueban y otros que desaprueban la instalación de los servicios locales de educación pública.

Para los primeros es importante su puesta en marcha, y así tener derecho a los beneficios que contempla la ley N° 21.109. En cambio, para los segundos significa un alto riesgo de pérdida de empleo en un plazo breve.

El estatuto de los asistentes de la educación es débil en ese sentido, pues los beneficios puntuales que reclaman los primeros no dependen de dicho cuerpo legal, sino de los tiempos definidos en la ley N° 21.040. Así es como esa espera, que ha sido larga, se podría prolongar indefinidamente en el tiempo.

Por otra parte, la instalación de los servicios locales implica, en muchos casos, una amenaza cierta de cesantía, como indica el estatuto en su artículo 33, que, incluso, no da lugar a indemnización alguna, o por razones totalmente ajenas a la responsabilidad funcionaria, como lo establece el artículo 44, con los transitorios octavo y decimoquinto.

Los cocientes determinados para las dotaciones mediante la resolución exenta N° 3.775 fueron establecidos en diciembre de 2017. Esa inestabilidad también está dada en el artículo 46 de la ley N° 21.040, y en el artículo transitorio 42.

Evidentemente, es imposible hacer una interpretación favorable, y es difícil presentar una propuesta de solución, porque se trata de dos leyes que están concatenadas y que se requiere desagregar, pues en esos puntos de unión afectan los derechos laborales de los asistentes de la educación, más allá de que, paradojalmente, se asegure que tales derechos serán respetados.

Lo mismo se dijo al momento de municipalizar la educación pública. Nada de ello se cumplió, incluida, por supuesto, la solución a la emblemática deuda histórica, que no es solo de profesoras y profesores.

Nuestra propuesta, o sugerencia, la situamos en los siguientes puntos. Primero, revisar en su totalidad los contenidos de las leyes N° 21.040 y N° 21.109, si queremos ser fieles a los valores y principios que las generaron. Segundo, fijar las dotaciones de asistentes de la educación conforme a la realidad existente a la fecha de cada traspaso. Tercero, establecer un sistema de indemnización, con retiro a todo evento.

Cuarto, prolongar el actual incentivo al retiro hasta el año 2030, que es el tiempo en que nosotros esperamos que se haya definido lo anterior. Quinto, desagregar y homologar los beneficios garantizados en la ley N° 21.109, independientemente de que los trabajadores sean traspasados o no a los servicios locales a partir de 2022. Sobre ese tema existe una resolución, la N° 1.610, presentada en la Cámara de Diputados en la sesión N° 52, del 30 de junio de 2021.

No puedo dejar de mencionar que por estos días se cumplen 40 años del traspaso de la educación pública a los municipios. Hace unos días fue cerrada definitivamente la historia de 65 años del Liceo Andalién, de la comuna de Concepción, y en mi ciudad, Chillán, el año pasado se terminó, a través de la fusión, con un testimonio emblemático de 168 años de trabajo educativo ejemplar, tal vez un

corolario trágico, anunciado por quienes, hace más de ocho lustros, nos oponíamos tenazmente a ello y a las verdaderas razones que subyacían en esa resolución política, que hoy se pretende cambiar mediante la ley N° 21.040, no sin dificultades, aunque hasta el momento no lo ha logrado.

Esperamos que esa experiencia no se repita, y que una vez más no paguen las consecuencias las trabajadoras y los trabajadores. En ese cuestionado periodo, la educación pública perdió más del 60 por ciento de su matrícula, por razones que todos conocemos.

Lo concreto es que allí quedó la escuela pública estupefacta, con sus puertas cerradas, sus salas vacías, sus patios silentes, su biblioteca, su enseñar y su aprender en un silencio absoluto, triste, señor Presidente.

El señor **Dayne**. Como presidente de Fenasicom, represento a Corporaciones Municipales como Punta Arenas, La Serena y gran parte de Santiago. En la discusión que lleva ahora la comisión investigadora, no voy a argumentar más de lo que se ha presentado acá respecto de los Servicios Locales que han entrado en marcha.

Como Corporaciones tenemos un grave problema, porque se está judicializando en los servicios locales por los beneficios, derechos adquiridos que no se han dado. Y llegar a ese extremo, de judicializar los derechos adquiridos, para nosotros, ha sido un gran problema. ¿Por qué digo esto de judicializar los derechos adquiridos? Porque se supone que una ley tendría que garantizar todos los derechos al ser traspasados los Servicios Locales de Educación. Sin embargo, tengo un servicio en especial, el Gabriela Mistral, donde a un sindicato, que viene de una Corporación, no se les respetaron los derechos adquiridos, y, debido a ese problema, tuvimos que judicializar, ante la Corte de Apelaciones de Santiago, una demanda por no pago de los bienios de ese Servicio Local de Educación.

Si bien estamos por que se aplacen los Servicios Locales de Educación hasta que no se vea el financiamiento. Ello, porque como los Servicios Locales de Educación no tienen recursos, no se pagan los bienios o los derechos adquiridos. Por eso estamos por aplazar los Servicios Locales de Educación.

Enviamos una carta al Presidente de la República para que pudiera suspender o posponer los Servicios Locales de Educación, hasta que no revisemos completamente la ley. Incluso, hay una Comisión Revisora de la cual tiene que salir una resolución respecto de ese tema, y no puede ser que estando *ad portas* de un traspaso la comisión no tenga una resolución.

Compartimos en la Central Nacional de Asistentes de la Educación, legalmente constituida, y expresamos abiertamente que no estamos ni queremos que estos servicios se aplacen.

Como asistentes de la educación tenemos un grave problema: colisionamos con el Estatuto de los Asistentes de la Educación. El estatuto está amarrado a esta ley, y no se dan los beneficios a algunos departamentos de educación municipal, porque esta ley está comprometida con la ley N° 21.040, con el Estatuto de los Asistentes de la Educación.

También pedimos que los beneficios de los asistentes de la educación establecidos en el estatuto sean entregados aparte de ser traspasados a los Servicios Locales de Educación.

Como comisión revisora, ustedes tienen todos los antecedentes. Han asistido hartas organizaciones a expresar su punto de vista. Nosotros tenemos más antecedente, pero no los vamos a comentar; nos reservamos ese derecho.

Si bien existen muchas organizaciones de asistentes de la educación, las que negociaron la ley N° 21.040 y el Estatuto no son representativas de todos los asistentes de la educación de nuestro país -y lo digo abiertamente-. Puedo demostrarlo con cifras y con documentos. Los asistentes de la educación que firmaron

e ingresaron a las trabajadoras de establecimientos financiados Vía Transferencia de Fondos (VTF) no son representativos, porque lamentablemente –y lo digo abiertamente-, se utilizó la política. Personeros de las asistentes de la educación particular, integrantes de partidos políticos, estuvieron apoyando esa ley y ellos firmaron como representantes de los asistentes de la educación.

Lo digo porque yo estuve en la discusión de la ley N° 21.040 y en la discusión del Estatuto. Les dijimos que esto iba a pasar, que íbamos a tener problemas al traspasar a las corporaciones privadas sin fines de lucro, las que tienen una particularidad que las hace diferentes a los departamentos de educación municipal. Lo planteamos, pero no nos hicieron caso. Ahora tenemos todas las consecuencias a la vista. Tenemos una ley con hartos problemas y qué bueno que esta comisión esté trabajando en ello.

30) La Representante de los apoderados del Comité Directivo del Servicio Local de Educación Pública de Barrancas, señora Marisol Cisternas Urrutia.

La señora **Cisternas** expuso en la sesión 16ª[33], de fecha 19 de julio de 2021, de la siguiente forma:

Soy representante de los padres y apoderados en el Comité Directivo del Servicio Local de Educación Pública de Barrancas. En este comité se han hecho esfuerzos para, de una vez por todas, comenzar a hablar de un territorio con respecto a los padres y apoderados. El tema se ha visto un poco dificultado, por lo que nos encontramos con que cada uno de los representantes por comuna habla de su propio territorio.

Sin embargo, debo reconocer que el Servicio Local de Educación Pública de Barrancas ha hecho un trabajo a través del Departamento de Participación y Vinculación Territorial, ya que la participación de los padres y apoderados es bastante escasa, partiendo por los representantes de los centros de padres y apoderados de esas tres comunas.

Muchas veces en los colegios ellos no están legitimados, por lo cual, en forma permanente, se está haciendo un llamado a regularizar esta situación. Ese tema también fue planteado al Comité Directivo por algunos directores a los que les preocupaba bastante el no tener centros de padres reconocidos jurídicamente o por el Ministerio de Educación.

Por lo anterior, el Departamento de Participación ha comenzado un trabajo de información, dado que se apronta la elección del nuevo representante de los padres y apoderados dentro del Comité Directivo. Como indica la ley, son dos representantes de padres y apoderados, pero uno de ellos -en mi caso-, por haber obtenido la primera mayoría, continúa el período que sigue, yendo a elección solo el segundo representante de los apoderados.

Si bien es cierto -y hablo desde mi ámbito de representatividad- hay responsabilidades compartidas en cuanto a no haber logrado esta vinculación territorial de las tres comunas desde las mismas organizaciones con que recibimos el Servicio Local de Barrancas, porque por el tema de la pandemia y por el estado de excepción las vigencias de los centros de padres y apoderados fueron extendidas, sin embargo en este minuto tengo toda la fe y la confianza en que lograremos que todos los centros de padres y apoderados de cada establecimiento del territorio de Barrancas estén constituidos por ley, mediante votaciones democráticas con sus

---

[33] El acta de la sesión, que contiene su exposición íntegra, así como las consultas de los diputados y diputadas y sus respuestas, pueden encontrarse en el siguiente link:
https://www.camara.cl/legislacion/comisiones/sesiones.aspx?prmID=2902&prmIdTipo=2103
El video de esta sesión puede encontrarse en http://www.democraciaenvivo.cl/

apoderados, a fin de alcanzar, de una vez por todas, una amplia participación de padres y apoderados dentro de los establecimientos.

Eso es lo que puedo contar sobre mi participación dentro del Comité Directivo. Generalmente, las intervenciones con respecto a esos temas son muy bien recibidas por los miembros del comité y por la Dirección del Servicio Local de Barrancas.

Como representante de los padres y apoderados en el Comité Directivo, me puedo dar cuenta de que se generan bandos, situación que no es conveniente para el futuro.

Respecto de otras cosas que salieron acá, también me puedo dar cuenta de que no veo unión en la parte de la comunicación de los equipos directivos con sus centros de padres. Porque respecto del tema de los computadores, efectivamente llegó la respuesta de Barrancas a los directores, para que ellos hicieran la bajada al centro de padres. De hecho, a mí me llegó. Por lo tanto, si un centro de padres me pregunta por los computadores, tengo la respuesta enviada desde Barrancas a los directores y de ahí vamos bajando la información.

En cuanto a la famosa carpeta de la que hablan que salió de Cerro Navia con el estado de los colegios, si fuera por nosotros, tendríamos espectaculares los recintos; pero también hay que hacer memoria que Barrancas recibió así, Barrancas recibió lo que se ha ido mejorando.

En su oportunidad, cuando estaba don Marcelo Segura, la primera escuela que él visitó fue la escuela Finlandia, que es la que represento, en que se juntó con esta unión comunal de centros de padres y apoderados, y la pregunta que le generé en ese minuto fue si ellos, al momento de recibir, habían hecho un catastro de las condiciones en que estaban recibiendo los establecimientos educacionales. No se hizo.

Barrancas entra a mejorar lo más que puede desde un principio, así como hay directores también que presentaron proyectos a fondos gubernamentales, con los cuales ellos han podido hacer las reparaciones necesarias.

Referente al tema de la carpeta de la que estaba hablando, tengo entendido que equipos de participación de Barrancas recorrieron algunos colegios en los que se hicieron mejoras, justamente con algunas de las personas que presentaron esta carpeta.

Desde mi posición, quiero decir que llevo más de treinta años con el tema de los centros de padres en mi comuna, y Pudahuel es el que genera menos ruido. ¿Por qué? Porque están informados inmediatamente de cualquier consulta que ellos quieran hacer y me siento feliz de representar los centros de padres de mi comuna.

Solamente eso, y hacer nuevamente el llamado: los centros de padres y apoderados deben ser un aporte dentro de sus comunidades educativas. Como dijo la directora de educación pública, seamos nosotros, entre todos, los que podamos sacar estas cosas adelantes e ir solucionado problemas; pero aquí tenemos que estar todos unidos; si no, esta cuestión no funciona.

En la reunión que tuvo el Comité Directivo con las directoras en ese minuto, también se les hizo el mismo llamado y es claro: un centro de padres no puede trabajar solo y una dirección jamás va a poder convocar a la totalidad de los padres y apoderados a reunirse.

31) La Directora de la Sala Cuna "Espacio Feliz" del Servicio Local de Educación Pública de Barrancas, señora Carolina Sepúlveda Benavides.

La señora **Sepúlveda** expuso en la sesión 16ª[34], de fecha 19 de julio de 2021, de la siguiente forma:

Es importante señalar que, antes del traspaso al servicio local, nuestros establecimientos de educación parvularia tenían un funcionamiento más bien híbrido, por decirlo de alguna manera, porque eran administrados por corporaciones municipales o municipalidades y los lineamientos técnicos pedagógicos emanaban desde la Junji. Como muchas veces no existía una coordinación entre estos dos organismos, no había un sentido de pertenencia, lo que evidentemente significó un cambio desde el traspaso al Servicios Local de Barrancas. Hoy existe un sentido de pertenencia con este servicio local, además de una fusión entre las comunas de Cerro Navia, Lo Prado y Pudahuel.

En el área técnico-pedagógica, al implementarse el servicio local, este comenzó a apoyar fuertemente a los establecimientos educacionales en dicha área, la cual es fundamental para lograr una educación de calidad, que es lo que se busca finalmente.

Dentro de las acciones que se han realizado, podemos ver el trabajo en red de directoras y de educadoras de párvulos y también una red de liderazgo, dirigida por el director ejecutivo del servicio local. Además de ese trabajo en red, se analizan temas de liderazgo y se hace la bajada de los instrumentos de gestión, como el Plan Estratégico Local, la Estrategia Nacional de Educación, el Plan Anual y diferentes temas de interés que insuman y promueven finalmente el desarrollo de aprendizajes colaborativos, tanto entre los directores como en los equipos pedagógicos.

También se cuenta con un equipo de asesoría pedagógica que acompaña a los equipos, ya sea orientando en la actualización o en la reformulación de documentos de gestión, como los proyectos educativos institucionales, los reglamentos internos, los planes de mejora educativa, entre otros. Además, se hace la bajada de las orientaciones que provienen tanto de la Dirección de Educación Pública como desde la Subsecretaría de Educación Parvularia.

Además, dentro del equipo de asesoría, contamos con una educadora diferencial, la cual realiza codocencia con las educadoras de aquellos jardines que tienen niños con necesidades educativas especiales, apoyando de esta manera tanto a los equipos pedagógicos como también a las familias de esos niños.

Por otro lado, existe una mayor articulación entre las mismas salas cuna y jardines infantiles y las escuelas básicas.

En otras áreas de apoyo, tenemos el área de Convivencia Escolar, que orienta a los equipos en todos los temas relacionados con esa temática.

Como indicó la señora Marisol Cisternas, también está el área de Participación y Vinculación, que mantiene una coordinación permanente con los representantes de apoderados de los establecimientos y con los equipos educativos, manteniéndolos al tanto de lo que está pasando en el servicio local y escuchando sugerencias, opiniones y experiencias de cada una de esas personas para mejorar en ese aspecto.

También está el área de Monitoreo y Seguimiento, que hace un reporte periódico a los establecimientos respecto de las matrículas y la asistencia, lo cual es

---

[34] El acta de la sesión, que contiene su exposición íntegra, así como las consultas de los diputados y diputadas y sus respuestas, pueden encontrarse en el siguiente link: https://www.camara.cl/legislacion/comisiones/sesiones.aspx?prmID=2902&prmIdTipo=2103
Asimismo, la exposición que realizó se encuentra disponible en el siguiente link: https://www.camara.cl/legislacion/comisiones/documentos.aspx?prmID=2902.
El video de esta sesión puede encontrarse en http://www.democraciaenvivo.cl/

un insumo para desarrollar acciones en este ámbito. Asimismo, se han realizados encuestas a las familias, para dar un panorama general de los diferentes aspectos a considerar para la gestión institucional.

Por otro lado, está el área de Formación y Desarrollo Profesional, que hasta hoy ha ofrecido capacitaciones, conversatorios y diferentes instancias de formación tanto para los equipos educativos como para las familias.

Con respecto a los recursos, desde la implementación del Servicio Local de Barrancas, se ha realizado la compra, de acuerdo con la necesidad de los establecimientos, de mobiliario, juegos de patio, material didáctico y pedagógico, artículos de aseo e higiene y uniformes para las funcionarias.

Me parece relevante mencionar un nudo crítico dentro de esta implementación, cual es la dependencia económica que tienen las salas cuna y los jardines infantiles de los fondos que transfiere la Junji, que además están sujetos a la asistencia por establecimiento, que, evidentemente, en niveles de educación inicial es bastante frágil ya que hay muchos factores que influyen en la asistencia de los niños, como son las condiciones ambientales, la misma edad de los niños e, incluso, la situación precaria de las viviendas que tienen muchas de nuestras familias.

Refiriéndome a las acciones que ha implementado el Servicio Local de Educación de Barrancas respecto del retorno seguro a las salas cuna y jardines infantiles, desde noviembre de 2020 se conformó la mesa de retorno, que es una instancia en la cual participan representantes de todas las asociaciones de los funcionarios del servicio local, representantes de apoderados, de directores de establecimientos y es liderada por el director ejecutivo.

En esta mesa de retorno, se exponen diferentes situaciones y problemáticas que tienen que ver con el retorno. Además, el servicio ha surtido a los establecimientos de implementos de aseo, higiene y seguridad para los funcionarios, tales como: termómetros infrarrojos, guantes, mascarillas, pecheras desechables, cubrecalzados, escudos faciales, acrílicos para los escritorios, entre otros.

Además, en los jardines infantiles y salas cuna se están realizando trabajos de mantención y mejoras de la infraestructura para este retorno seguro. Se conformó también una comisión de acompañamiento con funcionarios del servicio local de Barrancas para acompañar a los establecimientos en este proceso de retorno.

También existe un apoyo del área de prevención de riesgos del servicio local.

Dentro de la mesa de retorno que les mencioné, se elaboró y se hace revisión permanente del protocolo de actuación institucional frente a la Covid.

Además, el servicio local otorgó señalética y material para realizar las demarcaciones en los diferentes establecimientos educacionales. Se realiza una sanitización periódica de todas las dependencias de las salas cuna y jardines infantiles y también de los demás establecimientos.

Se realizaron gráficas de prevención y de autocuidado que se están distribuyendo en los establecimientos de Barrancas. Hay una socialización de videos e infografías a través de las diferentes redes sociales que tiene Barrancas. También hay una coordinación para realizar operativos de toma de PCR para los funcionarios del servicio local.

Por último, se realizó también una charla por un experto en el área de la salud -doctor Humberto Soriano-, para todas las comunidades educativas. Aquí fueron invitados tanto los equipos pedagógicos como también las familias.

32) La Presidenta del Centro de Padres y Apoderados de la Escuela "El Salitre" de Pudahuel, señora Valeska Grandon.

La señora **Grandón** expuso en la sesión 16ª[35], de fecha 19 de julio de 2021, de la siguiente forma:

Lo que les voy a exponer también le fue entregado al director ejecutivo del servicio local, don Patricio Canales, con distintas carpetas, demostrando las falencias que tenemos como escuelas, incluidas muchas escuelas y centros de padres de la comuna de Cerro Navia y el mío, de Pudahuel. Hicimos estas carpetas y las mostramos, porque tenemos grandes problemas de inseguridad en temas de infraestructura en las escuelas. Hablamos de temas de mobiliario, escaleras, sistema eléctrico, temas de seguridad, como mangueras para incendios, entre muchas otras cosas. También, se le entregaron carpetas con fotos de distintas escuelas, mostrando estas falencias. De hecho, la diputada Cristina Girardi también las tiene y creo que son las que les va a presentar a ustedes. Tenemos muchas inseguridades, en ese sentido, problemas de robos, pues muchas de nuestras escuelas han sufrido robos, muchas veces, y la infraestructura es lo que más nos complica. El tema de los baños, la insalubridad… Coincidimos con muchas escuelas en esos mismos temas.

También, el tema de la conectividad. Entre las escuelas que hicimos este reporte, la conectividad no es la mejor. El servicio local no ha dado mucha ayuda en este tema. Incluso, en pandemia, hay un proyecto que entrega computadores a los niños en séptimo básico, que los ayuda para sus clases *online*. Sin embargo, no ha pasado nada, pues no se les ha entregado el computador ni una ayuda para las familias que no tienen computador o un celular inteligente. Sabemos que todas las familias tienen realidades distintas y situaciones económicas distintas. Ese también es un problema que nos complica, porque todos los niños deberían tener posibilidad de conexión para este tipo de clases *online*.

Al director ejecutivo también se le presentó la idea de que, como apoderados, necesitamos que haya un *staff* de profesores de reemplazo, ya que para nosotros es un problema el que haya profesores con licencia y no haya quién los reemplace. Los reemplazan inspectores o profesores de otros ramos. Esos niños están perdiendo muchas clases. ¿Y qué pasa cuando hay más de un profesor con licencia? Esos niños están perdiendo clases. La profesora de inglés se va un mes con licencia y la reemplaza la inspectora. Entonces, es un mes que el niño está perdiendo. Eso también se lo planteamos al director ejecutivo, pero no hubo respuesta.

También hablamos con él sobre salubridad, porque nuestras escuelas tienen problemas con los baños: hay goteras, filtraciones e infecciones.

Pero una de las cosas que más nos complica es que muchas escuelas tienen palomeras. Los excrementos de las palomas están en patios y gimnasios donde los niños hacen sus ejercicios. En eso, el servicio local solo hizo arreglos de parche, por decirlo de alguna forma. En algunos colegios se trató de arreglar para evitar a las palomas, pero sus deposiciones están igual. Tampoco hubo una desinfección correcta. Fue un arreglo de parche.

Todo lo que les estoy mencionando fue entregado al director ejecutivo, con fotos. Él está al tanto de todo. La salubridad en las escuelas es un tema muy importante para nosotros.

Hay recursos económicos respecto de los cuales el servicio local, muchas veces, no se hace parte, pero nosotros sí, como centros de padres. Muchas veces hay cosas que se descomponen en las escuelas y no están los recursos para comprar

---

[35] El acta de la sesión, que contiene su exposición íntegra, así como las consultas de los diputados y diputadas y sus respuestas, pueden encontrarse en el siguiente link: https://www.camara.cl/legislacion/comisiones/sesiones.aspx?prmID=2902&prmIdTipo=2103.
El video de esta sesión puede encontrarse en http://www.democraciaenvivo.cl/

y arreglar. Entre eso, hay fotocopiadoras, tremendamente necesarias para los niños y para los profesores, porque con eso les entregan materiales a los niños. Entonces, muchas veces esos recursos tenemos que cubrirlos los centros de padres. Y en eso también coinciden los centros de padres de Cerro Navia, con los que participo.

Además, hay una queja de los directores. Ellos dicen que todo lo que se pide al servicio local en materia de insumos o materiales se hace de manera muy burocrática; son muchos correos y hay que esperar que te manden una respuesta, siendo mucha la burocracia para comprar ciertos materiales.

Otro tema que como centros de padres nos complica es el retorno a clases. Nos interesa mucho ese tema porque no están dadas las condiciones en las escuelas para que los niños retornen a clases. Lo hemos conversado con muchos centros de padres de Cerro Navia. No es solamente por los niños. Aquí hay comunidades escolares completas que están en riesgo.

Los niños son la menor cantidad de afectados, pero detrás hay familias así como funcionarios y sus familias. Debemos pensar que hay gente que es asintomática y las personas vienen desde sus casas a trabajar a las escuelas y podrían contagiar a alguien más. Por lo tanto, no están las condiciones dadas y tampoco están todos los protocolos ni los recursos para que haya un retorno a clases. En eso, coincidimos muchos centros de padres de Cerro Navia y, en los puntos que acabo de mencionar, estamos todos de acuerdo.

33) La Presidenta del Centro de Padres y Apoderados de la Escuela "Federico Acevedo Salazar" de Cerro Navia, señora Katherine Bugueño.

La señora **Bugueño** expuso en la sesión 16ª[36], de fecha 19 de julio de 2021, de la siguiente forma:

En primera instancia, este no es un tema de quién lo hizo mejor o quién lo hizo peor. Desde que empezó el traspaso de municipalizados a públicos, jamás, en ninguna instancia, se revisó si estaban bien, si la estructura estaba buena o cómo estaban los índices. ¡Nada! ¡Jamás se evaluó! ¡Jamás se fiscalizó! Esto fue entregado a puertas cerradas. Eso, como primer punto.

En segundo lugar, es verdad que nosotros como centro de padres de las tres comunas estuvimos hablando de la infraestructura, de los baños, de las fecas de las palomas, del inmobiliario, porque muchos niños entraron a primero básico con sillas sin respaldo.

Por otro lado, en 2019, cuando esto empezó, teníamos un recurso que se llamaba "Movámonos por la Educación Pública", el cual no se entregó. Hubo una mala administración del director de Barranca, y no fue el único colegio. También hubo otro problema, en relación con la subvención Pro-Retención, destinada a los alumnos de séptimo y octavo básico, donde el proveedor hizo un mal ejercicio, y no se terminó el proceso en sí y quedamos fuera.

Ese año fue muy difícil. Imagínese, nosotros, con un presupuesto bajo, tenemos que solventar a profesores y a auxiliares con licencia, siendo todos ellos heredados desde municipalidades que no hicieron bien su función, que no cumplieron y gastaron los dineros de la educación en otros fines.

Por otro lado, aquí nadie habla de los alumnos, ni siquiera de su alimentación. Estamos hablando de números, pero hay niños que tienen falencias en sus casas. Tenemos deserción escolar, embarazos adolescentes, consumo de drogas y de

---

[36] El acta de la sesión, que contiene su exposición íntegra, así como las consultas de los diputados y diputadas y sus respuestas, pueden encontrarse en el siguiente link: https://www.camara.cl/legislacion/comisiones/sesiones.aspx?prmID=2902&prmIdTipo=2103.
El video de esta sesión puede encontrarse en http://www.democraciaenvivo.cl/

alcohol, y nadie toca esos temas. En primero básico tenemos casos de violencia. Son niños súper pequeños, agresivos y tampoco se ven esos temas.

Hay estudiantes que se sienten muy decepcionados de este sistema educacional, que solamente crea mano de obra barata, y que al fin y al cabo les significa someterse a un trabajo que no quieren y con un sueldo que no quieren. No son solamente nuestros estudiantes porque si hiciéramos un resumen de todo esto son nuestros padres, nuestros abuelos, quienes en su gran mayoría no completaron su enseñanza media; llegaron hasta enseñanza básica, hasta séptimo, y si llegaron a enseñanza media, muchos de ellos no pudieron completar un estudio universitario. Eso es responsabilidad de todos, desde el Presidente de la República, que debiera implementar leyes de apoyo a la enseñanza. Necesitamos que el Ministerio de Educación implemente recursos. No estamos hablando de un director. ¡No! Esto parte desde hace muchos años.

Este no es un tema de que los apoderados nos organizamos para decir que está mal esto o está mal lo otro. Esto parte de la base de que por muchos años hemos sido abandonados. Nosotros también fuimos estudiantes y nos pasó absolutamente lo mismo. ¡Absolutamente lo mismo!

Ahora estamos defendiendo a nuestros hijos, porque doy por seguro que si sus hijos fueran a un colegio municipal, a un colegio público, esto no estaría pasando. Lo hubiesen arreglado. Lo hubiesen arreglado ayer; no hubiesen pensado en arreglarlo mañana.

Queremos que nuestros estudiantes tengan los mismos recursos y la misma educación que tiene un colegio particular. Nuestros estudiantes solamente esperan terminar sus estudios, ¿para ser qué? ¿Un comerciante ambulante? ¿Un cajero en algún supermercado? ¿Para ser explotado? ¡No! Necesitamos estudiantes con valores, con juicio. Necesitamos estudiantes que se sepan desenvolver, no solamente hablarles y hablarles, porque al fin y al cabo no entienden nada, no comprenden. Tenemos estudiantes que salen de octavo básico leyendo, pero no comprenden lo que leen.

Muchos de nuestros estudiantes esperan llegar a cuarto medio y si lo logran, rendir su prueba de aptitud académica –no sé cómo se llama ahora-. ¿Y qué pasa si el 80 por ciento de eso es comprensión? Les va mal, vuelven decepcionados y en qué se convierten. Se convierten en mano de obra barata, porque no lograron el fin que uno desde chico les inculca: hijo, usted tiene que ser alguien en la vida; hijo, luche por lo que usted necesita, por lo que usted quiera, vea un futuro próspero. Pero si no se le dan las herramientas.

La alimentación en un colegio municipal, en un colegio público es de mala calidad. Me gustaría que cuando vuelva todo esto a la normalidad ustedes vengan a almorzar, a tomarse una leche. Yo no estoy criticando, estoy dando cuenta de lo que les pasa a nuestros niños.

Necesitamos profesionales que no tiren licencias porque sí. Necesitamos el compromiso y la fiscalización de ustedes, porque ustedes son los responsables de nuestros niños. Son ustedes los que tienen que estar ahí, velando por la seguridad y por el bienestar de nuestros niños. Nosotros lo hacemos desde casa, pero son ustedes, lo público, quienes deben velar por ellos.

Espero que esto lo escuchen, porque me imagino que algunos deben tener tapones en las orejas, porque esto lo hemos repetido, no este año ni el año pasado ni desde que empezó el servicio público -que empezó horrible-, esto lo hemos venido repitiendo durante años. No queremos que nuestros niños, que nuestros colegios, jardines y liceos vuelvan a las municipalidades. No queremos de nuevo la vulneración, no queremos volver a esto. Tenemos, por años, colegios abandonados. Aquí no estamos hablando de que se me tapó el baño. Estamos hablando de que muchas

veces, donde están los niños, los techos se llueven porque están rotos y colapsan; también hay hongos y fecas de palomas. No estoy hablando porque sí.

Como centro de padres podemos juntar recursos, haciendo donaciones para poder arreglar un par de cosas, pero, ¡por favor!, el Ministerio de Educación, concretamente el ministro, es el que debe hacerse cargo de esto.

¡Necesitamos que los niños de primero básico comiencen a leer y que comprendan lo que están leyendo! Todos sabemos que existen esas falencias, pero nadie quiere hacer algo al respecto. ¡Nadie quiere cambiar esto! Eso es verdad.

El señor Canales lo hizo pésimo en 2019 y por eso debe cumplir y responder ante esto. ¡Eso es verdad! Pero nosotros no queremos volver al municipal; queremos que nuestros directores sean competentes. Ellos saben lo que falta y lo que no en un colegio. Como escuelas, liceos y jardines no queremos que abusen más de nuestros niños. ¡Queremos cambios concretos y reales! No queremos que el día de mañana nuestros hijos digan que no saben qué estudiar. ¡Creémosles conciencia desde pequeños, con valores! ¡No queremos más niñas adolescentes que salgan embarazadas o niños que en 8° básico estén drogándose! ¿Cómo es posible todo esto? ¿Cómo hemos aguantado y tolerado todo esto? No lo entiendo. Como madres o como padres no podemos entender eso.

Entonces, uno se pone a pensar, y dice: “Chuta, nos pasó a nosotros. ¿Queremos que le pase a nuestros niños?”. ¡No! Es triste y es cruel, pero es la realidad que nuestros niños están viviendo, y si ustedes no quieren darse cuenta de eso es porque tienen una venda en los ojos.

Por favor, necesitamos que, por nuestros niños, se hagan cambios concretos y reales. No estoy hablando de mis hijos o de los de mi hermano o de mi prima. No, hablo de los niños que viven desde Arica a Punta Arenas. Tenemos establecimientos abandonados, niños abandonados, vulnerados, y nadie habla de eso. Todos hablan de la plata y de no sé qué más, pero esos recursos son de todos, de ricos y de pobres. Aquí no solo están involucrados los recursos de los ricos o de que se les quite a “los pobrecitos”. ¡No! No solo son sus recursos, sino de todos. ¡Aquí estamos todos!

Si todos esos cambios se concretaran, ¿de dónde sacaríamos los recursos? Imaginen, si todas las concesiones de las mineras fuesen nacionalizadas tendríamos recursos de sobra. ¡De sobra! Pero no se hace porque tenemos miedo. Somos un país con miedo. Nos criaron así. Nos hicieron creer eso.

Hemos tenido reuniones con padres, con apoderados, con jóvenes, con directores, con profesores, y todos vemos el mismo fin, y todos vemos lo que nos pasó. Entonces, queremos que haya un cambio, ahora y ya. No queremos esperar que a futuro nuestros niños sigan en lo mismo.

34) La Presidenta del Centro de Padres y Apoderados del Liceo Bicentenario de Cerro Navia, señora María Macarena González Carrasco.

La señora **González** expuso en la sesión 16ª[37], de fecha 19 de julio de 2021, de la siguiente forma:

En primer lugar, hablaron mucho de las personalidades jurídicas. Ojalá que todos los padres y apoderados que nos encontramos en esta comisión tengamos nuestras organizaciones actualizadas, al día.

Nuestro liceo tiene personalidad jurídica desde el 26 de julio de 2019. Nuestra primera intención fue la de trabajar y crear lazos con los apoderados, para ser un

---

[37] El acta de la sesión, que contiene su exposición íntegra, así como las consultas de los diputados y diputadas y sus respuestas, pueden encontrarse en el siguiente link: https://www.camara.cl/legislacion/comisiones/sesiones.aspx?prmID=2902&prmIdTipo=2103.
El video de esta sesión puede encontrarse en http://www.democraciaenvivo.cl/

aporte a la educación de nuestros hijos, respetando a todos los centros de padres, que les gusta hacer actividades en las escuelas, pero, insisto, nuestra primera mirada se centró en la parte educativa.

En el fondo, nuestra misión consiste en fiscalizar si nuestros hijos están aprendiendo lo que el ministerio debe darles para su enseñanza; fiscalizar también que las clases se cumplan, y golpear puertas, si es necesario, para que los profesores que están con licencia puedan tener reemplazos.

Comenzamos a trabajar en un período, como todos saben, de estallido social, lo que no fue tan fácil, porque, por ejemplo, iban pocos niños al liceo por distintos motivos.

Nuestras primeras demandas ante el servicio local las hicimos a través de petitorios. Como liceo, nuestra idea no era confrontar al servicio de Barrancas, pues queríamos tener un lineamiento de comunicación, de reuniones.

Les puedo decir que hicimos un primer petitorio, que logramos realizar en conjunto con los alumnos de nuestro establecimiento, que estaba relacionado con la eficiencia en infraestructura, porque faltan cerámicas, planchas, falta terminar techos, falta colocar vidrios, cubrir un forado en el techo del pasillo del segundo piso, recuperar camarines y duchas y eliminar plagas de palomas, etcétera.

Les puedo decir que el servicio local nos cumplió casi en un ciento por ciento y nos explicó que una parte del petitorio iba a ser trabajada a futuro.

Podemos decir que nuestro liceo tenía un baño muy pequeño y que ahora tenemos baños en increíbles condiciones. Entonces, si existiera una posible vuelta a clases, podrán usarlos porque, como dije, se encuentran en óptimas condiciones. Esa es una de las partes más importantes del liceo.

Hablé de una posible vuelta a clases, ya que los papás son los que voluntariamente deben aceptar que sus hijos regresen, porque a nadie se le obliga ni existe algún protocolo que señale dicha obligatoriedad.

Respecto de algunos puntos que señaló la señora Valeska Grandón, debo agregar que nosotros tenemos personalidad jurídica como liceo, tenemos actividades permanentes con nuestros padres y apoderados. Nuestro lema es no solo trabajar con los subcentros, sino con todos los padres y apoderados que quieran asistir a nuestras reuniones.

Desde que comenzamos a trabajar hemos tenido reuniones, hemos tenido el contacto, hemos sabido de la familia; hemos ayudado en tiempos de pandemia; pudimos llegar a más de 50 familias, ayudando con canastas de mercadería; nos organizamos y, por ejemplo, pudimos llevar un computador a un niño que nunca se pudo conectar el año pasado; pudimos golpear puertas en el servicio local de Barrancas para que nos entregaran conectividad para algunos niños que no tenían cómo acceder al sistema *online* para tomar sus clases; pudimos llegar al servicio local de Barrancas, diciendo que los profesores casi no están haciendo clases y que el nivel educativo de nuestros hijos está siendo realmente muy bajo. Nos escucharon.

Este año, por ejemplo, después de toda la problemática que tuvimos que enfrentar el año pasado por el tema de la pandemia, pero principalmente por el tema educativo de nuestros hijos, nos reforzaron con profesionales en nuestro liceo. Agradecemos ese gesto y esa voluntad del Servicio Barrancas.

Lamento que la señora Katherine Bugueño haya tenido tan mala experiencia, porque yo apelo a que los apoderados también tenemos que llegar a las autoridades, con respeto, ser insistentes. Quizás no todos tienen la predisposición en el momento en que nosotros queremos. Concuerdo en que a veces la pirámide está invertida, que los últimos de los cuales se habla o de los cuales se deben preocupar son nuestros hijos, que estudien en un establecimiento, pero yo voy por una educación de calidad e inclusiva para todos, sin distinción.

Respecto de otro tema que escuché, específicamente, que ustedes dicen que se reúnen con apoderados de Cerro Navia, les tengo que decir que jamás a nosotros, como Liceo Bicentenario, desde que hemos asumido, sin perjuicio de que somos activos en reuniones, de hecho, asistimos a todas las reuniones de participación inclusive -no he faltado a ninguna-, no ha llegado una invitación que diga: "¿Cómo ha estado tu establecimiento en Cerro Navia? ¿Qué piensas tú del retorno a clases? ¿Ustedes han hecho reuniones con sus apoderados?".

Les puedo decir que gestionamos, hace muy poquitito, una reunión y estuvimos mano a mano con el área de convivencia escolar, donde los papás pudieron escuchar la parte socioemocional, porque las familias en tiempos de pandemia no están muy bien. No es fácil tener a los hijos hacinados; no es fácil tener a los hijos con más familia; no es fácil tener a los hijos diciéndoles que, por favor, se cuiden de una u otra manera, porque puede haber contagios, porque tenemos familias que han perdido seres muy cercanos.

Los niños no están bien emocionalmente, pero en ese conversatorio abarcamos también el posible retorno a clases voluntario, donde la única que decide es la familia. Nadie puede decidir por mí si quiero o no enviar a mi hijo, pero, para decidir si voy a enviar a mi hijo, tengo que estar seguro de que el establecimiento esté en las condiciones, como lo indica un protocolo; que los establecimientos estén abiertos para que los padres vean primero si el establecimiento cumple con las medidas sanitarias.

En eso concuerdo completamente, pero también hay algo que no podemos dejar pasar: la educación en este momento está muy atrás de lo que nuestros hijos debieran saber. ¿Quién se va a hacer responsable de esa educación faltante? ¿Ustedes, mamás, creen que esa educación se va a recuperar? Esa educación no se va a recuperar; las clases *online* jamás van a reemplazar las clases presenciales, y lo que no he escuchado de ustedes, sobre la posible vuelta a clases, es la retroalimentación.

¿Los niños han logrado aclarar lo que no han entendido de repente en las guías? No hay retroalimentación casi en los establecimientos, y en la reunión que hicimos hace como una semana, un convocatorio de 44 personas, solo vi una persona que dijo que no estaría de acuerdo con enviar a su hijo, pero no vi un rechazo general a la vuelta a clases.

Lo que digo es que, cuando hablamos de establecimientos, pregunto si ustedes han hecho convocatoria con los padres y apoderados, para decir: "No quiero que mi hijo vuelva a clases, por esto o esto otro". Vuelvo a repetir: tengo claro, y todos lo tenemos claro, que esto es voluntario, pero hay papás que sí creen que es conveniente que sus hijos vuelvan a tener una clase presencial, gradual, con distanciamiento, con todo el protocolo, que se respete al ciento por ciento.

Lo otro: me llamó la atención la señora Valeska Grandon, que habló de que se había reunido con escuelas de Cerro Navia. Comparto con varios centros de padres y nunca me han hablado que han llamado, y la señora Katherine Bugueño, cuando mencionó el tema de movernos por la educación pública, el problema de las platas no vienen desde que empezó el Servicio Barrancas, sino que el problema de las platas viene de la administración de los últimos alcaldes, anterior a que se diera inicio al servicio en cuestión, porque no entregaron las platas a las escuelas, o sea, acá no es un problema del Servicio Barrancas.

El señor Marcelo Segura, tengo todavía lo que él me escribió, dijo: "Si bien los dineros fueron entregados desde el ministerio, esos dineros quedaron en el municipio". En este caso, nuestro alcalde era en ese entonces el señor Mauro Tamayo. En ese municipio quedaron aproximadamente, si no me equivoco, porque le seguí el hilo, 120 o 140 millones que fueron entregados al municipio, y solamente rindieron como 20 millones. Puede que me equivoque, pero es más o menos lo que

te puedo decir, o sea, esto no es algo de ahora, sino que es algo que viene de antes. Imagínate: se inició el servicio local y no llegaron esas platas, que simplemente eran proyectos, muy pensados de acuerdo con realidades que teníamos en las escuelas. Fue muy lamentable.

Ahora, en cuanto a lo que se planteaba, concuerdo en que de repente hay mucho abandono respecto a las escuelas, pero también estoy de acuerdo en que, como centros de padres, tenemos que golpear no solamente una puerta, sino que llegar a más puertas.

Si lo pudimos hacer nosotros, y olvídate que es porque somos bicentenario, porque ese es el nombre, lo que importa es quién puede dirigir un establecimiento; un centro de padres que tiene que trabajar en conjunto, que tiene que estar trabajando alineado con todos los padres, en que, ojalá, la familia -no hablo solamente del padre o la madre, sino la familia en general- pudiera incluirse en la educación que le están dando a su hijo en el establecimiento.

Entonces, si bien es importante la infraestructura, creo que cuando uno matricula a un niño en un establecimiento para recibir educación de calidad, es el Estado es el garante de que nuestros hijos reciban ese tipo de educación y nosotros somos el fiscalizador para que eso se cumpla. No podemos esperar a que lleguen siempre los funcionarios. Existe la superintendencia, ¿por qué no exponen la situación ante ella, frente a cualquier eventualidad que tenga que ver con la parte pedagógica?

Como último punto deseo dejar claro que, ojalá, cuando hablamos de representatividad, seamos realmente representativos de todos los padres o de gran parte de los padres y apoderados, porque nos hemos encontrado, y que lo sepan en Cerro Navia, con gente que dice: “Soy la presidenta de tal lugar”, y realmente dónde están los documentos que lo acreditan.

Estamos en democracia, necesitamos ser pluralistas, tenemos que llamar a la participación. No tengo por qué exponer lo que piense, sino que tengo que exponer en la reunión lo que opina gran parte de los padres y apoderados. Por favor, trabajemos en democracia. No seamos independientes en lo que queremos exponer. Nos debemos a los padres y apoderados, a cada familia de cada niño que estudia en los establecimientos.

35) El Alcalde de la comuna de Lo Prado, señor Maximiliano Ríos Galleguillos.

El señor **Ríos** expuso en la sesión 17ª[38], de fecha 26 de julio de 2021, de la siguiente forma:

Como ustedes saben, los alcaldes de Pudahuel, de Lo Prado y de Cerro Navia tenemos una participación a través del Comité Directivo, en el cual tenemos nuestro representante, al igual que hay uno del gobierno regional.

Desde esa perspectiva, voy a entregarles información de la actividad del Comité Directivo, más allá de lo que hemos podido ver como alcaldes.

Primero, lamentablemente este cambio no ha significado ninguna mejora para la educación pública, desde el traspaso de los municipios a este servicio descentralizado, como es el Servicio Local de Educación Pública de Barrancas. No lo digo porque estoy incorporado en la gestión, sino que lo señalan las vecinas y los vecinos que utilizan estos recintos educacionales. No se ve que haya habido una mejora, las expectativas eran mayores, pero, lamentablemente, esto sigue igual o peor. ¿Por qué lo digo? Debemos recordar que hay mucho malestar, porque todavía no se resuelve algo que está normado por ley, como es el pago de las imposiciones

---

[38] El acta de la sesión, que contiene su exposición íntegra, así como las consultas de los diputados y diputadas y sus respuestas, pueden encontrarse en el siguiente link: https://www.camara.cl/legislacion/comisiones/sesiones.aspx?prmID=2902&prmIdTipo=2103.
El video de esta sesión puede encontrarse en http://www.democraciaenvivo.cl/

de los profesores de Cerro Navia. Han pasado más de dos años y el problema continúa. Entiendo que hay muchas gestiones que ha hecho la Dirección Nacional de Educación y el ministerio, sin embargo, al parecer, todavía no se resuelve del todo.

Del mismo modo, también hay mucha preocupación porque, como dijimos desde un inicio, una vez que se hiciera el traspaso de la educación a este servicio local, había que asegurar el flujo financiero, los ingresos, el financiamiento de este servicio. Por eso, se supone que teníamos que mejorar.

Debemos recordar que varios de los municipios -en realidad los tres- entregaban aportes de subvención, y no hay claridad sobre cuáles son los aportes fiscales que recibe el servicio local, por lo menos desde la información que manejamos. Por lo tanto, echamos de menos un esfuerzo transversal, un esfuerzo del Estado, de todos los protagonistas, para que realmente ese traspaso haya sido primeramente eficiente, y posteriormente tuviera un funcionamiento que diera certeza y confianza a toda la comunidad educativa de estos cincuenta y cuatro establecimientos educacionales.

El Comité Directivo se ha reunido en dos ocasiones en 2021 con los padres y apoderados y el Colegio de Profesores. Como decía, no se percibe que el traspaso desde los municipios al servicio local se refleje claramente en mejoras de la educación. No se han cumplido las expectativas que despertó el cambio de administración. Eso es algo que se repite. Hemos conversado con las vecinas y los vecinos, quienes han manifestado que eso se debe, fundamentalmente, a que hay una lejanía del servicio y de las autoridades con ellas y ellos. Uno puede entender eso desde distintos puntos de vista. No es lo mismo administrar la educación desde el municipio que desde una gran corporación, que finalmente tiene muchas preocupaciones y distancia.

Algo que también se repite en el tiempo es que no hay una velocidad apropiada, cuando se trata de problemas de mantenimiento de los recintos educacionales.

Se considera lenta la respuesta del servicio frente a problemas emergentes de mantención y reparaciones. Hace falta que el servicio local disponga de personal para aquello. Se observa demasiada lentitud cuando es necesario reemplazar a profesores y a otros profesionales.

También se ha dicho reiteradamente que la comunicación entre el Servicio Local de Educación y los apoderados no es buena, no llega información suficiente y predomina una percepción de que el servicio es una institución lejana; sin embargo, todas estas cosas se pueden mejorar.

Asimismo, se manifiesta preocupación por la cantidad de robos. Cabe recordar que cuando los municipios teníamos a cargo la educación, sufríamos una gran cantidad de robos y los sistemas de seguridad eran siempre insuficientes.

Por último, como han indicado los apoderados, el tema de la participación es además responsabilidad de los propios padres. Echan mucho de menos un mayor vínculo y más cercanía entre los equipos directivos con sus padres y apoderados. Esto se manifiesta en la poca participación al interior de los establecimientos educacionales y, además, muchas veces ellos reconocen que existe desinterés, porque no hay suficiente motivación para lograr tal participación en aquellos.

Hay algunas otras situaciones menores que a lo mejor ustedes conocen. Respecto de las canastas Junaeb se señala que este año traen menos cantidades de productos, que sus contenidos difieren de lo declarado por dicha institución, que son insuficientes para quince días y que se debería considerar más la realidad que se vive en los sectores rurales.

También se hizo una observación sobre las reuniones del consejo local -aunque nosotros no tenemos, salvo en Pudahuel- y se indicó que no deberían realizarse en horarios laborales, porque a los padres les resulta muy difícil asistir.

En definitiva, les he entregado el acta de lo que ha significado la reunión del comité directivo, conjuntamente con el director del servicio local y con los padres y apoderados.

Asimismo, quisiera mencionarles lo que ha ocurrido con el acta de la reunión con el Colegio de Profesores de Chile. Dicho sea de paso, participaron padres y apoderados de todos los colegios de estas tres comunas.

En cuanto a los profesores, ellos también plantean que, en general, el servicio local no está respondiendo a las expectativas que tienen de la educación pública. En verdad, eso nos entrega elementos más que suficientes para decir que hay disconformidad con la entrega del servicio. Los profesores han manifestado, o a lo menos este sector de los profesores, a pesar de que existe un Colegio de Profesores a nivel nacional, que nunca han estado de acuerdo con que los colegios dependan de un servicio local, de una institución descentralizada, sino más bien directamente del Ministerio de Educación. Es decir, ellos no están de acuerdo con el modelo y la estructura vigente de la educación pública, pues sostienen que los establecimientos deberían depender directamente del Ministerio de Educación. Reconocen que se ha mantenido un diálogo con las autoridades del servicio, pero los dirigentes tienen la sensación de no ser escuchados y que se mantienen pendientes problemas laborales.

Sabemos de la complejidad de la ley de subvenciones, que las asignaciones son muchas y que la mayoría de las veces también cuesta demasiado entenderlas. Se decía que a los municipios les faltaba *expertise,* sin embargo hemos podido comprobar que les sobraba, por haber tenido la administración durante treinta años. En mi opinión, eso no fue bien utilizado por el servicio local de educación, pero son situaciones que todavía se pueden mejorar.

Se valora el funcionamiento de las mesas para el tema del retorno a la presencialidad. Sin embargo, señalan que no se está cumpliendo, por ejemplo, con tener suficiente personal de aseo en los establecimientos, para garantizar la limpieza al momento del retorno.

Asimismo, manifiestan que han solicitado que se instale una mesa técnico-pedagógica, y entre los temas pendientes e importantes están los de las renuncias pactadas.

Consultados sobre la existencia de sobredotación de personal, que también atraviesa todo el conflicto de la educación nacional, los dirigentes estiman que ese problema está en vías de solución, pero la planta directiva aumenta debido a que algunos directores se retiran antes de cumplir su período y son reemplazados por subrogantes que después permanecen en esos cargos. Es un problema que se ha ido repitiendo, y lo mismo sucede cuando los nuevos directores designan a su equipo de confianza, permaneciendo el personal anterior. Por lo tanto, ahí también hay un aumento de dotación.

Para terminar, deseo agregar que este cambio de institucionalidad es de una envergadura muy importante y pensamos que requiere el apoyo transversal de todas las autoridades políticas y administrativas, un adecuado financiamiento y una administración que sea eficiente y que esté a la altura de lo que significa.

Estamos convencidos de que este modelo -al menos desde acá- no da cuenta de lo que eran las expectativas y aspiraciones de todos los chilenos y las chilenas, cuando se avanzó en el término de la educación municipalizada para mejorar finalmente la calidad de la educación.

Quiero recordar que el Servicio Local de Educación de Barrancas fue creado en marzo de 2018, pero la ley fue aprobada en noviembre de 2017. También, hubo

un muy breve plazo para sacarlo adelante, pero la comuna de Cerro Navia no estaba considerada. De hecho, participamos junto con la comuna de Pudahuel en un proceso de anticipación, que fue bastante regular, no así Cerro Navia. En ese sentido, la directora de Educación Pública acaba de decir que hay bastante tiempo para trabajar en los traspasos.

Lo que echamos de menos son los temas financieros. Para cualquier sostenedor municipal esta es una pesadilla actualmente, porque finalmente los recursos no son suficientes. Antes de sacar adelante la ley, se decía que los municipios eran malos administradores. Pero, acá está la prueba, los municipios ya no están haciéndolo y se sigue administrando mal, entre comillas. Uno podría decir que se administra mal, pero también cabe preguntarse desde qué perspectiva, porque faltan los recursos, porque no somos capaces o porque, a lo mejor, no debemos tomar decisiones desde el punto de vista de la normativa, como, por ejemplo, ocupar los recursos SEP para pagar los consumos básicos, cuestión tremendamente habitual en el mundo municipal.

También echamos de menos el cierre. Claramente, en nuestra comuna todavía no hemos cerrado el proceso, por ejemplo, de las rendiciones de la Subvención Escolar Preferencial. Pareciera ser que a la Superintendencia de Educación esto no le importa mucho, porque debe atender otras situaciones. Es muy importante hacer esos cierres para que todo el mundo esté claro con lo que ocurrió y lo que no ha sucedido.

En este caso, la buena noticia es que pudimos conversar con las nuevas autoridades del servicio local y sacar adelante el tremendo programa Tres-A, que apunta al autocuidado, a la afectividad y a la alimentación saludable. Creo que son los únicos colegios en Chile que tienen una sala de salud al interior, lo cual es una experiencia maravillosa. Lo hemos ido sacando adelante con dificultad, pero lo hemos hecho. En todo caso, sí se echan de menos cuestiones tremendamente relevantes, por ejemplo lo que hicimos durante 10 años, que fue sacar adelante el proyecto de los “castellers”, que era la construcción de torres humanas.

Ustedes han escuchado sobre eso, que tiene que ver con cómo nuestras niñas y niños trabajan en equipo, en lo cual ponen esfuerzo y confianza. Llevamos muchas veces delegaciones completas a España para aprender esta actividad; fue una tradición en la comuna, pero, lamentablemente, terminó. Lo mismo que durante 10 años sacamos adelante los talleres de ajedrez, que era una cuestión tremendamente importante. Teníamos el sueño de incorporarlos en nuestras mallas curriculares, y eso se terminó. Ahora bien, hay buenas y malas experiencias; ojalá que en este tipo de situaciones se privilegie siempre lo que se hizo bien y lo que es más importante para nuestra comunidad educativa.

36) El Presidente del Sindicato de Administración Central Cormupa, señor Ricardo Oyarzo Cárcamo; el Presidente del Sindicato de Asistentes de la Educación, señor Pedro Pablo Ramos Bustos, y la Presidenta Regional del Colegio Regional Profesoras y Profesores A.G., señora Violeta Andrade Velásquez.

El señor **Oyarzo** expuso en la sesión 17ª[39], de fecha 26 de julio de 2021, de la siguiente forma:

Para comenzar, queremos abordar tres temas muy concisos, a propósito de la decisión de este gobierno de incorporar a la Región de Magallanes entre los seis servicios que se van a instalar el año que viene.

---

[39] El acta de la sesión, que contiene su exposición íntegra, así como las consultas de los diputados y diputadas y sus respuestas, pueden encontrarse en el siguiente link: https://www.camara.cl/legislacion/comisiones/sesiones.aspx?prmID=2902&prmIdTipo=2103.
El video de esta sesión puede encontrarse en http://www.democraciaenvivo.cl/

Haciendo un poco el *link* con la exposición que acaba de hacer la diputada, en 2016, cuando nos tocó exponer sobre las vicisitudes que pudiese tener el modelo, planteamos muy claramente que infraestructura y obras eran un punto fundamental en la administración de la educación pública porque la cotidianidad de las roturas, de las reparaciones y de todo aquello que supone mantener un estado de servicio de calidad no daban cuenta de la lentitud que tiene el sistema público para dar estar respuestas, ya que tiene que pasar por mercado público y otra serie de circunstancias que hace más lento el accionar, sobre todo si el nuevo servicio en ese momento, cuando se diseñaba, no contemplaba una unidad de infraestructura y menos de obra. Cuando planteamos esto no hubo una solución del mercado, como escuché recién. Dijeron: No, vamos a externalizar. Va a haber empresas que hagan eso. No se preocupen. Luego de la marcha blanca, al parecer esa solución no fue tan brillante, y tenemos lo que acaba de pasar en esta sesión.

Dicho eso, hay dos puntos que quedan pendientes. En primer lugar, la Región de Magallanes está movilizada desde hace cuatro meses. Tuvimos movilizaciones en la calle de más de 2.200 personas, trabajadores de la educación, en contra de la instalación del servicio local de educación en la Región de Magallanes. Eso no fue porque no creamos que la educación pública deba volver al Estado, sino porque creemos que este modelo no es el que nosotros esperamos para mejorar el modelo educativo en Chile. En eso planteamos una primera cosa que es vital: esperar la resolución de la discusión constitucional y ver cuáles van a ser los nuevos lineamientos de la educación pública en Chile; ojalá ya financiada porque muchos de estos temas tienen que ver con financiamiento basal.

Luego de eso, teniendo condiciones básicas, preocupémonos de la calidad de la educación. No nos podemos preocupar de la calidad de la educación –y por eso la discusión es siempre financiera-, cuando tenemos goteras en las escuelas y baños que no se pueden utilizar. Más aún, en una región como la de Magallanes, si pasase eso que acabamos de ver, aquí hay temperaturas bajo cero, por lo que nuestros niños no pueden estar sin calefacción. Tenemos establecimientos que tienen más de 1.200 metros cuadrados, al menos 28. Entonces, díganme ustedes, ¿quiénes van a ser responsables luego de ese cambio si es que no tienen hoy la capacidad para manejar los establecimientos que ya se encuentran?

Además de ello, tenemos una solicitud muy concreta. Ya existen proyectos de ley en el Parlamento que plantean esta suspensión. Se hace razonable mejorar todo esto, darse un tiempo para hacerlo, vincularlo con la discusión constitucional, y luego continuar, de tal forma de no arriesgar la educación pública de, en este caso, más de 12.000 estudiantes solo en la comuna de Punta Arenas y miles más en otras comunas.

Por lo demás, en el caso particular de Magallanes, se pretende instalar una oficina en el centro de la ciudad para atender a alumnos en la comuna de Timaukel que queda en una isla, donde uno tiene que cruzar con una barcaza, y demora al menos ocho a nueve horas en llegar recién a un territorio en donde pudiese tomar otra movilización para dirigirse al establecimiento educacional. ¿Alguien pensó cómo nosotros, desde el centro de Punta Arenas, con una oficina y además con recursos acotados porque el presupuesto es muy bajo, vamos a poder dar cobertura a localidades como esta, que son decenas en nuestra región?

Esperamos que los oficios puedan concluir que es razonable y cauto detener este proceso por ahora. No nos oponemos a que vuelva al Estado, pero hay que revisar esto y no continuar con Magallanes porque creo que va a ser un problema que luego no va a tener solución por las condiciones geográficas y además por las condiciones financieras en que se encuentran las diferentes corporaciones.

Al final, quiero decirles que en Magallanes tuvimos una reunión con el ministro -estuvo la directora, quien también está presente en esta sesión- y se comprometió con nosotros. Nos dijo que si había un reglamento y un consenso entre los

trabajadores, él llegaría a un acuerdo con el Parlamento, para suspender y evaluar esta situación.

A ese respecto, debo decirles que ya tenemos un reglamento, que, de hecho, existe, porque se envió un proyecto de acuerdo para solicitar la suspensión. También hay un acuerdo de los trabajadores, porque el Colegio de Profesores, los asistentes de la Educación y, nosotros, los administrativos, concordamos a nivel nacional. Entonces, ya que el ministro adquirió ese compromiso con los gremios de nuestra región y de otras regiones de Chile, propongo hacer valer su palabra.

La señora **Andrade**. Como bien se dijo al principio, voy a hablar de los docentes. En Magallanes, el 53 por ciento de los docentes son a contrata y el 47 por ciento titulares. La ley establece que los titulares no tienen problema al pasar, pero tenemos más de 700 profesores que no podrían pasar a los servicios locales de educación porque además va en contra de la ley. Ahora nos enteramos de la situación de que los contratos de nuestros colegas son al 31 de diciembre, por lo tanto la ley establece que el 1 de enero deben ser traspasados. De manera que esos 700 colegas no podrían ser traspasados, preocupación que también nos embarga en estos momentos.

Tenemos diez comunas, pero las escuelas rurales cuentan con menos de diez niños. Por lo tanto, algunos colegas que están trabajando en dichas escuelas, con menos de 20 alumnos, deberían hacer una escuela multigrado con un solo profesor, por lo tanto quedarían sin trabajo tres o cuatro docentes. Esa es nuestra preocupación. Incluso llegamos hasta el ministro y se lo planteamos, porque, además, ellos deben hacer cumplir lo establecido en la ley o regla del 80/20, y en Magallanes casi el 60 por ciento de nuestros colegas está a contrata. Se lo hemos dicho al seremi, a la intendenta y al ministro, pero ninguno de ellos ha hecho caso a esta situación, a lo preocupante que es esto al momento de ser traspasados.

También es preocupante la infraestructura de nuestros establecimientos, lo que bien grafican las fotos que presentó la diputada Girardi. Esta es una preocupación, porque sabemos que al momento de ser traspasados, los recursos no van a alcanzar para hacer esas mejoras; por lo tanto, eso nos juega en contra.

No nos oponemos a la desmunicipalización, pero sí a los servicios locales de educación en cuanto a cómo fueron planteados, porque no garantizan la seguridad de nuestros colegas y vulneran los derechos adquiridos, pasando por sobre lo establecido en la ley N° 21.040.

Sabemos que la respuesta para hacer frente a la problemática de la educación no es el traspaso a los servicios locales, ya que en la práctica se ha demostrado que no soluciona los problemas de fondo, sino que los profundiza.

La educación está en crisis. Lo ha estado por largo tiempo. Es importante hacer notar las implicancias que conllevan estos procesos, que responden a un modelo económico neoliberal, que busca solo desligar al Estado de su rol fundamental, como garante de derechos, dejando nuevamente a la educación pública en la más absoluta indefensión.

Hemos visto cómo los colegas que ya han sido traspasados a estos servicios han sido menoscabados en sus remuneraciones o en las horas de contrato. Ha habido despidos por necesidad de la empresa; muchos han sido sacados de sus funciones, cambiados de establecimiento, sin poder protegerse frente a esas situaciones, y sintiéndose cada día más agobiados y reprimidos por un empleador que no considera lo pedagógico. Un ejemplo de ello es que dentro del marco de su funcionamiento no hay implementación de planes de mejora en el aspecto pedagógico; por el contrario, dedican esfuerzos en mejorar sus planes de gestión administrativo financiera, mirando la educación solo como un bien de consumo.

Queremos luchar por la educación pública de nuestra región y también por nuestros colegas, para que estén bien y puedan entregar la educación que queremos

para los niños y niñas de Magallanes. Estamos en contra de los servicios locales y, como dijo el señor Oyarzo, solicitamos aplazar el proceso de instalación, tal como se hizo con los otros nueve. Ojalá ustedes nos escuchen, porque todas estas cosas nos juegan en contra.

El señor **Ramos**. La situación de los asistentes de la educación es gravísima, porque, de alguna manera, no se están reconociendo los derechos adquiridos que obtuvimos a través de una negociación colectiva, como corporación municipal. Esa es una de las peticiones grandes que planteamos al ministro de Educación en 2017.

El tema de la asignación de zona también es algo que conversamos muchas veces con la diputada Girardi -quizás algunos diputados se acuerdan de eso-, porque en este momento no hay claridad respecto del bono de zonas extremas. A nosotros nos pagan ese bono, pero no hay claridad respecto de esa asignación de zona, que podría otorgarse a los asistentes de la educación. En ese sentido, tenemos un dilema, porque no hay claridad respecto de qué va a pasar con eso.

Otro tema fundamental es el de las deudas. En la Corporación Municipal de Punta Arenas dicen que nos han pagado todo, pero no es así. Durante los últimos seis meses sí han pagado, pero hay lagunas de dos años o dos años y medio, tanto respecto del pago de imposiciones como de cotizaciones de salud, y, además, las deudas que tienen con las cajas son grandísimas.

Entonces, vamos a ser traspasados a un servicio local de educación, con todas esas deudas. Supuestamente, van a ser pagadas, y de eso se hará cargo la municipalidad, pero, ¿qué va a pasar con los intereses y con todo lo que ha pasado con nosotros, con la vulneración de nuestros derechos como trabajadores? Estamos en Dicom, no podemos sacar créditos, no podemos postular a una casa. ¡No podemos hacer nada! ¿Por qué? Porque estamos en Dicom, por culpa de la Corporación Municipal.

Miren lo que pasó con la Copeuch: en abril, cuando se pagaron los excedentes, la cooperativa comenzó a llamar a los socios para decirles que si no estaban al día en los pagos, no iban a recibir excedentes. ¿Cómo es posible que no nos paguen si a nosotros nos descuentan esa plata?

Creemos que hay muchas cosas que no están solucionados respecto de los asistentes de la educación, y quiero ser muy claro respecto de esto. Jamás hemos conversado ni un minuto con el seremi de Educación de Punta Arenas sobre el tema de los servicios locales de educación. Él no se junta con nosotros. ¡Así de simple!

Entonces, no basta hablar de los servicios locales de educación, pese al conocimiento que tenemos algunos dirigentes. Lo que ha estado pasando en los servicios locales de educación de las otras comunas es que la vulneración de los derechos de los trabajadores no se está tomando en cuenta. Básicamente es eso. Para cualquier trabajador, que no se le reconozcan sus derechos adquiridos o la pérdida de su trabajo, son temas inmensamente preocupantes.

Respecto de la educación, si la corporación municipal hace un estudio, nosotros, los asistentes de la educación, no estamos sobrando en los colegios. Nos falta gente para trabajar. Imagínense qué pasará si nos llegan a sacan un 15 o un 20 por ciento de los trabajadores.

37) El Presidente de la Asociación de Asistentes de la Educación de la comuna de Teodoro Schmidt, y dirigente de la Federación de Asistentes de la Educación del Servicio Local de Educación Pública de Costa Araucanía, señor Luis Frederich Astorga.

El señor **Frederich** expuso en la sesión 18ª[40], de fecha 9 de agosto de 2021, de la siguiente forma:

Como dirigentes del servicio local de Costa Araucanía, solicitamos este espacio para referirnos a la problemática del artículo duodécimo transitorio de la ley N° 21.109, que dice relación con los asistentes de la educación que sean traspasados a los Servicios Locales de Educación Pública. Este artículo señala que el Ministerio de Educación, conjuntamente con el Ministerio de Hacienda, efectuará, transcurrido un año desde la publicación de esta ley, un estudio de pertinencia, que se realiza un año después de la entrada en vigencia de nuestro estatuto. Este año se cumplió el 1 de octubre de 2019.

Entregaré la postura del sector y el sentir de los colegas asistentes de la educación que pertenecemos a los servicios locales. Para nosotros, desde el inicio, este artículo tiene un trato discriminatorio hacia nosotros, ya que, según nuestro conocimiento, es el único servicio público que se ha enviado a un estudio de pertinencia, lo que nos parece una tremenda injusticia y discriminación hacia nuestro sector, a pesar de que el artículo 3 de la ley Nº 21.109 nos da la calificación de empleados públicos, por lo que nos parece injusto y discriminatorio que los funcionarios de la administración de servicios locales, con sueldos mucho más elevados que nosotros, perciban esta asignación. No estamos en contra de que la perciban, pero sí estamos en contra de que, a pesar de que se nos califica como empleados públicos, no se nos entregue esta asignación, en consecuencia que tenemos sueldos promedio de 400.000 o 450.000 pesos, incluso, inferior.

Como asistentes de la educación, pensamos que el Estado de Chile, si de verdad quiere cambiar el sistema y escuchar el sentir de la ciudadanía, tiene que partir siendo un buen empleador y acortar la brecha de los empleados públicos. ¡Esto no puede seguir sucediendo!

Durante la pandemia, nuestros colegas han arriesgado su vida y la salud; en algunos casos, contagiándose de covid y enfermando gravemente. No obstante, nuestra entrega y colaboración a la educación de niñas, niños y adolescentes de nuestro país ha ido más allá: embarrándonos y mojándonos para llegar a todas las puertas de nuestros alumnos en zonas rurales, que tienen mucha dificultad geográfica, para entregar el alimento y el material pedagógico, lo cual, valga decir, hacemos con gusto y vocación de servicio, porque es nuestro trabajo.

Somos la llamada zona de rezago, a quienes la pandemia ha tocado muy fuerte el bolsillo, ya que somos comunas rurales donde el impacto económico y el encarecimiento de la vida son aún más fuertes, y con bajos ingresos en nuestro sector.

Créame, señor Presidente, que hemos sido afectados muy fuertemente en lo económico y, por su intermedio, solicitamos a esta comisión que oficie a los ministros de Educación y de Hacienda para que se pronuncien en esta materia, y por qué no decirlo, para ejercer presión al gobierno, ya que para nosotros esto pasa solo por voluntad política.

Nosotros hemos entregado todo lo que hemos podido en lo personal y en lo humano, pero no tenemos la misma respuesta del Ejecutivo. Necesitamos pronto una

---

[40] El acta de la sesión, que contiene su exposición íntegra, así como las consultas de los diputados y diputadas y sus respuestas, pueden encontrarse en el siguiente link: https://www.camara.cl/legislacion/comisiones/sesiones.aspx?prmID=2902&prmIdTipo=2103.
El video de esta sesión puede encontrarse en http://www.democraciaenvivo.cl/

respuesta concreta, ojalá, antes de que se defina el Presupuesto de la Nación, de manera de contar prontamente con esos recursos que tanto anhelamos.

Insisto, como funcionarios públicos, creemos que merecemos este derecho y nos sentimos discriminados desde el inicio de este artículo, porque si bien es cierto a los demás servicios públicos se les entrega esta asignación de zona -hasta donde tenemos conocimiento, no se ha hecho ningún estudio de pertinencia-, solo se entrega por el decreto ley N° 249.

En consecuencia exigimos y demandamos el mismo trato, ya que también somos empleados públicos.

38) El Alcalde de la comuna de Pudahuel, señor Ítalo Bravo Lizana.

El señor **Bravo** expuso en la sesión 18ª[41], de fecha 9 de agosto de 2021, de la siguiente forma:

Es muy difícil exponer en torno a una ley, a una política de Estado, que, a nuestro juicio, comenzó mal y que, de alguna manera, es una continuidad del espíritu de la educación de mercado que la Constitución de 1980 y la dictadura cívico militar instauraron en este país. Es una ley que no resolvía el problema de la educación pública y que no la entendía como un derecho, sino que más bien seguía fortaleciendo la lógica de la subvención a la demanda con la figura de los sostenedores ahora ya no municipales, sino con esta figura extraña de los servicios locales de educación. Como comuna, traspasamos 19 establecimientos al Servicio Local de Educación Pública Barrancas.

Quiero exponer sobre algunas situaciones que han vivido los profesores, las y los asistentes de la educación, así como las comunidades educativas en su conjunto. En cuanto a los trabajadores y trabajadoras, el traspaso se realizó sin respetar sus derechos adquiridos, entre ellos los convenios colectivos, lo que ha perjudicado, por ejemplo, el retiro pactado de algunos colegas que hacían su retiro del sistema para beneficiar el ingreso de nuevos profesores y nuevas profesoras. Hubo desorden administrativo, por lo cual se perdieron certificados de título y de trabajo de muchos trabajadores. También hubo demora en la entrega de documentos, lo que generó problemas de deuda, pues algunos profesores y asistentes de la educación no podían pagar las cuotas de sus créditos de consumo.

Desde el traspaso a la fecha, los establecimientos educacionales de Pudahuel no han tenido mejora alguna en materia de infraestructura. A pesar de contar con un departamento de mantención, ni siquiera se han realizado arreglos menores por goteras, cambios de puertas, vidrios rotos, entre otros, ni control de plagas de palomas y ratones.

Si bien se ha realizado el levantamiento de mejoras en los establecimientos, se habla de proyectos a largo plazo en los cuales la espera es de, a lo menos, dos años. No se ha realizado inversión alguna en mejoras tecnológicas, como la compra de computadoras, micrófonos o parlantes. Asimismo, los establecimientos no cuentan con señal de internet en las oficinas ni en las salas de clases, y la señal se habilita desde los celulares personales de los colegas, es decir, se comparte el wifi. Si bien se realizó una compra millonaria de chips para conexión a internet, estos llegaron en agosto, cuando la presión para volver a clases presenciales ya es inminente, o sea, dicha compra demoró más de un año.

Si ya se veía un notable abandono, después de la llegada de la pandemia y la suspensión de clases, el mal manejo presupuestario deja a Pudahuel y al territorio de

---

[41] El acta de la sesión, que contiene su exposición íntegra, así como las consultas de los diputados y diputadas y sus respuestas, pueden encontrarse en el siguiente link: https://www.camara.cl/legislacion/comisiones/sesiones.aspx?prmID=2902&prmIdTipo=2103.
El video de esta sesión puede encontrarse en http://www.democraciaenvivo.cl/

Barrancas sosteniendo la educación desde los bolsillos de los trabajadores. No se hace más entrega de recursos que algunos *laptops* viejos que había en escuelas, imponiéndose altos niveles de exigencia desde el servicio local respecto de la conectividad de los estudiantes sin realizar aporte económico alguno. Se agrava aún más la situación en los sectores rurales de la comuna, donde tenemos graves problemas de conexión.

También, en el sector rural, particularmente en la escuela Lo Boza, se hace el recorte de los buses de acercamiento. Es decir, por un lado se exige la vuelta a clases presenciales -creo que todos hemos escuchado al ministro, cuya obsesión parece ser el regreso a clases presenciales-, pero, por otro –en ese sector rural los niños llegaban a dicho establecimiento en buses de acercamiento que proporcionaba la municipalidad-, el Servicio Local de Educación ha recortado dichos buses, por lo tanto algunos alumnos no tendrán cómo asistir a clases en caso de volver a la presencialidad total. Aprovecho de saludar a los profesores y asistentes de la educación de la escuela rural Lo Boza, como también a los alumnos y sus familias. No hay reemplazo para las licencias médicas, aludiendo a una sobredotación de personal.

También, de manera informal, se menciona el posible cierre o fusión de establecimientos educacionales, debido a la baja matrícula. Como indiqué al inicio de mi intervención, la ley, aprobada por muchos de los diputados y diputadas que aún están en ejercicio de su cargo, no acabó con la lógica de la subvención; por lo tanto, cuando las escuelas no logran alcanzar un cierto número de matrículas están constantemente amenazadas por su cierre.

Debido a la supuesta falta de recursos para las actividades extraprogramáticas, deportes y cultura y al mal manejo que ha habido, se perdió el área extraescolar. Es decir, hoy tenemos una muy baja oferta de talleres extraescolares, artísticos y deportivos.

El servicio local alude constantemente al no tener recursos y estar limitado por los presupuestos del Ministerio de Hacienda y la respectiva glosa presupuestaria, sin embargo existen recursos para la contratación de servicios ATE (Asistencia Técnica Educativa) y perfeccionamientos de alto costo que no generan impacto ni mayor interés en sus participantes.

Sería interesante que ustedes, en cumplimiento de su rol fiscalizador, pudieran averiguar cuánto gastó el Servicio Local de Educación Pública Barrancas en capacitaciones, jornadas de autocuidado y contratación de ATE, que sabemos que en la mayoría de los casos se trata de procesos realizados por empresas que se aprovechan de la lógica mercantil para lucrar con los recursos que deberían ser de los estudiantes y sus familias.

Para ir terminando, en esta oportunidad me acompañan la señora Verónica Covarrubias, representante de jardines infantiles VTF Barrancas, y la profesora María Angélica León, presidenta del directorio comunal del Colegio de Profesoras y Profesores de Chile del Servicio Local de Educación Pública Barrancas.

En el caso de la señora Verónica Covarrubias, la preocupación de las comunidades de los jardines VTF es la amenaza de cierre de dos jardines de Pudahuel Norte. A nuestro juicio, no podemos permitir eso tanto en el caso de las escuelas como en el de los jardines infantiles.

Justamente, hemos venido a denunciar que mientras se contrata por millones a esas empresas que proporcionan las ATE y hay una administración central que todavía no responde -sea esta o la anterior- por una cantidad importante de recursos que fueron pagados sin factura -como ustedes deben saber, eso ocurrió y fue denunciado ante la opinión pública hace alrededor de un año-, hoy se amenaza a las comunidades educativas con un posible cierre, puntualmente a dos jardines infantiles de la comuna de Pudahuel.

Quiero reforzar la idea de que, más allá de quien administre -y quiero decirlo con total franqueza-, la ley de desmunicipalización no vino a resolver el grave problema que aqueja a la educación pública de Chile, por el contrario, perpetuó la lógica del mercado y del modelo, en el cual las comunidades educativas están a merced de la competencia por la matrícula y de la exigencia casi fundamentalista de la asistencia, porque dependen de una subvención.

Además, dicha ley no terminó con el nefasto negocio de las empresas que prestan servicios de asesoría educativa, básicamente la ATE, que podemos ver que, incluso en tiempos de pandemia, se han reinventado para seguir lucrando con los recursos que debieran ser de niños y niñas y de las comunidades educativas.

Quiero saludar tanto a la señora Verónica Covarrubias y, en su nombre, a las trabajadoras y los trabajadores de los jardines infantiles; a mi colega María Angélica León y, también en su nombre, a todas las comunidades educativas del Servicio Local de Educación Pública de Pudahuel y a las familias que nos manifiestan que sienten un total abandono por parte de la autoridad competente respecto de lo que quisiera ser una educación de excelencia en condiciones de dignidad para sus hijos e hijas.

Señor Presidente, le doy las gracias por el espacio que nos ha brindado la comisión. Les pedimos todo el respaldo y ayuda para que no haya cierres de escuelas ni de jardines, porque los niños, niñas y abuelos no pueden estar a la deriva respecto de su derecho, que es el derecho a una educación digna, a una educación de excelencia.

39) La Directora de Presupuestos del Ministerio de Hacienda, señora Cristina Torres Delgado.

La señora **Torres** expuso en la sesión 18ª[42], de fecha 9 de agosto de 2021, de la siguiente forma:

De acuerdo con el mandato de la comisión, que es el proceso de implementación de la ley N° 21.040, del Sistema Nueva Educación Pública, especialmente la instalación de los Servicios Locales de Educación, queremos contarle cuál ha sido la participación del Ministerio de Hacienda, puntualmente, de la Dirección de Presupuestos en la instalación de los Servicios Locales de Educación. Hemos distinguido siete hitos en el trabajo, en los cuales hemos participado en el pasado y participamos, actualmente, en este trabajo que se está efectuando de acuerdo al programa.

Voy a introducir brevemente cuáles son los reglamentos con los cuales se trabaja, así como los decretos que fijan el ámbito de competencia de cada uno de los servicios de supervisión de los Servicios Locales de Educación, su territorio, propiamente tal; luego, los DFL que establecen las plantas de cada uno de los servicios, la transferencia de recursos para el cumplimiento de sus funciones, el informe financiero propiamente tal, la formulación de los presupuestos y un breve resumen de los ingresos y gastos de los servicios educativos. A continuación pueden ver los reglamentos en los cuales participamos como Ministerio de Hacienda y como Dirección de Presupuestos en este proceso. Se trata de siete reglamentos.

El primero de ellos es el que dispone las funciones y atribuciones de los Servicios Locales de Educación. Este reglamento emana del artículo 18 de la ley N° 21.040. Puntualmente, es un reglamento del Ministerio de Educación, suscrito por el Ministerio de Hacienda, que va a determinar los criterios para la apertura, fusión o cierre de establecimientos educacionales.

---

[42] El acta de la sesión, que contiene su exposición íntegra, así como las consultas de los diputados y diputadas y sus respuestas, pueden encontrarse en el siguiente link: https://www.camara.cl/legislacion/comisiones/sesiones.aspx?prmID=2902&prmIdTipo=2103.
El video de esta sesión puede encontrarse en http://www.democraciaenvivo.cl/

Este artículo señala el criterio general para la apertura, fusión y cierre de cada uno de los establecimientos y luego el decreto aterriza en el contenido. Se optó por un decreto del Ministerio de Educación, el decreto N° 126 de 2019.

Luego, el artículo 24 de la misma ley, señala el procedimiento a través del cual se puede remover al director ejecutivo de un Servicio Local de Educación. Ese procedimiento establecía dos causales, la letra d) y la letra e), que son por el incumplimiento del convenio de gestión educacional o cuando un director actúa con negligencia en el desempeño de sus funciones. El tercer reglamento es el N° 30, que se tramitó a principios de 2021.

El artículo 27 de la misma ley dispuso la regulación de la asignación de recursos y emisiones de cuentas. Ese artículo dispone la forma general, y luego, un reglamento del Ministerio de Educación, suscrito por Hacienda, determinaba la distribución de los recursos y el procedimiento para el programa de fortalecimiento de educación pública. *Grosso modo*, para que ustedes recuerden, este artículo considera anualmente una asignación de 130 mil millones de pesos y este reglamento, N° 254, se tramitó en 2018.

El artículo 83 es el que crea el FAEP, el Fondo de Apoyo a la Educación Pública. Establece montos anuales y mecanismos de distribución; por ejemplo, para el 2021 se dispone un fondo de 150 mil millones de pesos.

A su vez, el artículo 10, transitorio, establece el reglamento correspondiente a la forma e instrumentos para la evaluación, procedimiento de solicitud y aprobación de la postergación del traspaso del servicio educacional. Una municipalidad o una corporación pueden solicitar al Mineduc postergar el traspaso al Servicio Local de Educación. Para eso la municipalidad tiene que cumplir una serie de requisitos y luego lo evalúa el Mideplan. Ese decreto, el N° 321, fue suscrito por Hacienda en 2018.

El artículo 7, transitorio, establece el Consejo de Evaluación del Sistema de Educación Pública. Ese consejo señala que cuando haya normas que el consejo sugiera o proponga, que tengan impactos presupuestarios, se debe requerir la opinión del ministro de Hacienda.

Finalmente, el artículo 44, que establece el Reglamento del Ministerio de Educación, suscrito por el Ministerio de Hacienda, regula los convenios de gestión educacional de los directores ejecutivos. Corresponde al decreto N° 82, y se dictó recientemente en agosto de 2021.

Pueden ver, desde el punto de vista legal y normativo, cuáles son todos los hitos en los que participa Hacienda. Este es el marco regulatorio de todos los servicios locales de Educación y nuestras funciones emanan de esa legislación.

En cuanto a las funciones generales que se nos otorgaron a través de la ley, existen dos artículos transitorios que disponen, mediante decretos de Educación, firmados por Hacienda, la determinación del ámbito de competencia territorial de los servicios locales, el domicilio, la denominación del servicio local y la comuna de instalación; el segundo establece la entrada en funcionamiento del Servicio Local de Educación, según un calendario de instalación, con las fechas correspondientes al inicio y término.

Enseguida, podemos distinguir cinco grupos de trabajo. En 2017, a través del decreto N° 373, se determinó el ámbito territorial de los primeros. Como señalé, esta facultad de suscribir los decretos del ministro de Hacienda sobre el ámbito de competencia territorial, domicilio y denominación de los servicios locales de educación, la podemos dividir en cinco hitos.

El primero es de 2017, a través del decreto N° 373, que estableció el ámbito territorial, puntualmente los Servicios Locales de Educación de Barrancas, Puerto Cordillera y Huasco; pero solamente de Barrancas y de Puerto Cordillera, los dos primeros, el N° 737, que entró en funcionamiento en 2017, y el segundo grupo,

correspondiente al decreto N° 379, que estableció el Servicio Local de Educación de Huasco y Costa Araucanía.

Un tercer grupo, a través del decreto N° 72, en 2019, estableció los Servicios Locales de Educación Andalién Sur, Gabriela Mistral y Chinchorro. En 2020, los cuatro últimos que aparecen allí, que es el decreto N° 74, estableció los Servicios Locales de Atacama, Valparaíso, Colchagua y Llanquihue.

Ahora estamos en la segunda etapa, la cual determina los 59 servicios locales de educación que se instalarán y funcionarán a partir de 2022 a 2025. El decreto N° 73 establece cuáles son esas agrupaciones de comunas que comprenden la instalación de esta siguiente etapa.

Los decretos que establecen la entrada en funcionamiento para 2022, son el N° 68, que ustedes pueden ver con un asterisco, de este año; el N° 69, que establece el grupo de comunas para 2023; el N° 70, para 2024, y el N° 71, para 2025, completando los 59 servicios locales de educación que corresponden a esta siguiente etapa dos, pero, en el fondo, al quinto decreto de determinación del ámbito territorial.

El tercer punto trata puntualmente del trabajo que hacemos en la Dirección de Presupuestos, que es la determinación de las plantas de personal. Como Dirección de Presupuestos, tenemos la facultad de determinar, en un trabajo conjunto, la planta de personal que es traspasada a un determinado servicio, y el número de funcionarios y el trabajo correspondiente a toda la revisión de los procesos involucrados. Este es un trabajo que hacemos siempre con cada uno de los decretos con fuerza de ley que se aprueban en el Congreso Nacional.

Generalmente, cuando se produce la creación de un servicio propiamente tal o el traspaso de un servicio a otro servicio, en general, nosotros, como Dirección de Presupuestos, trabajamos la determinación de la planta, decreto con fuerza de ley que, además, viene con la firma del ministro de Hacienda. Por eso trabajamos puntualmente esta determinación de la planta. No es algo que solamente hayamos hecho, como ustedes saben, puntualmente para los servicios locales de educación, sino que una función permanente que, como Dipres, realizamos.

Entonces, puntualmente, tiene que haber un traspaso desde las municipalidades o las corporaciones al gobierno central. Estos decretos con fuerza de ley, respecto del personal, van a ser correspondientes al servicio local en sus distintos estamentos: directivos, profesionales, técnicos, administrativos y auxiliares.

Se fija un número de cargos por cada grado asociado a ese estamento; además, se establecen en cada uno de esos decretos con fuerza de ley los requisitos del cargo; se determina el número máximo de dotación y se traspasa desde la municipalidad al nuevo servicio local de educación. Se determina la fecha de entrada en vigencia de la planta y, además, se traspasan bienes. Ese es el estándar tradicional y la estructura orgánica que tiene un decreto con fuerza de ley de planta.

En este caso, no ha sido la excepción y, como ustedes pueden ver en la lámina, se han dictado más de 60 DFL que fijan las plantas, porque son 70 los servicios locales de educación que tienen que ver su estructura de personal completa para su entrada en funcionamiento.

Entonces, en la primera lámina ustedes pueden ver los decretos que se dictaron en 2018 y 2019, correspondientes a los primeros servicios locales de educación. Ahí está el listado completo; no me voy a detener, pero en la primera columna está el servicio local de educación y en la tercera está la comuna que comprende cada uno de esos servicios locales de educación que ustedes, por intermedio del Presidente, en la comisión deben conocer con mucho detalle. La idea es que puedan ver que los decretos con fuerza de ley están dictados en los años 2018 y 2019.

Esta segunda lámina establece la siguiente agrupación de decretos con fuerza de ley, llegando a 46 en esta etapa, hasta enero de 2019. Y aquí completamos los 70 servicios que corresponden a todas las plantas de los distintos servicios locales de educación. Es decir, cada una de las municipalidades o de las corporaciones, al traspasar el servicio local de educación, determinó la planta que iba a conformar cada uno de los servicios. Puntualmente, en el caso del último que aparece ahí, que es Costa Itata, se determinó su estructura y el personal que va a ser traspasado.

La siguiente facultad que tenemos como Dirección de Presupuestos del Ministerio de Hacienda es la autorización de transferencia de recursos para contribuir al cumplimiento de los objetivos financieros de los servicios locales de educación.

Aquí tenemos dos normas que nos acompañan, artículos 26 y 34 transitorios, que puntualmente el Ministerio de Educación, con la visación de Hacienda, puede transferir a las municipalidades o corporaciones, según corresponda, recursos para contribuir al financiamiento de gastos incurridos que se consideren debidamente justificados; la segunda normativa, que es el caso de las municipalidades o corporaciones que no paguen total o parcialmente las deudas, que en este caso, ahí está el detalle, son deudas previsionales, puntualmente remuneracionales, pasa al servicio local educacional y el Ministerio de Educación, con la autorización de Dipres, pagará directamente a las instituciones o a las personas que corresponda esas deudas.

Es importante señalar que son dos aspectos los que se consideran: las obligaciones previsionales y las remuneraciones. En 2020, a través del oficio N° 1303, la Subsecretaría de Educación solicita autorización para el pago de 2.400 millones por concepto de deudas previsionales que una corporación municipal mantenía con exfuncionarios al momento del traspaso.

En agosto de ese mismo año -autorizado por la Dirección de Presupuestos del Ministerio de Hacienda-, se autorizaron aportes fiscales para pagar una situación puntual que era de la subsecretaría y se tramitó el decreto correspondiente por un monto de 2.000 millones de pesos, en una primera instancia, y luego, a través de saldos con convenio de FAEP, por 57 millones y por 388 millones.

En otro momento, en este año, la Subsecretaría de Educación, a través del oficio N° 4, también solicitó autorización para el pago de 66 millones por deudas remuneracionales de la misma corporación para dos exfuncionarios, pero esto ya obedecía a sentencias ejecutoriadas del tribunal.

En junio del presente año, habida cuenta de que se trata de una sentencia ejecutoriada, se autorizó el traspaso de recursos, en cumplimiento de las dos normas señaladas precedentemente, para que ustedes vean cómo va operando la norma.

Para ilustrar el proceso de asignación de recursos de la ley, estuvo regulado a partir de la regulación de la ley de Educación Pública, y que creó el servicio local de educación, a través de toda la estimación del flujo financiero que se trabajó en 2017 de un informe financiero. De ahí emana toda esta programación de recursos.

Para ello, se trabajó de la siguiente forma. En el caso de la DEP, se aceleró la instalación en los tres primeros años de funcionamiento, pero siempre se fue ajustando el valor al informe financiero, incluidos los recursos, porque ese era el marco normativo; el control financiero y el compromiso de recursos que se van a inyectar. Cada ley de Presupuestos ha ido inyectando esos recursos, pero con ciertos detalles.

En general, la ejecución presupuestaria se ha ido acelerando en la medida en que los servicios locales de educación van teniendo sus años de funcionamiento, lo que implica que vayan acelerando los procesos propios de todo nuevo servicio que se va instalando. En este caso en particular, como además se integra el trabajo municipal y el trabajo del nivel central, por supuesto que es un desafío de las distintas instituciones mucho más grande.

Respecto de los gastos administrativos de los Servicios Locales de Educación Pública, también se observa un gasto que está en línea con lo estimado por el Informe Financiero; sin embargo, el año pasado tuvo una pequeña subejecución de 4 por ciento, que es muy posible que se produjera a raíz de la pandemia, así que evidentemente puede haber una afectación.

En general, respecto de 2019 y 2020, los valores fluctuaron entre 89 y 85 por ciento, lo que obedece puntualmente a situaciones normales de instalación de servicios.

En el Informe Financiero, cuando se planteó la ley, se realizó un cronograma de disposición de recursos bastante desafiante e importante. Estamos diciendo que a 2027 podríamos hablar de un régimen. De hecho, en la última columna que ustedes pueden ver el régimen para cuando ya esté en funcionamiento completo toda la red de los Servicios Locales de Educación, funcionando en su totalidad. Asimismo, con todo el plan de personal de la dotación.

Este cuadro ilustra que la programación fue a diez años. Hoy nos encontramos en 2021, pero marcamos 2020. En la primera fila se observan los años que corresponden, el 2020 está marcado porque es un año que ya está cerrado, mientras que en el 2021 estamos en ejecución. Esto es lo que definió el Informe Financiero.

A la Dirección de Educación Pública se le asignaron recursos por 6.000 millones de pesos. Por ejemplo, en 2020 y en 2021, en régimen, podemos observar que esos recursos van a llegar a 8.000 millones de pesos. O sea, 2.000 millones más de lo que hoy conocemos específicamente.

En los Servicios Locales de Educación tenemos un presupuesto que ronda los 34.000 millones de pesos. Sin embargo, en régimen, cuando ya estén todos los Servicios Locales de Educación Pública -los 70-, veremos que ese presupuesto va a alcanzar los 226.000 millones de pesos. O sea, queda bastante todavía por incorporar al Presupuesto de la nación, desde el punto de vista de la organización técnica.

Para ilustrar cómo se comporta el Informe Financiero, el presupuesto vigente y el ejecutado, vamos a ver, desde el punto de vista de los años que ya están con cierre, o sea, 2018, 2019 y 2020. Aquí solo tenemos un gasto ejecutado el primer semestre, por tanto, no ilustra la realidad.

En la Dirección de Educación Pública ustedes pueden observar que en 2018 se asignaron recursos, de acuerdo al Informe Financiero. Lo que estaba estimado eran 4.700 millones de pesos; sin embargo, la ley de Presupuestos, producto de la formulación presupuestaria con todos los requerimientos, la entrada en funcionamiento u otros desafíos, se le asignaron 7.423 millones, pero lo que finalmente se ejecutó fueron 5.400 millones, muy en línea con lo que el Informe Financiero estimó, vale decir, un poco más de 1.000 millones, pero realmente más cercano a la ejecución del Informe Financiero.

En los Servicios Locales de Educación, el Informe Financiero estimó que el primer año se iban a repartir 8.035 millones de pesos. Lo que se asignó por ley fueron 8.200 millones y lo que se ejecutó eran 6.454 millones de pesos. Por lo tanto, se produjo una diferencia de aproximadamente 1.500 millones que no fueron ejecutados, asociados a los procesos de instalación.

En 2019 vamos disminuyendo, pero más o menos en la misma línea. Para la Dirección de Educación Pública, el Informe Financiero estimó 5.000 millones. Se aprobaron, por ley de Presupuestos, 7.000 millones y se terminaron ejecutando 6.200 millones. En los Servicios Locales de Educación, en la misma línea, el Informe Financiero estimó 6.200 millones; por ley de Presupuestos del año correspondiente, se les asignó una cifra muy similar, y se ejecutaron más o menos 1.000 millones menos.

En 2020, también. Aquí vamos a poner un asterisco, porque fue un año de pandemia. La asignación presupuestaria evidentemente se vio afectada, no solo en este caso puntual de los Servicios Locales de Educación. El Informe Financiero estimaba una demanda de recursos por 6.000 millones; por la ley de Presupuestos se le asignaron 6.900 millones y el presupuesto ejecutado ascendió a 5.900 millones.

En los Servicios Locales de Educación, respecto del presupuesto estimado del Informe Financiero, se asignó un monto un poco menor. También producto de la pandemia se restringieron algunos recursos, pero finalmente se terminaron ejecutando solo 20.000 millones.

Lo que queremos ilustrar es que los recursos estimados en el diseño de la ley conversaban perfectamente con lo aprobado en la ley de Presupuestos, incluso un poco más, pero la ejecución se acercó mucho más al Informe Financiero, totalmente en línea con la instalación de los Servicios Locales de Educación, salvo en 2020, que fue un año afectado por la pandemia y muchos servicios tuvieron un impacto, producto de eso.

Me voy a detener en la ejecución de la DEP propiamente tal. Junto con los Servicios Locales de Educación que crea la Dirección de Educación Pública, con un rol mucho más fuerte en la coordinación de los servicios locales de educación, es importante conocer cuáles son los recursos asociados a estos.

En 2018, el presupuesto vigente era de 6.954 millones de pesos y su ejecución ascendió al 72 por ciento; en 2019, el presupuesto vigente fue de 6.655 millones y su ejecución alcanzó el 90,1 por ciento, y en el presupuesto de 2020, la ejecución del presupuesto alcanzó el 86,1 por ciento, afectado por la pandemia.

En línea con los tres programas de la DEP, pueden ver en el cuadro, en la segunda parte, que el Programa 02 de la DEP también tiene en 2018 una ejecución de un 96,8 por ciento; en 2019, el 97,1 por ciento, y en 2020, un 97,3 por ciento.

Respecto del Programa 03 pueden ver que está un poco más en línea con el Programa 01. En 2018, su ejecución presupuestaria alcanza un 73,1 por ciento; en 2019, un 70,9 por ciento y, en 2020, 80 por ciento. Este programa tiene recursos bastante más bajos que el Programa 02, que es el que se lleva el fuerte de recursos de la Dirección de Educación Pública.

En el detalle, la asignación del subtítulo 21 –que ustedes pueden ver que es la primera fila de cada uno de los grupos de fila-, que es lo asociado a gastos en personal, es prácticamente completa, puesto que el personal es parte del gasto cierto. Son recursos para remuneraciones y sus componentes asociados al gasto en personal. Por tanto, se ejecuta la cifra completa, a diferencia de los casos del subtítulo 22 y del subtítulo 29, los que están asociados a la instalación de los Servicios Locales de Educación Pública y adquisición de activos financieros, que son puntualmente para la instalación propiamente tal, y en eso hemos tenido más dificultades en su ejecución.

Respecto de las dotaciones establecidas en la ley de Presupuestos, hay que recordar que esta ley es la que fija los cupos de dotación, que son 131 para 2018 y 2019 y, 151 y 156, para 2020 y 2021, respectivamente. Esta es una dotación fijada por ley de Presupuestos y que ha establecido un pequeño crecimiento hasta el presente año.

Como se señala en la lámina, la ejecución del Programa 02 de la Dirección de Educación Pública se explica puntualmente por las crisis corrientes de capital, que son del subtítulo 24. Al respecto, se pueden observar puntualmente las transferencias.

Ahora vamos a entrar al tema de la ejecución de administración de los Servicios Locales de Educación. Puntualmente voy a dividir los gastos de ejecución de administración y, luego, los servicios educativos.

Respecto de los gastos de ejecución de administración de los Servicios Locales de Educación hay una mejora sustantiva en los distintos subtítulos. Voy a ir a la lámina donde pueden ver la ejecución propiamente tal, distribuida por servicios. Son dos por cada uno de estos, y en este minuto tenemos instalados 11 servicios locales de educación. Por tanto, tenemos la ejecución de cada uno de los servicios con dos programas presupuestarios. En este caso, el programa 01 de la Subsecretaría, corresponde a los programas administrativos de cada uno de los servicios locales de educación, en todos sus distintos gastos agrupados en el subtítulo 21, que es el gasto en personal, y en los subtítulos 22 y 29, que los agruparé en lo que podríamos llamar la instalación o funciones propias.

Por ejemplo, en el Servicio Local de Barrancas hemos visto cómo ha mejorado su ejecución en el transcurso de los años. El primer año ejecutó un 75 por ciento del presupuesto; el segundo año, 88 por ciento, y el año pasado 96 por ciento, en línea con la existencia de tres años del servicio, y como pueden ver también la ejecución del gasto en personal se incrementó. El Servicio Local de Cordillera, lo mismo. El primer año, en 2018, ejecutó un 82 por ciento; sin embargo, en los dos últimos años ha ido ejecutando un 97 por ciento, y por supuesto también todo lo que es gasto en personal ha sido completamente ejecutado por este programa de educación.

El Servicio Local de Huasco lo mismo. El primer año tuvo una leve ejecución, el año siguiente mejoró y llegó al 93 por ciento. El Servicio Local de Araucanía lo mismo. Araucanía el año pasado tuvo una ejecución inferior, producto de la adquisición de activos financieros que baja la ejecución; sin embargo, se observa gasto en personal.

Podemos ver el segundo grupo: Chinchorro, Gabriela Mistral, Andalién Sur, Atacama, Valparaíso, Colchagua y Llanquihue. Los primeros, Chinchorro, Gabriela Mistral y Andalién Sur empezaron su ejecución en 2019 y 2020. Como pueden observar su gasto en personal casi por completo está ejecutado, a diferencia de los activos financieros, puntualmente el año 20; esto puede estar fuertemente influenciado por la pandemia. En el caso de 2020, Atacama, Valparaíso, Colchagua y Llanquihue, que son los servicios de este año, su ejecución se ha ido incrementando.

Al igual que en la lámina anterior, iré a la parte de los servicios educativos propiamente tales. El programa 02 de cada uno de los servicios. Los servicios que tienen tres años de funcionamiento también tienen una situación presupuestaria que ha ido incrementándose y puntualmente mejorando. Obviamente, estos programas de servicios educativos pueden haber tenido un impacto por la pandemia. En Barrancas, el año pasado, alcanzó un 90 por ciento; Cordillera, 86 por ciento; Huasco, 87 por ciento, y Araucanía, 81 por ciento. En el caso puntual de Chinchorro, Gabriela Mistral y Andalién Sur la afectación al año 20, también está ahí ilustrada: 89 por ciento, 88 por ciento y 87 por ciento, respectivamente.

Para terminar, me quiero referir brevemente a la determinación de ingresos y gastos de los servicios locales de educación. Respecto de los ingresos, el presupuesto para los servicios públicos se determina anualmente en la Ley de Presupuestos; sin embargo, estos tienen una particularidad, cual es que la mayoría de los ingresos son proyecciones, porque lo efectivo viene determinado por otras leyes, mientras que el gasto es una mezcla de marco de gasto, lo que los servicios vayan ejecutando producto de su servicio propiamente tal, y las obligaciones legales que emanan de distintas leyes.

El ingreso viene dado por el programa Subvenciones; por el programa de mejoramiento de infraestructura pública; por el Fondo de Apoyo a la Educación Pública (FAEP); por transferencia de la Junji (VTF); por asignaciones de la Subsecretaría de Educación y, para el caso particular del año 2021, por el fondo de emergencia transitorio, que están asociados puntualmente a materias de inversión.

Eso es lo que determina la programación de los ingresos de los servicios locales de educación, y que ustedes pueden ver en la presentación cómo cada uno de ellos se va ejecutando.

Respecto de los gastos, la determinación se realiza a través de los respectivos servicios administrativos de los servicios locales de educación, los que posteriormente son revisados y sistematizados por la DEP y autorizados por la Subsecretaría de Educación, quienes finalmente realizan la solicitud de recursos a la Dirección de Presupuestos en el caso de la formulación presupuestaria.

Las consultas, validaciones de información y actualizaciones durante el proceso de formulación y ejecución del presupuesto son coordinadas a través de la DEP y de la Subsecretaría de Educación. Sin embargo, debemos recordar que el presupuesto tiene que conciliar siempre todas las obligaciones legales, principalmente asociadas a remuneración. Todo lo que es gasto en personal se estima a través de planillas nominadas de funcionarios; por tanto, cada una de esas remuneraciones está completamente respaldada y contemplada en el presupuesto. Además, siempre tiene que contemplar en las restricciones el uso y destino de cada una de las asignaciones o subvenciones, que tienen sus normas especiales de ejecución, de acuerdo con las leyes sectoriales de educación, lo que es puntualmente de competencia del Ministerio de Educación y de la Dirección de Educación Pública, pero sigue las instrucciones como cualquier presupuesto de asignación.

Señor Presidente, esto es lo que podemos informar de parte de la Dirección de Presupuestos. Como pueden ver, el flujo de materias es bastante amplio, desde el punto de vista de recursos para perfeccionamiento, así como los recursos para el personal.

Finalmente, todo se engloba en este proceso de interacción e instalación de los servicios públicos, que ya es desafiante, como cualquier servicio, donde está el ministerio sectorial y el Ministerio de Hacienda disponiendo de los recursos. Pero en este caso en particular es mucho más desafiante, porque involucra a las municipalidades. Entonces, la competencia no está solo en el gobierno central, y también porque en año de pandemia, evidentemente, ha afectado la ejecución presupuestaria de varios servicios, pero en este caso vemos que la instalación ha estado de acuerdo al cronograma y la asignación de recursos ha estado puntualmente planteada en la ley. El programa 01 está según cada servicio local de educación e incrementaremos esos recursos, tal como ustedes lo vieron en el propio informe financiero que les he mostrado con asignación de recursos por local.

40) El Ministro de Educación, señor Raúl Figueroa Salas.

El señor **Figueroa** asistió a la sesión 18ª[43], de fecha 9 de agosto de 2021, acompañado del Subsecretario de Educación y de la Directora de Educación Pública. Expuso de la siguiente forma:

A modo de dejar debida constancia en el informe del trabajo que ha llevado adelante esta comisión, voy a mostrar una presentación bastante global de lo que ha sido el proceso de implementación de los servicios locales de educación pública y, en términos generales, de la ley que crea el sistema de Nueva Educación Pública. Obviamente, ustedes ya conocen algunos aspectos que mostraré y los podemos analizar más rápido, pero en otros me detendré con mayor precisión, en orden a que la comisión pueda tener una mirada global de lo que ha sido este desafío. Como todos entienden, a estas alturas es un desafío bastante complejo, pero que se ha podido llevar adelante cumpliendo con todos los rigores no solo de la ley, sino también de las

---

[43] El acta de la sesión, que contiene su exposición íntegra, así como las consultas de los diputados y diputadas y sus respuestas, pueden encontrarse en el siguiente link: https://www.camara.cl/legislacion/comisiones/sesiones.aspx?prmID=2902&prmIdTipo=2103.
El video de esta sesión puede encontrarse en http://www.democraciaenvivo.cl/

necesidades de la educación pública en un contexto, además, particularmente difícil, que es el contexto de la pandemia.

Creo importante combinar en esto lo que ha sido el esfuerzo de implementar uno de los cambios o las modificaciones estructurales probablemente más complejos que hemos tenido que ver en el último tiempo y cómo eso se ha combinado con una pandemia que ha sido uno de los fenómenos más difíciles que debido enfrentar el país y el mundo en los últimos cincuenta años. Sin duda, ese contexto es importante.

Implementar la Nueva Educación Pública es un desafío enorme que hemos asumido como una política de Estado. Convertir la educación pública en una opción, en una alternativa de calidad para las familias, aumentar la matrícula por la vía de hacerla atractiva para las familias y que los apoderados puedan optar por una educación de calidad impartida por el Estado a través de los servicios locales de educación pública es el propósito que hemos tomado y que entendemos es un propósito que va mucho más allá de un gobierno. En términos del diseño de la ley, queda en evidencia que va mucho más allá de un gobierno, es una política de Estado y bajo esa lógica lo hemos asumido y seguiremos trabajando en ello.

En términos bastante generales, son los antecedentes que acompañan a esta ley y su implementación; las características que hoy tiene la educación pública; cómo se ha ido implementando la ley N° 21.040; las principales observaciones o conclusiones del Consejo de Evaluación del Sistema de Educación Pública, y cómo se ha ido marcando el compromiso con la educación pública.

No quiero abundar demasiado en esta materia, pues ustedes conocen los antecedentes, pero estamos hablando de un cambio estructural que apunta a crear nuevas instituciones que tienen un régimen de funcionamiento distinto al cual estábamos acostumbrados en materia de educación pública, que tiene por objeto que el Estado provea una educación gratuita y de calidad, a través de establecimientos educacionales de su propiedad y administración que forman parte de los servicios locales de educación pública. Esto significa traspasar desde los 345 municipios que hoy tenemos, y sea directamente administrado por los municipios o por corporaciones municipales, a nuevos 70 servicios locales de educación pública, que son órganos públicos, funcionales y territorialmente descentralizados, con personalidad jurídica y patrimonio propio, y que tienen una lógica de administración diferente a la de los municipios.

A modo de ejemplo, en materia presupuestaria se rigen por la estructura presupuestaria de la ley de presupuestos que se tramita año tras año. Solo ese elemento tiene una serie de implicancias diferentes a lo que hoy ocurre con los municipios. Estamos hablando de más de 6.500 jardines infantiles, escuelas y liceos que trabajan en red, todos los cuales hoy componen la educación pública.

El objetivo es profesionalizar la administración del servicio educativo. Eso es lo que se buscó con estos nuevos servicios locales de educación pública. De hecho, muchos de ustedes participaron en el debate que generó la ley y recordarán cuáles fueron las diferencias y los consensos. En ese sentido, hubo un consenso fundamental tendiente a profesionalizar la educación pública administrada por los municipios.

Cabe recordar que hubo varios proyectos de ley anteriores que generaban otros elementos similares, en algunos casos con mayor presencia territorial y en otros con menor presencia territorial, y se terminó en este modelo, como dije, de 70 servicios locales de educación pública, órganos públicos, descentralizados, con patrimonio propio, que, además, tienen participación local, los consejos locales elegidos por la comunidad educativa, un comité directivo que supervisa el adecuado desarrollo estratégico y la rendición de cuentas del servicio.

Hoy tenemos 11 servicios locales de educación en marcha. Son los que se han implementado durante este período de gobierno. Recuerden que apenas

asumimos el gobierno nos tocó la implementación inmediata y ya se venía trabajando en dos servicios; luego, otros dos más a mediados de año y vamos a terminar con 11 servicios en funcionamiento. Y, luego, los 59 servicios locales de educación restantes, que se deben implementar hasta el año 2025.

Sobre esto me voy a anticipar. En la presentación se señala 2025-2030, pero, como ustedes saben, el consejo de evaluación no estuvo por prolongar hasta el año 2030 la implementación de los servicios, salvo que se tomen otras medidas legislativas, lo que obliga a que la implementación de los 59 servicios locales restantes se lleve adelante entre los años 2022 y 2025.

En la implementación han participado, prácticamente, todos los actores de la administración del Estado: el Ministerio de Educación, la Dirección de Educación Pública, la Dirección de Presupuestos, el Congreso Nacional -de hecho, aquí estamos en una instancia que apunta, precisamente, a velar por la adecuada implementación de estos servicios- la Contraloría General de la República, el Servicio Civil, los municipios, etcétera. Insisto, esto es importante, es una de las modificaciones estructurales al aparato estatal más relevante que hemos tenido que implementar en el último tiempo.

Hay un desafío para implementar un nuevo sistema con el funcionamiento paralelo de la educación municipal. Esto genera una serie de desafíos que son importantes, como mantener los incentivos de la educación municipal para que la calidad no disminuya, para que la atención y la conservación de los inmuebles y el proceso educativo no se vean afectados por la expectativa del traspaso. Se ha hecho un trabajo inmenso, a través de los convenios de anticipación y otros instrumentos para mantener viva la atención de los municipios en el sistema educativo, más aún hoy día, en un contexto de pandemia, que lo ha hecho todo mucho más complejo.

Y todo esto se traduce en que la acción del Ministerio de Educación abarca a toda la educación pública en un contexto de pandemia -como decía-; el apoyo los estudiantes de la educación municipal; de los servicios locales de educación y como se contribuye a mejorar los traspasos de los servicios locales en un proceso en que hemos aprendido muchísimo y donde ese aprendizaje, ciertamente, ha repercutido en la mejor implementación de los servicios que tenemos y de los que vendrán más adelante.

Esto es algo que ustedes conocen, pero creo que siempre es bueno recordar la magnitud del desafío. La matrícula escolar, en general, en Chile, es de 3.615.000 alumnos, lo que incluye, también, a los kínderes y prekínderes. De ellos, 1.286.648 están en la educación pública; 5.117 establecimientos; 81.000 niños matriculados en jardines que se financian vía transferencia de fondos; 1.515 jardines vía transferencia de fondos; 112.000 docentes y casi 83.000 asistentes de la educación. Todos son datos de enero de este año. Entonces, la magnitud de este proceso es enorme y no podemos nunca dejar de atender ese elemento.

Aquí hay una tabla que muestra cómo se va distribuyendo la matrícula en la educación pública: cuánto está en los servicios locales y cuánto está en los municipios. Ustedes ven como hoy solo tenemos 11 servicios que están instalados: tenemos un 13,5 por ciento de la matrícula que pertenece a servicios locales de educación y, obviamente, tenemos esa misma fracción, en términos proporcionales, en docentes, en asistentes de la educación y también la matrícula en el mundo de la educación parvularia. Esto ha ido avanzando en el tiempo, pero estamos en los inicios, en la primera fase de implementación de este sistema.

En este escenario de transición a un nuevo servicio y en un contexto de pandemia, los esfuerzos del Ministerio de Educación y sus órganos han estado en entregar el apoyo a toda la educación pública, a través de diversas líneas de acción: en infraestructura; programas pedagógicos y mejora educativa; el apoyo durante la pandemia, que ha sido muy relevante, y el fondo de apoyo a la educación pública

como un instrumento específico de financiamiento adicional para la educación pública, que tiene que ver tanto con recursos que reciben los servicios como los municipios y también con los instrumentos de transición que se han ido desarrollando.

En infraestructura es bien relevante, porque se han hecho esfuerzos enormes para aumentar el presupuesto en infraestructura público. Vemos como entre los años 2017 y 2021, el presupuesto destinado a infraestructura escolar pública tuvo un aumento de más de 100.000 millones de pesos, esto es un 116 por ciento. Solo entre el 2020 y el 2021 aumentó del orden de un 65 por ciento. Hoy tenemos 186.948 millones de pesos de presupuesto destinado, específicamente, a las mejoras, a la conservación de la infraestructura de la educación pública. Es el presupuesto más alto, el de 2021, en esta materia, en los últimos años. Habría que comparar, creo que solo fue más alto en los períodos de reconstrucción del terremoto de 2010. Por lo tanto, tenemos un avance enorme en materia de recursos asignados a las mejoras en infraestructura de la educación pública.

A continuación me referiré a programas pedagógicos y mejora educativa; los Liceos Bicentenario. Ustedes saben que hoy tenemos 320 liceos Bicentenario y 29 de estos establecimientos son parte de los servicios locales de educación, llegando a 17.462 estudiantes. Tenemos Liceos Bicentenario en todos los servicios que están operativos.

El programa Escuelas Arriba, que ha tenido, además, una transformación importante como un mecanismo de reacción frente a las necesidades propias de la pandemia y de la merma en los aprendizajes que esta ha significado en Chile y en el resto del mundo. Es un plan de recuperación y de nivelación que apunta desde el tercero básico hasta segundo medio. En 2019, teníamos 32 establecimientos de servicios locales de educación; en 2020, teníamos 60 y este año 2021 se incorporan aún más.

Los programas Sumo y Leo Primero, en su primer año llegó a 6.000 establecimientos escolares; 250.000 estudiantes de primero a cuarto año básico; 14.000 docentes y 12.000 directivos como un elemento clave para asegurar que durante la educación básica, específicamente en el primer ciclo de educación, los niños y niñas puedan alcanzar el nivel de comprensión de lectura adecuado, que es un tema central para su desarrollo posterior, y que además, como prácticamente todo lo que nos ha tocado llevar adelante, se ha visto particularmente golpeada esta área por la pandemia. La educación a distancia hace más complejo que niños que no saben aprendan a leer, por lo que se han generado una serie de modificaciones a este programa para adecuarlo, tanto a los métodos de educación a distancia como también una vez que han recuperado la presencialidad esos establecimientos.

Programas de conectividad. Están en conectividad 20-30 y con una iniciativa que busca contribuir a la disminución de la brecha digital y proveer de conectividad de alta capacidad a todos los colegios, a lo largo del país, que reciben aporte del Estado. Este año son más de 8.300 escuelas que tendrán acceso a internet de alta velocidad y el próximo año llegamos a un 99,9 por ciento de los colegios en Chile. Creemos que esto es muy potente y se vincula con aulas conectadas, que apunta no solo a que los establecimientos tengan acceso a una red de banda ancha de alta velocidad, sino a que se puedan iluminar las salas de clases para hacer del acceso a internet un proceso que llegue, efectivamente, a todos. Esto, además, se ha apurado como consecuencia de las necesidades que quedan en evidencia por la pandemia.

Aula360, es un programa que pone a disposición de los establecimientos una plataforma digital interactiva, con recursos digitales, alineados a las bases curriculares de asignaturas y especialidades de tercero y cuarto medio. Es bien importante, porque permite profundizar la posibilidad de electividad en estos cursos y, por lo tanto, se ha ido avanzando bajo esa lógica.

Los textos escolares en línea, que también ha sido una herramienta fundamental durante este período de pandemia específicamente, así como una serie de acompañamientos que han ido avanzando de la mano del proceso educativo durante este período, particularmente enfocados en la pandemia: La plataforma Aprendo en Línea, más de 10 millones de usuarios, 539.000 descargas semanales de material que está a disposición; el canal de televisión TV Educa Chile, que ahora se transformó en la señal cultural de Televisión Nacional de Chile y NTV.

Recordemos que hace un año no existía la señal NTV, pero, gracias a un esfuerzo conjunto del Ministerio de Educación, de la Asociación Nacional de Televisión de Chile (Anatel) originalmente y, luego, de Televisión Nacional de Chile, también, de la Asociación Regional de Canales de Televisión de Señal Abierta de Chile (Arcatel) y del Consejo Nacional de Televisión, pudimos levantar un canal con programación especialmente dedicada a los niños y, obviamente, no solo con el objeto de entretener, sino, fundamentalmente, de educar por esa vía.

Además, está la entrega periódica de material educativo o físico; la red Tutores para Chile; los preuniversitarios gratuitos, con más de 35.000 inscritos; las alianzas que suscribimos con la Asociación de Empresas de Telecomunicaciones (Atelmo) para que Aprendo en Línea fuese libre de costo; la Biblioteca Digital Escolar, con más de 11.000 títulos disponibles y un promedio de cerca de 1.840 préstamos diarios; el Aprendofm, que es un mecanismo para llegar a través de la radio, con particular foco en el mundo rural; las canastas de la Junaeb y la alianza con Google, la cual permitió que hoy todos los colegios del país tengan aulas virtuales disponibles, pese a que al iniciar la pandemia prácticamente ningún establecimiento educacional utilizaba dichas aulas.

Si se concentra lo descrito en los Servicios Locales de Educación Pública, los esfuerzos del ministerio abordan toda la educación, porque nos interesan todos los alumnos, pero hoy hay un particular foco en la educación pública, ya que actualmente es administrada por los Servicios Locales de Educación Pública.

Cada uno de los servicios adquirió *tablets, notebooks*, banda ancha móvil y chips de internet para ir en directa ayuda de las comunidades educativas, permitiendo la continuidad del aprendizaje. Las cifras están disponibles en la presentación y dan cuenta de cómo, en cada uno de los servicios locales, se llevaron adelante procesos de adquisición, bajo esta lógica. De este modo, se mejoró el aprendizaje a distancia de más de 65.000 integrantes de la comunidad educativa durante el 2020, potenciándolo el 2021.

Otro apoyo es el plan Aprendo en Casa, el cual comprende no solo una plataforma, sino una serie de elementos pedagógicos que se fueron incorporando para hacernos cargo de todos los alumnos, es decir, los que tenían acceso a internet y los que tenían mayores dificultades en el mundo rural, en el que existen impedimentos estructurales en materia de conectividad.

El plan logró beneficiar a 3.731 establecimientos, llegando con material físico, fundamentalmente a establecimientos rurales o con bajo acceso a internet, centros del Sename y escuelas hospitalarias, y benefició a 420.000 estudiantes. De los 3.731 establecimientos mencionados, más de 34.000 estudiantes pertenecen a algún Servicio Local de Educación Pública.

Además, está el proyecto Prendo y Aprendo; es decir, son muchas las iniciativas. La presentación solo es una síntesis y no quiero prolongar demasiada mi exposición con estos aspectos.

En relación con los apoyos en pandemia, la prevención de la deserción escolar es un foco fundamental del trabajo del Ministerio de Educación. Se levantaron propuestas, desde una mesa técnica transversal, para prevenir la deserción escolar en el contexto de la pandemia. Antes de la pandemia, ya veníamos trabajando el

tema, pero ciertamente se generó un impacto mucho mayor y nos obligó a acelerar una serie de procesos.

Entre las medidas adoptadas está la creación de la herramienta de contacto que permite a los establecimientos monitorear a los alumnos. Dicha herramienta fue implementada y utilizada por más de 2.300 establecimientos mensualmente, alcanzando una cobertura aproximada de 800.000 estudiantes, lo que permitió bajar los niveles de deserción que se proyectaban. Esperábamos el doble de deserción escolar y tuvimos niveles de deserción promedio, en relación con las cifras que veníamos arrastrando como país, las cuales son preocupantes, pero no llegamos a niveles tan altos como los que se proyectaron.

Por lo tanto, creemos que en ese sentido hubo un trabajo importantísimo, en el cual los Servicios Locales de Educación Pública tuvieron un rol fundamental, porque, además, permitieron pilotear, originalmente, muchas de estas herramientas, como fue el caso del Sistema de Alerta Temprana, entre otras, para llegar a todos los establecimientos del país.

En materia de convivencia escolar, el programa Convive en la Escuela y la entrega de la bitácora de autocuidado docente son elementos que apuntan a generar una cultura de convivencia en los establecimientos educacionales.

El programa Convive en la Escuela es sobre la gestión efectiva de las convivencia escolar, mientras la bitácora docente es un instrumento especialmente diseñado para los profesores, a fin de que puedan reflexionar y hacer un trabajo personal sobre la base de cuatro claves: recuperación, relaciones interpersonales, sentido de propósito y manejo de las emociones. Dicho instrumento nos permitió ir en ayuda de los docentes y, por esa vía, también entregarles herramientas para que pudiesen acercarse a sus alumnos de mejor manera, en este contexto complejo.

También, implementamos el Kit de Aprendizaje Socioemocional y medidas para la prevención de conductas de riesgo.

Todas las mencionadas son herramientas que se diseñaron especialmente en el contexto de la pandemia para poder ir en ayuda de los docentes y alumnos, desde el punto de vista socioemocional, que sabemos en uno de los elementos que ha sido más complejo durante este tiempo y que ha golpeado con mayor fuerza a las comunidades educativas.

Se ha hecho un trabajo muy potente en materia de la recuperación de las clases presenciales. En ese sentido, es interesante observar que el 84 por ciento de los establecimientos que pertenecen a Servicios Locales de Educación Pública se encuentran con clases presenciales, en comparación con un 32 por ciento de los establecimientos dependientes de los municipios.

Esta comparación es bien relevante, porque, de alguna manera, confirma un diagnóstico: era necesario profesionalizar. Obviamente, hay experiencias interesantes en los municipios, pero el hecho de ir profesionalizando la administración de la educación pública permite también que, con el mismo financiamiento estatal, se generen espacios de recuperación más expeditos en el mundo de los Servicios Locales de Educación Pública. Creemos que es positivo, habla bien del sistema de los Servicios Locales de Educación Pública y muestra que, efectivamente, si uno despeja ciertas dificultades políticas que, lamentablemente, a veces están asociadas al proceso educativo y a la educación pública, y profesionaliza su administración, los resultados son diferentes.

Respecto del Fondo de Apoyo a la Educación Pública (FAEP), la ley N° 21.040 modificó el Fondo de Apoyo a la Educación Pública, especificando, con sus objetivos, la mejora de la calidad del servicio a cargo de las municipalidades y la facilitación del traspaso del servicio educativo.

Se han realizado una serie de modificaciones a su reglamento, con el objeto de simplificar su destino y ejecución.

Se elaboró una nueva resolución que establece nuevos criterios, requisitos y procedimientos de distribución de estos recursos, flexibilizando, desburocratizando y simplificando su utilización y, por esa vía, se logró un gasto mucho más pertinente.

Asimismo, se simplificó e hizo más eficiente el proceso, regulando, formalmente, la utilización de medios electrónicos en el proceso administrativo del fondo, permitiendo que todas las solicitudes no se deban realizar en papel, lo que agiliza todo este espacio.

Se ampliaron los plazos de ejecución para asegurar que los recursos efectivamente lleguen, en un contexto de mayor flexibilidad e incorporando la posibilidad de invertir en proyectos de inversión que impliquen un aumento en la capacidad de atención, siempre que no superen el 30 por ciento del valor de reposición del establecimiento, y en jardines infantiles VTF para la obtención del reconocimiento oficial.

Adicionalmente, las mejoras de gestión en la administración de este fondo permitieron el 2020 anticipar un 20 por ciento de los recursos en el primer semestre, en comparación con el 5 por ciento promedio de los cuatro años anteriores. Por lo tanto, hay una mejora sustantiva en la ejecución acumulada. Se observa que, a junio de 2021, la ejecución acumulada del FAEP es de un 96 por ciento, mientras en el 2018 era de un 17 por ciento.

Por último, ¿cuál es el estado actual de la implementación de la nueva educación pública? Tenemos 10 reglamentos, se han dictado 71 decretos con fuerza de ley que fijan las plantas de los servicios locales y la planta de personal de la Dirección de Educación Pública (DEP), 11 comités directivos locales, siete consejos locales constituidos, 67 convenios de transición y convenios de ejecución, y la definición del ámbito territorial de los 70 servicios.

Además, el Consejo Nacional de Educación aprobó la Estrategia Nacional de Educación Pública y la Modalidad de Reingreso Educativo, la cual se diseñó sobre la base de un piloto desarrollado en los propios Servicios Locales de Educación Pública.

Asimismo, se han hecho 68 concursos ADP para cargos de primer y segundo nivel jerárquico; se perfeccionaron las normas del traspaso a los Servicios Locales de Educación Pública, a través de la ley N° 21.152; la Contraloría evacuó 55 dictámenes para interpretar la ley N° 20.040, lo que ha significado la incorporación de esta gestión a la cultura propia del derecho administrativo, y se tomó razón de 11 decretos de nombramiento de los Servicios Locales de Educación Pública.

Como señaló la directora de Presupuestos, señora Cristina Torres, desde la Dirección de Presupuestos: Flexibilizaciones para ejecutar el presupuesto y modificaciones presupuestarias; una glosa presupuestaria para incrementar las dotaciones durante el año académico; la eximición de autorización de Dipres para compras y para participar en proceso de compras coordinadas para recursos tecnológicos, lo que lo hace más ágil.

Se ha trabajado con los municipios en el traspaso del personal, de los recursos financieros y de los bienes inmuebles. En virtud de la acción de todos esos órganos, hemos implementado la nueva educación pública en 9 regiones del país y en 41 comunas, abarcando un total de 658 establecimientos educacionales y 151 jardines infantiles traspasados.

Desde el municipio se ha traspasado un total de 29.978 trabajadores de la educación, entre docentes y asistentes de la educación; de los cerca de 944 cargos disponibles en los 11 servicios, 771 han logrado ocuparse con personal traspasado desde los municipios a través de concurso interno, y el resto a través de concurso público; se ha traspasado un estimado 1.800.000 bienes muebles y 856 bienes

inmuebles, y, a través de una serie de decretos de este año, se agrega la gradualidad a la implementación, tal como recomienda el Consejo de Evaluación del Sistema de Educación Pública en su evaluación intermedia que, como dije, no autorizó extenderlo hasta 2030, aunque hizo hincapié en lo importante que es hacer esta implementación de manera gradual.

En la lámina 34 pueden ver un nuevo calendario de la implementación de los Servicios Locales de Educación Pública. Una primera etapa que termina en 2021 con la creación de los servicios que ya comentamos, y la segunda etapa que se inicia en 2022, con la entrada en funcionamiento de los servicios locales de Iquique, Licancabur, Maule Costa, Punilla Cordillera, Aysén y Magallanes, para que comiencen a funcionar con los establecimientos en 2023. Es decir, en 2022 se crean los servicios; en 2023, inician su funcionamiento y el resto se implementará a partir de 2024.

En esta lámina les muestro una tabla para que vean cómo se ha avanzado en materia acumulada, en matrícula, docentes, asistentes, a lo largo de todo el territorio nacional.

En cuanto a la situación actual, les puedo indicar que en el proceso de instalación de la primera etapa se ha avanzado en identificar una serie de problemas, dificultades, y sobre esa base, estamos buscando soluciones. Se ha acumulado una experiencia muy valiosa para mejorar los procesos, para utilizar mejor los instrumentos establecidos en la ley para la implementación, con enfoque en lo pedagógico, en infraestructura, en las mejoras en los traspasos.

Es posible que la señora Grebe haya planteado lo que les muestro en esta lámina, pero quiero acotar que lo que ven se relaciona con el desarrollo de un modelo pedagógico para los Servicios Locales de Educación Pública, que apunta a que los temas no se centren exclusivamente en lo operativo y en lo administrativo, ya que lo pedagógico debe ser un elemento central dentro de las preocupaciones de los Servicios Locales de Educación Pública.

Dentro de los principales avances, hay que decir que se ha trabajado en la coordinación y adecuación de las políticas nacionales a la realidad local.

La Ley de Presupuestos de 2021 establece un fondo de iniciativas educativas para los servicios locales para el desarrollo e implementación de proyectos educativos; para la recuperación de aprendizajes, prevención de la deserción, y, también, el bienestar socioemocional.

Los principales avances en infraestructura son el aumento sostenido en los recursos destinados a proyectos de inversión –ya se los mostré, y mostrábamos la importante alza, sobre todo para 2021-; el apoyo a los 11 servicios en la elaboración de una cartera de proyectos robusta, que les permita mejorar las condiciones de infraestructura y equipamiento de un número importante de establecimientos; un plan de asistencia técnica que contempla la contratación de profesionales para el desarrollo de proyectos, con foco en intervenciones integrales que, por un lado, permitan adaptar los espacios educativos a las pedagogías propias de la actualidad y, por otro, obtener el reconocimiento oficial de los jardines infantiles, que es un desafío en el que seguimos avanzando, y convenios firmados entre la Dirección de Educación Pública y el Ministerio de Energía para desarrollar otros 22 proyectos de conservación integral, que incluyen los lineamientos del Plan “Mejor Espacio, Mejor Educación”, junto con medidas orientadas a mejorar la habitabilidad y eficiencia energética de los establecimientos educacionales.

La cartera de proyectos ha ido en aumento, llegando en julio de 2021 a 137 proyectos, en comparación con los 87 que hubo entre 2019 y 2019, pero solo para los servicios locales. Estamos diciendo que en esta cartera de proyectos no están incluidos los que avanzan en materia municipal.

Además, estamos trabajando en el catastro de infraestructura. Recuerden que el último catastro se realizó luego del terremoto de 2010. Lo estamos actualizando para mejorar la toma de decisiones y focalizar el financiamiento en aquellos establecimientos que presenten más deterioro, tanto en cantidad como en gravedad.

En materia de traspaso del servicio educativo se han adecuado los planes y convenios de transición a la realidad de cada comuna, estableciéndose actas constitutivas con objetivos y metas específicas asociadas a cada realidad, considerando la situación particular de cada una, para efectuar un mejor traspaso, lo cual permitió iniciar un proceso de fiscalización más pertinente y más adecuado por parte de la Superintendencia de Educación.

También se avanzó en el pago de la deuda de la Municipalidad de Cerro Navia, estableciendo procedimientos, en coordinación con la Contraloría General de la República. Recordemos que en esta comisión discutimos las complejidades que tuvo la determinación de esa deuda, lo cual implicó demoras, porque no había una deuda determinada y, mientras no lo estuviese, no se podía seguir avanzando en esa materia.

Otro de los avances consiste en que se ha buscado generar instancias de colaboración entre la DEP y otras instituciones del sistema educativo, con el fin de desarrollar un trabajo conjunto que repercuta en una mejor instalación y operación de los servicios locales.

Por último, el Consejo de Evaluación del Sistema de Educación Pública lo preside el subsecretario de Educación, quien estuvo presente en la sesión. Desde la subsecretaría se han coordinado las instancias de reunión del consejo; se ha prestado apoyo técnico para que este pueda tener a su disposición todo el material necesario para cumplir sus funciones.

Este consejo se constituyó en septiembre de 2018 y ha tenido múltiples reuniones; entregó su informe intermedio, y ha invitado a actores tanto de la sociedad civil como de la orgánica propia de los servicios locales, otros órganos que participan en educación y, ciertamente, los mismos Servicios Locales de Educación. Se hizo una serie de estudios que fueron parte central del insumo necesario para el trabajo del consejo: uno de la Universidad Católica, otro de la consultora ClioDinamica, la cual fue contratada específicamente para ese efecto. Además, se han entregado los informes anuales de seguimiento de la puesta en marcha, así como la evaluación intermedia.

¿Cuáles son las principales conclusiones de esa evaluación intermedia? Primero, sobre la extensión de la segunda etapa de implementación no hubo acuerdo de la mayoría de los miembros del consejo para respaldar la extensión. Por lo tanto, se mantienen los plazos originales, esto es hasta 2025.

Sin embargo, se recomienda incorporar la gradualidad en la segunda etapa, y por eso los próximos servicios locales son solo seis, para ir generando un espacio de mayor acompañamiento y mantener una lógica gradual, que -opinión que compartimos con el consejo- es muy necesaria para velar por la mejor implementación de estos servicios.

Respecto de las conclusiones del trabajo del consejo debemos decir que hay un proceso constante de aprendizaje; que detectamos debilidades importantes en la gestión de los municipios a la hora de realizar los traspasos tanto de los bienes inmuebles, de los recursos financieros como del personal, lo cual ha ido quedando en evidencia y, por lo mismo, hemos estado obligados a focalizar nuestros esfuerzos en ese sentido.

Además, ha habido dificultades para completar los equipos de los servicios locales, especialmente de los directores ejecutivos y subdirectores, debido a la falta de profesionales que cumplan con las competencias adecuadas.

Uno de los objetivos del consejo es profesionalizar más los servicios. Por lo tanto, se pusieron estándares exigentes, y en algunos territorios fue más difícil completar las ternas, por la misma razón.

Por otra parte, hay una necesidad evidente de seguir desarrollando una cultura organizacional participativa en los servicios. También detectamos que hay falta de conocimiento respecto del funcionamiento y reglas que implican un servicio público. En eso se ha avanzado desde la DEP para generar esta conciencia y esta nueva cultura, y, por supuesto, para potenciar aún más la coordinación entre los diversos actores, que es un elemento central del sistema.

Por último, los principales desafíos. La necesidad de instalar mayores capacidades en los servicios locales de educación es el desafío que tiene toda la educación pública, pero se hace más evidente con esta nueva institucionalidad, tanto en materias relativas a la administración financiera, presupuestaria, de contabilidad gubernamental y la Ley de Compras Públicas.

Hay una cultura de la administración pública que tiene que incorporarse, pero eso no significa burocratizar los servicios, sino, precisamente, incorporar una cultura de un Estado moderno, que sea parte de la nueva gestión de los servicios locales de educación y, en base a la experiencia de esta primera etapa, avanzar en mejoras normativas que permitan un adecuado traspaso del servicio educativo, estableciendo mecanismos que permitan un mejor comportamiento, particularmente, de los municipios antes del traspaso, y optimizar la gestión administrativa para enfocarse en materias pedagógicas y mejorar, así, la calidad de la educación.

IV. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES.

A. CONCLUSIONES.

Ya expuestos los antecedentes que la Comisión Especial Investigadora ha recogido en sus sesiones, este acápite presenta las conclusiones de la Comisión en cuanto a la implementación de la ley sobre Nueva Educación Pública, en particular, en relación con la instalación y funcionamiento de los nuevos Servicios Locales de Educación Pública y, principalmente, dado que constan mayores antecedentes, se refiere al funcionamiento del Servicio Local de Barrancas.

1. Conclusiones sobre la instalación de todos los Servicios Locales de Educación Pública.

a) Introducción: una mirada al contexto y la necesidad de contar con una nueva educación pública.

La ley N° 21.040, que crea el Sistema de Educación Pública, nace en mensaje presidencial, **buscando sentar las nuevas bases para renovar y fortalecer la educación pública** que, desde el traspaso de la educación pública a las municipalidades, viene presentado un progresivo deterioro a nivel nacional. La Fundación 2020, en 2016, confirma lo anterior indicando: *“El deterioro de la Educación Pública ocurre de forma transversal en el sistema educativo chileno: en jardines infantiles, colegios y educación superior.* ***Después de la reforma de los 80, la matrícula de estudiantes en establecimientos públicos cayó a la mitad****. Esto ocurrió por distintos problemas, entre ellos, el sistema de “voucher”, que incentiva la competencia de matrícula entre colegios públicos y subvencionados para recibir la*

subvención estatal."[44] Este traspaso implicó un cambio radical en la estructura que se venía gestando desde la Independencia, a uno donde los Municipios o Corporaciones Municipales pasaron a administrar los establecimientos educacionales, obligando al sector público municipal a competir con un sector privado (con fin de lucro) y apostando a que sea esta competencia, la que finalmente redundaría en un mejoramiento de la "calidad educativa". En este escenario, son los diferentes sostenedores, públicos y privados, los responsables de alcanzar "la calidad" y el Estado se constituye en un mero observador y girador de recursos, abandonando y "delegando" en terceros, la responsabilidad del proceso educativo. Sin duda "*El Estado chileno realizó un proceso de municipalización mal diseñado e irresponsable de municipalización mal diseñado e irresponsable en los años 80´ y observó con total pasividad cuando los municipios dejaban caer la educación pública"* (Waissbluth, cambio de rumbo).

Una situación paradójica es el Simce, instrumento diseñado para evaluar "calidad" que termina convirtiéndose en uno de los principales mecanismos para desarrollar una competencia efectiva.

Lamentablemente, esa forma de administrar la educación provocó una serie de falencias, principalmente por la administración de recursos, acompañada de la reducción ostensible de las matrículas en las escuelas públicas, produciendo grandes diferencias presupuestarias entre las comunas a causa de los distintos niveles de ingresos que posee cada una de estas[45].

Antes de la publicación de la ley de nueva educación pública, el escenario educacional se configuraba en base a la segregación económica y la selección de los estudiantes, haciendo de la educación pública un espacio poco propicio para que los niños se desarrollen.

De hecho, según el informe PISA 2009, tenemos el sistema escolar más segregado del mundo, reiterado por el Foro Chileno por el Derecho a la Educación quienes agregaron: *"La segregación es una de las principales consecuencias de la privatización del sistema (...) el 70% de los estudiantes de escuelas municipales son de escasos recursos y el 75% de los alumnos de escuelas privadas son de hogares con mayores ingresos."*[46]

Igualmente, Mario Waissbluth, caracteriza al sistema educacional chileno como un verdadero apartheid educativo y señala que: *"hemos incrementado la creación de guetos socioeducativos para ticos y también para pobres, donde las escuelas están más segregadas que los barrios".* El impacto de esta política, no solo se manifiesta en los malos resultados de la educación chilena, sino también en problemas de convivencia, polarización y falta de cohesión social.

De esta forma lo ha señalado el economista de Fundación Sol, Marco Kremerman en columna para Chileduc: "*Las principales consecuencias de este proceso, 30 años después, son:*

---

[44] https://educacion2020.cl/noticias/4-infografias-clave-para-entender-los-problemas-de-la-educacion-chilena/

[45] http://www.chileduc.com/portal/2015/06/24/el-sistema-de-financiamiento-de-la-educacion-en-chile-una-mirada-critica/

[46] https://www.elmostrador.cl/noticias/pais/2014/12/04/chile-tiene-el-sistema-de-educacion-mas-privatizado-entre-los-paises-de-la-ocde/

i) Reducción ostensible de la matrícula pública, pasando de un Sistema Público con complemento privado (78% de matrícula municipal y 15% de particular subvencionada) a un Sistema Privado con complemento público (37% de matrícula municipal y 54% particular subvencionada);

ii) Comunas y familias endeudadas;

iii) Comunas más ricas pueden destinar más recursos a sus escuelas;

iv) Altos niveles de Segregación escolar;

v) Escasos avances en "Calidad" (Definición difusa y en disputa);

vi) Territorios sin planificación y sólo expuestos a incentivos de mercado;

vii) Privatización exógena o "de" la educación pública chilena y privatización endógena o "en" la educación pública chilena."[47]

Dada esta precarización de la educación pública, esta nueva ley busca además, incidir sobre la calidad del proceso educativo, reconfigurando el sistema y devolviéndolo al Estado, para lo cual se propone: hacer explícita y activa la responsabilidad del Estado por la calidad de la educación que imparte[48], garantizar y potenciar una gestión descentralizada, ya que hasta ese entonces "*la debilidad institucional de la educación pública municipalizada ya era visible en 1988, cuando se reconocía que el 94,5% de los municipios presentaba déficit financieros en su área educación"* -Mensaje de la ley N° 21.040- creando una nueva institucionalidad, especializada en gestión educacional y fortaleciendo la educación pública. Incluso los informes de la OCDE sobre política educacional del año 2004, el del Consejo Asesora Presidencial para la Educación del año 2006, que señala expresamente: *"Se requieren cambios sustantivos en la institucionalidad educativa, los que deben comenzar con una ley sustitutiva de la actual LOCE, que le otorgue legitimidad y garantice efectivamente el derecho a una educación de calidad."*[49], y el del Panel de Expertos para una educación de calidad del año 2011[50], venían señalando el déficit de la institucionalidad de la educación pública. [51]

Uno de los principales objetivos del nuevo Sistema de Educación Pública planteados en la ley está orientado a entregar a los niños, niñas y jóvenes de Chile una **educación pública, gratuita y de calidad**, considerando las particularidades locales y regionales, garantizando el ejercicio del derecho a la educación de conformidad a lo dispuesto en la Constitución Política de la República. Desafortunadamente, en el proceso de implementación de los Servicios locales de Educación Pública, el Estado no se ha encontrado a la altura de las expectativas que consagró en los fundamentos de la ley[52] que crea la nueva educación pública y que buscaba resolver, tales como:

---

[47] http://www.chileduc.com/portal/2015/06/24/el-sistema-de-financiamiento-de-la-educacion-en-chile-una-mirada-critica/

[48] Historia de la ley N° 21.040. Página 10.

[49] http://educacion2020.cl/wp-content/uploads/2012/10/informe_final_de_consejo_asesor_presidencial_para_la_calidad_de_la_educacion.pdf

[50] Alvarado, Arellano, Aylwin, Beyer, Brunner, Krebs, Matte, Molina, Pavez, Romaguera, Rosso & Zalaquett (2011). Panel de Expertos para una Educación de Calidad, 2011. Fortalecimiento de la Institucionalidad Pública. Informe Final

[51] https://www.oecd.org/chile/educacion-en-chile-9789264288720-es.htm

[52] Historia de la ley N° 21.040 página 7, 8 y 9.

1.- La ausencia de horizontes de desarrollo y proyección a largo plazo: ello producto de la influencia de los ciclos político - electorales de los municipios, quienes tienen el desarrollo de la educación pública dentro de su territorio y que en general, provoca discontinuidad en las políticas y trabajo realizado producto del cambio de las autoridades municipales, obstaculizando la implementación y evaluación de las orientaciones nacionales y locales.

2.- La baja rendición de cuentas y dilución de responsabilidades: esta causa nace de la baja o inexistente rendición de cuentas sobre lo propiamente educacional y de la falta de prioridad en la administración de los establecimientos educacionales, producto de que no es percibida por la ciudadanía con la importancia que merece como deber municipalidad.

Adicionalmente, la ambigüedad en la delimitación de responsabilidades provoca que la administración y el rol técnico pedagógico se dividan, quedando este último en manos del Ministerio de Educación, diluyendo responsabilidades entre múltiples intervinientes.

3.- Capacidades dispares e insuficientes: esto dice relación con la insuficiencia y disparidad de capacidades y recursos que poseen los municipios para dar cuenta de las exigencias que implica administrar establecimientos educacionales. Así se aprecia que, existen mayores aportes municipales en donde los estudiantes son más aventajados, acrecentando las desigualdades. A su vez, se observan limitadas capacidades del Municipio para otorgar apoyo técnico - pedagógico.

4.- Atomización y escala inadecuada:[53] Este caso, refiere a la existencia de cientos de municipios, donde cada uno nace y se desarrolla como un sostenedor independiente y aislado, con baja coordinación territorial y un funcionamiento desarticulado. Por otro lado, se aprecian diferencias de tamaño al comparar el 10% de sostenedores comunales de mayor matrícula escolar con el 10% inferior, revelando que los primeros son 15 veces más grandes que los segundos. Esto provoca a su vez, graves problemas en: i) la contratación de equipos en número y calidad suficiente, ii) la generación y consolidación de redes de intercambio profesional y directivo, iii) el aprovechamiento de las capacidades de gestión e infraestructura y iv) las posibilidades de heterogeneidad social y cultural.

Este nuevo sistema de educación, busca entonces, superar las deficiencias del antiguo sistema municipal, pero más bien, parecieran estar repitiéndose las mismas prácticas, y surgiendo los mismos problemas, por ejemplo con el déficit financiero del sistema, debido a que esta nueva educación sigue sometida a una lógica de competencia por la captación de alumnos que permita alcanzar el máximo nivel de financiamiento posible a través del “*voucher”*.

Así, las deficiencias se siguen manteniendo, no solo en términos pedagógicos, además, se ha generado un nulo mejoramiento estructural de las escuelas, liceos y jardines y se ha evidenciado una falta de recursos tecnológicos que ayuden a los niños, niñas y jóvenes a que se garantice efectivamente su derecho a la educación. Esta última situación toma especial relevancia en el contexto de las nuevas necesidades que se han creado a partir

[53] Historia de la ley N° 21.040 página 7,8 y 9.

de las condiciones sanitarias que vivimos y seguiremos teniendo en Chile y el mundo.

Se agrega a ello el proceso de gradualidad en la implementación de ley, y los graves conflictos que ha generado para las comunidades educativas, el retardo e incapacidad para actuar en tiempo y forma, como concluiremos más adelante.

Efectivamente, la ley fue publicada el 16 noviembre de 2017, y esta contempla un proceso gradual en su implementación. El objetivo principal para contemplar una gradualidad era, precisamente, detectar aquellas situaciones que requieren de correcciones a través de cambios legislativos o actos administrativos. Es más, el mensaje presidencial de la ley contempla un capítulo por el cual explica el modelo de implementación gradual, con la finalidad de "*permitir la acumulación de aprendizajes y la realización de ajustes y mejoras entre una etapa y otra. Todo ello, con pleno resguardo de los derechos de quienes hoy trabajan en el sistema y de sus expectativas y potencial para seguir contribuyendo en él. Adicionalmente, esta gradualidad permitirá recoger y aprovechar al máximo las buenas prácticas que existen hoy en la educación municipal, proyectándose e integrándolas al nuevo sistema, y postergando hacia las etapas finales del proceso, a la mayor parte de aquellas comunas con mejores resultados y capacidades".*[54]

Por su parte, el Consejo de Evaluación del Sistema de Educación Pública, contemplado en el artículo séptimo transitorio de la ley N° 21.040, desde el año 2018, ha realizado informes anuales de seguimiento de la puesta en marcha del sistema de educación pública[55], y en ellos, se advierten numerosas alertas y se realizan diversas recomendaciones para subsanar las situaciones más críticas detectadas. Ahora, estas recomendaciones, realizadas por el organismo encargado de analizar la manera en que se está implementando el nuevo sistema de educación pública, no se han traducido en proyectos de ley por parte del Ejecutivo, que procuren subsanar las problemáticas detectadas. Por el contrario, solo se crearon algunos de los reglamentos[56], todos ellos establecidos en la ley, y que, a la fecha de los informes, aún estaban pendientes y su urgente tramitación fue requerida por el Consejo, siendo esta una obligación legal propia del ejecutivo, que se desprende de los incisos cuarto y quinto del artículo séptimo transitorio de la ley.

---

[54] Historia de la ley N° 21.040. página 13.

[55] Informes disponibles en el siguiente enlace: https://educacionpublica.cl/centro-de-documentacion-dep/

[56] Reglamentos establecidos en la ley N° 21.040:
-Artículo 18 letra k): Apertura, fusión o cierre de establecimientos educacionales.
-Artículo 24: Remoción del Director Ejecutivo.
-Artículo 27: Distribución de los recursos y procedimientos para asignación del Programa de Fortalecimiento de la Educación Pública.
-Artículo 38: Comité Directivo Local.
-Artículo 44: Instrumentos de gestión educacional a nivel territorial.
-Artículo 58: Consejos locales de educación pública.
-Artículo 64: Coordinación regional.
-Artículo décimo transitorio: Forma e instrumentos para evaluación y procedimiento de solicitud y aprobación del requerimiento de postergación del traspaso del servicio educacional.
-Artículo quincuagésimo transitorio: Reglamento de las disposiciones transitorias.

Actualmente se encuentran publicados los siguientes reglamentos:

1.- Decreto N° 104, que crea el Consejo de Evaluación del Sistema de educación Pública.

2.- Decreto N° 101, sobre Comités Directivos Locales.

3.- Decreto N° 102, sobre Consejos Locales de Educación Pública.

4.- Decreto N° 254, sobre asignación de recursos del Programa de Fortalecimiento de la Educación Pública (artículo 27).

5.- Decreto N° 126, para la determinación sobre apertura, fusión o cierre de establecimientos educacionales dependientes de los servicios locales (artículo 18 letra k).

6.- Decreto N° 321, que regula la postergación del traspaso del Servicio Educacional (artículo décimo transitorio).

7.- Decreto N° 133, sobre la coordinación regional (artículo 64)

8.- Decreto N° 30, sobre remoción del Director Ejecutivo de los SLEP. Este último publicado en junio de 2021.

Es necesario dejar constancia, que a la fecha se encuentra pendiente el Reglamento que regula los instrumentos de gestión educacional territorial consagrados en el párrafo 4°, artículo 39 a 46 de la ley N° 21.040.

b) Proceso de Instalación.

El proceso se inicia entonces, por la Región Metropolitana, con las comunas de Lo Prado, Pudahuel y Cerro Navia, conformando el Servicio Local de Barrancas y, en Coquimbo, con las comunas de Coquimbo y Andacollo, llamado Servicio Local Puerto Cordillera en junio de 2018. Estos Servicios Locales de Educación (ahora en adelante e indistintamente, “SLEP”) que ya se han instalado, presentan una serie de problemáticas que se expusieron durante la comisión investigadora evidenció durante su labor y que se plantean en el presente informe. A modo de resumen, y antes de ahondar en ella, podemos destacar problemáticas respecto a la administración de los SLEP, que han traído como consecuencias, el no pago de deudas previsionales, el descuido de la infraestructura de los establecimientos educacionales, el abuso laboral con los trabajadores de la educación, la falta de coordinación, colaboración y comunicación entre los diferentes partícipes del servicio, el incumplimiento de la ley, entre otros tantos conflictos que afectan en distintos grados y dimensiones a los SLEP ya instalados.

Por otra parte, la implementación del nuevo sistema de educación pública no ha contribuido a que nuestros niños, niñas y adolescentes tengan una mejor educación, ya que se sigue profundizando la brecha entre los sectores más vulnerables y los más acomodados, debido a que, claramente, el objetivo de mejorar el sistema de educación pública no ha sido acompañado por una adecuada gestión del Estado, provocando un incumplimiento grave a la ley de nueva educación pública, la cual detallaremos y adentraremos más adelante, y con indicadores que no dan cuenta de un mejoramiento en los niveles de educación de las niñas, niños y adolescentes de Chile. De acuerdo a los últimos datos registrados, estos se mantienen o empeoran.

De esta forma, lo revela el Informe de la Agencia de la Calidad de la Educación que analiza el servicio educacional provisto por los SLEP durante

la primera etapa de su proceso de instalación del año 2020, que estudia las proporciones a nivel nacional de estudiantes por Estándar de Aprendizaje. A modo de ejemplo, en el caso de Lectura, el SLEP de Barrancas posee un 74% de sus estudiantes en estándar de insuficiente según el currículum nacional y solo un 6% en nivel Adecuado, teniendo las menores proporciones respecto de la estadística nacional. Así, en los últimos años, 7 u 8 de cada 10 estudiantes de Barrancas obtienen resultados Simce que se encuentran por debajo de lo esperado[57].

A modo general, el mismo informe señala:

"En resumen, los resultados Simce de los Servicios locales ya traspasados, y de aquellos territorios que pasarán a formar parte del sistema durante 2020, ***se encuentran por debajo de las medias nacionales*** *y de los establecimientos particulares subvencionados de las comunas que las conforman. Si bien se observan diversas trayectorias para cada Servicio Local y asignatura,* ***esta característica se ha mantenido constante en el tiempo a pesar del cambio de sostenedor público****. En concordancia con esto, las proporciones de estudiantes con conocimientos y habilidades insuficientes en relación al currículum nacional, es en todos los Servicios y en los establecimientos públicos de los territorios estudiados, superior a lo que se observa cada año a nivel nacional y en el sector particular subvencionado.".*[58]

A mayor abundamiento, uno de los componentes del Sistema de Aseguramiento de la Calidad de la Educación, clasifica a los establecimientos educacionales de acuerdo al resultado obtenido de una "evaluación integral", denominada: categoría de desempeño. La página web de ayudamineduc.cl, señala que su propósito es *dar cumplimiento al deber del Estado de propender a asegurar el derecho de todos los estudiantes a tener las mismas oportunidades de recibir una educación de calidad*.[59] La asignación distingue a los establecimientos en distintos tipos de desempeños: Alto, medio, medio-bajo e insuficiente, siendo Altos aquellos establecimientos cuyos estudiantes obtienen resultados que sobresalen respecto de lo esperado, Medio aquellos con resultados similares a lo esperado, Medio Bajo aquellos con resultados por debajo de lo esperado e Insuficientes aquellos que obtienen resultados muy por debajo de lo esperado.

Para el caso del Servicio Local de Barrancas entre el año 2016 y 2018, los resultados fueron los siguientes:

---

[57] Análisis del Servicio Educacional Provisto por los Servicios Locales de Educación durante la primera etapa de sus procesos de instalación. Agencia de Calidad de la Educación. Páginas 65 y 69

[58] Análisis del Servicio Educacional Provisto por los Servicios Locales de Educación durante la primera etapa de sus procesos de instalación. Agencia de Calidad de la Educación. página 69.

[59] https://www.ayudamineduc.cl/ficha/categoria-de-desempeno-de-establecimientos-educacionales

Categoría desempeño educación básica Barrancas (2016-2018)

Nivel	2016	2017	2018	% categoría barrancas	% categoría nacional
Alto	_	_	1	2	15
Medio	11	11	13	28	54
Medio -bajo	15	16	17	37	24
insuficiente	17	18	15	33	8
total	**43**	**45**	**46**	**100**	100

Fuente: Subdirección apoyo técnico pedagógico. Área de seguimiento y monitoreo SLEP BARRANCAS

De acuerdo a la tabla anterior, podemos observar que la categoría de desempeño en educación básica, en relación al nivel insuficiente se mantiene en un 33% de las escuelas del SLEP BARRANCAS siendo muchísimo mayor al promedio nacional de un 8%. A su vez, se visualiza que antes de entrar en vigencia la ley **el nivel medio se mantiene sin mayores diferencias y el nivel insuficiente, incluso, aumenta** entre el año 2016 y 2017.

Para el caso de la categoría de desempeño en educación media del servicio los indicadores son los siguientes:

Categoría desempeño educación Media Barrancas (2017-2018)

Nive	2017	2018	% categoría 2018 barrancas	% categoría 2018 nacional
Alto	-	-	-	16,3
Medio	2	2	22	52,9
Medio -bajo	2	2	22	22,7
insuficiente	3	3	56	8,1
total	**7**	**7**	**100**	**100**

Fuente: Subdirección apoyo técnico pedagógico. Área de seguimiento y monitoreo SLEP BARRANCAS

Es decir, durante los años 2017 y 2018, no existe variación alguna, y nuevamente la categoría insuficiente supera con creces la media nacional.

El abandono y la negligencia del Estado es uno de los puntos que más se abordarán en las conclusiones, debido a que expondremos cómo los propósitos y objetivos de la nueva educación pública no han sido cumplidos ni se cumplirán, si no hay una corrección en el rumbo, si el ejecutivo no modifica aspectos estructurales que se mantienen, como por ejemplo, el financiamiento por subvención y si no se hace cargo de las recomendaciones que se plantean en el informe del consejo de evaluación.

c) Rol del Director de Educación Pública.

El cargo de Director de Educación Pública es el cargo más importante creado en la nueva ley de educación pública. De esta forma, el mismo mensaje de la ley recalca su valor, señalando: *"Su objeto es la coordinación de los Servicios Locales de Educación Pública, velando por que éstos provean una educación de calidad en todo el territorio nacional. Asimismo, propondrá al Ministerio de Educación, la política nacional de fortalecimiento de la educación pública.*" Esto, a su vez, se concreta en los artículos 60, 61 y 62 de la ley N°

21.040, el cual establece que, el Director es el jefe superior del servicio y a quien corresponde la conducción estratégica y la coordinación del Sistema, velando para que los Servicios Locales provean una educación de calidad en todo el territorio nacional y para lo cual el Servicio deberá elaborar la Estrategia Nacional de Educación Pública, vigilando su cumplimiento y evaluando el desempeño de los Servicios Locales, además de prestarles apoyo técnico y administrativo en el marco de sus funciones.

El artículo 62 de la ley N° 21.040, consagra sus funciones y atribuciones, correspondiéndole:

a) Dirigir, organizar y administrar el funcionamiento del servicio, velando por el desarrollo y mejoramiento de la calidad de la educación pública, considerando la Estrategia Nacional de Educación Pública, las políticas, planes y programas elaborados por el Ministerio de Educación.

b) Proponer al Ministerio de Educación la remoción, cuando corresponda, de los Directores Ejecutivos de los Servicios Locales.

c) Ejecutar los actos y celebrar los contratos necesarios para el cumplimiento de los fines del servicio.

d) Delegar atribuciones o facultades específicas en funcionarios bajo su dependencia, de conformidad a la ley.

e) Ejercer las demás funciones y atribuciones que le encomienden las leyes.

A lo anterior, se suman las propias de la Dirección de Educación Pública especificadas en el artículo 61.

Como podemos ver, y en conjunto con las 20 atribuciones propias del Servicio, le corresponde, como principal misión el mejoramiento de la calidad de la educación, entendido como el ejercicio *“que debe llevar a explicitar qué tipo de escuela queremos, sobre qué valores la construiremos, qué procesos pedagógicos se privilegiará (en el más amplio sentido) y qué vínculos estableceremos entre calidad educativa y proyecto de sociedad.”.*[60]

Fue así que, como comienza el proceso de designación del primer Director, con fecha 20 de noviembre de 2017, donde la ex Presidenta Michelle Bachelet a través del decreto N° 0385 nombra a Rodrigo Egaña como el primer Director de Educación Pública, mientras se efectuaba el proceso de selección pertinente, quien duró en su cargo hasta noviembre de 2018. En marzo de 2018 la ex Presidenta dejó su cargo, y, por tanto, la nueva administración del Presidente Sebastián Piñera debía iniciar el proceso de designación formal del director.

Producto de la falta de manejo de la entidad, la autoridad Ministerial declaró desierto el concurso de Alta Dirección Pública, el 07 de noviembre de 2018. Esto significó que asumiera como directora Subrogante doña María Francisca Johansen, la que había llegado al cargo de Jefa de la División de Asuntos Económicos y Financieros, y, tal como evidencian los medios de

[60] Mejoramiento de la Calidad de la Educación: (mucho) más allá de las pruebas estandarizadas. ver: http://www.opech.cl/inv/documentos_trabajo/calidad.pdf

comunicación, había manifestado estar en contra del proceso de desmunicipalización.[61]

El nuevo concurso se inició 5 meses después, en marzo de 2019 y, no fue hasta el 1 de julio de 2019, a través del decreto N° 206, que asume el cargo formalmente y en conformidad a lo dispuesto en el inciso segundo del artículo quincuagésimo séptimo de la ley N° 19.882, doña María Alejandra Grebe Noguera.

La incertidumbre en la designación inmediata del cargo directivo más importante de la nueva ley de educación pública, se vio entorpecido por el nuevo gobierno del Presidente Sebastián Piñera, dejando transcurrir un semestre con subrogación en la conducción nacional del nuevo Sistema. A su vez, la acusación constitucional contra la ex Ministra de Educación Marcela Cubillos, mencionaba que entre diciembre de 2018 y abril de 2019 se solicitó la renuncia de las jefaturas de casi todos los cargos que se encontraban en el segundo y tercer nivel jerárquico de la dirección, lo que en consecuencia provocó que, al no existir reemplazos, no se permitiera un adecuado traspaso de los SLEP que tienen que implementarse este año. Además, producto de ello, varios cargos y equipos quedaron sin el liderazgo correspondiente.[62]

Por la misma razón, los SLEP estuvieron con ausencia de titulares por más de 6 meses en los cargos directivos, desde su implementación, afectando directamente la gestión y el liderazgo de los nuevos servicios, a lo que se sumó el retraso en la elaboración del Reglamento para constituir los Comités Directivos Locales.

En consecuencia, la falta de provisión oportuna de los cargos públicos y su inicial acefalía, demuestra la omisión del Estado en relación a la nueva responsabilidad que le asigna la ley, de hacerse nuevamente cargo de dirigir y mejorar el sistema, relativizando la importancia del cargo de la Dirección Nacional de un nuevo sistema público, con todos los errores y negligencias que ello puede conllevar.

d) Administración de recursos por parte de la DEP y fiscalización en su ejecución.

La administración en el uso de los recursos otorgados a la Dirección de Educación Pública (en adelante e indistintamente, “DEP”) y estos a su vez a los SLEP, conlleva un mecanismo de interoperabilidad en donde uno recibe los fondos y el otro debe encargarse de la asistencia y vigilancia para sean utilizados en lo que efectivamente fueron solicitados. Sin embargo, la DEP a quien le corresponde la conducción estratégica y la coordinación del sistema, se desentiende del proceso de fiscalización de estos recursos indicando que los SLEP son órganos funcionales y territorialmente descentralizados que se relacionan con el Presidente de la República a través del Mineduc, mientras que la DEP, al ser un órgano centralizado, es dependiente del Mineduc y por

---

[61] ver: https://www.elmostrador.cl/noticias/pais/2019/09/30/la-deficiente-ejecucion-de-ley-de-nueva-educacion-publica-el-talon-de-aquiles-de-la-ministra-cubillos/
https://www.elmostrador.cl/noticias/pais/2018/10/26/la-carta-del-mineduc-para-reemplazar-a-rodrigo-egana-en-la-dep-la-entidad-clave-en-la-desmunicipalizacion/

[62] Escrito de Acusación Constitucional a la Ministra de Estado, Marcela Cubillos Sigall. 10 de septiembre de 2019. Ver:
https://www.camara.cl/verDoc.aspx?prmID=181738&prmTipo=DOCUMENTO_COMISION

tanto su exclusiva fiscalización, en esta materia, corresponde al Ministerio de Educación y no a su servicio.

No obstante, siendo la DEP un órgano centralizado, le es plenamente aplicable la ley N° 18.596 de 1990 que reestructura el Mineduc, que en su artículo 2° señala las funciones que le corresponderá al Ministerio de Educación, tales como: "*b) Asignar los recursos necesarios para el desarrollo de las actividades educacionales y de extensión cultural y f) Fiscalizar las actividades de sus unidades dependientes."* Por consiguiente, la DEP como servicio centralizado y dependiente del Ministerio, **le corresponde fiscalizar los recursos que se entreguen a los SLEP,** producto del orden decreciente establecido en la norma. A mayor abundamiento; si el Mineduc puede asignar recursos a los SLEP y DEP también, ambos pasan a ser órganos fiscalizadores de dicho servicio, sobre los traspasos que hagan.

En relación con lo anterior, el artículo 26 de la ley N° 21.040 se refiere al financiamiento y patrimonio de cada SLEP el que está compuesto por: los recursos que anualmente contemple la ley de presupuesto del sector público y los recursos y bienes que reciba por concepto de la celebración de convenios con la Dirección de Educación Pública.

En esta línea, la diputada Girardi, en sesión de 01 de marzo de 2021, pregunta a la Directora de Educación Pública, sobre la autonomía y la dependencia de los SLEP, y el rol de la DEP para fiscalizar, mencionando: *"También es necesario aclarar lo que aquí se ha dicho, pues de alguna manera se ha dado a entender que los servicios locales son autónomos y no dependen de nadie. Efectivamente, se ha señalado que hay una supervigilancia del Ministerio de Educación, pero creo que es importantísimo que quede sumamente claro cuál es el rol del Ministerio y cuál es el rol de la DEP, en relación con la supervisión de los servicios locales y del 37 funcionamiento de estos, sobre todo en este proceso de instalación."*

Frente a lo anterior, la Directora de la DEP, en sesión de 08 de marzo de 2021, responde la inquietud planteada y de esta forma señaló:

"Ahora, siempre está la duda de la naturaleza jurídica de los servicios locales frente al tema de que son descentralizados y todo lo que ello implica. Hay que tener claro que los servicios descentralizados públicos actúan con personalidad jurídica y patrimonio propio -lo que la ley les asigne- y están supeditados a la supervigilancia del Presidente de la República, a través del ministerio respectivo. La descentralización en este caso podrá ser funcional o territorial.

Ahora bien, también hay distinciones en materia de dependencia y supervigilancia, pero son cuestiones que no tienen que ver con el mandato. Yo he tratado de profundizar bastante el tema. Sería interesante, en algún minuto, profundizar en materia de supervigilancia y cómo esa vinculación de descentralización-centralización se ha llevado a la práctica durante estos tres años.

Lo que sí les puedo asegurar es que los instrumentos de gestión que están en la ley son útiles y sirven para realizar esa coordinación estratégica y esa "vigilancia" de que en los servicios locales ocurra lo que tiene que pasar a través del cumplimiento de esos indicadores."

En consecuencia, según su opinión (de la directora de la DEP), a su entidad no le correspondería fiscalizar directamente a los SLEP por ser competencia

exclusiva del Mineduc (que tampoco lo hace), sin embargo, en concordancia con los artículos 59[63] y 62 de la ley N° 21.040 y el artículo 2 de la ley N° 18.596[64], su responsabilidad respecto de la fiscalización y supervigilancia es ineludible.

A su vez, le atañe exigir el cumplimiento y fiscalización de las atribuciones indicadas en el artículo 61 de la ley N° 21.040, dentro de las cuales está proponer al Ministro de Educación el perfil profesional que deberán cumplir los candidatos al cargo de Director Ejecutivo de los Servicios Locales, de conformidad al artículo 21; y no solo se limita al perfil sino que, tal como lo señala el artículo 62 letra b) es su deber proponer al Ministerio de Educación la remoción, cuando corresponda, de los Directores Ejecutivos de los Servicios Locales.

Esto implica, necesariamente, un proceso de evaluación, supervisión de la labor del Director Ejecutivo, sin el cual, no se entendería esta atribución de proponer la remoción de este cargo en particular.

Por su parte, el artículo 4 de la ley señala que, entre los integrantes del sistema, se considerará al Mineduc a través de la Dirección de Educación Pública, así pues, en concordancia con el artículo 5 letra e) que establece el principio de colaboración y trabajo en red, menciona explícitamente que el Sistema basará su funcionamiento en la colaboración *(…), realizando un trabajo colaborativo y en red.*

Esto último, nuevamente, confirma que el Mineduc y la DEP no pueden configurarse como entes meramente espectadores del funcionamiento de los servicios locales, pues la ley mandata a trabajar de manera colaborativa.

En consecuencia, es la DEP, quien actúa por Mineduc, que, según sus facultades, no solo debe cumplir lo mencionado en el artículo 61 de la ley, sino que, además, ejercer en su medida, también la facultad del Mineduc de supervigilancia y a lo menos informarle al Ministerio de los incumplimientos que comentan los Servicios Locales.

A mayor abundamiento, el artículo 16 de la ley 21.040, en su inciso final señala explícitamente: "*Los Servicios Locales se relacionarán con el Ministerio de Educación a través de la Dirección de Educación Pública".* Es decir, una vez más la ley señala que la DEP funciona investida por el Mineduc y por tanto su representante, en las materias que correspondan.

Ahora, dado que la Directora de la DEP no reconoce su rol de fiscalizador y de supervigilancia, debemos entender, entonces, que los SLEP

---

[63] Ley N° 21.040, artículo 59: Definición. Créase la Dirección de Educación Pública como servicio público centralizado, dependiente del Ministerio de Educación. Su domicilio será la ciudad de Santiago, sin perjuicio de las oficinas regionales que disponga para el cumplimiento de su objeto y por razones de buen servicio.

[64] En este aspecto, la Contraloría General de la República en oficio N° 4682, de fecha 20 de enero de 2015, en solicitud de la diputada Girardi, indica, a propósito de obligación de fiscalización del Mineduc en el uso de los recursos que otorga la ley SEP: *"De esta manera, en el caso de la subvención escolar preferencial, corresponde al Ministerio de Educación, entre otras obligaciones, requerir la rendición de cuentas de los recursos que transfiera por este concepto, revisarla y mantener a disposición de este Ente de Control los antecedentes de dichos traspasos, con el objeto de que esta pueda verificar si esos haberes han sido destinados a las finalidades a los que se encuentran afectos, en los términos del aludido artículo 25 de la ley N°10.336.".* Por tanto, teniendo despejado el punto, de que hay fiscalizaciones que corresponden al Ministerio, la DEP como organismo dependiente, investido de sus facultades, concurre con la misma atribución sobre los SLEP, como se ha venido señalando.

desarrollan su actividad sin la supervigilancia y fiscalización necesaria, tanto en el proceso de implementación misma, como en el manejo de los recursos una vez instalados.

Entonces, esta falta por parte de la DEP y el Mineduc, se traduce en una infracción al principio de eficiencia y eficacia que gobierna la Administración del Estado. Esto será analizado en los puntos siguientes.

i. Problemas de ejecución presupuestaria en los Servicios Locales de Educación.

La temática que a continuación se expondrá fue señalada en diversas sesiones por distintos invitados, quienes evidencian la lentitud en la ejecución de los recursos, la burocracia que ello conlleva y que provoca la falta de oportunidad en que deben efectivamente concretarse las solicitudes para que ocurran los procesos pedagógicos en los tiempos y oportunidad que estos requieren

Así, con fecha 29 de marzo de 2021, expuso ante la comisión el Director de la Escuela Federico Acevedo, don Juan Esteban Montero, perteneciente al Servicio Local de Barrancas expuso ante la comisión: *"(...) A pesar de que cumplía los plazos de entrega de presupuesto y plan de compra al departamento de finanzas del servicio local, siempre habían meses de larga espera y carencias de recursos; algunos que llegaban y otros que no simplemente (...)*."

Posteriormente, expresó lo problemas reales que posee su Escuela para poder funcionar correctamente, diciendo:

"Primero, existían problemas con proveedores de ChileCompra y convenio marco, que se negaban a vender, incluso los productos de los servicios públicos debido a que sostenían deudas con ellos. Se demoraban mucho tiempo en pagar esas deudas anteriores y por alguna forma no había, algunas veces, stock. Eso nos perjudicaba permanentemente.

Un ejemplo bien simple: si uno necesitaba comprar clavos, tornillos o tablas para hacer una reparación, había que tener un ítem por cada uno de esos implementos y así juntar tres o cuatro empresas que tuvieran stock suficiente para comprar y adquirir esos recursos.

Como comprenderán, los tiempos se alargaban muchísimo, lo cual demora para dar respuesta pronta a la comunidad.".

"Las compras de licitaciones públicas son demorosas, pues se debe cumplir con todo un proceso burocrático de seis o, a veces, diez firmas, de acuerdo con la legalidad vigente, según el umbral de las 1.000 UTM, lo que hace que cada compra sea jerarquizada, impidiendo que los recursos lleguen antes de los seis meses, lo que es demasiado tiempo para las necesidades de la escuela.

Por ejemplo, si quiero comprar 100 computadores, debo tener noción de todos los colegios que necesitan comprar para decir que vamos a una licitación pública, esperar a los proveedores que van a participar de esa licitación y poder obtener los recursos. Eso también demora varios meses.".

A raíz de lo anterior, podemos visualizar que problemáticas como la anteriormente señaladas por el director, obstaculizan la finalidad del sistema, es decir, el objetivo primordial de mejoramiento en la calidad de la educación

y fortalecimiento de la educación pública se ve entrampado ante un sistema que les impide avanzar con facilidad en la resolución práctica de las falencias que les afectan. El retardo que provoca la compra de los insumos y las autorizaciones posteriores, terminan por mermar el fin último, y las escuelas se mantienen sin solucionar con eficiencia y eficacia sus carencias.

Continúa explicando: "*Un problema complejo de las escuelas son las famosas glosas presupuestarias, que mencionó el director, en el sentido de que no compensan las necesidades reales de las escuelas. Si, por ejemplo, mi escuela necesita un mobiliario escolar, computadores y mejorar infraestructura, no tenemos ítem para ese gasto. En la práctica, si queremos comprar computadores, solo nos llegan cuatro o cinco, porque la glosa no lo permite. Simplemente, estamos amarrados; compramos 40 computadores para un universo de 540 estudiantes. O sea, de aquí a muchos años más vamos a poder tener algo para entregar verdadera tecnología a nuestros estudiantes, por lo menos tecnología del siglo XXI.*

En cuanto a los tiempos de la Dipres, en términos de adaptación y cambios en la distribución de los recursos y la glosa presupuestaria, es sumamente indignante cuánto tiempo se demora en armar un certificado para acreditar y decir que hoy se puede adaptar o no. Creo que eso es un nudo crítico que también hay que resolver. Eso no solo depende de nosotros, tampoco de nuestro sostenedor, sino de quienes están dirigiendo desde arriba".

El Consejo de Evaluación en el informe de evaluación intermedia del año 2021 afirma que, los SLEP se relacionan con la Dirección de Presupuestos (Dipres) en el contexto de ser un Servicio Publico sujeto a la Ley de Presupuestos, ya que la Dipres es el organismo técnico encargado de velar por la asignación y uso eficiente de los recursos públicos. La relación entre los SLEP y Dipres ha estado mediada por la DEP, atendiendo a su rol como coordinador establecido en el artículo N° 61 de la ley N° 21.040. Desde el estudio, se da cuenta que lo anterior, se justifica en la necesidad de disminuir tiempos de respuesta y tramitación por parte de Dipres, que podrían darse por el desconocimiento dentro de los SLEP como un nuevo servicio público, y que se espera que disminuyan previa revisión y validación de la DEP. [65]

Ahora, frente a esto último, es importante recordar, que el artículo 13 de la ley N° 19.880 de bases de procedimiento administrativo, menciona que el procedimiento de compra debe realizarse con sencillez y eficacia, de modo que las formalidades que se exijan sean aquéllas indispensables para dejar constancia indubitada de lo actuado y evitar perjuicios a particulares. En este caso, el principio de la no formalización, pareciera no cumplirse por el órgano cuestionado.

Asimismo, la directora Benavides, durante el mes de abril, en sesión de la Comisión comentó sobre la falta de información por parte del SLEP respecto del presupuesto 2020, lo que le ha impedido realizar su cuenta pública y que el Servicio aun no le responde sobre cómo educar en pobreza, debido a la precariedad en la que se encuentra su establecimiento, por lo que le urge tener un presupuesto que le permita tener los implementos mínimos para funcionar. Esto, lo expresó de la siguiente manera:

---

[65] Evaluación intermedia del Consejo de Evaluación Pública 2021, pág.13.

"Vivimos en una situación donde el servicio local tampoco ha dado respuesta en términos de establecer cuánto cuesta hoy educar en pobreza cuando se tiene en su territorio a una de las comunas con los mayores índices de esta realidad y vivimos con el pie cojo con respecto al presupuesto. En estos espacios se dieron, en algún minuto, conversaciones y varios directores planteamos la necesidad de establecer cuánto cuesta educar en pobreza, porque no es lo mismo educar en estas comunas que hacerlo en otras que tienen mejores condiciones, por ejemplo, con una mayor cantidad de escuelas y liceos con educación completa en consecuencia que nosotros tenemos muchas escuelas que tienen solo hasta octavo básico. ¿Qué significa eso? ¿Cómo manejamos la continuidad?

En la actualidad, el ***Servicio Local de Barrancas no tiene claridad de cuánto cuesta educar en pobreza y esto es urgente en educación pública****, o sea, debemos tener un presupuesto que nos permita decir cuánto le falta a la caja para tener lo que corresponde a las escuelas, porque somos la propuesta de educación pública y no podemos seguir pensando si nos alcanza o no la subvención.".*

En el fondo, el Director Ejecutivo de Barrancas ha limitado su labor a solo recibir recursos, sin gastarlos de forma adecuada ni oportuna. La incompetencia del Director no significa que el sistema antiguo fuera mejor, sino más bien, que es necesario mejorar los procesos de selección del cargo y de esa forma no se vuelvan a repetir estas prácticas negligentes respecto a recursos que son tan escasos.

Finalmente, evidenciamos que los recursos que se asignan en la glosa presupuestaria no consideran la realidad de las escuelas de cada servicio local, produciendo una disparidad y desequilibrio con sus pares, pues mientras estos deben esperar para acceder a materiales mínimos de funcionamiento, establecimientos bajo otras administraciones tienen mayores avances expandiendo la brecha. Un ejemplo de ello lo refleja la segunda encuesta online #estamos conectados, de fundación 2020, donde en la comuna de Vitacura, sólo 150 alumnos de colegios públicos, un 6% de la matrícula, presentó dificultades para participar en clases remotas y en las Condes menos de 1% de los estudiantes, lo que se contrasta con las comunas como La Pintana y El Bosque, donde la cifra alcance un 47% y 32%, respectivamente.[66]

Haciendo igual alcance, doña Alejandra Benavides en sesión de 19 de abril de 2021, a propósito de la brecha y la falta de conocimiento de su Escuela, señaló:

"El servicio local entregó trece tablets a todas las escuelas, trece tablets en el Servicio Local de Barrancas, a pesar de que los directores habíamos pedido que fueran tablets que tuvieran la posibilidad de instalar un chip que permitiera la conexión. Por lo tanto, esa tablet no sirve si la familia no invierte en pagar internet hogar. También se nos queda ahí una barrera importante.

Nos hubiese gustado que hubiesen conversado con nosotros para decir cuál era el mejor equipamiento para llegar a las familias, porque somos nosotros quienes tenemos el contacto con cada una de ellas para decir cuál es esa situación.".

---

[66] Ver: https://www.elmostrador.cl/noticias/pais/2021/02/18/brecha-educacional-se-expande-por-pandemia-mientras-en-las-condes-no-hubo-alumnos-afectados-en-la-pintana-la-mitad-perdio-el-ano/

Por su parte, el 26 de abril 2021, Acción Educar, a través de su directora ejecutiva, doña Magdalena Vergara, se refirió a la gestión de los recursos financieros expresando:

"Conforme al estudio de la Dipres, que presentó un informe en el Consejo, se logran identificar ciertos aspectos que son mejorables. En primer lugar, hay un problema en la construcción de los presupuestos de los servicios locales que logre ajustarse a la realidad de lo que se necesita para un servicio educativo, y esto, en parte, porque no se tienen los conocimientos y no se conoce cuáles van a ser, efectivamente, los costos asociados a cada uno de estos, lo que ha llevado a una reasignación de los recursos de distinta manera.".

Igualmente, doña María Teresa Florez, en sesión de 26 de abril, menciona nuevamente el conflicto en la ejecución presupuestaria, quien además como parte del Consejo de Evaluación, hace una serie de recomendaciones que serán indexadas en acápite tercero:

"En relación con los recursos financieros -Magdalena Vergara ya mencionó algunos aspectos-, existen problemas de financiamiento hacia el servicio público, donde pasamos de una ejecución anual de presupuesto versus una ejecución plurianual. Eso genera cierta ralentización y cambio de lógica, y al haber falta de conocimiento también se dificulta el proceso. Se genera subejecución presupuestaria no porque no se necesite ese dinero, sino porque no se alcanza a ejecutar cuando corresponda.".

Esto es reflejo de la falta de oportunidad en el gasto público, como se ha señalado, los únicos afectados por la lentitud y eficacia del Estado, son las escuelas con los niños, niñas y adolescentes más vulnerables.

En ese sentido, hay tres nudos críticos: ***el conocimiento de cómo funciona la ejecución presupuestaria en un servicio público versus municipal; la mala calidad de la información entregada por los municipios en este punto, y la no disponibilidad de los saldos de caja anteriores****. (...).".*

Respecto de lo señalado por doña María Teresa, llama profundamente la atención que uno de los puntos sea: "la mala calidad de la información entregada por los municipios" puesto que, de las modificaciones que se han realizado a la ley de aseguramiento de la calidad de la educación, son los sostenedores y los municipios, quienes deben realizar rendición de cuenta ante la Superintendencia de Educación, respecto de todos los recursos, tanto los percibidos como los gastados. En consecuencia, la información económica financiera, es información con la cual el órgano fiscalizador debería contar, y a su vez analizar y procesar, además de estar disponible públicamente para quien así lo requiera. Por tanto, no puede existir mala calidad de la información si esta corresponde a una obligación legal establecida en el artículo 54 de la ley N° 20.529 sobre el Sistema Nacional de Aseguramiento de la calidad de la educación parvulario, básica y media y su fiscalización, cuando explicita: *"Los sostenedores (...) deberán rendir, anualmente, cuenta pública del uso de todos sus recursos, conforme a los principios de contabilidad generalmente aceptados (...).*

Asimismo, (...) los sostenedores (...) deberán administrar todos los recursos destinados al cumplimiento de los fines educativos del

establecimiento en cuentas bancarias exclusivas informadas a la Superintendencia de Educación.".

En concordancia con el artículo 55 de igual ley, al indicar:

"*Las rendiciones de cuenta consistirán en estados financieros que contengan la información de manera desagregada, según las formas y procedimientos que establezca la Superintendencia de Educación, con especial consideración de las características de cada establecimiento educacional, y exigiendo, según sea el caso, procedimientos que sean eficientes y proporcionados a la gestión de cada sostenedor y sus respectivos establecimientos. (...)*

La Superintendencia pondrá a disposición de los sostenedores formatos estandarizados e instrumentos que sean necesarios para llevar a cabo de forma eficiente los procesos de rendición de cuentas. Se procurará, asimismo, facilitar programas computacionales u otros mecanismos que apoyen a los sostenedores en el registro de sus operaciones y la confección de los libros que se les exijan.".

Por tanto, según lo señalado en la ley, estaríamos ante una doble infracción: por una parte, información no procesada por la Superintendencia de Educación y por otra entrega de información incompleta e insuficiente por parte de los sostenedores y municipios.

A su vez, el presidente de la Coordinadora Nacional de Funcionarios DEM, DAEM y Corporaciones y el dirigente de Conafudaem, en sesión del 24 mayo, reiteran la temática indicando:

"Aquí, aparece otra tabla con respecto a la ejecución presupuestaria que tiene cada uno de los Servicios Locales, y de eso, si nos damos cuenta, son todas alrededor del 80%, con excepción de Atacama que es un caso alarmante, que en el año 2020 tuvo el 57% de la ejecución presupuestaria. Y según lo que tengo acá en la tabla, el 97,26% del promedio de gasto de la administración del Estado, en general. En esta estadística de las finanzas del año 2010 hasta el 2019 el promedio es 97,26%, por lo cual estamos mostrando que la gestión de los Servicios Locales está muy por debajo del promedio del resto del sector público.".

ii. Dificultades en la utilización de recursos provenientes de Subvenciones.

El Centro UC de Políticas Públicas, en junio de 2019, publicó un informe sobre la implementación de la SEP entre los años 2008 y 2017[67]. El análisis muestra que los *"colegios han acumulado un saldo total de más de $435 mil millones de los fondos recibidos a través de ley SEP, entre 2008 y 2017 y que $196 mil millones, equivalente al 45,1% del total del dinero acumulado, no está acreditado, es decir, que los sostenedores no han demostrado la existencia de estos dineros en la cuenta bancaria correspondiente.".*

Es decir, evidenciamos que, desde la creación de la ley, existe una falta de capacidad de gestión financiera de los sostenedores y que penosamente se mantiene hasta el día de hoy, como detallaremos a continuación.

---

[67] Subvención Escolar Preferencial: Gestión y uso de los recursos en sus 10 años de implementación. Junio de 2019. Boletín N° 1. Centro UC Políticas Públicas. VER: https://politicaspublicas.uc.cl/montos-no-gastados-en-colegios-por-fondos-recibidos-de-la-sep-llega-a-los-435-mil-millones-de-pesos/

Con fecha 19 de abril de 2021, en la octava sesión de la comisión, la Directora de la Escuela N° 405 Millahue, doña María Alejandra Benavides, establecimiento del SLEP de Barrancas expresó: *"(...) en temas presupuestario tenemos grandes complicaciones y aún no recibimos respuesta de lo que ocurrió con platas SEP 2019 en mi caso donde 60 millones no fueron ejecutados."*.

Este punto, fue una problemática constantemente denunciada por la H. diputada Girardi durante la comisión investigadora, solicitando en varias oportunidades información sobre el uso de los recursos SEP en el Servicio Local de Barrancas. Las respuestas otorgadas por el Director del SLEP de Barrancas durante la comisión fueron completamente insuficientes para resolver las interrogantes planteadas, puesto que, la única razón esgrimida; y siendo un Servicio Local con importantes necesidades económicas y altos índices de vulnerabilidad; fue que se devolvieron los recursos correspondientes al año 2019, debido a que "supuestamente" no se pudieron ejecutar las órdenes de compras realizadas por la movilizaciones sociales ocurridas en el estallido social.[68]

La baja autonomía en la toma de decisiones por parte de los directores a nivel de escuela; va en directa relación con la inversión de los fondos de los diferentes programas y proyectos como lo son SEP, Movámonos, Pro-Retención, debido a que estos recursos son administrados en su totalidad por el Sostenedor, en decir el SLEP Barrancas quienes utilizan dichos recursos para otros fines y no para los que fueron creados.

En el caso de los recursos SEP, es el mismo director ejecutivo del SLEP de Barrancas, que durante la comisión investigadora señala expresamente, que los fondos son utilizados indistintamente para lo cual fueron creados:

"La ejecución SEP fue avanzando, pero naturalmente tuvimos un enfoque hacia la implementación de los insumos sanitarios respecto de la pandemia y de lo que era importante abastecer en ese momento de nuestros funcionarios que participaban de la entrega de cajas.".

A pesar de lo anterior, el mismo contralor, ya ha dictaminado al respecto, y durante su exposición del 22 de marzo, indica:

"(...) cada vez que me ha tocado exponer sobre la Subvención Escolar Preferencial, me ha parecido en el sentido de que la subvención está amarrada a este Plan de Mejoramiento Educativo -por así decirlo- y los gastos que hay que financiar son los que están en ese plan; por lo tanto, en principio, no debería producirse esta situación de utilizar recursos SEP para algo que no está en el Plan de Mejoramiento Educativo.".

Por otra parte, la ley N° 20.248, en su artículo 7 y 8, le otorga la decisión del PME a la comunidad educativa, y sólo ésta posee la facultad para hacer cambios en el mismo. En cualquier caso, la ley no le otorga facultad alguna al sostenedor, para modificar el PEM o utilizar los recursos SEP en lo que decida, pues vulnera gravemente la normativa, y por tanto pudiera incurrir en algún delito de malversación de fondos.

En este sentido, la normativa tiene estrictos y delimitados fines y objetivos en los cuales se pueden gastar estos recursos, debiendo siempre vincularse a una acción de mejoramiento del servicio educativo. Sin embargo,

---

[68] Oficio 265, de 23 de abril de 2020, del Servicio Local de Educación Pública.

lo que ha sucedido es que los recursos fueron utilizados para enfrentar la pandemia, lo que no es una acción de mejora, sino condiciones mínimas necesarias para prestar el servicio educativo y por tanto gastos básicos para la continuidad del servicio.

Un caso ejemplificador fue lo acontecido con el terremoto en el año 2010, donde se tomó la decisión de destinar los recursos SEP en infraestructura, destinada a la reconstrucción de los establecimientos, debiendo tramitarse la ley N° 20.452, para extender el uso de este recurso especial más allá de su objeto. Lamentablemente en esta oportunidad la modificación solo fue hecha por vía administrativa mediante los dictámenes N° 54 y N° 55 de 2020 de la Superintendencia de Educación, para liberar el uso de estos recursos para enfrentar la crisis de la pandemia.

Por tanto, la flexibilización no sólo se hizo fuera de norma y sin autorización legal, sino que se orientaron recursos que eran para la mejora de aprendizaje, en resolver cuestiones básicas para otorgar la continuidad educativa, debilitando los proyectos de las escuelas y a su vez la calidad de la educación. No está demás señalar, que los insumos sanitarios se adquirieron sin el acuerdo de las respectivas comunidades, aun cuando algunos de los establecimientos no estaban en condiciones mínimas de infraestructuras para un retorno efectivo. Así es como las escuelas tienen actualmente sus bodegas abarrotadas de rollos de papel, alcohol gel, y otros sin que puedan retornar y, por tanto, utilizar dichos insumos.

En relación con el plan movámonos y Subvención Educacional Pro-Retención, Dorian Tobar explica el problema que se genera cuando estos fondos se pierden: *“La gestión de recursos y los ingresos por proyectos y programas como la Subvención Educacional Pro-Retención, Plan Movámonos con la Educación Pública y la Subvención Escolar Preferencial (SEP), es complejo, es complicado que durante el año 2020 se hayan perdido dos proyectos de una gran cantidad de dinero que iban en beneficio directo de los estudiantes vulnerables.”.*

Sobre el plan movámonos hasta el momento aún no se posee información sobre lo que pasó efectivamente con dichos recursos en el año 2019, si es que se reinvirtieron o se devolvieron dichos fondos, como lo recalca la presidenta del Centro de Padres y Apoderados de la Escuela Federico Acevedo: *“Por otro lado, en 2019, cuando esto empezó, teníamos un recurso que se llamaba “Movámonos por la Educación Pública”, el cual no se entregó. Hubo una mala administración del director de Barranca, y no fue el único colegio. También hubo otro problema, en relación con la subvención Pro-Retención, destinada a los alumnos de séptimo y octavo básico, donde el proveedor hizo un mal ejercicio, y no se terminó el proceso en sí y quedamos fuera”*.

Incluso, se le preguntó a través de oficio al Director Ejecutivo de SLEP Barrancas sobre: (...) cuáles son los recursos que van a mejorar la calidad de la educación, y esta contesta con fecha 23 de abril de 2021, insuficientemente, al mencionar: *“todos los gastos ejecutados tienen por finalidad la mejora de la calidad de la educación.”.*

En conclusión, el desperdicio, extravío y pésima administración de estos recursos es latente dentro de este Servicio Local. Desde el año 2012 ello no ha logrado subsanarse, a pesar de los informes de Contraloría sobre la masiva

pérdida de los recursos SEP. La falta de respuestas ante la no utilización de los recursos SEP, Movámonos y Pro retención, la baja autonomía de los directores en el uso de los fondos, su aprovechamiento para fines ajenos a lo establecido en la ley N° 20.248 y la mala administración de los mismos, conforman una unión que sólo retrasa el mejoramiento de la educación, afectando y perjudicando a los niños, niñas y adolescentes más vulnerados.

iii. Estrategia Nacional de Educación y recomendaciones presupuestarias.

El ex director nacional de Educación Pública, don Rodrigo Egaña, expuso en la segunda sesión de la comisión, señalando que la Estrategia Nacional de Educación Pública no fue considerada para diseñar el presupuesto siendo que era uno de los objetivos para los cuales fue creada, así indicó:

"El siguiente punto al cual se refiere la presentación de los diputados y diputadas, que motivan la comisión, dice relación con la estrategia nacional de educación pública. En esa presentación se señala que varios servicios han denunciado que la participación en la discusión previa de la estrategia fue aparente porque o directamente no fueron consultados o cuando fueron consultados las sugerencias no fueron tomadas en consideración. Por lo que sabemos, la estrategia fue rechazada en una primera instancia por el Consejo Nacional de Educación y aprobada después de una reformulación bastante completa. ***Hasta ahora, por lo que veo, no ha sido utilizado como antecedente fundamental en la preparación del presupuesto de educación pública,*** *que era uno de los objetivos de tener estrategias, un marco para diseñar el presupuesto, y esto pudiera ser algo que podría empezar a corregirse a la brevedad. (...)".*

Para llevar a cabo este proceso se requiere indispensablemente la presencia, supervisión y fiscalización del Ministerio de Educación como garante, puesto que, el mandato de asegurar la calidad y equidad del sistema, no puede estar ajeno a que algunos estudiantes deban retornar en peores condiciones que otros, más aún en plena crisis sanitaria. El Estado debe asegurar a través de los organismos correspondientes que las condiciones de retorno se cumplan, se otorguen los recursos adecuados y que estos se ejecuten correctamente.

iv. Rigidez en el uso de los recursos.

A la problemática de la administración de los recursos, le atraviesa la rigidez de su uso, como lo expuso la Directora de Presupuesto del Ministerio de Hacienda, en sesión del 09 de agosto de 2021:

"En cuanto a la rigidez en el uso de los recursos, actualmente eso emana de la propia ley. La facultad de modificaciones presupuestarias también está súper restringida. No es que podamos flexibilizar puntualmente para un servicio u otro, por cuanto es el marco de competencias que tienen todos los servicios públicos.

A modo de ejemplo, en la ejecución de la ley SEP se diagnosticó que era bastante rígida.

El boletín N° 12979-04, que se encuentra en trámite en el Congreso Nacional, flexibiliza esa propia ley. Entiendo que también emana del propio diagnóstico que ustedes, como parlamentarios, han tenido, y el Ministerio de Educación se abre al camino de este boletín para ir flexibilizando ese punto.".

Este punto, expuesto por la Dipres, revela información de suma importancia: en primer lugar sobre la necesidad de flexibilizar el uso de los recursos y que, finalmente, es la DEP quien coordina los requerimientos, cuando indica: *"Los requerimientos son canalizados y esa relación bilateral con los servicios locales de educación pública no la tenemos nosotros, sino la DEP, que nos hace llegar estas materias y hemos respondido con distintas reasignaciones, para ir flexibilizando dentro de las facultades que, como Ministerio de Hacienda, tenemos para hacer las distintas modificaciones presupuestarias en base a lo que nos han requerido a lo largo de estos tres años.".* En consecuencia, y para efectos de la concordancia con los primeros puntos expuestos, si es la DEP quien se relaciona con Dipres, para efectos de solicitar modificaciones presupuestarias, entonces corresponde a su vez fiscalizar que los montos sean utilizados correctamente.

e) Conflictos asociados a la pandemia por Covid-19.

Los temas más importantes que veremos en este punto, están relacionados con las dificultades que ha generado la crisis sanitaria presente en el país y que, se vinculan directamente con la educación pública, tales como: la conectividad de la comunidad educativa, el retorno a clases presenciales y la ausencia de señal de internet en los establecimientos educacionales.

Como se ha dicho, el proceso de implementación de los SLEP, se cruza a 2 años de su inicio con la pandemia del Covid-19, lo que ha provocado un cambio radical y no esperado en la forma en que se desarrolla el proceso educativo en Chile y el mundo. Los estudiantes y los profesores han debido establecer una nueva forma de vínculo, manteniéndose cada uno en sus hogares, obligando a los establecimientos a reformar sus métodos de aprendizaje y transformando las clases presenciales a virtuales, realizándose todas por vía telemática.

Ahora bien, esta nueva forma de realizar clases no ha sido fácil, porque implica que cada familia, idealmente cada niño, tenga su propio computador o *tablet.* Lamentablemente, esta no es la realidad de las comunas que constituyen los diferentes SLEP de Barrancas, por ejemplo, el de Barrancas como es el caso de Cerro Navia, ya que al ser una de las comunas más pobres del país, es irrisorio creer que todas las familias de los estudiantes tengan al menos un aparato tecnológico para que puedan realizar sus clases virtuales.

En la comisión, surgieron una serie de denuncias sobre estos temas, pero principalmente se comentó sobre el manejo que tuvo el Mineduc respecto a la adaptabilidad que debió tener para gestionar esta nueva forma de hacer clases, lo que se analizará a continuación.

Con fecha 19 de julio de 2021, Valeska Grandon, presidenta del Centro de Padres y Apoderados de la Escuela "El Salitre" de Pudahuel comentó en la comisión investigadora que existen problemas relacionados con la conectividad. Expresando que, el servicio local no ha dado garantías en este tema, incluso en pandemia, ya que además de no haber entregado los computadores del proyecto de "computadores a los niños de 7mo básico", que los ayuda en sus clases online, tampoco se han entregado computadores o tablets o cualquier otro artefacto electrónico a las familias que no cuentan con esos recursos tecnológicos, impidiendo directamente que los niños puedan conectarse a clases *online*.

De esta forma expresó: *“También, el tema de la conectividad. Entre las escuelas que hicimos este reporte, la conectividad no es la mejor. El servicio local no ha dado mucha ayuda en este tema. Incluso, en pandemia, hay un proyecto que entrega computadores a los niños en séptimo básico, que los ayuda para sus clases online. Sin embargo, no ha pasado nada, pues no se les ha entregado el computador ni una ayuda para las familias que no tienen computador o un celular inteligente. Sabemos que todas las familias tienen realidades distintas y situaciones económicas distintas. Ese también es un problema que nos complica, porque todos los niños deberían tener posibilidad de conexión para este tipo de clases online.”.*

Justamente, las comunas que pertenecen al SLEP de Barrancas son de las comunas con mayores índices de vulnerabilidad del país, por lo que el acceso de recursos tecnológicos por parte del Servicio Local es esencial para garantizar el derecho a la educación. Según encuesta Casen 2017, en el territorio de Barrancas hay 124.561 personas en situación de pobreza multidimensional, lo que equivale al 25,9% de la población de Barrancas aproximadamente. Pudahuel cuenta con 64.870 personas (26,9%, sobre 240.958 h.) en pobreza multidimensional, Lo Prado posee 19.181 personas (19,0%, sobre 100.771 h.), en tanto Cerro Navia registra 40.510 personas (29,0%, sobre 139.604 h.) en dicha situación. Cabe mencionar que estos datos son previos al estallido social y a la pandemia, de acuerdo a los últimos datos de estudios de pobreza, también de encuesta CASEN esta ha aumentado considerablemente a un 10,8% que equivale a más de 2,1 millones de personas y se ha agravado principalmente en aquellas comunas que ya presentaban mayores índices de vulnerabilidad.[69]

El IVE, utilizado en el plan estratégico local del SLEP de Barrancas, para los establecimientos educacionales del SLEP Barrancas se puede diferenciar entre educación básica y media. De esta manera los rangos para estos establecimientos son:

• Educación básica: entre 79% y 95%.

• Educación media: entre 89 y 94%.[70]

En este mismo orden de ideas, en la presentación del Director del SLEP de Barrancas, en el mes de abril, mencionó:

“¿Cuál es la disponibilidad de conectividad que tienen en su hogar nuestros estudiantes? A la fecha, la información a disposición establece que el acceso a internet en el domicilio es del 48% y el acceso desde teléfono celular con internet sube al 70%. Sin embargo, hay un 17% y un 15%, respectivamente, sin información, porque si bien la encuesta se entregó, esta no fue respondida. Finalmente, un 35% respondió no tener internet en el domicilio, y un 15% respondió no tener celular con acceso a internet.

También hemos preguntado si el estudiante cuenta con tablet en el hogar. Desde luego, la cantidad es ínfima: 11,8%. Respecto de si el estudiante cuenta con celular o con acceso a internet en el hogar, la respuesta es 77,12%, en aumento; estudiantes que cuentan con un computador en el hogar, 36,68%;

---

[69] https://cooperativa.cl/noticias/pais/politicas-sociales/pobreza/la-pobreza-en-chile-aumento-a-un-10-8-por-ciento-segun-la-encuesta-casen/2021-07-05/113426.html

[70] PLAN ESTRATÉGICO LOCAL DEL SERVICIO LOCAL DE EDUCACIÓN PÚBLICA BARRANCAS CORRESPONDIENTE Al PERIODO DE LOS AÑOS 2020-2025.

estudiantes que cuentan con algún tipo de dispositivo electrónico de uso exclusivo para conectarse a clases -aquí la cosa aumenta, porque puede ser cualquier dispositivo que la familia cuente-, 64,36%. También hemos preguntado cuánto es el tiempo de apoyo que tiene su hijo durante el período de educación no presencial.".

Como podemos ver, en la presentación del Director, no se comparan dimensionalmente los niveles cuantitativos ni cualitativos de los datos obtenidos, tampoco se realizan cruces de algunas variables como: total de matrículas de cada establecimiento por total de niños que efectivamente recibieron una herramienta tecnológica y de qué tipo. Menos aún se presentan datos sobre la brecha tecnológica, vulnerabilidad escolar y rendimiento escolar, entre otros. La presentación solo se limitó a presentar información de manera cuantitativa y general.

Asimismo, se hace fundamental destacar el hecho de que, durante el transcurso de la comisión se generaron constantes contradicciones entre lo que señaló el director ejecutivo del SLEP de Barrancas y las declaraciones de los directores de los establecimientos educacionales invitados a esta Comisión.

La directora Alejandra Benavides, durante el mes de abril, en sesión de la comisión comentó que *"En tiempos de pandemia tampoco hemos tenido a nivel nacional una política que asegure que los estudiantes de este país se mantengan en conexión y podamos continuar con la labor educativa, o sea, si hoy los profesores desconectan su computador, se acaba la educación pública en este país, porque en términos públicos no ha habido ninguna inversión; ni en términos tecnológicos, ni en términos de asegurar la conexión, lo cual resulta preocupante porque estamos a disposición de los profesores quienes de su propio bolsillo deben pagar la conexión diaria para estar con los niños en clases. Estamos a merced de las campañas, de las rifas y de todo lo demás para que los niños tengan sus aparatos tecnológicos. El servicio local entregó trece tablets a todas las escuelas, trece tablets en el Servicio Local de Barrancas, a pesar de que los directores habíamos pedido que fueran tablets que tuvieran la posibilidad de instalar un chip que permitiera la conexión. Por lo tanto, esa tablet no sirve si la familia no invierte en pagar internet hogar. También se nos queda ahí una barrera importante.".*

En tiempos de pandemia tampoco hemos tenido a nivel nacional una política que asegure que los estudiantes de este país se mantengan en conexión y podamos continuar con la labor educativa, o sea, si hoy los profesores desconectan su computador, se acaba la educación pública en este país, porque en términos públicos no ha habido ninguna inversión; ni en términos tecnológicos, ni en términos de asegurar la conexión, lo cual resulta preocupante porque estamos a disposición de los profesores quienes de su propio bolsillo deben pagar la conexión diaria para estar con los niños en clases. Estamos a merced de las campañas, de las rifas y de todo lo demás para que los niños tengan sus aparatos tecnológicos.

El servicio local entregó trece *tablets* a todas las escuelas, trece *tablets* en el Servicio Local de Barrancas, a pesar de que los directores habíamos pedido que fueran *tablets* que tuvieran la posibilidad de instalar un chip que permitiera la conexión. Por lo tanto, esa *tablet* no sirve si la familia no invierte en pagar internet hogar. También se nos queda ahí una barrera importante.

Nos hubiese gustado que hubiesen conversado con nosotros para decir cuál era el mejor equipamiento para llegar a las familias, porque somos nosotros quienes tenemos el contacto con cada una de ellas para decir cuál es esa situación.

En la misma línea, el 19 de abril del 2021 en la comisión investigadora, la Directora de la Escuela “Provincia de Arauco” de Cerro Navia, Úrsula Araya, dijo en lo relativo al tema de la conectividad que hay “trece tablets en establecimientos educacionales de más de 300, 400, 500 y hasta 700 estudiantes, lo que no significan nada; aún más, dificultan la motivación escolar, puesto que ni siquiera tienen internet. El servicio local ha hecho levantamientos sobre conectividad de los estudiantes, llenando planillas; incluso con el Ministerio de Educación a través de su plataforma SIGE. ¿Pero qué hay detrás de ese levantamiento de información? Mi pregunta es cómo impacta esto en los resultados. No tiene ningún impacto, porque solo se queda en el levantamiento de datos e información, ya que no se garantiza a través de esta información que se gestionen acciones concretas para garantizar realmente la entrega oportuna de los recursos.”.

Las exposiciones citadas anteriormente demuestran, inequívocamente, que los recursos entregados por el Mineduc no han sido suficientes para sobrellevar las necesidades que se han generado por la pandemia, debido a que la cantidad de tablets que se entregaron abarcan un número ínfimo de los estudiantes que asisten a los establecimientos educacionales, dejando niños, niñas y jóvenes a la deriva, no garantizando el ejercicio efectivo de su derecho constitucional a la educación.

Ante esta problemática, llama la atención la postura del Mineduc. El Ministro en reiteradas declaraciones públicas, ha señalado el impacto negativo que la falta de conectividad representa en los niños más vulnerables del país y ha promovido en forma enfática, desde el inicio de la pandemia, la necesidad urgente del retorno a clases presenciales en el segundo semestre del 2020 y luego a inicios de 2021.

Podemos deducir entonces, que el Ministerio ha tomado la decisión de no invertir en conectividad, asumiendo que la solución para salvar esta nueva brecha educativa, es el retorno a las clases presenciales.

Sin embargo, tampoco podemos decir que se aprovechó este tiempo para mejorar las condiciones de las escuelas públicas, aun cuando, producto de la pandemia, los establecimientos han estado durante largo tiempo prácticamente vacíos. Lo que podría haber favorecido la ejecución de los proyectos de inversión dentro de ellos, puesto que, sin cuerpo educativo ni estudiantes, las modificaciones, reparaciones y construcciones que eran necesarias, se podrían realizar con mayor tranquilidad y celeridad por parte de los licitados. Durante el 2020, esto no se materializó, producto de la tardanza en los procesos de licitación, perdiendo tiempo valioso de ejecución. La pregunta que es dable realizarse es ¿Por qué el presupuesto otorgado no se gastó en su totalidad, iniciando las licitaciones que corresponden?

En noviembre de 2020, señaló que el regreso a clases presenciales para el 2021 es inminente a partir del 01 de marzo, lo que se terminó materializando en gran parte del país, con el avance de la mayoría de las comunas a la fase 3 del plan “paso a paso”. Ello fue anunciado por el jefe de la cartera don Raúl Figueroa, a propósito de la presentación del calendario

escolar para el presente año. Para estos efectos, indicó que serán los sostenedores quienes deben resguardar el acceso a clases presenciales a todos los estudiantes en jornada regular. En el mismo sentido recalcó: “La forma en que cada colegio va a iniciar su forma presencial dependerá de cada proyecto y vamos a velar porque lo hagan cumpliendo las exigencias sanitarias.

Pareciera que son los otros que deben cumplir con las exigencias sanitarias, siendo que la gran mayoría de los establecimientos son de responsabilidad exclusiva del Mineduc a través de los SLEP. Sin embargo, no cuentan con las condiciones sanitarias para garantizar un retorno seguro, siendo esta vez, el propio Ministerio es el responsable de profundizar la brecha en los establecimientos que son de su exclusiva responsabilidad.

El retorno a la presencialidad, por otro parte, implica necesariamente una modalidad mixta que involucra presencialidad de algunos, y clases telemáticas para otros, ambas modalidades requieren de una inversión en conectividad. Cabe destacar que prácticamente todas las escuelas del SLEP de Barrancas se encuentran sin internet, lo mismo ocurre en otras escuelas del sistema público.

Todo lo dicho demuestra el notable abandono de deberes por parte de las máximas autoridades de los SLEP, ya que lo más importante que tenían que hacer durante el año 2020 y 2021 era en primer lugar, conectividad para todos los niños, niñas y jóvenes mientras exista una modalidad telemática; Y, en segundo lugar, una vez que las condiciones sanitarias mejoran, tener los establecimientos educacionales equipados y preparados para el retorno de los estudiantes a clases en sus salas de clases.

Frente a este imperativo por parte del Ministro Figueroa en marzo del 2021 ninguna escuela de los SLEP, es decir, administrada por el estado, volvieron a clases, debido a que no se encontraban con las condiciones necesarias para el retorno; situación que constató la diputada Girardi en una fiscalización realizada a las comunas que conforman el SLEP Barrancas. En aquella oportunidad la situación encontrada fue la siguiente por dar algunos ejemplos: Escuelas donde los profesores no volvieron a dar clases debido a las precarias condiciones de infraestructura, otras directoras decidieron funcionar con un mínimo número de alumnos en relación a su matrícula. Entre otras escuelas cabe mencionar los siguientes datos:

- La Escuela Federico Acevedo que estaba funcionando con 8 alumnos de una matrícula de 533, equivalente al 1,5%.

- Escuela el Salitre funcionando con 80 alumnos (as) de una matrícula de 256, equivalente al 31,2%.

- La escuela Paulo Freire con 40 alumnos (as) de una matrícula de 262 equivalente al 15,2%.

- Escuela Millahue, con 12 alumnos (as) de una matrícula 275 equivalente al 4,3%.

- Las otras escuelas del SLEP de Barrancas no estaban operativas y algunas funcionando sin cocina ya que habían sido siniestradas producto de robos en donde cañerías de cobres y calefón habían sido desmantelados.

f) Infracción al deber de eficacia, eficiencia y probidad.

En sesión del 17 de mayo, el Miembro del Comité Directivo del SLEP de Barrancas y representante de los alcaldes del territorio, Nelson Zarate, expresó, una premisa fundamental para aclarar la infracción del Estado y sus órganos competentes, respecto a la implementación de la ley, diciendo lo siguiente:

"Respecto de la fase de funcionamiento. En mi opinión, existirían irregularidades de implementación en la fase de funcionamiento cuando, previendo los problemas que podrían presentarse al estar el nuevo servicio en régimen, la autoridad encargada de la implementación y del conocimiento, no hizo nada.".

"(...) ¿Era previsible lo que dijo la Contraloría en sus más de 50 hallazgos sobreestimación y subestimación presupuestaria, traspaso de fondos a cuentas distintas, concentraciones de pago, demandas por no pago de cuentas, ausencia de certificados de disponibilidad, errores en los cierres, déficit presupuestario? Yo creo que sí, pero nada se hizo.".

Para la ley de Bases Generales de la Administración del Estado, la contravención a los deberes de eficacia, eficiencia y legalidad constituyen una contravención a la probidad pública, especialmente cuando existe entorpecimiento del servicio. **Es por ello que la inacción de la DEP en la ejecución de recursos asignados constituye una falta al deber de probidad y al mismo tiempo, una vulneración al principio de legalidad presupuestaria por la inejecución del presupuesto asignado en tiempo y forma,** infracción que también decanta en el Ministerio de Educación quien no se hace cargo ni subsane las faltas cometidas, entorpeciendo la entrega del servicio educativo.

Ejemplo de lo anterior, corresponde a lo señalado por el Contralor General de la República, quien expuso con fecha 22 de marzo de 2021 en donde se refirió al Servicio Local Puerto Cordillera, recalcando los siguientes puntos:

"Por ejemplo, se constató que las conciliaciones bancarias, en ocho cuentas corrientes que administra el servicio, se confeccionan manualmente mediante una planilla Excel, a pesar de que el sistema de información de gestión financiera del Estado dispone de un modelo para el registro de estas operaciones.

Cuál es el problema que tiene este primer punto, que parece un poco administrativo, pero que es muy relevante. Cuando las cuentas corrientes se administran a través de unas planillas que se manejan en Excel, estas se pueden cambiar fácilmente. Al revés, el Estado dispone de un sistema que utiliza casi todo el sector público, donde se pueden registrar estas operaciones y si se altera deja una huella y se puede comprobar por qué se realiza esa modificación.

Entonces, acá la Contraloría cuando audita este punto debe ir al servicio y pedir esa planilla Excel. Si fuera cualquier otro servicio público, la Contraloría ni siquiera debe ir al servicio, sino que debe obtener la información desde el SIGFE (Sistema para la Gestión Financiera del Estado), y eso ya es un cambio y significa una vulnerabilidad del sistema, que es bastante importante.

Lo anteriormente señalado por el Contralor, demuestra una situación de extrema gravedad, toda vez que, tanto la DEP como el Mineduc, tienen la responsabilidad de asegurar la probidad y transparencia. Pero, en el caso en comento, han permitido un sistema que obstaculiza la fiscalización.

Además, en la misma presentación, el Contralor evidenció otras faltas graves a los principios de probidad y transparencia señalando:

"Se evidenció la duplicidad en la emisión de comprobantes de egreso en los subtítulos 22 y 29, que son precisamente los que son objetos de autoría; carencia de manuales internos de todo tipo, por ejemplo, de contrataciones, de adquisiciones, para la recepción de bienes, para el pago oportuno, en materia de inventario, etcétera. Esto lo vamos a ver después repetido, respecto del otro servicio local.".

"También, se constató que se realizaron contrataciones al margen del sistema de compras públicas, o sea, no se utiliza el sistema de la plataforma de ChileCompra, siendo que es obligatoria para un servicio público y, además, hay 29 adquisiciones que no tienen un certificado de disponibilidad presupuestaria emitido con fecha anterior a la adquisición o, en este caso, se constató que el certificado era posterior.".

"Luego, encontramos 126 facturas que se pagaron en 2019, pero que en realidad habían sido decepcionadas el año anterior por un total de 1.704 millones, esto no se había registrado contablemente bajo "Cuentas por Pagar-Bienes y Servicios de Consumo", al término de ese ejercicio contable de 2018.".

"Además, se constató un saldo inicial de caja, en un servicio local, para 2019, de 24 millones, según consta en el estado de ejecución presupuestaria y en el decreto de la Dipres, que modifica el presupuesto vigente del servicio. Eso fue lo que se informó por parte del servicio a la Dipres para que se constata en este decreto. Pero la Contraloría verificó, de acuerdo con la información que se tenía en el balance de comprobación y saldo, que en realidad la diferencia, es decir el saldo inicial, era de 5.219 millones; o sea, una diferencia bastante grande respecto del saldo inicial de caja para el año siguiente.".

El principio de probidad emana de la Constitución Política de la República, artículo 8: *"El ejercicio de las funciones públicas obliga a sus titulares a dar estricto cumplimiento al principio de probidad en todas sus actuaciones".* y la doctrina ha entendido este principio como: "la rectitud, honradez o abnegación en el desempeño de las funciones públicas"[71], en otras palabras la norma constitucional exige el más estricto y severo cumplimiento del principio por parte de los funcionarios, autoridades y jefaturas de los órganos de la Administración del Estado, sin embargo, de lo anteriormente señalado por el Contralor, nuevamente, se evidencian serias faltas a la probidad administrativa, tales como la no utilización del sistema de compras e irregularidades importantes respecto al manejo de los recursos presupuestarios.

Para el caso del Servicio Local de Barrancas expresa similares resultados, y que no se reproducirá para evitar efectos inoficiosos y que encontrándose relatados en este informe, evidencian nuevamente falencias en

---

[71] Cea, José Luis, "Derecho Constitucional Chileno", tomo I.

el manejo de los recursos y presupuestos, que pudieran revertir la configuración del delito de malversación de caudales públicos.

i. Infracción de las normas constitucionales.

Como bien se ha señalado, se ha configurado infracción a los deberes de eficacia, eficiencia y probidad de los órganos en la implementación de la ley, y a su vez, **infracción constitucional** de la Constitución Política de la República en sus artículos 1, 4, 5 y 19, que consagra los principios básicos de fuerza obligatoria que impregnan toda la normativa nacional y que, por tanto, otorgan primacía al respeto, promoción y protección de los derechos esenciales que emanan de la naturaleza humana que deben ser mandatos para gobernantes y gobernados. Es el Estado el garante en la protección de estos derechos. En concordancia con lo anterior, la Corte Interamericana de Derechos Humanos, en caso Velásquez Rodríguez de julio de 1988 y Caso Godínez Cruz de 1989, ha descrito los deberes del Estado: *"Esta obligación implica el deber de los Estados partes de organizar todo el aparato gubernamental y en general, todas las estructuras a través de las cuales se manifiesta el ejercicio del poder público, de manera tal que sean capaces de asegurar jurídicamente el libre y pleno ejercicio de los derechos humanos".* A su vez, el Tribunal Constitucional, en sentencia 740-07, señala: *"(…) que la condición de seguridad que el constituyente desea brindar a los derechos que reconoce importa hacer cesar cualquier transgresión o vulneración que, más allá de los propios límites previstos por la Carta, puedan experimentar tales derechos, como también impedir la amenaza o peligro inminente que pueda afectarlos;".*

Este respeto de los derechos humanos implica la obligación del Estado de abstenerse de interferir en el disfrute de los derechos, prohibiendo actos menoscaben su goce.

El derecho a la educación, específicamente, tiene como objeto "*el pleno desarrollo de la persona en las distintas etapas de su vida*", determinado por el artículo 19 N° 10 de la Constitución, en su inciso 1°, el cual se enriquece con el párrafo 1° del artículo 13 del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, el cual precisa que los Estados Parte *"Convienen en que la educación debe orientarse hacia el pleno desarrollo de la personalidad humana y del sentido de su dignidad, y debe fortalecer el respeto por los derechos humanos y las libertades fundamentales. Convienen asimismo en que la educación debe capacitar a todas las personas para participar efectivamente en una sociedad libre, favorecer la comprensión, la tolerancia y la amistad entre todas las naciones y entre todos los grupos raciales, étnicos o religiosos, y promover las actividades de las Naciones Unidas en pro del mantenimiento de la paz.*".

En el mismo sentido se encuentra el artículo 13 del Protocolo de San Salvador, párrafo 2°: *"Los Estados partes en el presente Protocolo convienen en que la educación deberá orientarse hacia el pleno desarrollo de la personalidad humana y del sentido de su dignidad y deberá fortalecer el respeto por los derechos humanos, el pluralismo ideológico, las libertades fundamentales, la justicia y la paz. Convienen, asimismo, en que la educación debe capacitar a todas las personas para participar efectivamente en una sociedad democrática y pluralista, lograr una subsistencia digna, favorecer la comprensión, la tolerancia y la amistad entre todas las naciones y todos los*

grupos raciales, étnicos o religiosos y promover las actividades en favor del mantenimiento de la paz.".

En consecuencia, es el Estado y sus órganos quienes tienen obligaciones directas sobre el Derecho a la educación, garantizando su ejercicio sin discriminación y debiendo adoptar todas las medidas necesarias para el cumplimiento de sus objetivos. Parte de esas medidas son: no obstaculizar o impedir el disfrute del derecho a la educación y por tanto facilitar su implementación.

En esta oportunidad, **el Estado no se ha puesto a disposición de la ciudadanía**; su inacción y falta de diligencia, ha obstaculizado que los estudiantes puedan ejercer su derecho, al abandonar la implementación de la nueva educación pública. Esta afirmación se expresa a través de las mismas palabras del Ministro de Educación en sesión de 09 de agosto de 2021, al trasladar toda la responsabilidad del Estado a los sostenedores, atribuyéndole exclusivamente el funcionamiento de la Educación Pública, al indicar:

"Al respecto, resulta interesante ver cómo las distintas administraciones municipales hacen buen uso de esos fondos que están disponibles. Postulan a ellos, los ejecutan, y eso lleva a que sea una constante que los establecimientos estén en mejores condiciones.

Lamentablemente, se puede ver cómo, en otros casos, sostenedores que no han tenido esa lógica de asegurar recursos, o más bien de presentar proyectos para asegurar esos recursos, han ido generando un triste deterioro en la infraestructura de parte de la educación pública.".

g) Equidad territorial.

Durante las sesiones de la comisión investigadora se denunció una falta de equidad territorial al interior de los servicios locales, cuyas dependencias se concentran principalmente en las capitales provinciales o regionales, en perjuicio de otras comunas más pequeñas, en particular, en SLEP Huasco se manifiesta disconformidad por la centralización en Vallenar, en perjuicio de Huasco, Freirina y Alto del Carmen. Esto conlleva una serie de problemas administrativos para las instituciones educacionales que se encuentran más aisladas en cada SLEP, uno de los ejemplos de este tipo de problemas que se generan como la dificultad para tramitar licencias médicas o realizar otro tipo de trámites, lo relevante es la distancia y la falta de conectividad y buen servicio.

Uno de los objetivos de la nueva Educación pública es la consideración de las particularidades locales y regionales, cuyo objetivo ha sido ignorado por el Mineduc y la DEP, ya que las acciones dirigidas a cumplir este punto han sido claramente deficientes, ya que abarcan escasamente los SLEP que están en condiciones territoriales más complejas como los SLEP que están en contextos rurales como el SLEP Costa Araucanía o Puerto Cordillera.

Cada Servicio Local de Educación Pública, cada territorio en el que está inserto tiene su propia particularidad que responde a un desarrollo social, histórico y cultural. En este sentido la conformación y gestión de redes no puede desconocer su propia trayectoria educativa.

La equidad territorial, además de conllevar una serie de problemas de distintas naturalezas, también genera competencia territorial entre los distintos SLEP. Uno de los objetivos de los Servicios Locales de Educación Pública es

velar por la calidad, la mejora continua y la equidad del servicio educacional, por lo que la DEP deberá proveer apoyo técnico-pedagógico, de acuerdo con las características del territorio.

Debemos recordar que la Ley de Nueva Educación Pública permite en su artículo 16 la creación de oficinas locales mediante decreto fundado del Ministerio de Educación, cuando sea necesario por razones de buen servicio y para el adecuado cumplimiento de sus funciones, en atención a razones de distancia, conectividad y concentración de matrícula, entre otras. También podrá hacerlo a propuesta del Comité Directivo Local respectivo.

También evidenciamos una problemática en lo relativo a la conectividad respecto a que hay diferencias muy grandes entre las distintas regiones, lo que, sumado a la falta del Estado de garantizar el acceso a internet y conexión en zonas rurales más aisladas, demuestra cómo el centralismo sigue inserto en la lógica de administración de los servicios locales de educación.

En virtud de lo anterior, nuevamente estaríamos frente a una mala gestión de los servicios, y una evidente inejecución de la ley, toda vez que, en la misma ley se considera la solución a las problemáticas planteadas en los párrafos anteriores, no obstante, el Mineduc no hace nada para mejorar la equidad territorial de los SLEP, incumpliendo uno de los objetivos planteados en la ley N° 21.040.

h) Consejo de evaluación de la Educación Pública.

En conformidad a lo establecido por la ley, y como se ha dicho anteriormente, el Consejo de Evaluación de la Educación Pública tiene como misión principal asesorar al Presidente de la República en la evaluación y análisis del proceso de instalación de los Servicios Locales, lo cual ha cumplido a cabalidad en los distintos informes que han realizado desde la implementación de la ley de Nueva Educación Pública.

Estos informes han entregado una serie de recomendaciones al Presidente de la República sobre cómo continuar con la implementación de los Servicios Locales de Educación. No obstante, estas recomendaciones y observaciones no han sido en su totalidad traducidas en hechos concretos, como podría ser en modificaciones legales a través de proyectos de ley de iniciativa exclusiva del presidente.

Los informes y evaluaciones que ha realizado el Consejo de Evaluación se han convertido en un gran insumo para ir demostrando los avances y dificultades que ha implicado el difícil proceso de implementación de la nueva Educación Pública, por lo que debemos reafirmar la necesidad de que estas recomendaciones sean realmente efectivas en todos los espacios de participación de los organismos de administración y dirección de los SLEP.

Por otra parte, respecto a la insistencia de atrasar el proceso de implementación de los SLEP, los informes realizados por el Consejo de Evaluación no recomiendan en ninguna circunstancia retrasar su implementación, sino que van dirigidos a adecuar la tasa de SLEP nuevos a implementar, reduciendo el número. Esto porque se reconoce que la tarea que están llevando la Dirección de Educación Pública y el Ministerio de Educación es tan grande, que va mucho más allá de problemas en la ley o de problemas de gestión.

De acuerdo a lo ya consignado, las principales recomendaciones realizadas por el Consejo de Evaluación que debieron haber sido consideradas por el poder ejecutivo, dada la urgencia para mejorar el sistema, no se hicieron. Confirmando el notable abandono de deberes por parte del Ministerio de Educación.

2. Conclusiones sobre la instalación del Servicio Local de Educación Pública de Barrancas.

a) Director Ejecutivo del SLEP de Barrancas.

Con la dictación de la ley se designa como Director Ejecutivo del SLEP de Barrancas a don Marcelo Segura, quien duró en el cargo hasta noviembre de 2018, periodo en que se venció el plazo establecido en el decreto.

El 01 de diciembre de 2018 asume como Directora Ejecutiva Subrogante la Subdirectora de Apoyo Técnico Pedagógico del SLEP, Karina Sabattini, la cual solo se mantuvo hasta enero de 2019, periodo en el que finalizó su contrato.

Le siguió en el cargo desde el 15 de enero hasta el 15 de febrero de 2019, el Subdirector de Planificación y Control de Gestión del SLEP, Pablo Campos y a partir del 16 de febrero asume el Jefe de Participación, Marco Antonio Espinoza, terminando por ser designado por Alta Dirección Público Patricio Canales Ríos a partir de abril de 2019.

Este cambio constante de directores, fue también expuesto en la Acusación Constitucional contra la ex Ministra de Educación Marcela Cubillos.[72] En dicha instancia, se preguntó el motivo por el cual no se prorrogó el mandato de don Marcelo Segura, sino que más bien, se optó por realizar cuatro cambios, afectando directamente el liderazgo y dirección que tiene el SLEP y su capacidad de tomar decisiones, fundamentales para su instalación, incumplimiento la ley y poniendo en riesgo los principios de la ley N° 21.040.

Sobre este punto, la Directora de la DEP, en sesión de 08 de marzo de 2021, se refirió a la instalación de los Servicios Locales de Educación, indicando:

"En cuanto a algunas de las cosas que conversamos sobre la instalación de los primeros servicios locales en la sesión pasada, en particular de la cohorte de 2018, hay dificultades que están asociadas al acotado tiempo del traspaso educativo. Lo vimos principalmente con los cuatro primeros servicios locales de educación.

¿Por qué ocurre eso? Si uno mira el cronograma de instalación de los servicios locales, una de las grandes consecuencias tiene que ver con que los grandes hitos relevantes quedan juntos en un tiempo muy acotado, lo que claramente impactó en la conformación de los equipos y el manejo de la información. Estamos hablando más o menos de casi dos años, previos a la puesta en régimen de los servicios locales de educación. Por lo tanto, tanto el manejo de información como la conformación de equipos son las grandes dificultades que normalmente después repercuten en toda la administración de dichos servicios, principalmente en los de 2018.".

[72] Página 32. Punto a) Caso del Servicio Local de Educación Pública de Barrancas; que agrupa las comunas de Cerro Navia, Pudahuel y Lo Prado.

b) Financiamiento.

La ya nombrada directora de la Escuela N° 405 Millahue, en su exposición del 19 de abril, se refirió sobre la **falta de conocimiento en relación a la situación financiera que tienen los directores de los establecimientos educacionales de barrancas,** recalcando la importancia de la transparencia que debe existir con el sostenedor para asegurar efectivamente la calidad de la educación que promueve la ley N° 21.040. No pueden existir ambigüedades en los procesos que entrampan el funcionamiento de todo el sistema educativo, si el sostenedor no conoce cómo se desenvuelven sus establecimientos, es imposible que estos puedan asignar, priorizar y asistir en lo que los directores le solicitan.

Mientras tanto, ya el 2 de febrero en Radio Biobío en una nota titulada *"Mineduc informa que todos los colegios municipales que postularon recibieron ayuda económica",* (la ayuda económica referida es un bono enfocado en mejorar la infraestructura para cumplir con las medidas sanitarias) la directora de Educación Pública, Alejandra Grebe manifestó que "el 100% de las escuelas municipales que postularon por ayuda económica la recibieron. Este bono está enfocado en la mejora de la infraestructura tales como baños y al interior de las salas para cumplir así, las medidas sanitarias".[73]

Sin embargo, lo anterior se contradice directamente con lo evidenciado en terreno en parte de los establecimientos de los SLEP de Barrancas y que tiene directa relación con el punto sobre infraestructura, como detallaremos a continuación.

Con fecha 17 de mayo de 2021, Carlos Eugenio Beca, Presidente del Comité Directivo del Servicio Local de Educación Pública de Barrancas dijo en la comisión que: "Por último, algo no menos importante y trascendental a todo lo demás, es la situación financiera deficitaria. Nos preocupa profundamente la situación financiera del Servicio Local de Barrancas, que para el año 2021 presenta un déficit estimado de más de 3.000 millones de pesos y podría alcanzar hasta 8.000 millones, al agregar el déficit del año anterior. Por tratarse de un déficit de los ingresos en el presupuesto asignado existe el riesgo de que no se puedan realizar gastos esenciales de los establecimientos educacionales y jardines infantiles. Este es un problema que excede a las posibilidades de gestión del propio servicio. Y debe comprometer la voluntad de la Dirección de Educación Pública y de los Ministerios de Educación y de Hacienda, la Dirección de Presupuestos.".

c) Estado de la infraestructura de los establecimientos educacionales

Desde el primer traspaso de los Servicios Locales, 77 Resoluciones Exentas se emitieron por la DEP, en cumplimiento del artículo 21 transitorio de la ley N° 21.040, que evidenciaba el estado de conservación en la cual se encontraban los establecimientos educacionales, donde la gran mayoría tenía un estado de deterioro superior al 50% en infraestructura.

---

[73] https://www.biobiochile.cl/noticias/nacional/chile/2021/02/22/mineduc-informa-que-todos-los-colegios-municipales-que-postularon-recibieron-ayuda-economica.shtml#:~:text=Mineduc%20informa%20que%20todos%20los%20colegios%20municipales%20que%20postularon%20recibieron%20ayuda%20econ%C3%B3mica,-Por%20Diego%20Vera&text=A%20una%20semana%20del%20retorno,gradual%20y%20con%20horarios%20flexibles.

En el caso particular de la Escuela Millahue, la Resolución Exenta N° 59 de 2018, se señalaba que los pabellones tenían un cien por ciento de deterioro.

Por ello, es que, desde el año 2018 la H. diputada Girardi, ha venido continuamente denunciado la precariedad en la infraestructura, y durante la semana del 02 al 06 de agosto, se visitaron Escuelas del SLEP de Barrancas, informe que fue acompañado a esta comisión investigadora.

En esas instancias, se presentaron generalmente, sobre esta materia, las siguientes problemáticas:

1. Marcado abandono y falta de mantención en la mayoría de las escuelas y jardines infantiles por el déficit en la intervención en patios, que se asocia a la falta de un equipo de mantención, originando que los alumnos y alumnas los consideren espacios poco atractivos para distenderse.

2. Disparidad en la inversión entre las diferentes escuelas, unas con alta inversión y otras con abandono evidente.

Respecto a la primera problemática mencionada en el punto anterior, esto se manifiesta principalmente en los patios sucios, juegos deteriorados, canaletas tapadas, numerosas salas y camarines convertidos en bodegas o botaderos, termitas y un deterioro general de la infraestructura.

En contexto de pandemia, el tema de los espacios y en particular de los patios, adquiere particular relevancia, en la medida que las condiciones sanitarias exigen que muchas actividades se realicen al aire libre. En la escuela Millahue, la Directora tuvo que gestionar el retiro de toneladas de basura con un particular, dado que el SLEP jamás respondió a sus solicitudes, así como el retiro de un árbol que cayó en medio del patio de los niños de pre básica y que nunca el SLEP acudió para su retiro.

No deja de llamar la atención el dramático abandono en que se encuentran algunos establecimientos, como la escuela de Cerro Navia, donde se pudo constatar in situ, una cámara de recibe aguas servidas de la cocina y baños, completamente tapada, con olor a podrido, situación que ya había sido denunciada en el 2019, o la escuela Croacia, cuyos baños están inhabilitados y los techos de los pasillos por donde circulan los niños, están deteriorados y a punto de desprenderse y caer, o las fecas de paloma en todas partes. Todas estas situaciones han sido denunciadas en forma reiterada ante las autoridades. Dado este escenario, algunos directores se han negado a recibir a niños y niñas en estas condiciones insalubres y no han podido iniciar el retorno a clases presenciales.

Por otra parte, lo señalado por casi todos los y las Directoras, es el escaso número de auxiliares con que cuentan las escuelas para las labores de aseo y de apoyo. De cinco auxiliares con lo que cuenta un establecimiento, solo uno está en actividad, por ejemplo, también en la Escuela Croacia, la Directora señala que dos están jubiladas esperando el pago al bono al retiro que lleva años de atraso y otros dos tienen enfermedades de base y están autorizados para no asistir en forma presencial.

Por otra parte, el SLEP cuenta sólo con tres funcionarios de mantención para 77 establecimientos y no hay recursos para contratas guardias, ni sistemas.

Desde las cosas más domésticas como tapar cámaras y limpiar canaletas, hasta asegurar el cuidado y resguardo del equipamiento parecieran ser temas imposibles de abordar por el SLEP.

En un minoritario número de escuelas, se han iniciado reparaciones que son sumamente agradecidas por la comunidad. Por ejemplo, en este último caso, la Directora (I) de la Escuela Paulo Freire, en la 6ta sesión, hace mención sobre esta disparidad de inversión e indicó: "*Asimismo, creo que se mencionó que nuestra escuela tiene un proyecto de intervención por más de 20 años. Incluso, cuando la escuela pasó a Jornada Escolar Completa (JEC), su infraestructura no fue mejorada. También tenemos un proyecto de inversión y de reparación de la escuela desde fines del año pasado, y prácticamente se está interviniendo en su totalidad, es decir, baños, comedores, canchas de juego, etcétera. Dicho proceso está en desarrollo y termina esta semana. En verdad, eso ha sido un lujo para nosotros, porque a veces no teníamos dinero ni para comprar un vidrio, pero hoy podemos decir que nuestra escuela está teniendo mejoras sustanciales.".*

Sin embargo, son pocos los establecimientos que han recibido algún apoyo, y la constatación en terreno es muy lejana a lo mencionado por el Ministro, quien con fecha 26 de julio de 2021 en una nota del diario La Tercera en relación al catastro de los colegios en la RM, puntualizó que el Mineduc ha incrementado sustantivamente los recursos para el mejoramiento de la infraestructura de la educación pública. Solo en 2021 fueron $186 mil millones disponibles para ese fin, un 60% más que el año anterior, frente a lo cual señaló: *"Es fundamental que los sostenedores, y en este caso los alcaldes, presenten proyectos financiables, porque si no los presentan es imposible darles los recursos.".*

Es interesante observar lo que ocurre en el caso que el sostenedor sea el propio Estado, el propio Ministerio de Educación, quien si bien, se auto asigna recursos, estos son insuficientes y no permiten abordar el mejoramiento de todos los establecimientos que están bajo su administración directa y que, además, en algunos casos debe devolverse los recursos por su incapacidad de ejecución.

Frente a lo anterior, se generan 2 situaciones dispares: recursos que parecieran no llegar a los establecimientos de Barrancas o recursos que si llegan, no son eficientemente entregados, pues el Ministro ha recalcado que la responsabilidad corresponde al sostenedor, así lo refrendó en entrevista emitida el 27 de julio en el Canal 24 horas y tras recibir críticas del Colegio de Profesores por la infraestructura de los colegios, el ministro Figueroa expresó que *"el encargado y responsable de mantener los colegios, al margen del COVID-19, en término de infraestructura es el sostenedor. Y para eso se le entregan recursos."* Al parecer el Ministro no tiene conciencia de que el sostenedor de las escuelas que están bajo tutela del SLEP, son de su directa responsabilidad.

Así lo señala la integrante del Consejo de Evaluación en abril del presente, María Teresa Florez: "*O sea, al ser una ejecución anual, lo que no se gastó por ley de servicio público se debe reintegrar y, además, genera una tensión con la ley de subvenciones, porque se asume que la subvención escolar debería quedar para el servicio de educación. Insisto, la normativa de servicio público se debe reintegrar. Muchas veces esa subejecución -insisto-*

no pasa porque no se necesiten los recursos, sino porque no se logró ejecutar de buena manera en los tiempos.".

Las palabras del Ministro fueron duramente criticadas por el actual presidente metropolitano del Colegio de Profesores Mario Aguilar, el 27 de julio de 2021 en Canal 24 horas: "*Si un ministro dice que no es su responsabilidad el pago de sueldos, infraestructuras y condiciones de un colegio, entonces estamos ante un notable abandono de deberes.*".

Entonces, ¿qué respuesta se les da a las comunidades educativas, si el Ministro como primera autoridad se desliga por completo de su atribución de supervigilancia?

Las conclusiones de la visita evidenciaron la disparidad de inversión entre los diferentes establecimientos educacionales, traducido en el avance de algunas escuelas en la infraestructura, materiales, recursos tecnológicos y humanos, mientras, otras se encuentran en un absoluto abandono. Esto no solo deja de manifiesto el nulo compromiso de la gestión del Director Ejecutivo del SLEP de Barrancas y de las autoridades centrales, sino que además no se condice con lo expuesto por él en su Plan anual 2020 donde señaló: "*El servicio se ha trazado el propósito de contribuir decididamente en el fortalecimiento de un Sistema de Educación Pública, para que todos los niños, niñas y adolescentes de Barrancas tengan garantizado el derecho a acceder a una educación de excelencia y de calidad. En este marco, concentra su compromiso en asegurar, resguardar y garantizar oportunidades reales a las y los estudiantes de los 77 establecimientos que comprenden salas cunas, jardines infantiles, escuelas básicas, liceo científico-humanista técnico-profesionales, escuela de adultos y escuelas especiales.*".

Entonces cabe señalar, después de la evidencia expuesta que, solo se ha continuado y agravado la vulnerabilidad de los niños, niñas y adolescentes, de estos establecimientos, que están viviendo en situaciones infrahumanas, producto del incumplimiento de la ley, el desinterés y abulia de la autoridad.

A lo anterior, se suma denuncia realizada a Contraloría durante enero del presente año, en donde se evidencia un notable abandono del SLEP frente a sus estudiantes, incumpliendo las obligaciones que la ley le establece, en materia de infraestructura y malversación de fondos públicos, producto del retardo excesivo para el inicio de los procesos licitatorios para conservación de infraestructura.

La imposibilidad de un retorno presencial, y por tanto la imposibilidad de los niños y niñas de acceder a clases presenciales en un contexto donde como ha dicho el propio Ministerio, no tienen-ni se le ha dado-las condiciones para conectarse en forma virtual, se debe exclusivamente a la irresponsabilidad de las autoridades ministeriales que hoy están a cargo de la administración de estos establecimientos. Es esta autoridad la que propone y define el presupuesto de los SLEP y la forma en que estos recursos serán entregados.

Por lo tanto, es esta autoridad la que está obstaculizando el derecho a la educación de los niños y niñas que asisten a los establecimientos educacionales pertenecientes a los Servicios Locales de Educación.

d) Ausencia de participación y escaso diálogo con las comunidades.

El mensaje de la ley N° 21.040 dedica uno de sus puntos a explicar la importancia de potenciar la participación de las comunidades educativa, local y regional en el desarrollo de la educación pública en cada territorio, por ello expresa: *"Se busca con ello promover el involucramiento de las familias y mayores responsabilidades de parte de las comunidades educativas. Conforme a la legislación vigente, los Servicios Locales velarán por el funcionamiento regular de los Consejos Escolares, favoreciendo, entre otros, su vinculación con la comunidad local.".*

Este corresponde a uno de los focos más importantes de los nuevos SLEP es la participación de los integrantes de las comunidades escolares, que se verá expresada en dos instancias: **el Comité Directivo Local y el Consejo Local de Educación Pública**. De esta forma, estudiantes, apoderados, profesionales de la educación y miembros del equipo directivo podrán participar e influir en la toma de decisiones estratégicas del servicio, junto a las autoridades locales y al equipo del SLEP, liderado por un director o directora elegida por la Alta Dirección Pública.[74]

Sin embargo, fue uno de los ejes más reclamados por las comunidades educativas, directores, docentes y asistentes que se dieron a conocer durante esta comisión.

Doña María Teresa Florez, académica del Departamento de Estudios Pedagógicos de la Universidad de Chile e integrante del consejo de evaluación del sistema de evaluación pública, en sesiones 9 y 10, exhibe, en su calidad de miembro del consejo local, esta misma temática, donde debe mejorarse el proceso comunicacional con una mesa intersectorial conformada por todos los organismos que intervienen en el funcionamiento de los SLEP. En concordancia, señaló que hasta la fecha los comités directivos o consejos locales no son escuchados y sus voces no están siendo consideradas, incumpliendo gravemente la ley.

La directora de la Escuela Provincia de Arauco de Cerro Navia, doña Úrsula Araya en sesión del 18 abril expuso sobre la falta de comunicación, inclusión y participación directa de los directores, quienes finalmente tienen la realidad de sus escuelas. En este sentido expresó: *"Si nosotros como directores no somos convocados en el diseño, en la implementación y en el levantamiento de acciones concretas es imposible que podamos alcanzar metas y sumo después de pedirlo el uno, el 12 y hoy, desde el 19 de marzo aún no cuento con la información respecto de los recursos de mi escuela 2020, y la proyección para gestionar 2021. Sin eso no tengo nada, Es como sembrar un árbol donde no hay tierra así de simple.".*

Su presentación concluyó señalando el **alto grado de desvinculación que tiene el Director Ejecutivo del SLEP de Barrancas con los directores,** lo que denota un profundo desinterés en el ejercicio de sus funciones comprendiendo que una de estas es otorgar apoyo pedagógico a los diferentes establecimientos, desarrollar capacidades directivas, apoyar el desarrollo profesional, de los miembros de la comunidad educativa, docentes y asistentes de la educación.

---

[74] https://educacion2020.cl/noticias/que-son-y-como-funcionan-los-servicios-locales-de-educacion-publica/

Adicionalmente se refirió **al nulo reconocimiento de los establecimientos como unidad básica y fundamental del sistema;** que por definición está conformado por sus respectivas comunidades educativas, cuyos actores principales son estudiantes padres, madres y apoderados, profesionales de la educación, asistentes de la educación, equipos docentes directivos, auxiliares, que conforman desde sus particularidades un colectivo único, singular, con una riqueza cultural que debe ser reconocida por el sostenedor y entendido por este, que los protagonistas de la Educación Pública son los niños, niñas y Adolescentes a quienes deben ir dirigida todas las acciones de mejoramiento de calidad de vida. Por último, finaliza hablando sobre **la nula transformación de la realidad escolar después de haber sido diagnosticada por la SLEP de Barrancas*;*** aumentando de esta forma las desigualdades en el territorio, la segregación, provocando muchas veces el decaimiento anímico en las comunidades educativas, en donde a pesar de los esfuerzos realizados, los avances son mínimos dejando de manifiesto una vez más que los niños, niñas y adolescentes están abandonados por el estado, representado por un sostenedor cuya única preocupación es llenar planillas Excel.

En sesión de igual mes, la Directora Alejandra Benavides expone sobre la **nula empatía o desconocimiento de la realidad de las familias que componen la comunidad escolar de Barrancas;** en donde los fines de la educación son absolutamente ignorados, ya que está orientada al pleno desarrollo de las características de los estudiantes de acuerdo a sus necesidades, y el Estado a través de los SLEP deben de proveer una educación gratuita y de calidad que sea laica y pluralista respetando la diversidad y la libertad, una educación tolerante pero por sobre todo siempre considerando las particularidades tanto a nivel local como regional.

Anteriormente, el ex presidente del Consejo Local SLEP Barrancas, Dorian Tobar en marzo del presente año, en sesión número 6 dice: *“(...) la opinión generalizada de los integrantes de la comisión es que no éramos tomados en cuenta. Había un término jovial; éramos como un arroz graneado, estábamos ahí por cumplir no más, eso dolió y dolió mucho (...) En definitiva no fuimos considerados en lo absoluto y todas las propuestas que nosotros hicimos el Director Ejecutivo dijo que eran interesante pero que no las iban a considerar para el PEL 20-21”.*

La ley establece un procedimiento para la elaboración del plan estratégico local, la cual está definida en el artículo 45 de la ley Nº 21.040 y en el mismo artículo se dice expresamente que “Para elaborar la propuesta de Plan Estratégico, el Director Ejecutivo deberá consultar al Consejo Local respectivo, el que podrá formular recomendaciones. Asimismo, deberá solicitar la opinión de los directores de los establecimientos del territorio.”.

Con fecha 17 de mayo de 2021, Carlos Eugenio Beca, Presidente del Comité Directivo del Servicio Local de Educación Pública de Barrancas dijo en la comisión que: “*Distintos actores nos han señalado que es difícil la participación, el vínculo y el diálogo con las autoridades. Estamos conscientes que el problema de la participación es muy complejo. Muchas veces la gente no queda satisfecha con las participaciones que se pueden realizar, pero creemos que hay un espacio de avance en esa dirección. También que el Consejo Local se demoró en constituirse. Ya está constituido y esperamos que eso fluya adecuadamente.”.*

Por último, con fecha 17 de agosto de 2021, en un comunicado de prensa el Colegio de Profesores[75], manifestó que, la falta de comunicación por parte de la Dirección de Educación Pública pareciera nunca acabar. Es así como el Alcalde de Punta Arenas, se reunió con fecha 29 de junio del presente año, con el Sindicato de las Asistentes de la Educación, el Sindicato de Administrativos de la Corporación Municipal, el Sindicato de Trabajadores de la Educación y los dirigentes representantes de Colegio de Profesores de Magallanes, en donde se compromete a que los gremios estarían presentes durante las Comisiones Técnicas de implementación del SLEP. Sin embargo, ello no se cumplió, como lo indica el presidente del Sindicato de Trabajadores CORMUPA: *"aún no sabemos por qué la Dirección Nacional de Educación Pública, que es el organismo responsable de esta instalación, dejó solamente a un grupo de dirigentes en esa mesa y por eso nosotros emplazamos al Gobierno y al Ministerio de Educación a que den cuenta del por qué arbitrariamente discriminaron al grupo más importante de trabajadores.".*

Producto de lo anterior, interpusieron un Recurso de Protección donde solicitan que se paralicen las funciones de la Comisión Técnica hasta que no sean convocadas las personas que por decreto del Alcalde se comprometió a convocar.

A pesar de que se ha señalado constantemente por las comunidades educativas, desde la implementación de la ley y las audiencias en las cuales han expuesto, que la comunicación debe ser fluida con la DEP y crearse espacios mínimos de participación, la situación sigue manteniéndose como lo han hecho ver los gremios desde Magallanes.

e) Baja participación, poca autonomía y nula valoración al rol de los directores de los establecimientos.

En esta oportunidad lo señalado por la Directora Alejandra Benavides en sesión N° 8 es revelador: *"En junio del año pasado, iniciada ya la pandemia, vine a la Comisión de Educación a plantear que ni siquiera nos habíamos reunido con el director ejecutivo. Por lo tanto, se repite el tema de la mala comunicación o de la comunicación no efectiva con quienes hoy tenemos la tarea de liderar las escuelas.".*

Efectivamente, la Directora denuncia que, transcurridos 5 meses desde el inicio de la pandemia, el Director Ejecutivo nunca convocó a las comunidades, ni a los directores para coordinaciones mínimas frente al nuevo escenario. Sólo, después de la denuncia, el Director convocó a reunión para tomar conocimiento de lo que está ocurriendo en las escuelas.

Es reiterada la opinión que manifiestan los diferentes actores respecto del poco o nulo contacto del Director Ejecutivo de Barrancas con el cuerpo de directores y miembros del consejo local, quienes debieran ser los actores estratégicos para el desarrollo en la implementación de la nueva ley de Educación Pública, en donde el Director Ejecutivo debiese cumplir un rol activo en la promoción y fortalecimiento de los diferentes liderazgos de los directores de las diversas escuelas, con la finalidad de ir fortaleciendo la participación, en el sentido de pertenencia, de estos, y los diversos miembros de las comunidades educativas.

---

75 https://www.colegiodeprofesores.cl/2021/08/17/implementacion-de-slep-en-magallanes-esta-en-jaque-luego-de-que-corte-de-apelaciones-admitiera-recurso-de-proteccion/

El ex Director del Servicio Rodrigo Egaña, señaló en sesión del 01 de marzo de 2021 **la ausencia de coordinación intersectorial** y la **nula interacción entre la dirección SLEP Barrancas con los organismos civiles de participación,** es decir no hay trabajo en red entre los Consejo Locales, Comités Directivos, Consejos Escolares. A raíz de ello, señala la importancia de elaborar un diseño que favorezca el vínculo entre todos ellos, elaborando líneas de acción en común, donde cada estamento pueda presentar sus particularidades, con la exclusiva finalidad de mejorar el vínculo con el medio educativo y, por tanto, en beneficio directo de los niños, niñas y adolescentes.

Este punto se refleja en otro servicio. El pasado 31 de julio, el diario El Pingüino de la Región de Magallanes publicó una nota titulada *"Gremios de la educación desmienten a directora de Educación Pública sobre SLEP*", debido a que Alejandra Grebe habría dicho que los invitó a reuniones sobre SLEP, lo que gremios de educación locales desmintieron.

En ese sentido, Violeta Andrade, presidenta regional del Colegio de Profesores, señaló lo siguiente: "*No fuimos convocados a ninguna reunión por parte de ella, ni la Seremi; sabemos que se reunió con los gremios que están a favor de los Servicios Locales de la Educación, pero ninguno de los otros gremios fue convocado.".*

"Expresamos nuestro profundo malestar respecto de las palabras de la directora nacional de Educación Pública en Magallanes. Llama la atención que se digan cosas que no son con tanta facilidad. No ha citado a nadie (a reunión). A lo mejor con los gremios gastronómicos o de otro sector puede que se reúna, pero a los gremios de la educación no los ha citado", sostuvo Carlos Díaz, presidente nacional del Magisterio.

La problemática es nacional y la ley N° 21.040 mandata el trabajo en red y colaborativo, entonces cómo se explica que las comunidades educativas no conversen con su sostenedor. Sin establecer métodos de trabajo conjunto es imposible que el Servicio logre comprender las necesidades reales de los establecimientos. Producto de lo mismo se genera que los directores debían sortear las vallas, haciendo uso de sus mínimas herramientas.

La ausencia total en el involucramiento de los establecimientos educacionales a través de sus directores, es transversal a la administración de Barrancas, ya que desde el mismo momento de la implementación del Servicio Local se ha dejado de manifiesto el nulo apoyo técnico- pedagógico sin responder a las necesidades de cada establecimiento desde sus particularidades, como lo son las características territoriales, niveles educativos, formaciones diferenciadas, establecimientos bilingües con alto porcentaje de migrantes, el respeto y reconocimiento de los PME de cada establecimiento escolar.

Esta falta de trabajo en red, como se ha señalado, no es solamente con los directivos y las autoridades, sino que también se refleja en el alcance que pueden tener las madres, padres y apoderados frente a su sostenedor, como lo indicó María Teresa Florez durante la comisión al señalar:

"También se señala que en algunos casos la percepción del director ejecutivo es el de una figura de más difícil acceso, en el sentido de que antes el apoderado que tenía algún problema podía recurrir al alcalde o a la municipalidad, en cambio acá, si el Servicio Local de Educación está en otra localidad, no donde el apoderado vive, no hay claridad respecto de cómo llegar

a la persona idónea para establecer las demandas. En ese sentido, la figura de apoyo de la Unidad de Gestión Territorial ha funcionado, pero igualmente se siente que la información llega hasta esa instancia, no hasta el director ejecutivo.".

Lo mismo mencionó el Alcalde de la Comuna de Lo Prado don Maximiliano Ríos, en sesión del 26 de julio de 2021, en su presentación: *"Por último, como han indicado los apoderados, el tema de la participación es además responsabilidad de los propios padres. Echan mucho de menos un mayor vínculo y más cercanía entre los equipos directivos con sus padres y apoderados. Esto se manifiesta en la poca participación al interior de los establecimientos educacionales y, además, muchas veces ellos reconocen que existe desinterés, porque no hay suficiente motivación para lograr tal participación en aquellos.".*

f) Deudas previsionales impagas.

Por otro lado, existe una gran preocupación respecto a lo qué ocurrirá con las deudas que se arrastran desde hace años en las municipalidades con el traspaso del Sistema antiguo con el nuevo sistema de educación pública de la ley N° 21.040.

En sesión de la Comisión de Educación, de fecha 02 de junio de 2020, se analizaron las razones por las cuales no se ha procedido el pago de las deudas de cotizaciones previsionales a profesionales de educación de la comuna de Cerro Navia, que debieron ser resueltas conforme al procedimiento del artículo trigésimo cuarto transitorio de la ley N° 21.040. Hasta el día de hoy, han pasado 2 años y 5 meses del traspaso del servicio educativo del municipio al nuevo Servicio Local de Educación Pública de Barrancas, y todavía no se han pagado las deudas respectivas al traspaso, lo que genera interrogantes sobre qué sucederá con los próximos Servicios Locales de Educación Pública que tengan deudas anteriores similares a la situación de Cerro Navia.

Esto genera además una incertidumbre muy grande entre los trabajadores de la educación que se ven perjudicados con esta negligencia tan grave en sus derechos laborales, ya que tampoco tienen la certeza de que, si efectivamente serán pagadas las cotizaciones pasadas, ahora que hay un nuevo sistema de educación pública y las municipalidades y corporaciones municipales ya no son parte de él.

Asimismo, la ley establece que el ministerio debe, en este caso, pagar las deudas previsionales que sean de educación. No se pueden pagar deudas previsionales que no sean de trabajadores de la educación. Llegar a depurar esa información fue un trabajo bastante largo, nos demoramos mucho tiempo en el caso de Cerro Navia.

El primer informe, citado el 23 de febrero de 2018, determinaba el total de los pasivos de la corporación sin acotarse aquellos que se podían pagar por el Ministerio de Educación. En efecto, las deudas que puede generar el Ministerio son las remuneraciones previsionales del personal, de las que parte importante -como señaló el señor Egaña- fueron pagadas en su administración, quedando la deuda previsional que se pagó como se detalla a las Administradoras de Fondos de Pensiones (AFP), mediante el decreto exento N° 732, de 2020, del Ministerio de Educación.

Ahora bien, dicho informe no da cuenta de la deuda generada y mantenida por dicha corporación de forma desagregada por funcionario y por eso no se pudo pagar, principalmente, porque venía mezclada gente de la salud y otros que no eran profesionales ni asistentes de la educación.

En informe de ejecución de la Dipres se evidencia la deuda flotante actual, de la partida de los Servicios Locales de Educación, información que no distingue por Servicio ni el tipo de deuda, sin embargo, de la cual se refleja la deuda actual arrastrada hasta enero de 2021.

g) Bono de incentivo al retiro.

En primer lugar, es importante señalar que en el diseño de la estructura de financiamiento del Sistema Público de Educación como lo mencionara el señor Nelson Zarate miembro del comité directivo de Barrancas en su exposición el 17 de mayo en la sesión 11 se observa que *"(…) Algo que se previó, y no se hizo nada. Es de sobra conocido que la actual subvención no financia la planilla de sueldos de los servicios locales. El actual sistema de financiamiento, por asistencia promedio de los alumnos, solo cubre, en promedio, el 80% de los sueldos de docentes y asistentes de la educación. Para el caso de Barrancas, su déficit estimado, sumando los anteriores, para 2021 sobrepasará los 7.000 millones de pesos.".*

En ese contexto y por la poca rigurosidad administrativa y financiera que presenta la gestión de Barrancas como lo señala el contralor general de República en su exposición del 22 de marzo 2021 en sesión N°5, en la cual menciona una serie de irregularidades de tipo contable administrativa recomienda fortalecer la estructura, señalando "(…)También me parece que la similitud de estas dos auditorías, es decir, lo parecido de los hallazgos entre una y otra, da cuenta de que hay que fortalecer la estructura administrativa de los Servicios Locales en materia de la administración financiera del Estado, uso de sistemas, regulación presupuestaria, contabilidad gubernamental o ley de compras públicas.".

Bajo este contexto, el no pago al bono de incentivo al retiro ha ido "taponeando" la fluidez del sistema, hoy en día se pueden encontrar escuelas como la Croacia en donde de cuatro auxiliares tres están esperando el bono, hoy presentan enfermedad de base y la Directora no tiene el cargo disponible para contratar más personal de aseo, lo que implica un desmedro en el tema salubridad del establecimiento.

Por otra parte, hay que mencionar el caso de don Héctor Miranda Núñez, que siendo funcionario del Servicio de Educación Pública de Barrancas, con 64 años de edad, presenta 22 cotizaciones impagas del 2015 al 2016; así lo pudo constatar la diputada Girardi en terreno en la escuela República de Croacia en donde el señor Miranda hoy cumple funciones de jefe de UTP junto a otro colega, ya que existen 2 profesionales cumpliendo el mismo cargo, lo que denota el desorden antes mencionado, la poca rigurosidad y el nulo cumplimiento de normas y dictámenes de la contraloría. El señor Miranda entrega a la diputada el documento N° E120216/2021, emanado por esta institución con el fin de solicitar ayuda a regularizar su situación y poder jubilarse), dejando claro que la sobre dotación de personal es una constante que se da en todos los establecimientos.

Solo estos ejemplos dejan de manifiesto que no existe un trabajo intersectorial, con la finalidad de ir destrabando estas situaciones y así poder

cumplir con cientos de profesionales, auxiliares de la educación que hoy están a la espera del bono al retiro.

3. Conclusiones sobre la instalación del Servicio Local de Educación Pública de Valparaíso.

a) Falta de información y comunicación.

Un elemento crítico que da cuenta el informe de evaluación intermedia del Consejo de Evaluación del Sistema de Educación Pública del 2021, afirma que uno de los principales problemas en la implementación de los SLEP es la falta de información que se genera en el traspaso del servicio educativo, ya que, se provoca una desorganización tan grande que se atrasa prácticamente todo lo que tiene que hacerse en la implementación del servicio. En el caso del Servicio Local de Valparaíso, la Municipalidad de Valparaíso fue el único municipio que no suscribió el Convenio de Ejecución del Plan de Transición, ya que este tiene el carácter de voluntario.

Las consecuencias que trae no firmar el convenio es que los funcionarios del SLEP no podrían acceder a ninguna fuente de información oficial durante la fase de instalación, lo cual en términos de orden y de existencia de elementos básicos para la operación del Servicio Educativo, serian destrozas y en especial en términos laborales, por los contratos de trabajo, la nómina de los funcionarios traspasados, información relativa a bonos o asignaciones, entre otros.

Por otra parte, la falta de información también podría implicar consecuencias relativas a la implementación física de este nuevo sistema en los establecimientos educacionales de la comuna, como por ejemplo la inexistencia de contratos de servicios, relaciones con proveedores, u otros, lo cual afectaría directamente con el correcto pago de cuentas de servicios básicos que implican el corte de algún suministro en los establecimientos, impidiendo que este pueda funcionar.[76]

En la comisión investigadora se recibieron denuncias del SLEP de Valparaíso relativas a las irregularidades cometidas en la elaboración de la Estrategia Nacional de Educación Pública, por la poca o nula participación de la comunidad educativa en él. Las denuncias tienen relación con que en realidad el Servicio nunca participó en la elaboración del documento, ni fomento que la comunidad educativa entregará los aportes que podría considerar necesarios, no obstante, igualmente el Comité Directivo realizó propuestas, pero estas no fueron consideradas en la Estrategia Nacional.

En consecuencia, no solo el SLEP de Valparaíso cometió infracciones respecto a la elaboración de la Estrategia Nacional de Educación Pública sino que también de la DEP al no considerar las opiniones del Comité Directivo de Valparaíso, esto en virtud de lo señalado en el artículo 6 de la Ley Nº 21.040, la cual indica expresamente que, “en el marco de la elaboración de una nueva Estrategia, así como en sus modificaciones, la Dirección de Educación Pública y los Servicios Locales de Educación Pública, en el nivel que corresponda, deberán establecer un período de participación de las comunidades educativas, con el objeto de recabar su opinión y propuestas. Con el mismo fin, podrá considerar un proceso de consulta ciudadana, (...), dirigida a padres,

[76] Evaluación intermedia del Consejo de Evaluación del Sistema de Educación Pública, pág. 15.

apoderados, directores, docentes, asistentes de la educación, estudiantes y otras personas u organismos interesados en la materia, tales como decanos de las facultades de educación o expertos en el ámbito educacional. Asimismo, tendrá en consideración los informes señalados en el inciso precedente, así como las propuestas que realicen los Directores Ejecutivos de los Servicios Locales, los Comités Directivos Locales, los Consejos Locales y las Coordinaciones Regionales.”.

b) Condiciones Laborales de los trabajadores del SLEP.

En el caso del Servicio Local de Valparaíso, se denuncian presiones indebidas en los procesos de concursos, ya que no se consideran los aportes del Comité Ejecutivo al perfil de su preferencia, y finalmente los perfiles seleccionados no son suficientes para lo que amerita el cargo. En la misma línea, también hay denuncias de hostigamiento laboral para vulnerar confidencialidad, imparcialidad y valoración del mérito, entre otras. Infringiendo la normativa educacional, específicamente el artículo 30, letra b), de la ley N° 21.040, el cual establece que se debe proponer por parte de los Comités Directivos, elementos relativos al perfil profesional del cargo de Director Ejecutivo del respectivo Servicio Local, y también las recomendaciones que realice el Consejo Local de Educación Pública respectiva. En virtud de lo anterior, estaríamos frente a un incumplimiento legal por parte del SLEP, hechos que no pueden volver a ocurrir.

Por otra parte, el SLEP de Valparaíso es uno de los servicios locales que tienen las deudas previsionales más grandes entre los distintos servicios, que se arrastran desde las Municipalidades, la cual en el caso del Servicio ubicado en la V Región, alcanza la exorbitante suma de 70 millones de pesos aproximadamente.

Durante la Comisión Investigadora no se dieron explicaciones concretas de por qué hay un atraso en el pago de las cotizaciones de los trabajadores, a pesar de que fue solicitado al Ministro regular esta situación, se llegó a la conclusión de que la falta de gestión y ausencia de decisiones políticas fue lo que desencadenó la negligencia por el pago pendiente en materia previsional a los trabajadores de la educación.

c) Dependencia política-ideológica del SLEP.

El Dirigente comunal del Colegio de Profesores de Valparaíso, señor Andrés Arce Olate planteó en la Comisión que existe una gran inquietud de parte de las trabajadoras y de los trabajadores del Servicio Local de Educación Pública de Valparaíso, en torno a la poca autonomía que tiene el SLEP respecto de los gobiernos de turno. Esta poca autonomía podría traducirse en conflictos de voluntad, ya que podrían limitarse las decisiones fundamentales que tengan que tomar los altos cargos del Servicio Local, y en consecuencia perjudicar los principios de la nueva educación pública.

Esta denuncia se hace a raíz de que en los pocos meses que lleva de implementación este servicio local, se ha visto una dependencia total de los lineamientos establecidos por el Ministerio de Educación, especialmente con lo relativo al gran conflicto que hemos tenido en este último tiempo con el retorno a clases presenciales, lo cual no fue cuestionada en ningún momento la decisión tomada por Mineduc, a pesar de las condiciones sanitarias que hay en el país.

Eso da cuenta de una filiación y de una dependencia política-ideológica bien fuerte. Incluso, cabe mencionar que algunos de los subdirectores del Servicio local han sido candidatos de partidos políticos oficialistas y eso da cuenta de que ese principio de los ciclos políticos está ausente.

Es importante que no se haga costumbre en este servicio local como en otros servicios locales la dependencia política con el gobierno de turno, ya que la autonomía política es esencial para que los principios del nuevo sistema de educación pública puedan cumplirse a cabalidad, por lo que es esencial priorizar la autonomía del servicio, tal como lo impera el artículo 17 de la ley N° 21.040, cuando en sus preceptos determina que *"el objeto de los Servicios Locales será proveer, a través de los establecimientos educacionales de su dependencia, el servicio educacional en los niveles y modalidades que corresponda, debiendo orientar su acción de conformidad a los principios de la educación pública establecidos en el artículo 5.".*

4. Conclusiones sobre la instalación del Servicio Local de Educación Pública de Colchagua.

El Diputado del Distrito N° 16, Cosme Mellado Pino, miembro de esta Comisión Investigadora, recibe por parte del Colegio de Profesores de San Fernando una serie de denuncias en contra del SLEP Colchagua, relativas a su deficiente funcionamiento, y que su instalación no se habría realizado conforme a lo dispuesto en la Ley la ley N° 21.040, ya citada, afectándose los derechos laborales de los trabajadores de la educación al no otorgarse los recursos necesarios para satisfacer las necesidades mínimas de los alumnos en las Unidades Educativas de las distintas comunas dependientes de dicho servicio. Esto ha ido en desmedro directo de la Educación Pública.

Principales problemas

1. Disminución del sueldo de todos los profesores de San Fernando, producto de la no entrega de bono de locomoción.

2. Rebaja de los sueldos de los asistentes de la Educación de la comuna de San Fernando hasta en un 50% de su monto, por no reconocer y respetar negociaciones colectivas ya adquiridas por años.

3. Disminución en algunos establecimientos educacionales de la asignación por alumnos prioritarios. Esto debido a la imposibilidad de remitir la información pertinente, ya que los apoderados no presentaron la documentación necesaria, atendiendo las dificultades propias de la pandemia de Covid. Esto se traduce en la pérdida de hasta $250.000 en los sueldos.

4. Muchos profesores suspendieron la evaluación docente el año 2020, por no darse las condiciones adecuadas atendido el estado de emergencia sanitaria por Covid; y a los que estaban encasillados en la carrera docente en el tramo temprano, en aplicación de la ley les descontaron la asignación de alumnos prioritarios.

5. No se han respetado los contratos de trabajo y las funciones estipuladas en ellos. Muchos docentes fueron cambiados de funciones, sin realizar un nuevo contrato o la modificación del existente.

6. Se crearon cargos innecesarios como el de subdirector; se contrataron personas para realizar funciones que ya estaban cubiertas,

quedando éstas con horas excedentes, y cambiando la malla curricular en marzo, no respetando el PADEM.

7. El SLEP Colchagua, no establece normas iguales para todos los establecimientos educacionales, lo cual ha hecho más compleja la labor de educar. El sistema híbrido de atención a los alumnos (presencial-*online*) ha implicado una recarga de trabajo para los profesores, quienes incluso deben asumir gastos que no les corresponden. A esto debe agregarse la constante presión desde la dirección de los establecimientos educacionales, que hace cada vez más agobiante la labor diaria.

8. Como consecuencia de esta recarga de trabajo y dificultad de educar, muchos funcionarios se encuentran con licencia médica, llegando hasta 18 en la Escuela Olegario Lazo Baeza, 9 en el Instituto Comercial, etc. La situación se hace más compleja porque no se cubren los reemplazos, quedando los alumnos sin las clases respectivas.

9. El 3 de agosto del 2020 fueron despedidos 18 profesores sin ser indemnizados y sin finiquito, después de más de 35 años de servicio. Algunos de estos docentes estaban con licencia médica y otros a la espera de la Ley de incentivo al retiro. Ante esto, tuvieron que efectuar los reclamos pertinentes ante la Inspección del Trabajo, dictaminando está que los despidos fueron ilegales. Es del caso señalar, que, para defender sus derechos, debieron incurrir en gastos tales como abogados, desplazamiento, etc.

10. Se traspasaron profesores al SLEP que en marzo no recibieron sueldo y tampoco fueron desvinculados en cumplimiento de la ley, suspendiéndoles el sueldo y sacándolos de sus funciones, siendo reemplazados por personas que no pertenecían al sistema. También efectuaron los reclamos pertinentes teniendo que incurrir en gastos de defensa de abogados.

11. Las reclamaciones efectuadas ante la Contraloría Regional, no han dado resultado, por cuanto dicho ente fiscalizador tarda mucho en responder a las diferentes consultas.

5. Conclusiones finales.

Después de varios meses y jornadas en donde la Comisión Especial Investigadora sobre la Implementación de los Servicios Locales recibió múltiples invitados, todos ellos y ellas pertenecientes a diferentes Servicios Locales de Educación Pública a lo largo del país y todos los miembros de la comunidad educativa; como los Directores Ejecutivos de los SLEP de Barrancas, Costa Araucanía, Valparaíso y Llanquihue; como también el Contralor General de la República, la Directora de la DEP, el Ministro de Educación, el Superintendente de Educación, miembros del Consejo de Evaluación del Sistema de Educación Públicas y otros miembros de organizaciones civiles como sindicatos, entre otros.

Dado lo anteriormente expuesto en las conclusiones de este informe, se pueden percibir grandes problemas de infraestructura y equipamiento, sobredotación del personal, una auditoría aplicada por la Contraloría, la imposibilidad de volver a clases presenciales por las condiciones de los establecimientos educacionales, la mala o nula conectividad, la baja participación de la comunidad en general frente al proceso educativo, la nula recepción de las recomendaciones del Comité de Evaluación, el mal manejo

de los recursos, el déficit del sistema financiero, entre otras graves deficiencias.

Llama la atención que los Directores Ejecutivos de los SLEP sigan manteniéndose en su cargo, después de todas las irregularidades e ilegalidades cometidas principalmente en el SLEP de Barrancas como también en otros SLEP como Valparaíso y Colchagua, que fueron denunciadas reiteradas veces en las distintas audiencias que se hicieron en la Comisión Investigadora sobre instalación de servicios locales de educación. Por lo mismo, la responsabilidad de la elección y del desempeño de los Directores Ejecutivos es la directora de la DEP, del Ministro de Educación y del Superintendente de Educación, quienes han dejado de lado sus funciones como fiscalizadores.

No se entiende como no se han tomado en serio el importante rol que es implementar la ley de nueva educación pública, repetidas veces la directora de la DEP mencionó lo difícil que era implementar un sistema de educación pública para un país, entonces si es tan complejo ¿Por qué su conducta no ha estado a la altura de la dificultad que requiere este trabajo?

Se deja de manifiesto una total impunidad y esto también cuestiona nuevamente el rol que debe cumplir la Directora de la DEP por la falta de supervigilancia y de evaluación y por lo tanto de tomar todas las medidas pertinentes, dejando de manifiesto un estado que abandona a los más débiles, vulnerando el derecho a la educación de niños, niñas y adolescentes de nuestro país de aquellos establecimientos educacionales administrados por el Estado de Chile.

Uno de los ejes principales en las falencias percibidas por esta comisión tiene relación con que no han podido realizar un trabajo coordinado con los diferentes actores de la educación, aunque la misma ley sea la que establece la participación como un principio, que puede verse reflejado en los distintos insumos que se generan como los planes estratégicos locales de cada servicio o con los distintos informes del Consejo de Evaluación de Educación Pública, sin embargo, no se han utilizado como debieran, generando una desconexión con lo que se pide legalmente y no se hace.

No es casualidad, de que por todos los errores cometidos que fueron mencionados a lo largo del informe y el hecho de que la educación pública no este mejorando junto con la falta de información que tienen las bases de este sistema como estudiantes, apoderados y docentes, ha generado que este nuevo sistema se encuentra deslegitimado y se cuestione actualmente, cuando en realidad la ley nunca ha sido el problema, sino la gestión de quien la implementó.

B. RECOMENDACIONES.

Las conclusiones desarrolladas anteriormente conforman los antecedentes para que la Comisión recomiende las siguientes medidas:

1. **Modificar el sistema de financiamiento de la Educación Pública** de manera estructural, dejando atrás el sistema de subvenciones. Es necesaria una modificación legislativa en lo relativo a la forma de financiar la educación pública que asuma realmente las particularidades que tienen los programas educativos y la comunidad educativa. Para lo anterior, debe existir una modificación en el decreto con fuerza de ley N° 2, de 1998, del Ministerio

de Educación, sobre subvención del Estado a establecimientos educacionales; de la ley N° 20.248, de 2008, del Ministerio de Educación, sobre Subvención Escolar Preferencial, y la ley N° 20.845, de 2015, del Ministerio de Educación, sobre Inclusión Escolar. Estas leyes deben ser modificadas para que el sistema de educación tenga un financiamiento con preponderancia basal, para así dejar atrás el actual sistema de subvenciones. El estado no puede asumir la responsabilidad de mejorar la educación pública a través de un autofinanciamiento, que dependa de subvenciones entregadas por el Estado al Estado, por lo que debe terminarse urgentemente el actual sistema.

2. Crear un **nuevo sistema nacional de evaluación de resultados de aprendizaje**, que reemplace el Simce, el cual actualmente se utiliza para evaluar los resultados de aprendizaje de los establecimientos, evaluando el logro de los contenidos y habilidades del currículo vigente, en diferentes asignaturas o áreas de aprendizaje, a través de una medición que se aplica a todos los estudiantes del país que cursan los niveles evaluados. Este nuevo sistema deberá dejar de lado la lógica de competencia que se mantiene hoy en día y deberá ser realizado a través de un trabajo en conjunto con la comunidad educativa.

3. Es necesario hacer un **cambio en el modelo económico y político** que sigue imperando en la mentalidad de las personas que representan los cargos más importantes que tienen los SLEP y por lo mismo mejorar, la fiscalización de los procesos de selección de la Alta Dirección Pública respecto a los criterios de selección que se utilizan para estos cargos, específicamente los que implican una mayor responsabilidad en la implementación de los SLEP, como lo son los Directores Ejecutivos de los Servicios Locales de Educación, y de esta forma desarrollar mayor equidad territorial en todo el país para que la educación impartida en los distintos Servicios Locales sea igual en todo el territorio chileno y no existan diferencias abismantes entre ellos. También, debería existir un área especializada de la Alta Dirección Pública que viera y observará que los altos cargos directivos de los SLEP, tengan no solo un carácter gerencial, sino que también un amplio conocimiento de educación, y tengan la experiencia respectiva en el mundo educacional y una carrera destacada en este.

4. Que se **genere un nuevo plan estratégico de participación** entre los distintos actores de la implementación de esta nueva ley sobre Educación Pública, para que de esa forma podamos mejorar los canales de comunicación entre los distintos participantes de toda la comunidad educativa, de manera transversal entre ellos. Por cierto, **es necesario que la ciudadanía y las distintas comunidades educativas conozcan a cabalidad la nueva educación pública**, por tanto, se debe crear una campaña comunicacional de alto impacto que dé a conocer la nueva normativa y los cambios que trae esta nueva legislación. Como se dio cuenta en las intervenciones de distintos actores hay un desconocimiento de los distintos órganos creados (Comités directivos, Consejos Locales, DEP, SLEP, etc.) y sus funciones, además que el no entendimiento de la ley hace que los órganos participativos no encuentren en las comunidades educativas una motivación por participar de estas nuevas formas de intervención.

5. Iniciar las acciones legales que correspondan, independiente del origen que tengan, con la finalidad de acreditar la falta de servicio como el

criterio de atribución expresamente contemplado en nuestro ordenamiento jurídico en relación con la responsabilidad del Estado Administrador por el daño provocado y también investigar las posibles implicancias en delitos de malversación de fondos públicos y otros de la misma naturaleza. La ley N° 21.040 debe sancionar las conductas irregulares o contrarias a la ley que se han denunciado en diversas instancias por los nuevos SLEP, que no les llega la información completa o con el detalle suficiente para un buen traspaso de los profesionales de la educación y asistentes de la educación, bienes muebles, inmuebles, los contratos y/o convenios. No basta con la sanción a los alcaldes sobre abandono de deberes que está en el artículo vigésimo primero transitorio, claramente esa sanción nunca se ha utilizado, a pesar de las deficiencias que algunas Municipalidades han tenido con el Traspaso.

6. Las **condiciones laborales de los trabajadores de la educación**, especialmente la de los docentes, debiera ser mejorada en términos contractuales en cada uno de los SLEP implementados, tanto a niveles presupuestarios, incluyendo mejoras en las remuneraciones, como en lo que respecta a las condiciones laborales virtuales o presenciales, asegurando la adecuada regulación y garantizando en las distintas modalidades de trabajo un desarrollo pleno de su labor como educadores. En la misma línea, también es necesario rediseñar la estructura educativa que se imparte en los distintos Servicios Locales, para que estos mismos puedan cumplir con su labor de dictar una educación integral de excelencia que deberían recibir los niños, niñas y adolescentes y, a la vez, ellos como trabajadores se les asegure dignidad en el cargo y estabilidad.

7. En materia de **mejoramiento de infraestructura**, los recursos estimados para la próxima ley de presupuestos deberán estar destinados en un porcentaje importante al mejoramiento material de los establecimientos educacionales de los SLEP que estén en peores condiciones, especialmente los que pertenecen al Servicio Local de Barrancas. Esta necesidad surge como obligación y responsabilidad del Estado en asegurar un lugar adecuado y seguro para que se desarrolle el aprendizaje y crecimiento de los niños, niñas y jóvenes de nuestro país. No es menos importante considerar que la falta y carencia de una infraestructura adecuada puede repercutir incluso en daños a la salud de toda la comunidad educativa. Es importante que las modificaciones que se pretendan realizar en el futuro estén desarrolladas bajo un plan estratégico mucho más homogéneo, colectivo y comunitario para que de esta manera se consideren las necesidades más urgentes de cada establecimiento educacional, de lo contrario el Estado, a quien se le ha devuelto la educación, vulneraría el derecho fundamental a la vida, la integridad física y psíquica de toda la comunidad educativa, por la inseguridad que genera el deterioro estructural de los establecimientos como también, por las condiciones sanitarias que son necesarias para volver a las clases presenciales. Para añadir, es necesario la creación de Oficinas Locales para los SLEP que tengan una gran extensión territorial. También, se debe reestudiar los territorios de los SLEP que todavía no han sido traspasados debido a la gran extensión territorial que tienen algunos SLEP en comparación a otros.

8. Hacer un exhaustivo **monitoreo y seguimiento de la implementación de la ley N° 21.040**, generando herramientas que hagan posible una evaluación y análisis al proceso de instalación de los Servicios Locales, a objeto de verificar si se ha dado un cumplimiento adecuado a tan

importante tarea. Específicamente lo que respecta al pago de las remuneraciones y las cotizaciones previsionales adeudadas. A su vez, esto tiene que ir de la mano con que los mandatos legales imperantes se cumplan. En consecuencia, es necesario que se fiscalice el cumplimiento de estos mandatos, para que se concreten los objetivos y principios que inspiraron la ley. Este mandato corresponderá a todos los agentes del Servicio, incluyendo a los Comités Directivos y al Consejo Local.

9. Es necesario **aumentar la eficacia de los instrumentos utilizados para regular el traspaso de los futuros servicios educacionales desde los municipios a los Servicios Locales de Educación**, controlando y, eventualmente, sancionando conductas irresponsables, negligentes o de extrema ineficiencia de la administración municipal en el período previo y durante el traspaso. Por último, debería existir una rendición de cuenta retroactiva y sanciones a las municipalidades, a través de una rendición de cuenta retroactiva, posterior al traspaso ocurran problemas en las que tienen responsabilidad los municipios.

10. Que se **presenten los proyectos de ley por mensaje**, con urgencia, según las recomendaciones del Consejo de Evaluación del Sistema de Educación Pública, en las distintas evaluaciones intermedias y planes estratégicos que se han realizado a lo largo de los años desde la implementación de la ley N° 21.040.

11. Que el Ejecutivo le de **urgencia de discusión inmediata al proyecto de ley que modifica los concursos cerrados de los funcionarios DAEM**, para que tengan ciertos marcos legales y pertinencia con los tipos de funcionarios que se encuentran en las municipalidades y que desean ser traspasados a los distintos SLEP. De acuerdo a lo anterior, es clave que el Ejecutivo asegure un 70% de traspaso de los funcionarios DAEM a los SLEP, para mantener el *know-how* adquirido durante todos estos años en temas administrativos, presupuestarios y participación de las comunidades, entre otros. Para lo anterior, debería existir un mínimo de años que estos funcionarios deben haber trabajado de manera continua en el SLEP para asegurar que ese conocimiento no se pierda por no cumplir ciertas características que algunas veces son muy específicas en los concursos cerrados del artículo trigésimo octavo transitorio.

12. Por otra parte, es necesario **generar una modificación legal respecto de las atribuciones que actualmente poseen los directores de las escuelas en relación al uso de los recursos** que reciben por concepto de subvención y de esa forma se puedan redirigir a los ámbitos en que el director del establecimiento lo requiera, puesto que son quienes conocen la realidad de sus establecimiento y por tanto, tienen una relación más directa con la comunidad educativa y sus necesidades, y de esa forma puedan utilizarse en necesidades más urgentes que tengan según las múltiples circunstancias locales de cada SLEP. Al mismo tiempo, si es que no se modifica el sistema de financiamiento, por lo menos es necesario que se modifique el actual sistema de financiamiento en lo relativo al cálculo del valor de la subvención por la asistencia promedio de los alumnos, ya que está solo cubre, en promedio el 80% de los sueldos de docentes y asistentes de la educación y no es suficiente, por lo que terminan utilizando otros recursos

provenientes de otras subvenciones que no van destinados a ese tipo de gastos.

13. En lo que respecta a la **responsabilidad del Ministerio de Educación** en las irregularidades cometidas principalmente por la DEP, es necesario que se regularice su relación y que esta sea de manera colaborativa entre ellos y así tener un alcance con los demás organismos partícipes del nuevo sistema de educación pública. Así, para evitar interpretaciones erróneas o forzadas, se recomienda incluir directamente la obligación de fiscalización de la DEP sobre los Servicios Locales en la ejecución de los recursos. En la misma línea, es necesario que la Superintendencia de Educación cumpla con sus obligaciones de fiscalización que la propia ley le ordena.

14. Los distintos **organismos públicos que trabajan en la nueva educación pública deben aumentar su número de trabajadores**, ya que los que tienen hoy en día son bastante limitados. Entre otros, están La Dirección de Educación Pública, la Superintendencia de Educación y los Servicios Locales. Lo anterior, podrá ser a través de trabajadores que tengan un carácter transitorio y se contraten de manera momentánea solo para el traspaso y la instalación de la nueva educación pública.

15. El Estado debe **garantizar y asegurar** de que todos los establecimientos educacionales de Chile, especialmente los del SLEP de Barrancas, tengan **acceso a servicios de internet inalámbrica** para poder realizar de forma óptima las nuevas modalidades educacionales que se han producido por la pandemia, que son de carácter híbrido (presenciales y virtuales) y, de esa forma, las escuelas y liceos puedan adaptarse a las nuevas formas de hacer educación.

V. VOTACIONES.

La Comisión intentó concordar las conclusiones y recomendaciones de la diputada Cristina Girardi, con aportes de la diputada Camila Vallejo y de los diputados Cosme Mellado y Mario Venegas, con las propuestas realizadas por el diputado Pardo, sin embargo, no hubo acuerdo para ello.

El Presidente propuso poner en votación las recomendaciones de la diputada Cristina Girardi.

Puesta en votación la recomendación N° 1, se **aprobó** por mayoría de votos. Votaron a favor los diputados Fidel Espinoza, Cristina Girardi, Cosme Mellado, Camila Rojas, Juan Santana, Camila Vallejo y Mario Venegas. Votaron en contra los diputados Sergio Bobadilla, Leonidas Romero y Luis Pardo (7-3-0).

Puesta en votación la recomendación N° 2, se **aprobó** por mayoría de votos. Votaron a favor los diputados Fidel Espinoza, Cristina Girardi, Cosme Mellado, Camila Rojas, Juan Santana, Camila Vallejo y Mario Venegas. Votaron en contra los diputados Sergio Bobadilla, Juan Fuenzalida, Leonidas Romero y Luis Pardo (7-4-0).

La Comisión acordó aprobar, por la misma votación, el resto de las recomendaciones, así como las conclusiones propuestas por la diputada Girardi.

El diputado **Fuenzalida** solicitó dejar constancia de que parte de las propuestas de la diputada Girardi, con aportes de la diputada Vallejo y de los diputados Mellado y Venegas, está totalmente fuera de lo encomendado por la Salam de conformidad con lo señalado por el artículo 313, inciso séptimo, del Reglamento de la Corporación. Además, sostuvo que no estaba incluido en el mandato otorgado por la Sala el tema del financiamiento de la educación ni de las pruebas Simce. Reiteró que el actuar como mandatarios en la Comisión Investigadora no otorga a los diputados la facultad de excederse del mandato de la Sala.

Puesta en votación la propuesta del diputado Pardo, se **rechazó** por mayoría de votos. Votaron a favor los diputados Sergio Bobadilla, Leonidas Romero y Luis Pardo Sáinz. Votaron en contra los diputados Fidel Espinoza, Cristina Girardi, Cosme Mellado, Juan Santana y Camila Vallejo. Se abstuvieron los diputados Camila Rojas y Mario Venegas (3-5-2).

VI. VOTO DE MINORÍA.

ÁMBITO DE LA INVESTIGACIÓN

La solicitud de creación de la Comisión Especial Investigadora se sustenta en las siguientes consideraciones que son objeto de la investigación:

1. Ausencia de participación y escaso diálogo con las comunidades e irregularidades en los concursos y nombramientos de Alta Dirección Pública.

El numeral 4° de la solicitud de creación de la Comisión señala:

"*Ausencia de participación y escaso diálogo con las comunidades. Si bien uno de los objetivos de la Ley 21.040 era* ***restarle al sistema la influencia que tienen los ciclos políticos electorales en la gestión educacional por parte de los Municipios, se alega por parte de las comunidades educativas que este objetivo no se ha logrado****. El Sistema de Nueva Educación Pública busca evitar que las políticas públicas en educación sean realizadas de forma "vertical", para transformarlas en participación de forma "horizontal"* ***con una verdadera incidencia y colaboración de las comunidades educativas, a través de los nuevos órganos que son los Consejos Locales y Comités Directivos****. En relación a esto, se denuncian* ***irregularidades en los concursos y nombramientos de Alta Dirección Pública****. El artículo vigésimo sexto de la Ley N° 19.882, en su artículo 2° letra w), señala que corresponde a la Dirección Nacional del Servicio Civil, requerir, de los candidatos que integran alguna nómina, información para verificar los antecedentes referidos al cumplimiento de las exigencias derivadas de la probidad administrativa, inhabilidades o incompatibilidades y prevención de conflictos de intereses, pudiendo consultar bases de datos de carácter económico, financiero, bancario o comercial, relativos a juicios pendientes, condenas por crimen o simple delito de acción pública, inhabilidades declaradas por sentencia judicial para servir cargos u oficios públicos o sanciones administrativas de separación o destitución de empleos o cargos públicos*".

De este primer punto, es posible advertir las siguientes situaciones eventuales:

(i) *Influencia que tienen los ciclos político-electorales en la gestión educacional por parte de los Municipios.*

Al respecto, corresponde señalar que la ley N° 21.040, que creó el Sistema de Educación Pública, tuvo por objeto la reestructuración del sistema de educación pública y su gobernanza mediante la creación de la Dirección de Educación Pública (DEP) y los Servicios Locales de Educación Pública (SLEP).

En este orden de ideas, este cambio estructural crea una nueva institucionalidad compuesta por la DEP y los SLEP a quienes les es traspasado el servicio educacional, conjuntamente con los establecimientos educacionales correspondientes a cada territorio local.

Así, la implementación de esta reestructuración del Sistema de Educación Pública ha requerido de enormes esfuerzos y coordinación entre los distintos estamentos de nivel local y del Gobierno Central, a través de la DEP. De acuerdo con el mandato establecido por el legislador y el cronograma de instalación de los SLEP e implementación del Sistema de Educación Pública definido en la mencionada ley N° 21.040, a la fecha se ha cumplido con la implementación de 11 SLEP todos con el servicio educacional debidamente traspasado y en funcionamiento.

En estos términos, no resulta factible atribuir alguna influencia a los ciclos político-electorales en la gestión educacional por parte de los Municipios, toda vez que tal como se ha señalado precedentemente, se ha cumplido con la implementación dispuesta por el legislador de manera efectiva e íntegra.

(ii) *Verdadera incidencia y colaboración de las comunidades educativas, a través de los nuevos órganos que son los Consejos Locales y Comités Directivos.*

Sobre este punto, es preciso señalar que los Comités Directivos Locales y los Consejos Locales de Educación Pública, fueron regulados por la ley N° 21.040, en los artículos 29 y siguientes, y 49 y siguientes, respectivamente. Además, ambas entidades tienen su regulación reglamentaria a través de los decretos N° 101 y Nº 102, ambos de 2018, del Ministerio de Educación.

En este orden de consideraciones, cabe señalar que corresponde al Comité Directivo Local, de acuerdo con lo establecido en el mencionado artículo 29 "*(…) velar por el adecuado desarrollo estratégico del Servicio, por la rendición de cuentas del Director Ejecutivo ante la comunidad local, y contribuir a la vinculación del Servicio Local con las instituciones de gobierno de las comunas y la región.*".

Por su parte, el Consejo Local de Educación Pública debe colaborar "*(…) con el Director Ejecutivo de cada Servicio Local en el cumplimiento de su objeto. Para ello, representarán ante el Director Ejecutivo los intereses de las comunidades educativas, al objeto de que el servicio educacional considere adecuadamente sus necesidades y particularidades*".

Esta materia fue tratada de alguna manera en las siguientes sesiones:

• **En Sesión Nº 3, de fecha 8 de marzo del año 2021**, la directora nacional de Educación Pública, Alejandra Grebe, señaló que "*Respecto al tema de la Estrategia Nacional de Educación Pública, mencionado en este*

mandato, quiero hacer hincapié en la resolución N°422, del 2018, que regula la propuesta de la Estrategia Nacional y establece cuáles son las instancias de participación, que surgieron después de una consulta nacional, luego de diálogos temáticos o jornadas de reflexión de las comunidades educativas y diálogos técnicos con expertos y académicos. Cuando uno consulta a un Comité Directivo del año 2019 si participó, la respuesta va a ser que no, porque el año 2018 no existía al momento en que se hizo la consulta a los comités directivos, ni menos los de 2020. Ellos han tenido la oportunidad de participar con la estrategia nacional -ha sido un súper buen ejercicio-, en la alineación de los planes estratégicos -además de los que tiene cada uno-, en el plan anual y en el ajuste de los distintos instrumentos de gestión en la educación pública. En la presentación podemos ver la fecha de constitución de los comités directivos, lo que es bien importante cuando uno lo mira en forma paralela y hace la línea temática en el tiempo de cuando se hicieron las distintas instancias que quedaron establecidas por esa resolución. También establece quienes participan en cada una de estas. Entonces, si uno se acuerda de esto, se pregunta: ¿quién participó? Es cosa de ver qué se les preguntó y cuál era el objetivo de cada uno, respecto de la consulta ciudadana que se hizo antes: el comité consultivo, los diálogos técnicos, los diálogos temáticos y la consulta pública on line. Por lo tanto, sí hay mayor participación en la consulta pública on line, para aquellos que quisieron participar; también estuvieron algunos que no habían participado, pero fueron invitados no como comité directivo completo a los diálogos temáticos. Esto es lo que establece esa resolución y así es como se debe participar. No se puede hacer de una forma distinta, así se construyó la primera estrategia nacional de educación pública.".

• **En Sesión Nº 4, del lunes 15 de marzo del año 2021**, la directora nacional de Educación Pública, Alejandra Grebe, se refirió al tema explicando que de conformidad con la ley Nº 20.040, la participación se da en distintos ámbitos y grados. No siempre es resolutiva como parecieran entender los parlamentarios. Al respecto indicó que "*Comité Directivo, que ha sido un gran tema -diría que ha sido de los más complejos actualmente en cuanto a la instalación de la nueva institucionalidad y a la instalación de estos nuevos sistemas de gobernanza-, tiene un rol de gestión importante, a diferencia del consejo local, y lo dice la función propiamente tal o el objetivo para el cual fue creado, y desde mi punto de vista tiene dos cosas: En primer lugar, tiene que velar por el adecuado desarrollo del servicio local y todo lo que implica, desde lo financiero hasta el cumplimiento de su objetivo pedagógico. Hay un tema de rendición de cuentas del director ejecutivo o directora ejecutiva ante la comunidad local. Ahí están las cuentas públicas, el avance del plan estratégico local y el plan anual. La rendición de cuentas que hace el director ejecutivo ante el Comité Directivo. En segundo lugar, hay otra función bien relevante, que es la vinculación del Servicio Local con las instituciones de gobierno y territoriales; es decir, ellos son representantes de instituciones de gobierno, tanto de los alcaldes como del gobierno local, y ese vínculo es responsabilidad del Comité Directivo. Así se constituye un Comité Directivo, porque uno dice muchas veces porqué nos demoramos tanto, porque todo esto hace que la constitución del Comité Directivo con todos sus representantes se demora más o menos ocho meses. Está en la carta Gantt que nosotros tenemos y en cada una de las actividades que se tienen que dar, sobre todo porque hay representantes de los centros de padres y apoderados que tienen que ser elegidos. Entonces, hay una etapa informativa, etcétera. Todo esto tiene que*

pasar antes de que haya un Comité Directivo. Por lo tanto, si uno lee la ley, esta dice claramente que el Comité Directivo tiene funciones, pero hay funciones que no ha podido realizar, porque no han estado constituidos, porque los plazos simplemente no dan, sobre todo en el caso de los de 2018, tema que ya hemos conversado bastante en profundidad, por el poco tiempo que tuvieron para conformarse. Esto es la participación electoral que tuvieron los comités directivos en cuanto a la elección de los apoderados. Si ustedes se fijan en la fecha, desde la fecha de las elecciones, cuando se llama a elecciones para los apoderados, acuérdense de que los otros son nombrados como representantes del alcalde o del gobierno regional, pero aun así cuesta que los alcaldes se pongan de acuerdo, porque tiene que ser un representante y son dos comunas. Y en el caso del gobierno regional, no es que el nombre salga inmediatamente. Acuérdense de que además tiene que cumplir algunos requisitos. Eso es un poco, para que ustedes sepan cuantos apoderados votaron para elegir a sus representantes, donde tuvimos más participación y donde tuvimos menos participación. Se establece que hay que tener el 33 por ciento de participación para que sea elegido con representatividad. Hoy, los once comités directivos están funcionando con todos sus representantes; hay que hacer algunos cambios por renuncia de algunos representantes, pero en general hoy están funcionando con sus sesiones, tal cual está establecido". En cuanto a los Consejos Locales, la Directora explica que para su conformación, previamente deben estar constituidos los Consejos Escolares. De este modo explicó "*¿Qué ocurrió el año pasado, cuando hubo pandemia? No hubo consejos escolares, y todo lo que se demoran en constituir los consejos escolares. Muchos de los consejos escolares no son los mismos de un año para otro, porque los alumnos de cuarto medio ya no están, de modo que se deben volver a conformar tales consejos. Si no hay consejo escolar, no hay representante de ese establecimiento educacional para formar parte del consejo local, y esos procesos pueden demorar aproximadamente hasta mayo, dependiendo del momento en que se inician los consejos escolares. De ahí para adelante parte todo el proceso, hasta las elecciones, en mayo de cada año, y, obviamente, deben estar traspasados los servicios educativos. Eso está en la ley. Sin servicio educativo no se puede iniciar la elección del consejo escolar. Piensen en lo que ocurrió con los servicios de 2019, que iniciaron su traspaso educativo el 1 de enero de 2020. En mayo estábamos en plena pandemia, y eso se tradujo en los porcentajes de participación*". En lo que se refiere a la denuncia acerca de que el Consejo Local de Barrancas no ha tenido reuniones durante el año 2020 con su director ejecutivo, la Directora indicó que "*están las seis actas del año pasado; la primera es del 17 de julio y la última del 28 de diciembre. Están todas las actas y todas las materias, por lo que resulta bastante interesante leer qué se trata en un consejo local, ya que muchas de las materias que discutimos acá y que creemos que no se discuten o no llegan, sí lo hacen. Repito, están las seis actas: 17 de julio, 14 de agosto, 7 de septiembre, 13 de octubre, 17 de diciembre y 28 de diciembre. Por lo tanto, me parece poco responsable decir que no se juntaron, ya que la evidencia está en dichos documentos*." Continúa precisando que "*Los consejos locales están funcionando y cumpliendo su labor. Por ello, quiero destacar la labor que desarrollaron el año pasado en cuanto a lo que significa educar en tiempos de pandemia, levantar las necesidades desde cada uno de los estamentos y tratar de ir mejorando las cosas que iban ocurriendo, tanto desde las propias comunidades, como de los apoderados, profesores y asistentes de la educación; conocer qué pasaba con los alumnos; como se iba*

mejorando la conectividad, etcétera. Si quieren se las puedo enviar, de modo que las puedan adjuntar como material al trabajo que deben realizar para que les quede como referencia. Todos los consejos locales tienen actas, así como también los comités directivos, que deben ser aprobadas por un acto administrativo, tal cual como lo establece la ley". A continuación se refiere a las Conferencias de Directores que son otra instancia de participación que se encuentra funcionando, al igual que las reuniones del Intendente, ambas instancias a desarrollar en dos oportunidades al año. Aclara que "*Hasta el año pasado teníamos siete conferencias de directores funcionando -como dije-, mínimo dos veces en el año, con bastantes buenos resultados. Están todas evaluadas de modo que también se puede acceder a esa información. A continuación -como señala la diapositiva- están las coordinaciones regionales en materia de educación pública, que son las reuniones que coordina el intendente en cada una de las regiones. También son dos en el año, una muy buena instancia de coordinación regional en cada uno de los territorios. Acá pueden observar los territorios y cuáles son los servicios locales que han tenido estas reuniones. Ha sido una experiencia bastante interesante".* Por último señala que se debe mejorar la difusión del trabajo participativo en las distintas comunidades y mejorar la capacidad de quienes participan: *"Hoy, los consejos locales son representativos de la comunidad, pero todavía nos falta instalar mucha capacidad en cada uno de esos representantes para que realmente puedan realizar la labor como corresponde. Debemos pensar que en la actualidad los centros de padres tienen una lógica comunal y ahora deben tener una lógica territorial; eso es lo complejo. Hoy, uno tiene que crear una cultura de participación y las culturas de participación - todos aquellos que sabemos y hemos estudiado metodologías y lógicas de participación- no se crean de la noche a la mañana, sobre todo en una sociedad en donde esa cultura no está ciento por ciento instalada. Tenemos bastantes estudios que así lo demuestran. Debemos seguir trabajando en instalar esas capacidades, en convencer a las personas y a los estamentos que vale la pena ser representante de un consejo local; debemos seguir trabajando con los comités directivos con respecto a lo que es, lo que les gustaría ser y lo que son; como pueden ayudar a mejorar la gestión del servicio local, cuando son consultivos, cuando son positivos y cuando esa proposición es vinculante y cuando no, de acuerdo con lo que está establecido en la ley. Tenemos un marco normativo que no lo podemos saltar."* Sobre este punto, el Diputado Venegas indica que "*Por una lado, hay denuncias, y la señora directora en toda su presentación ha señalado que esas denuncias no tendrían asidero a la luz de lo que, efectivamente, la ley posibilita. Es decir, hay instancias de participación meramente consultivas y hay algunas cosas que se podrían estar reclamando que no están contenidas en la ley*". Por su parte la diputada Girardi precisa que "*si el objeto de lo consultivo es no resolutivo, pero implica un diálogo entre la dirección nacional y las instancias en las cuales se organiza la comunidad, como son los comités directivos y los consejos locales, el objeto es que exista ese diálogo y la posibilidad de llegar a acuerdos en ese diálogo, independientemente de que estos no sean órganos resolutivos, y el dictamen de la Contraloría va a decir que son consultivos. Pero si tengo un órgano consultivo en el cual se tiene que apoyar y apoyar la gestión, voy a realizar un diálogo permanente con esta organización e instancia, porque es importante para la gestión. Por ello, decir que son consultivos y que por ello no me hago cargo de sus propuestas, me parece una falta de respeto, además de banalizar el espíritu de la ley, porque estos comités directivos e instancias se generan*

porque el legislador declara que es importante que la participación sea efectiva, más allá de si esta instancia es resolutiva o no. Si no, no la hubiera creado. Para no escucharla, no es necesario crearla". Luego, la diputada se refirió a la situación particular de Barrancas, en donde dice que "*Durante el 2020, tuvimos denuncias en reiteradas sesiones, donde vinieron, por ejemplo, directores del servicio local de Barrancas, en donde nos plantearon que durante toda la pandemia, desde marzo, en que se inició, a julio, en que ellos estuvieron en la comisión, nunca el director los convocó a una sola reunión. Nunca la directora nacional convocó a los distintos actores a una sola reunión para saber cómo enfrentarían la pandemia o cuál sería la estrategia. En mi opinión, si eso no es valorado como una información relevante para la directora, no entiendo qué es relevante para ella y como quiere que todos colaboremos, cuando no se hacen cargo ni de lo más mínimo que está ocurriendo. Si hay denuncias claras respecto de que no ha habido participación, le pido que se haga cargo de tales denuncias y no trate de esquivar el bulto*". Finalmente, indica que "*La Resolución Exenta N° 422, mediante la cual se regula la Estrategia Nacional de Educación Pública, no pasa por la Contraloría, por lo tanto, el ministerio la podría modificar perfectamente si señalara que le interesa la participación y si la gente o los organismos no están participando real y adecuadamente en la elaboración de dicha estrategia*".

• En **Sesión Nº 6, de Lunes 29 de marzo de 2021**, el Director del colegio Melvin Jones del Servicio Local de Educación Pública de Barrancas, Juan Carlos Almendra Canales, señaló que "*En cuanto al consejo escolar, este no se empezó a constituir en el tiempo esperado, sino después. La constitución del consejo escolar fue en julio, y antes de eso se hizo una convocatoria para hacer las elecciones, con representación de todas las personas que deberíamos estar en ese consejo escolar. Entiendo que después el Colegio de Profesores solicitó ampliar el plazo de postulación a tales cargos porque sentían que no habían sido informados, de modo que presentó sus objeciones al proceso vigente y se amplió el plazo. Se resolvió abrir un proceso de convocatoria más informado y, en consecuencia, más participativo, en una elección programada para los días 26, 27 y 28 de noviembre, con votaciones en todos los establecimientos educacionales, con una separada, etcétera. Se hizo un ejercicio con los directores, docentes, asistentes educativos, padres, apoderados y estudiantes. La formulación de eso se produjo en diciembre. En 2020 se convocó a las universidades, institutos y centros de formación técnica de la región, por la pandemia. El llamado no surtió efecto y se inició uno nuevo, al que se presentaron seis universidades. Estuvieron las universidades Alberto Hurtado, Central, Diego Portales, de las Américas, de Santiago y Mayor. Por los institutos profesionales concurrieron el Instituto Profesional Inacap y el Instituto Guillermo Subercaseaux. Finalmente, se eligió a los representantes de la Universidad Alberto Hurtado y de Inacap, a la señora Carolina y a don Gonzalo, quienes constituyeron el consejo escolar. Este se constituyó por primera vez el 17 de julio de 2020, ocasión en que se había avanzado en todo lo que estaba en el Plan Estratégico Local. Después de eso, como consejo escolar, nos costó mucho reunirnos, no tuvimos la fortaleza ni la musculatura para sostener ciertas situaciones. Primero, nos costaba reunirnos, no llegaban todos los consejeros; cuando había algo que decir, no todos hablaban, a veces hablábamos el director Dorian Tobar y yo solamente, nadie más. Nadie opinaba, de modo que no era una reunión grata. Sin embargo, por otras aristas*

me llegó el asunto de las etapas para el Plan Estratégico Local. A través de reuniones de directores, se hicieron reuniones con los consejos escolares, con los jefes de UTP, quienes fueron convocados para hacer el Plan Estratégico Local. Me imagino que el servicio local habrá tomado nota de las actas y de las fechas de esas reuniones. Esto comenzó aproximadamente en diciembre de 2019. Entre el 24 y el 27 de septiembre de 2019, se realizaron reuniones de trabajo con todos los consejos escolares, donde están representadas todas las comunidades: el director, los asistentes de la educación, los estudiantes, padres y apoderados, profesores, etcétera. Dichas reuniones se llevaron a cabo no directamente con el Consejo Local, pero sí a través de los consejos escolares de los establecimientos y sus representativo". Por su parte, La Directora (I) de la Escuela "Paulo Freire" del Servicio Local de Educación Pública de Barrancas, señora Gabriela Rubio Palma señala que "*En lo que a mí respecta, en 2019 participamos en el Plan Estratégico Local. Recuerdo perfectamente que participamos representantes del centro de estudiantes, del centro de padres y apoderados y del equipo directivo en Pudahuel y que los directores tuvieron un llamado aparte. Hasta ese minuto, todavía yo era jefa de UTP, así que participé y nos dividieron en distintos ámbitos de trabajo, como recursos, gestión pedagógica, etcétera. Fuimos discutiendo, a través de temáticas y de preguntas, cuál iba a ser nuestro plan y cuál era nuestra mirada a futuro. Esa fue la forma de trabajo. Luego, también hubo un levantamiento de información a través de los consejos escolares, la cual debían llevar los asesores territoriales hacia nuestro sostenedor. Finalmente, recibí el documento por parte del director de ese momento. Además, el Plan Estratégico Local está publicado en la página web*". Del mismo modo, el director de la escuela de la Federico Acevedo Salazar del Servicio Local de Educación Pública de Barrancas, Juan Esteban Montero, señaló que "*Hay tres áreas que uno puede destacar en forma general: la primera, es el trabajo colaborativo, que es importante dimensionar en el plan estratégico; la segunda, es la formación del desarrollo profesional docente, que era uno de los temas que estaba pendiente, y la tercera, es la mejora de competencia de liderazgo. Esas fueron las temáticas que me tocó abordar y cada uno tomaba distintos tipos de temas. Creo que se focalizó en eso y se armó el programa. Al cabo de un tiempo, en 2020 empiezan a llegar los planes establecidos. En todo caso, pedimos al servicio que nos mandara los planes para ver en qué había quedado todo lo que hizo durante la jornada, pero no habíamos llegado a las conclusiones. Posteriormente, llegó el plan con conclusiones para que hiciéramos alguna adaptación y algún comentario; de hecho, tuvimos tiempo para hacerle algunos alcances. Por cierto, estaba focalizado en esas tres áreas que fue en lo que más pudimos aportar; en lo personal, aporté en el trabajo colaborativo*".

• En **Sesión Nº 7, del Lunes 12 de abril de 2021**, el Director del Servicio Local de Educación Pública de Barrancas, Patricio Canales Ríos, explicó que debido a la falta de participación, el proceso de elección de miembros del Consejo Local demoró más de la cuenta. A ello se suma que las votaciones debieron ser convocadas en una segunda oportunidad ya que la ley exige para que sean válidas una participación superior al 30%, cuestión que no se logró. Así señala que "*El Consejo Local quedó constituido en la forma y con los participantes que observan en la presentación. El presidente elegido fue el señor Dorian Tobar, quien era representante de los directores de los establecimientos educacionales. Hay una referencia de las reuniones*

que se tuvieron durante el 2020, las cuales ascendieron a seis, y el nivel de participación de los miembros de cada uno de ellos es el que se indica. En general, hubo buena asistencia, aunque algo débil en el caso de los estudiantes. Particularmente, una de las representantes de las mamás tuvo algunos inconvenientes y por eso su baja asistencia".

• En **Sesión Nº 8 de fecha 19 de abril de 2021**, la Directora de la Escuela "*Provincia de Arauco" del Servicio Local de Educación Pública de Barrancas, Úrsula Araya Parraguez, señaló que "También dentro de las buenas prácticas, el Servicio Local tiene La Voz de Gabriela, que es un encuentro que se hace en forma mensual al cual van todos los actores. Lo dirige el director ejecutivo, don Pablo Araya, y ahí se van levantando los problemas de la comunidad, porque somos una comunidad diversa. Hay muchos problemas, mucha vulnerabilidad. Macul no tiene la misma vulnerabilidad que La Granja, que San Joaquín, que son comunas con altos índices de necesidad. Necesitan mucha ayuda y que los recursos vayan bien focalizados. Por eso es que se hace este levantamiento*".

• En **Sesión Nº 14, de fecha 14 de junio de 2021**, el Secretario Ejecutivo de la Agencia de Calidad de la Educación, Daniel Rodríguez, señaló que "*Del mismo modo, observamos algo muy interesante sobre la participación. Si se analiza la constitución de esta comisión, uno también puede notar preocupación en esa materia. Por cierto, las disposiciones de participación que están en la ley han sido implementadas. Ha habido una participación muy profusa en la implementación de la educación pública, mucho más de la que existía en el mundo municipal, por decirlo de alguna manera. Sin embargo, los mismos actores notan una dificultad para llegar a las escuelas, a los estudiantes y a los apoderados en esta participación. Es decir, es una participación que, al parecer, todavía es más bien institucional, o sea, los consejos locales y comités directivos operan, pero aún no llegan a identificar ni las necesidades, ni las preocupaciones ni las demandas de estudiantes y padres ni de las escuelas. Ahí todavía falta un paso adicional más allá de lo institucional. En este sentido, advertimos cosas bastante interesantes. Primero, la dificultad que implica reemplazar las redes de apoyo y de contacto municipales. Según varias entrevistas realizadas, los padres y apoderados y las escuelas usaban sus redes dentro del sistema municipal para facilitar o lograr objetivos que beneficiasen a la comunidad o hacer ver problemas o apuntar urgencias. Cuando esas redes son reemplazadas por el servicio local y, de alguna manera, se desaparecen o se difuminan, el servicio local parece menos efectivo en términos de acción política, de efectividad política, para conseguir objetivos respecto de lo que ocurría en la red municipal. Esto es muy importante a la hora de evaluar el sistema. Hay que tener mucho cuidado cuando se reemplaza un sistema que tiene tanto tiempo y está tan "aceitado", ya que al reemplazarlo por uno nuevo se debe tener cierta consideración sobre la velocidad en la cual eso se puede reconstruir; una red no se hace de un día para otro. Por lo tanto, la misma dificultad que identifican los apoderados y que nos manifestaban en alguna de las entrevistas, en el sentido de que antes debían hablar con algún concejal que conocían para que el asunto se resolviera, nos hace considerar que la participación es mucho más difícil que llegue directamente al ciudadano. Más bien, es una participación institucional que tiene que ver con cómo se conectan estos distintos consejos y comités entre sí y su "pugna" con el director del*

servicio local, pero no con la gente, los usuarios o las verdaderas personas que están usando el sistema".

• En **Sesión Nº 15, de fecha 5 de julio de 2021**, la directora ejecutiva del Servicio Local de Educación Pública de Llanquihue, Claudia Trillo, indicó que "*Es importante relevar el trabajo que se ha hecho en conjunto con la DEP para realizar el traspaso del servicio educativo y la estrategia de vinculación que hemos hecho con las distintas comunidades educativas referente a la preparación para el inicio del año escolar, mediante la formulación de una mesa de trabajo Covid el año 2020 -pese a que aún no éramos sostenedores- que nos permitiría realizar la apertura de los establecimientos educacionales y que contó con la participación de apoderados, de la Junaeb, de los servicios de salud, de equipos de gestión y desarrollo territorial, entre otros. También es importante destacar el trabajo que ha hecho nuestro equipo de gestión territorial y de apoyo técnico pedagógico, que son dos unidades, dos brazos armados, que están en los establecimientos educacionales en terreno, los cuales resultan ser claves para el acompañamiento de los establecimientos. Del mismo modo, destacamos el trabajo del año pasado de la unidad de participación que consideró a todas las comunidades educativas, desde la educación parvularia hasta los liceos, en lo referente a la elaboración de nuestro primer plan anual, actualmente en vigencia*".

(iii) *<u>Irregularidades en los concursos y nombramientos de Alta Dirección Pública.</u>*

En lo relacionado con los procesos de Alta Dirección Pública, conforme lo dispone el artículo 21 de la ley N° 21.040, el Director Ejecutivo es nombrado por el Presidente de la República, mediante el proceso de selección de altos directivos públicos previsto en el Párrafo 3° del Título VI de la ley N° 19.882, que regula nueva política personal a los funcionarios públicos que indica, con las siguientes reglas especiales:

a) El perfil profesional de competencias y aptitudes del cargo concursado será definido por el Ministerio de Educación (Mineduc) sobre la base de una propuesta elaborada por la Dirección de Educación Pública. Este perfil considerará experiencia relevante en el ámbito educacional, debiendo ser aprobado por el Consejo de Alta Dirección Pública y enviado a la Dirección Nacional del Servicio Civil para su registro.

b) El Consejo de Alta Dirección Pública elaborará una nómina que contendrá un mínimo de cuatro y un máximo de ocho candidatos idóneos a partir del respectivo proceso de selección. De no haber a lo menos cuatro candidatos al cargo que cumplan los requisitos para ingresar en la nómina, el Consejo ordenará que se efectúe un nuevo concurso para conformar o complementar la lista, siendo aplicable lo dispuesto en el artículo quincuagésimo cuarto de la ley Nº 19.882.

c) El Consejo remitirá la nómina al Comité Directivo Local. Luego de evaluar a los candidatos seleccionados, el Comité Directivo Local remitirá al Presidente de la República una terna para que éste proceda al nombramiento del cargo.

En este sentido, se advierte que los Comités Directivos Locales tienen un rol fundamental en el nombramiento de la autoridad, dado que a ellos les corresponde proponer al Director de Educación Pública, elementos relativos al

perfil profesional del cargo de Director, de conformidad con lo establecido en el literal b) del artículo 30 de la ley N° 19.882, la que además debe considerar las recomendaciones que realice el Consejo Local de Educación Pública (en caso que este órgano esté constituido); proponer al Presidente de la República una terna para el nombramiento del cargo sobre la base de la nómina elaborada por el Consejo de Alta Dirección Pública, conforme con el artículo 21 y literal d) del artículo 30; y además realizar una propuesta de prioridades al convenio de gestión educacional que es elaborado por la Dirección de Educación Pública y sancionado por el Mineduc, según lo indicado en el literal c) del artículo 30 y 39 y siguientes, todos de la ley N° 19.882.

En este orden de ideas, los procesos implicados en los nombramientos de los Directores Ejecutivos, el que incluye la participación del Ministerio de Educación, la Dirección de Educación Pública, la Dirección Nacional del Servicio Civil, el Consejo de Alta Dirección Pública, los Comités Directivos Locales y los Consejos Locales de Educación se han realizado bajo el proceso descrito precedentemente que en particular determinó el legislador para este tipo de concursos y de acuerdo con las normas aplicables a estos nombramientos establecidos en la ley N° 19.882. Lo anterior se refleja en que los respectivos Decretos de Nombramiento han sido tomados de razón por la Contraloría General de la República, trámite que es un control objetivo de carácter normativo, en cuya virtud se establece la juridicidad de un acto administrativo.

En este contexto, y sobre las funciones que corresponden a los Comités Directivos Locales, la Contraloría General de la República precisó en su dictamen N° E70.394, de 2021, que de acuerdo con el expreso tenor de la ley N° 21.040, el rol del Comité Directivo Local en diversas materias es de carácter propositivo, dentro de ellas la elección del Director Ejecutivo. Lo mismo aplica a la jerarquización de las prioridades del convenio de gestión educacional.

Añade que las funciones de los Comités Directivos Locales y los Consejos Locales de Educación se encuentran expresamente establecidas en la ley N° 21.040 "*no pudiendo negarse estos órganos a cumplir con sus funciones, o dar a sus informes y propuestas el carácter de vinculantes, en términos que no fue establecido así por el legislador. A estos órganos al formar parte de la Administración del Estado, también les es aplicable el principio de juridicidad consagrado en los artículos 6° y 7° de la Carta Fundamental y 2° de ley N° 18.575, Orgánica Constitucional de Bases Generales de la Administración del Estado, sin que se advierta precepto alguno que faculte al Comité Directivo Local a negarse a ejercer su cometido (aplica criterio contenido en los dictámenes N^{os} 85.300, de 2016 y 30.145, de 2018)*".

Al respecto, esta materia fue tratada de alguna manera en las siguientes sesiones:

• En **Sesión Nº 3, de fecha 8 de marzo del año 2021**, la directora nacional de Educación Pública, Alejandra Grebe, señaló que "En cuanto a lo que dice específicamente el mandato, todos los concursos que tienen que ver con el nombramiento de directores y ejecutivos, donde se incluye la participación del Ministerio de Educación, de la Dirección de Educación Pública, de la Dirección Nacional del Servicio Civil, del Consejo de Alta Dirección Pública, de los comités directivos y de los Consejos Locales de Educación, se han realizado todos bajo el proceso que en particular determinó el legislador para este tipo de concursos, de acuerdo con las normas aplicables

a este nombramiento establecido en la ley N° 19.882. Lo primero que hay que decir es que están los 11 decretos de toma de razón por la Contraloría General de la República, que es el primer control de carácter normativo que nosotros tenemos, los cuales dan cuenta de que el proceso se hizo como debía hacerse. Ahora, el organismo contralor, a raíz de una consulta que hizo el Comité Directivo de Valparaíso, que además fue denunciado en la Comisión de Educación el año pasado, dictamen N° 70.394, de 2021, establece que de acuerdo con el expreso tenor de la ley N°21.040, el rol del Comité Directivo Local, en diversas materias de carácter propositivo, está la elección del director ejecutivo. Ello, por cuanto en ese momento se estaba cuestionando la elección del director ejecutivo de Valparaíso, lo que ratifica el organismo contralor -lo pueden leer en el dictamen para no extenderme-; sin embargo, el proceso se hizo de acuerdo con lo que establece la ley, por lo que está correcto -dictamen N° 70.394-. Por lo tanto, no hay ilegalidades respecto del exdirector ejecutivo de Valparaíso, que fue ratificado este año por el organismo contralor respecto de ese tema.”.

• En **Sesión Nº 7, del lunes 12 de abril de 2021**, la Directora Nacional del Servicio Civil y Presidente del Consejo de Alta Dirección Pública, señora Solange Garread de Mainvilliers Gerlach indicó que “La ley N° 21.040 incorpora al Sistema de Alta Dirección Pública un total de 418 cargos durante todo el período que esta ley tiene considerada. Poniendo el foco en los años más recientes, entre 2018 y 2020 tuvimos la exitosa implementación de 11 Servicios Locales de Educación, teniendo -luego entraremos en el detalle- los 11 directores de los servicios locales con nombramientos”. Igualmente señala que “En términos generales, son todos iguales. En este caso, lo hemos puesto en la presentación para poner el foco en aquellas particularidades que tienen los Servicios Locales de Educación. ¿Cómo se inician los procesos de la Alta Dirección Pública? Se inician con una etapa de preparación a través de una estrecha y permanente comunicación con la contraparte. En este caso, estamos como contraparte de la DEP y del Mineduc. Hay una asesoría permanente hacia ambos lados, en términos de preparar cada uno de los concursos. Se trabaja en una propuesta de perfil y se asesora a la Dirección de Educación Pública en lo relativo a las bases de los convenios de desempeño de los nuevos altos directivos públicos. Luego, se llega a una propuesta de perfil y convenio, que es presentada al Consejo Directivo Local, según lo indica la ley, y posteriormente pasamos a la etapa de planificación, la cual es previa a la convocatoria del concurso. En la etapa de planificación, el Mineduc, con todos los antecedentes anteriores correspondientes a la etapa de preparación, hace la definición final del perfil. Después, presenta el perfil al Consejo de Alta Dirección Pública, en una sesión formal, y este aprueba ese perfil. Solo después de esta aprobación por parte del Consejo es posible iniciar la siguiente etapa del proceso, que es la convocatoria pública. Todos los concursos tienen una convocatoria pública en medios de amplia difusión. Además, se fortalecen a través de páginas del mismo ministerio. Se hace una difusión amplia de estos concursos, con el objetivo de incorporar la mayor cantidad de postulantes. Más adelante viene la etapa de reclutamiento, que es cuando se reciben los antecedentes de los postulantes. Hay un sistema de postulaciones en línea, donde pueden ingresar los currículum, que serán revisados en las siguientes etapas. En el proceso de evaluación general, la primera parte corresponde a un análisis de admisibilidad, que tiene relación con el cumplimiento o no cumplimiento de los requisitos legales que define el

perfil. Tales requisitos son definidos por ley. Seguidamente, viene el análisis curricular, que dice relación con que a cada uno de los postulantes se le revisa su historia curricular y si cumple o no con las definiciones que se han hecho en términos de conocimiento y experiencia y que están radicadas en el perfil. Enseguida, los candidatos que pasan de esa etapa llegan a la entrevista gerencial, la cual es realizada por empresas consultoras de vasta experiencia. Las empresas consultoras que realizan los concursos para los Servicios Locales de Educación son las mismas que forman parte del convenio marco que tiene nuestro servicio para prestar servicios de consultoría en términos de selección y evaluación de candidatos para todos los cargos que participan en la Alta Dirección Pública. Son empresas de alto nivel y que luego de cada concurso que realizan son evaluadas por los comités o por el Consejo. Periódicamente, el Consejo es informado respecto de las notas que aquellas han obtenido. Dichas empresas pasan regularmente por procesos de retroalimentación respecto de cómo han ido llevando los procesos de selección; por lo tanto, el nivel de calidad y de servicios que prestan en el reclutamiento y en la selección son una permanente preocupación nuestra. Finalmente, tenemos la evaluación de competencias, que también es realizada por esas mismas empresas. La asignación de empresas se hace considerando algún grado de especialidad en las temáticas y la cantidad o carga de trabajo que tienen, a través de un sistema absolutamente transparente en su asignación. Luego, tenemos las entrevistas que realiza el Consejo de Alta Dirección Pública. Después de la evaluación de competencias, el Consejo recibe un número más ajustado de candidatos o postulantes que cumplen con cada una de las etapas anteriores. Estos candidatos o postulantes pasan a ser entrevistados por el Consejo en igualdad de condiciones. Hoy día, todos se entrevistan en forma telemática, a distancia. En verdad, es un proceso bastante estandarizado y el mismo -insisto- para todos los cargos de la Alta Dirección Pública. Las entrevistas las realiza el Consejo en pleno, que se divide en dos comisiones paralelas, por la cantidad de cargos que implican estos procesos, y en general los cargos de Alta Dirección Pública. El Consejo arma una nómina entre cuatro y ocho candidatos, la que envía al Consejo Directivo Local. Estas tres cajitas verdes tienen un color distinto, porque quisimos relevar que estas tres cajitas son de absoluta gestión del Servicio Civil, de las empresas consultoras y también de los equipos profesionales que integran el Servicio Civil. Luego, viene la entrevista del Consejo Directivo Local. Aquí nos detendremos un poco. Ahí dice asesoría y capacitación de la Dirección Nacional del Servicio Civil a los consejos locales de directivos locales. En este sentido, lo mismo que al inicio, cuando nosotros teníamos una coordinación, comunicación y compenetración muy cercana con la DEP y con el Mineduc, para el inicio del proceso, aquí pasa lo mismo, porque los consejos directivos locales son uno de los actores relevantes del proceso. Entonces, nosotros hemos llegado a definir un sistema de acompañamiento y de asesoría a los consejos cuando les toca la etapa de tener que entrevistar, y este acompañamiento es casi físico. Uno de los profesionales del Servicio Civil va y lleva físicamente la nómina y la presenta al Consejo y ahí se gatilla una serie de acciones. Se entregan manuales en los cuales va información respecto de cómo hacer las entrevistas, con la necesidad de asegurar el cumplimiento de cada uno de los principios: la no discriminación, el mérito, la igualdad de trato, en términos -por ejemplo- de cosas tan básicas como el tiempo que se destina a cada una de las entrevistas; debe haber un igual trato para todos los candidatos. Se les entrega, también, pautas de entrevistas y hay una asesoría

permanente en cuanto los consejos directivos locales así lo requieran y formalmente lo hayan pedido. En esta etapa de las entrevistas de los consejos locales hemos tenido solicitudes de acompañamiento de los 11 servicios locales de educación. Posteriormente, el Consejo Local, realizando la entrevista apegado a las normas y principios de Alta Dirección Pública, recibe la nómina e inicia el proceso de evaluación de sus candidatos, para llegar a una nómina de tres personas, la que es finalmente presentada al Presidente de la República, quien tiene la potestad de nombrar o de declarar desierto. Otro hito importante que hay que tener en cuenta a la hora de observar el rol técnico del Servicio Civil en la instalación de esta nueva definición de los servicios locales de educación, tiene que ver con el perfil. Esta es una estructura de perfil que es la misma que tenemos para todos los cargos de Alta Dirección Pública. O sea, no hace distinciones; pero sí el contenido respecto de cada uno de estos puntitos, que va en relación con las características del cargo de la institución". Finalmente, ante la denuncia planteada por la diputada Girardi, en cuanto a que en la creación del perfil del cargo de Director del SLEP de Valparaíso, no habrían sido consideradas las opiniones del Consejo Local, precisó que "nosotros recibimos el perfil con la incorporación, o no, de las observaciones del Comité Directivo Local, el cual hace sus observaciones al perfil directamente a la Dirección de Educación Pública, y es esta y el Ministerio de Educación quienes presentan el perfil al Consejo de Alta Dirección Pública. No tenemos alcance a las observaciones que en forma directa hace el Consejo Directivo Local. Lo único que siempre vamos a hacer es -lo que dije en un principio- resguardar que, efectivamente, los requisitos legales no pueden ser cambiados porque son requisitos legales. No podría publicarse un perfil con un requisito distinto al que está definido por ley. Eso sí lo revisamos".

2. Eventuales irregularidades en el concurso público para proveer el cargo de Director Ejecutivo de los Servicios Locales de Valparaíso & Juan Fernández y Atacama.

El numeral 5° de la solicitud de creación de la Comisión señala:

"*En el caso de los Servicios Locales de Valparaíso & Juan Fernández y Atacama, se denuncian presiones indebidas en los procesos de concursos, no consideración de aportes del Comité Ejecutivo al perfil, perfiles seleccionados deficientes, hostigamiento laboral para vulnerar confidencialidad, imparcialidad y valoración del mérito, entre otras. Infringiendo la normativa educacional, específicamente el artículo 30 letra b) de la ley N° 21.040, el cual establece que se debe proponer por parte de los Comités Directivos, elementos relativos al perfil profesional del cargo de Director Ejecutivo del respectivo Servicio Local, y también las recomendaciones que realice el Consejo Local de Educación Pública respectiva*".

En base a lo expuesto, se puede concluir que las irregularidades en los concursos y nombramientos de Alta Dirección Pública, fueron expuestas por algunos integrantes del Comité Directivo Local de Valparaíso al Contralor General de la República, quien previo análisis de éstas estableció que "*no se advierte que los aspectos planteados por los recurrentes afecten la legalidad del proceso de selección del Director Ejecutivo del Servicio Local de Educación Pública de Valparaíso dado que se han realizado de acuerdo con el proceso establecido expresamente por el legislador en la Ley N° 21.040, interviniendo*

los citados consejos, en el marco de facultades propositivas que éste les otorgó".

En este orden de ideas, consta en ordinarios N° 126, 675 y 859, todos de 2020, de la DEP, respuestas remitidas al Comité Directivo Local de Valparaíso a sus propuestas e informes, lo que evidentemente da cuenta que efectivamente ha existido una participación de los Comités Directivos Locales en los términos dispuestos por el legislador y se han cumplido los procesos establecidos en la ley, lo que ha sido ratificado por el propio Órgano Contralor, tanto a través del trámite de toma de razón de los actos de nombramientos, como a través de sus pronunciamientos jurídicos ante las denuncias presentadas

• En **Sesión Nº 4, del lunes 15 de marzo del año 2021**, la Directora Nacional de Educación Pública, Alejandra Grebe, indicó que "se han denunciado ciertas irregularidades en cuanto a la propuesta o a los elementos relativos al perfil profesional del cargo de director ejecutivo. La terna del nombramiento, la gran discusión que teníamos y que levantó en su momento el Comité Directivo Local de Valparaíso era si ellos podían declarar desierto el cargo, y las propuestas, este informe que tienen que elaborar para el convenio de gestión educacional. El informe que llega a la Dirección de Educación Pública, es el insumo para elaborar ese convenio de gestión. Entonces, quiero mostrarles cómo se realiza este proceso, qué hacemos para, por ejemplo, el tema del perfil. ¿Cómo se construye ese perfil? Les voy a mostrar claramente cómo se construyeron los perfiles de 2018, porque esto lo hemos ido mejorando. Pero así es el proceso, y en este proceso participan un representante del Ministerio de Educación, del Servicio Civil y de la DEC, y en función de eso se envían ciertas instrucciones al Comité Directivo, para que entregue ciertos insumos para poder confeccionar este perfil, y esto es lo que pasó. No hay que olvidar que existe un perfil de director ejecutivo, que tiene cierta normativa, porque es Alta Dirección Pública, y hay ciertas cosas que vienen dadas desde ahí, cuáles son las sugerencias y qué se presenta al final. ¿Qué se hace? Esto es el cargo, y está en todo perfil de Alta Dirección Pública. Hay una misión del cargo y requisitos legales. Por lo tanto, hay una misión del cargo, se les manda este perfil a los comités directivos y vienen sugerencias. Y aquí está lo que pasó con Puerto Cordillera y con el Servicio Local de Costa Araucanía, el Comité Directivo, en ese momento, que es lo mismo que ha pasado con los de 2019 y con los de 2020. Ellos mandan sugerencias y posteriormente se les envía un informe de por qué se incorpora la sugerencia o de por qué no puede ser incorporada. La mayoría de las veces que no se incorpora la sugerencia es por un requisito que está en la ley. No se puede pasar por sobre la normativa. En ese caso, nos ha costado harto que entiendan que hay ciertas cosas que están por normativa. Por eso, nos encontramos en una etapa de evaluación intermedia, trabajando con el Servicio Civil en el tema. A lo mejor, se podrá concluir que no eran necesarios tantos años de experiencia. Hoy, los once directores ejecutivos nos han demostrado que debería ser menos, de acuerdo con todo lo que hemos recogido. Pero esta es la forma en que se trabaja. Por ejemplo, en la presentación podemos observar las definiciones estratégicas del servicio, como son la misión institucional, los objetivos estratégicos y los principales productos estratégicos, en fin. Esto es lo que llega. No quiero detenerme mucho en eso, pero quiero demostrarles que hay un proceso de trabajo, de interacción, entre los distintos entes y estamentos que tienen la tarea de revisar el perfil. Sin embargo, hay ciertos

elementos que no se pueden incorporar, principalmente escenarios, por un tema de normativa. En el caso de 2018, los comités directivos no hicieron sugerencia alguna, no así en otros años. Aquí por ejemplo, en funciones estratégicas, están las observaciones que hicieron Costa Araucanía, Barrancas y Puerto Cordillera. Hay comentarios y luego viene una respuesta de parte de ellos. No se entiende, pero se incorpora la sugerencia cuando se puede incorporar y se ajusta a la normativa. Uno va a haciendo la relación respecto de la función estratégica de que se trate y luego se van marcando en distintos colores, como se puede observar en el recuadro. También, está todo el tema del propósito del cargo, los desafíos y lineamientos del cargo para el período. En el fondo, ocurre lo mismo en los servicios locales de Costa Araucanía, de Barrancas y de Puerto Cordillera; están las sugerencias. Por ejemplo, en el caso de Costa Araucanía, la primera sugerencia es “Evaluar el alcance” y la segunda “Se incorpora al perfil”; en el caso de Barrancas, una sugerencia es “Se incorpora” y otra “No se considera, puesto que la sugerencia está incompleta. Se debió plantear propuesta de redacción del nuevo desafío y lineamientos”, y finalmente, en el caso de Puerto Cordillera, las sugerencias 1 y 2 son “Se incorporan al perfil” y la 3 y la 4 “evaluar”. En conclusión, van distintas cosas. Entonces, no corresponde decir que no se toman en cuenta, porque el proceso se ha hecho con todas las selecciones de los once directores ejecutivos que tenemos en curso. Lo mismo ocurre respecto de los desafíos y lineamientos del cargo para el período. Por ejemplo, en el caso del servicio local de Puerto Cordillera, la respuesta a la sugerencia fue “Se considera incorporar primera propuesta de lineamiento” y “evaluar segunda propuesta”, y, en el caso del de Huasco, la respuesta a la sugerencia fue “Evaluar primera sugerencia” y “Segunda sugerencia está incorporada en lineamiento que hace referencia a los estudios de dotación.” En los casos de los servicios locales de Barrancas y de Costa Araucanía, a las sugerencias fue “Se considera sugerencia respecto a desafío” y “Evaluar”, respectivamente. Posteriormente, se envía un informe para explicar cada uno de esos procedimientos. Luego, se indica que la respuesta a la sugerencia respecto de otros desafíos y lineamientos, en los casos de los servicios locales de educación de Costa Araucanía, de Barrancas y de Puerto Cordillera, son “Rechazar solicitud de lineamiento dos. No comprenden el lineamiento”; “El desarrollo de capacidades directivas es hacia los docentes y asistentes de la educación. Evaluar sugerencia de lineamiento” y “Se incorpora sugerencia al perfil.”, respectivamente. En cuanto a las condiciones para el cargo, los atributos de “visión estratégica”, “experiencia y conocimientos”, “gestión y logro”, “liderazgo externo y articulación de redes”, “manejo de crisis y contingencias”, “liderazgo interno y gestión de personas” e “innovación y flexibilidad” son la pauta que tengo para evaluar la gestión de cada uno de los directores ejecutivos y forman parte o tienen un porcentaje en su convenio de gestión. El ejercicio que se hizo en 2018 fue en relación a cuanto debería ponderar cada uno de esos indicadores para llegar al ciento por ciento, y finalmente se sacó un promedio. Hoy tenemos exactamente la misma pauta con los descriptores que aparecen en la presentación, con lo que se evalúa la gestión personal e interna del director ejecutivo que es parte de ese convenio de gestión”. En lo que respecta a las insistencias de la diputada Girardi, en cuanto a denuncias del Comité Directivo Local de Valparaíso y el correo electrónico de Carlos Eugenio Beca acerca de eventuales irregularidades en la elección del Director Ejecutivo de Valparaíso y la denuncia del expuso que “Respecto de lo que pasó en Valparaíso, ustedes saben que se presentó una

denuncia en la Contraloría General de la República sobre el tema del perfil, en relación con el nombramiento del actual director, y se puso en tela de juicio su nombramiento -respecto del cual se dijo que no era válido- y sobre su participación, tanto en el convenio de gestión como en otros elementos. Todos pueden leer la denuncia, porque es pública, y también pueden leer el dictamen del contralor, que ratifica lo que estoy exponiendo". "El comité directivo de Valparaíso planteó ciertas inquietudes -o irregularidades, como quieran llamarlas- respecto de la forma en que ellos pensaban que debían funcionar. Frente a eso, llegaron hasta la Contraloría General de la República, que emitió un dictamen mediante el cual ratificó que en diversas materias es propositivo.".

3. Denuncias sobre falta de participación en la elaboración de la Estrategia Nacional de Educación Pública por parte de los Comités Directivos y Consejos Locales de los Servicios Locales de Chinchorro, Servicio Local Gabriela Mistral, Servicio Local Valparaíso, Servicio Local Puerto Cordillera, Servicio Local Costa Araucanía.

El numeral 6° de la solicitud de creación de la Comisión señala:

"*El día 30 de junio de 2020, por vía correo electrónico, se recibieron denuncias por parte de los Comités Directivos y Consejos Locales de los Servicios Locales de Chinchorro, Servicio Local Gabriela Mistral, Servicio Local Valparaíso, Servicio Local Puerto Cordillera, Servicio Local Costa Araucanía, quienes señalan irregularidades en cuanto a la Estrategia Nacional de Educación Pública, y la "apariencia" de participación en ella. Alegan que no existió tal participación en la elaboración de la Estrategia, y en el caso que si la hubo (en el Comité Directivo de Valparaíso) las propuestas no tuvieron retroalimentación ni fueron consideradas dentro de la Estrategia. Cabe señalar que la Ley de Nueva Educación Pública es clara en este sentido, en su artículo 6 inciso 4° señala que tendrá en consideración las propuestas de los Directores Ejecutivos de los Servicios Locales, los Comités Directivos Locales, los Consejos Locales y las Coordinaciones Regionales*".

La Estrategia Nacional de Educación Pública (ENEP,) tiene por objeto mejorar la calidad de la educación pública provista por los establecimientos educacionales integrantes del Sistema, propendiendo al pleno desarrollo de ésta. Es establecida por medio de un decreto supremo y tiene una duración de ocho años, pudiendo modificarse luego de una evaluación a la mitad de dicho período o cuando por razones fundadas, debidamente calificadas, así se determine.

La ENEP debe considerar objetivos, metas y acciones en áreas tales como: cobertura y retención de estudiantes en el Sistema, convivencia escolar, apoyos para el aprendizaje, inclusión y atención diferenciada a los estudiantes, implementación curricular, colaboración y articulación de los sectores y niveles educacionales entre sí, todo lo anterior según los recursos que disponga el país y sus respectivos presupuestos.

El proceso de elaboración fue establecido por el legislador en el artículo 6° de la ley N° 21.040, disponiendo que el Ministerio de Educación, a propuesta de la Dirección de Educación Pública, oyendo a las Comisiones de Educación de la Cámara de Diputados y del Senado, y previa aprobación del Consejo Nacional de Educación, establecerá la ENEP.

Por su parte, el Ministerio de Educación, cada dos años, remitirá un informe sobre el estado de avance de la Estrategia a las comisiones de

Educación de la Cámara de Diputados y del Senado, así como a los organismos del Sistema de Aseguramiento de la Calidad de la Educación. Este informe debe ser presentado ante las comisiones indicadas, que para tal efecto realizarán una sesión conjunta. En dicho informe se describirán las metas y las acciones de la ENEP ejecutadas en el período y se evaluarán los avances y mejoras de cada SLEP. Dicho informe será remitido a los Comités Directivos Locales, a los Consejos Locales y a las Coordinaciones Regionales, establecidos en la ley N° 21.040, y estará a disposición de la ciudadanía en el sitio electrónico del Ministerio de Educación.

En el marco de la elaboración de una nueva ENEP, así como en sus modificaciones, la DEP y los SLEP, en el nivel que corresponda, deberán establecer un período de participación de las comunidades educativas, con el objeto de recabar su opinión y propuestas. Con el mismo fin, podrá considerar un proceso de consulta ciudadana, en los términos del artículo 73 del decreto con fuerza de ley N° 1, de 2000, del Ministerio Secretaría General de la Presidencia, dirigida a padres, apoderados, directores, docentes, asistentes de la educación, estudiantes y otras personas u organismos interesados en la materia, tales como decanos de las facultades de educación o expertos en el ámbito educacional. Asimismo, tendrá en consideración los informes señalados precedentemente, así como las propuestas que realicen los Directores Ejecutivos de los SLEP, los Comités Directivos Locales, los Consejos Locales y las Coordinaciones Regionales.

La DEP presenta una propuesta que debe considerar obligatoriamente un periodo de participación de las comunidades educativas y facultativamente un proceso de consulta ciudadana, debiendo tener en consideración, entre otras cosas, las propuestas realizadas por los Directores, los Comités Directivos Locales y los Consejos Locales. La propuesta elaborada en estos términos es presentada a las comisiones de Educación de la Cámara de Diputados y del Senado y debe ser aprobada por el Consejo Nacional de Educación.

En este contexto, la DEP, a través de Resolución Exenta N° 422, de 12 de junio de 2018, reguló la elaboración de la propuesta de ENEP conforme con lo establecido en la ley N° 21.040, así como su seguimiento, evaluación y propuesta de modificación. Dicho acto administrativo contempló una etapa de debate y sistematización, estableciendo las siguientes instancias de participación, levantamiento de contenidos y elaboración de propuestas:

1. Consulta Nacional.

2. Diálogos temáticos o jornadas de reflexión de las comunidades educativas que pertenecen a los SLEP.

3. Diálogos técnicos con expertos y académicos.

Luego y de conformidad con el mandato establecido por el legislador se solicitaron a los Comités Directivos Locales en régimen, que en ese entonces eran sólo los de los SLEP 2018 al momento de la realización de consultas (enero-marzo 2019), sus informes y aportes a través de oficios N° 299 dirigido al Comité Directivo de Costa Araucanía, Nº 300 dirigido al Comité Directivo de Huasco, Nº 302 dirigido al Comité Directivo de Barrancas, Nº 303 dirigido al Comité Directivo de Puerto Cordillera, todos de 2019, de la DEP, respecto de los cuales se recibieron respuestas de los Comités Directivos Locales de Huasco y Barrancas.

Así, y en el marco de elaboración de la propuesta de la ENEP, con posterioridad a estas etapas, fue presentada a las comisiones de Educación de la Cámara de Diputados y del Senado, en abril y mayo de 2019, respectivamente, incorporándose las mejoras pertinentes y presentando el Ministerio de Educación la propuesta de ENEP al Consejo Nacional de Educación, a través de Ord. 01/195, de fecha 28 de agosto del año 2019.

En estos términos, y sobre las propuestas del Comité Directivo Local y Consejo Local, el mandato del legislador ha sido el tener en consideración las propuestas, lo que de conformidad a los principios uniformadores de la ley se ha cumplido, siendo la participación un eje central de la conformación de la ENEP, tal cual ha sido acreditado durante el desarrollo de la Comisión. En este sentido también se ha pronunciado la Contraloría General de la República en su dictamen N° E70.394, de 2021, según lo que señaló en el punto precedente.

Finalmente, resulta del caso hacer presente que la ENEP, es establecida por Decreto Supremo estando afecta al trámite de toma de razón, sin haber sido objetada por la Contraloría General de la República.

Al respecto, esta materia fue tratada de alguna manera en las siguientes sesiones:

- En **Sesión Nº 3, de fecha 8 de marzo del año 2021**, la diputada Cristina Girardi indicó "*Ahora bien, quiero profundizar en lo que dijo Alejandra Grebe respecto del rol consultivo de los comités directivos. Por eso, me gustaría que la directora nos cuente y nos dé su evaluación sobre qué es un proceso consultivo o una atribución consultiva, porque lo que dijo en la comisión el Comité Directivo de Valparaíso es que no los "pescaron" para nada de nada. Entonces, no tiene sentido generar una instancia, en la que trabajan una serie de personas que desarrollaron perfiles y procesos, y que la Dirección de Educación Pública (DEP) no considere ninguna de las situaciones y propuestas que presentó el Comité Directivo de Valparaíso. Está bien que se trate de una instancia consultiva, pero si se tiene un comité directivo, y se supone que tengo que dialogar y construir la educación pública de mi territorio con la participación de ellos, me parece absolutamente insultante decir que como son consultivos no se les tome en cuenta. La queja del Comité Directivo de Valparaíso es que no se consideró ninguno de los elementos que presentaron y que nunca tuvieron respuesta, que enviaron muchísimos correos, les cambiaron cinco veces las personas del ministerio y que sin embargo nunca tuvieron una interacción real con la Dirección de Educación Pública para seleccionar al director ejecutivo. De hecho, los representantes del comité señalaron en la comisión que el director ejecutivo ni siquiera tenía experiencia en materia de educación. Señor Presidente, claramente el espíritu de la ley debe considerarse. Un comité consultivo no es para decorar y para que buenos académicos sean decorativos, sino para que haya una interacción, un trabajo colaborativo, el cual claramente no se está dando, más allá del rol consultivo que pueda tener*".

- En **Sesión Nº 4, del lunes 15 de marzo del año 2021**, la directora nacional de Educación Pública, Alejandra Grebe, indicó que "*Respecto de la conformidad con el mandato establecido, se solicitó a los comités directivos locales en régimen, al momento de la realización de las consultas, porque se dice que no se les preguntó sobre la ENEP (Estrategia Nacional de Educación Pública). En la imagen que estoy proyectando pueden ver los oficios, dirigidos*

a La Araucanía, están los números de cada uno de ellos. Esa vez respondieron solo los dos últimos comités directivos, es decir, Puerto Cordillera y Barrancas, respecto de la etapa en que les tocaba participar. Les recuerdo que existe un oficio de 2018 que establece como será la participación en la Primera Estrategia Nacional de Educación. Si preguntamos hoy a un consejo local si participó en la elaboración de la estrategia nacional, les dirá que no; no puede haber participado, porque, de acuerdo a lo establecido en la resolución exenta N° 422, no estaban constituidos en los diálogos temáticos, en las jornadas con la comunidad educativa ni en los diálogos técnicos con expertos y académicos. Recuerden que se establece una parte de debate y otra de síntesis. Así está establecido en la resolución exenta sobre participación en la estrategia nacional de educación. Entonces, ¿cómo van a participar los comités locales si no los hay, no existen y no pueden existir? Porque hay servicios locales que no existían, es imposible que participaran, ¿y cuáles eran los que estaban en régimen? Los cuatro de 2018, al momento en que está establecido el período que se va a consultar. Y es así, así ocurrió, así está establecido, se les enviaron los oficios y solamente contestaron dos, independientemente de que en otras instancias participaron representantes de las comunidades, tal como está establecido en la resolución exenta N° 422". Sin perjuicio que no se presenta en el Mandato de la Comisión, la Directora aclara que "*El plan estratégico es un instrumento que hoy, al menos en los siete planes estratégicos que han funcionado, en la primera etapa de diagnóstico y participación de las comunidades, ha logrado levantar los sellos territoriales. Por lo tanto, todos los planes estratégicos -que están a disposición de todos en las páginas de cada uno de los servicios locales, menos los del año 2020, porque acaban de iniciar la construcción y elaboración con la primera etapa de diagnóstico- son muy interesantes para ver cómo han levantado los sellos territoriales cada uno de los servicios locales en cuestión*". Sobre este punto, la diputada Girardi señala que "*Respecto de lo que se ha señalado en relación con que los comités directivos y los consejos locales no estaban creados, me gustaría, de todas maneras, que nos hiciéramos cargo de lo que plantea en la cuenta Gabriel Fernández, del consejo local de Chinchorro, donde señala que "...en consulta la estrategia nacional, nunca hemos tenido una participación en general o se nos haya consultado alguna acción de parte nuestra. Solamente tuvieron algunas reuniones generales informativas. En relación con el plan estratégico local, se nos presentó un viernes y en reunión del lunes siguiente se nos hizo votar, con el abogado leyendo la ley, que dice que debemos aprobar el plan. Personalmente, dejé en acta que agregaran, con observaciones, que efectivamente ellos estaban señalando observaciones. Posteriormente, nos presentaron el plan anual, el cual rechazamos por no haber sido consultado con la comunidad y le hicimos varias observaciones que aún no las aclaran completamente. Los miembros del consejo local queremos dejar en consideración que el servicio local Chinchorro, desde su inicio, no nos toma en cuenta y, generalmente, imponen su proceder".*

• En **Sesión Nº 8 de fecha 19 de abril de 2021**, la Directora de la Escuela "José Bernardo Suarez" de Macul, del Servicio Local de Educación Pública de Gabriela Mistral, Pamela Meza Morales, señaló que "*Les cuento que partimos siendo participes del Plan Estratégico Local. Hubo dos, tres meses el año pasado de reuniones con los distintos actores. Es un territorio amplio de San Joaquín, La Granja, Macul. Es un Servicio Local nuevo que ahora va en su segundo año. Sí, fuimos convocados y consultaron, para*

elaborar este Plan Estratégico Local, a apoderados, profesores, directores, comunidad educativa en general.".

4. Deficiencias en las condiciones laborales de los funcionarios de los Servicios Locales de Educación Pública.

El numeral 7° de la solicitud de creación de la Comisión señala:

"Asimismo, las comunidades educativas alegan grandes deficiencias en las condiciones laborales de los funcionarios, muchas de ellas denunciadas formalmente a los Servicios Locales por las personas afectadas o por sus gremios, sin que se hayan verificado respuestas a sus reclamos. Existiendo gran cantidad de funcionarios a contrata, desregulación en la contratación, así como un gran número de funcionarios desvinculados y finiquitados, prácticas antisindicales, acoso laboral, y falta de reglamento interno.".

La ley N° 21.040 establece expresamente como dotar de personal a los SLEP. En este contexto, dicha norma legal regula en su artículo trigésimo octavo transitorio el traspaso de personal municipal que se desempeña en los Departamentos de Educación Municipal y de las Corporaciones Municipales; en el artículo trigésimo noveno transitorio, el traspaso del personal municipal regido por el Estatuto Docente a los niveles internos de los SLEP; y en el artículo cuadragésimo primero transitorio, el traspaso del personal de los establecimientos educacionales.

Así, en lo que se refiere al personal que se desempeña en los DAEM, DEM y Corporaciones Municipales, la ley Nº 21.040 establece el traspaso al SLEP, a través de un concurso en que sólo puede participar dicho personal y que haya estado cumpliendo funciones al 30 de noviembre de 2014 y hasta la fecha del traspaso del Servicio Educacional.

Por su parte, el personal municipal, regido por el Estatuto Docente y que desempeñen cargos directivos o técnicos pedagógicos como parte de una dotación docente, es traspasado en los términos que dispone el artículo trigésimo noveno transitorio a los niveles internos de los SLEP sin solución de continuidad.

Finalmente, y de conformidad con lo establecido en el artículo cuadragésimo primero transitorio de la ley N° 21.040, los profesionales de la educación y los asistentes de la educación que se desempeñen en los establecimientos educacionales al momento del traspaso del servicio educacional, de conformidad con lo establecido en el artículo octavo transitorio de la ley, son traspasados por el solo ministerio de la ley y sin solución de continuidad.

De igual manera, el legislador además estableció una norma protectora en el artículo cuadragésimo segundo, cuyo objeto es que los trabajadores no se vean perjudicados con los efectos del traspaso del servicio educacional.

En consecuencia, en los traspasos de personal y tal como lo señala la ley, se han mantenido las condiciones de los trabajadores antes del traspaso, existiendo además una norma que resguarda sus derechos.

Sin perjuicio de ello, y de acuerdo con lo establecido por el legislador, respecto de aquellos trabajadores que han sido traspasados en virtud del artículo trigésimo octavo transitorio de ley N° 21.040, comienzan a regirse por

las normas del Estatuto Administrativo, y no por el Código del Trabajo, que era la regulación que les aplicaba con anterioridad.

En este mismo sentido, respecto de los Asistentes de la Educación, la propia ley N° 21.040 señaló que estos se regirían por un Estatuto propio, siendo hoy funcionarios públicos, lo que se materializó en la ley N° 21.109, que estableció un estatuto de los asistentes de la educación pública.

De esta forma, y respecto del reconocimiento de los derechos adquiridos por parte de los SLEP, cabe señalar que la Contraloría General de la República ha señalado que los beneficios se mantendrán siempre que se hubiera dado cumplimiento a los requisitos legales y jurisprudenciales vigentes a la época de su otorgamiento, según lo precisado en el dictamen N° 4.282, de 2019, agregando que "*los Servicios Locales, en su calidad de órganos públicos, se rigen por el principio de juridicidad, contemplado en los artículos 6° y 7° de la Constitución Política, y 2° de la ley N° 18.575, el que les impide enterar beneficios económicos en situaciones no previstas por el ordenamiento jurídico, o con prescindencia del cumplimiento de los respectivos requisitos legales*".

Sobre este punto, es importante aclarar que el órgano al que le compete definir el cumplimiento de aquellos requisitos corresponderá si se trata de una Municipalidad a la Contraloría General de la República, o bien, si se trata de una Corporación Municipal a la Dirección del Trabajo.

Ahora bien, que el traspaso no pueda tener como consecuencia ni ser considerado causal de término de servicios, supresión de cargos, cese de funciones, pérdida del empleo o término de la relación laboral del personal traspasado, se refiere exclusivamente a que estas situaciones no podrán tener lugar con ocasión del traspaso, es decir no contempla una especie de inamovilidad de los trabajadores. Es más, el problema de la sobredotación fue discutido durante toda la tramitación del proyecto de ley de la Nueva Educación Pública, y con su reestructuración se buscó precisamente resolver este problema, sabiendo los legisladores que un gran número de funcionarios serían desvinculados, estableciendo los resguardos para reparar el daño a los trabajadores que fueran objetos de estas medidas.

En efecto, consta en la historia de la ley Nº 21.040 la siguiente intervención de la Ministra de Educación:

"*La señora Ministra expresó que las situaciones de los distintos tipos de funcionarios presentan aspectos compartidos y otros diferenciados.*

Señaló que aquellos que laboran en los establecimientos educacionales no presentan problemas. En cuanto a los funcionarios administrativos, estimó que podrían quedar más de 4.000 funcionarios fuera del sistema, por lo que el Gobierno se ha comprometido a pagar las indemnizaciones legales correspondientes. Acotó que el 30% de la cifra entregada corresponde a funcionarios con menos de 2 años de antigüedad. En el caso de los funcionarios de las corporaciones municipales, se ha planteado que se traspasan con sus derechos adquiridos como trabajadores, pero sin derecho a negociación colectiva de por medio, dado que no se aplica a los funcionarios de la Administración" (Historia de la Ley N° 21.040, Informe Comisión de Hacienda, p. 1.731).

Ante lo expuesto, se ha acreditado que diversas dificultades vinculadas al traspaso del personal tienen origen en "*la poca claridad en la entrega de*

información administrativa derivada de los municipios en relación con la dotación de docentes y asistentes de la educación (programa 02 del presupuesto) y sus pagos", como también en la sobredotación de los establecimientos educacionales, circunstancias desarrolladas en el Informe Final Servicio de Análisis y Evaluación de la Implementación de los Servicios Locales de Educación Pública, Subsecretaría de Educación (ps.58 y 60).

En particular sobre la sobredotación el mencionado informe final señaló lo siguiente: "*Desde el discurso de los actores se declara que existe sobredotación en los establecimientos educacionales, la cual se estaría dando en dos niveles, (1) Hay una mayor cantidad de asistentes de la educación en relación a lo necesario tanto en relación al número de estudiantes como al número de docentes, y respecto de (2) la cantidad de horas pedagógicas de docentes contratadas es mayor a las necesidades de los planes de estudio de los establecimientos educacionales. Frente a esto, además, se percibe que ha sido más problemática en los asistentes de la educación, lo cual puede ser corroborado por la relación que existe entre la cantidad de docentes y la cantidad de asistentes de la educación en cada uno de los SLEP*" (Informe Final Servicio de Análisis y Evaluación de la Implementación de los Servicios Locales de Educación Pública, Subsecretaría de Educación, p.61).

A continuación, se exponen tablas que evidencian la situación descrita:

Dotación Asistentes de la Educación SLEP

Año	SLEP	Dotación real AAEE 2021	Dotación máxima de AAEE por presupuesto 2021	Diferencia
	Barrancas	1.415	1312	-103
	Costa Araucanía	812	926	114
2018	Huasco	961	1099	138
	Puerto Cordillera	983	1085	102
	Chinchorro	1.456	1705	249
2019	Andalién Sur	1.373	1913	540
	Gabriela Mistral	783	848	65

Relación entre dotación de docentes y asistentes de la educación 2020

Año	SLEP	Dotación de docentes 2021	Dotación de AAEE 2021	Relación AAEE/ Docente
	Puerto Cordillera	1.267	1.085	0,86
2018	Barrancas	1.824	1.312	0,72
	Costa Araucanía	1.003	926	0,92
	Huasco	1.198	1.099	0,92
	Andalién Sur	1.866	1.913	1,03
2019	Gabriela Mistral	1.230	848	0,69
	Chinchorro	1.692	1.705	1,01

	Colchagua	1.334	846	0,63
	Atacama	2.215	1.836	0,83
2020	Llanquihue	1.047	880	0,84
	Valparaíso	1.908	1.424	0,75
Total		16.584	13.874	0,84

Fuente: Elaboración propia Dirección de Educación Pública.

• En **Sesión Nº 8 de fecha 19 de abril de 2021**, la Directora de la Escuela N° 405 “Millahue”, del Servicio Local de Educación Pública de Barrancas, señora Alejandra Benavides Arestizabal, indicó que “Quiero establecer también la problemática de los directores del Servicio Local de Barrancas, que, si bien, postulamos a un concurso, hemos tenido la renuncia y salida de varios de ellos en el camino, porque hay condiciones laborales que no se respetaron ni se mantuvieron y hoy nos encontramos en juicio. Son situaciones que tienen que ver con sueldos proyectados en el concurso y luego no cumplidos. Más allá de quien haya tenido la culpa, somos trabajadores que optamos por quedarnos en este espacio, y ahí hay una situación grave en que también perdemos el tiempo en centrarnos en demandas que no debiesen ocurrir. En ese sentido, hemos tenido un trato que no es el adecuado, más allá de que cumplimos con todas las condiciones para ganar los concursos. Platearnos que no se puede hacer nada ha sido complejo y merma mucho la relación que se puede establecer con un servicio local, ya que esta es bastante lejana con los directores. En junio del año pasado, iniciada ya la pandemia, vine a la Comisión de Educación a plantear que ni siquiera nos habíamos reunido con el director ejecutivo. Por lo tanto, se repite el tema de la mala comunicación o de la comunicación no efectiva con quienes hoy tenemos la tarea de liderar las escuelas”.

• En **Sesión Nº 8 de fecha 19 de abril de 2021**, la Directora de la Escuela “Provincia de Arauco” del Servicio Local de Educación Pública de Barrancas, Úrsula Araya Parraguez, señaló que “Si nosotros como directores no somos convocados en el diseño y la implementación y en el levantamiento de acciones concretas es imposible que podamos alcanzar las metas que se establecen y, peor aún, sumo que a la fecha después de pedirlo el uno, el 12 de marzo y hoy día, 19 de abril, no cuento con información respecto de los recursos de mi escuela, año 2020, y la proyección para gestionar el 2021”.

• En **Sesión Nº 8 de fecha 19 de abril de 2021**, la Directora de la Escuela “José Bernardo Suarez” de Macul, del Servicio Local de Educación Pública de Gabriela Mistral, Pamela Meza Morales, señaló que “También, contar que en relación con la gestión de solicitudes, el primer pago de remuneraciones del Servicio Local Gabriela Mistral fue bastante exitoso. Me refiero al mes de enero del año 2020. Tienen un sistema bien consolidado de instructivo de remuneraciones donde todos los directores hacemos un informe consolidado y se están re liquidando y contestando las situaciones a todos los funcionarios del día uno al cinco de cada mes. En cuanto a gestión de personas es un proceso bastante rápido y eficiente. Estoy con el ciento por ciento de la dotación completa; incluso, pedí algunos profesionales que me sugirió la Superintendencia. Por ejemplo, tengo un facilitador cultural para la población de niños haitianos y también un técnico en educación diferencial

para niños con necesidades educativas permanentes. Son recursos que el Servicio Local Gabriela Mistral ha puesto a nuestra disposición".

• En **Sesión Nº 12, de fecha 24 de mayo de 2021**, el Presidente de la Coordinadora Nacional de Funcionarios DEM, DAEM y Corporaciones (CONAFUDAEM), Cristian Figueroa Constanzo, señaló que "dentro de la precarización laboral está el gran número de distintas formas contractuales que existen y que generan la atomización de los mismos trabajadores. Al respecto, es importante mencionar que la ley N° 21.040 permite que los asistentes de la educación, los docentes y los trabajadores VTF pasen sin solución de continuidad laboral a la nueva institución. Los trabajadores a honorarios no son considerados en ninguna parte, como siempre son prácticamente un fantasma dentro de todo el mundo laboral del Estado. Por lo tanto, estos no están considerados dentro de la nueva institución, por lo que voy a centrar mi presentación en los trabajadores de las administraciones centrales, regidos por el Código del Trabajo y traspasados solo si pasan un concurso. De estos, según los datos que autorreportamos, solo el 8 por ciento continúa en la nueva institución, y según los datos que entregaba el informe intermedio, habla de un 20 por ciento. Es decir, en cualquiera de los dos casos, estamos hablando de una masacre laboral, pues estamos hablando de que el 80 por ciento de los trabajadores no tiene continuidad laboral en la nueva institución. En cuanto a los datos más concretos, me voy a referir a tres casos que dejé marcados: los servicios locales de Chinchorro, de Gabriela Mistral y de Andalién Sur. Por ejemplo, el caso de Gabriela Mistral tenía 55 cargos de planta que estaban puestos en un decreto con fuerza de ley. De esos, solo se llenaron 13 cargos y fueron aceptados 5 funcionarios. Si se estima que previo a la desmunicipalización contábamos con 170 trabajadores en promedio, el territorio del respectivo SLEP, da un total de 1.870 trabajadores y si descontamos los aceptados, tenemos la cifra del orden de 1.723 trabajadores que quedan fuera del sistema. De esto hablo cuando me refiero a una masacre laboral, que quedan fuera 1.700 de los 1.800. Siguiendo con la entrega de datos, estas son algunas tablas que estaban en el informe de 2020 del Comité Evaluador, que muestra una dotación máxima, que aparecía en la Ley de Presupuestos, y de esa dotación realmente los que están llenado los Servicios Locales, por ejemplo, en el caso de Atacama, de 72 solamente 36, y así sucede en todos los Servicios Locales ya instalados. Es decir, además de lo que estábamos viendo, que hay una baja cantidad de cargos de planta, también lo que se está contratando a fin de cuentas es muy inferior y que va relacionado con los problemas de gestión". Indica además que "Lo que sí está buscando es precarización laboral, por los mismos datos que estamos mostrando y también hay una grave situación laboral que la denominamos masacre laboral, la cual urgimos a que se generen modificaciones para dar solución. Deberían ser traspasados automáticamente los trabajadores de la administración central a los Servicios Locales, porque hay un convenio del Estado chileno con la OIT, el convenio N° 111, el cual habla de la discriminación de los trabajadores. Acá se está dando claramente una discriminación de estos".

• En **Sesión Nº 12, de fecha 24 de mayo de 2021**, el dirigente de la Conafudaem Región de Los Lagos, Tomás Sánchez, precisa que "De esta manera, nosotros señalamos que esta es una ley realmente discriminatoria, ya que toda la dotación de los profesores, los 108.000 profesores que mencionaban hace un rato atrás más los 75.000 asistentes de la educación

son traspasados en forma automática al Servicio Local, sin mayores reparos. Sin embargo, como los funcionarios de los DAEM, los DEM y las corporaciones, los que trabajamos en la parte administrativa se nos hace pasar por un cedazo, a través de un concurso público, donde hay cupos mínimos para que podamos concursar. En la siguiente lamina, claramente, el 2019 en el Servicio Local de Chinchorro, Gabriela Mistral y Andalién Sur se otorgaron 13 cupos para el concurso. Diputados, 13 cupos y eso significó que más del 80 por ciento de los profesionales de los DAEM quedaron sin trabajo. En Arica, cuyo caso fue terrible, más de 150 trabajadores quedaron sin trabajo. En el Biobío, alrededor de 200". Asimismo, señala que "El año pasado se instaló el Servicio Local de Llanquihue y en este Servicio Local, junto con ser traspasados los profesores y asistentes de educación, de los 155 funcionarios que componían los DAEM de Fresia, Frutillar, Llanquihue, Puerto Varas y Los Muermos solo se llamó a concurso 27 cupos. Y de estos 27 cupos quedaron 15 funcionarios. Al 31 de diciembre del 2020, que recién terminó, ya habían sido notificados los 140 funcionarios de sus respectivos ceses de funciones. Muchos de ellos hoy forman parte de la gran masa de cesantes en este país, en que en tiempos de pandemia ha sido mucho más complejo encontrar trabajo". "¿Qué proponemos nosotros? Primero, que ojalá sinceramente podamos modificar esta ley, para que todos los trabajadores que se desempeñan en los Departamentos de Administración de Educación Municipal y las corporaciones podamos ser traspasados a los servicios locales. Segundo, que se reincorpore a los que no tuvieron continuidad laboral, los colegas que hoy están cesantes. Hay experiencia de otros países en donde se ha vuelto a contratar a la gente. Tercero, que la ley obligue - actualmente la norma no obliga- a los directores de los servicios locales a crear oficinas territoriales en cada comuna, porque hoy eso no existe. Queda a criterio del director del servicio local que se establezca una oficina en cada comuna, pues la ley no lo obliga. Es importante que en cada territorio exista una oficina comunal". "Cabe señalar que cuando conocimos la ley a través del asesor de la exministra de Educación Adriana Delpiano, recuerdo bastante bien que el señor Rodrigo Roco nos manifestó que, cuando llegara el momento del traspaso, se trasladarían al menos 150 funcionarios a los servicios locales. Ese discurso fue recurrente en cada reunión que teníamos con el señor Roco. Entonces, para nosotros nunca fue tema no ir al proceso de desmunicipalización; por el contrario, estábamos muy de acuerdo con ser traspasados y ojalá depender del Ministerio de Educación. Era lo ideal. Con eso quiero disipar varias dudas, porque da la impresión de que no queremos el proceso. Queremos ser des municipalizados, pero también justicia e igualdad de trato, al igual como nuestros colegas asistentes de la educación y docentes. Es decir, queremos ser traspasados en las mismas condiciones que ellos".

• En **Sesión Nº 12, de fecha 24 de mayo de 2021**, el presidente del Consejo Nacional de Asistentes de la Educación de Chile, Miguel Ángel Araneda, precisa que "Hoy, por ejemplo, tenemos algunas falencias en los choferes, que no están siendo incluidos dentro del estatuto ni reconocidos por las direcciones de educación ni por los servicios locales. En el caso de las manipuladoras de alimentos, se sigue precarizando las condiciones laborales de nuestras colegas. Creo que se debería evitar la subcontratación y ser todos asistentes de la educación, tanto los choferes como las manipuladoras de alimentos. Con el traspaso de la administración, de acuerdo con el decreto ley

N° 3166, tenemos colegios en los que todavía no está claro quién debe pagar los bienios de los colegas que están en los territorios. La ley señala claramente que pasan a ser parte de los servicios locales, y por ende que debe aumentárseles los beneficios, pero no se dice específicamente quien los debe pagar. Por lo tanto, los colegas de Santiago, a lo menos los de Servicio Local de Educación Gabriela Mistral y los que están a su alrededor, cuyo establecimiento se rige por el decreto ley N° 3166, todavía no reciben el pago de sus bienios. Eso debe quedar especificado en la ley para evitar estos nudos críticos".

• En **Sesión Nº 12, de fecha 24 de mayo de 2021**, el presidente de la Federación de Asociaciones de Funcionarios DAEM de la Región de Ñuble, Juan Díaz, precisa que "esto nos obligó a recurrir en contra del Estado chileno ante la Organización Internacional del Trabajo, por infringir el Convenio 111, y ello, en particular, al disponer en el artículo trigésimo octavo transitorio, de la mentada ley N° 21.040, un especial procedimiento para nuestros representados, por el cual el 92 por ciento de los trabajadores queda sin continuidad laboral. Agradecemos a la OIT por declarar admisible nuestra reclamación en el mes de marzo reciente, y esto es lo increíble: Es un órgano internacional el que nos da respaldo ante la insensibilidad del gobierno, representado por el ministro de Educación, don Raúl Figueroa Salas, quien, en reciente reunión de trabajo, no estuvo disponible para discutir la necesaria modificación de esta ley, a efectos de dar término a la masacre laboral de la cual somos víctimas, lográndose sí instalar una mesa con dicho ministerio, solo a efectos de estudiar lo que acontece con los magros resultados de la concursabilidad cerrada. Esperamos avanzar en esa comisión". "De seguir tal cual la masacre laboral, al 31 de diciembre de 2025 tendremos en la calle 11.000 trabajadores de los 12.000 funcionarios iniciales, al momento de la primera desmunicipalización. ¡Sí, en la calle! 11.000 trabajadores que somos criticados irresponsablemente, tratándonos como personas de dudosa procedencia, como individuos que solo son grasa del sistema, "apitutados" que no saben trabajar, o bien, como si fuéramos operadores políticos, desconociendo el gran y efectivo aporte que hacemos al desarrollar nuestro silente trabajo, rindiendo los gastos de la SEP, elaborando las rendiciones del PIE, del FAEP, y otros tantos instrumentos de gestión, llevando adelante todo el proceso de compra, de procesamiento y pago de remuneraciones, de asistencia y monitoreo de las diversas labores que nos requieren en el proceso educativo. En suma, colaborando con la gran labor de los profesores y de los asistentes de la educación. Creímos en el discurso convocante y unitario en pro de la nueva educación pública, y solo despertamos en medio de la mayor cruzada mercantilista neoliberal de la educación de los últimos decenios, la que se ha reducido a un mero cambio de sostenedor, con una mirada gerencial, en la cual la opción económica predomina sobre la pedagógica, desarrollando la tercerización o externalización, contratando empresas para el aseo, precarizando el empleo, y sacando cuentas que nada dicen con el mejoramiento de la calidad de la educación". "Hoy ante ustedes damos a conocer los siguientes casos de la ciudad de Arica: Karina Angélica Cortés Jara, Yorky Daly Marín Ferreira, María Elena Olivares Varas, Aristeia Álvarez Cortez y Mario Torres Plaza; y de Los Muermos, Mauricio Javier Cuell Navarro. Lamentamos no poder dar más nombres, aunque hay muchos más casos, pero por miedo no nos han autorizado para lo que debemos dar a conocer. Reitero que todos ellos fueron despedidos con fuero vigente al momento del

traspaso dando cuenta del desprecio por la labor sindical y gremial. En tanto, otros dirigentes que han logrado ser traspasados son sistemáticamente acosados, como es el caso de la dirigente Magdalena Valenzuela Morales, que a siete días de ser traspasada se inicia un sumario administrativo en su contra por su exempleador, la Corporación Municipal de San Fernando, y es esta dirigente la que denunció cómo esa corporación trató y contrató por la Alta Dirección Pública a un funcionario que cobró dos sueldos simultáneamente, ambos por cuarenta y cuatro horas semanales. Y es la misma dirigente que, recientemente, ha triunfado en la defensa de sus asociados ante los descuentos ilegales y antojadizos efectuados por el actual sostenedor, que es el Servicio Local de Educación Pública de Colchagua, obligado ahora por sentencia del tribunal a restituir los dineros mal habidos de los trabajadores".

• En **Sesión Nº 12, de fecha 24 de mayo de 2021**, la Directora de Educación Pública, Alejandra Grebe, precisa que "uno de los aspectos claros es que hay un problema con la experiencia y no porque la experiencia sea buena o mala -estamos todos de acuerdo que la experiencia es buena-, sino no hay una certificación de experiencia. En los concursos o para los perfiles de cargo, tal cual como hoy están definidos, no se valora la experiencia, sino la profesión y hay una diferencia entre las dos cosas. Una cosa es que yo pueda ser docente y llevar 20 años trabajando en un DAEM (Departamento de Administración de Educación Municipal) pagando remuneraciones. Al momento de postular al cargo, voy a hacerlo como docente y no por la experiencia, porque actualmente no hay una certificación de experiencia. Entonces, una de las cosas en que estamos trabajando es cómo podemos certificar esa experiencia con universidades para que, en el fondo, sea válida para que puedan concursar más y no que el concurso los arroje hacia afuera, porque no cumplen con los requisitos. Ese es un problema real que hoy nos ocurre y ya hicimos todo el levantamiento de esa información. Voy a darles un ejemplo para que entiendan lo que estoy tratando de explicarles. Desocupamos el nuevo servicio local de educación de Atacama, de 2020. De un total de 191 funcionarios que tiene el DAEM, solo 30 de ellos participaron en concursos cerrados. Setenta y una personas cumplían con los requisitos para postular, pero solo llegaron 29 postulantes al concurso; es decir, llegaron menos personas que el número de concursos".

• En **Sesión Nº 12, de fecha 24 de mayo de 2021**, el diputado Mario Venegas precisa que "no es mi intención usar un lenguaje belicoso ni nada parecido. Creo tener el privilegio de haber sido parte de la discusión, difícil y dura, en que se aprobó este proyecto de ley, y no tengo arrepentimiento alguno por haberlo apoyado. Me hago cargo de ello, a propósito de las palabras del diputado Bobadilla. No estoy rehuyendo mi responsabilidad, que quede claro; muy por el contrario, creía firmemente en la necesidad de fortalecer la educación pública y sigo creyendo en ello. Además, este proyecto es el resultado de un requerimiento social importante en un determinado contexto. Recordemos la movilización de los "pingüinos", como se llamó a los estudiantes secundarios que participaron en ella, quienes pedían precisamente desmunicipalización, y recordemos también la movilización de 2011 de los estudiantes universitarios, que volvieron a plantear eso como una necesidad. En mi intervención anterior reconocí que es complejo legislar y que la ley no sale siempre como uno quisiera. Mientras escuchaba a los colegas y a los dirigentes, recordaba que la razón por la que existía disparidad a la hora de tratar a docentes, asistentes y funcionarios de los DAEM es porque hay una

cosa rara en este proyecto, esto es, que quienes ingresen a los servicios locales de educación pública tendrán el carácter de funcionarios públicos, lo cual es muy valorado por ellos, por lo que significa en términos de estabilidad, de condiciones salariales, regidos por el Estatuto Administrativo, etcétera, que no era una situación que previmos, que se analizó. ¿Y por qué no volver al ministerio y que todos tengan el mismo régimen? Porque en ese momento no hubo disponibilidad para considerarlo por parte de quien tomaba esas grandes decisiones, que es el Poder Ejecutivo, por distintas razones que se pusieron sobre la mesa. Entonces, sin entrar a discutir la legitimidad que tiene presentar un proyecto como el que hemos estado debatiendo, se analizará y se discutirá en el marco de lo que es democrático. Yo me inclino por lo que señaló la directora nacional de Educación Pública, esto es, que debemos concentrarnos en las dificultades. Esta es una ley que recién se está implementando y no podemos sacar conclusiones apresuradas, hay que buscar caminos para resolver este problema, definir cuáles están disponibles y qué ponemos como alternativa sobre la mesa. Además, es un universo relativamente acotado. Si recuerdo bien las cifras, los dirigentes hablan de 12.000, comparados con 180.000 y algo más, 75.000. Estamos hablando de una proporción porcentualmente bastante menor, y allí necesitamos creatividad y claridad para buscar alternativas, pero, por favor, que por ningún motivo quede la impresión de que estoy escurriéndole al bulto o quitándome la responsabilidad de haber apoyado con entusiasmo esta ley, porque creo que es necesaria".

• En **Sesión Nº 13, de fecha 31 de mayo de 2021**, el presidente de la Confederación Nacional de Asociaciones de Funcionarios Asistentes de la Educación Municipalizada de Chile, Arturo Escárez, precisa que "Hemos ido logrando con mesas de trabajo que instalamos con la Dirección de Educación Pública, con los distintos directores y directoras de los servicios locales que iban a entrar en régimen, así como también con los que ya están en régimen. En este proceso, fue el diálogo lo que nos ayudó a ir destrabando muchos problemas; de hecho, los primeros problemas que tuvimos fue con la aplicación del estatuto, ya que cuando sale publicado en el Diario Oficial, sale cuando ya los servicios locales estaban en régimen; entonces, para tener que aplicarlos -y ahí, gracias al trabajo de ustedes- se colocaron artículos transitorios para que estos beneficios pudieran ser cobrados retroactivamente respecto del tema económico. No digo que no tengamos problemas, pero los hemos ido solucionando –insisto- con las distintas mesas de trabajo que tenemos con los directores y directoras de los servicios locales que están en régimen, y en los cuales también participa la Dirección de Educación Pública. Es así como lo hemos ido logrando".

• En **Sesión Nº 13, de fecha 31 de mayo de 2021**, la secretaria general de Confemuch, Alejandra Aguilar, precisa que "Como dijo nuestro presidente, si bien no hemos estado ajenos a los problemas que han tenido los SLEP, de los aciertos y de los errores, hemos ido sacando aprendizajes y avanzando en cada uno de ellos; también hemos tenido constantes reuniones con la directora de la Dirección de Educación Pública (DEP) y con el equipo jurídico. Veo que está presente don Alfredo Romero, con quien hemos resuelto muchos de los problemas que hemos tenido; pero como asistentes de la educación, estamos conscientes de que con trabajo, con compromiso y sin mirar el color político de la educación, podemos avanzar en este tremendo cambio histórico que tiene la educación en nuestro país".

5. Preocupación respecto a qué ocurrirá con las deudas que se arrastran desde las municipalidades.

El numeral 8° de la solicitud de creación de la Comisión señala:

"*Por otro lado, existe una gran preocupación respecto a qué ocurrirá con las deudas que se arrastran desde las municipalidades, exponiéndose como ejemplo el caso de Valparaíso en que existirían 70 mil millones en deudas previsionales, entre otras. En sesión de la Comisión de Educación, de fecha 02 de junio de 2020, se analizaron las razones por las cuales no se ha procedido el pago de las deudas de cotizaciones previsionales a profesionales de educación de la comuna de Cerro Navia, que debieron ser resueltas conforme al procedimiento del artículo trigésimo cuarto transitorio de la ley N° 21.040. Hasta el día de hoy, han pasado 2 años y 5 meses del traspaso del servicio educativo del municipio al nuevo Servicio Local de Educación Pública de Barrancas, y todavía no se han pagado las deudas respectivas al traspaso, lo que genera interrogantes sobre qué sucederá con los próximos Servicios Locales de Educación Pública que tengan deudas anteriores similares a la situación de Cerro Navia*".

Sobre este punto, corresponde señalar que el importante déficit financiero de las municipalidades fue parte del diagnóstico negativo de su gestión y una de las razones que motivó la dictación de la ley Nº 21.040.

De esta manera en el Mensaje de la Ley señaló que "*la debilidad institucional de la educación pública municipalizada ya era visible en 1988, cuando se reconocía que el 94,5% de los municipios presentaba déficits financieros en su área educación*" (Historia de la Ley N° 21.040, Mensaje, p. 5).

En tales condiciones, es preciso indicar que la ley N° 21.040 estableció en su artículo trigésimo cuarto transitorio, de forma expresa que las deudas generadas con ocasión de la prestación del servicio educacional son de cargo de las respectivas Municipalidades y Corporaciones Municipales.

En este contexto, el artículo trigésimo cuarto transitorio de la ley N° 21.040 determinó un mecanismo especial para enfrentar las deudas de los Municipios y Corporaciones Municipales en la prestación del Servicio Educacional. De esta forma, dichas entidades deben presentar un informe financiero que debe contener la siguiente información:

i. El resultado de una auditoría externa realizada por una institución registrada para tales efectos en la Superintendencia de Valores y Seguros, de conformidad al título XXVIII de la ley N° 18.045. Los recursos para estos efectos deberán estar contemplados en el respectivo convenio de ejecución, de acuerdo a lo señalado en el artículo vigésimo quinto transitorio.

ii. El estado de pago de las obligaciones descritas en los literales a) y b) del artículo trigésimo transitorio, más los intereses y reajustes, en caso de incumplimiento de dichas obligaciones.

iii. El estado de pago de las remuneraciones que correspondan a los profesionales de la educación regidos por el decreto con fuerza de ley N° 1, de 1996, del Ministerio de Educación, a los asistentes de la educación regidos por la ley N° 19.464, que se desempeñen o se hayan desempeñado en establecimientos educacionales administrados directamente por municipalidades o a través de corporaciones municipales, y al personal que se

desempeña o se haya desempeñado en los respectivos Departamentos de Administración de Educación Municipal o en la gestión educacional de las corporaciones municipales según corresponda.

iv. El estado de pago de las obligaciones descritas en el literal c) del artículo trigésimo transitorio de la presente ley, más los intereses y reajustes, en caso de incumplimiento de dichas obligaciones.

En caso de existir saldos impagos respecto de obligaciones previsionales y por concepto de pagos por descuentos voluntarios o bien por remuneraciones, el legislador expresamente señaló que la municipalidad o corporación municipal deberá pagar dichas deudas, las que serán siempre de su exclusiva responsabilidad, y por tanto continuará siendo, para todos los efectos legales, la obligada al pago de estas deudas hasta su total extinción.

No obstante lo anterior, en caso que dichas deudas no sean pagadas antes del traspaso del servicio educacional, el Ministerio de Educación con autorización de la Dipres, pagará directamente a las instituciones o a las personas que correspondan las obligaciones previsionales y por concepto de pagos por descuentos voluntarios y las obligaciones de remuneraciones.

En caso de que las deudas sean pagadas por el Ministerio de Educación de acuerdo con lo señalado precedentemente, éste deberá exigir la restitución de lo pagado por dichos conceptos, ya sea a través de descuentos en el FAEP, dejando sin efecto las retenciones de subvención que haya aplicado a la Municipalidad o Corporación Municipal respectiva o mediante el descuento en el Fondo Común Municipal, lo anterior de conformidad al ya citado artículo trigésimo cuarto transitorio de la ley N° 21.040.

En consecuencia, fue el propio legislador el que estableció el mecanismo para pagar las deudas que son de cargo de las Municipalidades o Corporaciones Municipales en caso de que estas no las paguen antes del traspaso del servicio educacional y la forma para obtener su reembolso.

En este contexto, y de conformidad con lo establecido en el artículo trigésimo cuarto transitorio de la ley N° 21.040, las Municipalidades que traspasaron el Servicio Educacional el año 2018, como ocurrió con el caso de Cerro Navia, debieron presentar su informe financiero 60 días antes del traspaso del servicio educacional, por lo que desde esa fecha y a la fecha de la solicitud de creación de esta Comisión Especial Investigadora habían transcurrido dos años 5 meses.

Sin embargo, la aseveración de que todavía no se han pagado las deudas de Cerro Navia no da cuenta de la situación que mantenía la citada Corporación Municipal al momento de traspaso y que ha impedido solucionar las deudas de conformidad con lo establecido en el artículo trigésimo cuarto transitorio de la ley N° 21.040.

En primer lugar, el informe elaborado por la empresa de auditoría externa Capurro y Asociados, por un monto de $12.852.239.197.- fue presentado con fecha 23 de febrero de 2018, la que determinaba el total de los pasivos de la Corporación sin acotarse a aquellos que efectivamente son plausibles de pagar por el Ministerio de Educación según mandata el procedimiento de la ley N° 21.040 en su artículo trigésimo cuarto transitorio.

Asimismo, este informe no dio cuenta de la deuda generada y mantenida por dicha Corporación, de forma desagregada por funcionario, no

pudiendo acreditar la DEP qué montos correspondían a profesionales y asistentes de la educación que prestaron servicios al sostenedor y los funcionarios que prestaban funciones en otras áreas de la corporación.

En atención a la ambigüedad del informe y las diversas dificultades que presentó en su análisis y que permitieran pagar lo efectivamente autorizado por la ley en virtud del principio de legalidad del gasto, la DEP tuvo que contratar a una auditoría externa sobre los procedimientos empleados en la elaboración del informe financiero, la que fue realizada por la empresa Baker Tilly Chile, que dio cuenta de falta de registros de las deudas que permitieran acreditar los montos adeudados, se identificó una mayor deuda a la informada, problemas con el cálculo de los interés y reajustes, entre otros, lo que llevó a que el informe financiero fuera rectificado por la corporación municipal en innumerables ocasiones.

Además, la información comunicada ha debido ser validada por otras instituciones por ejemplo a la Subsecretaría de Previsión Social para desagregar la información de la deuda de la Corporación al menos con las distintas Administradoras de Fondos de Pensiones.

Por otra parte, de las deudas hubo 816 RUT informados en el informe financiero que no se encontraron en la base de datos estatal (SIGE), situación que fue informada desde la DEP a la Corporación.

Lo comentado, da cuenta del desorden financiero y administrativo de la anotada Corporación Municipal, que ha requerido un trabajo detallado no tan solo por parte de la DEP, sino que también del Ministerio de Educación, la Superintendencia de Pensiones, funcionarios de la misma Corporación, entre otros, y que evidentemente han impedido proceder al pago completo de aquellas deudas que aún no han podido ser cotejadas en base a lo expuesto.

Sin perjuicio de las dificultades previamente descritas, para efectos de pagar la deuda de la Corporación de Cerro Navia, el año 2018 se celebró un convenio de transferencia de recursos entre dicha Corporación y el Ministerio de Educación (aprobado por Resolución exenta N° 1.024, de 2018 del Mineduc), acto que asignó a la Corporación un monto equivalente a $1.349.919.912, alcanzando una ejecución de $961.096.279, quedando un saldo pendiente de ejecución por las razones expuestas, equivalente a $388.822.833.

Además de lo anterior y pese a todas las complejidades que ha significado pagar las deudas de la Corporación Municipal, en virtud del artículo trigésimo cuarto transitorio el Ministerio de Educación a través de decreto N° 732, de 2020, ha pagado todas aquellas deudas que han podido ser verificadas, las que ascienden en la actualidad a la suma de $2.467.136.657.- (Dos mil cuatrocientos sesenta y siete millones, ciento treinta y seis ocho mil pesos), según se indica a continuación:

AFP	Monto
CAPITAL	509.202.350
CUPRUM	795.534.026
PLAN VITAL	177.310.520
PROVIDA	529.246.742

MODELO	455.843.019
Total	**2.467.136.657**

Igualmente, se hace presente que las normas de pago establecidas en el artículo trigésimo cuarto transitorio de la ley N° 21.040 no contemplan reglas de ejecución, circunstancia que hizo necesario efectuar una solicitud de pronunciamiento a la Contraloría General de la República por el Ministerio de Educación el 1 de abril de 2019. Dicha Entidad Superior de Control, aclaró las condiciones para efectuar el pago de obligaciones pendientes de la gestión municipal de la educación. En efecto, mediante dictamen N° 7588, de 2020, señaló que "*Pues bien, en consideración a que el parámetro utilizado por el aludido artículo trigésimo cuarto transitorio para fijar el estado del servicio educativo es la época del traspaso, y que, de manera amplia, se ha radicado en la respectiva municipalidad o corporación municipal la solución de los saldos impagos correspondientes a las obligaciones que indica, es factible colegir que toda deuda contraída al tiempo del referido traspaso debe ser tenida en cuenta para estos fines, con independencia de la data en que proceda realizar su pago efectivo.*

Por ende, tratándose de las obligaciones cuyo pago efectivo deba verificarse después de la fecha del traspaso, estas no serán de cargo del Servicio Local, pues el carácter de sucesor legal de estos últimos, consagrado en los artículos noveno, inciso segundo; decimoquinto y decimosexto transitorios, todos de la ley N° 21.040, no incluye la transmisión de las deudas aludidas en el anotado artículo trigésimo cuarto transitorio, porque ellas serán siempre, y para todos los efectos legales, de responsabilidad exclusiva de las respectivas municipalidades o corporaciones municipales.".

Luego del citado dictamen, distintas agrupaciones gremiales, y un grupo de diputadas solicitaron una reconsideración, solicitud que fue desestimada mediante el dictamen N° E68.317/2021, emitido el 15 de enero de 2021. En particular, dicho pronunciamiento precisó que "*Seguidamente, en lo relativo al plazo que sería exigible al Mineduc para solucionar la deuda previsional ocasionada por la prestación del servicio educacional, el artículo vigésimo cuarto transitorio de la ley N° 21.040 -Del Plan de Transición-, prevé que ese plan deberá contemplar un compromiso de esa Secretaría de Estado para colaborar y asistir en los objetivos financieros hasta antes del traspaso del servicio educacional, transfiriendo recursos con dicho fin, acorde con la respectiva Ley de Presupuestos del Sector Público y lo establecido en los artículos vigésimo sexto y vigésimo séptimo transitorios.*

Pues bien, ni la disposición reseñada con antelación, como tampoco el precitado artículo trigésimo cuarto transitorio de la misma ley, fijan un término para tales efectos, sin que corresponda efectuarlo a este Organismo Fiscalizador, pues con ello invadiría competencias exclusivas de los poderes colegisladores.".

En estos términos, queda establecido que los SLEP no se encuentran facultados para pagar deudas de la anterior administración del Servicio Educacional, como del mismo modo que el Mineduc solo puede pagar aquellas obligaciones para las que se encuentra expresamente autorizado por ley, no correspondiéndole pagar multas, recargos u otros conceptos aparejados, los que son de exclusiva responsabilidad municipal.

Por último, es importante señalar que a través del Ordinario N°1.695, de fecha 20 de julio de 2021, la DEP solicitó la colaboración a la Dirección del Trabajo en la determinación de las deudas existentes de la Corporación Municipal en comento, con el propósito de generar una actualización general de estas, contemplado sus interés y reajustes correspondientes, y realizar las verificaciones relativas que den certeza que corresponden a deudas ocasionadas por la prestación del servicio educacional de la Corporación referida, para luego avanzar con las gestiones de pago que correspondan en el marco del citado dictamen N° 7.588, de 2020. Dicha solicitud de antecedentes se encuentra pendiente de respuesta por la Dirección del Trabajo.

Al respecto, esta materia fue tratada de alguna manera en las siguientes sesiones:

• En **Sesión N° 3, de fecha 8 de marzo del año 2021**, la directora nacional de Educación Pública, Alejandra Grebe, señaló que *"Cabe recordar que el dictamen N°4.282, de 2019, estableció -respecto de la deuda previsional generada por la aludida Corporación Municipal de Desarrollo Social de Cerro Navia- que el párrafo 6° de las disposiciones transitorias de la ley N° 21.040 -en especial los artículos trigésimo cuarto, en relación con el artículo trigésimo-; el mensaje presidencial de aquella ley -punto N° 9 del acápite III. Objetivos del proyecto-, entre otros, son concordantes en orden a que las deudas originadas antes del traspaso del personal a un servicio local son de cargo del municipio o corporación municipal de que se trate. Ahora bien, sabemos que hay un importante déficit financiero en bastantes municipalidades y corporaciones de nuestro país. Ese es uno de los grandes diagnósticos que se plantean al momento de pensar en una reforma de estas características. Por lo tanto, una de las cosas que resguardó la ley es cómo y de qué forma se paga finalmente. En la sesión pasada se habló de la forma en la que Cerro Navia había levantado las auditorías realizadas. Si bien se hicieron las auditorías, estas no cumplían ni con la calidad de la información ni con la información requerida, por lo tanto se tuvieron que hacer nuevas auditorías para delimitar claramente la situación financiera de la corporación. Asimismo, la ley establece que el ministerio debe, en este caso, pagar las deudas previsionales que sean de educación. No se pueden pagar deudas previsionales que no sean de trabajadores de la educación. Llegar a depurar esa información fue un trabajo bastante largo, nos demoramos mucho tiempo en el caso de Cerro Navia. El primer informe, citado el 23 de febrero de 2018, determinaba el total de los pasivos de la corporación sin acotarse aquellos que se podían pagar por el Ministerio de Educación. En efecto, las deudas que puede construir el ministerio son las remuneraciones previsionales del personal, de las que parte importante -como señaló el señor Egaña- fueron pagadas en su administración, quedando la deuda previsional que se pagó como se detallará a las Administradoras de Fondos de Pensiones (AFP), mediante el decreto N° 732, de 2020, del Mineduc. Ahora bien, dicho informe no da cuenta de la deuda generada y mantenida por dicha corporación de forma desagregada por funcionario y por eso no se pudo pagar, principalmente, porque venía mezclada gente de la salud y otros que no eran profesionales ni asistentes de la educación. Entonces, como había una ambigüedad en ese informe y diversas dificultades de análisis, la Dirección de Educación Pública contrató una auditoría externa sobre los procedimientos empleados en la elaboración del informe financiero, la que fue realizada por la*

empresa Baker Tilly Chile, que dio cuenta de la falta de registro de las deudas que permitieran acreditar los montos adeudados. Se identificó una mayor deuda que la informada, problemas con el cálculo, intereses y reajuste, entre otros, lo que llevó a que el informe financiero fuera rectificado por la corporación en innumerables ocasiones, no fue solamente una. Además, la información comunicada ha debido ser validada por otras instituciones, trabajo que hemos hecho desde la Dirección de Educación Pública junto a la Subsecretaría de Previsión Social para desagregar la información de la deuda de la corporación, al menos con las distintas administradoras de fondos de pensiones. Por otra parte, en cuanto a las deudas, hubo 816 RUT informados en el informe financiero que no se encontraban en la base estatal del SIGE, situación que fue informada desde la DEP a la corporación. Lo comentado en la presentación da cuenta del desorden financiero y administrativo que tenía la corporación municipal, el cual ha requerido un tremendo trabajo, detallado, no tan solo de nuestra parte, sino también del ministerio, de la Superintendencia de Pensiones y de funcionarios de la misma corporación, que nos han ayudado mucho en este trabajo. Evidentemente, esto ha impedido proceder al pago completo de aquellas deudas, que corresponden a funcionarios docentes o asistentes de la educación. Así, a los efectos de pagar la deuda de la Corporación de Cerro Navia, en 2018 se celebró un convenio de transferencia de recursos entre dicha Corporación y el ministerio, aprobado por resolución N° 1.024, que asignó a la corporación un monto equivalente a 1.349.900.000 pesos, alcanzando una ejecución de 961.000.000 de pesos, quedando un saldo pendiente de ejecución por las razones anteriormente expuestas, de aproximadamente 388.000.000 de pesos. Además, y pese a todas las complejidades que ha significado pagar las deudas de la corporación municipal, en virtud del artículo trigésimo cuarto transitorio, se han pagado todas aquellas deudas que han podido ser verificadas, las que en la actualidad ascienden a 2.477.878.000 pesos. En este orden de ideas, y considerando que parte de las deudas no han sido acreditadas, esta Dirección se encuentra imposibilitada de definir cuál es el monto exacto de la deuda, valores que además se están actualizando, como también se informó al Órgano Contralor en su oportunidad, lo que, como se ha reiterado, no es responsabilidad de la Dirección de Educación Pública, no pudiendo endosar la responsabilidad por el no pago de las obligaciones por parte de la corporación al Nuevo Sistema de Educación Pública, sino que corresponde perseguir las responsabilidades sobre el sostenedor anterior. Mientras no tengamos claridad de la información y no podamos corroborar que esos RUT corresponden a trabajadores docentes y asistentes de la educación, como Dirección de Educación Pública, de acuerdo al mandato establecido en la ley, es imposible que podamos pagar la diferencia. Además, se hace presente que las normas de pago establecidas en el artículo trigésimo cuarto transitorio de la ley no contemplan normas de ejecución, circunstancia que hizo necesario efectuar una solicitud de pronunciamiento a la Contraloría General de la República por el Ministerio de Educación, el 1 de abril de 2019. El dictamen N° 7.588, que aclaró las condiciones para efectuar el pago de obligaciones pendientes en la gestión municipal de la educación, fue emitido el 7 de abril de 2020, es decir, un año después de que el ministerio realizó la solicitud. Luego de dicho dictamen, distintas agrupaciones gremiales y un grupo de diputados solicitaron la reconsideración de la decisión del Órgano Contralor, solicitud que fue desestimada mediante el dictamen N° 68.317/2021, emitido el 15 de enero de este año. Lo mencionado deja de manifiesto que la certeza acerca del

mecanismo de pago definido por ley se encuentra clarificada recién a comienzos del año en curso. El pronunciamiento de la Contraloría, precisamente referida a la materia objeto del mandato, y que solicitó informar nuevamente en la comisión con fecha 1 de marzo de 2020, que fue reiterado recientemente, establece que los Servicios Locales de Educación Pública no se encuentran facultados para pagar deudas de la administración anterior y que el Mineduc solo puede pagar aquellas obligaciones para las que se encuentra expresamente autorizado. Por lo tanto, no nos corresponde pagar multas, recargos u otros conceptos aparejados, las que son de exclusiva responsabilidad municipal. En este contexto, las auditorías que se han realizado no tienen por objeto retardar el pago u otro similar, sino pagar lo que debemos, en cumplimiento del mandato establecido en la ley N° 21.040, que, además, deben estar debidamente documentadas, en los términos que exige la normativa, reiterándose en este aspecto que esto solo refleja el desorden administrativo y financiero del anterior sostenedor, del que esta administración ha debido hacerse cargo. Este es un tema bien importante y que ha requerido un trabajo bastante exhaustivo de todas las instituciones que he mencionado, desde la Contraloría, el Ministerio de Educación, la Superintendencia de Pensiones, etcétera, para llegar a depurar los números. Obviamente, tenemos claro que son situaciones bastante similares a las que hoy estamos encontrando en Valparaíso y San Fernando. Por eso, en esos casos se ha venido haciendo un trabajo desde el año pasado y los informes financieros de ambas corporaciones también fueron observados formalmente por la Dirección de Educación Pública, para ser rectificados y entregaran la información con la claridad que hoy necesitamos. Pero, paralelamente, ya empezamos a trabajar con la Superintendencia de Pensiones para que nos informe sobre la deuda previsional que tienen las corporaciones de Valparaíso y San Fernando, en función de la información entregada por la Dirección de Educación Pública. Ahora bien, la información que tenemos sobre la deuda de pensiones total de las dos corporaciones es de aproximadamente 2.600.000.000 de pesos, que corresponde a un total de 14.394 registros identificados. En cuanto a la sobredotación, ustedes ya lo tienen claro.".

• En **Sesión Nº 10, del lunes 3 de mayo de 2021**, el integrante del Consejo de Evaluación del Sistema de Educación Pública, Omar Jara, indicó que "*Por lo tanto, en el caso de los DAEM, nosotros hacemos la contratación, porque escuché decir a sus representantes que había una situación compleja. Hay un número importante de personas que no quedan en los servicios locales. Cabe recordar que la gente que está en los establecimientos pasa automáticamente por el solo ministerio de la ley, pero no es el caso de los servicios locales. Entonces -como señaló el diputado Venegas-, podemos tener DAEM con sesenta personas, el de al lado treinta y el otro un tanto más, de modo que es imposible que un servicio local pueda albergar a toda esa cantidad de gente. Ahora bien, lo que hemos hecho -y lo indicamos en la página 58 de nuestro informe- es recomendar al Ministerio de Educación o a las instancias gubernamentales que correspondan la necesidad de tener un diálogo y considerar una mesa de trabajo para resolver ese tema. Entendemos que no es fácil que un número no menor de personas, debido a la implementación de una ley, se quede sin trabajo." "Sin duda, el trabajo que desarrollan los comités directivos y los consejos locales me sigue pareciendo muy interesante. Pero, la base de legitimidad que deben tener los servicios locales, que está dada ahí, hoy está complicada debido a la pandemia. De*

modo que no me atrevería a decir cuál está mejor o peor, pero así y todo, según indican los últimos reportes que tuvimos, la gente se sigue reuniendo, sigue continúa haciendo sus reuniones, algunos con más dificultad que otros por problemas de conexión digital.". Por su parte, María Teresa Flores, del Consejo, indicó que "Una de las recomendaciones que ha sido transversal a nuestro trabajo es el tema de fortalecer, ajustar o revisar los convenios de transición. Al respecto, nosotros hemos dicho que esos convenios deberían ser obligatorios y que debería haber mayor control de la superintendencia sobre ese proceso. Quizá, debería agregar una aclaración de la Dirección de Educación Pública (DEP), y es que no es solo en los convenios de transición, sino también en los decretos alcaldicios, donde se puede hacer requerimientos más específicos de calidad de la información, y no solo del tipo de información que se necesita. En este caso, se nos respondió que era una modificación de tipo legal y que estaban esperando nuestro pronunciamiento como consejo. Sin embargo, esto es algo que ya habíamos señalado hace bastante tiempo. Sí hay que señalar que los convenios de transición han ido mejorando; son un poco menos generales que antes y, además, se han ido estableciendo en una mayor cantidad de municipios. Otro aspecto que hemos recomendado hace bastante tiempo es el realizar propuestas de reforma normativa e institucional que permitan a los servicios locales administrar más eficientemente la prestación del servicio educacional, sobre todo, aquellas que tienen que ver con planificación y ejecución presupuestaria -y esto también lo venimos diciendo desde el primer o segundo informe-. En este caso, se habló de que se han hecho ciertas capacitaciones, pero no modificaciones normativas. Respecto de la articulación entre organismos del Estado, entendemos que ha habido la firma de ciertos convenios de colaboración entre organismos del Estado, pero nosotros estamos recomendando más bien esta fuerza de trabajo más global, es decir, no solo convenios entre organismos en particular, sino una fuerza intersectorial que se haga cargo de esto y lo asuma con la envergadura que tiene el proceso. También hemos señalado reiteradamente desde el primer informe es la necesidad de equilibrar los aspectos administrativos y los pedagógicos. Al respecto, se nos ha señalado que eso se ha mejorado al constituir el perfil de la unidad de apoyo técnico pedagógico, que reconocemos como un avance en los informes. Sin embargo, si no se solucionan todas estas otras cosas de lo operativo, es difícil que el centro vaya a estar en lo pedagógico". Luego, Magdalena Vergara, del Consejo señala que "Primero, sobre si ha habido mejoras, puedo señalar que se ha ido avanzando para tener una mayor cantidad de convenios con los municipios; de hecho, en la sesión pasada comenté que el único organismo que no firmó el convenio fue la Municipalidad de Valparaíso, lo cual ha generado una serie de problemáticas. Lo otro que se ha mejorado es que los convenios se han ido adaptando más, pues ya no son convenios tipo, a cada uno de los municipios, a fin de hacerlos más efectivos. Falta que los convenios sean obligatorios y que los municipios se hagan responsables de no haber saneado los bienes inmuebles y no haber entregado una información correcta y oportuna respecto de los funcionarios, de los contratos de los servicios, en fin, de todo lo que sabemos que genera problemas.".

6. Irregularidades que afectan a profesores y asistentes de la educación de la comuna de San Fernando, y eventual falta de coordinación y apoyo por parte de la Dirección de Educación Pública para el traspaso al nuevo Servicio Local de Educación Pública de Colchagua, y solicitud de nombramiento de un administrador provisional.

El numeral 9° de la solicitud de creación de la Comisión señala:

"*En sesión de Comisión de Educación del día 07 de julio, se presentaron las irregularidades que afectan a profesores y asistentes de la educación de la Comuna de San Fernando, debido al no pago de derechos remuneracionales por parte de la Corporación Municipal. Esto preocupa enormemente, en consideración al próximo traspaso al Servicio Local de Colchagua. Claramente, esta es una situación que se viene denunciando desde la discusión legislativa de la ley N° 21.040 y hasta el día de hoy no ha existido mejoraría sobre este punto. Es menester señalar que el artículo trigésimo quinto señala que la Dirección de Educación Pública durante el período que media entre la entrada en funcionamiento de los Servicios Locales, según lo establecido en el artículo sexto transitorio, y el momento en que se haga efectivo el traspaso del servicio educacional, de acuerdo a lo dispuesto en el artículo octavo transitorio, coordinará y apoyará la instalación de Servicios Locales de Educación Pública. Además se señalan diversas facultades para apoyar los traspasos como los planes de transición (artículo vigésimo cuarto transitorio), y las condiciones para que previo al traspaso se nombre un administrador provisional (artículo trigésimo segundo transitorio), situación que no ha sucedido hasta el momento, sin existir explicación respecto al no uso de estas facultades que entrega la ley para no afectar a los profesores y asistentes de la educación en sus remuneraciones y el pago de sus cotizaciones*".

Al respecto, corresponde señalar que el Ministerio de Educación suscribió con la Corporación Municipal de San Fernando el "Convenio Plan de Transición", el que fue aprobado por Decreto Exento N° 678, de 2019, en el marco del artículo vigésimo cuarto transitorio de la ley N° 21.040. De esta manera, el artículo vigésimo cuarto dispone que "*Desde la entrada en vigencia de esta ley, las municipalidades que presten el servicio educacional, directamente o a través de corporaciones municipales, podrán suscribir un Plan de Transición, de carácter plurianual, que el Ministerio de Educación pondrá a su disposición. Éste tendrá por objeto asegurar el adecuado traspaso del servicio educacional, así como el fortalecimiento y mejora de dicho servicio hasta su total traspaso, de conformidad a lo establecido en el artículo octavo transitorio.*".

Por otra parte, y de conformidad con lo establecido en el artículo vigésimo quinto transitorio, en cuanto a que el Plan de Transición se ejecutará mediante la suscripción de uno o más convenios de ejecución entre el Ministerio de Educación y la municipalidad o corporación municipal respectiva, dicha cartera ministerial suscribió con la Corporación Municipal de San Fernando el "Convenio de Ejecución del Plan de Transición", el que fue aprobado por Decreto Exento N° 547, de 2020, del Ministerio de Educación. En este orden de ideas y según disponen los mentados actos administrativos, se han utilizado las herramientas que dispuso el legislador para apoyar el traspaso del servicio educacional.

En cuanto a las deudas de la Corporación Municipal de San Fernando y Valparaíso, cabe señalar que las referidas corporaciones presentaron sus informes financieros, los que fueron observados formalmente por la DEP, a través de Ord. N° 2.021, de 2020 y Nº 12 de 2021.

En paralelo a lo anterior, por medio del Oficio Ordinario 2.300, de fecha 23 de diciembre de 2020, la DEP solicitó a la Superintendencia de Pensiones informe sobre la deuda previsional de los registros que levantó la Dirección y remitió en base rutificada respecto del personal docente y asistente de la educación de las Corporaciones Municipales de Valparaíso y San Fernando.

Al respecto, con la finalidad de cotejar la deuda informada por las mencionadas corporaciones, con fecha 5 de febrero del año en curso la DEP solicita formalmente la información de obligaciones pendientes de pago para la misma base rutificada a la Superintendencia de Salud, Instituto de Previsión Social y Superintendencia de Seguridad Social, a través de Ordinarios N° 256, 258 y 259, de 2021, respectivamente. Es del caso señalar que las solicitudes efectuadas a la Superintendencia de Salud y al Instituto de Previsión Social se encuentran pendientes.

En este contexto, mediante Ordinario N° 2.452, de 2021, la Superintendencia de Pensiones proporcionó información respecto de la deuda previsional de las mencionadas corporaciones totaliza $2.680.489.329, correspondientes a un total de 14.394 registros.

En relación con la cantidad de registros y montos de la deuda previsional, la tabla que sigue a continuación presenta la situación de San Fernando.

Sostenedor	Registros	Registros (%)	Deuda ($)	Deuda (%)
San Fernando	2.920	20,30%	1.166.033.544	43,50%

Desde la información proporcionada por la Superintendencia de Seguridad Social (Suseso) se desprende lo siguiente:

Deuda por origen información de RUT CORMUSAF - Caja La Araucana

Área	Origen RUT				
	Directores	Remunera-ciones/ Directores	SIGE/ Directores	SIGE/Remu-neraciones/ Directores	Sin origen DEP
Administración				25.051.820	6.177.580
Educación	12.879.230	12.361.220	6.271.559	780.719.365	284.547.168
Salud					229.654.990
Total general	**12.879.230**	**12.361.220**	**6.271.559**	**805.771.185**	**520.379.738**

Nota: Como se aprecia en la tabla que sigue a continuación, $805.771.185 se encuentran asociado a RUT que coinciden en los tres registros descritos anteriormente, mientras que $520.379.738 corresponderían a deudas con RUT no vinculados a la prestación del servicio educacional de la Corporación Municipal de San Fernando.

En relación con la cantidad de registros y montos de la deuda previsional, la tabla que sigue a continuación presenta la situación de Valparaíso.

Sostenedor	Registros	Registros (%)	Deuda ($)	Deuda (%)
Valparaíso	11.474	79,70%	1.514.455.785	56,50%

Desde la información proporcionada por la Superintendencia de Seguridad Social (SUSESO), en el caso de Valparaíso, se desprende lo siguiente:

Deuda por origen información de RUT CORMUVAL-Caja 18 de septiembre

Origen RUT	Saldo capital	Saldo interés	Total origen RUT	% deuda origen RUT
Directores	3.772.774	2.457.642	6.230.416	0,3%
Remuneraciones/ Directores	15.137.525	8.266.790	23.404.315	1,0%
SIGE	4.531.760	657.154	5.188.914	0,2%
SIGE/Directores	3.878.940	2.280.657	6.159.597	0,3%
SIGE/ Directores/ Remuneraciones	1.498.395.956	791.165.768	2.289.561.724	98,2%
Total	**1.525.716.955**	**804.828.011**	**2.330.544.966**	**100%**

Nota: Luego de chequear la información proporcionada por la SUSESO, es posible comprobar la mayor parte de la deuda se encuentra concentrada en RUT que se encuentran en las bases del SIGE, nóminas de los directores de establecimientos educacionales del SLEP Valparaíso y en los libros de remuneraciones. Como puede apreciarse en la tabla que sigue a continuación, un 98,2% de la deuda coincide con los RUT de las tres bases antes mencionadas.

En este sentido, es importante destacar que se han adelantado varias gestiones relativas a este proceso y las cifras distan bastante de las establecidas en los informes de auditoría presentados por las corporaciones municipales en comento.

De lo anterior, es importante señalar que las observaciones requeridas no han sido respondidas por las instituciones, lo cual ha generado retrasos en la planificación prevista.

A continuación, se detallan los comunicados de reiteración enviados:

1) Corporación Municipal San Fernando, Ord. N° 618, de fecha 24 de marzo de 2021.
2) Corporación Municipal San Fernando, Ord. N° 1.575, de fecha 5 de julio de 2021.
3) Corporación Municipal de Valparaíso, Ord. N° 1.090, de fecha 17 de mayo de 2021.
4) Corporación Municipal de Valparaíso, Ord. N° 1.574, de fecha 5 de julio de 2021.

Por otra parte, desde la DEP se continúa en la realización de acciones paralelas en el marco de este proceso. Producto de esto, por medio de la Resolución Exenta N° 1.109, de fecha 19 de julio de 2021, se ordena pago a Aseguradoras de Fondo de Pensiones en el marco de la deuda previsional de la Corporación Municipal de San Fernando, por $252.068.104.-, recursos provenientes de la asignación del plan de transición efectuada en el año 2020.

Por último, y al igual que como se indicó respecto de Cerro Navia, a través del Ordinario N° 1.695, de fecha 20 de julio de 2021, de la DEP, se solicita colaboración a la Dirección del Trabajo en la determinación de las deudas existentes de las Corporaciones Municipales de San Fernando y Valparaíso, con el propósito de generar una actualización general de estas, contemplado sus interés y reajustes correspondientes, y realizar las verificaciones relativas que den certeza que corresponden a deudas ocasionadas por la prestación del servicio educacional de ambas corporaciones para luego avanzar con las gestiones de pago que correspondan en el marco del Dictamen N° 7.588, de abril de 2020, ya indicado. El Ordinario previamente citado se encuentra pendiente de respuesta por la Dirección del Trabajo.

Luego, y en cuanto al estado actual de estas obligaciones, corresponde analizar las observaciones remitidas por las Corporaciones, la información que remitan las entidades públicas precedentemente indicadas y determinar el monto que corresponde a pagar en base a esta revisión documental.

En cuanto a la designación del administrador provisional, de conformidad al artículo trigésimo segundo transitorio de la ley Nº 21.040, la Superintendencia de Educación es el órgano facultado para nombrar un administrador provisional en uno o más establecimientos educacionales de administración municipal o de corporaciones municipales, por lo que no es resorte de esta Comisión promover su designación.

En este contexto y sobre la interrogante de qué sucederá con los próximos SLEP que tengan deudas anteriores similares a la situación de Cerro Navia, es algo que dependerá particularmente de la información y registros entregados por las Municipalidades y Corporaciones Municipales. En tales condiciones, la existencia de etapas de preparación al traspaso y el respeto de los tiempos óptimos para este procedimiento también es fundamental para proceder oportunamente en esta materia, circunstancia que según fue previamente expuesto no existió en el proceso de instalación de algunos SLEP.

De esta manera, la negligencia asociada a las deudas de las municipalidades y corporaciones municipales no puede ser endosada al Sistema de Educación Pública creado por la ley N° 21.040, ya que para proceder al pago en los términos establecidos en el artículo trigésimo cuarto transitorio por el propio legislador, existe un procedimiento previo de revisión y análisis de los antecedentes.

En base a lo anterior, no se puede olvidar que en materia de administración de haberes públicos y como expresión del principio de juridicidad, el Estado y sus organismos deben observar el principio de legalidad del gasto, consagrado en los artículos 6°, 7° y 100 de la Constitución Política; 2° de la ley N° 18.575, Orgánica Constitucional de Bases Generales de la Administración del Estado; 56 de la ley N° 10.336, Orgánica Constitucional de esta Contraloría General, y en el decreto ley N° 1.263, de 1975, Orgánico de Administración Financiera del Estado -aplicable expresamente en la especie, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 28 de la ley N° 21.040-, así como en las leyes anuales de presupuesto, de forma tal que los desembolsos que se autoricen con cargo a fondos públicos, solo pueden emplearse para los objetivos y situaciones expresamente previstos en el ordenamiento jurídico (aplica criterio del Dictamen N° 2.740, de 2020).

• En **Sesión Nº 4, del lunes 15 de marzo del año 2021**, la diputada Girardi, indicó que "*uno de los temas importantes es el de la dotación a nivel central, como también el retiro de algunos docentes -como lo mencionó al final la señora directora- que llevan muchos años en el sistema. Obviamente, sabemos que a los profesores les cuesta retirarse porque las jubilaciones son paupérrimas. Por ello, quiero plantear un caso en particular -no es el único, hay otros que me han planteado directores con profesores que además del monto de los sueldos que tienen se llevan prácticamente el porcentaje completo, una parte importante del presupuesto de la escuela por la cantidad de años que algunos llevan y por la imposibilidad muchas veces de retirarse-, en Cerro Navia, donde había un convenio colectivo. Se trata del director Jaime Vergara de la escuela Leonardo Da Vinci, quien desde hace muchos años sufre de cáncer y le ha costado mucho salir adelante con su enfermedad. Pues bien, él planteó la posibilidad de retirarse, pero el servicio se niega a pagarle lo que corresponde por el convenio colectivo. Cuando discutimos este proyecto, quedó que los derechos que tenían los trabajadores eran adquiridos y no se podían modificar. Obviamente, si había un convenio colectivo que implicaba ciertos beneficios para los profesores, estos derechos se tenían que respetar.*".

• En **Sesión Nº 12, de fecha 24 de mayo de 2021**, el presidente de la Federación de Asociaciones de Funcionarios DAEM de la Región de Ñuble, Juan Díaz, precisa que "*Destacamos que, materialmente, uno de los casos más recientes y dramáticos, precisamente, es el que se ha configurado en el Servicio Local de Educación Pública de Colchagua, a lo menos, con los docentes y asistentes de la educación que han sido traspasados, ya que actualmente desde el municipio de San Fernando se mantiene una deuda multimillonaria con los trabajadores, la que no se ha saldado por la fórmula planteada en la ley de desmunicipalización.*".

• En **Sesión Nº 12, de fecha 24 de mayo de 2021**, el diputado Frank Sauerbaum indicó que "*lo que ha dicho nuestro dirigente de Ñuble, don Juan Díaz, interpreta absolutamente lo que es el sentir de los trabajadores de nuestra región, con quienes llevamos un largo camino de trabajo en conjunto, y quiero aprovechar de contar algunas cosas que hemos hecho para que le sirva de experiencia a las otras regiones. Hace algunos días recibimos una buena noticia, de que nuestra Región de Ñuble, a través de Corfo, va a autorizar una serie de recursos para capacitaciones y poder buscar una reubicación laboral -como dijo don Juan Díaz- de cientos de trabajadores que pudieran quedar sin empleo con esta aplicación de la ley, que pudiera ser totalmente desafortunada en este momento, todavía más en pandemia, cuando hemos perdido casi dos millones de empleos en un año. Por lo tanto, les doy ese dato por si alguien más lo quiere desarrollar. Nosotros hicimos un proyecto, lo presentamos en Corfo y estos días nos han dado una buena noticia de que ese proyecto está financiado y vamos a buscar la oportunidad de que estos trabajadores, que puedan salir, se puedan capacitar en áreas distintas para reinsertarlos laboralmente. Asimismo, hemos presentado un proyecto de ley, junto con otros parlamentarios de distintos colores políticos -y hoy está en la Comisión de Educación- para posponer la implementación de esta desmunicipalización que no ha considerado los trabajadores de los DAEM y se ha producido -como dice el señor Díaz- una masacre laboral lamentable. Estamos muy temerosos porque el próximo año -ya salió en el Diario Oficial-*

empezamos en la Región de Ñuble, en la provincia de Punilla, en donde tenemos cientos de trabajadores que van a quedar en la absoluta indefensión ante esta ley que lamentablemente no los consideró. La verdad es que no era parlamentario cuando se aprobó esta ley, y me cuesta entender cuál fue el razonamiento de dejar a miles de trabajadores en el país, por ley, fuera de su trabajo. Esto es una situación realmente sorprendente, porque nunca o muy pocas veces en la historia habíamos visto que miles de trabajadores quedan sin trabajo por una ley que se hace en el Congreso Nacional, sobre todo considerando algo tan importante como es el perfeccionamiento de la calidad de la educación que queremos entregar. Por lo tanto, quiero, en primer lugar, agradecerle al señor Juan Díaz por la disposición, a los otros dirigentes de la séptima región, a Francisco Saavedra, que acaba de hablar, y contarles estas experiencias para que sepan lo que hemos hecho y lo que hemos avanzado. Esperamos que, independientemente de las posiciones políticas, nos apoyen en este proyecto de ley que pide la postergación por dos años para la implementación de la ley y, de esa manera, buscar oportunidades laborales para esta gente que -como planteó Juan Díaz- puede ascender a 11.000 trabajadores a nivel nacional.".

• En **Sesión N° 15, de fecha 5 de julio de 2021**, la vicepresidenta de la Federación VTF de la Región de O'Higgins, Sandra Umanzor, indicó que "*como trabajadoras de jardines VTF, vemos con harta incertidumbre el traspaso a los servicios locales de educación pública, principalmente, porque vemos que no hay un cambio del paradigma de la educación inicial, sobre todo de los jardines VTF. Esta modificación afecta solo a los jardines VTF; los Junji y los Integra siguen con su programa de forma normal. Nosotros, en cambio, nos traspasamos a esto, pero seguimos con el sistema de "voucher". La diferencia entre el valor párvulo de un niño Junji e Integra es abismal. Ustedes saben que existe alrededor de un 30 por ciento de diferencia entre el valor de un Junji y un Integra. Lamentablemente, al irnos al sistema de los servicios locales, no contamos con la inyección de recursos que daban las municipalidades. Actualmente, el déficit que tiene el programa VTF es asumido por las municipalidades, por las fundaciones o por las corporaciones de educación. Sin embargo, una vez traspasados a los servicios locales, no pierde ese apoyo financiero. Otra gran preocupación es la estabilidad laboral de las funcionarias, con la aplicación de un nuevo decreto de coeficiente técnico. Eso ya se está viendo en los otros servicios locales. Nosotros no queremos vivirlo, como Cachapoal Costa. Esa es nuestra gran preocupación como trabajadoras. Otro aspecto que nos preocupa es la falta de capacitación para poder aplicar las nuevas políticas educativas, sobre todo en los jardines VTF. Entonces, nos vemos en desmedro respecto de los otros programas educativos, como son Junji e Integra. Seguimos con un sistema de financiamiento, a través de asistencia, respecto del cual se necesita sobre un 75 por ciento, del ciento por ciento, que no alcanza para cubrir todas las necesidades que tienen los jardines infantiles, lo que tiene muy preocupadas a las trabajadoras. Además, vemos que, al menos en la Región de O'Higgins, de los 99 jardines infantiles, 15 necesitan reposición total, pero no hemos visto ninguna solución ni propuesta respecto de donde saldrán los recursos para esos establecimientos. Asimismo, tampoco sabemos qué va a pasar con esas trabajadoras, en este instante. En cuanto al reconocimiento oficial, más o menos, el 40 por ciento de los jardines está trabajando para obtenerlo. Sabemos que la ley debe aplicarse, pero creemos que debe haber un cambio*

en la forma de financiamiento de los jardines infantiles VTF. Debemos buscar otras fórmulas de financiamiento, ya que nuevamente estamos invisibilizados en los servicios locales, en cuanto a nuestras realidades y necesidades. Necesitamos un estatuto que asuma realmente las particularidades que tienen nuestro programa educativo y nuestras funcionarias. Tampoco quedan claros algunos beneficios legales, como los derechos a sala cuna, ni la forma en que se están implementando en los nuevos servicios locales de educación pública. Los beneficios considerados para nosotros en el estatuto de los asistentes de la educación son casi nulos, ninguno. Nuevamente, somos invisibilizadas como trabajadoras en un estatuto que no da respuesta a ninguna de nuestras reales necesidades, de modo que esa es nuestra gran preocupación. Creemos que debería existir un sistema de educación inicial único que contemple las particularidades que tiene nuestro programa, que es muy diferente al de la educación básica y media. Todavía existen trabajadoras que se desempeñan laboralmente durante 40 o 45 horas semanales. En consecuencia, queremos un estatuto y una educación pública que recojan las particularidades y las necesidades de la educación inicial.".

• En **Sesión Nº 15, de fecha 5 de julio de 2021**, el presidente de la Federación Nacional de Asistentes de la Educación y miembro de la Central Nacional de Asistentes de la Educación Pública, Miguel Gaete de la Fuente, indicó que "*El estatuto de los asistentes de la educación es débil en ese sentido, pues los beneficios puntuales que reclaman los primeros no dependen de dicho cuerpo legal, sino de los tiempos definidos en la ley N° 21.040. Así es como esa espera, que ha sido larga, se podría prolongar indefinidamente en el tiempo. Por otra parte, la instalación de los servicios locales implica, en muchos casos, una amenaza cierta de cesantía, como indica el estatuto en su artículo 33, que, incluso, no da lugar a indemnización alguna, o por razones totalmente ajenas a la responsabilidad funcionaria, como lo establece el artículo 44, con los transitorios octavo y decimoquinto. Los cocientes determinados para las dotaciones mediante la resolución exenta N° 3.775 fueron establecidos en diciembre de 2017. Esa inestabilidad también está dada en el artículo 46 de la ley N° 21.040, y en el artículo transitorio 42. Evidentemente, es imposible hacer una interpretación favorable, y es difícil presentar una propuesta de solución, porque se trata de dos leyes que están concatenadas y que se requiere desagregar, pues en esos puntos de unión afectan los derechos laborales de los asistentes de la educación, más allá de que, paradojalmente, se asegure que tales derechos serán respetados. Lo mismo se dijo al momento de municipalizar la educación pública. Nada de ello se cumplió, incluida, por supuesto, la solución a la emblemática deuda histórica, que no es solo de profesoras y profesores*".

7. Falta de planes estratégicos y pedagógicos considerando que la gran mayoría de los establecimientos cuentan con categoría de desempeño medio-bajo o insuficiente.

El numeral 10° de la solicitud de creación de la Comisión señala:

"*Así también, desde las comunidades educativas se ha manifestado la preocupación por falta de planes estratégicos y pedagógicos que permitan abordar el hecho de que, en algunos de los nuevos servicios locales de educación pública, como el de Atacama, la gran mayoría de los establecimientos cuentan con categoría de desempeño medio-bajo o insuficiente*".

Cada año los equipos de las Unidades Técnico-Pedagógicas de los SLEP diseñan sus Planes Globales de Apoyo, alineados a los Planes Anuales del Servicio, dónde se describen el trabajo y las acciones pedagógicas y de gestión que se realizarán con cada uno de los establecimientos educativos del territorio con el objetivo de poder movilizar el aprendizaje de los estudiantes.

Este trabajo se realiza a través de asesorías directas o en red con los equipos directivos de los establecimientos de manera de desarrollar capacidades, monitorear la implementación de los programas pedagógicos y adelantarse a posibles brechas que impacten en el aprendizaje y en el desarrollo integral de los estudiantes. En este sentido, la siguiente tabla exhibe las asesorías realizadas con cada uno de los SLEP en los que se ha implementado este procedimiento durante el año 2020. Así se lograron realizar asesorías directas quincenales, en algunos casos semanales, con cada uno de los establecimientos educativos lo que permite establecer una cultura de trabajo colaborativo entre los equipos directivos y su sostenedor.

Servicio Local de Educación	**Cantidad de asesorías realizadas**	
	Asesoría Directa	**Asesoría en red**
Chinchorro	14 sesiones realizadas en promedio por EE (frecuencia quincenal en 75 EEs)	6 asesorías en promedio por redes existentes (10 redes en funcionamiento)
Huasco	12 sesiones realizadas en promedio por EE (frecuencia semanal en los 61 EEs)	6 asesorías en promedio por redes existentes (14 redes en funcionamiento y 3 microcentros)
Puerto Cordillera	28 asesorías realizadas en promedio por EE (frecuencia semanal en los 61 EEs)	6 asesorías en promedio por redes existentes (18 redes en funcionamiento)
Gabriela Mistral	30 asesorías realizadas en promedio en promedio por EE (frecuencia semanal en los 49 EEs)	17 asesorías en promedio por redes existentes (8 redes en funcionamiento y dos microredes)
Barrancas	28 asesorías realizadas en promedio por EE (frecuencia semanal en los 77 EEs)	6 asesorías en promedio por redes existentes (18 redes en funcionamiento)
Andalién Sur	25 asesorías realizadas en promedio por EE (frecuencia semanal en los 83 EEs)	12 asesorías en promedio por redes existentes (13 redes en funcionamiento)
Costa Araucanía	12 sesiones realizadas en promedio por EE (frecuencia quincenal en 35 EEs priorizadas)	6 asesorías en promedio por redes existentes (12 redes en funcionamiento y cuatro microcentros)

Fuente: Elaboración propia con datos proporcionados por SLEP 2018-19 con fecha septiembre 2020.

Por otra parte, en relación a los programas pedagógicos, se ha continuado con la implementación y seguimiento del programa “Leo Primero” el que está siendo implementado en más de un 75% de los establecimientos pertenecientes a los SLEP. Asimismo, el programa Escuelas Arriba, orientado a la recuperación y nivelación de aprendizajes de los estudiantes desde tercero básico a segundo medio, está siendo implementado en 374 establecimientos de los 11 SLEP con lo que se espera acortar las brechas de aprendizajes que se han producido durante la pandemia.

En adición a lo mencionado, durante el 2019-2020 se ha implementado el nuevo Sistema de Alerta Temprana en 294 establecimientos de los SLEP. Este programa tiene por objeto identificar estudiantes en riesgo de deserción o exclusión escolar y las causas que lo definen, con el objetivo de obtener información oportuna aquellos estudiantes que se encuentran en riesgo de salir del sistema escolar.

Además, cada SLEP ha ido implementado y monitoreando programas pedagógicos que se ajusten a las necesidades de sus comunidades educativas y que, dado los resultados, luego pueden ser escalados e implementados en territorios de características similares. Así, por ejemplo, el SLEP Puerto Cordillera implementó las primeras dos Aulas de Reencuentro, espacio educativo multigrado, dentro de un establecimiento regular, para niños, niñas y jóvenes de 12 a 21 años que han vivido un proceso de exclusión educativa, presentando un rezago escolar de dos o más años. Para el 2021 se espera poder implementar 5 aulas por Servicio Local para 25 estudiantes en cada una, logrando impactar a un total de 1.500 estudiantes que han abandonado el Sistema.

Aunque es muy apresurado referirse al impacto que estas y otras medidas han tenido y tendrán en los resultados de aprendizaje de los estudiantes, durante el año 2019, 35 de los establecimientos de los SLEP han salido de la categoría insuficiente y 85 han tenido una variación positiva en sus categorías de desempeño.

En otro orden de ideas, los SLEP a los que se les traspasó el servicio educacional durante el año 2021, han comenzado a realizar el trabajo de apoyo técnico pedagógico con cada uno de los equipos directivos de los establecimientos del territorio. A la fecha ya se han concluido las etapas de involucramiento, diagnóstico y planificación y se ha hecho entrega de sus Planes Globales de Apoyo (PGA) que se suman a la entrega de los PGA de los otros Servicios Locales que ya se encuentran en funcionamiento. El 100% de los equipos se encuentran actualmente en la etapa de ejecución de esos planes.

Además, y en consideración a que, según las investigaciones realizadas, los docentes son la primera variable intraescuela que explica el aprendizaje de los estudiantes, desde el 2021 la DEP ha impulsado un proceso de formación a los equipos de Apoyo Técnico Pedagógico (ATP) de manera que puedan adquirir las competencias en las prácticas de observación y retroalimentación de clase. Actualmente, se han capacitado a un total de 90 profesionales los que a su vez estarán a cargo de formar a los equipos directivos de los establecimientos pertenecientes a su territorio.

Siguiendo con los procesos de formación, durante el 2021, entraron en funcionamiento los tres nuevos Centros de Liderazgo dónde actualmente se

están formando docentes, directivos y profesionales de los equipos de las unidades de Apoyo Técnico Pedagógico de los Servicios Locales. Esto ayudará a fortalecer las capacidades de gestión y liderazgo de un importante número de profesionales de Sistema. Por último, en relación a los procesos de formación hemos seguido trabajando en conjunto con Fundación Telefónica y a la fecha ya contamos con 1.602 nuevos docentes capacitados en el uso de plataformas de educación no presencial.

En este orden de consideraciones, en particular, durante el 2020, para hacer frente a los desafíos de la pandemia, desde la DEP en coordinación con el Centro de Innovación del Mineduc se impulsó la capacitación de un total de 1.300 docentes en el uso de plataformas de educación no presencial.

Por otra parte, en relación al monitoreo de los aprendizajes, durante el 2021 se han aplicado los instrumentos para el Diagnóstico Integral de Aprendizaje (DIA), elaborados por la Agencia de Calidad, en 283 escuelas y liceos de los SLEP lo que ha permitido tener información para ajustar los procesos de enseñanza y aprendizaje de cada uno de nuestros estudiantes. Por su parte, en el 98% de los jardines infantiles y salas cunas, se aplicaron los instrumentos para el Diagnóstico Integral de Desempeño (DID), que busca generar una reflexión en cada una de las unidades educativas con el fin de facilitar la toma de decisiones enfocadas en el mejoramiento continuo de la gestión educativa.

Por último, en lo que se refiere al Servicio Local de Atacama es preciso destacar que el traspaso del servicio educacional de dicho SLEP ocurrió el 1º de enero de 2021, por lo que difícilmente pueden apreciarse los efectos de medidas en dichos establecimientos educacionales, los que se apreciarán en mediano a largo plazo. Esta materia se mencionó escuetamente en algunas intervenciones que han sido incluidas respecto de otros puntos de esta minuta.

8. Solicitud de establecimiento de oficinas locales del Servicio Local de Educación Pública de Huasco en las comunas de Huasco, Freirina y Alto del Carmen.

El numeral 11° de la solicitud de creación de la Comisión señala:

"*Además, se denuncia falta de equidad territorial al interior de los mismos servicios locales, cuyas dependencias se concentran principalmente en las capitales provinciales o regionales. En particular, en SLEP Huasco se manifiesta disconformidad por la centralización en Vallenar, en perjuicio de otras comunas como Huasco, Freirina y Alto del Carmen. Lo anterior, trae aparejados problemas como dificultad para tramitar licencias médicas o realizar otro tipo de trámites, y es relevante en razones de distancia, conectividad y buen servicio. Recordar que la Ley de Nueva Educación Pública permite en su artículo 16 la creación de oficina locales mediante decreto fundado del Ministerio de Educación, cuando sea necesario por razones de buen servicio y para el adecuado cumplimiento de sus funciones, en atención a razones de distancia, conectividad y concentración de matrícula, entre otras. También podrá hacerlo a propuesta del Comité Directivo Local respectivo*".

La determinación de la comuna cabecera del funcionamiento de los SLEP fue fijada mediante criterios técnicos tal como consta en la Resolución Exenta N° 970, de 21 de febrero de 2018, del Ministerio de Educación. Particularmente dentro de los criterios considerados se encuentra "*Asegurar*

territorios con buena conectividad y tamaños geográficos razonables". A continuación se expone un listado de las oficinas establecidas en cada SLEP:

SLEP's	Estado Actual	N° de localidades
Puerto Cordillera	En oficina definitiva (inmueble propio - EE que era ex internado).	1
Barrancas	En 2 oficinas: Oficina definitiva (inmueble propio - EE cerrado). Oficina provisoria (inmueble prestado), esto porque se está esperando que se termine de habilitar completamente la oficina definitiva.	2
Huasco	En oficina definitiva (inmueble arrendado).	1
Costa Araucanía	En 2 oficinas definitivas (inmuebles arrendados).	2
Chinchorro	En oficina definitiva (inmueble arrendado).	1
Gabriela Mistral	En oficina definitiva (inmueble arrendado).	1
Andalién Sur	En oficina definitiva (inmueble arrendado).	1
Atacama	En oficina provisoria 1 (inmueble arrendado). Oficina provisoria 2: En elaboración de informe técnico para enviar a Dipres. Oficina definitiva: en proceso de habilitación (entrega agosto 2021) (inmueble arrendado).	2
Valparaíso	En oficina definitiva (inmueble arrendado).	1
Colchagua	En oficina definitiva (inmueble arrendado).	1
Llanquihue	En oficinas definitivas (inmuebles arrendados).	2

En lo referido a las oficinas de los SLEP, cabe señalar que de conformidad con lo establecido en el artículo 16 de la ley N° 21.040, la creación de oficinas locales es una facultad exclusiva de los SLEP, cuando sea necesario por razones de buen servicio y para el adecuado cumplimiento de sus funciones, en atención a razones de distancia, conectividad y concentración de matrícula, entre otras. También lo puede hacer a propuesta del Comité Directivo Local.

Sin perjuicio de lo señalado, las dificultades asociadas a la distancia geográfica entre las comunas que forman parte de los territorios de los SLEP han sido en la práctica abordadas mediante la implementación de oficinas de atención o unidades constituidas en comunas distintas de la comuna de cabecera, como es el caso de Huasco y Costa Araucanía. En el primer caso, Huasco tiene centros de atención en todas las comunas, salvo en aquella en que tiene formalmente su domicilio y Costa Araucanía tiene esta modalidad en tres comunas, Nueva Imperial, Teodoro Schmidt, y Toltén.

No obstante, lo anterior, es preciso señalar que la DEP, en su carácter de coordinador y conductor del Sistema no ha recibido solicitudes formales sobre la materia.

Esta materia se mencionó en algunas intervenciones que han sido incluidas respecto de otros puntos de esta Minuta.

9. Denuncia sobre falta de ejecución de fondos "Movámonos por la Educación Pública" y "Pro-retención" entre otros; e inexistencia de cierre de la SEP 2019, y del presupuesto 2020.

El numeral 12° de la solicitud de creación de la Comisión señala:

"*Por último, se denuncia que el financiamiento entregado por medio de fondos como "Movámonos por la Educación Pública" y "Pro-retención" entre otros, no se ejecutan. Asimismo, a la fecha, los Directores no poseen el cierre de la SEP 2019, y el presupuesto 2020, por lo que resulta complejo planificar Planes de Mejora, sin tener claridad respecto a la "caja" del año anterior, ni cuánto dinero se dispone para este año*".

Primeramente, es preciso, recordar que los SLEP son servicios descentralizados con personalidad jurídica y patrimonio propio.

Respecto a la ejecución de fondos de "Movámonos" se exponen a continuación los montos asignados, por cada Servicio Local y su respectiva rendición, tanto del año 2019 como 2020:

Plan de revitalización Movámonos 2019				
SLEP	**Monto Asignado**	**Monto ejecutado /rendido**	**Monto no ejecutado/ no rendido**	**% de rendición**
Barrancas	$ 394.657.201	$ 117.883.937	$ 276.773.264	29,87%
Costa Araucanía	$ 149.214.525	$ 115.431.536	$ 33.782.989	77,36%
Huasco	$ 217.342.452	$ 101.686.541	$ 115.655.911	46,79%
Puerto Cordillera	$ 227.585.702	$ 23.133.079	$ 204.452.623	10,16%

Plan de revitalización Movámonos 2020				
SLEP	**Monto Asignado**	**Monto ejecutado /rendido**	**Monto no ejecutado/no rendido**	**% de rendición**
Barrancas	$ 248.501.970	$ 110.088.547	$ 138.413.423	44,30%
Costa Araucanía	$ 133.135.693	$ 96.374.750	$ 36.760.943	72,39%
Huasco	$ 154.414.161	$ 105.342.684	$ 49.071.477	68,22%
Chinchorro	$ 209.771.196	$ 50.368.735	$ 159.402.461	24,01%

Gabriela Mistral	$ 155.350.474	$ 35.393.754	$ 119.956.720	22,78%
Andalién Sur	$ 204.997.739	$ 93.204.198	$ 111.793.541	45,47%
Puerto Cordillera	$ 154.941.543	$ 116.387.454	$ 38.554.089	75,12%

Al respecto, esta materia fue tratada de alguna manera en las siguientes sesiones:

• En Sesión Nº 3, de fecha 8 de marzo del año 2021, la Directora Nacional de Educación Pública, Alejandra Grebe, señaló que "En cuanto a los planes “Movámonos por la Educación Pública” y “Pro Retención”, hay algunos servicios locales que ejecutaron más y otros menos, por diversas o múltiples razones. Hay diversas razones en el caso de aquellos que tuvieron una ejecución más baja, sobre todo en el plan “Movámonos”.

• En Sesión Nº 3, de fecha 8 de marzo del año 2021, la diputada Cristina Girardi indicó que “Al respecto, enviamos varios oficios el año pasado y solicitamos, a través de la Comisión de Educación, información respecto de varias denuncias relacionadas con los recursos del servicio local de Barrancas, que comprenden el plan “Movámonos por la Educación Pública”, la subvención “Pro Retención” y la Subvención Escolar Preferencial (SEP). Ello, debido a que los representantes de las escuelas plantearon en la comisión que esos recursos nunca habían llegado a los distintos establecimientos educacionales. Uno de dichos oficios fue respondido por la DEP, pero la respuesta fue absolutamente insuficiente, por lo que volvimos a insistir sobre la necesidad de responder aquello que realmente estábamos preguntando, pero nunca recibimos respuesta. En el informe que entregó la directora, al final de su presentación, solo se refiere a los recursos del plan “Movámonos por la Educación Pública”. No se habla de los otros temas que solicitamos en los oficios respecto del período 2019, y esto es sobre el año 2020. Por lo tanto, me gustaría que la directora -no creo que pueda ser ahora- nos entregara un detalle acabado de por qué esos recursos no se gastaron. De hecho, en el cuadro correspondiente al período 2020, llama la atención el bajo gasto de parte de los servicios locales respecto de las subvenciones. Me imagino que las platas no sobran en las escuelas. Ahí dice que lo rendido es muy bajo en relación con lo no rendido y no sabemos si eso no rendido está gastado o no hay posibilidad de rendir. Entonces, sería interesante que la directora profundizara sobre los dineros del plan “Movámonos por la Educación Pública”, de la subvención “Pro-Retención” y la Subvención Escolar Preferencial (SEP), tanto de 2019 como de 2020, y pueda explicar, más allá de decirnos que son múltiples razones, qué pasó con los recursos y con su ejecución por parte de las escuelas, y por qué no se ejecutaron”.

VII. ENVÍO DE COPIA DEL INFORME.

La Comisión acordó proponer a la H. Sala que remita copia de este informe tanto a S.E. el Presidente de la República, como a las autoridades a las cuales van dirigidas las propuestas, esto es, el Ministro de Educación, el

Contralor General de la República, la Directora de Presupuestos y la Directora de Educación Pública, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 58 de la Ley Orgánica Constitucional del Congreso Nacional y 318 del Reglamento de la Corporación, con el objeto de que tengan a bien adoptar las medidas conducentes a superar las dificultades detectadas durante la investigación de la Comisión.

VIII. DIPUTADO INFORMANTE.

Se designó como Diputada Informante a la señora CRISTINA GIRARDI LAVÍN.

SALA DE LA COMISIÓN, A 30 DE AGOSTO DE 2021.

Tratado y acordado según consta en las actas de las sesiones celebradas los días 19 de enero; 1, 8, 15, 22 y 29 de marzo; 12, 19 y 26 de abril; 3, 17, 24 y 31 de mayo; 14 de junio; 5, 19 y 26 de julio, y 9, 12, 16 y 30 de agosto de 2021, con la asistencia de las diputadas Cristina Girardi Lavín, Camila Rojas Valderrama, Camila Vallejo Dowling y los diputados Sergio Bobadilla Muñoz, Fidel Espinoza Sandoval, Juan Fuenzalida Cobo, Cosme Mellado Pino (a partir del 11 de marzo de 2021), Luis Pardo Sáinz (Presidente), José Pérez Arriagada (hasta el 11 de marzo de 2021), Hugo Rey Martínez, Leonidas Romero Sáez, Gustavo Sanhueza Dueñas, Juan Santana Castillo y Mario Venegas Cárdenas.

MARÍA SOLEDAD FREDES RUIZ
Abogada Secretaria de la Comisión

INDICE

I. INTRODUCCIÓN..... 1

1. Competencia de la Comisión..... 1
2. Plazo. 4
3. Integración..... 4

II. RELACIÓN DEL TRABAJO DESARROLLADO POR LA COMISIÓN EN EL CUMPLIMIENTO DE SU COMETIDO. 5

1. Sesiones efectuadas y personas recibidas..... 5
2. Documentos recibidos. 9
3. Listado de oficios despachados y documentos de respuesta recibidos por la Comisión en el marco de su investigación. 10

III. EXPOSICIONES EFECTUADAS POR LAS PERSONAS CITADAS O INVITADAS A LA COMISIÓN..... 12

1) El exdirector Nacional de Educación Pública, señor Rodrigo Egaña Baraona..... 12
2) La Directora Nacional de Educación Pública, señora María Alejandra Grebe Noguera..... 16
3) El Contralor General de la República, señor Jorge Bermúdez Soto. 39
4) El Expresidente del Consejo Local del Servicio Local de Educación Pública de Barrancas, señor Dorian Tobar Flores. 50
5) El Director de la Escuela "Melvin Jones" del Servicio Local de Educación Pública de Barrancas, señor Juan Carlos Almendra Canales. 54
6) La Directora (I) de la Escuela "Paulo Freire" del Servicio Local de Educación Pública de Barrancas, señora Gabriela Rubio Palma. 58
7) El Director de la Escuela "Federico Acevedo Salazar" del Servicio Local de Educación Pública de Barrancas, señor Juan Esteban Montero. 60
8) El Director Ejecutivo del Servicio Local de Educación Pública de Barrancas, señor Patricio Canales Ríos. 63
9) La Directora Nacional del Servicio Civil y Presidente del Consejo de Alta Dirección Pública, señora Solange Garreaud de Mainvilliers Gerlach. 72
10) El Director de la Escuela "Amanecer" de Villa Boldos, del Servicio Local de Educación Pública de Costa Araucanía, señor Juan Luis Aguilar Muñoz. 78
11) La Directora de la Escuela "José Bernardo Suarez" de Macul, del Servicio Local de Educación Pública de Gabriela Mistral, señora Pamela Meza Morales..... 80
12) La Directora de la Escuela N° 405 "Millahue" de Cerro Navia, del Servicio Local de Educación Pública de Barrancas, señora Alejandra Benavides Arestizabal. 82
13) La Directora de la Escuela "Provincia de Arauco" de Cerro Navia, del Servicio Local de Educación Pública de Barrancas, señora Úrsula Araya Parraguez. 86
14) La Directora Ejecutiva de Acción Educar e integrante del Consejo de Evaluación del Sistema de Educación Pública, señora Magdalena Vergara Vial. 88
15) La Académica del Departamento de Estudios Pedagógicos de la Universidad de Chile, e integrante del Consejo de Evaluación del Sistema de Educación Pública, señora María Teresa Flórez Petour. 96
16) El Integrante del Consejo de Evaluación del Sistema de Educación Pública, señor Omar Jara. 105
17) El Dirigente comunal del Colegio de Profesores de Valparaíso, señor Andrés Arce Olate..... 108
18) El Director Ejecutivo del Servicio Local de Educación Pública de Valparaíso, señor Manuel Pérez Pastén. 111
19) El Presidente del Comité Directivo del Servicio Local de Educación Pública de Barrancas, señor Carlos Eugenio Beca. 116
20) El Miembro del Comité Directivo del Servicio Local de Educación Pública de Barrancas y representante de los alcaldes del territorio, señor Nelson Zárate. 120
21) El Presidente de la Federación de Asociaciones de Funcionarios DAEM de la Región de Ñuble, señor Juan Díaz González y el Secretario de la Federación Regional del Maule FANDEM, señor Francisco Saavedra Sepúlveda. 123
22) El Presidente de la Coordinadora Nacional de Funcionarios DEM, DAEM y Corporaciones (CONAFUDAEM), señor Cristián Figueroa Constanzo, y el dirigente de la CONAFUDAEM Región de Los Lagos, señor Tomás Sanchez. 126

23) El Presidente del Consejo Nacional de Asistentes de la Educación de Chile (CONAECH), señor Miguel Ángel Araneda Araneda, acompañado del Secretario General, señor Manuel Valenzuela Albornoz. 130
24) El Presidente de la Confederación Nacional de Asociaciones de Funcionarios Asistentes de la Educación Municipalizada de Chile (CONFEMUCH), señor Arturo Escárez Opazo y la Secretaria General, señora Alejandra Aguilar Navarro. 132
25) El Secretario Ejecutivo de la Agencia de Calidad de la Educación, señor Daniel Rodríguez Morales. 136
26) La Jefa del Departamento de Normativa de la División de Fiscalía de la Superintendencia de Educación, señora Magdalena Badilla, y la Jefa del Departamento Fiscalización de Procesos Educativos de la División de Fiscalización, señora Daniella Maureira. 145
27) La Directora Ejecutiva del Servicio Local de Educación Pública de Llanquihue, señora Claudia Trillo Molina. 154
28) La Presidenta de la Federación VTF de la Región de O'Higgins y miembro de la Central Nacional de Asistentes de la Educación Pública (CNAEP Chile), señora Pilar Ibaceta Garrido y la trabajadora de Jardines Infantiles VTF, señora Sandra Umanzor. 157
29) El Presidente de la Federación Nacional de Asistentes de la Educación (FENADEP) y miembro de la CNAEP Chile, señor Miguel Gaete de la Fuente, el Presidente de la Federación Nacional de Sindicatos de Trabajadores de Corporaciones Municipales de Educación (FENASICOM) y el Presidente de la CNAEP Chile, señor Enrique Dayne Hidalgo. 159
30) La Representante de los apoderados del Comité Directivo del Servicio Local de Educación Pública de Barrancas, señora Marisol Cisternas Urrutia..... 162
31) La Directora de la Sala Cuna "Espacio Feliz" del Servicio Local de Educación Pública de Barrancas, señora Carolina Sepúlveda Benavides. 164
32) La Presidenta del Centro de Padres y Apoderados de la Escuela "El Salitre" de Pudahuel, señora Valeska Grandon. 166
33) La Presidenta del Centro de Padres y Apoderados de la Escuela "Federico Acevedo Salazar" de Cerro Navia, señora Katherine Bugueño. 167
34) La Presidenta del Centro de Padres y Apoderados del Liceo Bicentenario de Cerro Navia, señora María Macarena González Carrasco. 169
35) El Alcalde de la comuna de Lo Prado, señor Maximiliano Ríos Galleguillos. 172
36) El Presidente del Sindicato de Administración Central Cormupa, señor Ricardo Oyarzo Cárcamo; el Presidente del Sindicato de Asistentes de la Educación, señor Pedro Pablo Ramos Bustos, y la Presidenta Regional del Colegio Regional Profesoras y Profesores A.G., señora Violeta Andrade Velásquez. 175
37) El Presidente de la Asociación de Asistentes de la Educación de la comuna de Teodoro Schmidt, y dirigente de la Federación de Asistentes de la Educación del Servicio Local de Educación Pública de Costa Araucanía, señor Luis Frederich Astorga. 179
38) El Alcalde de la comuna de Pudahuel, señor Ítalo Bravo Lizana. 180
39) La Directora de Presupuestos del Ministerio de Hacienda, señora Cristina Torres Delgado. 182
40) El Ministro de Educación, señor Raúl Figueroa Salas. 189

IV. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES. 198

A. CONCLUSIONES. 198
1. Conclusiones sobre la instalación de todos los Servicios Locales de Educación Pública. 198
2. Conclusiones sobre la instalación del Servicio Local de Educación Pública de Barrancas. 228
3. Conclusiones sobre la instalación del Servicio Local de Educación Pública de Valparaíso. 239
4. Conclusiones sobre la instalación del Servicio Local de Educación Pública de Colchagua. 241
5. Conclusiones finales. 242
B. RECOMENDACIONES. 243

V. VOTACIONES. 247

VI. VOTO DE MINORÍA. 248

VII. ENVÍO DE COPIA DEL INFORME. 296

VIII. DIPUTADO INFORMANTE. 297